

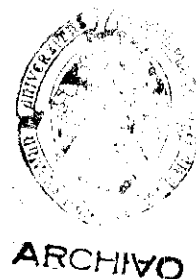


RAFAEL QUILEZ SANCHEZ

**CANAL 9-TVV:**  
**POR UN MODELO VALENCIANO DE TELEVISION PUBLICA**

Director: ENRIQUE BUSTAMANTE RAMIREZ  
Profesor Titular,  
Director del Departamento de  
"Comunicación audiovisual y Publicidad I"

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
Facultad de Ciencias de la Información  
1990



## INDICE

( VOL. I )

### PREAMBULO

#### Capítulo I: ¿QUE MODELO DE TV PUBLICA?

##### 1. Epistemología y Comunicación.

- 1.1. Comunicación y conocimiento científico: por una aproximación heurística.
- 1.2. La comunicación como pre-texto. (Analogía y diferencia).
  - 1.2.1. Del paradigma de sistemas dominante.
  - 1.2.2. De la tentación “modelista” en CC. de la Información.

##### 2. Políticas de comunicación y legitimación en el capitalismo cercano.

- 2.1. De la TV Pública socialmente posible: del alternativismo a la perplejidad y viceversa.
- 2.2. Del sistema de comunicación dominante la comunicación como pretexto.
  - 2.2.1. Comunidad Valenciana y subordinación audiovisual: para una política autonómica en TV.

*NOTAS (Capítulo I).*

#### Capítulo II: CANAL 9-TVV: UN MODELO INDEFINIDO MAS.

##### 1. Política audiovisual y TV Pública en España.

- 1.1. TV pública vs. privada: hacia un modelo coexistencial.
  - 1.1.1. La etapa de UCD.
  - 1.1.2. La etapa socialista.
- 1.2. Desregulación y descentralización televisiva en España. ¿Qué diferencia?
  - 1.2.1. Descentralización y diversidad en la Europa audiovisual.
  - 1.2.2. TV pública y Autonomía en España.
- 1.3. TV pública *convencional* y nuevas realidades audiovisuales: entre la indefinición y la ambigüedad calculada.

##### 2. Canal 9-TVV: Un modelo no tan diferente.

- 2.1. RTVV, un proyecto con historia.
  - 2.1.1. El referente jurídico-político concreto.
  - 2.1.2. Un proyecto empresarial: cuestión de “modelos”.
- 2.2. Canal 9, un proyecto vacilante.
  - 2.2.1. El fin de la cuenta atrás vs. los fines de la etapa de despegue.
  - 2.2.2. Colisiones de arranque y competencia entre televisiones públicas en el espacio valenciano.

## II

- 2.2.3. Horizonte '93 y coexistencia desigual en el audiovisual inmediato:
  - 2.2.3.1. De un modelo de TV pública en plena reconversión.
  - 2.2.3.2. De la publicidad como "barrera de entrada", de sus efectos y límites.
  - 2.2.3.3. Televisiones Privadas vs. Autonómica audiencias, programación..., y tiempo.
- 2.3. Vertebración sociolingüística y primeras dudas. ¿Un proyecto para la normalización cultural?
- 2.4. La infraestructura tecnológica: entre el acuerdo corresponsable y el condicionamiento centralista.

*NOTAS (Capítulo II).*

( VOL. II )

### Capítulo III: POR UN MODELO VALENCIANO DE TV PUBLICA CON FUTURO.

#### 1. El futuro que importa.

- 1.1. Nuevas tecnologías: de la crisis a la construcción del futuro
  - 1.1.1. Modelo neoliberal y crecimiento económico.
  - 1.1.2. NTI y transformación económica y social.
- 1.2. La Europa que viene.
  - 1.2.1. La remoción de los equilibrios geopolíticos.
  - 1.2.2. La TV pública en la Europa audiovisual.
- 1.3. Modelo de TV y modelo de Estado.
  - 1.3.1. Participación: ¿método o coartada?
  - 1.3.2. Descentralización del Estado y "ajuste informacional".

#### 2. TVV: Proyecto alternativo y Planificación Estratégica Participativa (Para qué, cómo).

- 2.1. Entorno estratégico y objetivos de la descentralización en el caso valenciano.
  - 2.1.1. Adecuación al entorno y estrategia política.
  - 2.1.2. Estrategia económica y "finances prioritarios".
- 2.2. Cambio social y toma de decisiones.
  - 2.2.1. Modelo tendencial, modelo deseable.
  - 2.2.2. Frente a la racionalidad tendencial dominante en TVV.
- 2.3. Por una gestión pública estratégica para RTVV.
  - 2.3.1. Teoría de la negociación y descentralización óptima.
  - 2.3.2. Participar la racionalidad.

#### 3. Por una TVV diferente: Profundizar la descentralización.

- 3.1. "Ausencia" de modelo autonómico y gestión contingente en TVV S.A.
  - 3.1.1. Por la ocupación de un grupo estratégico diferencial.
  - 3.1.2. Recambiar el modelo: para una política autonómica del audiovisual.

### III

- 3.2. Evaluación tecnológica integral y desarrollo endógeno en el contexto europeo.
  - 3.2.1. TV pública y telecomunicaciones en la Europa del año 2000.
  - 3.2.2. Evaluación tecnológica y TVV como proyecto empresarial público.
- 3.3. Vertebración autonómica y estrategia televisiva.
  - 3.3.1. Canal 9: territorial, no sólo sectorial.
  - 3.3.2. Del control y el proceso negociador por abrir.

*NOTAS (Capítulo III).*

### CONCLUSIONES.

ANEXO 1. Diagnóstico económico/social y estrategia de desarrollo regional (Comunidad Valenciana, 1990-93).

ANEXO 2. Redes de telecomunicación y voluntad política presunta, por municipios y comarcas, en relación con la TV local posible en el caso valenciano.

### BIBLIOGRAFIA.



**PREAMBULO**

En la primavera de 1988, tras la aprobación por las Cortes Valencianas de los nueve miembros del Consejo de Administración y con posterioridad a la propuesta de socialistas y populares -mayoritaria en el seno de dicho Consejo y aceptada luego por el Consell- apoyando el nombramiento de Amadeu Fabregat como primer director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), comenzaba la cuenta atrás efectiva de un proyecto que finalmente despegaría en el otoño de 1989. Pero que, más allá de la aparente unanimidad política al respecto (hubo tal a la hora de aprobar la ley para su creación en julio de 1984 pero fue ya “pugna mayor” en las elecciones autonómicas tres años más tarde), sigue concitando no pocas polémicas.

Adentrarse “con urgencia periodística” en el tema -como hice- me pareció tan conveniente en esa época, como necesario hoy desde un interés -el académico- bien distinto pero no menos relevante. Tanto a nivel personal, no sólo por mera catarsis relativa a cuantas ideas todavía me rondan sobre el embrollo Televisión Valenciana (aquí no hablaremos de Radio Autonomía), como a otro nivel más general o colectivo. Pues, en lo que retengo de periodista, sigo creyendo que los públicos -en su diversidad- son o debieran ser la última legitimación de todo trabajo profesional (periodístico y/o académico) que se precie de tal. Aun cuando no estoy a estas alturas convencido de poder evitar, en el intento, las funciones del *legitimador de oficio*: que en esto, como recordase José Vidal-Beneyto, ya se sabe que andamos siempre “a caballo de la denuncia/impugnación de los que mandan y de la provisión de materiales para la manipulación/encuadramiento de los mandados”.

Puestos a justificar -¿qué sentido si no darle a toda introducción?-, a lo anterior quizá quepa añadir que pese a todo: pese a las contradicciones e indefiniciones actuales sobre Canal 9-TVV, pese a no aspirar a dar, ni creer, en respuestas unívocas al respecto (ni por mi parte ni por ninguna otra), he tenido y mantenido a la postre tal atrevimiento por no poder eludir eso que podríamos llamar *pasión por el presente*. Al menos en el sentido apuntado en su día por Vázquez Montalbán: “(A la espera del día en que los ciudadanos descubran su incomunicación programada bajo la apariencia del imperio de los medios de comunicación, el nuevo despotismo ilustrado que legitima la voz y la imagen para el poder, el silencio y la atención para los sometidos) bueno sería que los profesionales e investigadores de la comunicación empezáramos tomando conciencia de que somos en realidad profesionales de la incomunicación, investigadores de la incomunicación” (revista Comunicación XXI, 1972). Una opinión un tanto exagerada en su formulación (pues no todo lo vehiculado por los medios es “real incomunicación”), pero no por añeja menos oportuna -en su dicción- cuando, ante el horizonte del mercado único europeo, los cambios en el sector llamado de la Comunicación y el Ocio se suceden vertiginosamente en clara correlación con la masiva afluencia de inversiones en el mismo por parte de no pocas entidades financieras y empresariales, sin duda buscando rentabilidades añadidas y un cierto *neoproteccionismo* por vía publicitaria, que acrecientan por ello, en su subordinación a dicha lógica económico-política, el papel de dicho sector como un *poderoso* (en tantos sentidos “privados”) objetivo a lograr. Replanteando aceleradamente en el seno del mismo el peligro del oligopolio como salida aparentemente irreversible frente a una situación anterior finalmente sobrepasada en España con la aparición junto a RTVE de tres canales de televisión privada y unos cuantos más de TV autonómica “pesada”, a lo que añadir la remoción del mapa radiofónico local y el reposicionamiento de los principales grupos multimedia en torno de la industria editorial (y de la prensa escrita en concreto), marcando así el signo de los años 80, y el comienzo de los 90, con la desregulación por bandera y el economicismo neoliberal como excusa de legitimación.

La inexistencia de un *modelo europeo* de TV pública, no obstante, resalta en no menor medida que la paralela inexistencia de “un” *modelo de TV autonómica* en España: ante la presión multivariable que propician los mismos procesos genéricos de internacionalización y comercialización que sin duda subyacen a dicha lógica económico-política, y que se añaden al cuestionamiento creciente del Estado como palanca irrenunciable para una cierta izquierda en dicho contexto (y por tanto de las TV públicas “nacionales” establecidas). Reflexionar sobre toda TV autonómica, en tal sentido, supone implicarse en el “trend” sociopolítico de la época, en que conviven -con signo diverso- internacionalización y descentralización.

Es justamente por la inexistencia de un modelo de TV autonómica, o por su inadecuada clarificación más bien, que para todo interesado en el presente valenciano -como es mi caso, por tantas razones personales- sea poco menos que irrenunciable el deseo de contribuir a desbrozar cuanto de ello se deriva para el presente y futuro, en concreto, de Canal 9-TVV. Máxime cuando, en su andadura de casi un año, los desajustes respecto de los “fines fundacionales” comienzan a ser tan evidentes en dicho canal que urge -social y no sólo personalmente- la oportuna reconsideración crítica. Desde los presupuestos epistemológicos, al menos, que conectan con la defensa de una TV autonómica (pública) en principio llamada a contraponerse a los procesos -ya señalados y en gran medida objeto de la investigación en comunicación de que más participamos- de internacionalización oligopolística y comercialización publicitaria.

Su previsible e importante papel en materia de normalización lingüística, no en vano, pero también la relevancia que el segundo Programa Económico Valenciano (PEV-2) le confería desde 1987 en tanto que vehículo de vertebración socioterritorial y de hipotético “motor de arrastre” de sectores autóctonos ligados a la producción cultural y en concreto del audiovisual -y a la interiorización de nuevas tecnologías por tanto-, han hecho de RTVV finalmente, a pesar y aun por encima de la casi total ausencia de debate social en torno suyo durante el largo “parto institucional” (en la segunda mitad de los 80) previo a sus emisiones regulares, un tema “estrella” en la actualidad entre los casi cuatro millones de habitantes que residen en territorio valenciano. E incluso para unos cuantos más interesados desde territorios limítrofes: catalanes y mallorquines en primera instancia, pero también manchegos de Cuenca y Albacete, aragoneses de Teruel y murcianos de la Vega Baja del Segura -hasta la puesta en marcha reciente de Telemurcia.

El riesgo de “estrellarse” y las crecientes contradicciones respecto de los *fines* inicialmente perseguidos, sin embargo, no parecen ser menos evidentes incluso para quienes llevan las riendas efectivas del proyecto valenciano. La tradicional desinformación sobre la información -obediente a los miedos y/o expectativas “profesionalistas” no menos que a las conveniencias estratégicas tanto políticas como “empresaristas”- juega de entrada en contra, también en el caso TVV, no sólo de los finalmente interesados en su eficaz implantación (los usuarios), sino a su vez de los en principio más interesados en apoyar dicha implantación desde las instancias a la postre operativas (no sólo los órganos de gobierno de RTVV sino también los círculos: políticos, intelectuales y cívicos en general, con influencia más inmediata sobre tales decisores). Y ello por mera ignorancia o tergiversación (ideológica, comercial, etc), y ya querida o no por parte todos, de los condicionantes claves y de sus posibilidades efectivas como tal TV autonómica.

Más allá de retrotraerse y limitarse a la polémica entre lo posible y lo probable (desde la teoría sociológica) o -todavía menos- de canonizar al respecto sobre el papel de los medios de información en vísperas del tercer milenio judeocristiano, al hilo del caso RTVV, cuanto aquí se defiende aboga, por contra, por reconsiderar la oportunidad (social y no sólo académica) de no pasar por alto una cierta reflexión crítica sobre “la RTVV posible”. Desde una perspectiva insobornable: en tanto quehacer planteado, social y políticamente, como Proyecto. Vocablo que alude a algo presente, pero por consolidar.

Proyecto no sólo en su (uni)dimensionalidad presupuestaria, esto es, en tanto que proyecto relevante de la inversión pública acometida desde la Generalitat Valenciana. Eso cuenta, y no poco: hasta el punto, quede dicho de entrada, de haber condicionado de hecho una eventual marcha atrás... Pero TVV interesa, ante todo, en tanto que proyecto público multidimensional: como algo literalmente colectivo, y colectivo en muchos sentidos. No ya “tradición” (aunque empiece a tener su historia) ni tampoco simple “futuro” (ideal o utópico), sino, antes que nada, como algo definitorio del presente valenciano -con Josep Ramoneda- que pretende abrirse a sí mismo: “El más acá del futuro es virtualidad del presente, del ámbito de proyección. El más allá del futuro es una pura alusión del presente, los confines del presente: afuera todo está por hacer” (Letra Internacional, nº 6, 1987). Reflexión, por tanto, ciertamente interesada, o no neutral al respecto. Ese más acá del futuro que la TVV, espacio central de la modernidad valenciana, actualiza e interioriza *a priori*, entrando de lleno -como tal *medio* de información- en lo “social posible” -ligado a su ámbito de difusión.

Algo fundamental que importa, por más rodeo ditirámico que a algunos pudiera parecer, a fin de socavar aquellas posturas que, por incautas o por simple ingenuidad (interesadamente o no) olvidan -todavía- aspecto tan básico como es el de la práctica social de los medios de información. Así, el concepto de sociedad es tan relevante en tanto que referente necesario (no sólo “posible”) como insuficientes -todavía- suelen ser las aproximaciones alicortas, desde la visión parcelaria que de la realidad compleja suelen legitimar las ciencias al uso, sobre la misma. Empezando por el enfoque ideológico-culturalista que ha dominado la reflexión sobre la descentralización audiovisual en Europa, desde ciertos enfoques de la investigación en comunicación, hasta hace no tanto. En el seno de la sociedad, en todo caso, es que actúan los medios -y modos- de comunicación: será dentro de la sociedad valenciana que tenga valor y sentido -o no- la actividad de RTVV.

No parece razonable, en suma, hablar del medio TV sino dentro de “la” sociedad (en realidad plural y no una) o formación social en que cobra pleno sentido (social) la producción de realidad, de conocimiento, que tal medio -junto con otros- vehicula, a la par que las lagunas de información que ejerce en su práctica cotidiana. Por ello, la cantinela de que los-medios-son-en-sociedad no sólo sigue siendo oportuna en la década de los 90 sino necesaria para toda reflexión sobre la TV Valenciana *posible*, so pena de contribuir, desde planteamientos torpemente moralistas o cercanos a la autocomplacencia jacobina, a resultados no menos “kafkianos” que los ya conocidos en otros modelos de TV asentados dentro y fuera del Estado español (por muy crítica que quiera presuponerse dicha reflexión). Pues si algo tenemos claro, hoy por hoy, sobre la denominada “Comunicación colectiva” es, precisamente, la necesidad de reflexionar sobre ella no sólo como objeto de análisis científico, sino además como práctica social y, por ende, como operación ideológica.

No en vano, tras la crítica a los modelos teóricos que heredaron el viejo esquema verticalista y laswelliano, de la mano de Harms y del nuevo paradigma comunicacional revalidado a partir -cuando menos- de las conferencias de la UNESCO celebradas en San José (1976) y Nairobi (1977), en total coincidencia temporal con las demandas de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación y a su vez en coincidencia con el arranque de las nuevas instituciones a que ha llevado la transición democrática española, la lección a retener sigue siendo, al menos, doble: primera, que si modelos de comunicación y sociedad (modelos prácticos) van de la mano, el nuevo paradigma -reivindicador del contexto- legitima, en el espacio público, la implantación de políticas de comunicación, y la búsqueda por tanto de renovadas formas *públicamente estratégicas* de programación, gestión y control; y segunda, que a título individual importan, antes que nada (si de perseguir un nuevo “orden informacional” se habla), avances concretos en investigación aplicada de la comunicación: lo que de entrada pasa, sin menoscabo en ningún caso de la crítica y del grado de formalización exigibles, por la consideración como referencia inexcusable (para así poder ser *aplicada*) de las políticas (no sólo “de comunicación”) efectivamente implantadas o por desarrollar en cada formación social concreta.

Hablar de RTVV en tanto que “modelo” (socialmente posible) se religa, en consecuencia, con los “modelos de sociedad” ventilados políticamente -electoralmente en primera y fundamental instancia, pero sin restringirse exclusivamente a ello- por lo que al País Valenciano (pueblo y territorio) o Comunidad Valenciana (institucionalización oficial del mismo) concierne.

En dicho contexto es que desde aquí se cuestiona el “modelo” en marcha de TVV, argumentando sobre las crecientes lagunas de legitimación del mismo y no sólo sobre las deficiencias ya evidenciadas por una gestión en exceso subalterna respecto de otros modelos de TV (¿pública?). Y en dicho contexto es que se avanza, como propuesta para su superación (políticamente factible a priori, pues que remite en sus Objetivos Estratégicos a los ya legitimados por la propia Programación Regional), un “modelo posible” que se piensa para una TVV *diferente*: a operativizar, en lo económico-político implicado, desde una concepción proclive a un mayor acento en lo “micro” de la cuestión. De entrada, a partir de su (re)planificación posible como tal modelo empresarial. Y ello, por demás, “en apoyo al desarrollo económico y del cambio social”, y no sólo -así se defiende- desde una óptica sectorialista (así limitada a su entendimiento como medio de información “en sí”).

Pero en absoluto, por lo mismo, debe entenderse que tal apuesta implique estar acriticamente a favor de la comunicación “para el desarrollo” o “para la modernización”. Pues desde los planteamientos de Schramm y Lerner en los años 60, que presumían un uso en tal sentido de la comunicación, sabemos de la inutilidad y autobombo tecnocrático que hacen al caso -los latinoamericanos fueron los primeros en saberlo- de no contar con los frenos estructurales o derivados de las relaciones de poder establecidos en torno al uso (y no sólo a la tecnología) de tales medios (radio y TV, ante todo).

Dicho de otro modo: lo que se plantea -y se intentará defender en adelante- no es la simple crítica ideológica o jurídico-política del Canal 9 que se conoce, actualmente en fase de despegue; ni, frente al mismo, la incorporación mecánica de técnicas de planificación a su gestión. Sino, más bien, la oportunidad (todavía y ante todo) de replanificar el proyecto con arreglo a los “fines fundacio-

nales'' (aun mejorables); y en relación con ello, de reivindicar desde una óptica de *gestión pública estratégica* la conveniencia de la planificación o programación como herramienta eficaz para la transformación racional del actual ''estado de cosas'', desde un punto de vista autonómico y tanto a nivel social como económico, en relación con Canal 9-TVV. Y ello desde la doble premisa de que apostar por ello implica, de una parte, la definición irrenunciable de hacia qué política audiovisual autonómica encaminarse por entenderse como socialmente posible, en ''ese más acá del futuro'' que identifica Canal 9 como *Proyecto*, autonómico y europeísta; y en paralelo, en tanto que (proyecto) *Público*, defender como idónea una Planificación Estratégica Participativa, en la que antes importa el propio ''proceso de planificación'' (identificación de agentes intervinientes, definición de oportunidades y debilidades, cambios estratégicos para la consecución de los objetivos cualitativamente in-mediatos, etc) que no su simple postulado instrumental para legitimar intervenciones de otro cariz (más tecnócratas y/o auto-legitimables).

Los datos de partida, en todo caso, están ahí: como quien dice hasta la puesta en pie (1983) de la Ley del Tercer Canal, en plena etapa de consolidación democrática y luego del particular marco legal que en tal sentido representa el Estatuto de RTVE de 1980, la historia de la televisión en España es la historia de TVE. La historia, así, de una gigantesca maquinaria de legitimación puesta al servicio de un centralismo franquista tan absolutista en lo político como retrógrado en lo cultural, alimentada a su vez por una opción germinal de financiación tan proclive a la comercialización creciente como, por lo mismo, no menos atípica en un contexto europeo en plena recuperación económica; y que será más tarde, con la crisis y los primeros pasos de la transición, ante todo palanca de acceso desigual en la disputa para-electoral, así como (a medida que el nuevo sistema político se iba consolidando) chivo expiatorio de sus particulares usufructuarios hasta entonces, empeñados por demás en mantener -entre otros rasgos inconsecuentes con la propia Constitución de 1978- el centralismo originario. Los intentos por reformarla según criterios más democráticos, una vez mantenida la posibilidad abierta de su entendimiento como ''real'' servicio público, convivirán al filo de los 80 con aquellos otros que desde el tardofranquismo y desde el propio Gobierno de UCD poco tardarían en desvelar su intención por levantar la TV privada sobre las ruinas de una 'TV pública' que jamás pudo demostrar su condición de tal...

TVE sería la única TV posible hasta la aparición, de espaldas a la misma pero quizá por ello sin poder evitar parecidos errores, de EuskalTelebista (enero 83), a la que secundaría TV3 en septiembre del mismo año (TVG se sumaría más tarde). A esa *primera ruptura* del monopolio desde el propio sector público, por centralista, desde las nuevas concepciones políticas inherentes a las nuevas/viejas realidades autonómicas sobrevendrá, cinco años más tarde, una *segunda ruptura* respaldada -con las cautelas ya conocidas- por un Gobierno socialista inicialmente remiso a dar luz verde definitiva al sistema coexistencial, entre TV pública y privada. Desregulación sectorial, al fin y al cabo, que centró de hecho el gran debate teórico-político durante la década de los 80: pese a evidenciarse, claramente desde 1983, que la ''TV convencional'' empezaba a sobrepasarse por las nuevas realidades tecnológicas ligadas al desarrollo de la TV por satélite y aun por cable.

Canal 9-TVV se adelantaría a la postre en apenas medio año escaso, en sus emisiones regulares, a las primeras televisiones privadas que hicieron llegar su señal a territorio valenciano (Antena 3 y Tele Cinco). Irrumpía, por tanto, siendo la 6ª emisora autonómica tras las ya señaladas y después de Canal Sur (RTV Andalucía) y TeleMadrid (RTVM), que, junto con las privadas,

también efectuaron su bautismo de ondas en 1989 -un año de cambios trascendentales en tantas cosas. El mapa del audiovisual público que resta quedaba desde entonces a la espera, en lo inmediato, de la pronta incorporación de dos nuevos canales autonómicos: Tele3 de Murcia y la TV Autonómica de Canarias, contando a su vez con el proyecto Hispasat previsto para 1992 y la anunciada intención gubernamental de legalizar las TV locales en la presente legislatura (antes de 1992, según señaló Martín Palaciín en el verano de 1990).

La gran cuestión planteada al Consejo de Administración y al director general de RTVV, así las cosas, era y sigue siendo definir “su” modelo de (radio y) televisión.

Lo inmediato será -pocos lo discuten- la pugna particular a sostener con las nuevas emisoras de TV privada, estando todas ellas como están, al igual que sucede con Canal 9-TVV, en plena “etapa de despegue” desde una perspectiva estrictamente empresarial. La opinión de Jorge Martínez Reverte, ex-director de Onda Madrid/TVM, era ya concluyente al respecto en 1988: “Los 3 estudios dicen que TeleMadrid será el canal autonómico más rentable de España. Con tres canales privados creo que las cosas cambian. TeleMadrid será, quizá, la que menos dinero pierda” (El Globo, 22-1-88). Tal parece, en efecto, el objetivo realista (“perder el mínimo dinero”) al que los terceros canales quedarían abocados dentro del modelo coexistencial que ya se ha definido para las TV -públicas y privadas- convencionales, o que transmiten por ondas. Todo ello, por demás, en un “contexto de opinión” no precisamente favorable, pues todo hace prever (haya o no ‘pacto de respeto’ en sus comienzos) que la crítica “privatista” se agudizará sin duda en el futuro desde la propia prensa, al hilo de la más que probable financiación mixta (fondos públicos más publicidad) de tales canales.

El “retraso comparativo” de la Televisión Valenciana respecto de otros canales autonómicos, sin embargo, no tendría por qué suponer la interiorización del *modelo tendencial* de “TV pesada” (progubernamentalista en lo político, comercializante en lo económico, neocentralista en su ámbito territorial y convencional en lo tecnológico) que en prácticamente todos ellos se aprecia y que, por edificarse en las pioneras “a la contra” de TVE (pero a su imagen) y más si cabe por la pugna entrevista con las privadas según una misma lógica, en cualquier caso, quizá pudiera entorsearse por algunos como el único modelo posible. Especialmente si se consideran, en el medio plazo, más allá de las colisiones de arranque, las perspectivas inherentes a un audiovisual europeo sin fronteras como el de 1993 (y aun antes). Y desde luego si no se pretenden escamotear los objetivos que legitiman su creación como TV pública, por definición ‘diferencial’. Siendo ese, en mi opinión, el hilo conductor que conviene (por razones, entre otras, de estricta legitimación y de adecuación formal democrática) retomar: desde renovados criterios y formas de “gestión pública estratégica”, tal y como en esta Tesis se intentará sostener.

A la sombra, por demás, de la reforma actualmente en marcha del Estatuto de RTVE de 1980 -sin tener por qué realmente, de atenderse previamente como debiera a la Constitución y al propio Estatuto de Autonomía- los defensores de Canal-9 como TV autonómica todavía *posible* en tanto que realmente *pública* (entre los que me encuentro) observan cómo las presiones en contra vienen sumándose, sin hallar más respuesta por ahora que la de unos cuantos expertos cada vez más perplejos, cuando no más escépticos. Así, a las presiones pro-desregulación -patentes también entre nosotros desde los primeros 80- que en lo jurídico como terreno propicio se intentan fundamentar

cada vez más al amparo de un discurso ‘tecnológico’ (alcanzando no sólo al audiovisual sino también, a su vez, al sector de las telecomunicaciones más cercano a los ‘servicios finales’), se suman esas otras presiones previas y más conocidas, como la publicitaria y estrictamente industrial, que vienen propiciando paralelos procesos de concentración sectorial y creciente transnacionalización de la producción y distribución audiovisual (Vid. Enrique Bustamante y Ramón Zallo, eds: ‘Las industrias culturales en España’. Ed. Akal, Madrid, 1988). Y a unas y otras parece sumarse ahora el criterio difuso que aboga por la ‘despolitización’ de los organismos públicos de RTV, sin explicitarse en ocasiones no ya su alcance y contenido sino las eventuales alternativas de organización y gestión que, como mínimo, serían cualitativamente exigibles en contrapartida.

Ciertamente, si la anunciada convergencia entre las industrias de telecomunicaciones y del audiovisual es tan previsible -a diez años vista cuando menos- como la ausencia actual de estrategias convincentes en el contexto europeo, al respecto, no menos contradictorio resulta constatar la matriz propagandística y comercializante del viejo modelo televisivo finalmente interiorizado por las TV autonómicas en España. Sin por ello, no obstante, ser causa suficiente -aunque lo sea necesaria- para identificar a partir de ahí que ‘politización’ sea igual a propaganda, como si no hubiese formas políticas más democráticas -y en mayor medida si cabe, por lo mismo, todavía necesarias-; o que lo eficiente sea equiparable sin más -en la búsqueda compartida por una ‘autofinanciación’ tan ideal como ajena a toda industria realmente *cultural*- con el predominio absoluto y obsesivo por los ingresos publicitarios, hasta ese punto de competitividad entre TV públicas -tan extrañas a tal adjetivación- a que venimos asistiendo.

No cabe obviar, en ningún caso, el tremendo hiato abierto en el caso valenciano -al hilo de una espera enrarecida, primero, y de alguna que otra sonora frustración, después- entre los llamados finalmente a decidir en RTVV y aquéllos sobre quienes descansa la última razón del proyecto (sin discutir por ello la prevalencia al respecto de la representatividad electoral, algo que importa dejar claro). Espera enrarecida (por todo un proceso decisorio ayuno en exceso del debate social ‘democráticamente adecuado’) y ciertas frustraciones (de normalización sociocultural, de vertebración territorial, de carencia del esperado ‘efecto arrastre’ sobre un hipotético sector autóctono del audiovisual), que han posibilitado un poso creciente de confusión y escepticismo -desde la inicial propuesta de ley pro-TVV del grupo Popular de las Corts, en 1984, hasta el ‘caso Villena’ o la ‘polémica’ todavía sin cerrar entre Linde y Fabregat- donde han medrado no pocos pescadores avisados. Al tiempo que parecen haberse dilapidado (¿definitivamente?) potencialidades de innovación que los primeros escauceos democráticos arrojaron en su día al hilo del proyecto, y en parte recogidos por el impulso inicial del mismo desde la dirección general de Medios de Comunicación Social de la Generalitat.

Contribuir a minimizar ese hiato de confusión y escepticismo en la medida de mis posibilidades, quizá por aquello de salvar las lagunas de información que sigue siendo oportuno ‘rellenar’ cuanto antes a fin de ampliar el debate social sobre un proyecto de calado histórico indiscutible para el País Valenciano, es el objetivo manifiesto de cuanto aquí se escribe. Con sujeción, en su estructura de desarrollo, a las pautas temáticas que de inmediato se señalan.



Al enfoque politológico y culturalista de unos años tan sobrepasados como la realidad monopolística con que entroncaban, es preciso anteponer cuanto antes, a mi juicio, otras perspectivas en relación con RTVV para cuya profundización no debieran resultar ajenos los *contenidos* económicos y/o tecnológicos (en lo sectorial pero también en lo territorial), sin por ello descuidar la frecuente observancia que de ello se hace desde un criticable “mcluhanismo de izquierdas”. Como tampoco debieran resultar ajenos, en cuanto a las nuevas *relaciones* sociales (entre lo público y lo privado) que las nuevas realidades audiovisuales y de telecomunicación prodifusionista dejan ya entrever, las reconsideraciones pertinentes -de entrada con vistas al horizonte paneuropeo de 1993- que cabe ligar a nuevos ‘modos de planificación’: así, por ejemplo, los desde aquí propuestos a partir de un no menos renovado enfoque de “gestión pública estratégica”.

Y lo anterior desde un enfoque que si no renuncia a viejas raíces ideológicas por considerarlas de plena vigencia (así los conceptos de participación y descentralización, en su indudable imbricación con la constitución cotidiana del nuevo Estado autonómico), tampoco desecha, sino todo lo contrario, las exigencias de formalización pro-activas a que quizá ayuden desde una perspectiva más proclive a lo “micro” (si bien en los nuevos contextos de creciente oligopolización y competencia) corrientes tan aparentemente dispares como la Teoría de la Negociación y ciertas técnicas basadas en la Teoría de Juegos, la Economía de la Organización o Institucional y la Planificación Estratégica de Ciudades. Eso al menos es lo que se intenta en el **capítulo III**, quizá el más novedoso de esta Tesis. Capítulo en el que se explicitan las claves del “futuro” que importa considerar, avanzando, luego de retomarse las cuestiones básicas del “para qué” y “cómo” de la TVV posible, un contenido que se juzga coherente y factible a partir de la propuesta básica que recorre la misma si para una política autonómica del audiovisual: no otra que la de *profundizar la descentralización* a través de una “TVV ampliada” en relación con las TV locales valencianas asentadas o por llegar...

Aun cuando la justificación epistemológica, para llegar a dicha propuesta, al igual que los propósitos de investigación aplicada que se persiguen y a la misma concomitantes (no otros que el entendimiento del reto de la democratización para una ‘real’ comunicación como lo fundamental, tanto para el control como para la programación y gestión previas de los medios, en el contexto de una auténtica política de comunicación no menos autonómica que europeísta) deben rastrearse, como es de estricta lógica expositiva, con anterioridad: en el **capítulo I**. Donde se comienza por subrayar la importancia de RTVV en función de la inexistencia como tal de un sistema de comunicación autonómico: en razón precisamente de los procesos de internacionalización y concentración empresarial de las industrias culturales en el contexto europeo, y de la creciente subordinación de los principales grupos empresariales “valencianos” (también en prensa escrita y radio) a las estrategias “centrales” que acompañan la plena integración en dicho contexto. Lo que implica no sólo una prospectiva escasamente halagüeña para un País Valenciano tan desvertebrado -social y territorialmente- de antemano, sino también y por lo mismo la crucial importancia de acertar en la puesta en pie de una Televisión autonómica capaz de no descuidarlo.

Por demás, el desconocimiento de la política de comunicación asentada de hecho a través de los medios de información dominantes ha conllevado con demasiada frecuencia la elusión de dicho contexto global (y de su génesis histórica, lo bastante reciente como para evitar excesivas digresiones sin sentido) cuando se trata de entender las razones de fondo que rodean la demanda social (y no sólo ‘política’) de una TV autonómica para la Comunidad Valenciana. El **capítulo II**, encabalgado con

lo sugerido al respecto en el I, analizará en consecuencia ese contexto global del medio Televisión -con especial hincapié en la descentralización televisiva en Europa y en la ya superada polémica “TV privada vs. pública”, entre nosotros-, una vez explicitado el sistema y la política de comunicación en que dicho medio actúa y se desarrolla. No vaya a suceder que el propio planteamiento de partida añada confusión en lugar de disiparla. Para a continuación adentrarse en la historia con que ya cuenta el proyecto RTVV, y acercarse después mediante el análisis de las dimensiones estratégicas fundamentales (programación, producción, financiación, etc) al “estado de la cuestión” de un Canal 9 que ha acumulado inconsistencias de sobra a lo largo de su primer año de rodaje.

En definitiva, se trata de retomar la complejidad que conlleva el modelo televisivo que quepa definir por los poderes públicos valencianos a partir del contexto global en que se insertan sus potencialidades al tiempo que sus límites y condicionantes de variado signo.

## **CAPÍTULO I**

### **¿QUÉ MODELO DE TV PÚBLICA?**

Al igual que no existe *el* modelo de comunicación (en lo teórico), tampoco cabe hablar de *un* modelo por excelencia de TV pública (en la práctica). Si acaso, lo social como instancia definitiva en cada contexto de “lo público”, caso por caso, el concepto implícito de sociedad que subyace a cada discurso concreto cuando de medios de comunicación se trata, sigue siendo tanto el “referente necesario” como insuficientes las aproximaciones al mismo. En su seno, en todo caso, es donde actúan -como enfatizase Raymond Williams- los medios y/o modos de comunicación: es en la sociedad donde éstos devienen instituciones y/o formas (modelos), reconocidos o no como tales. Y no parece razonable hablar del medio TV sino dentro de ‘cada’ sociedad (en realidad plural y no ‘una’) o formación social en que cobra pleno sentido (social) la producción de realidad, de conocimiento, que tal medio -junto con otros- vehicula, a la par que las lagunas de información que ejerce en su práctica cotidiana.

De igual modo que los distintos desarrollos teóricos en comunicación social (desde el paradigma de Lasswell pasando por la ruptura pseudoparadigmática de McLuhan y acabando por las propuestas implícitas al Informe MacBride) desembocan en una creciente aceptación de la necesidad de contextualizar y diferenciar (en términos de política de comunicación contingente) los ‘modelos’ establecidos en cada caso, de idéntica manera se observan respecto de las TV públicas (en contextos sociopolíticos cercanos al nuestro) crecientes exigencias de desgubernamentalización y descentralización, así como un vaivén contradictorio entre el audiovisual difusionista y el desarrollo efectivo de las telecomunicaciones avanzadas (y no sólo de desregulación, comercialización transnacional, etc).

Por lo que conviene -en definitiva- que separemos el grano de la paja, en uno y otro ámbito (en lo metateórico y en lo metapráctico), según nuestra particular observancia. A fin de que nadie, desde un principio, se llame a engaño a tales respectos. Y dado que esta Tesis se plantea con pretensiones de investigación ‘aplicada’, persiguiendo concretar un eventual modelo diferente para la Televisión Valenciana (cuestión que llenará de contenido los Capítulos II y III), lo que a continuación se intenta, como cuestión previa, es precisar ese desbroce del grano de la paja en referencia por el momento a lo metateórico: allí donde el recurso a la Comunicación (habitualmente con mayúscula) se antepone incluso, en tanto que pre-texto, a su (ab)uso como simple y llano

## 1. EPISTEMOLOGIA Y COMUNICACION.

*“La ciencia presupone que el producto del trabajo científico es importante, en el sentido de que ‘es digno de saber’ (...) (Pero) es imposible demostrar esta presuposición por medios científicos. Sólo puede ser interpretada respecto a su significado definitivo, el cual debemos rechazar o aceptar de acuerdo con nuestra postura fundamental ante la vida”.*

MAX WEBER.

*“La ciencia, que comenzó siendo la persecución de la verdad, se está haciendo incompatible con la veracidad, ya que la veracidad completa tiende cada vez más al escepticismo científico completo”.*

BERTRAND RUSSELL

La primera, la gran cuestión implícita, es el “para qué/para quién” de toda Tesis que -como ésta- se pretende aplicable. Una respuesta *de rigor*, sin embargo, no debería confundir la simple enunciación descriptivista de su intención, más o menos profunda al respecto, con la justificación debida e inevitablemente inherente a los aspectos epistemológicos que siempre -se quiera o no- conlleva toda *respuesta genuina* en tal sentido. Pues no tiene por qué bastar que dicha intención sea relevante para el investigador concreto, que es como decir “para sí”, si para la comunidad científica ante la que se presenta (y en última instancia para *la sociedad* en que tanto el sujeto investigador cuanto el objeto investigado adquieren dicho ‘sentido’) no se entiende así. Lo autoveritativo, en definitiva, es terreno felizmente en desuso.

El problema de la relevancia es, en efecto, uno de los problemas filosóficos -en sentido amplio- de toda ciencia, que entronca directamente y sin línea clara de discontinuidad con los problemas referentes al juicio científico, muchos de ellos ahondantes en cuestiones de las que Wartofsky llama sustantivas cuando distingue, en torno a los problemas filosóficos que afectan a la ciencia, dos grandes grupos:

- Metodológicos: “Aquellos que tienen que ver con los procedimientos y métodos de la investigación”.

- Sustantivos: “Aquellos que tienen que ver con la visión del mundo del científico, dentro de cuyo esquema él pone en práctica dichos procedimientos” <sup>(1)</sup>.

La matización tal vez pueda parecer a muchos algo baladí, pero -y de ahí la cita de Weber- no lo sería para otros, entre los que me incluyo. Y en modo cierto, sin duda, va más allá del interrogante (implícito no pocas veces) sobre la propia relevancia del “objeto” sobre el que se trata de reflexionar: en nuestro caso sobre la descentralización televisiva en el contexto europeo y muy en concreto, al hilo de todo ello, sobre un hipotético modelo de TV pública alternativo al que tendencialmente se presume “en construcción” por parte de los actuales órganos de gobierno de Radiotelevisión Valenciana.

Que tal matización (sustantiva) se anteponga como una *cuestión de arranque* -como algo “más allá de” lo normalmente explicitado-, antes debe entenderse como obediente a una cuestión “de principio” -valga la redundancia, pues que de lógica se trata- y no a otra cosa. Porque, en efecto,

tratar de no eludir -al menos eso- tanto cuestiones sustantivas (como la polémica sobre la objetividad y la legitimidad de ciertas entidades teóricas, como las relaciones entre ideología y ciencias sociales, entre sociedad e historia, comunicación establecida y poder), así como otras de carácter más estrictamente metodológicas, caso del papel que juegan ciertos conceptos y prácticas científicas (observación, medida, hipótesis, contrastación, inferencia, interpretación, etc), presupone a su vez la consideración de que tales cuestiones merecen la pena tratarse, también en las denominadas Ciencias de la Información. Y no sólo eso, sino de que además debieran tratarse -en ocasiones como la presente- con anterioridad a cualquier otra consideración: no por mera servidumbre a lo exigible académicamente, según una lógica de costumbres, sino en razón de un uso (autocrítico y fundamentado) de la “mínima lógica” que parece pertinente no escamotear en estas lides.

Es decir, si dentro de un discurso “tradicional” podría haber argumentado la necesidad de abordar los problemas metodológicos y sustantivos en ciencias sociales y concluir, seguramente, en la ayuda que tal aproximación nos prestaría para desbrozar y aunar esfuerzos en torno a la teoría y la práctica de la comunicación, en torno de RTVV en nuestro caso, lo que se pretende aquí no es tanto eso como apuntalar desde ya la conciencia de la hipótesis que sobre tal particular y a lo largo de estas acotaciones iniciales vamos a mantener. Dicha hipótesis, en concreto, entronca con la teoría del discurso de alguna manera inaugurada por Michel Pêcheux <sup>(2)</sup> y se entiende que afecta al propio discurso científico -el nuestro incluido- en modo bastante como para explicitar sus condicionantes extradiscursivos y para urgir la debida reflexión sobre sus límites y sus posibilidades.

Históricamente, como es sabido, el habla saussureana se transformó en uso (Hjelmslev), escritura (con Barthes) y, como última gran etapa por el momento, en discurso (entendido, como refiere Pêcheux, en el sentido de un régimen de selección y combinación común a distintos sujetos que ocupan la misma posición relativa en la “estructura” de una formación social). Pêcheux, auténtico “puente teórico” que explica el paso del ‘giro lingüístico’ al ‘giro pragmático’ que se concreta en la “Teoría de la acción comunicativa” habermasiana, criticó en su momento, como también se sabe, el estatismo metodológico de los modelos lingüísticos desarrollados hasta mediados los años 70, incluidos los poschomskyanos, acusándolos de pretender un universalismo trascendente y de tratar de identificar -especialmente los modelos semánticos- lo ideológico con los efectos subliminales de las estructuras profundas del discurso... Al respecto, la corriente francesa cercana a la teoría del discurso (Greimas y compañía), con frecuencia impugnada -y no pocas veces con razón- por excesivo metadiscurso, ha trazado en todo caso las bases (siempre provisionalmente) correctas para entender la importancia del código en sí mismo, más allá de la ignorancia de la propia investigación lingüística, en su desarrollo histórico, por el gran dogma saussureano: la arbitrariedad del signo; e intentando recomponer la perspectiva del discurso dentro de un entendimiento -ineludible a mi juicio- de los condicionantes ideológicos y sociocontextuales para tratar de configurar, por ejemplo, el problema de la percepción como práctica social y no meramente como problema fenomenológico o de psicología transaccional. Un enfoque por cierto, el de raíz psicologicista, inicialmente retomado por A. Sercovich en su intento por fundamentar una psicosemiótica necesitada -según él- de una teoría de las ideologías y de una teoría de la subjetividad, todavía -ni que decir tiene- sin desarrollar a gusto de todos <sup>(3)</sup>. La influencia en todo caso -lógica, siquiera sea por mera proximidad- de psicólogos franceses como Lacan o Deleuze, de no escaso predicamento entre nosotros, no parece tener otro sentido. Y la predilección cuasi-filosófica que tales autores denotan por *lo discursivo* podría tener -entre otras posibles- esta cercana explicación.

Pero lo que más nos interesa remarcar, en torno a lo dicho, son las implicaciones -según entiendo- que epistemología y comunicación interrelacionan a través del ‘crack’ paradigmático que actualmente se palpa, bajo nuevas formas de perplejidad y al hilo del creciente reconocimiento de la multicausalidad azarosa (ecología, biología) e incluso caótica (teoría de las catástrofes, etc). En efecto, lo importante de lo reseñado radicaría en lo criticable del escamoteo de las condiciones no lingüísticas en la producción del discurso, implícita a toda metafísica de la evidencia. En otras palabras: las propuestas que arrancan de Barthes y reconduce Pêcheux -y otros con él- referentes a epistemología del discurso, conectadas a las reflexiones de Wittgenstein, Russell, Whitehead, Watzlawick o Elster, la teoría de la conversación (Pask) y al regreso neokantiano que desde la reflexión habermasiana -de alguna manera- se interioriza por cierta Teoría Crítica, se traducen como transdisciplinarias para el resto de las pretensiones científicas, pues nos permitirían cuestionar “el prejuicio idealista, contenido en todo empirismo, de una aprehensión directa de la realidad”. Con ello, no solamente se irían al traste los intentos de aprehensión fenomenológicos -reivindicados últimamente por diversas corrientes-, sino que además, precisamente por la imposibilidad de internalizar objetivamente el “referente” que sería lo real, toda ciencia -incluida la lógica <sup>(4)</sup>- se vería obligada a cuestionarse desde un principio según sus objetos inmediatos, en el sentido que otorgaba Ch. S. Peirce a este término <sup>(5)</sup>. O cuando menos, se vería obligada a explicitar los límites (los ideológicos entre ellos) con que previsible y apriorísticamente toparía.

Baste pensar por demás en la crítica implícita a la “objetividad” como principio periodístico tradicional que lo anterior presupone, y en el auge reciente de los estudios sociológicos (no sólo comunicacionales) sobre ‘producción de realidad’, para ejemplificar que no estamos hablando, desde luego, de algo ajeno a nuestros intereses cognoscitivos, ahora y aquí. Pues es a partir de ahí, en efecto, que pueden llegar a entenderse el ‘modelo en meandro’ de la realidad televisiva que propusiera Ch. Doelker, o los análisis del mensaje audiovisual de Baggaley y Duck, hasta llegar a la explícita enunciación de la ‘producción de realidad’ que Gay Tuchmann, Vidal Beneyto, Harry Pross o Bustamante vienen proponiendo como línea “micro” de la investigación que importa en Comunicación (de la mano de la sociología del conocimiento y a partir de Berger-Luckman), junto a la perspectiva “macro” que se apoya -al menos, entre nosotros, desde Vázquez Montalbán- en la economía política de los medios...

Lo real, en tanto que “objeto dinámico”, resultaría en efecto -cada vez más para los más- algo incierto. Y tan *real* -incierto y complejo- es en ese sentido el investigador como lo son -en la perplejidad que suscitan- sus objetos de estudio. De ahí la tentación por “reducir” lo complejo, por rehuir la perplejidad, como tics consustanciales a toda ciencia asentada. Como sugiere G.L.S. Shackle, parecería que “vivimos en un mundo indeterminado, de incertidumbre. (Y) somos nosotros quienes lo determinamos”. O por decirlo con Jesús Ibáñez, “la suposición clásica de que ‘descubríamos’ la realidad al investigarla ha sido sustituida por la suposición no clásica de que al investigar la realidad la inventamos (la construimos). El principio de objetividad ha sido sustituido por el principio de reflexividad (...) La Epistemología se va haciendo constructivista. La realidad es construida al investigarla”, también en ciencias de la información <sup>(6)</sup>. Algo que incluso cabe referir a las ciencias llamadas *exactas*, como ya sugiriese Bachelard en su “Essai sur la connaissance approche”: como parecen confirmar no sólo las Físicas cuántica y relativista, sino también la Cibernética de segundo orden (Von Foerster, Maturana y Varela). No en vano, si como ha dicho a

su vez el lógico polaco Lukasiewicz -en sus “Estudios de Lógica y Filosofía”, que presuponen el largo alcance actual del segundo Wittgenstein-, resulta que “las leyes y teorías de la ciencia natural, por ser hipótesis, no son reproducciones de hechos, sino productos creativos del pensamiento humano: debería comparárseles no con una fotografía, sino con un cuadro pintado por un artista”... ¿Cuánto mejor, entonces, podríamos decir de las ciencias denominadas *sociales*? Si en éstas el paradigma de Kuhn -el ‘episteme’ de Foucault-, referido al conjunto conceptual aceptado por la comunidad científica, observa, para así conceptualizarlas de sociales, ciertas diferencias, no la última de ellas sería -en mi opinión- la más que evidente caracterización metadiscursiva de tal paradigma. O por decirlo con Kuhn: “podemos llegar a sospechar que es necesario algo similar a un paradigma como requisito previo para la percepción misma”<sup>(7)</sup>. Y ya se sabe que los paradigmas científicos distorsionan la imagen del mundo: un paradigma distinto no sólo cambia el enfoque sino que altera también el “objeto inmediato” mismo, pues, volviendo a Kuhn, “aunque el mundo no cambia con un cambio de paradigma, el científico después trabaja en un mundo diferente”...

Adelantamos de paso que nos vamos a encontrar con una dicotomía básica, todavía hoy, en filosofía de la ciencia: la existencia “encontrada” de dos racionalidades -o formas de entender la razón- primordiales: la analítica y la dialéctica. Como el malogrado Alfredo Deaño supo entrever, ni la síntesis entre ambas es clara ni la exclusión plausible. Podemos sugerir mientras tanto, eso sí, el carácter guía que en nuestra apreciación sobre toda metodología retiene el concepto de heurístico, si bien no en el sentido puramente formalista que muchos aún le confieren, sino más bien en el sentido de “pluralismo contingente”, tan abierto a la crítica como pegado al terreno /casuística concretos. Debiera quedar claro, en todo caso, que lo reivindicado desde aquí no es sino la ruptura -de acuerdo con Horkheimer, Adorno y Habermas- con el mito racionalista de lo científico, o todavía más matizado: con el mito científicista que nos llega de la Ilustración en su pretensión por legitimar como única “fuente de conocimiento” (dejando por ejemplo al margen a toda otra forma de experiencia vital) a la razón, especialmente la empírica; y la necesidad paralela de reinsertar, en todo discurso que como tal se pretenda, las categorías imaginarias que ineludiblemente arrastramos, en tanto que pre-nociones científicas pero también en tanto que fuentes *generadoras* de lo utópico y lo socialmente posible. Lo que, de acuerdo con F. Savater, nos llevaría al entendimiento último de lo científico como estilo de aproximación-a-lo-real-complejo, como “modo” de investigación. Siendo así que el tono ensayístico, particularmente, se presentaría como forma no menos idónea que la academicista habitual a la hora de corporeizar un discurso científico que no pretenda encubrir la radical -de ‘raíz’- subjetividad que vertebra desde su punto cero<sup>(8)</sup>.

Es más: el concepto de diferencia, con el último Deleuze entre otros ‘postestructuralistas’<sup>(9)</sup>, va a resultar central en nuestro desarrollo discursivo. Según una justificación que se acoge, ya de partida, a las implicaciones que derivan de cuanto se ha adelantado. Máxime si convenimos en englobar dentro de la categoría de ciencia social el discurso que pretendemos, al reivindicar en consecuencia estrictamente “lógica” la sobredeterminación recíproca, en tal discurso, entre sujeto investigador y objeto investigado (el ‘regreso neokantiano’ de la epistemología constructivista). Y más en concreto, la necesidad -que planteo como tal- de cuestionarse las relaciones epistemología-comunicación justo en lo que de intercambio significativo suponen; es decir, en su interconfluencia como “objeto dinámico”, en cierto modo indivisible y sólo aprehensible si acaso por justificaciones abstraídas -en este caso, las mías.



Ahora bien. Nuestra pretensión de *teorizar* al respecto no quiere suponer necesariamente la de realizar un ‘discurso teórico’ -acerca del propio conocimiento teórico-, en sí mismo considerado. Es decir, no se pretende que las presentes acotaciones tengan el carácter de un “discurso del método” como algo cerrado en sí mismo. Antes se trataría de dejar hablar a mis dudas, dado que estimo la autocrítica como el primer paso hacia la superación de la alienación cientificista inherente a cualquier ciencia social asentada, que siendo parecelarias -como son- suelen pretenderse, cada una por su cuenta, totalizantes <sup>(10)</sup>. Con el simple corolario, que sumar a lo anterior, de que mi objetivo -ya que no “mi” objeto- es autolimitativo: en el sentido de perseguir ante todo el recordar la oportunidad (‘razón práctica’ inmediata) de incorporar a nuestras Facultades las aportaciones que llegan de la Filosofía de la Ciencia, así como también, en su reverso interdisciplinario, la relevancia singular que pueden representar las aportaciones comunicacionales para todo planteamiento “metadiscursivo” -el científico, y más si de *ciencias sociales* se trata, incluido.

Me interesa en cualquier caso subrayar, cuanto antes, la utilización discursiva que hago de las citas y el entrecomillado. Con respecto a las citas interesa recalcar el carácter contingente y recapitular del primer Apartado que sigue, en el que se ha asumido una postura a medias compiladora y a medias ensayística. Lo que no me exime -soy consciente- del riesgo de quedar esclavo en tal enjambre de citas, algo sospechoso de principio y siempre aconsejable de evitar. Pero por otra parte, en connivencia con M. Maffesoli, en tal uso se trataría de hacer funcionar la fuerza de irrupción de lo que Barthes denominaba la distancia de una cita (en “Sade, Fourier, Loyola”); es decir, no tanto entrar en la lógica de una obra como exportar sus fórmulas para que se enfrenten, en tanto compendio heurístico esencialmente cuestionador, con la lógica de la argumentación en curso, para que golpeen desde fuera y debiliten adrede o pongan a prueba la solidez de la construcción discursiva.

De otra parte, en lo referente al uso del entrecomillado (y aun de ciertas cursivas, añadiría), he de confesar que, junto al frecuente recurso del “condicional”, ha sido siempre en mi *estilo* una constante operativa y fundamentada: de ahí que se reitere no sólo en el presente Capítulo, sino a lo largo de toda la Tesis. Por eso me parece de mínimo rigor debido, siquiera sea para con el sufrido lector, su justificación adecuada que, con palabras de Sercovich, adelanto:

“De la polisemia del entrecomillado (cita, ironía, mecanismo de verosimilización, etc) retendré un sentido que, en la mayor parte de los contextos, se presenta como susceptible de ser descrito como ‘cautela teórica’”.

Finalmente, tampoco deseo pasar por alto una aclaración que juzgo sumamente pertinente, en especial por lo que hace a este primer Capítulo. Me refiero a la “Bibliografía y Notas” que pretenden arroparlo. Merecerá la pena recordar, al respecto, que la gran mayoría de los trabajos teóricos pertinentes -sobre todo en lo relativo a los modelos comunicacionales-, eran tiempo atrás no sólo de difícil acceso en versiones originales sino, todavía hoy y quizá más importante, referentes a contextos sociopolíticos ajenos al compartido por mi presunto lector y por mí mismo. Quiere recordarse con ello, de una parte, la mediatización que todavía padecemos ante la preponderancia -que continúa- de la producción editorial de origen anglosajón, en absoluto ajena al propio origen del paradigma de sistemas dominante ni al orden económico y político con que se entrecruzan los últimos intereses de la investigación aplicada derivada. Y de otra parte, que ello era todavía más notorio -afortunadamente cada vez lo es menos- en la época (años 70) en que quien suscribe “edificó” en medida ineludible -pues también esto tiene su particular historia, su génesis hasta

cierto punto irremediable- su (mi) estilo investigador. De lo que es preciso dejar constancia, siquiera sea para matizar un eventual y apriorístico cuestionamiento del mismo, quizá calificable de *algo antiguo*, a la luz del apoyo bibliográfico que de aquellos años se sigue manteniendo, con la lógica actualización que toda postura (auto)crítica conlleva. “Actualización” sin embargo nada fácil a la vista de las ‘ofertas a la moda’ que han campado durante la década ominosa (en tantos aspectos) de los 80 pero que, en cualquier caso, tampoco es infrecuente que como tal actualización lo sea *menos* en cuanto al ‘substrato epistemológico’ que todos y cada uno hacemos nuestro a partir de cierto momento: quizá por aquello, como el sentido común admite, de que a partir de cierto momento cada vez resulta más difícil cambiarse a uno mismo.

### 1.1. COMUNICACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO: POR UNA APROXIMACION HEURISTICA.

*"El problema no es meramente establecer si se dice la verdad, sino qué cosa constituye la verdad, en un caso determinado, sobre qué se la dice y sobre qué se la calla".*

PAUL A. BARAN.

Si convenimos -de nuevo con Wartofsky- que la propia ciencia es tanto un medio de conocimiento cuanto un cuerpo de presuntos conocimientos, la importancia específica de la epistemología con respecto a la filosofía de la ciencia se refiere, más que a los instrumentos, técnicas y/o métodos, a los modos y/o *estilos* para la adquisición y convalidación del conocimiento científico. Y ello presupondría, lejos de la metafísica de la evidencia que tiende a equiparar lo real con lo aparente, entender el propio conocimiento científico como un proceso en continuo devenir. Por ello Wartofsky subraya que “la búsqueda de la verdad entraña también la eliminación de la falsedad”; y añade: “En este sentido la ciencia es un quehacer crítico, no dogmático, que somete todos sus supuestos a ensayo y crítica. Concebidas de modo amplio, las condiciones para originar y poner a prueba los presuntos conocimientos de la ciencia caen dentro del ámbito de la epistemología de la ciencia” (ob. cit, p. 31). Ahora bien, tal ‘concepción’, el entendimiento de tales ‘condiciones’, etc, responden a problemas culturales -entendiendo la cultura en este caso como marco codificante. El propio Carlos Marx, en “La ideología alemana”, ya argumentaba que “sobre el ‘espíritu’ pesa desde el primer momento una maldición: la de ser ‘maculado’ por una materia que se presenta en este caso bajo formas de capas de aire agitadas, de sonidos, es decir, por el lenguaje”<sup>(1)</sup>. En otras palabras, lejos de otorgar prioridad relevante a los problemas concernientes al método en sí mismo como lo esencial de la ciencia, es preciso recuperar la categoría contingente de todo conocimiento, empezando por resaltar lo decisivo que devienen en la práctica metacientífica los estilos o modos - y las condiciones extradiscursivas en que se contextualizan- que posibilitan y ayudan a entender/ explicar tales conocimientos (asentados o no).

Quedaría claro que si, como venimos manteniendo, el conocimiento concreto no es “en sí”, sino que resulta -insistimos- de una especie de síntesis de abstracciones justificadas; y más, que si

el proceso de conocimiento en las llamadas ciencias sociales es él mismo un hecho humano, histórico y social, que implica la identificación parcial entre sujeto y objeto <sup>(12)</sup>, entonces ello implicaría reconocer el condicionamiento histórico e ideológico de tal conocimiento. El admitir que la “realidad” que se trata de estudiar es esencialmente cambiante (‘objeto dinámico’, recordemos, la llama Peirce) y que el propio investigador forma parte de esa realidad, estando ideológicamente condicionado por la misma (porque es como decir: estando indefectiblemente implicado consigo mismo), plantearía así, si queremos rehuir como decimos de la pura (estéril en tal sentido) preocupación academicista por el método en sí mismo, el problema fundamental de optar por un estilo o modo investigativo que recoja, entre otros, ambos aspectos.

Debe quedar claro, no obstante, que optar por un estilo epistémico -parafraseando a Foucault- ni presupone necesariamente optar por una metodología ni, sensu contrario, por ninguna:

- Frente a quienes señalan la pertinencia de la primera opción (una metodología y solo una), Maffesoli ya advirtió sobre el *terrorismo de la coherencia* que -sin duda en grado exarcebado- subyacería en quienes defienden tales planteamientos, y en contra de lo cual también me manifiesto desde aquí. Pues cosa muy distinta, en mi opinión, sería reconocer la necesidad de situar todo objeto “inmediato” de investigación -y el Proyecto RTVV lo es- en el contexto histórico e ideológico considerado como adecuado, y en el consiguiente marco institucional, y muy otra sería la de instrumentalizar el estilo elegido, por ello, subsumiendo toda duda que pueda hacer pupa en aras de una práctica (histórica o/e institucional) supuestamente “objetiva” y/o “unitariamente” superadora: necesitada, por tanto, de una justificación ¿científica?. La propia práctica social, como instancia final de revalidación (cuanto menos histórica), ha aclarado por demás recientemente, tanto en el contexto español como en el europeo en su más amplio entendimiento, posturas que no hace tanto tiempo se resistían a la aceptación de tan básica consideración <sup>(13)</sup>.

- Ciertamente, si al subestimar la relatividad del conocimiento puede acabarse poniendo el acento sobre el ‘sistema’ (y el *rigor* de dicha sistematización devenir con frecuencia en estricta defensa del dogma), de ahí a la sumisión de la ciencia al poder establecido, del fetichismo del saber a su conversión en logos tecnocrático, no habría más que un paso... Nuestra postura antidogmática, sin embargo, quiere no suponer ‘necesariamente’ la postura (simétricamente ¿contraria?) de un *estar a favor de todo*, llevando a la postura crítica por que se apuesta hacia un cierto conformismo nihilista; sino reivindicar, más bien, la conciencia de nuestra posición y de nuestro ‘instrumental’ para redefinir cuantas veces sea necesario nuestro particular estilo investigador. Pues lo que no cabe olvidar es la excesiva frecuencia -así, por ejemplo, en el caso del último Feyerabend<sup>(14)</sup>- como la propuesta del viejo presupuesto epistemológico (“todo vale, todo depende de todo”) resulta puesta en entredicho al conducir no pocas veces a “sistemas fantásticos y unidades ilusorias de ‘todo a la vez’ que se evaporan al ser sometidos a examen crítico y no son con frecuencia más que expresiones de buena voluntad científica iletrada o de esperanzas devotas de coherencia” (Wartofsky, ob. cit., p. 22).

Sobran ya en nuestros estantes mentales, pues, los argumentos que se decían o dicen “objetivos”. Pero no menos, a su vez, que los que en su “subjetividad” extrema -más o menos ‘débiles’- terminan por hacer suya la suposición antagónica de la anterior. Su aparatosa rigurosidad, o bien su ingeniosa labilidad, parecen querer implicar científicidad cuando tan sólo suelen esconder

-de ordinario- posturas si no partidistas sí cuando menos pretenciosas. Pero no basta con constatarlo... No se trataría sólo de desreificar la ciencia. Por lo que nos jugamos en ello, antes se trataría de explicitar que el conocimiento teórico que operativizamos no supone, ciertamente, simple asepsia, sino reconocimiento de su implicación práctica (y por tanto no exenta de contradicciones). No en vano, cuando menos desde el Feyerabend de “Contra el método” sabemos que *la* ciencia (y todas -insistimos- aspiran a ser únicas en su parcela), ya como algo autosuficiente, objetivo y universal, o ya como cosa aparte de la matriz de condiciones, necesidades e intereses humanos en que se origina y desarrolla, y sus verdades como intemporales e ilocales, no deja de ser un bufo demagógico... En no menor medida que, contra el subjetivismo autoveritativo, cabe plantear la ruptura contra el mito del lector universal que ya reivindicase entre nosotros Vidal-Beneyto <sup>(15)</sup>.

Por otra parte, topamos también ineludiblemente con la problemática relación entre el conocimiento científico y el uso del mismo. Lo que, en definitiva, apunta a la conflictiva interacción entre hechos y valores. En su formulación ya clásica, la cuestión fue tratada desde J.D. Bernal hasta H. Kahn e I. Horowitz, pasando por Mumford y Merton, siendo los argumentos básicos encontrados los que siguen:

a) si verdaderamente la ciencia tiene que ver con *lo que es*, y “deber” no se puede derivar de “ser”, no cabe duda de que las funciones prescriptivas de la ciencia estarán subordinadas, pues la ciencia es moral o valorativamente neutral con respecto a tales decisiones, ya que quedan fuera de su esfera.

b) cabe oponer, por contra, que la actividad científica no es meramente una cuestión abstraída del “conocimiento en sí”, sino que constantemente arrastra el uso de este conocimiento: decir que la ciencia es moralmente neutral es un enunciado analítico, si por ciencia significamos “conocimiento abstraído de su propio uso”. Pero entonces no estamos hablando de la ciencia que conocemos... No existe ninguna razón no normativa para la neutralidad científica, salvo la de que sirve a los fines del progreso científico (considerado, a su vez, como un fin “en sí”).

Sin necesidad de retomar in extenso dicha polémica -hasta cierto punto ‘sobrepasada’ a estas alturas-, quede tanto constancia de ella cuanto de mi particular inclinación antes proclive al segundo que no al primero de los argumentos en pugna. No sólo por lo ya dicho con anterioridad sino también, entre otros argumentos, por consideraciones consolidadas en los ámbitos “tradicionales” de la investigación en Comunicación y que importa ahora no olvidar. Como la distinción entre ‘proceso’ y ‘situación’ de comunicación, distinción que arranca de la escuela filosófica que hace hincapié en el aspecto *relacional* e interactuante de lo que se entiende por comunicación y recalcada en su momento entre nosotros por Aranguren o Núñez Ladeveze <sup>(16)</sup>. Comunicación sería algo más que la pura transmisión de información, de modo que su esquema explicativo ahondaría más allá, en consecuencia, de la primitiva formalización (de cuño aristotélico) ceñida a la triada categorial y unidireccional que suele representarse como *Sujeto emisor - Mensaje - Sujeto receptor*. Baste a título de ejemplo, y sin entrar aquí en intenciones neopositivistas al respecto, recalar en la posibilidad entrevista por Núñez Ladeveze de separación metodológica entre la situación y el proceso comunicacionales, precisamente por el replanteamiento de lo subjetivo en tal diferencia. Así, dice:

“ (La *situación de comunicación*) consiste en la compenetración común y autónoma de los contenidos procesados. Común: supone la presencia recíproca del sentido del <yo> en el <otro>;

autónoma: quiere decir que esta presencia no está determinada por condiciones inherentes al proceso, es decir, objetivas. Esto significa que el sujeto receptor y el emisor son creativos, libres, independientes del propio proceso de comunicación, capaces de engendrar el sentido, no sólo en función del 'contexto', aunque tampoco nunca fuera del 'contexto', y de actuar, en definitiva, sobre el contenido comunicado (...) La 'situación de comunicación' es una participación activa en el proceso: su consumación a partir del sujeto" (ob. cit., p. 34).

Con criterio transdisciplinar (en la medida que todo esfuerzo científico implica otro tanto de estricta comunicación), no es difícil pensar que la distinción proceso/situación remite a una muy diversa interiorización por el sujeto investigador de los propios límites de su racionalidad: frente al proceso (científico), más propio del formalismo autogratificante en tanto que abstracción tendente a su completitud, se antepondría una situación (de investigación) más cercana a la complejidad que está en la base del sujeto-objeto y que alcanza, por tanto, a otro tipo de "gratificación", sin duda ligada a ciertas formas de validación intersubjetiva dentro de la comunidad científica.

O dicho de otro modo. Si partimos de un cierto esquema básico del *proceso* científico, como el que con Gino Longo cabe sintetizar como sigue:

1. Observación de los "hechos" (selección del universo 'empírico')
2. Formulación de hipótesis (fantasía e intuición)
3. Falsación o verificación de hipótesis (experimento/crítica)
4. Nueva formulación de hipótesis (modelización),... etc.

...O bien como dice J.W Lapierre, si lo concreto no es siempre lo aparente ni lo abstracto lo real necesariamente, de modo que "el proceso científico va de lo concreto percibido (en el cual se hallan confundidos lo aparente y lo real) a lo concreto explicado (en el cual lo real, separado de lo aparente, se hace inteligible) pasando por el rodeo necesario de un cierto modo de abstracción, que es precisamente el análisis teórico" <sup>(17)</sup>... En ese caso, bajo el supuesto de aceptar tales formulaciones, tampoco es difícil recabar que los 'momentos' de elaboración teórica implícitos (etapas 2 y 4 de Longo, conceptualización de los "fenómenos" y formulación de relaciones hipotéticas verificables) y de observación de los "hechos" -así entrecomillado por cuanto resulta difícil separar lo que vemos de lo que queremos ver, de manera más llamativa en ciencias sociales- (etapas 1 y 3, llamémoslo <análisis>), son, ambos, como extremos que se complementan mutuamente; pero que no sólo no coinciden sino que implican además, según tal esquema 'básico', la consideración (implícita a su vez) del conocimiento científico como progresivo, como un saber acumulativo. Y para nosotros no sólo resulta insuficiente tal mitología *progresista* del conocimiento -no resulta a priori más satisfactoria que la de los "saltos cualitativos" propuesta por Feyerabend, sin ir más lejos- sino que, además y por lo dicho, el problema permite otro enfoque (cualitativamente) cual sería el de atenderlo desde la "preformación de realidad" que, por el discurso concomitante y en función de la *situación de investigación*, afectaría a todo el 'proceso' (elaboración teórica y observación de los hechos). Pues se acepten en mayor o menor medida las formulaciones de Longo o Lapierre al respecto, el conocimiento científico comporta el planteamiento de problemas sustantivos fundamentales. Y entre ellos están sin duda -de un modo indeclinable desde el artículo de Schumpeter "Science and Ideology"- el relativo al grado de supervivencia de elementos ideológicos en el análisis, el relativo a la relación que se establece entre tal supervivencia y la verificabilidad efectiva de los "fenómenos", así como la frontera hipotética entre el proceso de eliminación y el de

conservación de tales elementos ideológicos...

Si interesa calibrar al respecto -siquiera sea relativamente- las posibles aportaciones que desde una óptica comunicacional cabe introducir en la consideración global del conocimiento científico, más allá de su mera <procesación>, no cabe sino reiterar el interés cognoscitivo primordial -aun relativo- de resituarse la tensión *conocimiento científico - conceptualización* a la luz de su validez en el terreno propio y “sustantivo” de la filosofía de la ciencia. Y en tal sentido, las aportaciones metaepistemológicas que arrancan de la lingüística (Saussure) y de la semiótica (Peirce) han terminado por subrayar, desde Pêcheux, Greimas y compañía, la importancia del discurso (incluido el cientificista) como un factor más de conformación social.

Los conceptos de la ciencia son, en efecto, las ineludibles herramientas de trabajo del pensamiento científico y desde tal óptica cabe sostener, así, que “el trabajo del científico -tanto su actividad teórica como su investigación y experimentación práctica- se ve guiado por dichos conceptos y se sistematiza mediante dichas estructuras conceptuales, de tal modo que lo que descubre aquí está relacionado con su entendimiento de lo que haya descubierto allí, y se encuentra ligado a ello por la red de pensamientos e inferencias que proporciona el esquema conceptual” (Wartofsky). Ahora bien, siendo criticables como son ciertas formulaciones lingüístico-semióticas precisamente por cierta consideración “ensimismada” del discurso, sólo nuestra particular “pre-noción” (la ‘visión’ schumpeteriana) al respecto parece ser capaz, en última instancia, de validar la relevancia que aquí se apunta sobre la conceptualización científica. Con lo que vamos a parar a lo mismo: el *estilo* o modo de investigación de que se vale todo científico implica sin duda un discurso que no es sólo denotación, sino también connotación, carga ideológica una vez más. Ya no se trata sólo de desistir de diferenciaciones en sí metaideológicas, como la formulada en su día por la Sociología del Conocimiento al sugerir la distinción entre pensamiento condicionado y tergiversación ideológica, sino de insistir, por el contrario, en la importancia de reflexionar sobre la alienación en el discurso de que todos, en muchas maneras, participamos <sup>(18)</sup>.

La cuestión, ni que decir tiene, admite una traducción inmediata no ya en términos de filosofía de la ciencia sino de cualquier ciencia en concreto. Valga como ejemplo, por lo que a nuestra Tesis concierne directamente, toda la polémica subyacente al término de *televisión regional* en tanto que concepto ciertamente ‘directriz’ en las estrategias de investigación sobre la descentralización televisiva en Europa y no menos ‘introducción’ de un cierto orden (y no otro) en la formulación de las teorías que hacen al caso: pues como viene sosteniendo Inma Tubella, del Gabinete de TV3, esta emisora será tan ‘regional’ en el contexto europeo como puede serlo en el mismo TVE, y más ‘nacional’ que ésta si el marco de referencia se limita a Cataluña. Del mismo modo que para algunos puristas del enfoque jurídico-político permanecería poco menos que intacto el *monopolio* de la TV estatal en España (la ruptura de las autonómicas no sería tal por ser ellas mismas Estado y la de las privadas tampoco, por ser meras ‘concesiones’ de una titularidad “intocada en lo esencial”), o que para otros -no menos puristas desde las visiones no menos parcelarias de “lo económico” o “lo tecnológico”- supone el mantenimiento de la *autofinanciación* por vía publicitaria como algo apenas controvertible o el deslinde cada vez más artificial de *lo audiovisual* respecto de las nuevas tecnologías de telecomunicación (satélite, cable) como si de una cuestión ajena a lo social y exclusivamente técnica -“futurología parda”- se tratase.

¿Es acaso pensable, por lo dicho, alguna ciencia social “objetiva”? Si, en mínima coherencia con lo sostenido, contestamos que no, ¿qué hacer entonces? ¿Adoptar la postura ‘escéptica’ de Schumpeter ante la posibilidad de hacer “ciencia”, y esperar que sea sólomente el genérico *progreso del tiempo* la nueva ‘visión’ que cancele los viejos preconceptos (ideológicos) destruyendo las raíces de impureza que el científico no logra extirpar con una simple investigación “analítica”? Demasiado conformista, de entrada (lo que no deja de ser, a su vez, una respuesta metaideológica). ¿Adoptamos esa otra postura, por contra, que nos habla del reconocimiento explícito del condicionamiento ideológico como la mejor garantía científicista a nuestro alcance? Tampoco convence: no sería la primera vez que se pretende avalar cierto cambio en el mundo, con la “Tesis XI sobre Feuerbach” más en la boca que en los ojos, mutilando (de antemano o a posteriori) su eventual interpretación “relevante”. A fin de cuenta, ¿con qué nos quedamos? ¿No será tal dicotomía como un tic metafísico a que parece irremisiblemente abocada toda binariedad conceptual? ¿No hay ningún escape: si el empirismo político disimula con frecuencia la ausencia de teoría -como dijo H. Lefebvre-, no es menos cierto que el empirismo científicista apenas disimula su hipocresía política?... No parece preciso sino conservar la ya antañona unidad conflictual entre ciencia e ideología: si no se desea ni proteger la confusión entre el “valor referencial” de los dos términos, ni tampoco separarlos por decretos arbitrarios -que no subjetivos. Todo lo cual nos resitúa, cierta y explícitamente, en favor de una postura abierta. Y es en tal sentido que cabe recordar -con Michel Maffesoli por esta vez- que “en lugar de analizar una ‘estructura’ económica, una ‘superestructura’ política e ideológica, una ‘situación’ histórica, en forma separada, con el peligro de las oposiciones binarias (metafísicas) siempre latentes, preferimos un vaivén permanente de aproximaciones y de análisis diversos (...) Una actitud plural en el método y en la explicación (...) que participa de una actitud que toma en cuenta la diferencia, (algo) socialmente importante, porque de la negación de la diferencia deriva siempre la generalización y la profundización de la dominación”<sup>(19)</sup>. Pero ello, no se olvide, desde una postura (la nuestra) tanto reacia a la identificación sin más del pluralismo-en-la-aproximación-a-lo-real-complejo con el criterio metodológico del “todo vale” (aquí denotado) cuanto reivindicativa de que estar en contra del “terrorismo de la coherencia” no tiene porqué equipararse con una apuesta a favor de la incoherencia y en contra, en última instancia, de la razón (pues “coherencia razonable”, y así se defiende, supone a mi juicio la de unir la crítica a toda ciencia parcelaria con la defensa de lo diferente, como aquí se propone).

Desde el entendimiento, en este sentido, de que el problema epistemológico clave seguiría siendo (como ya lo era para Popper o Russell) el de la validación -inevitablemente “veritativa”, valga la redundancia... Problema para el cual, personalmente y de acuerdo de nuevo con Lefebvre y tantos otros, sigo sin ver otra salida *mejor que* la de acudir a la propia **práctica social**, que en tanto ‘praxis’ auto-compartida (ante todo en su creciente formalización política pero, en tal sentido, inevitablemente plural y conflictual) sería el “mejor mecanismo corrector” a que cabría apelar, si bien a partir de (y *solo de*) un entendimiento **democrático** y decididamente **dialogal** de las relaciones sociales y de dominación implicadas (sin limitar el ámbito de ‘lo político’, por demás, al juego estrictamente partidista). Claro que tal remisión a la práctica social topa, en cada caso, con una interpretación metaconceptual difícilmente desligable de nuestra “weltanschauung” particular: pero no es menos cierto, en todo caso, que conlleva la ventaja indiscutible -según entiendo- de restituir en vez de agrandar el estrecho vínculo originariamente existente entre ciencia y vida cotidiana... Lo que se pide, con Wartofsky y no sólo al hilo del proyecto de RTVV que aquí nos ocupará como “objeto inmediato”, es “más bien una hipótesis que trascienda la experiencia común, pero que se

encuentre aún ligada a lo que el entendimiento común encuentra plausible: algo que la razón aplauda pero que la percepción y la práctica común no nieguen ni encuentren absurdo”.

Poco menos que indiscutible, desde tales criterios *prácticos* inmediatos, será reconocer -se pretenda o no se pretenda, sea positiva o negativa- que *la validación (social) en primera instancia -ya que no “en última”, al residir ésta en los valencianos como ‘público potencial’- será la que haga la “clase” política*, y ello más allá del foro académico en que esta Tesis se presenta... Serán los políticos valencianos en particular, para cuanto aquí se sostendrá con carácter específico en relación con RTVV, quienes digan la primera palabra sobre su validez o no. Como serán los políticos en general quienes la digan, para éste como para no importa qué discurso sobre TV’s públicas: hoy por hoy y en España al menos, dado el predominio del modelo “politicista” que se importase del ‘ejemplo’ TVE por las distintas TV autonómicas. *Resulta totalmente pertinente, en consecuencia, no descuidar el calado ideológico que por tal motivo -entre otros- se ha de explicitar: sopena, en caso contrario, de correr el riesgo de tantas inútiles disquisiciones por ajenas a su contexto inmediato de verificación* (de ahí el entendimiento de la clase política valenciana como primer ‘sujeto receptor’ interesado y, como tal, interactuante ‘a priori’ en su no pasividad).

Al igual que, como quien dice por lo mismo, no importa menos la aclaración -fundamental, en su carácter de ‘ordenación primaria’ de lo aquí defendido- que no por reivindicar mayores cotas de descentralización (intra-autonómica) y de participación (social y no sólo política) se está equiparando sin más, mecánicamente, el modelo *posible* con la despolitización de que tanto se viene hablando en la actual discusión centrada en la reforma del Estatuto de RTVE (“Estatuto madre”, por tantos motivos, del diseño organizativo de los organismos de RTV autonómicos). Y ello porque la despolitización es incompatible, por definición, con toda concepción coherente de TV pública. Lo que importa, por el contrario, es señalar qué *politización* y qué *participación social* se defienden, en qué terrenos se sitúan sus incompatibilidades formales y en dónde la complementariedad coherente y (democráticamente) necesaria. Necesaria por defenderse la práctica “social” (en toda su extensión) como ‘instancia última’ de validación. Pues si desde la óptica de lo público tan defendible resulta la pretensión de ‘desestatizar la sociedad’ cuanto desde la óptica de lo privado la reclamación de ‘privatizar el Estado’ ineficiente y no participativo, un argumento no se identifica sin más con el otro, ni por lo mismo la despolitización de la TV pública (hoy tan en boga) deviene garantía sin más de una gestión eficiente como tal TV pública.

No menos indiscutible, a su vez, resulta para el investigador concreto la traducción de todo ello en términos de intentar una investigación “aplicable”, por lo que no escapará -pese a reivindicarse la no omisión de las concomitancias ideológicas de sus propuestas- a la *exigencia en paralelo de fijar tales propuestas con arreglo a las mayores cotas de ‘formalización lógica’ posibles*. A este respecto, si acudimos -siquiera sea someramente- a una aproximación histórica del propio devenir científico en el conocimiento social, no resultaría difícil comprender la influencia modélico-refleja que en cuanto a pretensión de creciente positivización (eliminación de la carga ideológica) suponen las llamadas ciencias naturales con respecto a las sociales. El esquema weberiano-kantiano, y sus deslizamientos hacia la lógica simbólica en nuestro siglo -con Wittgenstein y Carnap a la cabeza-, junto con la tradición “clásica” del pensamiento económico<sup>(20)</sup>, amén de las ‘rupturas’ de Saussure-Peirce, Freud y Lévi-Strauss -básicamente-, todavía serían no obstante, en nuestro ámbito cognoscitivo, las principales corrientes constitutivas de una cierta matriz “básica” a la hora de formalizar



la opción de racionalidad con que debe encararse el investigador en ciencias sociales.

Con el holismo funcional-estructuralista, tanto parsoniano como althusseriano, el hincapié interrogativo volvería a retomar consciencia de la globalidad de lo complejo: en el primer caso de la mano del concepto de interacción (las actuales corrientes de modelos y sistemas), y en el segundo en base al concepto de proceso. Pero en ambos casos, creo, la mitología racionalista seguía en pie (aún sin conciencia de su cojera), sin resolver por ello viejos problemas. No se resolvía, de una parte, la crítica a Weber: ¿cómo una explicación de tipo causal-científico que permita verificar los tipos ideales en base a tipos históricos? Y de otra, ¿cómo salvar el carácter humano del proceso sin romper la permanente tensión conflictual individuo-sociedad con que se nos presentan los ‘fenómenos’ sociales? Es decir, la ciencia social todavía no parecía darse cuenta, en sus pretensiones de explicación causalística durante los años 60 y buena parte de los 70, de que, al menos desde Freud, reconocer la complejidad del conocimiento supone reconocer la complejidad de las relaciones que existen entre lo manifiesto y el contenido latente, de que el desarrollo y la interpretación (científicas) se superponen, no se anulan. No parece por ello que fuera casual, tras la “entropía del funcionalismo” -como dijo en su día J.E. Rodríguez Ibáñez<sup>(21)</sup>-, que tras el sueño parsoniano y althusseriano viniese el despertar de la subjetivización: al mismo tiempo, paradójicamente, en que se planteaba toda una problemática derivada de la “ausencia del sujeto”. Y con la década de los 80 -por periodizar de algún modo-, el auge del *pensamiento débil* (al amparo del principio metodológico del ‘todo vale’, se insiste) se encargaría de ratificarlo, de convertirlo en ‘moda’ reivindicada como posmoderna. Y como toda moda, pronto caída en desuso... Y vuelta a empezar.

Y en parte de ahí, de esa reiterativa “vuelta a empezar”, que cuestionemos -pese al apoyo historicista en el discurso previo- el entendimiento del conocimiento científico como acumulativo. Pues tal idea conlleva un cierto mito “desarrollista” tan difícil de erradicar como de sostener desde una perspectiva crítica. Ante todo a la hora de defender, como aquí se hace, el carácter contingente de todo paradigma. Siendo del modo que no podemos olvidar que las respuestas cualitativamente nuevas, las que alimentarían nuevos (no continuistas) paradigmas, surgen en los saltos científicos cualitativos, que rara vez tienen relación con las preguntas que se hacen: “es propio de los auténticos cambios -escribe Rubert de Ventós- el no producirse dónde o cómo se esperaban; como también es propio de las respuestas genuinamente nuevas surgir fuera del campo acotado por la razón interrogativa del momento”<sup>(22)</sup>. El reto de imaginación y de transgresión de los límites establecidos que la conciencia de lo anterior implica no sólo ayuda a entender el drama de los científicos más significados, desde Galileo a Einstein; más simplemente, ayuda a comprender cómo la crítica del conformismo y de la cobardía en los ámbitos científicos recobra un valor metacientífico (en tanto que metasocial) y no se constriñe a una mera toma de postura personal (quizá esteticista) con presuntos fines metaideológicos<sup>(23)</sup>. Y ayuda en última instancia, frente a no importa qué positivismo, a apuntalar la aproximación heurística y crítica ante lo-real-complejo que es, como “objeto inmediato”, RTVV (y Canal 9 en concreto).

Una última matización, que también importa no descuidar aquí en tanto que investigación que se pretende “aplicada”. Sin necesidad de retomar cuanto arranca de “La disputa del positivismo en la sociología alemana”<sup>(24)</sup>, el positivismo, los positivismos, habrían sido desenmascarados finalmente en lo paradójal de su ontología científicista: a pesar de sus orígenes antimetafísicos habrían caído, en efecto, en su misma trampa al conceder existencia propia al mundo “objetual”. Además,

si bien se podría argumentar en su defensa que los números constituyen un lenguaje universal, y que las pretensiones formalistas planteadas en base a la cuantificación posible serían, “por tanto” (es decir, al parecer), la ruta que condujese hacia una ciencia social objetiva, positiva, no es menos cierto que podríamos contraargumentar diciendo, con J.D. Bernal, que “la dificultad reside en que el progreso de la ciencia y su especialización (reduccionista) hacen (entre otras cosas) que el número relativo de personas competentes para una terminología o un simbolismo determinado, sea siempre cada vez más reducido”<sup>(25)</sup>. Ello, ciertamente, sugiere -si ha de traducirse a la práctica (social) como instancia cualitativa de validación- que la dificultad en el aprendizaje de tales lenguajes formalizados puede (aun cuando quepa el supuesto contrario) alejar a la ciencia de su auténtico fin social, al dejarla en manos de una élite selecta de ‘entendidos’ (entendedores) quizá proclives a usufructuar en beneficio propio (no necesariamente individual) dicho saber (en tanto que poder). O por decirlo con Kuhn: cómo las ciencias, en especial de plegarse a tales intentonas formalistas ‘para sí’, no buscarían tanto la verdad cuanto el control. Posibilidad de dominio que, en el uso de tal conocimiento, desde luego ha existido y existe: recuérdese, si no, a qué razón última operativa han obedecido/obedecen el *equilibrio del terror* ligado al desarrollo del potencial nuclear en la esfera política internacional o hasta qué punto no contribuyen ciertos modelos comunicacionales a legitimar o cuando menos mantener ese otro terror ‘anómico’ de la creciente incomunicación en las relaciones sociales (por no entrar en matizar los contenidos) apreciable en la actualidad pese a la opulencia de medios de comunicación...

Junto a la crítica de su paradoja ontológica, pues, cabe criticar al positivismo por el **logos tecnocrático** que de hecho legitimaría, y no sólo en las sociedades “avanzadas” europeas -como los recientes sucesos del Este han ratificado en lo concerniente al marxismo institucionalizado, al igual que sucede con cuantos padecen la problemática de la dependencia y el subdesarrollo. Por eso cuando aquí se habla de positivismo se habla, en realidad, de “positivismos” o conocimientos afirmadores, no cuestionadores. Pero también por eso, frente a los anteriores y a las más recientes manifestaciones de sus epígonos a la moda, se reivindica desde aquí el ‘regreso de lo duro’ implícito a las propuestas de Maffesoli o del último Foucault (como ejemplo del desplazamiento del interés cognoscitivo-emancipatorio de lo estrictamente económico por la problemática más genérica de la dominación, del poder) así como, en relación con una comunicación social no ‘fuera de contexto’, las aproximaciones de Habermas, de Morin, etc<sup>(26)</sup>.

En tal dirección, parecen pervivir el rechazo (clásico) de cuantas “luchas” teóricas se han librado desde diversos estilos frente a las dominaciones o autoridades *exteriores*, junto con los nuevos acentos (más recientes, derivados de la recuperación crítica de la subjetividad) puestos en juego a fin de desentrañar las dominaciones o autoridades *internas* (o “internalizadas”).

No es extraño por ello que también entre nosotros y en Ciencias de la Información se detecte, junto a la recuperación de la perspectiva analítica centrada en la economía política de los medios - desde “Los amos de la información” de E. Bustamante, cuando menos-, una preocupación por el “quién” laswelliano antes centrada en una ‘perspectiva interior’ que ha extendido el interés investigador del papel de los empresarios al de los propios profesionales: considerando y cuestionando la autocensura como campo de autorrepresión profesional, indagando sobre la profesión periodística como privilegiada en tanto que cercana-al o mediatizada-por el poder (político o empresarial), o reflexionando sobre las ‘rutinas informativas’ en la elaboración de las noticias como

ámbito a no descuidar para la superación de las servidumbres que se viven a diario en el sector -así las recientes investigaciones del mismo E. Bustamante, desde Madrid, o de Emilio Prado desde Barcelona... De igual modo que se vislumbra un creciente aposento de las investigaciones relativas a la progresiva “horizontalización” (y no sólo como respuesta mecánica al enfoque verticalista que presupone el esquema de Laswell) en lo relativo a un “quién” que empieza a no considerarse tan sólo como destinatario pasivo en toda situación de comunicación ‘mediada’: de ahí la temática relativa al derecho de acceso a la información más allá de criterios alternativistas desfasados por la complejidad de lo-real-establecido, el interés por la descentralización del audiovisual (TV autonómicas incluidas) o el auge incluso de todo lo relativo a la comunicación local como ámbito más cercano y propicio a la participación efectiva, etc. Aunque, repitámoslo, el reconocimiento de lo “subjetivo” en todo ello no tiene por qué implicar -como de hecho se recoge en muchos de tales trabajos- la exclusión o el olvido del “contexto”.

En definitiva, se trataría de inutilizar los acercamientos teóricos fundamentados en esquemas e instrumentos conceptuales ‘impersonales’ para desplazar el acento hacia una personalización del conflicto de la que tampoco escapa el investigador en ciencias sociales -no rehuyendo, así, las responsabilidades de cada quién ante los hechos. El reconocimiento de nuestro ineludible protagonismo, desvelador de ciertas realidades y no de otras, es a su vez clave de legitimación epistemológica de nuestra reivindicación a favor de una aproximación heurística y crítica.

## 1.2. LA COMUNICACION COMO PRE-TEXTO. (ANALOGIA Y DIFERENCIA).

Que el problema de la racionalidad (analítica vs. dialéctica) tiene que ver con con la teoría del discurso y de la comunicación en general, a estas alturas, nos parece incuestionable. La cuestión, de tan hondas raíces incluso entre nosotros <sup>(27)</sup>, remite finalmente a la contrapuesta acepción de la realidad que sostienen. Es decir, la racionalidad analítica y la racionalidad dialéctica obedecerían a concepciones de *la realidad* disímiles. Tener que decidir -cuando se es consciente de ello- entre semejantes concepciones es una de las primeras cuestiones epistemológicas a encarar por cualquier investigador, en consecuencia, con la debida seriedad ‘científica’. Por nuestra parte, se insiste, sostendremos -con el malogrado Alfredo Deaño y con Javier Muguerza- el carácter laberíntico de tal opción, por cuanto si bien topamos al final con lo ineludible de tal opción su resolución se impone más en aras de estricta y lisa operatividad, de reducir incertidumbre -al cabo reducción, criticable reducción-, que no de una clara conciencia de su fatal enfrentamiento como modos disparejos de entender el estilo discursivo, investigador.

De entrada, tal opción entre racionalidades en absoluto se corresponde con la típica opción metodológica entre holismo y reduccionismo, por más que antes estemos por el primero que por el segundo <sup>(28)</sup>. Esta última opción se queda relegada a una discusión sobre el método en sí mismo, pero no alcanza por eso mismo el grado de abstracción -superior- en que se debate la primera opción, tocante al fundamento último del estilo discursivo: en tanto que éste termina por ser -en su desarrollo- holista o reduccionista, y no sólo se pretende (uno u otro) en su preámbulo de intenciones. O dicho

desde otra perspectiva, uno se puede *pretender* holista y *ser*, de hecho, un descriptivista nato (por ejemplo). O todo lo contrario. Aunque lo más fácil suele ser, desde luego, pretenderse no reduccionista y serlo al modo analítico... Nada, en ningún caso, garantiza a priori la asunción real de cuanto la opción de racionalidad (que no de método) implica -queremos decir, consciente permanentemente de tal. Ahora bien, interesaría recalcar que precisamente en esa dimensión ontológica (del 'ser') deviene laberíntica la opción entre una y otra racionalidad. Lo que, en cualquier caso, no nos absuelve de la búsqueda continua en tal nivel, y sí, en cambio, parece condenarnos a ese choque cerrado en lo que de heurístico retiene todo "estilo" investigador: es decir, el dado siempre a nivel de "pretensión de conocimiento... abierta".

El uso de categorías históricas -uso implícito, en efecto, a los enfoques holistas y explícito en lo hasta aquí discursado- plantea como pertinente, en todo caso, una mínima aclaración por nuestra parte de hasta qué punto puede descalificarse a la historia como ciencia, por cuanto lo que no podemos es negarle una validez ante todo y sobre todo "heurística" (resulta difícil entender el modelo predominante de TV autonómica, como ya se verá, sin atender al "ejemplo TVE", y ni uno ni otro pueden entenderse sin acudir a un cierto entendimiento histórico de los mismos). Y por validez heurística habría que entender: ni a favor de la conocida crítica de Karl Popper en "La miseria del historicismo" (si el conocimiento histórico carece de fuerza predictiva no es menos cierto que explicación y predicción no siempre son simétricas), ni a favor de quienes contrapondrían a una historia mutilada una historia idealizada (como sería el caso, este último, de tantos y tantos que todavía ven en la historia la guía del futuro) <sup>(29)</sup>. Por el contrario, el auténtico problema que situaría una ciencia de la historia como inalcanzable sería la inevitabilidad de la interpretación y de la selección de *hechos*, si bien, aunque sin los beneficios marginales de la predicción (¡tan inestimable para los devotos legaliformes de la ciencia, tan exigentes en su creencia de 'leyes' inamovibles!), no parece descartable en la investigación histórica su pretensión de ofrecer ciertas perspectivas de comprensión.

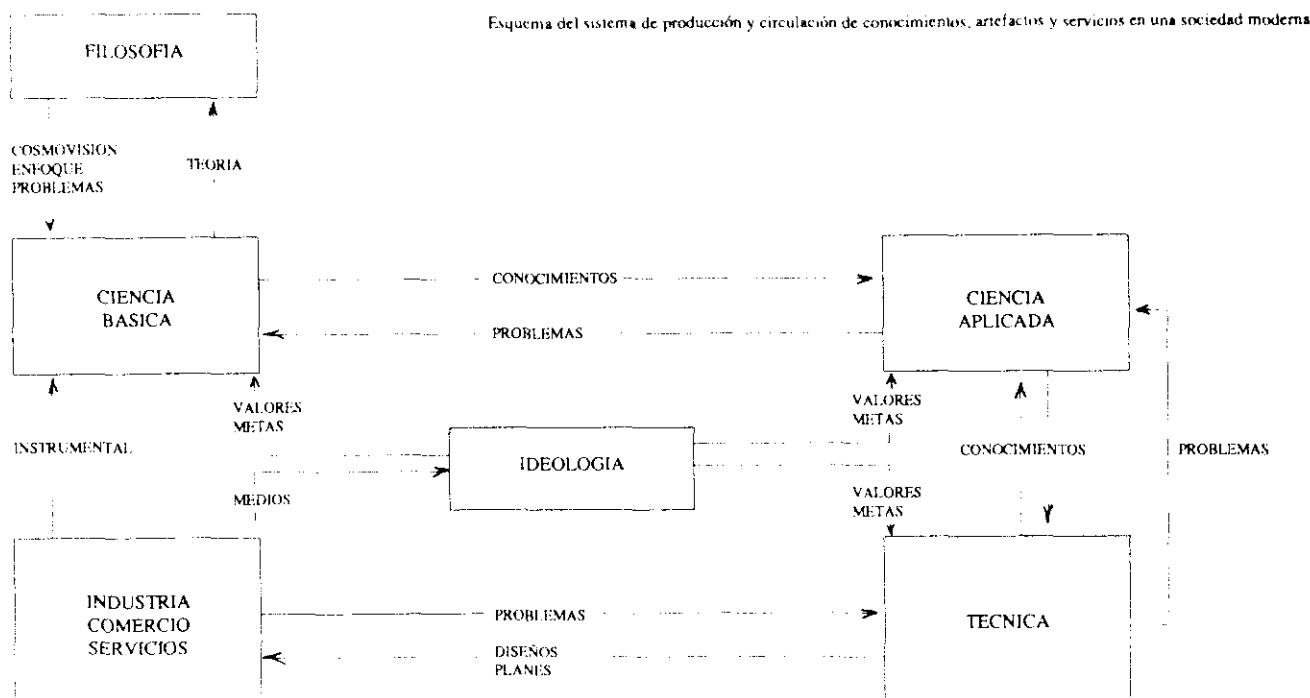
Todo lo anterior vale en relación con el propio conocimiento científico: es decir, la propia "historia de la ciencia" ofrece perspectivas de comprensión, algunas de ellas tan básicas que devienen (desde esa aproximación heurística que defendemos) fundamentales para nuestra Tesis. Compartimos así, por ejemplo, la tesis de Santiago Lorente de "que la mejor forma de conocer el sentido y finalidad humana de las nuevas tecnologías arranca del repaso de la reciente historia de la ciencia, y más concretamente desde los locos años 30 del siglo pasado", cuando empiezan y se suceden los grandes avances de la electricidad <sup>(30)</sup>. Es a partir de darse con el 'flujo eléctrico', en efecto, que se persigue su control: logrando retenerlo (condensador), frenarlo (resistencia), almacenarlo (batería), amplificarlo (válvula), bifurcarlo (diodo), calentarlo (lámpara) y producir movimiento (motor); es decir, que se consigue moverlo o transportarlo por distintos canales o 'portadoras' (hilo, magnetismo, onda hertziana o fibra óptica). Pero como Lorente afirma, "Todo lo que ha ocurrido desde la II Guerra Mundial en materia electrónica es fabuloso, pero secundario: la miniaturización, la rapidez, la eficiencia, la reducción de costes. Esto es lo que es el transistor, el circuito integrado, el microprocesador, el láser y la fibra óptica. Lo novedoso (...) no son los avances tecnológicos en electrónica, sino la invasión, en la sociedad, de los artefactos electrónicos" (ibídem). Otro tanto, no en vano, cabe decir de la informática, rama de la ciencia a la que le habría costado más "aprovecharse de la filosofía del control sobre el flujo eléctrico": de la tarjeta perforada (inventada a finales del XIX para resolver problemas de cálculo sobre censos y auténtica precursora

de los actuales soportes: cintas, diskettes, discos ópticos, etc), se llegaría en 1936 a los relés (uso de la electricidad como energía: informática electromecánica) hasta dar por fin, después de la guerra y de la mano de la Cibernética, con la ‘conmutación electrónica’ (bifurcación o conducción de electrones a voluntad, una vez que “el ENIAC aplica el conocimiento ya superado del flujo de electrones no al transporte de la información a grandes distancias -como las telecomunicaciones-, sino al transporte de la misma a pequeñas distancias, esto es, en el interior del propio ordenador”).

Con anterioridad, en todo caso, a la informática (procesamiento de información), el desarrollo de las telecomunicaciones (transporte de información) ya evidenciaba que la electricidad está en la “base tecnológica”. Código y portadora -como el ferrocarril lo era para el transporte de seres humanos- serán los elementos materiales claves en telecomunicación: código eléctrico y portadora eléctrica darán lugar al telégrafo; del telégrafo se pasará al teléfono, al cambiar el código artificial por el natural; de igual modo que del teléfono se pasará a la radio, al transportar por aire en vez de por hilo los mensajes o voces. Si el telégrafo era unidireccional y el teléfono bidireccional, pero ello en la modalidad uno-a-uno, la radio abriría la modalidad uno-a-muchos. Una modalidad que retoma la TV en sus inicios, al avanzarse en la codificación y transporte eléctricos de la imagen, el siguiente paso: como últimamente lo es la modalidad bidireccional uno-a-pocos, la TV por cable. De ahí, en cualquier caso, al incremento de las distancias en la trans-recepción de mensajes (satélites), al mayor dominio de su codificación (digitalización vs. analogización) y al incremento de la capacidad de las portadoras (fibra óptica, redes de banda ancha), no hay más que un paso. Por eso, en tal contexto, puede sostenerse con Lorente que “las nuevas tecnologías de la información son simplemente un peculiar modo (telemático) de hacer cosas con la información”, que “la información -que no la comunicación- sí que es, de verdad, la ‘nueva’ tecnología”..., junto con las ‘altas’ tecnologías derivadas de la química y de la bioingeniería (ibídem).

En ese sentido, además, es que cabe sostener no sólo que toda opción (de racionalidad) científica limita y se ve condicionada por algún tipo de paradigma subyacente, sino también que hablar de “paradigmas” en el terreno científico implica de por sí adoptar una determinada concepción con respecto al desarrollo de toda ciencia... Y en ese sentido y no otro es que la racionalidad implícita al “paradigma de sistemas” -llamémoslo así- se impone como dominante entre nosotros tras la II guerra mundial y desde el ‘mundo científico’ anglosajón.

Dicho paradigma obedecería a una determinada concepción de la “organización de la complejidad” compartida por las distintas perspectivas que confluyen en su origen: la biología molecular, la cibernética y la teoría matemática de la información, básicamente. Siendo las denominadas “nuevas tecnologías”, con arreglo al esquema de acoplamiento del ‘sistema’ cognoscitivo con el ‘sistema’ económico sugerido por Bunge (vid. gráfico anexo), su más inmediata expresión en tanto que investigación aplicada ‘derivada’. A la par que constituye el basamento de racionalidad legitimante de buena parte de las tendencias “modelistas” hoy generalizadas en la investigación científica, la comunicacional incluida.



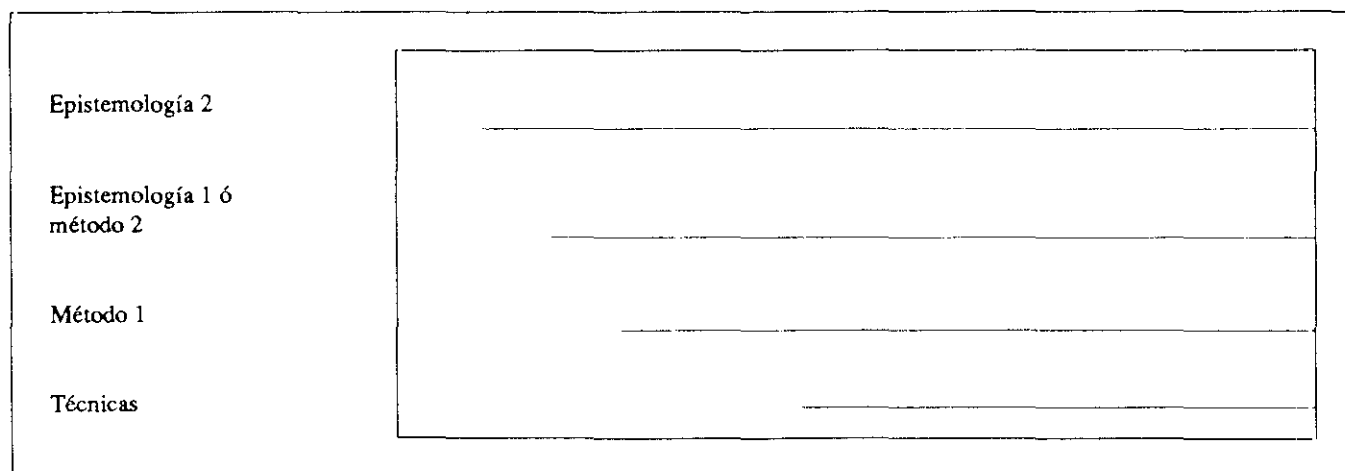
De ahí que importe precisar, de entrada, *qué entendemos por paradigma y por qué: como clarificación pertinente para poder luego establecer qué entendemos por modelo y, finalmente, qué por modelo de comunicación y qué por “modelo de TV” más en concreto* -lo que resultará fundamental para poder entendernos a lo largo de esta Tesis.

### 1.2.1. Del paradigma de sistemas dominante.

*“La complexité est à la base”.*

EDGAR MORIN

No habrá que insistir en las claras resonancias kuhnianas que el concepto de paradigma retiene <sup>(31)</sup>. Pero ya se entienda el cambio científico al modo de Kuhn (Paradigma A--ciencia normal--acumulación de anomalías--periodo de crisis--revolución científica--Paradigma B) o bien se ponga el acento, al respecto, en el proceso acumulativo (Popper) o en los “saltos cualitativos” (Feyerabend), lo cierto es que el concepto de paradigma aparece, ya en Kuhn, de modo no poco ambiguo y difuso. Como señala García Ferrando, Masterman pudo detectar en su día hasta 21 formas diferentes de utilización del concepto, ofreciendo por su cuenta la siguiente clasificación: 1) el paradigma en su sentido metafísico (o metaparadigmático), que representa una concepción del mundo o *weltanschauung*; 2) el paradigma como un conjunto de hábitos científicos, y 3) el paradigma como conjunto de artefactos o construcciones <sup>(32)</sup>... Una clasificación, si bien se repara, no muy distante de la “clarificación” entre Epistemología, Método y Técnicas que sugiriese hace una veintena de años Haroun Jamous <sup>(33)</sup>:



D. Hipotético  
deductivo  
D. Inductivo

Axiomático  
o "punto de  
vista"  
A. Implícita

Elaboración  
de hipótesis  
Leyes

Operacionalización

Recolección  
de datos

Quizá por ello, tal ambigüedad se ha traducido en la práctica discursiva científica de multitud de autores en una auténtica "degeneración en el uso" de tal concepto, lo que obliga aún más si cabe a explicitar qué se va a dar a entender aquí con él:

- Por paradigma, en su sentido lato, vamos a entender aquí lo que Masterman identifica como sentido metafísico o "weltanschauung": o con palabras de Kuhn, "la completa constelación de creencias, valores, técnicas y así sucesivamente, compartidos por los miembros de una comunidad dada". Así, por ejemplo, el que podemos llamar paradigma de sistemas como 'renovada' concepción holista de lo real, al poner su acento en la complejidad y la autoorganización informacional presentes tanto en los mecanismos cerebrales como en la cultura 'de masas', tratando de asentar su dominio en la actualidad y en las distintas disciplinas científicas de la mano de la Teoría General de Sistemas, de la Cibernética, de la Teoría de la Información, etc, y ello tras la quiebra del paradigma conductista.

- *Paradigma en sentido estricto, sin embargo, se identificaría más bien con lo que comúnmente se entiende por "modelo": algo así como la adecuación parcelaria del paradigma dominante para cada producción científica concreta, el cuadro (meta)teórico de referencia adoptado por cada disciplina en un momento dado de la "weltanschauung" imperante. Es importante retener este sentido estricto de "paradigma" porque, en cuanto tales, los denominados modelos comunicacionales "delimitan -por decirlo con Balle y Padiou- los problemas importantes a estudiar, inspiran las necesidades conceptuales de los investigadores, sugieren las observaciones a recoger, y prescriben en fin los métodos y las técnicas a utilizar"* <sup>(34)</sup>. No estará de más recordar, como ejemplo, al paradigma-modelo de Lasswell, así como a los distintos ensayos durante los años 60 y 70 por reorientarlo y/o completarlo desde una perspectiva cada vez más alejada del paradigma behaviorista al que aquél obedecía en su origen.

Calificar al paradigma dominante “de sistemas” no retiene, de otra parte, mayor valor a priori que el de servir al estudioso/lector como mera guía heurística. Tal propuesta conceptual se apoyaría, fundamentalmente, en sugerir a su través la concepción holista que subyace en tal paradigma; y, si acaso cabe, como mínima servidumbre al hecho de haber sido la Teoría General de Sistemas -una de las corrientes coadyuvantes a la solidificación del paradigma- la primera en penetrar, como transdisciplinaria, en distintas ciencias sociales, empezando por la Economía, amén de su pronta instauración en diferentes ‘Ingenierías sociales’ -vía, sobre todo, la denominada Dinámica de Sistemas.

En sus argumentaciones nucleicas, por demás, dicho paradigma debe no poco a la racionalidad analítica que arranca, precisamente, de la reconsideración como relevante de lo simbólico y en especial de la lógica sostenida por la lógica funcional de Nagel, Hempel, Lesnoff-Homans <sup>(35)</sup> y, básicamente, del neopositivismo lógico que irrumpe con el segundo Wittgenstein y con los positivistas “de Viena”, especialmente R. Carnap. La lógica formal inherente, con sus principios discursivos de no contradicción, del tercero excluido, de la coherencia interna, etc, no tardaría en entroncar con las renovadas pretensiones empíricas ligadas a la noción (clave) de isomorfismo, de más hondas raíces. Salvador Pániker entre nosotros, por ejemplo, ya refería en su contribución a la obra colectiva “Epistemología de la Comunicación”, cómo el propio Von Bertalanffy explicó en su momento que “el enfoque de la teoría de sistemas comenzó a vislumbrarse cuando la Psicología de la Gestalt reemplazó la noción de reflejo condicionado por la de comprensión; es decir, cuando incluso en psicología experimental se comenzó a ampliar la explicación meramente causal con la explicación estructural y por totalidades (...) Nació así -subraya Pániker- un nuevo biologismo que tenía claros precedentes en la obra de Claude Bernard (que ya había concebido la noción de ‘medio interno’) y en los trabajos de Cannon (homeostatos, 1929). Se descubrió que era posible aplicar modelos matemáticos similares en diversos dominios del saber. La similitud estructural de estos modelos (el isomorfismo) creaba un nuevo paradigma y un replanteamiento de las nociones de totalidad, teleología, organización, etc, nociones que habían sido eliminadas en el esquema mecanicista de la ciencia del siglo XIX” (ob. cit, p. 176)... Su despegue efectivo como tal ‘nuevo’ paradigma, con carácter generalizado, cabe ligarlo, en cualquier caso, a la obra de Von Bertalanffy, imponiéndose poco a poco en las academias occidentales -se insiste- tras la segunda guerra mundial y desde el Norte anglosajón. Una cierta síntesis -‘aceptada’ desde hace años y todavía aceptable- de las principales contribuciones que ayudaron a tal eclosión paradigmática, es la sugerida por Lee Thayer <sup>(36)</sup>, quien incluye las siguientes entre las disciplinas germinales:

- Teoría de la información: C.E. Shannon y W. Weaver, “The Mathematical Theory of Communication”. Urbana, University of Illinois Press, 1949.
- Cibernética: N. Wiener, “Cybernetics”. New York, John Wiley & Son, 1948.
- Teoría General de Sistemas: L. Von Bertalanffy, “The Theory of Open System in Physics and Biology”. Rev. “Science”, nº 111, 13-01-50, pp. 223 y ss.
- Estudios sobre ‘redes’ de comunicación: A. Bavelas, “A Mathematical Model for Group Structures”. En “Applied Anthropology”, nº 7, 1948, pp. 16-30.

En las proximidades de nuestra visión geoantropológica, quizá siga siendo E. Morin -en la trilogía que arranca de “La Méthode” <sup>(37)</sup>- quien mejor ha sabido ver y expresar la implicaciones derivadas de la Cibernética y de la Teoría de la Información con respecto a nuestro campo de estudio.



Las principales originalidades de la **Cibernética** serían, en tal sentido, 1) concebir la comunicación en términos organizacionales, por cuanto trata de formular la teoría que corresponde a la organización -de naturaleza comunicacional- propia de un nuevo tipo de máquinas artificiales (ordenador personal, robótica, etc). Y 2) ligar comunicación y orden, en el “control informacional”: en este aspecto, el antiguo autómatas habría sido animado por un aparato de relojería (mecánico), mientras que el nuevo (el cibernético) lo sería por un aparato informacional; si el primero estaba ajustado de una vez por todas, el segundo sería regulado en función de las circunstancias.

Ahora bien, si la concepción ontológica subyacente a la Cibernética parece haber superado el reduccionismo que descomponía el todo en sus elementos (la racionalidad cartesiana de que participaría, sin ir más lejos, el esquema de Lasswell), a la par que postulado un “holismo de la complejidad”, todo ello pretendido en base a un trasplante transdisciplinario del modelo de la máquina artificial, no parece desencaminado sostener el *doble vicio metodológico* -con Morin- que cabe subrayar al respecto:

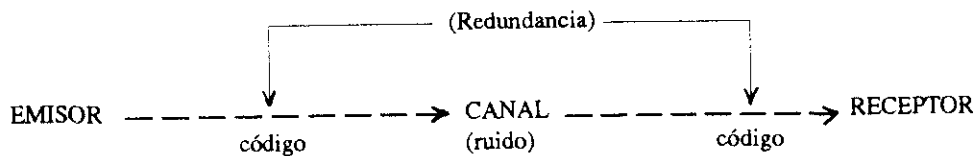
a) pues en lo relativo al concepto mismo de cibernética, ésta habría anudado en una sola idea la de organización fundada en la comunicación y la de organización fundada en el control u orden informacional (“commande”), dando pie a la legitimación posterior del recurso tecnocrático inherente a las más recientes ‘ingenierías sociales’,

b) por cuanto, en su aplicación en la sociedad, ‘la teoría cibernética oculta el problema enmascarado bajo el mandato’: más allá de la ‘vulgata cibernetóide’ que apenas nos habla de quién programa el programa, de quién controla el control, no parece aventurado en exceso significar cómo la cibernética ha llegado a ser una ciencia al servicio del control por la ‘comunicación’ antes que al servicio de la organización comunicacional.

En tales términos, el enfoque wieneriano habría sido condicionado, en la práctica, no sólo por el reduccionismo propio de la ciencia que le antecede sino, también, por la forma tecno-industrial de la organización del trabajo en aquellas sociedades históricas (las más ‘avanzadas’) en que primero trata de desarrollarse. La cibernética aplicada contribuirá como una diisciplina más, dentro del paradigma de sistemas, a superar el enfoque mecanicista predecesor, pero no es menos cierto que aportará su apoyo a la subordinación de la comunicación al control, de la organización de lo social por la comunicación “para la servidumbre”, que no elude dicho paradigma.

En cuanto a la información como remozado concepto físico-matemático, como “el más vicioso de los camaleones conceptuales” (Von Foerster), no son pocos quienes todavía piensan -en Facultades como la nuestra- que la “**Teoría Matemática de la Comunicación**”, publicada por Shannon y Weaver un año más tarde (1949) de que Lasswell hiciese lo propio con su conocido apotegma, se limita a una simple *traducción ampliada* por aquéllos de lo sugerido por éste. Lo que no deja de ser, por lo que se sabe, sino una muestra más de las pretensiones fagocitarias de cualquier disciplina sobre el resto... Pues si es cierto que las reflexiones de Lasswell vienen también de los años 20 (primera posguerra mundial y auge de la radio) con marcado interés por la comunicación/propaganda política, no es menos cierto que el matemático Shannon partirá de los trabajos de Hartley (de 1928) para concebir la información como señal binaria (bit), es decir, como magnitud observable y medible, adelantando sus observaciones en dos artículos publicados en 1947 y 1948, precisamente en el “Bell System Technical Journal”. Shannon y el lingüista Weaver parten, como Lasswell, del esquema germinal aristotélico sobre la emisión-recepción de mensajes, pero en su

teoría se destaca el importante papel de la tecnología (del canal) en la circulación:



Para Shannon y Weaver, por tanto, un emisor transmite un mensaje a un receptor a través de un canal dado. Emisor y receptor tienen, por hipótesis, un repertorio común (código que contiene las categorías de señales utilizables). El mensaje codificado es transmitido, del emisor al receptor, a través del canal, bajo forma de signos o señales que pueden descomponerse en unidades de información llamadas bits (binary digits)... No sólo tenemos en germen, así, la “digitalización” imparable acometida por las industrias de telecomunicación, sino la conexión teórica de realidades (información pública y telecomunicación) cada vez menos indisociables de ‘la realidad’ que cada vez más nos importa (la Televisión se consolida en los países avanzados, no se olvide, en los años 40 y 50). Ahora bien, desde la perspectiva en que se desarrolla nuestro discurso, las aportaciones derivadas tampoco son unívocas. Así, está aceptado que la principal aportación transdisciplinaria de tal concepción radica en los conceptos de redundancia y ruido -y no estará de más retener que lo que la Bell buscaba era sobre todo cómo transmitir de manera a la vez más económica y ‘más fiable’. Pero en el capítulo de lo negativo, las influencias del esquema “informacional” quizá hayan sobrepasado incluso a lo temido por Shannon y Weaver.

La unidireccionalidad del esquema, en efecto, parece haberse trasplantado sin reparar en los supuestos que ellos mismos establecieron: pensemos si no, por ejemplo, en su hipótesis (explícita) acerca del “repertorio común” entre emisor y receptor. No en vano, intentaban formular una teoría “matemática” para optimizar la transmisión de un mensaje informacional. Como ha resaltado Vidal Beneyto, “el dato absolutamente capital (de tal esquema) es el de la equivalencia funcional de todas las situaciones de comunicación que son válidas en sí mismas y en cuanto a su aplicación, es decir, en cuanto a la entidad constitutiva del modelo al que se refieren, tanto a las máquinas, como a la biología y a la comunicación humana” <sup>(38)</sup>. Que el entendimiento del esquema de transmisión se

generalizase, en este último ámbito, desde concepciones cercanas al conductismo mecanicista por entonces asentado es, por lo mismo, quizá disculpable. Pero no lo es, de acuerdo con Morin, su más grave deficiencia implícita: “la *théorie shannoienne de l’information* occulte le méta-système anthropo-social qu’elle suppose et dans lequel elle prend son sens” (ob. cit., p. 304). Es decir, la conocida crítica sociológica a la noción de *bit* como “unidad sin sentido”, esto es, en tanto concibe el significado como descontextualizado y en tanto que subsume las condiciones de emisión/recepción a las meramente de circulación técnica. Algo que, si bien entendible bajo supuestos de matematización de la información (para su circulación), está absolutamente alejado de un entendimiento neutral en su eventual aplicación a la comunicación humana (pues todo mensaje, se canalice mejor o peor, es indisoluble en su sentido de las condiciones sociales de emisión y recepción, etc). No pareciendo casual en nuestro ámbito académico próximo, por ejemplo, que un pionero del análisis de contenido como Berelson, pese a superar el “primer escalón” inherente a la teoría hipodérmica sobre la comunicación social, postulase como exigencias de tal análisis -en 1952, significativamente- las conocidas reglas de 1) ser objetivo, 2) ser sistemático, 3) limitarse al contenido manifiesto y 4) cuantificar. No desconociéndose el no poco tiempo que ha llevado desenmascarar el corsé -e irrelevancia, casi- con que tales reglas han sometido a multitud de investigaciones de ese tipo, al menos hasta Ch. Osgood, V. Morin o A. Moles...

En el otro gran polo de la nueva propuesta paradigmática encontramos, como venimos diciendo, la ‘filosofía natural’ que arranca de Ludwig Von Bertalanffy y su **Teoría General de Sistemas**, que en principio se presenta como un intento por “humanizar la ciencia”, a la que concibe, en contra de “esa filosofía positivista, tecnológica, conductista y comercial que menoscaba al hombre, lo deja convertido en un autómatas y lo maneja como a un monigote”, como “algo más que la acumulación de datos y la explotación tecnológica de los conocimientos en beneficio de la minoría rectora”<sup>(39)</sup>.

Pero dejando aparte las intenciones, el *organicismo activo* que preconiza -en contraposición al reactivo o automático que caracterizaría al paradigma behaviorista-, propondría, en base al “isomorfismo nómico” (Hempel) u “homología lógica” (Von Bertalanffy) -hay fenómenos de contenido distinto, se afirma, que muestran isomorfismo en su estructura formal-, la superación del interés científico por la ‘complejidad desorganizada’, esto es, el interés por los fenómenos estadísticos consecuencia de eventos casuales, mediante la reivindicación ahora de la ‘complejidad organizada’ como relevante: si la termodinámica sería ejemplificadora de la primera postura, la moderna biología molecular vendría a ser el modelo de la segunda. En otras palabras, se vendría a cuestionar la causalidad rectilínea todavía dominante y propia a la investigación física menos inmediata (pues la teoría de las matrices-S habría cambiado ya el énfasis de objetos a sucesos, al igual que la hipótesis ‘boot-strap’ de Geoffrey Chew preconiza la autoconsistencia mutua en los fenómenos del universo, etc), viniendo a coincidir, por vía positiva, con la *lógica multivariable* postulada por la “segunda cibernética” (Von Foerster, Gunther, Maruyama). Para Bertalanffy, en efecto, entre las características de los sistemas así concebidos encontraríamos “...interacciones multivariables, conservación del todo en la acción recíproca de las partes componentes, organización a muchos niveles que da como resultado sistemas de orden superior, diferenciación, centralización, mecanización progresiva, causalidad directora y actuadora, regulación, evolución hacia una organización superior, teleología y orientación hacia el objetivo de varias maneras y por diversos procedimientos, etc” (ob. cit., p. 96).

Se trataría en los estudios “sistémicos”, en suma, de intentar aprehender racionalmente problemas de interacción multivariable, de organización, regulación, elección de metas, etc. La visión bioquímica que los basamenta (el modelo Watson-Crick del DNA, el código genético y la homeostasis según Monod, el orden de los procesos de síntesis de las proteínas), estaría en consonancia con la redefinición de la biología organicista (Dobzhansky, Kanaev, Dubos) pero también con el ‘microcosmos del desorden’ en la sociología (desde Sorokin) y las complejidades de la tecnología y del comercio tratadas por Ackoff, Hall, Boguslaw... Y ni que decir tiene que así concebida, la investigación sistémica se jacta y se obliga en la necesidad de una nueva visión (de racionalidad analítica) que, en su teoría y en su aplicación, se plantea como netamente interdisciplinaria.

De ahí su conexión con la Cibernética o con la Teoría Matemática de la Información. Si bien ha sido desde esta perspectiva, precisamente, que se ha criticado a la cibernética en su intento por trasladar su ‘modélica’ a las ciencias sociales. El propio E. Morin viene a decir que le falta a la cibernética “un principe de complexité qui lui permette d’inclure l’idée du desordre”, por lo que sería incapaz de concebir la reorganización permanente, el antagonismo, el conflicto. En lo que Morin se basaría, interesado como está en mantener el mensaje capital de la cibernética (la organización comunicacional), para establecer unos supuestos conducentes a lo que él llama “Sibernética” (con ‘s’ de social) y que sería algo así como la superación de aquella en base a un doble giro, físico y sociológico. Tales supuestos serían:

- la noción ‘básica’ de complejidad física: el principio y el pleno empleo de la idea de desorden, no sólo como fenómeno desorganizativo sino también como fenómeno organizativo.
- el desarrollo de la idea de “bucle retroactivo” como principio de organización recursiva.
- el trastocamiento genérico del concepto de máquina.
- y la complejificación originaria de la relación control u orden/comunicación, o lo que es igual, la intelección del complejo de relaciones:
  - \* control (“commande”)/comunicación
  - \* servidumbre/emancipación
  - \* aparato/organización/medio ambiente (entorno/contexto)

Si es evidente la deuda contraída por Morin, en los dos primeros supuestos, con la revisión inherente a la 2ª Cibernética, sería en los dos últimos donde cabría rastrear el acento sociológico de su redefinición “sibernética”.

El mismo Von Bertalanffy, sin embargo, habría atacado al modelo cibernético como “todavía conductista”, por cuanto habría transformado el esquema E-R en E-O-R, esto es, habría añadido el circuito de realimentación para hacer autorregulador el esquema. La crítica es importante porque, como es sabido, es precisamente el concepto de retroalimentación (feed-back) el que ha calado más hondo en los distintos modelos comunicacionales contruidos a instancias del cibernético, y ello más pensando en términos de la *vulgata cibernetoides* al uso que denunciase Morin que en la revisión formulada al respecto por la 2ª Cibernética, mucho más cercana a admitir la crítica de Bertalanffy:

“(En términos epistemológicos) aunque el prototipo de procesos físicos no dirigidos es la causalidad lineal (la causa A es seguida por el efecto B), el modelo cibernético trae consigo la causalidad circular con el circuito de realimentación y es esto lo que determina la autorregulación,

previsión del blanco, homeostasis, etc, del sistema. En contraste, el modelo del sistema más general es el de la interacción dinámica entre muchas variantes” (ob. cit., p. 93).

No en vano, la metodología ‘sistémica’ de más clara y honda penetración en la práctica científica es la denominada -en relación con lo anterior- Dinámica de Sistemas. Su despegue se suele ligar al trabajo desarrollado, al final de la década de los cincuenta, bajo la dirección de Jay W. Forrester en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Originalmente como “Dinámica Industrial”, su campo de aplicaciones se limitará al establecimiento de modelos de empresas... Posteriormente, y mediada la década de los sesenta, Forrester y colaboradores proponen un modelo de “Dinámica Urbana”, ampliando con ello el campo de aplicaciones del útil metodológico en desarrollo. Que a finales de los mismos sesenta recibe un nuevo empuje, al construirse según sus pautas el ‘modelo del mundo’ (el ya famoso modelo “World-2”, relacionando el desarrollo del planeta con el nivel de población, la contaminación ambiental, los recursos naturales y la inversión de capital) que sirvió de base para el primer Informe al Club de Roma. Es desde ese momento que se generalizó la denominación de “Dinámica de Sistemas”.

Que la metodología habitual, en Dinámica de Sistemas, se religa con el paradigma de sistemas como un todo lo hizo ver con claridad Javier Aracil, en 1977 y desde la Presidencia del Gobierno español, al señalar que confluyen en ella:

- “ - Un punto de vista holístico (en virtud del cual se insertaría en tal paradigma).
- una motivación de tipo práctico y aplicado, por la que se trata de establecer modelos que sinteticen la opinión de expertos.
- el empleo de un lenguaje matemático, con una cierta adopción de conceptos nacidos en torno a la Cibernética y ciencias afines, y enormemente potenciado por un empleo exhaustivo del computador”<sup>(40)</sup>.

Baste lo dicho en nuestro propósito de sugerir en qué marco científico (ingeniería industrial, planificación urbana, economía de la empresa, planificación política, etc) y dentro de qué ámbito tecnológico (M.I.T.) y económico-político (creciente transnacionalización de la economía mundial, cerca de nosotros: transición democrática española, etc) surge y se desarrolla la metodología más aplicada, por ahora, del paradigma de sistemas.

En todo caso, las corrientes *sistémicas* vendrían a sustituir al vilipendiado conductismo (y no sólo en psicología, claro es), tratando de postular la utilidad de los ‘modelos operativos’ derivados en tanto que marcos conceptuales de inexcusable interés heurístico. Y ello por cuanto se proclama una realidad compleja de funciones multivariantes, denostando así el prototipo de causalidad lineal o de dirección única de la ‘antigua ciencia’, que utilizaría modelos de dos variables -como ya dijo Wiener. La fecundación inter y transdisciplinar propuesta, que vería en la comunicación la nueva piedra filosofal, trataría de encumbrarse dentro de la racionalidad que hemos denominado “analítica”; y reclamaría como base justificante tal redefinición paradigmática, entendiendo una ‘realidad’ en la que lo importante sería ahora su consideración no como incertidumbre sino como complejidad organizada. Pero, sin necesidad de volver a la disputa metaconceptual entre “sistema” (analítico) y “totalidad” (dialéctica), términos en los que ya recaló la polémica entre popperianos y franckfurtianos de 1970, la propia ‘complejidad epistemológica’ de este nuevo acento analítico en lo holístico nos sugiere, al menos, dos cuestiones inmediatas:

- Si las innovaciones prácticas de las corrientes sistémicas, como el mismo Bertalanffy acaba por reconocer, “están relacionadas con la electrónica, la ciencia de los ordenadores electrónicos, la investigación en el terreno de armamentos, etc” (ob. cit., p. 29), que no son sino el cénit de la mitología ‘desarrollista’ que ciertas concepciones del mundo patrocinan y que, se quiera o no, hacen cada vez más difícil sostener la independencia de la razón “instrumental” respecto del poder (político, económico) que la posibilita y condiciona, ¿no contradice, en última instancia, la repulsa que se dice sostener contra el modelo del hombre autómatas? ¿No subyacerá una ilusión ‘reformista’, en su sentido tecnocrático, en cuantas aplicaciones ‘sociales’ se derivan de la Dinámica de Sistemas? En definitiva, la racionalidad presuntamente sintética que se postula, ¿no haría más hincapié, al cabo, en la organización que en la complejidad, porque se seguiría pensando y participando de la racionalidad (analítica) como ‘logos tecnocrático’?

- Y segunda cuestión: si el ‘encuentro’ interdisciplinar que se propone, al reivindicar la posible explicación de fenómenos de contenido indistinto, se ve obligado a justificarse recurriendo al ‘espejo’ de las ciencias ‘exactas’ y tomar prestado un concepto al que acudir permanentemente: el de isomorfismo, ¿no acabaría la misma racionalidad (analítica) mordiéndose la cola al convertirse en una metaciencia buceadora de ‘leyes organizadoras’, todavía adscritas -no liberadas- a una lógica de estructuración meramente formal y estrictamente “para sí”?

Es preciso insistir, así, en que *la racionalidad presuntamente sintética que preconiza el paradigma de sistemas antes atenderá los problemas de organización que no los de complejidad*. La consciencia holista que se querría rescatar desde la racionalidad analítica remozada, en definitiva, devendría deudora de la lógica de origen: la nueva biología. Y es preciso recordarlo porque en ella, paradójicamente, la pretensión de globalidad termina por ser reducción más que frecuente, por el olvido que se perpetra de lo diferente y el mayor interés contrapuesto mostrado por lo idéntico, por lo analógico. Siendo así que al bucear entre las diversas esferas del saber hipotéticos isomorfismos (similitudes estructurales, dirían otros), terminaría por olvidar con excesiva frecuencia que todo modelo (sea o no de TV), en cuanto marco formal con ‘referencia’ a los ‘objetos dinámicos’ que se pretende aprehender, viene mediatizado precisamente por lo heurístico de su conceptualización. En su incapacidad de reconocer tal limitación y esclavas a la postre de la antañona mitología de “lo real es racional”, las renovadas pretensiones de la racionalidad analítica no podrían eludir la objetividad positivista (no cuestionadora) que finalmente perseguirían allí donde se presenta como más enmascarada: en los desarrollos teóricos que conforman múltiples manifestaciones científicas reclamando para *la ciencia* estatuto de verdad universal y atemporal y, por ello, legitimantes, lejos de toda divergencia aparente, de unas prácticas (históricas e institucionales) ni tan *objetivas* ni tan *unitariamente* superadoras del conflicto social (latente o manifiesto).

No es cuestión menor, por tanto, la crítica de toda recurrencia -explícita o implícita- al principio de lo idéntico, de lo analógico, de lo isomórfico. Y es en ese sentido que seguimos reivindicando (con Derrida, Foucault, Maffesoli o Deleuze) el principio de la **diferencia**. Y no sólo -entiéndase bien- porque ‘venga al pelo’ en la Tesis que sobre TV se pretende defender.

Importa repetir, a su vez, que ciertas aportaciones comunicacionales -aunque no con exclusividad- acopian una nueva luz con que afrontar dicha “frontera epistemológica”. Así por ejemplo las aportaciones que arrancan de A. Sercovich, director en Nueva Visión de la colección

“Semiótica y Epistemología”, quien desde finales de los 70 ya criticaba el concepto de ‘analogía’ desde una perspectiva de psicosemiótica de la iconicidad. Repárese, si no, en la vigencia que sus reflexiones sobre el concepto de diferencia retienen (aun remontándose a 1974) desde esa perspectiva heurística por que apostamos:

“Desde los ‘simulacra’ en Lucrecio, las ‘imágenes’ en Cicerón o las teorías de la imitación en Platón y Aristóteles -decía Sercovich-, hasta las actuales problemáticas de ‘lo mismo y lo otro’ en Michel Foucault o de la ‘Diferencia y repetición’ en Gilles Deleuze nos reencontramos, tanto desde el horizonte materialista como desde el idealista, con diferentes versiones de un discurso que atraviesa toda la historia del pensamiento filosófico occidental(...) Pero más concretamente el positivismo, por su enraizamiento en condiciones históricas suficientemente conocidas, funda su pensamiento en la analogía: el punto de partida de la ‘inducción’ como método científico lo constituye la ‘repetición’ o ‘frecuencia’ de los hechos observables. Karl Popper critica, desde la contracara deductivista del inductivismo metodológico, este hecho (...) (De ahí que por contra) al semiólogo no debe interesarle cómo un discurso describe la ‘realidad’, sino cómo la genera”. De ahí que quepa sostenerse, con él, que “la distinción entre lo ideológico y lo científico es, en realidad, efecto de un prejuicio (y el conocimiento no se opone a la ignorancia sino al error: Bachelard) epistemológico”...<sup>(41)</sup>

Contra los “unitarios” de todo tipo y su terrorismo de la coherencia, mantenemos la necesidad de salir del gueto de lo fragmentario, de lo parcelario; y acusar que, ante la movilidad constante de lo real, cierto ‘rigor’ del discurso que no tenga en cuenta los límites puede convertirse fácilmente en censura interiorizada de antemano. Como no menos cierto sería que todo rastreo de la ideología discursiva puede llegar a convertirse en pura “ideología del discurso”, dando a entender con ello que el investigador sólo podría sugerir tendencias, aproximar lo real desconocido o no re-conocido, pero nunca dejarse llevar por la deformación -por la especialización ‘impuesta’- de totalizar ‘su’ conocimiento parcelario. Reconocimiento preciso, en cualquier caso, para no caer dentro del baúl de los “ideologofrénicos”... Baúl al que, por unos u otros motivos, han terminado por ir a parar - como si de espejos rotos por una u otra esquina se trataran- la gran mayoría de los “modelos comunicacionales” (en lo metateórico) que se conocen.

### 1.2.2. De la tentación “modelista” en CC. de la Información.

*(Groucho y Harpo Marx):*

“ - ¿Qué realidad?

- La que cabe en los límites de un espejo.”

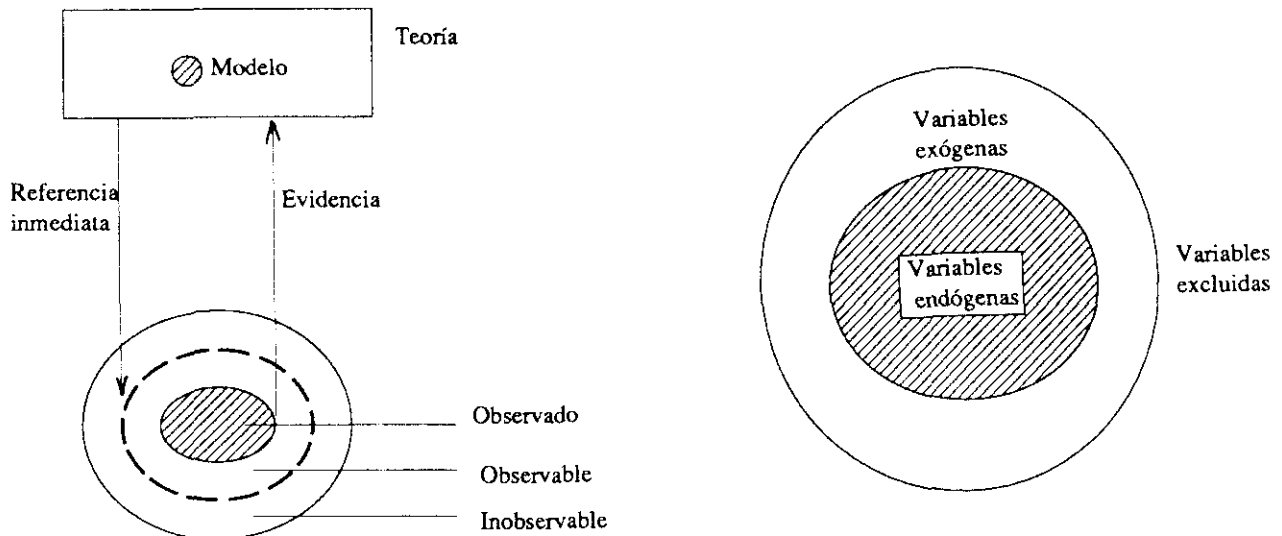
M. VAZQUEZ MONTALBAN

De entrada, lo primero que se impone -y que perseguimos explícitamente- es tomar parte en el maremagnum conceptual con que topamos cuando de modelos hablamos, a fin de clarificar - también aquí- qué no y qué sí cabe entender por tales.

Más allá de pretender justificar de antemano una posible crítica del *modelismo ontológico* que campea por doquier, nos contentaremos por ahora con acusar recibo de lo que bien podemos denominar ‘interpretación dominante’ al respecto. La propia cita de Vázquez Montalbán sugiere la oportunidad -en ese sentido- de dejar hablar antes a los gráficos que a las solas palabras. De ahí la propuesta heurística que sugiero, al invitar a contemplar los gráficos ‘explicativos’ ad hoc que siguen:

(Mario Bunge, 1972, 208)

(Javier Aracil, 1977, 36)



Concepciones como las de Mario Bunge, de una parte, al distinguir entre objeto modelo y modelo teórico, apuntarían a una consideración de la noción de modelo como formalización explicativa -acorde con una teoría en la que se enmarca y de la que cobra su sentido- de un determinado objeto o ‘realidad’, de la cual intentaría quintaesenciar sus principales características. Para así, partiendo de la teoría, poder inferir preguntas en torno a la complejidad inobservable de tal ‘realidad’ u objeto, y sugerir respuestas *en consecuencia* coherentes. En cuanto que obedientes a una epistemología ‘externa’ (por su relación con lo real concreto), tanto daría su mayor o menor formalización, su mayor o menor teorización: por su contexto epistemológico más cercano (la propia teoría) tendencialmente devendrían “modelos descriptivos”, ya críticos y/o instrumentos finalistas de poder.

Desde la perspectiva de Aracil, de otra parte, los modelos -según una concepción más apegada al paradigma de sistemas- constituirían una representación abstracta de un sistema. Y como tales se compondrían de : a) un conjunto de definiciones que permitan identificar los elementos que constituyen ‘el sistema’, y b) un conjunto de relaciones que especifiquen las interacciones entre los elementos constituyentes del modelo. Se habla aquí de variables endógenas o exógenas, según que sus efectos vengan determinados por la propia estructura del sistema o sean susceptibles de ser modificados, por contra, desde el exterior. Se hablará también de sistemas abiertos o cerrados, según que permanezcan abiertos o no con respecto al entorno. Pero en tanto que obedientes a una epistemología ‘interna’ (como saber ligado a un Objeto autoreferencial, en tanto que construcciones dotadas de ‘lógica interna’) tendencialmente devendrán “modelos teóricos” por sí mismos, terminando por no reducirse a un esquema o gráfico y sí por equipararse a un instrumental formal que incluso terminaría por ayudar a ‘establecer los hechos’.



Pues bien. Nosotros aquí no vamos a retener ni una ni otra concepción, por más habituales que sean en las distintas disciplinas (politología, economía, etc) que se concitan en nuestro objeto de estudio. Entre otras cosas porque, también de modo habitual, para ambas -de acuerdo con Alain Badiou<sup>(42)</sup>- “la ciencia no es un proceso de transformación práctica de lo real, sino la fabricación de una imagen plausible” -en contra de lo cual estamos, en coherencia con lo que venimos manteniendo. Es decir, *a nosotros nos interesa operativizar la noción de modelo en cuanto que sea ‘metateórico’ (así metapráctico, por lo que a la investigación concierne) y no tanto ‘subteórico’ (descriptivista) o ‘teórico en sí’ (tecnocrático)*. En otras palabras, nos interesa operativizar el concepto de modelo en función, sobre todo, de su utilidad (desutilidad) heurística para acotar el propio campo de análisis que se desprende de su formalización/conceptualización. En definitiva, nosotros volvemos deliberadamente a nuestra concepción de **modelo** como “paradigma en sentido estricto” de que hablamos con anterioridad.

Con ello no quiero sino expresar mi postura en contra de toda praxeología investigadora autoveritativa, con su correlato de toda “modelización” presuntamente incuestionable (así la dada en relación con la TV pública en España) por el mero hecho de estar ‘establecida’. En cuanto a lo primero -que es por ahora lo que importa adelantar-, el peligro de las tendencias modelistas en ciencias sociales se evidencia cuando el modelo pasa de ser meramente heurístico a convertirse en categoría y/o marco conceptual ‘directriz’. O dicho de nuevo con Badiou: “si el modelo representa la verdad del trabajo científico, entonces la verdad del trabajo científico nunca es otra cosa que la del mejor modelo. De este modo queda restaurada la dominación del empirismo: la actividad teórica no puede elegir entre modelos necesariamente múltiples, precisamente porque es la actividad fabricante de modelos, esto es, la mejor aproximación a él mismo” (ob. cit, p. 20). De igual modo que, en cuanto a lo segundo, sólo un entendimiento restringido a lo político (y no abierto a cualquier otra consideración prioritaria: ya económica, tecnológica o cultural), y ello en tanto que ‘establecido como está establecido’ (y no de ninguna otra manera), permite atisbar el inusual condicionamiento a la resolución jurídico-política del Estatuto-modelo (el de RTVE) para poder sostener eventuales alternativas tanto para TVE como para otras TV públicas, como Canal 9-TVV por ejemplo (“remodelación” no menos factible, a priori, incluso desde las mismas prioridades en lo político establecidas), de manera que nadie se atreve a cambiar de juego (progubernamentalismo, comercialización, centralismo a diversas escalas, etc) porque las propias reglas del juego se presentan como las mejores para quienes tienen posibilidad (efectiva) de cambiarlas.

Si de *modelos comunicacionales* hablamos, ni que decir tiene, la otra gran cuestión previa es definir qué pueda entenderse de modo plausible por comunicación. O mejor, para no ser tan pretenciosos: aproximarnos heurísticamente a la ‘realidad’ a que mediante tal definición se quiere aludir... Sea para nosotros, en su ‘pluralidad objetual’, esa especie de ‘proceso natural universal’ que alcanza su máxima complejidad en el ser humano viviendo en sociedad; sea el conjunto de prácticas/ artes y/o técnicas/tecnologías que se aplican a la producción, transmisión y recepción de mensajes; sean aquellos ‘sistemas’ institucionales dedicados a la producción/emisión de comunicación (industrias culturales, públicas o privadas) o que facilitan la circulación de los anteriores ‘productos’ (redes de comunicación, mercados de distribución, agencias, etc)... Sin necesidad de ahondar en ello, aquí y ahora, sí importa recordar en cualquier caso que los conceptos de comunicación e información no son ni con mucho idénticos, aun cuando su polivalencia sea tan característica de uno como de otro concepto y pueda, por lo mismo, contribuir todavía a ciertas identificaciones entre ambos (no

siempre desinteresadas) <sup>(43)</sup>.

Pues bien. Desde la concepción como 'paradigma en sentido estricto' de lo que sea o deje de ser un modelo, y en particular por lo que hace a la comunicación 'puesta en sociedad' por las industrias culturales (pues nuestra reflexión sobre RTVV a ello apunta antes que nada), pocos modelos han proyectado su sombra entre los investigadores en comunicación como lo ha hecho -y todavía colea su influencia- el que Harold D. Lasswell publicase en Harper and Row, dentro del volumen colectivo "The Communication of Ideas", en 1948. Lo que, *más allá de las repetidas críticas a sus peores implicaciones (linealidad, mecanicismo E-R, descontextualización, etc)*, tiene al menos la virtud de recordarnos las tremendas implicaciones políticas -tal es el campo de interés de que arranca Lasswell- de la información mass-mediática: siendo su propia supervivencia como paradigma de análisis uno de los síntomas más preclaros de las funciones de legitimación que tanto la teoría como la práctica sobre tal tipo de información comparten en el capitalismo avanzado. No estarán de más, por tal motivo (y más hoy, en que tanto se preconiza la 'despolitización' de las TV públicas), unas cuantas reflexiones en torno a dicho paradigma y sus más singulares implicaciones en el tiempo.

Se sabe, al respecto, cómo Lasswell retomó en su modelo las fórmulas precedentes de Aristóteles y Quintiliano <sup>(44)</sup>, que tratara de llevar con anterioridad a su campo de interés originario: la ciencia política, pues como Bühler advirtiese en 1974 "Esta formulación lapidaria no debe extrañar. Las primeras investigaciones de Lasswell se remontan a los años 20; sus gustos y las necesidades de los estudios sobre la propaganda durante la guerra le llevaron al análisis de la comunicación política" <sup>(45)</sup>. Lasswell, en efecto, publicaría en este campo libros que le harían famoso ("World Revolutionary Propaganda", "The Language of Politics") e incluso puede decirse que el antecedente más cercano de su modelo se encuentra en uno de sus libros sobre ciencia política ("Politics: who gets, what, when, how?", McGraw Hill, New York, 1936).

Pero bien, lo pretendiese o no tal autor, lo cierto es que su paradigma (sentido estricto) devino esclavo del paradigma (sentido lato) behaviorista, imperante por esos años en el marco de producción científica USA en que originariamente se desarrolla. Y ello, en gran medida, por el patrocinio 'institucional' de la investigación en comunicación *de masas* dirigida al cambio de actitudes. El modelo de Lasswell, así, acabaría por legitimar el interés de los especialistas en las campañas publicitarias o electorales, cuando se buscaban relaciones directas -de causa a efecto- a corto plazo, entre tales mensajes concretos (propagandísticos de lo establecido, política y económicamente) y los efectos subsiguientes, que se imaginaban inmediatos, razón por la cual el modelo terminaría por reconocerse entre los investigadores como "hypodermic needle model" (Balle-Padioleau).

Sin necesidad de recordar las críticas al modelo, tanto desde la propia racionalidad analítica subyacente (ya con Katz y Lazarsfeld, al cuestionar una concepción tan estrechamente conductista de 'efecto', hasta culminar en la ruptura de McLuhan) cuanto desde posturas más cercanas a la racionalidad dialéctica (así Morin ya en 1962 desde "L'esprit du temps", y más claramente en "Nouveaux courants dans l'étude des communications de masse", de 1970, junto a tantos otros más tarde), lo que aquí interesa remarcar es la persistencia de su 'fantasma' -pese a todo- y el condicionamiento fundamental que ejerce tanto a la hora de delimitar los *campos de investigación*

asentados en comunicación 'social' -todavía hoy- cuanto, más en concreto, la noción de modelo 'dominante' al respecto, hasta hace no tanto.

En "The Structure and Function of Communication in Society", en efecto, Lasswell parte de una descomposición analítica en sus partes del *acto* de comunicación, proponiendo la famosa cuestión-programa de "las cinco W" que, por su gran sencillez operativa así como por el carácter de 'evidencia' con que se presentó, ha condicionado (y todavía condiciona dentro de la racionalidad analítica) buena parte de los estudios sobre comunicación social:

<u>(PARADIGMA DE LASSWELL)</u>		<u>(CAMPOS DE INVESTIGACION)</u>
Who	Quién	Análisis de control
says What	dice Qué	" " contenido
in Which Channel	por Qué Canal	" " medios
to Whom	a Quién	" " audiencias
with What Effect?	con Qué Efecto	" " efectos

No sería difícil sugerir, precisamente a partir de ahí, una cierta clasificación de los modelos (en el sentido 'subteórico' o 'teórico en sí') que resultan más conocidos entre quienes estudian e investigan un Objeto (la comunicación) de tan amplias dimensiones en su significado. Valga de guía heurística en ese sentido la siguiente propuesta, a partir de la formulada por Bordenave y Carvalho (al tiempo historicista, sobre el progresivo enriquecimiento del concepto nuclear, y revelador de las distintas disciplinas que confluyen en su estudio):

1. Modelos físicos: Shannon-Weaver, Westley-McLean, etc.
2. Modelos psicológicos: Osgood, Hovland, Berlo, etc.
3. Modelos sociológicos: esposos Riley, Schramm, etc.
4. Modelos antropológicos: Levi Strauss, Edward T. Hall.
5. Modelos socio-psicológicos: Ruesch-Bateson, interaccionismo simbólico (Durkheim/Simmel, Cooley/Dewey/Mead, Pasquali)
6. Modelos semióticos: Ogden-Richards, Watzlawick, Vigier, etc.<sup>(46)</sup>

Lo sorprendente por ello, por su trascendencia *metateórica* (que no tanto *en sí*, ya desacreditada) es, y ello de acuerdo con Vidal Beneyto, "que no se haya insistido en que este paradigma fundamental está estrictamente situado en la opción ideológica, o teórica, de la ciencia del siglo XIX; a saber, que toda situación compleja puede y debe reconducirse teórica y metodológicamente a una estructura simple y que, por lo tanto, de lo que se trata es de reducir la complejidad del eventual proceso comunicativo a un esquema lineal y simple (...), en la que ni siquiera lo que llamamos microsocioal actúa si no es a través de la interindividualidad de una o de varias relaciones específicas" <sup>(47)</sup>. Ciertamente -por volver a la clasificación heurística de Bordenave y Carvalho-, si los

modelos psicológicos ‘humanizaron’ el mecanicismo inherente a los modelos físicos, no lograron superarlo, como tampoco lo harían los sociológicos. La inescapable tentación ‘matematizante’ del modelo de Shannon-Weaver y su similitud ‘de presentación’ con el esquema de Lasswell pudo, no menos ciertamente, contribuir a su supervivencia...

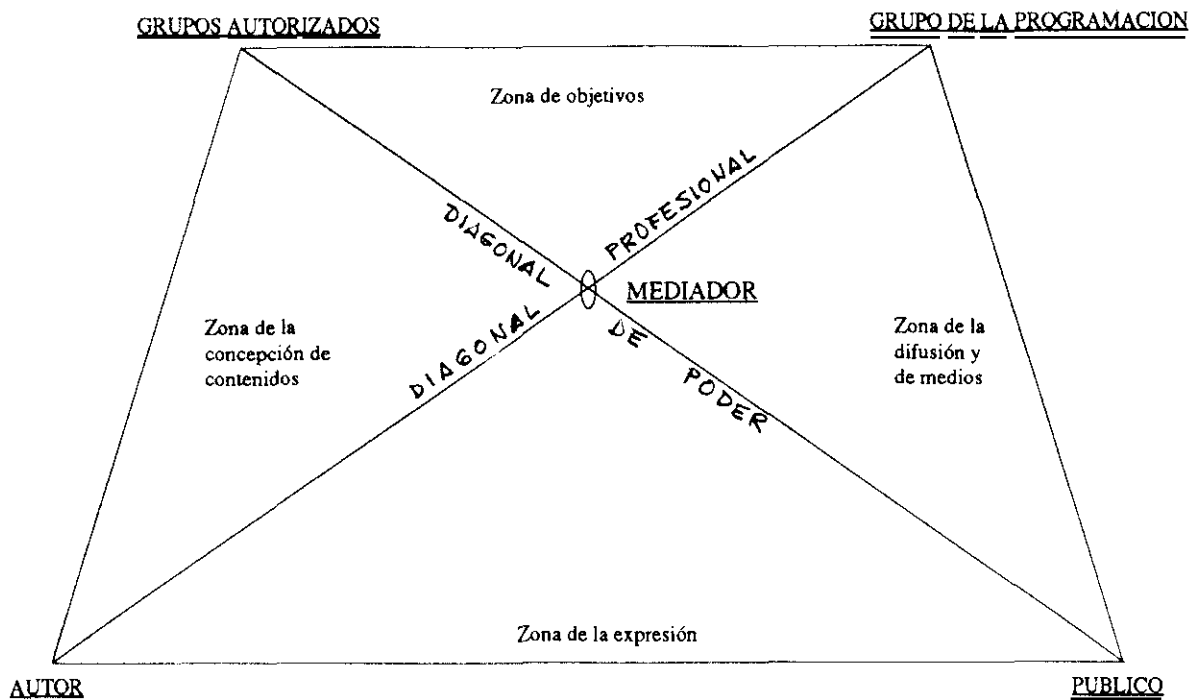
Hasta la aportación de Levi Strauss, en todo caso, no pudo neutralizarse tal carácter mecanicista. Y sólo hasta Simmel/Mead/Pasquali y la Escuela de Palo Alto (Watzlawick, Beavin, Jackson) no fue ‘evidente’, para la racionalidad analítica subyacente a tales modelos, algo ya reivindicado con anterioridad por la racionalidad dialéctica (Verón, Mattelart, Schiller, etc) y establecido desde entonces (finales de los años 60) como lo fundamental: la comunicación no es sólo algo íntimamente ligado al comportamiento psicológico de cada hombre, ni tan siquiera la matriz de su personalidad, sino también la llave maestra de la interacción social, donde se gesta la urdimbre cultural diferencial de cada ‘pueblo’ y uno de los ‘vehículos’ más poderosos para legitimar el mantenimiento o el cambio de cada formación social concreta...

Claro que, para entonces, la propia racionalidad analítica se había ‘rearmado’ de la mano de la intuición de McLuhan quien, con la tesis *metaparadigmática* de ‘el medio es el mensaje’, cuestionaba la causalidad lineal del ‘mensaje/influencia’ lasswelliano al paso que, señalando la interdependencia mensaje/medio, ponía sobre el tapete la necesidad de contextualizar su esquema <sup>(48)</sup>. Lo que no impediría la pronta identificación del mcluhanismo como una teoría más sobre el cambio social, como bien supo ver entre nosotros J.M<sup>a</sup>. Bermudo: “Como a menudo ocurre en la teoría social el mcluhanismo tiene un objetivo (interpretación histórica), una ideología (la que sostiene el aparato tecnológico), un método (con gran contenido intuitivo y analógico) y una conclusión o profecía (un mito)” <sup>(49)</sup>. El apóstol de la “aldea global” quedaba desde entonces al descubierto. Más allá de la exuberancia culturalista de su discurso podíamos ver en McLuhan un ideólogo más de la tecnocracia: anteponiendo la mediatización sociocultural de los medios como entes ‘en sí’, sin aludir a las tensiones complejas ligadas al “quién” de Lasswell, un “quién” (tanto el mediador o periodista como el emisor o controlador del proceso en su origen) no menos necesitado de contextualización, y en cuya tarea volverían a encontrarse los partidarios de una y otra racionalidad, desde entonces hasta la fecha.

¿Qué cabe decir desde esa perspectiva a que da pie la propuesta macluhiana -centrada en los ‘medios’- sobre los **modelos de TV** que a partir de ahí se proponen?. Basten, a este último respecto, unas leves consideraciones, con acotación expresa a los ámbitos académicos y/o profesionales más cercanos al nuestro (según una realidad, por entonces, centrada en TVE).

Pierre Schaeffer fue de los primeros, como director del “Service de la Recherche de l’ORTF”, en postular la utilidad heurística de análisis ‘pragmáticos’ a la hora de desentrañar la problemática del “quién” en organismos públicos de RTV. Partiendo, en no poca medida, del replanteamiento de Westley-McLean -pioneros en la introducción del concepto cibernético de “feed-back”-, y adelantándose a la preocupación por la *politización* de las TV públicas, Schaeffer centrará su atención en el papel del mediador, de los profesionales de la información, en la comunicación massmediática. Si bien sugiriendo, a diferencia del esquema culturalista de Westley-McLean: autor-mediador-público, otras áreas adicionales de interinfluencia ‘sistémicas’, representadas por cuatro triángulos que casan entre sí formando gráficamente un curioso paralelogramo. Tales zonas engloban y definen, a su vez, cuatro zonas de tensiones cuyo equilibrio sería, realmente, lo perseguido por los

medios públicos de RTV en tanto que instituciones socioculturales. Para Schaeffer, que antepone como instancia de validación la “experiencia profesional” en tales medios, el mediador se presentaría en desventaja con respecto a los otros “quién” lasswellianos -incómodamente situado en el cruce de las dos diagonales, profesional y de poder-, mientras que el público, notoriamente, sería el menos afortunado en la práctica<sup>(50)</sup>:



También a primeros de los 70 y en Gran Bretaña, coincidiendo con la ruptura paradigmática propiciada desde la UNESCO y a partir de la fecunda reflexión que supone la obra de Raymond Williams<sup>(51)</sup>, el medio TV es motivo de reflexiones desde un enfoque integrador sobre la cultura moderna (en tan alta medida interconectada con la cultura audiovisual). La soterrada “alternativa” que la BBC siempre ha supuesto para TVE, desde los primeros balbuceos de una transición que finalmente llegaría a consolidarse como tal, hizo que no tardasen en conocerse en España las contribuciones que se cocinaban por entonces en el “TV Research Center” de la Universidad de Leeds, el “Center for Mass Communications Research” de la Universidad de Leicester, así como los trabajos llevados a cabo en Keele y Southampton, traduciéndose con el tiempo por el Instituto Oficial de Radio y Televisión (dependiente de RTVE) no pocas reflexiones de profesionales ligados a la BBC. Desde un principio, sin embargo, sobresalió la tarea analítica desarrollada en el “Center for Contemporary Cultural Studies” de la Universidad de Birmingham donde, en su intento por insertar los fenómenos culturales -y muy en concreto la especificidad cultural televisiva- dentro del ‘sistema social total’, destacaban los trabajos de S. Hall<sup>(52)</sup>.

Como en Schaeffer, la concepción de Hall es ante todo ‘pragmática’, centrando su interés en desvelar las interrelaciones múltiples entre medios de comunicación-cultura-sociedad, para, partiendo de la tesis de que los medios no son sólo vehículos sino ‘modos’ nuevos de cultura (en donde no es difícil rastrear la influencia de la ruptura paradigmática mcluhiana), concentrarse en el objetivo

inmediato de que “los profesionales de los medios de comunicación se aperciban de esa evolución”; especialmente -subrayará Hall-, a la hora de reconocer sus limitaciones como *creadores* y de renovar sus programas “de modo que les hagan más representativos y más críticos, a la vez, de la sociedad moderna”. Será en tal dirección, precisamente, que la Escuela de Birmingham sugiera -partiendo en concreto de la especificidad de la TV pública- dos ‘modelos de transmisión de cultura’ coincidentes, al cabo, con dos concepciones (clásica y moderna) de lo que sea la cultura. Tales modelos, a su vez, implicarían distintos ‘submodelos’: de formas culturales, de transmisión en sentido estricto, de públicos y de efectos, etc <sup>(53)</sup>. No habrá que insistir en cómo ello propició en la propia BBC la introducción de “Programas de Acceso Público” (en la base a su vez de la posterior ‘revolución de géneros televisivos’ que vino a suponer el *docudrama*), y cómo el potencial heurístico contenido en aquellas propuestas sigue más vivo (así los actuales desarrollos en Manchester) de lo que pudiera parecer: hasta el punto de haberse sugerido últimamente la estrecha relación crítica que compartirían semejante ‘crack’ en la programación con el equivalente, a nivel de organización, representado dentro del contexto europeo por la consolidación de las televisiones autonómicas españolas <sup>(54)</sup>.

En lo que respecta a las aportaciones escandinavas por aquellas mismas fechas, desde una aproximación ‘sistémico-pragmática’ similar a lo-real-complejo, el modelo que algunos han llamado Nórdico <sup>(55)</sup> centrará definitivamente las interrelaciones “individuo-sociedad-medios de comunicación colectiva” según la perspectiva de lo que aquí entenderemos por *modelo*, es decir, *en el contexto de una política de comunicación ‘dada’ -en el contexto por tanto de un ‘sistema social’ contingente*, el escandinavo en este caso- en que tales medios se desarrollan. De manera más que sintomática, dicha modelización se basa en un programa-guión de 5 grandes preguntas -tantas como en Lasswell- si bien éstas indican, no obstante, cuánto ha cambiado el acento sobre la investigación que se propone como ‘relevante’, pese a compartir la perspectiva politológica que el científico norteamericano aventurase en la fundamentación analítica del fenómeno comunicacional allá por los años 40:

#### MODELO NORDICO (1977):

- 1.Cuál es la actitud con respecto al cometido político de los medios de comunicación.
- 2.Cuál es el cuadro de la política ofrecido por tales medios de comunicación.
- 3.Importancia de las diferentes fuentes de información.
- 4.Cometido desempeñado por los medios de comunicación ‘de masas’ en la implicación política del ciudadano.
- 5.El cometido político de los ‘nuevos’ medios.

Un programa-guión, por tanto, que deliberadamente apuesta por acortar las distancias tradicionales entre la investigación **pura** (cuestionada implícitamente en comunicación si de comunicación ‘social’ se trata) y la investigación **aplicada** o metapráctica (que explícitamente es el enfoque que planteamos como más pertinente en esta Tesis, al religar nuestra reflexión con la necesaria contextualización ‘en sociedad’ de que ya hablaba Williams y ello en relación con la ‘política de comunicación’ establecida en cada contexto contingente).

Un programa-guión, en definitiva, cuya proximidad es más que notoria con la gran cuestión resaltada por Moragas entre nosotros: “Los principales problemas de nuestras políticas de comunicación nacen del desconocimiento de las necesidades y peculiaridades del propio sistema de comunicación”. Cuestión que parece agudizarse en el caso valenciano, concitando en nuestro análisis posterior el grueso de las reflexiones a acometer, a partir -entre otras cosas- de un cierto *modelo dominante de TV pública* que sí cabe rastrear, con E. Bustamante, J. Villafañe, P. Oriol i Costa, J.V. Idoyaga y tantos otros, a partir de los rasgos configuradores de una TVE (progubernamentalista, comercializante, centralista) que así-y no de otro modo- se constituirá de facto, aun con transición democrática de por medio, como ‘espejo’ (aun a la contra) para las otras TV públicas convencionales, las autonómicas, que arrancan al amparo del título VIII de la Constitución y de los respectivos Estatutos de Autonomía.

Mi intención aquí, en definitiva, no era ni es proseguir con el debate metateórico al que hemos intentado aproximarnos en este primer Capítulo y que en tal sentido permanece abierto. Doy por suficiente y bastante la clarificación que -adicionalmente a lo ya dicho- han adelantado entre otros, desde finales de los 70 y durante los 80 y en nuestros ámbitos académicos más próximos, autores de sobras conocidos como G. Richeri, Moragas Spá, Vidal Beneyto o Mauro Wolf<sup>(56)</sup>. Baste al respecto con subrayar, como conclusión general, la necesidad de cuestionar el concepto de ‘modelo’ que subyace a cuantos autores escamotean, ‘sistemáticamente’ o no, las realidades a que aluden los conceptos que, desde los años 70 y de acuerdo con Harms, vertebrarían un nuevo paradigma participativo y dialogal de la comunicación ‘mass-mediática’ de acuerdo con su plena inserción en el ‘sistema’ -si hay quien así prefiera llamarlo- político, económico y social, acorde con la “contextualización” (holística) en que desemboca la crítica del paradigma lasswelliano. Conceptos-realidades como serían el de “necesidades de comunicación”, “acceso público” y “derecho a” la información, “participación en la toma de decisiones”, “flujo libre” pero también “equilibrado” de la información a nivel internacional, “políticas” de comunicación, etc. Y que no por casualidad se recogen ya por la UNESCO en las conferencias de San José (1976), Nairobi (1977) y posteriores (hasta desembocar en el Informe MacBride y la crisis de la propia UNESCO desde 1983 provocada por las discrepancias de EE.UU. y Gran Bretaña), manteniendo, pese a todo, el potencial heurístico como marco conceptual en que insertar nuestro particular entendimiento de todo “modelo de TV”. Y que, como tal, sustenta el discurso a desarrollar en los Capítulos II y III.

Tales cuestiones van más allá -se insiste- de una formulación, como la que aquí se ha intentado con mayor o peor fortuna ‘explicativa’, que tal vez pudiera parecer “en sí” metateórica, cuando no es el caso. Pues remiten al motivo por el que, en definitiva, se han traído a colación en esta Tesis. De una parte, para señalar -por contraste- cuanto de “razón mecanicista” subyace todavía en los modelos comunicacionales al uso, en gran medida derivados de un paradigma (en el sentido más ‘estricto’ del término) que, levantado por Lasswell a finales de los 50 y remozado por McLuhan, sorprende en su supervivencia teórica: pero que, por lo mismo, quizá sea la expresión más reveladora (al centrar su interés cognoscitivo sobre el ámbito de la comunicación ‘tal cual’, en tanto que ‘noción nucleica’ del paradigma que se pretende ‘superador’) de los límites consustanciales a este último<sup>(57)</sup>. Y de otra parte, para mejor poner de relieve los condicionamientos (teóricos y prácticos) implícitos a la noción -no menos ‘básica’- de isomorfismo, pues no cabe hablar de “modelo de TV pública diferente” sin ahondar en las raíces epistemológicas (y no sólo políticas y/o comerciales) que condicionan tanto la noción de “modelo” a tal respecto (de persistir el desencuentro entre

comunicación y sociedad) ni se entendería, ‘de raíz’ -como aquí se persigue-, a qué aludimos y por qué cuando de modelo “‘diferente’” hablamos (de no cuestionar el ‘isomorfismo ontológico’ que parece anteponerse, como si de algo ‘natural’ se tratase, a toda reflexión que persiga superar el ‘mal-ejemplo’ de TVE para con las TV autonómicas hasta la fecha implantadas).

Ni que decir tiene que en el camino (teórico) por recorrer volveremos a topar con la opción entre racionalidades (analítica vs. dialéctica) que ya se ha sugerido: a este respecto, sólo señalar nuestro ánimo no dogmático y nuestro aplauso a la idea -no con escaso escepticismo- de un posible diálogo entre ambas racionalidades, como vienen intentando E. Morin, Luhman o J. Habermas desde campos conexos. De igual modo que, por todo lo dicho, resultará poco menos que inevitable explicitar una cierta “teoría de la sociedad” capaz reencontrarse con la ‘real comunicación’ que se persigue como ‘resultado distinto’ en la práctica.

Pues no en vano, razón escéptica no tiene por qué equipararse -por vía ‘analógica’- con razón derrotista, al menos dentro de la herencia filosófica que Habermas rastrea en la actualidad a partir de los ideales de la Ilustración <sup>(58)</sup>. En la misma medida que, por lo que aquí más nos interesa y en clave de razón práctica, cabe interrogarse -con Armand y Michele Mattelart- sobre si “‘más allá de las disputas y los debates sobre el futuro del servicio público, más allá de su posible desaparición como marco que estructura la televisión y las comunicaciones, lo que está en juego ¿no es, acaso, sino la avanzadilla de una nueva concepción de lo social? (Siendo así como la disputa) opera también en el campo de la producción teórica y en el de la producción del saber sobre los ‘media’, contribuyendo a desestabilizar los paradigmas que han legitimado las instituciones y las prácticas inscritas en la filosofía del servicio y del interés público” <sup>(59)</sup>: algo, no por más evidente (históricamente) en el contexto europeo que en el español, menos importante para nosotros, a la hora de levantar una TV pública valenciana que no reniegue de tal de antemano.

Se trataría de asumir, en suma, una perspectiva de globalidad que diera entrada a lo (subjektivamente) imaginario, a lo (socialmente) posible. Sin por ello aparcas las aportaciones heurísticas que son capaces de sugerir determinadas corrientes ‘formalizantes’: como la Teoría de Juegos, por ejemplo, más cercana de lo que parece -ya desde Von Neumann y Morgenstern- al concepto habermasiano de ‘interés’, y quizá no menos operativa, a la hora de superar la mera crítica reiterativa al ‘modelo de TV dominante’ y pasar de una vez a la construcción de alternativas que puedan ser tales (máxime ante la nueva situación de oligopolio imperfecto que se ve venir en el panorama televisivo español). Tal podría ser un reencuentro posible de la ciencia, en su “‘interés emancipatorio” que dice Habermas, con el sentido común, con esa práctica social que hemos adelantado como fórmula de legitimación: en la medida en que se presupone como ‘instancia veritativa’ de todo conocimiento que pretenda rehuir ‘de sí’ a fin de poder enfrentarse a su propio ‘inacabamiento’.

De ahí que, interesados en contribuir a un ‘modelo diferente’ de Televisión Valenciana, no escondamos la plataforma epistemológica -metaideológica- de partida. Ni tampoco las exigencias ‘formalistas’ -metaprácticas- consustantivas al modelo de TV que nos concierne en tanto que anclado, en definitiva y de modo ‘significativo’, en un modelo previo de Estado-Sociedad. Como de hecho cabe constatar, a partir de la observancia crítica de las políticas de comunicación establecidas.



## 2. POLITICAS DE COMUNICACION Y LEGITIMACION EN EL CAPITALISMO CERCANO.

Al margen de mayores pontificaciones -aquí y ahora- sobre el carácter capitalista de la formación social española, y de la necesaria reflexión sobre las implicaciones comunicacionales del nuevo Estado autonómico en un renovado contexto europeo -cuestiones ambas que no se olvidan sino que se dejan para más adelante-, lo indudable al respecto -de entrada- es que la peculiar transición política española ha podido contribuir quizá, por aquello de llevarse a cabo en plena zozobra económica y política ('crisis industrial' del modelo de crecimiento asentado, pero también del sistema democrático por consolidar), a interiorizar entre cierta clase dirigente el prejuicio naturalista de que la marea siempre marca la pauta al naufrago, de que hay barco capaz de navegar sin dirección. Ignoro, por mi parte, si las mareas (o los sistemas socioeconómicos) saben dónde van: pero suelen saber desde luego a donde no quieren ir, que es una manera (sea o no la más deseable) de saber a dónde poder ir.

Si acaso vale el símil y dado que existen políticas de comunicación, que éstas no se inventan sino que se implantan y definen (de manera no explícita no pocas veces), importa retener de entrada que las existentes, aquí y ahora, arrancan del proceloso fondo de la transición. En especial por lo que hace al medio TV.

En relación con la transición, en todo caso, es que cabe rastrear y dilucidar a su vez la plural referencia de la diversa legitimación de las TV públicas entre nosotros: legitimación ideológica y cultural pero también, por lo mismo, social y económica. Si bien no es menos cierto que muchos -demasiados a estas alturas- parecen desconocer todavía los *pasos analíticos* -en calidad de "mínimos" a investigar- que, con Moragas Spá <sup>(60)</sup>, parecen de inexcusable tratamiento cuando de políticas autonómicas de comunicación se trata. A saber: descripción y diagnóstico del 'sistema' de comunicación establecido, definición del territorio o ámbito de aplicación de dicha política autonómica, aproximación al 'modelo' político y social diferenciado en relación con las funciones básicas atribuibles al mencionado sistema comunicacional... Para, a partir de ahí, sopesar los condicionantes económicos y políticos en relación (en nuestro caso) con la TV autonómica, los actores colindantes al impulso principal (el de la Generalitat en nuestro caso) y los espacios (políticos, sociales, territoriales, lingüísticos y tecnológicos) en que cabe centrar las posibilidades de intervención a partir de dicha TV pública. Cuanto sigue pretende servir de mínima introducción al respecto, a la espera de cuanto se desarrollará más pormenorizadamente en los Capítulos II y III.

### 2.1. DE LA TV PUBLICA SOCIALMENTE POSIBLE: DEL ALTERNATIVISMO A LA PERPLEJIDAD, Y VICEVERSA.

Hace ya casi 20 años, expertos en comunicación de la UNESCO reunidos en París consensuaron un cierto criterio sobre lo que, en un sentido específico, cabía entender por **comunicación**: "la capacidad de información que necesita la sociedad, para funcionar eficazmente, y la circulación de esta información a través del tejido social". Fue tal concepción (un tanto eficientista)

de un vocablo antes y después tan manoseado lo que propició, a su vez, un cierto consenso sobre el concepto de 'comunicación social', que comprendería tanto el contacto *interpersonal* como la comunicación *mediata*, en la cual los servicios técnicos y otros intermediarios transmiten la información, "siendo fundamentales, entre los cauces organizados e institucionalizados, los medios de información".

Según el documento de referencia, la **política de comunicación** se entendería como una "serie de principios y de normas establecidos para orientar el comportamiento de los sistemas de comunicación", principios moldeados "en el contexto del concepto general que tiene la sociedad de la comunicación". Y el mismo documento, ya en 1972, agregaba que "como emanan de las ideologías políticas, de las condiciones sociales y económicas del país, y de los valores en que se basan esas ideologías, procuran ligar todos estos elementos a las necesidades reales y a las oportunidades futuras de comunicación" <sup>(61)</sup>.

Como es de imaginar, ello no presupone que tal política exista de modo explícito, en tanto que conjunto planificado y activo de normas expresadas en términos de finalidades: éste ha sido el caso tan sólo de países, por ejemplo, como México o Venezuela. Se han planteado políticas explícitas de comunicación, en definitiva, allí donde la actividad del Estado resulta determinante, en éste como en otros terrenos, aun coexistiendo con la presencia de monopolios privados significativos (obedientes a pautas comunicacionales ciertamente dependientes). Observándose, de otra parte, una correlación -hasta cierto punto lógica- con las directrices básicas de investigación allí establecidas: no en vano, la insistencia de los teóricos críticos en tales países todavía pasaría, inevitablemente como quien dice y de manera un tanto esquizofrénica, por retomar (aun revisada) la visión althusseriana de los medios como "aparatos ideológicos del Estado", al tiempo que se reclama del mismo Estado su intervención en materia de comunicación (con instrucciones más o menos populistas y filo-pedagógicas) juzgando su política "posible" de instrumento fundamental -en primer término- en pro de una planificación, de otra manera impensable, del desarrollo.

En el contexto europeo, por contra, han abundado en los últimos años políticas más y más implícitas. Y ello pese a que medios de comunicación fundamentales como radio y TV (por las propias necesidades de infraestructura en su nacimiento y consolidación y por la importancia política de su actividad más tarde) pasaron a ser en la mayoría de los países, tras la última gran guerra, de titularidad pública, propiciándose entonces -al menos para tales medios- políticas claramente explícitas. La década de los 70 (crisis del Welfare State) y la de los 80 (cuando se extienden por Europa occidental las presiones a favor de la "desregulación") conllevan sin embargo el desconcierto entre investigadores, profesionales, no pocos políticos y, ni que decir tiene, entre el público.

En los años 50 y 60, en efecto, la omnipotencia infraestructural en comunicación todavía traducía en Europa (a diferencia de la dependencia 'tercermundista') las tristes mieles del pasado colonial. En plena etapa de expansión del sistema económico, ligada finalmente a políticas keynesianas o de apoyo a la demanda, el dilema básico quedaba marcado por las diferencias entre opulencia (de medios y contenidos) / miseria (de relaciones sociales) en el ámbito de la información públicamente instituída; al tiempo que las políticas de comunicación se ceñían al particular equilibrio de medios en relación con la estructura consolidada de poder (la concentración tenía todavía, hasta 1962 en que aparecen los satélites, las barreras propias del Estado nacional); el

espontaneísmo iluso -incluso- de la prensa *underground* y alternativista (se ensalzaba entonces a los *dazibaos* chinos, el diario “Liberation” era un horizonte envidiado por una izquierda como la española todavía pendiente de concentrar esfuerzos en torno a “Cuadernos”, “Triunfo”, etc), se reclamaba como alternativa posible... En tales premisas se apoyó, en la Europa a que aludimos, un horizonte de política comunicacional “muy otra” que acertó a definir H.M. Enzensberger y que rápidamente popularizaron entre nosotros los más avisados (Pablo del Río, Lourdes Ortiz, Guillermo Luis Díaz-Plaja, Román Gubern, Domènec Font, en fin, bastantes).

Los famosos “7 mandamientos” del germano eran un clavo ardiendo al que agarrarse, entonces, para quienes pretendíamos asomarnos al mundo comunicativo con un mínimo de pudor crítico, y fueron en los años 70 la clave de bóveda salvífica de la política de comunicación que se quería contraponer a la franquista. Era -en tales principios cuando menos- una política explícita. Pero en su definición del uso emancipador de los medios (programas descentralizados, cada receptor un transmisor en potencia, participación y producción colectiva, control socializado, etc) Enzensberger hablaba, entonces, tanto de *masas* (al estilo del marxismo acrítico), como de *feed-back* (tomándolo sin más de la cibernética informacionista por entonces en ascenso), definiendo en su conjunto un uso emancipador de los medios que emparentaba atropelladamente con la utopía. La propia, por demás, de todo teórico-ideólogo que entonces se preciase de tal: un ejemplo más de lo que Sádaba identificaría más tarde como “dogmatismo-utópico”, y del que el propio Enzensberger renegaría explícitamente con el tiempo <sup>(62)</sup>.

Manuel Vázquez Montalbán, que se contaba entre sus avisados introductores, había planteado entre nosotros (no siendo el único) el conocimiento histórico de la comunicación ‘social’ como necesario punto de partida. Con el tiempo publicaría su famosa “Historia de la comunicación social”, pero antes, en “Comunicación XXI” (revista que adelantó aquella por entregas), trazó una síntesis de la misma a partir de la cual proponía un programa de “toma de conciencia crítica” que sirvió de pauta de acción (investigadora cuanto menos) para no pocos <sup>(63)</sup>. Ir más allá de ese programa significaba “penetrar en el reino de la utopía”, porque -se sostenía entonces como prioridad- “es indudable que la posibilidad última de una contralectura de ese ‘lenguaje de persuasión’ (significando Montalbán por tal el sistema de comunicación dominante), pasa por un cambio de estructuras políticas, por un nuevo poder legitimado por su capacidad de convocatoria de la participación del hombre”.

Claro está hoy, años después, que se ha avanzado no poco en el programa de concienciación entonces propuesto. Pero la utopía (imbuída de una ideología participatoria que aquí se retomará, pero a su vez se problematizará, con Sánchez-Morón) no parece haberse acercado. Antes al contrario, al generalizarse la presión “privatizadora” de los medios la mayoría de los profesionales críticos han tenido que enfrentarse más crudamente con la resolución práctica de aquella tesis sobre Feuerbach que sostiene que el ser social determina la conciencia y no al revés. Sobre todo una vez cumplido, en ‘cierto’ modo, el cambio de estructuras políticas a que Montalbán aludía, y que en realidad no era la última sino la primera posibilidad para normalizar nuestra situación según los parámetros sociopolíticos dados en Europa occidental: donde ya se daba una situación de perplejidad como la hasta hace poco reinante entre nosotros. Perplejidad tanto teórica como práctica.

Porque, en efecto: tras la descalificación global de los primeros años 70 -descalificación de la estructura social y económica pero ante todo del Estado franquista-, y tras la superación efectiva de todo aquello -con la transición, a su manera-, vinieron de inmediato, siempre desde una óptica crítica y progresista, las intentonas alternativistas primero, el descontento después y, finalmente, la perplejidad que aún hoy colea. Recorrido o proceso (antes que nada sociológico, probablemente) que, traducido en términos de comunicación 'social', vino a suponer:

- Los intentos iniciales por asentar medios y modos de *comunicación alternativa*, con una confianza desmesurada (al modo mcluhiano en el fondo, paradójicamente) en la influencia descontextualizada de los medios. Lo curioso es que ello desembocaría con el tiempo, finalmente, en la asunción por aquellas izquierdas 'con tirón electoral' de efectivas responsabilidades de poder (local, en principio): cuando el famoso simposium de Barcelona, ya en 1978, constataba cómo "lo de la alternativa de los medios no dura más que lo que dura la alternativa de la causa social" (en palabras de Vidal Beneyto, compilador para el CIS de aquellas ponencias al recogerlas en la obra "La comunicación popular como alternativa a la comunicación de masa").

- Fue de inmediato por tanto, con los años 80 recién inaugurados, la redefinición más realista de lo alternativo, relanzando el concepto y la práctica de la "mesocomunicación" pero sin abandonar ese *mcluhanismo de izquierdas* que centraba las esperanzas de cambio en los propios medios: si no se trataba con ello de descuidar -ni entonces ni ahora- el control democrático de los "macromedios" (TVE, RNE y RCE ante todo), lo cierto al final es que dicho control se restringió a su estricto control *institucional*, al tiempo que los más importantes "mesomedios" desarrollados (radio local o municipal, prensa de barrio) tendieron más bien a consolidarse como mera neutralización de la influencia de aquellos otros macro, quedando otros (Gabinetes Municipales de Información, BIM, prensa comarcal), junto a formas potenciadas en paralelo de "microcomunicación" (debates, animación sociocultural, etc), arrinconados en el dilema -todavía sin resolver aunque parezca mentira- de optar en la práctica por un modelo comunicacional vs. (contra) propagandístico.

- Especialmente tras el 28-O de 1982, y así hasta hoy, el objetivo fundamental (pero no único) torna a ser la democratización de los "macro-medios" públicos <sup>(64)</sup>. Pero, junto a las adversidades que cabía presumir, 1983 se revelará como un año clave a nivel internacional por lo que se refiere a las presiones desregularizadoras de tales macro-medios (TV ante todo), y ello al compás del repunte tecnológico en información. Los efectos "anti-cambio" se sumarán. Lo que provocará el suficiente desconcierto y nerviosismo en el PSOE como para llegar a que éste adopte medidas "a la defensiva" nada defendibles desde el punto de vista comunicacional. Medidas que gestaban en parte el salto cualitativo, de la autoridad racional a otra cercana a la inhibitoria, que luego se plasmó (y no por casualidad) en los lemas electorales: de "por el cambio" a "por las cosas bien hechas", y más tarde, simplemente, al autobombo (cuando menos en política de comunicación) de "por el buen camino"... De ahí a la persistencia de la perplejidad no habría más que un paso.

Que cabe desandar en términos críticos. Pues cabe volver, aun con mayor escepticismo, y sobrepasar la mera crítica a lo comunicacional establecido. E intentar nuevamente su superación: es preciso articular nuevas formas de intervención. Una intervención antes social que política, que no se contente con anteponer el logos moralista al tecnocrático, que se aleje tanto del ideal inexpugnable

cuanto del pragmatismo entreguista: sigue haciendo falta, en suma, la imaginación constructivista. La perplejidad de que hablamos, no en vano, era perceptible ya en 1982 en tanto que actitud lo suficientemente generalizada en nuestro campo de estudio como para poder hablar -así Vidal Beneyto- de “la crisis como tradición”<sup>(65)</sup>. Pero es la misma a la que cabe enfrentarse, todavía, sin necesidad de pasar por un ‘quijote’ deslenguado... De hecho, un quinquenio más tarde, el propio experto alicantino no dudaba en proponer un listado (a modo de nuevo “decálogo menos 1”) de principios -a estas alturas, afortunadamente, no menos ‘tradicional’- en que basar (empezando por ceñirse al interés teórico) el necesario reencuentro entre **comunicación y sociedad**. A saber:

1. La indisociabilidad hoy, para bien y para mal, de la comunicación -tanto escrita como audiovisual- con la electrónica y las telecomunicaciones.

2. La reivindicación de la perplejidad, si acaso, paradigmática: “que fundamenta el pluralismo teórico (se han acabado todas las vulgatas teóricas) y que nos instala en una extrema modestia teórica que no debería aprovecharse para eliminar la teoría, olvidando que para aplicar una ciencia lo primero que hace falta es que haya una ciencia”.

3. La reivindicación de la quiebra de la objetividad, que “ha dejado de ser ya un paradigma posible, ni siquiera como mito regulador”; y que la información “no es la reproducción reflejo de la realidad, que la información es producción de la realidad”.

4. La reformulación del concepto de ‘opinión pública’, más allá de la circularidad del mecanicismo psicologicista e individualista que arranca del siglo XVIII y más cerca de la noción de ‘espacio público’ sugerida por Habermas y en el que también juegan el imaginario simbólico y la interacción social como necesarios para su entendimiento como expresión del conflicto social.

5. La necesidad de quebrar la circularidad patente en nuestro siglo, a su vez, entre hiperinformación-desinformación (opulencia de medios-miseria de relaciones comunicacionales).

6. La desmitificación de la información mediante una crítica de la ideología comunicativa, comenzando por reformular la teoría de la noticia: ni que las malas noticias sean las únicas noticias, ni que éstas sean cada vez más las ligadas a fuentes institucionales.

7. La contextualización de los procesos comunicativos en los procesos sociales que los producen, y en los que, luego ellos, a su vez intervienen. “Contextualización mediante la penetración institucional y, esto es un programa de acción, mediante la aprobación tecnológica de las estructuras productivas”.

8. La formación: “Hemos de aprender a manejar las máquinas y formarnos en las prácticas comunicativas, fundamentalmente en la recepción crítica del proceso. Hemos de enseñar a la gente a ver la televisión y a leer el diario. Recepción crítica”.

9. Y hay que ir más allá del conservadurismo del ‘gran número’, incitando al protagonismo comunicativo: “Hay que intentar dinamizar, efectivamente, a los agentes de la comunicación como sujetos protagonistas del proceso de la comunicación”.<sup>(66)</sup>

Desde tal perspectiva, un tanto escéptica pero crítica y comprometida al mismo tiempo con el presente, y con referencia al caso español en concreto, tres cuestiones teóricas se impondrían “definitivamente” (quiere decirse, al menos hoy por hoy):

- Primero, los problemas de *política comunicacional* no eran ni son exclusivos de los países mal llamados “del tercer mundo” ahora ya, simplemente, “segundo”: ocurrió sin embargo que la “ambigüedad calculada” propia de los primeros años de la transición terminó por contagiar al

sistema de comunicación asentado, insuflando el “meninfotisme” (aparente) antes aludido como práctica dominante, cada quien (medios privados/medios públicos) tirando del nudo “desregulación de los medios públicos /regulación democrática de los mismos” por el extremo de la cuerda que, según su ideología y fuerza política del momento, más se correspondía con sus intereses prácticos. La cuestión tecnológica -una vez más- fue la principal bandera de enganche tras la que ocultar aquellos... Y lo sigue siendo. Habremos de retomar la cuestión más adelante.

- Segundo, la *innovación institucional* que supone el Estado de las Autonomías, en su vaivén de efectiva implantación, afecta a su vez a los intentos por descentralizar los macromedios (ante todo los públicos) ‘predominantes’ en lo social: problemas de coordinación, de eficacia y de orientación institucional se espejaban entre ambos ámbitos. Y todavía se dan la mano, aun por el dorso: los primeros pasos de ETB y TV3, por ejemplo, marcaron cierta pauta a seguir por el resto de canales autonómicos en su refuerzo del nuevo “centralismo” (el autonómico, que no por menor deja de ‘imponerse’ socialmente como tal centralismo). No se trata tan sólo de que surgiesen (enero/septiembre 83) en año preelectoral para tales CC.AA, retomando PNV y CiU las nuevas emisoras como palanca electoral (al modo de UCD hasta entonces con TVE), sino de la insuficiente teorización e implantación de una efectiva descentralización tanto del Estado como de la TV pública en España: el “mecanicismo a la contra” de los canales autonómicos asentados respecto de TVE ha demostrado ya sus insuficiencias, no sólo su ineficacia (comunicacional, cuando menos). El esfuerzo de reflexión/decisión sobre el propio Estado autonómico condiciona así, máxime tras la integración europea, la traducción concreta de una real descentralización en comunicación (en tanto que política por explicitar). Y viceversa.

- Tercero y más importante, los intereses progresistas (a diferencia de América Latina donde la prioridad en cuanto a fines sigue pasando por acortar las crecientes diferencias Norte-Sur) en nuestro caso van ligados al problema fundamental de realizar *otra* política de comunicación. Es decir, pasaban y pasan por el compromiso político, pero dista de resolverse el alcance (local, autonómico, europeo) y el contenido de éste si ha de pensarse en servir antes a los públicos que a los poderes. Más concretamente: ¿qué hacer, en un sistema como éste, con (incluso desde) un PSOE en el gobierno (político)? Esta sin duda, con mayor o menor acierto definida, es la cuestión fundamental que ronda (todavía) a no pocos. Y digo todavía pues es la misma que ya plantease Vázquez Montalbán hace casi dos décadas: “¿qué es y cómo ha de ser la comunicación a partir de elementos condicionados por el sistema capitalista?”. La misma cuestión que más tarde reencontraremos con M. Castells en relación con las nuevas tecnologías, sean o no de información. La misma, en suma, en tantos y tantos ámbitos aparentemente parciales: sólo que ahora, si cabe, más apremiante...

Pese a la complejidad, incluso pese a la perplejidad, la apuesta en nuestro caso, y por lo mismo, será proseguir: porque la desigualdad social, el secuestro en tantas ocasiones de la libertad y el escamoteo in crescendo de toda forma de solidaridad también son manifiestas -siguen manifestándose- en los ámbitos (políticos, territoriales, sociales o lingüísticos) de la comunicación. Y una forma de no aceptarlo es no ocultarlo, es no callarlo. Y desde luego, también para el caso valenciano y en lo relativo, más en concreto, a la recién nacida TV autonómica.

Canal 9-TVV es en efecto, desde antes del 9 de octubre de 1989, pieza clave destacada del sistema comunicacional asentado en territorio valenciano, cotidiano entre sus gentes. Pero participa,

pese a su juventud y al intento por edificarse como *TV diferencial*, de similares contradicciones a las ya planteadas por E. Bustamante, M. de Moragas, P. Oriol, José V. Idoyaga y tantos otros, como características del **modelo de TV pública** que -a partir del (mal) ejemplo de TVE y pese a la transición democrática- se presenta como **dominante** entre nosotros. Dichas características, las más sobresalientes desde una perspectiva autonómica, serían con Idoyaga <sup>(67)</sup>:

1. La legitimación parlamentaria del modelo ultracentralista de TVE. Ni la Organización Territorial, ni la normativa sobre el derecho de acceso establecida en el Estatuto de RTV de 1980, supondrán ningún cambio en tal sentido.
2. En consecuencia, la continuidad de los rasgos centralistas de la infraestructura, de la organización productiva y de la programación de TVE. Destacando entre ellos una red radial en forma de estrella, con Madrid como centro neurálgico, y la subordinación total -como si de simples corresponsalías se tratase- de unos centros con toda justicia denominados “periféricos”.
3. Un control de la radiotelevisión pública ceñido, exclusivamente, al juego de las relaciones parlamentarias: hegemonía gubernamental en los órganos rectores, reproducción proporcional del Parlamento en el Consejo de Administración (volviendo a repetirse en la Comisión de Control parlamentaria) y, significativamente, cierre casi total a cualquier tipo de acceso ‘social’ a tales órganos.
4. Una normativa para el establecimiento de un espacio público de televisión en las Comunidades Autónomas que, de ceñirse a la ley, difícilmente podría ser otra cosa que una TV folclórica y provinciana.
5. Ningún tipo de perspectiva para la TV local y ninguna política clara para la TV por cable, si no es la preservación de la reserva de ésta en exclusiva para RTVE (y ahora para Retevisión).
6. Y finalmente, la continuidad de la contaminación comercial y de todos los factores que hacen de la maximización de la audiencia la ley motriz para fijar una programación donde manda, sin duda, el entretenimiento.

Pues bien. Lo paradójico de las TV autonómicas es que si en algo renuevan o reforman, pero sólo a priori: semejante modelo heredado como “espejo dominante” va a ser -si acaso- en lo que respecta al control centralista del aparato televisivo. Y esto desde un ‘mcluhanismo a la contra’ (respecto de la propia TVE). De modo que, no por “abrir” territorialmente el medio a ámbitos más acordes con el Estado de las Autonomías (más acordes por tanto con la Constitución y los Estatutos respectivos de Autonomía), rompen sin embargo con el control político como factor determinante del modelo. Multiplican, sí, los canales (el medio), pero no el modelo: que sigue nutriéndose de una publicidad -auténtica madre del ‘cordero’- que sigue condicionando tal multiplicación a partir, por el momento al menos, de su propio crecimiento, que no cesa en sus funciones de “acelerador” del consumo (y de la acumulación de capital subsiguiente) y de barrera de entrada” ante la nueva competitividad inherente al Mercado Unico (barrera en defensa del mercado interior ‘cautivo’ para las empresas ya asentadas, en un ‘mercado único pero nacional’ altamente protegido hasta 1986 pero que lo será mucho menos después de 1993).

De hecho, el (ab)uso de los nuevos canales autonómicos desde el poder político no será -si bien a esa otra escala- menos “centralista”; ni se han abierto las puertas, en los nuevos ‘sistemas nacionales/regionales’ de TV pública, a un “feed back” de carácter ‘social’ con que cabría

identificar -según muchos- la auténtica reforma del (mismo) modelo.

Es más, desde propuestas como las formuladas por Oriol/Pérez Tornero y Vilches en el caso de Aragón <sup>(68)</sup>, o por F. Monar para Castilla-La Mancha <sup>(69)</sup>, ambas centradas -de la mano de la consultora Coratel en el segundo caso- en la posibilidad de una TV pública “descentralizada, federada, ligera y de servicio público”, ni tan siquiera teóricamente puede defenderse como *incuestionable* tal modelo neocentralista... Y ello sin necesidad de escudarse en la no infrecuente atribución a tales CC.AA. de un rango (desigualmente) “de segunda”, desde estrictos criterios jurídico-políticos (una vez más).

De hecho, a la ausencia de toda dimensión o apertura a dinámicas locales, comunitarias y descentralizadas en la producción y emisión de la programación de tales canales autonómicos, viene a sumarse, cada vez con más fuerza, la ausencia de criterios de tipo social tanto en los impulsos de las políticas paradifusionistas en nuevas infraestructuras de telecomunicación (RDSI, servicios finales, etc) cuanto en el rediseño efectivo de los modelos organizativos de TV ligados a la comunicación social estricta, donde el Estado se re-consolida al viejo modo centralista (LOT) o reaparecen las no menos añejas pretensiones progubernamentalistas con una RTVE como fundamental en el nuevo modelo coexistencial (Ley de TV Privadas). Tan sólo los “planes cable” de Cataluña y el País Vasco permiten aventurar -si bien todo hace pensar que al mismo “nuevo modo centralista” ya operado en TV- un eventual acortamiento de los espacios autonómicos respecto de un Estado central, auténtico controlador del “mismo modelo” pero a su vez sobrepasado por las previsiones en telecomunicaciones europeas para 1993 y las emisiones que ya se reciben vía satélite (que serán todavía más imparable, a partir del otoño de 1991, con arreglo a las previsiones de la directiva europea sobre “TV sin fronteras”).

Todo ello apunta a nuevas realidades que fuerzan el efectivo rediseño del modelo hasta la fecha dominante, en lo que no cabe, sin embargo, sino prever la importancia -y aun necesidad- de anteponer la legitimidad incuestionable de los poderes públicos para su resolución. Algo en nada paradójico y sí absolutamente ineludible. De ahí que frente al grueso de reivindicaciones *profesionalistas* de última hora, por lo común reacias a una nueva “publicación” para la reforma de la (futura) TV pública, pero en igual medida frente a reivindicaciones *políticas* (en tal sentido, en-sí-profesionalistas) que condicionan dicha publicación a la “parlamentarización” de los órganos de control (como si ello no implicase un morderse la cola en la necesaria -y por demás prevista según ley- “socialización” del modelo), que aquí me decante por dicha socialización de los órganos de dirección y gestión. Pero ello como algo inseparablemente unido a la necesaria politización (luego se aclarará) de los profesionales más directamente conectados con las estructuras de organización en que aquella socialización del modelo pueda finalmente operativizarse. Nuestro reto será no sólo clarificarlo sino, ante todo, justificar lo que de entrada se limita a una mera creencia: que ello no es imposible.

Bueno será, en cualquier caso, no descuidar el debate sobre la **legitimación** que importa en los medios (especialmente los públicos) de comunicación. Debate que -en modo cierto- subyace a la polémica que la reiterada crítica al modelo actual plantea y replantea; en no menor medida que de hecho condicionará -ineludiblemente, a su vez- toda eventual “salida” juzgada, seriamente (que es como decir, políticamente factible), en tanto que socialmente (todavía) posible. Y en tal sentido,



más allá de contribuir a una polémica de antemano mediatizada en la práctica por lo ‘político-estatal’ como prioridad (así el debate sobre la reforma del Estatuto de RTV de 1980), puede importar mucho más explicitar la corta distancia que, al igual que una hipotética Filosofía de la Comunicación podría suponer para el relanzamiento teórico de las reflexiones que importan en Facultades como la nuestra, bien podría suponer en paralelo -a efectos metaprácticos- una reflexión que no descuide, por el ‘‘uso político’’ dominante hoy por hoy en los medios, las aportaciones provenientes de la Sociología y la Filosofía del Derecho.

No en vano, si el orden social deviene ‘legítimo’ (justo) cimentándose -estáticamente- en el **Derecho** como producto histórico, la verdad social de dicho orden ‘se legitima’ (deviene certeza-históricamente-en-construcción, aquí y ahora) al vehicularse -dinámicamente- como **Información** públicamente participada. La ley, expresión del orden jurídico, concreta el sistema de legitimación *de primer orden* al que se somete la información públicada, expresión por lo mismo de ese otro orden participativo que en paralelo construye/deconstruye, como *segunda* instancia de legitimación, la propia ley. En Derecho, la norma legal -como producto ‘impuesto’ por el poder político legítimo, si en democracia-, es la referencia más inmediata para cualquier ‘‘interpretante’’ del orden social; tratándose de Información (in-forma, da forma) la referencia inmediata es el propio saber sobre el sistema de intereses y valores que articulan el orden socioeconómico, como algo ‘sugerido’ -ya que no impuesto- institucionalmente, sea desde instancias privadas o públicas. En Derecho, se persigue acotar y desmontar formalmente la Injusticia (sea producto de actos ilegales o causada por esa forma especial de ilegalidad que representa la arbitrariedad), pero siendo, como tal, un valor de por sí perteneciente al sistema de legitimidad ‘social’; para quienes ‘viven’ la Información como partícipes, se persigue acotar y desmontar la Ignorancia (bien por entenderse como participación ‘viciada’ y contraria al debido saber, bien frente a esa forma especial de ignorancia que llamamos manipulación en tanto que perseguida por los poderes *públicos*, sean o no ‘políticos’, sin el no menos debido ‘respeto a los públicos’), pero siendo, como tal, un valor de por sí atribuible al orden ‘debidamente’ participativo.

Tales cuestiones distan de ser, a mi juicio, un simple o aparente juego de palabras. Pues de igual modo que el *iusnaturalismo administrativista* clásico ha girado sobre el falso dilema Estado-Sociedad (a partir del viejo principio liberal del individuo como agente ajeno a lo social), el *iusnaturalismo difusionista* ha edificado la presunción de una quimérica Objetividad -hoy justamente puesta en entredicho- a partir del control (privado o ‘privatista’, que igual tiene) de las industrias culturales. Ambos iusnaturalismos perseguían y persiguen, en definitiva y pese a las crecientes contradicciones, la legitimación de ‘lo mismo’. No otra cosa que el control del orden económico y social, histórica y desigualmente en poder de una burguesía en desarrollo: el derecho administrativista vía coacción ‘legítima’ de lo social como algo ajeno al dominio privado del sistema según los intereses y valores consustanciales a tal tipo de dominación, el iusdifusionismo comunicacional vía persuasión o ‘encauzamiento’ de ‘la’ opinión pública según parecidos intereses y valores.

No siendo éste el momento ni el lugar para desarrollar cuanto desde tal perspectiva (desde la Filosofía del Derecho) cabría sugerir: por ejemplo, de contraponerse Derecho a Costumbre y en paralelo Información industrializada a Usos Sociales de la comunicación (‘mediada’ o no ‘mediada’), sí conviene retener, no obstante, algunas implicaciones claves derivadas del dilema *Positividad vs. Normatividad* (del Derecho/de la Comunicación Social). En especial por lo que atañe a ciertos

“dogmas” implícitos a los valores <sup>(70)</sup> que tanto el iusnaturalismo administrativista (pues no cabe olvidar el basamento en él de la regulación jurídica que afecta en concreto a los medios públicos) cuanto el iusnaturalismo difusionista compartirían. Tales dogmas, a no descuidar para la edificación posible de una hipotética “TV pública diferente”, serían:

1. Al igual que la legalidad ‘engendra’ seguridad (por la supuesta coherencia sistematizadora del ordenamiento jurídico), la información vehiculada por los medios establecidos es garantía del interés humano consustancial al orden participativo... Pero siendo condiciones necesarias, en uno y otro orden, más bien parecería posible sostener que *tales condiciones (legalidad, información ‘mediática’) lo son de necesidad (sistémica) pero no de suficiencia (social)*: de ahí quizá, en nuestro caso, el frecuente recurso a la *alegalidad* (radios y TV locales, por ejemplo) y el no menos frecuente respaldo ‘social’ (antes que institucional) a ciertos forzamientos de lo estrictamente legal. De los que siguen sin escapar, por cierto, ciertas realidades/posibilidades inherentes al audiovisual autonómico.

2. El Derecho -sugiere el segundo axioma iusadministrativista- se agota en su función de ordenamiento (jurídico) de la organización social. Y de igual modo -se dice- la Información se agota en su función de ordenamiento (participativo) de la misma organización social... Pero si la seguridad no es sólo un ‘hecho’ sino también un ‘valor’ históricamente dados, en no menor medida la noción de interés público en que se apoya la Información establecida no es sólo un ‘dato de referencia’ sino también un ‘supuesto ideológico’ históricamente condicionado. Y de igual modo que la formalización positiva del Derecho suele obedecer a la voluntad del más fuerte (sea o no dicha voluntad de poder la mayoritariamente legítima), similarmente cuanta información se ‘dice’ en los medios suele coincidir con la objetividad del más fuerte (responda o no, en lo que dice como en lo que calla, con la voluntad de saber de los más). Es decir, de nuevo: *no bastan los usos sociales de la comunicación mass-mediática para una suficiente participación*.

3. Finalmente, si la idea de Justicia en que se basa el orden jurídico implica -en su teleología- la existencia de una voluntad general o de todos (Rousseau) que antepondría la paz social al conflicto social, la idea de Comunicación -en su sentido finalista y no instrumental- implicaría la paralela existencia, para un ordenamiento participativo igualmente pacífico, de una especie de “voluntad (de saber) general o de todos”. La justificación implícita (normativa y no positiva, pues alude al ‘deber ser’ que a ambos órdenes legitima al tiempo) nos retrotrae al debate recientemente abordado por Habermas <sup>(71)</sup> sobre el ‘consenso (socialmente) posible’ (que no sobre la utopía comunicacional inalcanzable). Pero ello, sin embargo, en el sentido más bien del “disenso (políticamente) constructivo”. Como terreno, por tanto, de disputa metafilosófica: así ideológica. *No cabe*, en consecuencia, aludir a *una hipotética neutralidad* en el debate de fondo -si para una real comunicación- sobre cuanto aquí, máxime al tratarse de TV (medio dominante por definición según el actual orden/ desorden comunicativo), pretende dilucidarse.

No es casual, por lo mismo y entre nosotros, que haya sido la reflexión filosófica la primera en reparar, más allá de toda pretensión por edificar ‘otra’ teoría de la omnipotencia massmediática, en su función primordial como definidora y ‘constructora’ de las realidades y las cosas (así Rubert de Ventós en “De la modernidad”) <sup>(72)</sup>. Como otro tanto ha podido apreciarse en la crítica, con el adiós a los años 80 y más allá de toda referencia al marco explícito de la lucha -económica pero también política, y viceversa- por el control de la información, del auge reciente y generalizado del

sensacionalismo amarillista entre los medios de prensa escrita en España: así Sánchez Ferlosio, entre otros, cuando escribe que “la tragedia, por no decir tragicomedia, de la libertad de prensa y expresión viene del hecho de que la empresa periodística privada se vea mediatizada por la necesidad de someterse a la ‘ley del mercado’ y acomodar, en mayor o menor grado, su oferta a la demanda dominante en una sociedad cada vez más privatizada y más desatendida de los negocios públicos, rasgos sociales que se derivan, a su vez, como en un círculo vicioso, de esa misma economía de mercado que condiciona la oferta de la Prensa, convirtiendo en escarnio la tan cacareada libertad de expresión”<sup>(73)</sup>.

No otro punto de partida, sino uno más bien clásico entre el pensamiento crítico, será el que aquí sostengamos por lo que a la TV pública respecta en materia de legitimación. Identificable, tal vez, en forma de axioma histórico con moraleja incluida. Y que cabe sostener, cuando menos parcialmente -pues no se comparten sus obsesiones ‘nacionalistas’-, con Josep Gifreu<sup>(74)</sup>. Como sigue:

- Axioma pragmático en TV pública: “La creación y difusión de opinión es un mecanismo fundamental para la integración” (social, territorial, lingüística, etc). Lo que en su versión más reduccionista, la más atenta por demás al interés de dominio político que históricamente se observa respecto de tales medios, vendría a decir: “Dado que el voto es, en definitiva, la traducción política de la opinión, y la suma de los votos la base de legitimación de las instituciones del Estado y de las estrategias del Gobierno, la conformación de la opinión llega a ser aquí, como en todas las sociedades de democracia formal, el mecanismo central de integración y consenso”.

- Moraleja: “Para el control de la opinión, hoy por hoy, resultan mucho más decisivas las condiciones de producción, de circulación y de control de los discursos o mensajes, que no los contenidos mismos”. O en otras palabras, que lo importante -para el abuso de la TV pública, pero también para un eventual uso emancipatorio de la misma- es establecer:

- a. Las fronteras de la circulación de las emisiones (clarificación que en el caso español debería acometerse a partir de la Constitución, de cada Estatuto de Autonomía y del derecho internacional);
- b. Quién tiene competencia para emitir (regulación jurídico-política de las diferentes modalidades sociales y técnicas de TV), y
- c. Ordenación de los diferentes soportes o canales para la circulación (leyes telecomunicaciones, etc)

Importa sin embargo anteponer como conclusión general si cabe más relevante, la constatación del *reduccionismo politológico* en que caen quienes -como Gifreu- limitan su perspectiva crítica a la impuesta por el propio objeto criticado. Pues cabría cuestionar la persistencia de propuestas hipotéticamente superadoras del actual modelo que atienden en exclusiva a criterios jurídicos y/o políticos -como Gifreu y otros analistas catalanes prejuzgan en relación con TV3-, sin considerar en similar medida, por ejemplo, la relevancia ‘sistémica’ que para muchas TV autonómicas (Canal 9-TVV entre ellas) conllevan los acuerdos publicitarios cerrados con Berlusconi. Siendo así que no de otra manera puede entenderse la diferencia (en lo político) del modelo implantado por tales TV autonómicas, sin por ello dejar de sumarse al ‘mismo’ (en lo económico) que el propio ‘sistema de comunicación’, como un todo históricamente interdependiente, *sistemáticamente* impone. Entre

otras cosas por remitir al orden económico y social en que los medios de comunicación interactúan.

Para atender a la resolución práctica de qué TV pública sea o no la ‘‘socialmente posible’’ -aquí y ahora- entre los valencianos, *es cuestión previa, en definitiva, clarificar y sopesar la factibilidad de eventuales superaciones del ‘sistema de comunicación’ (así global y no sólo limitado al medio TV) establecido como dominante*. Entre otras razones, como ya se ha sugerido y debe quedar claro, porque si la limitación del poder de emisión y circulación no obedece a problemas tecnológicos ni tampoco -hasta ese cierto punto inevitable por lo mismo- a problemas dependientes del derecho internacional convenido al respecto, todo apunta (al modo finalista) a un problema de estricta economía política. O si se quiere, ‘‘la escasez es de poder, de capacidad de tomar decisiones y de control’’.

## 2.2. DEL SISTEMA DE COMUNICACION DOMINANTE: LA COMUNICACION COMO PRETEXTO.

Un ejemplo, más allá de lo anecdótico, puede servirnos de pauta introductoria. En el Congreso de Intelectuales celebrado en julio del 87 en Valencia en conmemoración de aquel otro acaecido en la misma ciudad hace 50 años, el debate sobre la comunicación era clave -según muchos- para la suerte de sus conclusiones relevantes, cuando la década de los 90 estaba en puertas. En ese debate resultó clave, a su vez, la presencia de Juan Luis Cebrián y Pilar Miró: a diferencia de Enrique Bustamante y Miguel de Moragas, conocidos teóricos progresistas, ambos ex-directores (de ‘‘El País’’ de RTVE) coincidieron en algo sintomático: no dijeron nada. O casi nada, lo que ya fue bastante: que Cebrián se inclinaba por reponer la serie norteamericana ‘‘Falcon Crest’’, y no así Pilar Miró.

He de confesar que mis iniciales reflexiones, al hilo, fueron un tanto ‘‘mecánicas’’: si los directores de los medios en la actualidad más influyentes (cualitativa y cuantitativamente) discrepaban sobre reponer o no la mencionada serie, lo importante no era tanto su adhesión o no a la ideología que las ‘‘telecomedias’’ (‘‘teletragedias’’ más bien, con la crisis) vehiculan: aquella que Adorno ya acotase críticamente, en los años 50 y 60, como ‘‘contribución a legitimar por medio del reconocimiento social una conducta parasitaria’’<sup>(75)</sup>. Antes bien, lo aparentemente curioso era el trueque de posiciones a que parecían obedecer: quien retenía lo cualitativo, con matices de moralía filo-orteguiana, era Pilar Miró, limitándose a enganchar con las palabras previas de Bustamante y a sostener que la imagen -sus técnicas y métodos de elaboración cotidiana- no escapan muchas veces a la más pura ‘‘producción de realidad’’ -no ciñéndose a su mera reproducción- según un sentido (metaindustrial) diseñado de antemano; quien apostaba por enganchar con la ‘‘masa’’, con lo cuantitativo al precio que fuese, era por contra J.L. Cebrián, quien se limitó a dar por bueno el auténtico giro copernicano que Juan Cueto -con anterioridad a Haro Tecglen- venía torneando para mayor gloria de la casa desde la ‘‘Cueva del Dinosaurio’’ en El País Semanal: del miedo a la rebelión de las masas a su reverencia (casi irrestricta) en términos de audiencia. ¿Qué ocurría, entonces? Una vuelta de tuerca más y la reflexión apuntaba otras razones posibles. Ocurría que Miró hablaba, en realidad, pensando en la prensa que recogería sus palabras: no hubiese ganado mucho (políticamen-

te) admitiendo su interés por captar la máxima audiencia, y menos en el marco de aquel Congreso. Mientras Cebrián, como si eso lo tuviese ‘dominado’, hablaba entre paréntesis y ‘en realidad’ de la TV privada que el grupo PRISA-SER aspiraba a gestionar: quizá dejaba ver -aun sólo para expertos, al modo de la casa- lo que quería, pero callaba el para qué (me resisto a creer que en su apuesta por ‘Falcon Crest’ se agoten las intenciones respecto de Canal Plus).

Ambas posturas, la una defensiva (ante la prensa) y la otra de acoso (a la propia Pilar Miró), coincidían así en ocultar lo principal: defendían su política particular de comunicación. Eso sí, con notorio desdén hacia quienes, más allá de la mesa, nutrían el auditorio de la Sala B del Palau de la Música. Obviamente, semejante ‘publicación’ de las políticas así sugeridas por parte de tan señalados directores no tenía por qué afectar sino a los más ingenuos, pues en nada tenían ni tienen que ver con las relaciones propias de la comunicación interpersonal: los medios que dirigía eran y son, no en vano, los de referencia dominante en la *comunicación mediata* asentada.

Pero fue el caso, quizá por ser mayoría los ingenuos entre los asistentes, que éstos acogieron con un sonoro aplauso la agenda de ‘problemas pendientes en comunicación’ expuesta por Moragas Spá, aplauso que atronó en la sala. Con aquel aplauso, que ciertamente venía a sancionar lo que importaba e importa en tal debate (la comunicación no se agota al fin y al cabo con el medio TV), creí ver ratificarse el ‘axioma’ pragmático de la comunicación -adelantado por la Escuela de Palo Alto- que pontifica cómo a la postre la relación califica al contenido (‘no intentes convencer a tu adversario, pues antes contará su condición de tal que tus bienintencionadas razones en ese momento’, en traducción un tanto libre). Aquel aplauso en todo caso, su duración y sonoridad más bien -legitimando un sentido muy otro del aplauso como tal y no como mera fórmula de cortesía a la que los presentes no tenían en principio por qué rendirse-, me pareció dirigido antes *contra* el tándem Miró-Cebrián, representantes del presente-comunicacional-asentado, y no tanto (aunque también) *a favor* de Moragas-Bustamante, al fin y al cabo meros introductores de la comunicación-posible. Sintomático entonces, pero ¿de qué? Creo que no tanto de la distancia existente, por lo que a la comunicación en el capitalismo cercano concierne, entre deseos (teórico-críticos) y realidades (políticas efectivas), sino ante todo de que los presentes no estaban -entre otras cosas- por quienes ocultan, cuando se negocia ‘con información’, sus auténticas preferencias.

Ciertamente, que los medios no son inocuos es algo archisabido aun por los más ingenuos. Pero lo que sigue ignorándose, a demasiados niveles, es que todos los medios siguen alguna política. Política que, pese a serlo ‘de comunicación’, no siempre se define explícitamente (ni en los medios de titularidad pública) y que no siempre es fácil detectar. El referido aplauso tal vez fuese una sonora recriminación, en realidad, *contra la práctica asentada de que los medios de comunicación no informen lo necesario y suficiente, para empezar, sobre ellos mismos* <sup>(76)</sup>. Quizá unido al deseo (frente a lo establecido como ‘dado’, y aparentemente ‘dado para siempre’, según Moragas) de atajar la desigualdad que también en esto se constata. Como intentando revalidar en suma -o quizá sea esa mera presunción personal- un argumento clave olvidado con no menor frecuencia y que es necesario repetir: la libertad de expresión no se discute, o no debiera discutirse por nadie, como principio fundamental de democratización social; pero no cabe ignorar la desigualdad que existe de hecho, para según qué sectores de la población, a la hora de hacer uso efectivo de la misma.

Veamos, pues, qué cabe entender por sistema de comunicación, para luego aproximarnos - siquiera brevemente- al dominante entre nosotros (para lo cual el contexto estatal sigue siendo clave, pues es en relación con tal contexto como unos y otros medios definen todavía su posición relativa de pre-dominio: también en TV).

Por **sistema de comunicación**, sistema cuyas peculiaridades y necesidades suelen desconocerse incluso por muchos de los que viven directamente de/para él, entenderemos aquí un complejo, “tensionado” política y económicamente e históricamente condicionado, que integra diversos elementos co-determinantes de las realidades comunicativas que se vertebran en cada formación social o sociedad concreta, y que serán de nuestro interés de análisis (así explicitado) en tanto que elementos ligados a “necesidades” que tienen que ver tanto con “intereses públicos” (acceso a los canales de información, aportación de datos necesarios para la toma de decisiones y de “material informativo” sujeto a fines educativos y culturales, políticos y económicos, etc.) como con intereses “privados” (ligados no sólo al control político de sus utilidades como medios sino también, normalmente, al usufructo con criterios de dominio de dicho sistema y, a través de él, del sistema político y económico en que se inserta).

Para el análisis de dichos *elementos* resultará particularmente oportuno señalar algunos de los **problemas** más relevantes, que tanto el Gobierno como las organizaciones privadas a buen seguro tomarán en cuenta al decidir las políticas de comunicación (ya explícitas o implícitas) que -en su entrecruzamiento dinámico- habrán de configurar el sistema en la práctica. A tal entendimiento se acompaña, en Cuadro adjunto, una mínima sistematización (valga la redundancia) de tales elementos y problemas, con un aparatage categorial y una metodología (cuasi didáctica) que bien podría aceptarse por todos los interesados en un sistema comunicacional **mixto** como el nuestro, en el que coexisten medios públicos y privados. Tal aceptación cabe presumirla, por demás, al arrancar de un trabajo escrito por E. Lloyd Sommerland, a la sazón máximo responsable de la División de Investigación y Política de la Comunicación de la UNESCO, organización habituada a tener que vérselas con la suficiente cautela para no encrespar los ánimos de los partidarios acérrimos de una u otra parte <sup>(77)</sup>.

Una matización nada menor, en cualquier caso, parece imponerse. Las partes implicadas no se han de entender -obviamente- al modo maniqueísta: de igual modo que las políticas oficiales de comunicación deberían ser en principio explícitas pero no siempre ocurre así (ya global o parcialmente), y que con idéntica relatividad se involucran en el sistema las políticas privadas (en principio implícitas), no es menos cierto que el único *abono* declarado ante los públicos por ambas partes (normalmente sobre la tensión ideológica “servicio público”/“independencia-objetividad informativas”) termina por sembrar suficientes dudas entre los inexpertos como para que la ambigüedad calculada sea, también en esto y dentro de un sistema mixto, recurso en cierto modo inevitable.

Así conceptualizado a priori (y por tanto teóricamente) un sistema de comunicación, nos interesará ahora retomar aquél que, en la práctica y de modo concreto, quepa entender como **sistema dominante en el Estado español**, empezando ya por acotarlo -según una aproximación heurística interesada- a los medios de comunicación “mediata” que aquí (por incluir al medio TV) más nos importan. Precisamente por ello, al no afectar al núcleo del sistema de comunicación “dominante”

ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACION (\*)

1. COMUNICACION PUNTO A PUNTO:

Producción y transmisión de mensajes (tanto privados como públicos) desde el remitente, hasta un destinatario o destinatarios precisos.

- La distancia no tiene porqué ser un obstáculo.
- Aunque no se incluyen todavía los que después se llamarán "servicios de valor añadido" (teletexto, videotelefono, etc).
- La telemática es un acoplamiento state mático eficaz mediante un plan global integrado de redesondas cable y satélite) puede acercar el servicio "público y/o privado" de los medios "punto a punto" a los servicios de los medios de "dis tribución".

2. MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

ELEMENTOS (básicos)

- Servicio Postal o de correo (va. de Mensajería).
- Servicios telefónicos
- Servicios telefónicos

- Diarios, revistas y otros medios impresos públicos

- Radio y Televisión (convencionales)

- Presuponen el empleo del espectro radio- eléctrico, un recurso natural limitado y regulado por acuerdos internacionales.
- El caso concreto de la radio se entiende que incluye a la industria discográfica (en la actualidad todavía dependiente de aque lla en un altísimo porcentaje).

- TV por cable (implementa o alternativa/com- petencia a la emisión de TV por ondas).

- Satélites de telecomunicación (transmiten pro- gramas que pueden ser captados directa- mente por los receptores -normalmente - comunitarios- de TV. No se alude, por - tanto, a los que proporcionarían algún servi- cio de un punto a otro).

- Cine y otros medios audiovisuales (video, etc).  
- El cine es, a la vez, medio de expresión artística, medio de comunicación y una - operación industrial en toda regla.

- Libros

- Son el más permanente de todos los me- dios de comunicación social.

3. COMUNICACION INTERPERSONAL

Si bien es cierto que la mayor parte de la comunicación interpersonal directa se pro- duce en privado (entre individuos, en fami- lia o en grupos de carácter no formal), hay muchas cauces interpersonales organizados que forman parte del sistema público de co- municación.

4. SERVICIOS AUXILIARES Y RECURSOS HUMANOS

Los canales de comunicación que trans- miten el mensaje, ya sea un punto a otro, con carácter interpersonal o los medios de comunicación social, depen- den de toda una serie de servicios au- xiliares y sobre todo de la existencia de unos recursos humanos organizados y es- pectados. Esos recursos y servicios for- man parte de la infraestructura de comu- nicación.

- Artes del espectáculo (teatro, grupos itinerantes de danza o canto, marionetas, etc).
- Reuniones públicas (debates, teleclubs, tribunales radiofónicos, etc.)
- Educación de adultos y sistema educativo no for- mal
- Servicios oficiales de información y desarrollo (oficinas jurídicas, OMIC, "servicios de extensión" agraria, sanitarios, etc.)

- Agencias de noticias (es básica su relación con el Gobierno)
- Infraestructuras de la impresión (industria gráfica)
- Servicios de información (tanto oficiales como par- ticulares: administraciones públicas, empresas, - sindicatos, partidos, bancos, grandes empresas...)
- Bibliotecas y sistemas de información/proceso de datos.
- Formación y personal
- Investigaciones en materia de comunicación
- Asociaciones profesionales
- Publicidad y promoción (cuestión esencial)

CARACTERISTICAS (remarcables a términos de pol. instit.)

- La tendencia convergente de la tecnología de la co- municación y la de los ordenadores informáticos (dan do lugar a la llamada "telemática") puede favorecer un "sistema de información de un punto a otro" útil y viable.
- en actividades de investigación, negocios-industria, de fensa y administración pública: se puede ya emplear para reserva de billetes de avión o tren y habitacio- nes de hotel, cotizaciones bursátiles, actividades bus- cas, informes sobre créditos, diagnósticos médicos, investigaciones jurídicas e intercambio y acceso a di- tancia de la información y documentación científica.

- Precio de venta: inferior al de producción. ¿el déficit se cubre con publicidad o la venta y/o mediante algún tipo de subven- ción?
- Razón de ser: Ilucrativa y/o de prestigio e influen- cia?
- Tipo de propie- dad: Individual/familiar, de empresa, ins- titucional (partidos, sindicatos, mili- tares, grupos religiosos), de la admi- nistración pública, de fundaciones, cooperativas de trabajadores...
- Sistema de cir- culación y publi- cidad: Los grandes periódicos se limitan a los centros urbanos (población y pu- blicidad van cuantitativamente de la mano)

- Propiedad (monopolio público o coexistencia de de emisoras públicas y privadas) (publicidad y/o subvenciones - ca- sual)
- Financiación
- Autorizaciones (según ley)
- Normas técnicas condicionantes (amplitud y/o modu- lación de las frecuencias -radio-, línea por pulgada y sistema de cy- los -TV-, localización, potencia y características de transmisión -en ambos casos-).
- Distribución: política "centralización/descentru- lización"
- Contenidos: programación según objetivos del servicio y entendimiento del público receptor homogéneo/diversificado. producción (por la propia organizac- ión o/ por clientes comerciales o contratados). publicidad (cuando está permitido)

- la TV por cable, históricamente condicionada por la - producción/importación de programas "remotos", per- mite posibilidades de descentralización (incluso local) del mismo modo que, con una integración sistemática adecuada, permite establecer una comunicación inter- activa de doble sentido para una serie de servicios (a- formativos multi-medios (tanto públicos como priva- dos).
- Las formas de control (centralizado vs. descentraliza- do), de propiedad (pública, privada o mixta), la finan- ciación (publicidad y/o canón) y la programación (com- petitiva o complementaria) serán factores decisivos, - junto a la infraestructura técnica posible (número de canales)

- El satélite es en sí un elemento más de un sistema de KIV, que ha de ser coordinado y planificado (tra- tando los elementos de su sistema estarán: uno o más satélites en órbita; estaciones de transmisión y con- trol; instalaciones de recepción compartida; fuentes de energía; servicios de mantenimiento y reparación; producción y administración del sistema; personal y formación).
- La capacidad y concepción técnica del sistema varia- rán en función de las necesidades (públicas y/o priva- das, del primer tipo normalmente). Así, el sistema de TV estará vinculado al sistema de TV terrestre - (siendo distribuido su programación mediante retrans- misores clásicos o por cable), o bien será de recep- ción directa (vía antenas parabólicas).

- Categorías y tipos de películas son muy numerosas - en cinematografías, pero en todos ellas destacan las tres vertientes claves: producción distribución proyección
- Entre los otros medios que llenan que ver, industria- mente, con la grabación y producción de sonidos e - imágenes (dispositivos, cassettes, etc) destacan las tecnologías de grabación fonóptica de las que el VI- DEO, (VTR), es su logro más popularizado en estas fe- chas.

- Son elementos centrales de la industria del libro: a) Autores, compiladores y preparadores de textos, traductores, diseñadores, ilustradores. b) Impresores y editores c) distribuidores d) librerías e) bibliotecas

- Papel esencialmente cultural y educativo (en senti- do amplio).
- Suelen ser "materia prima" para la información difun- dida por los medios de comunicación social, pero re- ta por profundizarse en las relaciones que con algu- nos de ellos cabe observar (teatro y cine, espectácu- los musicales y video, etc).

(No se entra aquí en detallarlas)

PROBLEMAS DE POLITICA COMUNICACIONAL (normativa)

1. Institucionalización del desarrollo integrado del subsistema. ¿Cuál?
2. ¿Qué instituciones facilitarían los servicios interactivos de información, documentación y educación?
3. ¿Se integran, y cómo serán sus relaciones, el teléfono, las redes de transmisión de da- tos y la (posible) televisión por cable?
4. ¿Continúa al respecto también, algún satélite? ¿Nacional o "regional europeo"? ¿Quién lo gestionaría?
5. ¿Procede autorizar a "usuarios importantes" como Fuerzas Armadas, Agencias de Noticias, Empresas de Radiotelevisión, para crear sus propias redes de comunicación o distribución "punto a punto"? ¿Con qué límites, aparte de los derivados de acuerdos internacionales?
6. Controlar el acceso a los datos telemáticos. ¿Cuáles y quién?
7. Protección a dar para (a exigir por) los intereses - creados.

1. ¿La propiedad es, con carácter mayoritario, institucional, privada o cooperativa?
2. ¿Se imponen restricciones a la propiedad extranjera y a las cadenas multi-medios?
3. ¿Se dedica el Gobierno, explícitamente, a actividades editoriales en este terreno?
4. ¿Se subvencionan los periódicos y/o se les ayuda de otros modos?
5. ¿Puede estar la prensa (mayoritariamente) en condiciones de ser una "adversaria del Gobierno" (aun si es minoritaria)?
6. ¿Está el contenido directamente controlado o sometido a cualquier otra forma de in- tervención social?

1. ¿Coexisten emisoras públicas y privadas según una política explícita estatal? ¿Deben desde- pender influir en su definición implícita, por omisión de acción, las emisoras privadas?
2. ¿La red de distribución es única? ¿Qué limitaciones de uso compartido debe en caso con- trario?
3. ¿Existe alguna exigencia legal que garantice un "informe" en la programación en función de los intereses públicos? ¿también para las emisoras privadas?
4. ¿Se deja/puede dejarse al arbitrio de las emisoras el volumen, contenido, presentación y momento de difusión de la publicidad (aun "autocontrolada" ésta por organismos profesio- nales o de usuarios de creación voluntaria)?
5. ¿Pueden ser obligatorias o estar prohibidas las emisiones en determinadas lenguas?
6. ¿Existen exigencias especiales paralelas, en las emisoras (públicas y privadas), para la transmisión de temas políticos (en periodo electoral) y ciertas clases de publicidad la di- nital?
7. ¿Cabe estimular por vía legal, la cultura y creatividad autóctona? ¿Se imponen o pueden imponerse restricciones/condiciones a la programación extranjera y/o nacional?
8. ¿Cabe la posibilidad de que se patrocinen publicitariamente programas completos? ¿o de- pensar en limitaciones?
9. Los programas radiofónicos/televisivos "de acceso público", contemplan el derecho de re- plica de modo inmediato? ¿Qué salvaguardias son las acordadas para filtrar y acallar los elementos indeseables?
10. ¿Existen previsiones oficiales concretas ante la presión tecnológica en "miga" y "maquina" de comunicación?

1. ¿Qué potencialidades de servicio, en materia de participación y descentralización, se están en disposición de autorizar, apoyar y potenciar?
2. ¿Cabe constituir una asociación de intereses públicos y/o privados para su puesta en ma- cha?
3. ¿Qué diversificación en la programación y qué formas de acceso cabe plantearse?
4. ¿Cabe definir formas de control (autorizaciones u otras) plausibles y eficaces? ¿y una "co- rridad de control"?
5. ¿Que conexiones con otras redes de cable, y, sobre todo, que integración por e la dipo- nible (y por qué motivos) en cuanto a la relación que ha de existir entre el sistema de ca- ble y la radiotelevisión por ondas?

1. ¿A qué proporción de la población total, especialmente en los zonas rurales y más aparta- das, se desea o se puede llegar?
2. ¿Qué limitaciones tiene la recepción directa compartida?
3. ¿Qué parte del material podrá fabricarse localmente, sin incrementar la dependencia tec- nológica? ¿Habrá personal autóctono capacitado?
4. ¿Es su costo económicamente factible? ¿Cabe compararlo en cuanto a coste/beneficio, con otros sistemas de distribución de programas TV?
5. ¿Cabe asociarse con países vecinos para financiar el sistema? ¿Y salvar las obstáculos bá- sicos (tradiciones y valores culturales cercanos, lenguas, sistemas escolares compartimen- tes)?
6. ¿Qué posición podrá defenderse por las autoridades en asunto de patentes y frecuencias, dado que los acuerdos internacionales se plantean ineludibles al traspasar las fronteras na- cionales?

1. ¿Cómo relacionar el cine y los otros medios, sobre todo el video, con la TV?
2. ¿En qué medida fomentar un aindustria nacional de cine comercial?
3. Restricciones que procede imponer a las películas importadas.
4. ¿Cabe la producción oficial en cine, video, etc? ¿Al servicio de qué fines? ¿con qué li- mitaciones?
5. ¿Qué límites de protección de "derechos de autor" establecer?
6. ¿Cabe regular, y cómo, los videos comunitarios?
7. ¿Qué posibilidades existen de un desarrollo coordinado de los servicios públicos de pro- yección, archivo de cine y video con los servicios tradicionales de biblioteca, documen- tación y archivo?

(\*) Resolución concreta de los problemas "tradicionales" del sector: derechos, de publica- ción y de autor, abaratamiento de las técnicas de producción/distribución, política de subvenciones u otros apoyos públicos, optimización de su relación estrecha con el sis- tema educativo, etc.

(\*\*) Las cuestiones de política relativas a la comunicación interpersonal, según Sommerlad, giran en torno a la medida en la cual "procederá utilizar y organizar esta forma de co- municación y ensaumarla con otras partes del sistema".

En cierto modo, están más de lleno dentro de una "política educativa" que no propiamente dentro de una comunicacional.

1. ¿Agencia oficial y única de noticias? ¿A efectos de control o por abaratamiento de cos- tes?
2. ¿Qué política seguir con relación al papel prensa, materia prima fundamental en el siste- ma?
3. ¿Qué modelo (comunicacional o propagandístico) promover en los servicios oficiales de información?
4. ¿Se fomentará la introducción en el sistema público de bibliotecas y procesamiento de datos? ¿Quién y como coordinar dicho sistema?
5. ¿Cabe descentralizar procesos de formación? ¿Debe haber programas de formación en los centros docentes y en otras instituciones, para que los "consumidores/usuarios" de los me- dios de comunicación social tengan o puedan adquirir una capacidad crítica?
6. ¿Cabe contrapesar con fondos públicos el predominio de la investigación en comunicación con fines comerciales? ¿Cómo evaluar las "necesidades" del sistema? ¿Y las oportunda- des (y cauces adecuados) de participación y acceso público?
7. Hay presencia sindical entre impresores, periodistas, técnicos de radio y TV... los em- plearios propietarios, aun compitiendo entre sí, tienen otros intereses comunes... ¿cómo se organizarán los "usuarios" de los medios y qué "audiencia" se les dará? ¿Han de limi- tarse a observar los contenidos de la publicidad?
8. La publicidad ¿debe estar autorizada en los servicios públicos de comunicación social? De estudio, ¿debe restringirse en aspectos peculiares con relación a la salud pública, la espe- culación, etc? ¿En virtud de ley o por los propios medios?

(\*) Fuente: E. LLOYD SOMMERLAD. Y reelaboración (parcial) propia.

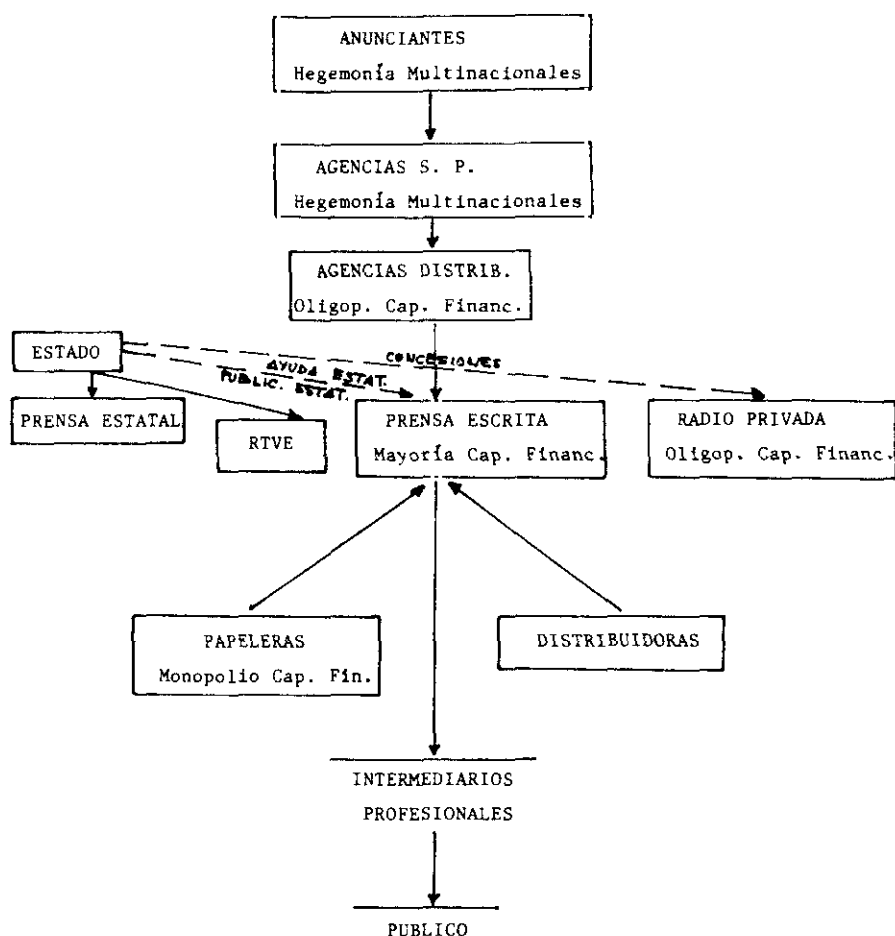
No ha de escaparse al lector el fuerte contenido "centralista" que se deriva de esta concepción, de Sommerlad, de lo que es un sistema de comunicación. Infinitamente adaptada por un sí bien tan sólo al objeto de resaltar los problemas -en su mayoría ya - apuntados por él- más directamente ligados a una realidad "mixta" de dicho sistema). Tarea nuestra será "descentralizarlo", en páginas sucesivas.

es que podemos pasar por alto (ahora) las lagunas más obvias del Cuadro anterior (de 1975, recordemos), pues deja de lado los medios propios de lo que se conceptualizaría con el tiempo como “micro” y “mesocomunicación”. Al decir *dominante*, por cierto, aludimos a posiciones privilegiadas en las relaciones de desigualdad constatadas en el funcionamiento efectivo del sistema, sin querer caer en el apriorismo ideológico que conceptúa lo dominante -sin más- en sentido despectivo: no siempre ha sido ni es así desde los intereses de los públicos (queremos creer).

La investigación llevada a cabo por Enrique Bustamante en relación con el sistema de comunicación “mediata” dominante en España (en línea con lo avanzado por Mattelart para el caso francés o por Schiller para el estadounidense) me parece, dada nuestra perspectiva, ineludible. No se trata ahora de retomar al pie de la letra sus (básicas) aportaciones: que arrancan de “Los amos de la información en España”, obra ya citada y que publicase la editorial Akal en 1982, y que por el momento culminan en la fundamental “Las industrias culturales en España” (Akal, 1988), donde junto con Ramón Zallo -autor de una Tesis doctoral no menos relevante<sup>(78)</sup>- se compilan diversas investigaciones relativas a los subsectores claves de la ecología massmediática que más importa: prensa escrita-industria editorial, radio-industria discográfica, TV-industria cinematográfica y, como soporte de todos ellos, el mundo de la publicidad. Estudios, por demás, a los que cabría añadir el más reciente de Daniel Jones sobre la industria videográfica en España (revista “Telos”, nº 21, 1990).

El sistema de comunicación mediata dominante en España, en todo caso, se religa por Bustamante desde la economía política -como parece pertinente, por mucho que les duela a los partidarios de las teorías mitológicas sobre el “cuarto poder”- a la progresiva consolidación del proceso de internacionalización del capital comenzado en los años 50 y jerarquizado, como entonces, en clara correlación con la mayor presión “liberalizadora” en los escalones básicos: anunciantes, agencias de servicios publicitarios y propietarios de los medios (por este orden). Bustamante lo sintetizaba gráficamente como sigue:

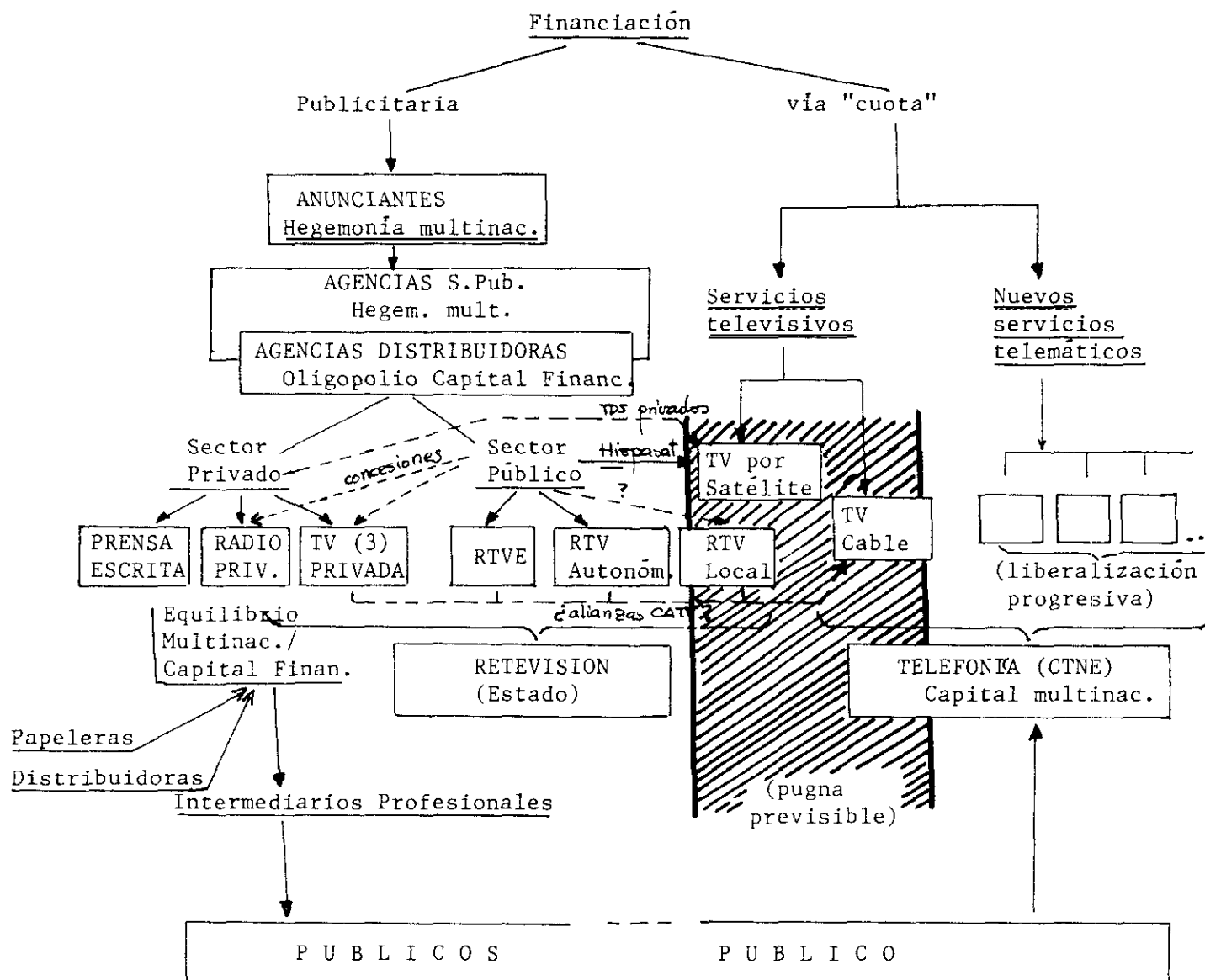




Lo anterior no ha de traducirse, por cierto, como “constante imposición de cada centro de poder sobre sus inferiores”, sino básica y más eficazmente como *contagio progresivo* a los medios de sus propios valores y técnicas de “producción de realidad” (de ahí la creciente comercialización de la programación informativa). El equilibrio entre capital multinacional y clase dominante nacional, patente al comienzo de la presente década, se trocaría por otra parte -con el nuevo asalto desregularizador propio de los 80 y el “plus” comercializante que supone el ingreso en la CE- en una alianza reconducida a mayores cotas de concentración e internacionalización de las industria culturales del sector “Comunicación y Ocio” (en consonancia con las pautas sociales y políticas que todo ello presupone). De ahí la reconducción que aquí formulamos del esquema de Bustamante en consonancia con las nuevas realidades del sistema de comunicación ‘mediata’ apreciable en el arranque de la década de los 90:

PROSPECTIVA DEL PODER INFORMATIVO EN ESPAÑA (AÑOS 90).

=====



Fuente: Elaboración propia, a partir de E. Bustamante (ob. cit).

El mismo Bustamante ya enfatizaba en 1982, no obstante, que “el panorama no es sin embargo homogéneo, ni puede serlo. El desarrollo de las audiencias y el mismo nivel de concentración varían innegablemente de unas zonas a otras [...] como lo es por otra parte el propio desarrollo económico”. Y añadía: “la situación apunta más allá de una simple desigualdad informativa. A ella viene a sumarse un acentuado colonialismo interior caracterizado por amplios flujos informativos que corren en un solo sentido: del <centro> a la <periferia> del sistema del país, [siendo en los medios audiovisuales] donde esa tendencia a una centralización creciente del control y una descentralización de la recepción se contemplan más nítidamente”... De ahí que importe aproximarse, al menos a grandes líneas, a las peculiaridades y necesidades contingentes que pueden rastrearse en la concreción del anterior sistema dominante por lo que hace al País Valenciano (más o menos colonizado interiormente, más o menos realmente autonómico).

### **2.2.1. Comunidad Valenciana y subordinación audiovisual: Para una política autonómica en TV.**

La particularización del ‘sistema’ por lo que a la Comunidad Valenciana se refiere, de entrada, es conocida en cierto modo en cuanto a sus agentes fundamentales <sup>(79)</sup>, pero deficiente en el análisis, precisamente, de su dependencia o subordinación por ‘sistema’. Razón por lo que esto último se antepondrá en el interés de nuestra aproximación (al ser ahí donde RTVV recobra no ya su valor de presente sino, ante todo, de futuro inmediato).

No habrá que callar, de entrada, lo que es moneda bastante común entre los profesionales valencianos de la información: la más que notoria ausencia de un periódico de difusión comunitaria estricta, la provincialidad -cuando no el ‘localismo’ capitalino- como ‘marca’ diferencial de la comunicación massmediática en el País Valenciano. Como lo es, desde la Administración Autonómica, que se resalte el predominio por emisoras que emiten en cadena nacional (pública o privadas) en cuanto a la ocupación del espacio radioeléctrico comunitario.

Pero ambos son aspectos no tanto paradójicos cuanto obedientes a la esencia “comercializante” que recorre progresivamente el sistema de comunicación en España: una esencia dominante (es decir, unos intereses concretos, ya políticos o económicos, sostenidos y defendidos por gente con nombre y apellidos) que no apuesta precisamente por la regionalización en prensa escrita y que centra la batalla del audiovisual antes en TV que no en radio. La misma ‘esencia’, quizá, que impide a los profesionales decirlo a las claras, esclavos como están de expectativas ligadas al propio desarrollo del sistema.

Así, junto a la revista “El Temps” (el otro medio escrito de alcance realmente comunitario, pero atípico en no menor medida que atípico resulta desde hace mucho el posicionamiento de esa burguesía valenciana con auténtico poder decisorio, en éste como en otros temas de calado finalmente político), el matutino madrileño “El País” es el único que supera -desde una óptica tanto cualitativa como cuantitativa- difusiones “limitadas” a los ámbitos local-comarcales o provinciales. Su atención a la Comunidad Valenciana -pese a la reciente y corta ampliación de las dos páginas con publicidad a diario, y sólo una los festivos, con que hasta la fecha venía editándose-

difiere sin embargo de la atención dedicada en porcentaje de emisión por las emisoras de radio del grupo (100 % en SER FM y Radio minuto, 40% en Cadena SER-OM), La diferencia pudiera obedecer sin duda al diverso *índice de consumo de información* que hacen los valencianos de uno u otro medio (prensa escrita vs. radio). Pues según datos para 1985 de la empresa Estudio General de Medios S.A. -como es sabido patrocinada por las propias agencias publicitarias- los valencianos ocuparían el 6º lugar del ranking estatal en cuanto a lectura de prensa (24,6% de la población valenciana, frente al 30,2% español) pero no así en audiencia media semanal de radio, en que se ocuparía el 4º lugar (52,9% frente al promedio estatal del 56,5%). Puesto relativo este último, por cierto, que sería similar para el medio TV.

Todo ello es conocido por la Generalitat, institución promotora al fin y al cabo de la inversión pública RTVV. Los anteriores datos, de hecho, fueron dados a conocer públicamente por la propia Dirección General de Medios de Comunicación Social (DGMCS), consciente de la falta de adecuación del 'sistema' dominante al nuevo Estado Autonómico, especialmente en el terreno audiovisual<sup>(80)</sup>. Pero su titular por entonces, María Gª-Lliberós, apenas avanzaría -''puertas afuera'' cuando menos- sino una síntesis en exceso *descriptivista* sobre la ''estructura productiva'' de los medios en la Comunidad Valenciana. Una 'estructura' que en todo caso conviene recoger, al enmarcarse en el debate oficial sobre ''modernización y futuro'' (1986) que aquí importará no descuidar.

La ''Agenda de la Comunicación'' publicada por la dirección general de Relaciones Informativas del ministerio del Portavoz del Gobierno, en su edición de 1989, se limitaba a un entendimiento que centraba su interés -de modo significativo- en los siguientes medios:

#### AGENCIA EFE:

Delegación de Levante (V)

#### DIARIOS Y REVISTAS:

Información (A)

La Verdad (edic. A)

Ciudad de Alcoy

Canfali (Benidorm)

Mundo Informativo (A)

Mediterráneo (C)

Castellón Diario (C)

Las Provincias (V)

Levante (V)

Hoja del Lunes de Valencia (V)

Noticia 7 (Xàtiva)

## COMUNIDAD VALENCIANA

## Medios de información en la actualidad

## PRENSA

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las Provincias/Levante (V)</li> <li>- Hoja del Lunes (V)</li> <li>• Información/ La Verdad (A)</li> <li>• Mediterráneo/Castellón D. (C)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El País</li> <li>- El Temps</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elche</li> <li>- Ciudad (Alcoí)</li> <li>- Canfali (Marina Alta)</li> <li>" (Marina Baixa)</li> <li>" (Vega Baixa)</li> <li>- El Tossal (Benidorm)</li> <li>- Ribera Alta</li> <li>- B.I.M. (unos 140)</li> </ul>

- Diarios
- No diarios

## OTRAS PUBLICACIONES PERIODICAS:

- De género, especializadas, etc:  
Cartelera Turia, Valencia Fruits,  
Saó, Debats, Trajín, La Voz de la  
Empresa...
- Publicaciones de la Generalitat:  
Revista de Estudios Autonómicos,  
Butlletí d'Economia, Revista de  
Treball, Palau-14, etc...

## RADIO

Cadenas públicas:	RNE RCE
Cadenas privadas:	SER / (RM) Antena 3 R. Popular (COPE) Rueda Rato Radio Color
No en cadena:	(C) R. Nueva (Vinaroz) (V) R. Onteniente R. Requena Intervalencia R. (A) R. Elche R. Benidorm R. Orihuela R. Elda R. Valle de Elda
Emisoras libres (no comerciales):	unas 20...
Emisoras piratas (con ingresos publicitarios):	R. Canfali, R. Benicarló, etc...

## TELEVISION

TVE - 1	(1960)
TVE - 2	(1966)
..... Centro Regional RTVE en CV (1971)	... Programa "Aitana" (1974)
TV3	(1986)
TV locales:	unas 30...

- Difusión comunitaria
- ▨ Difusión provincial
- ▧ Difusión comarcal
- Difusión local

Fuente: Datos DGMCS, diciembre 1985 (Actualizados por la propia DGMCS en "La informació a la Comunitat Valenciana", 1987).

## RADIO:

RNE	(Alicante, Elche) (Castellón) (Valencia, Utiel)
SER	(Alicante, Elche, Alcoy, Villena, Denia) (Castellón) (Valencia (3), Alzira, Gandía)
ANTENA 3	(Alicante, Alcoy) (Castellón, Vall d'Uxó) (Valencia, Xàtiva, Gandía)
COPE	(Alicante) (Villareal) (Valencia)
RADIO 80	(Alicante) (Valencia)
R. RATO	(Villajoyosa) (Castellón) (Valencia, Alzira, Sagunto)
R. COLOR	(Alcoy) (Valencia)
INTER	(Valencia, Onteniente)

OTRAS:	(A)	(V)	(C)
	R. Benidorm	R. L'Horta	Antena Mediterr.
	R. Costablanca		
	R. Elche		
	R. Elda		
	R. Orihuela		

## TELEVISION:

Ente Público RTVV (V)  
TVE SA, Centro Territorial (V)  
TV-3 (V)

## AGENCIAS PUBLICITARIAS:

Alas Bates (V)  
Arge SA Publicidad (A,V)  
Base (A)  
Cheddy & Zoster (A)  
Cid SA (V)  
Clarín Publicidad SA (V)

Clave & Mc Servan Publicidad (V)  
 Delvico/Bates SA (V)  
 ESOC SL (A)  
 Lineacolor Publicidad SL (V)  
 Linea Delta Publicidad (Benidorm)  
 Presim Publicidad (A)  
 Rosalina Lasso de la Vega. Gestión de Medios (V)

#### ASOCIACIONES PROFESIONALES:

Asociación de la Prensa (A, V)  
 Unión de Periodistas del País Valenciano (V)  
 Asociación de Periodistas del Mediterráneo (secc. España) (V)  
 Asociación Alicant de Periodistas y Escritores de Turismo (A)  
 Asociación Valenciana de Profesionales de RR. Públicas (V)  
 Asociación de Agentes de Publicidad (A,V)  
 Asociación Provincial de Empresarios de Publicidad (C)  
 Asociación de Agencias de Publicidad (A)

En tal relación -sintomática de la visión “oficial” de la Comunidad Valenciana desde Madrid- se caen medios escritos tan significativos como las delegaciones de diarios nacionales como “El País” o las corresponsalías de diarios (ABC, El Independiente, Diario 16, etc) o revistas (Grupo Z, especialmente) igualmente nacionales. Pudiera parecer que ello obedece a la propia estructuración de la “Agenda” (para el uso centralizado de distintos medios observados al modo administrativista, es decir: por CC.AA. y dentro de éstas por provincias). Pero no parece ser el caso, pues sin necesidad de ‘cambiar de lente’ igualmente se caen medios tan significativos como el “Diario Elche”, junto a ‘diarios’ como los editados en lengua extranjera, especialmente claves para los residentes o turistas en la franja costera alicantina. Es el caso de los actualmente once periódicos en lengua extranjera que se editan entre Benissa y Benidorm: 3 en alemán y otros 3 en holandés, en torno a la ciudad de Calpe, así como otros 3 en inglés, 1 escandinavo y 1 francés, que se editan en la zona de Benidorm-Altea; ello sin contar con la Spanihs Press International Agency (SPIA) y la Spanihs Photo Internacional Agency, fundadas en Valencia en 1989. Otro tanto sucede con revistas como “El Temps”, “Saó”, “La Voz de la Empresa” o “Cartelera Turia” y con ‘semanarios’ no menos populares como “Trajín” o “Segunda mano”, todo ello en Valencia... Por no hablar, naturalmente, de los *otros medios*, ya legalizados (los más de 100 Boletines de Información Municipal ya existentes en la Comunidad) o alegalas, entre los que destacan vídeos comunitarios tan significados como “TeleElx” -paradigmático aun fuera del País Valenciano- y, dentro del mismo audiovisual todavía al margen de la oficialidad que caracteriza a la mencionada “Agenda”, no pocas TV o emisoras de radio locales: cuestión a retomar más de cerca, por lo que nos interesa (su eventual participación en una política audiovisual realmente autonómica) en el Capítulo III.

Con todo y pese a que ni están todos los que son ni son, como quien dice, todos los que están, tal y como evidencian los propios datos de la Generalitat Valenciana, ante todo en prensa y radio por

## PREMSA

### Publicacions i tiratge

	Alicant	Castelló	València	C. Valenciana
<b>Publicacions</b>				
Total				
1985	38	26	87	151
1986	-	-	-	174
1987	40	34	137	211
1988	-	-	-	-
1989	79	68	188	335
Prensa institucional				
1985	25	14	74	113
1986	-	-	-	106
1987	23	9	95	127
1988	-	-	-	-
1989	25	27	110	162
Prensa privada				
1985	13	12	13	38
1986	-	-	-	68
1987	17	25	42	84
1988	-	-	-	-
1989	54	41	78	173
<b>Tiratge</b>				
Total				
1985	19.616.400	4.863.000	45.079.600	69.559.000
1986	-	-	-	66.893.472
1987	19.918.604	4.854.110	54.108.838	78.881.552
1988	-	-	-	-
1989	29.097.520	6.155.655	71.513.802	106.766.977
Prensa institucional				
1985	616.400	363.100	1.863.200	2.842.700
1986	-	-	-	2.886.490
1987	553.290	224.600	1.988.100	2.765.990
1988	-	-	-	-
1989	664.500	519.000	2.843.750	4.027.250
Prensa privada				
1985	19.000.000	4.500.000	42.600.000	66.100.000
1986	-	-	-	64.006.982
1987	19.365.314	4.629.510	52.120.738	76.115.562
1988	-	-	-	-
1989	28.433.020	5.636.655	68.670.052	102.739.727

Font: Generalitat Valenciana, Presidència, D. G. de Mitjans de Comunicació

### Prensa diària: diaris principals

	difusió mitjana				
	1985	1986	1987 <sup>1</sup>	1988 <sup>2</sup>	1989 <sup>3</sup>
Provincias	55.571	57.222	54.940	56.498	203.470
Levante	26.501	24.432	27.901	27.384	224.730
El País, Comu. Valen.	-	27.514	-	-	133.620
Información	28.005	29.475	31.777	30.979	167.030
La Verdad (Alicant)	12.980	12.595	12.852	39.618 <sup>4</sup>	45.550
Mediterráneo	6.350	6.530	6.757	6.662	-
Castellón Diario	4.442	4.348	4.492	4.230	-
Hoja del Lunes (Val.)	89.462	90.254	87.572	88.791	410.000

Font: OJD, Oficina de Justificación de la Difusión, *Guía de los medios*  
 Generalitat Valenciana, Presidència, D. G. de Mitjans de Comunicació  
<sup>1</sup> OJD de febrer-març de 1987  
<sup>2</sup> OJD de gener-juny de 1988  
<sup>3</sup> Inclou les edicions d'Alicant, Murcia, Albacete, Elx i Cartagena  
<sup>4</sup> E.G.M.

## RADIO

### Emissores autoritzades amb instal·lacions a la Comunitat Valenciana

Any 1990

	Alicant	Castelló	València	C. Valenciana
<b>Total</b>	25	11	26	62
<b>En cadena</b>				
RCE	-	-	-	-
Antena 3	3	2	4	9
COPE	2	2	2	6
RATO	1	1	4	6
SER	9	2	8	19
RNE	5	1	5	11
RAV (Canal 9)	1	1	1	3
<b>No en cadena</b>	4	2	2	8

Font: Generalitat Valenciana, Presidència, D. G. de Mitjans de Comunicació

### Emissores autoritzades amb instal·lacions a la Comunitat Valenciana: Ona Mitjana i Freqüència Modulada

Any 1990

	Ona Mitjana (OM)	Freqüència Modulada (FM)	Total
<b>Total</b>	13	49	62
<b>En cadena</b>			
RNE	3	8	11
RCE	-	-	-
Antena 3	0	9	9
COPE	3	3	6
RATO	0	6	6
SER	7	12	19
RAV (Canal 9)	0	3	3
<b>No en cadena</b>	0	8	8

Font: Generalitat Valenciana, Presidència, D. G. de Mitjans de Comunicació  
 Considerem tres emissors de RNE, tot i que disposa de vuit reemissors al nostre territori

### Nivells d'audiència

	milers de persones majors de 15 anys			
	Alicant	Castelló	València	C. Valenciana
<b>Ona Mitjana</b>				
1985	-	-	-	624
1986	-	-	-	523
1987	147	60	246	543
1988	-	-	-	475
1989	-	-	-	462
<b>Freqüència Modulada</b>				
1985	-	-	-	1.070
1986	-	-	-	977
1987	260	117	544	923
1988	-	-	-	983
1989	-	-	-	1.118

Font: Generalitat Valenciana, Presidència, D. G. de Mitjans de Comunicació EGM (vans anys).

Fuente: "Anuari Estadístic de la Comunitat Valenciana", 1989.  
 (Instituto Valenciano de Estadística).



lo que a nº de publicaciones, tirada y difusión media (en prensa escrita) y emisoras autorizadas y niveles de audiencia (en radio) se refiere. Lo que cabe referir a los gráficos que se acompañan.

Algunas evidencias, no obstante, son manifiestas a su través: como la relegación de Castellón en casi todos los órdenes, o la bipolaridad manifiesta -en éste como en otros órdenes- entre Alicante (pese a que una jerarquía de ciudades más equilibrada 'permite' en tal provincia una mayor pluralidad en Radio) y Valencia (con la constatación, no menos diferencial, de capitalizar el centralismo interautonómico por lo que al medio TV y al grueso de las agencias publicitarias, pocas de ellas autóctonas, atañe).

Junto a la pervivencia de iniciativas tradicionales, caso del diario conservador y decano en la ciudad de Valencia "Las Provincias", controlado por las familias Zarranz y Reyna Doménech, y con derivaciones hacia la industria editorial a través de la imprenta "Federico Domenech SA", en **prensa escrita** destaca en los últimos años la entrada en juego del grupo Prensa Ibérica -con Francisco Javier Moll y Jesús Prado en el puente de mando- como principal beneficiario, en 1984 y ante la postura abstencionista al respecto evidenciada una vez más por cierta burguesía valenciana, de la privatización por el PSOE de "Información" y "Levante", diarios editados en Alicante y Valencia respectivamente (aun no articulándose mediante ambos *cadena regional* alguna, sino la clave del arco estrictamente empresarial que desde Canarias pasa por el Sureste peninsular -incluye Murcia, excluye Castellón- y que se tensa de nuevo en Asturias y Galicia). De otra parte, la presencia católica no menos tradicionalmente sostenida en las comarcas del Sur de Alicante (Obispado de Orihuela) a través de "La Verdad", variará un tanto -al modo lampedusiano- al cambiar el control de dicho medio de Editorial Católica al Grupo Correo (Bilbao Editorial SA). Finalmente, la tercera gran novedad de los 80 en prensa escrita -que aún pudiera ser mayor en los 90- es la reconsideración postrera y la intervención 'decidida' en las lides editoriales de intereses (económico-políticos) próximos al PSPV-PSOE, inicialmente centrados en la edición del diario "Mediterráneo" en Castellón.

Según estrategias económicas y políticas dispares: concentración en la zona local de influencia/ conservadurismo regionalista, caso de "Las Provincias", frente a diseminación territorial de dicha influencia/pragmatismo paragubernamental, en el caso de Prensa Ibérica, lo cierto es que *el marco de opinión de referencia dominante* está tan estrechamente condicionado hoy por la de ambos grupos empresariales como llamado está a modificarse de inmediato, en parte por las propias contradicciones que en su interinfluencia competitiva dejan ver como tales proyectos periodísticos.

- De la influencia compartida entre ambos grupos en lo que a creación y mantenimiento de opinión respecta, pese a su carácter 'localista'/provincial y más allá del escaso índice de lectura que se da en la Comunidad Valenciana como tal (más allá por tanto de la pequeña tirada/difusión que los medios respectivos 'padecen' al unísono), sin duda resulta más que elocuente la coincidencia en rentabilidad y cobertura atribuible, desde una perspectiva territorialmente autonómica, a los medios de tales grupos empresariales (Las Provincias vs. Levante+Información). Y ello a diferencia, por ejemplo, de los diarios de Castellón (de mayor rentabilidad comparativa, ya que no absoluta, por la escasez de medios en su zona de influencia) o del diario nacional de mayor cobertura en las tres provincias juntas (con una rentabilidad menor comparativamente, por su mayor coste por mil o

“cpm”). Cuestiones todas ellas fáciles de derivar a partir de los índices que arrojan las habituales “clasificaciones de soportes” manejadas por las propias agencias de publicidad -las más interesadas en ‘medir objetivamente’ dicha información:

CPM	Orden Rentab.	MEDIO	Orden Cobert.	Miles contactos
591.	1	Hoja Lunes V	1	380.5
767.	2	Las Provincias	2	200.7
800.	3	Levante	3	190.0
1100.	4	Información	4	180.9
8539.	10	El País	5	118.6
2484.	6	La Verdad	6	64.0
2390.	5	Mediterráneo	7	43.9
4436.	7	Marca	8	42.8
7920.	9	As	9	27.1
35367.	14	Diario 16	10	21.3
35962.	15	ABC	11	21.2
4764.	8	Castellón Diar.	12	19.9
18258.	12	Nuevo Lunes	13	17.8
11895.	11	Sport	14	9.9
25488.	13	H. L. Murcia	15	3.8
118626.	17	El Periódico	16	3.4
146875.	19	YA	17	3.1
143410.	18	Expansión	18	2.4
204062.	20	La Vanguardia	19	2.3
289444.	22	Independiente	20	1.7

Fuente: Clasificación de soportes. UNITEC SA. Marzo-1989.

Ranking prensa diaria Comunidad Valenciana:  
para un Público Objetivo (real y ponderado)  
de 2.920.175 consumidores de comunicación.

La desigualdad empresarial (sin duda medida por la misma rentabilidad que interesa a las agencias publicitarias) es, no obstante, manifiesta entre ambos grupos y origen de sus frecuentes disputas soterradas; como no lo es menos, en Alicante (y Murcia), la mantenida entre Prensa Ibérica y el Grupo Correo. Baste para ello con destacar la mayor variabilidad observable entre los mismos medios según la misma comparación (rentabilidad/cobertura) pero, en lugar de referirnos al ámbito de País Valenciano, centrándonos en el ranking de prensa diaria ‘nacional’ (pues nacional en gran medida, a su vez, es el mercado publicitario):

Orden Rentabilidad	MEDIO	Orden Cobertura
10	El País	1
4	La Vanguardia	2
2	El Periódico	3
15	Diario 16	4
3	Avui	5
18	ABC	6
1	Sport	7
5	D. Barcelona	8
8	LAS PROVINCIAS	9
11	HOJA LUNES VALENC	10
9	Hoja Lunes Gijón	11
6	Mundo Deportivo	12
7	Comercio	13
17	Cinco Días	14
19	La Voz de Galicia	15
26	Ya	16
13	Correo Andalucía	17
12	Córdoba	18
30	El Independiente	19
27	El Nuevo Lunes	20
16	LEVANTE	21
22	Egin	22
23	Hoja Lunes Oviedo	23
20	Heraldo de Aragón	24
28	Nueva España-Ov.	25
14	Diario de Avila	26
24	LA VERDAD	27
31	Correo Español-PV	28
21	El Día - Zaragoza	29
25	D. Mallorca	30
29	Ideal de Granada	31
35	Diario Vasco	32
34	As	33
33	Marca	34
36	Faro de Vigo	35
37	INFORMACION	36
32	Ideal Gallego	37
39	Sur	38
40	Deia	39
38	Norte de Castilla	40

Fuente: Clasificación de soportes. UNITEC SA. Marzo-1989.  
 Ranking prensa diaria Nacional.

Es ahí donde “Las Provincias” hace valer su condición de auténtico ‘diario de referencia comunitario’, al menos visto desde el exterior: siendo el 8º diario ‘nacional’ en rentabilidad y el 9º en cobertura (según la misma fuente y para las mismas fechas). Constatándose al tiempo el papel de ‘segundo’ de los medios de Prensa Ibérica por provincias: tanto en Valencia, al ser “Levante” 16º y 21º (muy por detrás del anterior y de la propia “Hoja del Lunes” de Valencia, que aun no siendo realmente ‘diaria’ logra auparse a los puestos 11º y 10º respectivamente); y de igual modo en Alicante-Murcia, como ‘mercado único relativo’ nada afín a la nueva delimitación administrativo-autonómica, y en donde “Información” (37º y 38º) quedaba en marzo de 1989 por detrás de “La Verdad” (24º y 27º), si bien ésta arranca en su influencia del predominio relativo en Murcia (motivo más que probable del desembarco competitivo allí realizado por Prensa Ibérica al pasar a controlar “La Opinión” de Murcia).

El diario “Mediterráneo”, por su parte, que tan buen índice relativo de rentabilidad/cobertura daba en su zona de influencia desde una perspectiva estrictamente autonómica, desaparece prácticamente del listado de 40 primeros diarios nacionales: quizá de ahí el reposicionamiento anunciado del mismo -de cara a los anunciantes ‘nacionales’ en cuanto a financiación-, al parecerse pretender por el PSPV-PSOE apoyar su desembarco en Valencia -a remolquequizá de una operación ligada a la “Hoja del Lunes”- y, puede que a renglón seguido, en Alicante.

- La remoción del ‘status’ de los grupos empresariales que se presentan como dominantes en prensa escrita en la Comunidad, por todo lo dicho, no parece que haya de demorarse. Y para hacer frente a las ‘pirañas’ nacionales, de entrada, sus directivos tendrán que echar mano de algo más que de la reciente informatización acometida en sus redacciones o de la revisión al alza de los respectivos convenios laborales (donde la succión/presión inducida por la puesta en marcha de Canal 9-TVV se ha dejado notar, especialmente en el caso de Prensa Ibérica)... Pues por su carácter familiar (origen de ciertos rumores aireados en prensa) <sup>(81)</sup>, en un caso, y por la concentración que no termina de consolidar <sup>(82)</sup>, en el otro, cada vez resulta más evidente la debilidad de tales grupos ante otros proyectos de penetración en el mercado regional, ante todo de grupos radicados en Madrid (Prisa, Prensa Española, Grupo 16), que aspiran -de la mano de su participación en el negocio audiovisual- a potenciar su control del ‘mercado nacional interior’ con anterioridad a 1993 y que ya han dado a conocer, e incluso a materializar (caso de la edición “Comunidad Valenciana” de El País), su intención de no limitar a meras corresponsalías -como hasta la fecha- su presencia en la Comunidad Valenciana. Algo especialmente creíble, precisamente ahora, por la tradicional mayor cobertura exterior (vía exportaciones) de su economía regional.

La prospectiva de mayores cotas ‘dependientes’ de un sistema comunicacional autonómico como tal nunca existente en el País Valenciano, se evidencian en efecto ante las crecientes estrategias multimedia de aquellos grupos ‘nacionales’ que más han avanzado en el proceso de concentración, lo que cada vez pasa más por la toma de posiciones firmes en el audiovisual y no tanto (aunque también) en el editorial en sentido estricto. Es ahí donde los grupos ‘dominantes’ a nivel autonómico en prensa escrita, tan fundamentales para la creación de opinión, y pese a sus esfuerzos por ofertar nuevos productos ligados a la industria editorial conexas (así las distintas “Historias” por fascículos: del Pueblo Valenciano-de Alicante o de las Fallas, en el caso de Prensa Ibérica, de Valencia en el caso de “Las Provincias”), manifiestan mayor debilidad: por su escasa o excesivamente lejana interconexión con otros grupos en Radio y TV, a diferencia de la competencia ‘nacional’ por llegar.

Dicha interconexión se ha intentado y aun consolidado de hecho, en algún caso, pero nunca con parecido carácter 'dominante': así la presencia del diario decano en Antena 3, donde ocupa una posición minoritaria junto a diarios potencialmente competidores en su propio terreno como "La Vanguardia" o "ABC", o de Prensa Ibérica, que parece limitar sus aspiraciones televisivas a la productora de vídeo Canarias Televisión CTV, tras quedar descolgada la opción de TEVISA por la que apostó (curiosamente la misma que la del Grupo Correo) con vistas a las concesiones de TV privada... El papel que ya juega en tal sentido RTVV, por lo mismo, es cada vez menos cuestionable, no siendo difícil presumir que podría serlo todavía menos en el futuro inmediato, desde una perspectiva favorable al 'desarrollo endógeno' -también en comunicación y cultura: de ahí la presente Tesis, en definitiva.

El pulso sostenido entre los medios de titularidad pública y privada en **radio**, no en vano, deja ver en la Comunidad Valenciana el mismo predominio que la SER (ligada al grupo Prisa) viene consolidando desde la transición, tanto respecto de la radio pública 're-concentrada' (RNE/Radio 5) cuanto de otras emisoras privadas. Entre estas últimas, tanto COPE como Antena 3 cuantan en territorio valenciano con aliados 'naturales': lo que es notorio, en relación con ambas, en el caso de "La Verdad" y a través del Grupo Correo. El dial valenciano, en cualquier caso, no escapa a las últimas remodelaciones de trastienda que vienen concretándose a partir de la entrada en juego de importantes nuevos actores de comunicación a nivel 'nacional': de lo que es un ejemplo la adquisición de Rueda Rato por la ONCE (socio mayoritario con Berlusconi de TeleCinco); siendo no menos significativa, en Radio, la venta por el empresario Suñer de las pocas emisoras de RadioCristal bajo control directamente valenciano.

La aparición en escena de Canal Nou Ràdio, en consecuencia, no hizo sino ampliar escasamente un espectro del dial ya de por sí bastante más alejado de la situación monopólica de partida que la dada en TV hasta hace poco: un canal de radio, hoy por hoy, sobre todo si en FM, es uno y no más; por más que cualitativamente importe, y mucho como sucede con Canal Nou Ràdio, en materia de normalización lingüística. Algo, por demás, hasta cierto punto perdido de antemano: sobre todo de persistir el actual desencuentro entre los modelos de TV y Radio a que RTVV parece resignarse, lejos de lo que cabía esperar en un principio... Salvo que desde el sector público (desde la Generalitat en nuestro caso, al ser competente al 100% en la concesión de emisoras radiofónicas) se recurra a algún "as" bajo manga, tipo RadioBlanca o similar: de ahí la expectación y la polémica con motivo de la última gran ampliación del dial llevada a cabo por el Gobierno socialista, tanto desde Madrid como desde Valencia. Polémica que a nivel autonómico evidenció, de paso, el interés del PP por ser beligerante en las Cortes Valencianas (lo que no sucede con otros temas propios de 'fer país'), siendo naturalmente amplificada como pocas en prensa 'regional' (por razones de 'competencia cercana') y desembocando, finalmente, en la dimisión de Jaume Sendra como segundo titular al frente de la DGMCS de la Generalitat.

El pulso en **TV convencional**, en fin, pasaba -antes de comenzar a emitir Canal 9-, por la oferta pública existente (TVE y TV-3). No siendo nuestra intención retomar aquí las contradicciones de fondo de la política de centros territoriales de TVE, sí cabe resaltar -desde esa óptica crítica para con el modelo centralista de la TV pública en España- que al no contemplarse como auténticos centros de producción ("son realmente corresponsalías de los telediarios", se ha dicho de siempre desde dentro) TVE facilitó, también en el caso valenciano e incluso al nivel informativo estricto que

era donde podía 'competir', el rápido afianzamiento de la corresponsalía de TV-3 entre la audiencia a que finalmente podía alcanzar la señal repetida por los reemisores instalados en 1985 a iniciativa de Acció Cultural, entidad pancatalanista... Canal 9-TVV, en menos de un año, tiene ya que coexistir no sólo con ambas -de hecho- y con las TV privadas finalmente autorizadas -fue ya con TeleCinco y Antena 3 desde la primavera de 1990-, sino también con las emisiones por satélite que comparten las ondas con aquéllas. Y ello sin contar con las presiones privatizadoras, hasta ahora toleradas, ligadas al cable en vídeos comunitarios y alguna que otra 'TV local'.

Nuestro análisis posterior debe dar cuenta, precisamente, de cuanta complejidad subyace tanto a ese presente -si de por sí escurridizo, más aún en el audiovisual español y valenciano- como a las posibilidades que se entrevén para el futuro inmediato. Posibilidades entre las que se encuentra (todavía) la de una "política autonómica" en relación con el audiovisual valenciano capaz de aproximar, de una vez por todas, política de comunicación y política cultural.

Es desde tal entendimiento del sistema de comunicación "posible" entre nosotros que interesará retomar la encardinación en el mismo del medio TV, para intentar comprender:

1º) Los condicionantes históricos de su estructuración sistémica y de la política comunicacional asentada como 'dominante'. Condicionantes (que no "determinantes") a sopesar con arreglo a nuestra perspectiva, para entender en su complejidad -sociopolítica ante todo- la política (explícita) que en relación con dicho medio se consensuará en el Estatuto de RTV de 1980. Una política que no por caduca, desde antes incluso a su propio nacimiento, condicionará menos -junto al "ejemplo" redundante de las primeras TV autonómicas- la política (implícita) consustancial a Canal 9-TVV en su actual fase de despegue.

2º) En paralelo, la polémica TV pública vs. TV privada que, tras bosquejarse apenas en los años 70, se agudizará a partir de los 80 -cerrándose en diciembre del año 83. Para retomar cuanto de posibilidades efectivas, y no de estricta competición abierta, puedan evaluarse desde una perspectiva estrictamente autonómica. Y, en relación con ello,

3º) Los nuevos actores que quizá quepa incluir en una política 'de nuevo cuño', a partir de la crítica necesaria (no sólo por motivos tecnológicos) del sistema de comunicación tal y como comúnmente se entiende (al equiparlo sin más, según los viejos modos reduccionistas, con los 'medios dominantes' actuales). Actores entre los cuales debiera evaluarse, en materia de TV en concreto, el potencial de participación atribuible no sólo a los actores *clásicos* en TV convencional (la TV del Estado en el País Valenciano: Canal 9-TVV, TVE, TV-3 y dentro de poco quizá también Tele-Tres de Murcia), sino también a la iniciativa privada (sean o no empresas de comunicación, asociaciones profesionales o de consumidores) e incluso, como gran cuestión pendiente, a las iniciativas populares y locales, algunas ya presentes en el audiovisual valenciano 'efectivo' y otras que pudieran cuajar en torno a objetivos plurales: políticos, culturales, económicos y tecnológicos, que negociar desde posturas cooperativas a partir de un "mínimo común denominador".

Todo ello nos aboca, directamente, al contenido de los próximos Capítulos. Tan sólo una advertencia previa, si acaso, en que enmarcar la oportuna transición en la lectura de los mismos.

Las reflexiones sobre los medios y su importancia, es cierto, no han sido del todo en vano. Pero los límites del trabajo teórico son conocidos y sigue quedando claro que apenas se ha logrado

modificar en la práctica la estructura de los sistemas de información. Es en la práctica no obstante, y no por casualidad, que la ambigüedad calculada ha devenido lugar común dominante en esta materia. No es que falte seriedad en las actitudes que se manifiestan respecto a la comunicación, al contrario. Pero cierto “meninfotisme” sedimentado a la postre -observable ante todo en técnicas y métodos de elaboración, programación y planificación de la emisión, escepticismo y pataleo autocompasivo en la recepción- va ligado estrechamente al rodaje (siempre en la práctica) del sistema político escogido. *Cuando se opta por un sistema político, en definitiva, se está optando en gran medida por un sistema de comunicación. Y viceversa.* El desarrollo de ambos va de la mano aunque se lleven como el perro y el gato, pues que juegan en la misma plaza y alrededor de la misma fuente.

Vale decir: si por política cabe entender -siempre en la práctica, se insiste, que es donde se cuece tal concepto- “una línea general, criterios, pautas, intención para guiar la acción”, o bien “una alternativa para seleccionar un curso determinado de evolución”, sería un error (y de bulto) sostener que no existen políticas de comunicación. Los equipos dirigentes de “El País” y RTVE tienen, como vimos, la suya, como la tienen “Las Provincias” o TV-3: se hayan definido o no Estatutos o “Normas básicas de programación” al respecto. No tener una política (explícita) de comunicación es una forma de tenerla, es en sí una determinada política de comunicación. Es éste un dato necesario, aunque no suficiente, que recordar a quienes, en un ‘sistema político’ como el nuestro, han de juzgar la posibilidad del ‘modelo’ del audiovisual público a adoptar para el País Valenciano.

## NOTAS

## Capítulo I

(1) M.W. Wartofsky: "Introducción a la filosofía de la ciencia". Alianza Editorial, Madrid, 1973, vol. 1, p. 38.

(2) M. Pêcheux, "Epistémologie de la linguistique", en 'Langages', 1971. Su producción teórica central se encuentra en "Analyse automatique du discours", París, 1969; "Mises au point et perspectives à propos de l'analyse automatique du discours", docum. interno del CNRS, 1974, y "Les verités de La Palice", París, 1975.

(3) Armando Sercovich: "El discurso, el psiquismo y el registro imaginario (Ensayos semióticos)". Edic. Nueva Visión, Buenos Aires, 1977.

(4) Como refiere Wartofsky: "Quizá la pregunta filosófica fundamental que puede hacerse acerca de la lógica si se concibe ésta como ciencia de la inferencia válida y de la definición precisa de los términos empleados en la inferencia, sea la pregunta referente a 'qué quiere decir' que algo sea una inferencia <correcta> o <válida>, o una definición <adecuada>. Pues esto alude a las normas o criterios de la propia lógica y al 'status' de sus reglas" (Ob. cit., pp. 34-35).

(5) "Peirce distinguía -señala Sercovich- entre el <objeto dinámico> (la realidad exterior al signo), y el <objeto inmediato> (la particular versión que el signo nos proporciona de dicho objeto dinámico)". Vid. en Sercovich, ob. cit., pp. 35-36.

(6) Jesús Ibáñez, en su reseña (El País-Libros, 23-julio-1989) de la obra de P. Watzlawick y otros: "La realidad inventada (¿cómo sabemos lo que creemos saber?)", Gedisa, Buenos Aires-Barcelona, 1989.

(7) Th. S. Kuhn: "La estructura de las revoluciones científicas". Fondo de Cultura Económica, México, 1975, p. 179.

(8) Lo reacio que tradicionalmente se ha mostrado el empirismo -todo empirismo- hacia las aportaciones de cuño individual o simplemente subjetivista no extrañaría, de acuerdo con Fernando Savater ("Apología del sofista", Taurus, Madrid, 1975), por cuanto "la subjetividad es el invitado indeseable a la fiesta de lo positivo, el elemento perturbador y subversivo que aporta, en lugar de vino o pastas, incertidumbre y conmoción..." (Ob. cit., p. 50).

(10) En efecto, las consideraciones que siguen de Henri Lefebvre me siguen pareciendo al respecto inequívocamente justas:

"Una crítica radical de cada disciplina científica es aún más necesaria, si la ciencia considerada se pretende operatoria, es decir, si ella tiene poder, en general por la intervención de un poder práctico, el Estado especialmente. (...) La ciencia arriesga consagrar la alienación correspondiente, en la medida que se pretende total y busca de perfeccionar, sistematizándolo, al conjunto de hechos a los cuales corresponde. (...) El concepto de alienación está entonces ligado a la crítica interna-externa de las ciencias parcelarias. Mostrando las lagunas que existen entre ellas o en el interior de cada una, las religa. Aquí, aún, permite el dibujo en 'hueco', si puede decirse, de una totalidad virtual: el ser humano (...) Es así como el concepto de alienación refuerza la crítica radical y el movimiento crítico inherente al conocimiento". (En "Estructuralismo y política". Edit. La Pléyade, Buenos Aires, 1973, p. 142).

(11) K. Marx: "La ideología alemana". Ed. Grijalbo, Barcelona, 1972.



(12) La cuestión no remite a un planteamiento más o menos 'a la moda', por más que ahora se insista de nuevo en ello. Baste, si no, con recordar cómo hace un cuarto de siglo se exponía lúcidamente por Lucien Goldmann, en "Sciences humaines et philosophie. Qu'est-ce que la Sociologie". Edit. Gonthier, París, 1966.

(13) No es preciso insistir en que lo dicho presupone ciertamente una crítica implícita a muchos marxistas "de manual". Gino Longo, por ejemplo, de quien más adelante tomamos algunas ideas, es representativo de los que todavía piensan (desde el marxismo o desde otros positivismos más o menos naturalistas) que "en la ciencia lo esencial es el método (...) (Que) no sólo nos ofrece el esquema en un momento determinado válido, sino asimismo los instrumentos para poder sustituirlo por el esquema sucesivo". (En "Manual de Economía Política", Alberto Corazón Editor, Comunicación Serie B, Madrid 1973).

(14) Por ejemplo en su última obra traducida al castellano: "La ciencia en una sociedad libre", Siglo XXI, Madrid, 1982; si bien no tanto en "Límites de la ciencia" (Paidós, Barcelona, 1989), texto de 1962 y de muy otro 'tono', que apunta con interés contra el reduccionismo de Nagel, no menos que contra el objetivismo de Popper y el explicacionismo de Hempel.

(15) Paul K. Feyerabend, en su conocida obra "Contra el método" (Ariel, Barcelona, 1974), señaló cómo la experiencia no es una fuente neutral de conocimientos ni un modo transparente de comprobación o falsación de teorías. De hecho, es preciso un interés previo o una hipótesis para estudiar un aspecto específico del universo caótico de campos potenciales de estudio. El dice así: "la <pasión> da lugar a una conducta específica que a su vez crea las circunstancias y las ideas necesarias para analizar y explicar el desarrollo total, para hacerlo racional (...) El propósito de toda metodología es la estabilidad del conocimiento" (Ob. cit., pp. 20 y 30 respectivamente). Ahora bien, tampoco cabe obviar -como sugiere el propio Wartofsky- que "el tipo de actividad relacionada con el conocimiento que caracteriza a la ciencia implica ciertamente la eficacia, el poder de este conocimiento como instrumento de utilización humana para gobernar la naturaleza, pero también implica la satisfacción de un deseo de comprender, una curiosidad que parece inútil en los contextos prácticos" (Ob. cit., p. 50).

José Vidal-Beneyto, de otra parte, en su Introducción al libro de Pablo Cantó "Cuestiones de Economía Política" (Edit. Zero, Bilbao, 1973, p. 11) hacía hincapié por entonces en algo que sigo considerando válido: "nuestro destinatario efectivo no es el hombre genérico de todos los lugares y de todos los tiempos, sino aquél que comparte nuestro contexto histórico, aquél con el que tenemos en común las mismas opciones y los mismos límites, aquél al que nos une un mismo horizonte de opresión y de progreso".

(16) La distinción ya estaba implícita en "La comunicación humana" de J.L.L. Aranguren (Guadarrama, Madrid, 1975), y más en especial en su artículo "Libertad, símbolos y comunicación" (revista "Sistema", nº 8, enero 1975). La hizo explícita, sin embargo, L. Núñez Ladeveze en "Lenguaje y comunicación" (Pirámide, Madrid, 1977), en concreto pp. 16-17.

(17) Jean-William Lapierre: "El análisis de los sistemas políticos". Ed. Península, Barcelona, 1976.

(18) Cuestión, por supuesto, que no viene de ahora: desde Manheim a la teoría de la alienación marxista, pasando por Gurvitch o la Escuela de Francfort. Y sobre lo cual no cabe desconocer las aportaciones cercanas a nosotros ya contenidas en germen en la obra colectiva "Epistemología de la comunicación" (Fernando Torres - Editor, Valencia, 1976), así como, en tanto que autor relevante, la tarea crítica acometida por Castilla del Pino desde "La incomunicación" (Península, Barcelona, 7ª edic-1975).

(19) Michel Maffesoli: "Lógica de la dominación". Ed. Península, Barcelona, 1977.

(20) Puede consultarse al respecto la conocida obra de Umberto Cerroni, "Metodología y ciencia social", Edic. Martínez Roca, Barcelona 1971, pp. 29 y ss.

(21) J.E. Rodríguez Ibáñez, al comentar la obra de Trent Schroyer "The critique of domination: The origins and development of Critical Theory" (revista "Sistema" nº 9, pp. 147 y ss.) apuntaba ya, a mediados de los 70, cómo el enfrentamiento al positivismo era tan común a la sociología no radical apoyada en lo intersubjetivo como a la sociología radical emparentada con la Escuela Crítica y el freudomarxismo de entonces, siendo común a ambas su punto de arranque de la crítica epistemológica trascendental, donde según Rodríguez Ibáñez cabría situar a Kant (el objeto mediado por el sujeto), a Hegel (que en contra de la dicotomía kantiana razón teórica-razón práctica defenderá la génesis autoformativa de la consciencia) y el salto cualitativo de Marx respecto del anterior (al liberar a la epistemología de la cerrada culminación hegeliana del saber absoluto y dado a su movimiento dialéctico su base histórica y material)...

(22) Xavier Rubert de Ventós, en "La estética y sus herejías" (Anagrama, Barcelona, 1974), ya señalaba con particular agudeza que "el arte, como las ciencias o la filosofía, vive de sus crisis: del cuestionamientos de sus planteos y no sólo de sus soluciones; de la crítica de su función, y no sólo de su rendimiento; de la exploración o transgresión de sus fronteras, y no sólo de la consolidación de sus dominios" (p. 393)... Ciertamente similar, por otra parte, es la tesis principal que Paul K. Feyerabend sostenía en "Contra el método".

(23) "Para no ofender a nadie -escribió Helvetius en "De l'home" - basta con tener las mismas ideas que todos. En este caso no seréis nunca unos genios, pero tampoco tendréis enemigos". Esta misma idea hizo exclamar a Marx que, además del deseo de decir la verdad, lo que caracterizaba a un intelectual era la decisión de iniciar la "crítica despiadada de todo lo existente, y despiadada en el sentido de que no se retraiga ante sus conclusiones ni ante el poder constituido".

(24) La traducción del conocido libro de Th. W. Adorno, K. Popper y otros, bajo el mismo título de "La disputa del positivismo en la sociología alemana", puede encontrarse en Grijalbo, Barcelona, 1973.

(25) J.D. Bernal: "Historia social de la ciencia", vol. 2. Ed. Península, Barcelona, 1967, p. 445.

(26) Puede resultar muy ilustrativa, al respecto, la consulta de "El retorno de la Gran Teoría en ciencias humanas", de Q. Skinner (compilador): Alianza Universidad, Madrid, 1989.

(27) Al menos, si se piensa, desde las importantes contribuciones que en su día supusieron la obra de Tierno Galván "Razón Mecánica y Razón Dialéctica" (Tecnos, Madrid, 1969) y la indagación concomitante, previa en el tiempo, que Ignacio Sotelo publicase en la misma editorial (1967) bajo el título de "Sartre y la razón dialéctica". Como se recordará, el tema fue reiterativo en las sucesivas convocatorias de los diferentes Congresos de Filósofos Jóvenes que jalonaron en los años 70 la transición democrática española.

(28) Es sabido -de nuevo con Wartofsky- que desde las primitivas teorías especulativas genético-sociológicas (Platón, Séneca, Ibn Jaldún), pasando por las teorías clásicas del siglo XIX y principios del XX (Compte, Marx, Spencer, Weber, Pareto...), hasta la sociología histórica y teórica contemporánea (Toynbee, Sorokin, Parsons, Wright Mills...), la orientación habría sido "sintética y sistemática" (es decir, holística: lo que no equivale, por cierto, a holismo dialéctico). En contraposición, la metodología empírica (reduccionista por definición) arraiga especialmente en el presente siglo, y en ella el científico se habría convertido en "un investigador de campo que busca los hechos por medio de la observación y la medida directas", al amparo de la modélica 'verdad' que contagiarían las ciencias naturales. Si se critica al primer enfoque por no valerse de métodos y/o técnicas de contrastación y de medida las pocas veces que experimenta, por ser realmente una

especie de rama del saber histórico (y la historia -suele añadirse- no es una ciencia), su 'sistemática' -en conclusión- carecería, cualitativamente, de fuerza predictiva "sea cual fuere su valor heurístico". Mientras que se interpela al segundo enfoque, el reduccionista, sobre cómo se adquieren los datos científico-sociales y, especialmente, sobre cómo influye la actitud subjetiva del investigador en la recolección de datos primarios así como en su interpretación... Ni que decir tiene que la polémica implícita, tan agria en su momento en España al enfrentar (al modo reduccionista, todo hay que decirlo) a marxistas con neopositivistas, se ha visto reconducida con el tiempo hacia un "estado de la cuestión" ni tan agrio ni tan ciego a la hora de valorar su no correlación con la opción de racionalidad cuya relevancia aquí se antepone como prioritaria (cualitativamente).

(29) Valga a título de ejemplo el varapalo dado por Santos Juliá, ya en 1982, a quienes como Josep Fontana no asignan tan sólo al discurso histórico una función legitimadora del orden social, sino que le atribuyen además la de ser su fundamento o apoyo: "Afirmar, aunque sea en metáfora, que un sistema social se basa, fundamenta o apoya en un cuerpo de ideas y, más remotamente, en un discurso en torno a sus orígenes, sólo es posible si se confunde la comprensión de un sistema con su fundamento, es decir, si el producto de la razón es al propio tiempo cimiento del orden social y el orden mismo. (Pues lo grave) es el supuesto en que todo esto se basa, a saber, el viejo ensueño de la razón según el cual comprender la coherencia de un sistema es requisito necesario y al parecer único -ya que de ningún otro se habla- para proceder a su despiece". (En su reseña -El País -Libros, 18 julio 1982- a la obra de Fontana "Historia. Análisis del pasado y proyecto social", Edit. Crítica, Barcelona, 1982).

(30) S. Lorente Arenas: "Hacia una definición de nuevas tecnologías y su valoración por la sociedad". Comunicación en "Cambio social y modernización", actas del Encuentro Internacional de Sociología celebrado en Valencia. Publicaciones de la Generalitat Valenciana, col. "Àmbit humà", Valencia, 1989, pp. 252 y ss.

(31) Thomas S. Kuhn: ob. cit.

(32) M. García Ferrando: "La Sociología, ¿Una ciencia multiparadigmática?. En VARIOS, "Teoría Sociológica Contemporánea", Tecnos, Madrid, 1978, pp. 445 y ss.

(33) Haroun Jamous: "Technique, Méthode, Epistémologie", en *Epistémologie Sociologique* nº 6. Ed. Anthropos, París, 1968, pp. 21 y ss.

(34) F. Balle y J.G. Padioleau: "Sociologie de l'information. (Textes fondamentaux)". Larousse, París, 1973, pp. 19-20.

(35) Puede consultarse al respecto el artículo de José M<sup>a</sup>. Maravall "Sociología y explicación funcional". *Rev. Sistema*, nº 12, pp. 25 y ss.

(36) Lee Thayer: "Comunicación y sistemas de comunicación". Ed. Península, Barcelona, 1975, pp. 400-412.

(37) Edgar Morin: "La Nature de la Nature", tomo I de "La Méthode". Edic. Seuil, París, 1977. De Morin cabe decir que hay una evolución apreciable desde la concepción antropológica neomarxista implícita a "L'esprit du temps" (1962), que pasa por la transicional de "De la Culture analyse a la politique culturelle" (1969) y que, tras su progresivo cuestionamiento de la relación marxista infra-supraestructura en "El paradigma perdido", desemboca en "La Méthode".

(38) José Vidal Beneyto: "Comunicación y sociedad: un amor imposible". En "Cambio social y modernización", ob. cit., p. 216.

- (39) L. Von Bertalanffy: "Robots, hombres y mentes". Ed. Guadarrama, Madrid, 1974, pp. 156-7.
- (40) Javier Aracil (comp.): "Lecturas sobre Dinámica de Sistemas". Presidencia del Gobierno, Subsecretaría de Planificación. Madrid, 1977, p. 21.
- (41) A. Sercovich, ob. cit, pp. 18-20-37.
- (42) A. Badiou: "El concepto de modelo". Siglo XXI Argentina Editores, Buenos Aires, 1976.
- (43) Kenneth Boulding, en "The Image" (Ann Arbor, The Michigan University Press), ya constataba en 1961 las diferentes maneras y los diversos niveles de complejidad con que la 'información' se presenta en distintas formas de organización:
- al nivel de los mecanismos de relojería (reloj)
  - al nivel de los mecanismos homeostáticos (termostato)
  - al nivel de los organismos biológicos (la célula)
  - al nivel botánico (la planta)
  - al nivel zoológico (el animal)
  - al nivel del ser humano (la conversación)
  - al nivel de la organización social (la estructura de los roles sociales, en la perspectiva funcionalista de Boulding).
- (44) Los expertos han recordado el esquema 'orador-discurso-auditorio' que implícitamente subyace en la "Retórica" de Aristóteles, al igual que el no menos conocido 'Quis, Quid, Ubi, Quibus auxiliis, Cur, Quomodo, Quando?' que Quintiliano expone en "De institutione oratoria".
- (45) M. Bühler: "Schémas d'études et modèles de communication", en 'Communication et Langages', nº 24, 1974.
- (46) Vid. Bordenave-Carvalho: "Planificación y Comunicación". Las referencias originales que más interesan, al respecto, serían:
- C. Shannon y W. Weaver: ob. cit, 1949.
  - B.H. Westley y M. McLean: "A Conceptual Model for Communication Research". Journalism Quarterly, Winter 1957.
  - D.K. Berlo: "The Process of Communication". Holt Rinehart and Winston, 1960.
  - C.J. Hovland: "Persuasion and Persuasibility". Yale University Press, 1959.
  - John W. Riley y M. White: "Mass Communication and the Social System". Cap. 24 en "Sociology Today" de T. Merton. New York, Basic Books, 1961.
  - W. Schramm: "Process and Effects of Mass Communication". Urbana Illinois University Press, 1960.
  - C. Levi Strauss: "Antropologie structurale". París, Plon 1958.
  - E.T. Hall: "The Silent Language". Greenwich, Connecticut. Fawcett Publications, 1959.
  - Modelos socio-psicológicos: en Frank E.X. Dance (ed): "Human Communication Theory". Holt Rinehart and Winston, 1967.
  - C.K. Ogden-I.A. Richards: "The Meaning of Meaning". Harcourt, Brace, 1956.
  - P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson: "Pragmatics of Human Communication". New York, W.W. Norton, 1967.
- (47) José Vidal-Beneyto, en "Comunicación y sociedad: un amor imposible", ob. cit, p. 216.
- (48) "The Medium is the Message", cabe recordar, se publica por Marshall McLuhan en Bantam Books, Nueva York, en 1967 (traduciéndose al castellano por Paidós, Buenos Aires, en 1969), pero sus tesis arrancan al menos de 1962, fecha en que publica "The Gutenberg Galaxy" (Univ. of

Toronto Press), con el paso intermedio que representa el primer capítulo de su "Understanding Media: The Extension of Man" (McGraw-Hill, New York, 1966).

(49) J.M<sup>a</sup>. Bermudo: "El McLuhanismo, ideología de la tecnocracia". Edic. Picazo, Barcelona, 1972.

(50) P. Schaeffer, "Machines à communiquer", vol. I de "La Genèse des simulacres", París, Seuil, 1970. Puede consultarse también, del mismo autor, "Une charte pour la télévision", en 'Preuves' nº 14, 1973 (citado, este último, por F. Sanabria en "Estudios sobre Comunicación", Editora Nacional, 1975).

(51) Raymond Williams: "Los medios de comunicación social", original de 1966 y traducido al castellano por Ed. Península, Barcelona, en 1974 (2ª edic.).

(52) S. Hall: "Le rôle des programmes culturels dans la télévision britannique". UNESCO, París, 1971.

(53) Puede consultarse, al efecto, F. Sanabria, ob. cit, pp. 183-4.

(54) Así Mike Fentiman, de la BBC y actual presidente del IMPUT (Conferencia Internacional de TV Públicas), en su ponencia "Incidencias, problemas y crecimiento del acceso público a la TV en el Reino Unido", presentada dentro de las recientes Jornadas de Estudio de las Radiotelevisión en el Espacio Europeo celebradas en Valencia (17 a 19 mayo 1990).

(55) E. Nordhal Svendsen y L. Weibull: "Mass Communications and Politics in Local Society", en 'Current Theories in Scandinavian Mass Communication Research', GMT, Dinamarca, 1977. Ya recogido, entre nosotros, por P. Orive: "Estructura de la información-2: Comunicación y sociedad democrática". Edit. Pirámide, Madrid, 1978, p. 294.

(56) M. Moragas Spá: "Semiótica y comunicación de masas" (Península, Barcelona, 1976), "Teorías de la Comunicación" (G. Gili, Barcelona, 1984), "Sociología de la comunicación de masas" (G. Gili, Barcelona, 1986) o "Investigación de la comunicación y nuevas tecnologías. Diferencias y fronteras en Europa Sur", art. en rev, TELOS (Fundesco, Madrid, nº 7, 1986).

J. Vidal Beneyto (comp.): "Teorías alternativas de comunicación". Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, 1979.

G. Richeri: "TV pública: entre servicio público y negocio". Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1984.  
M. Wolf: "

(57) Xavier Ruber de Ventós, en "De la modernidad" (Ed. Península, Barcelona, 1980), retomaba tal desazón 'nuclear' en el umbral de una década pródiga en ratificarlo: "Un nuevo fantasma recorre Europa: el idealismo. Las cosas se nos van convirtiendo en ideas o mensajes (...) La materia prima de la existencia va haciéndose más y más escasa (...) Del fetichismo de la mercancía pasamos ahora al fetichismo de la comunicación (...) Es notoria, por otra parte, la adecuación de esta producción de universales psicológicos a las exigencias políticas y económicas del momento, pues ahora el mercado no controla ya sólo las 'relaciones de producción', sino todas las relaciones".

(58) En especial en sus últimas obras traducidas entre nosotros: "El discurso filosófico de la modernidad" (1989) y "Pensamiento postmetafísico" (1990), ambas en la editorial madrileña Taurus.

(59) A. y M. Mattelart: "Los intelectuales y los *media*". Art. en El País, 30-noviembre-1985.

(60) M. de Moragas Spà: “Espaces de comunicació: Experiències i perspectives a Catalunya”. Edicions 62, Barcelona, 1988, pp. 41 y ss.

(61) Cf. COM/MD/24, 1-12-1972. UNESCO, París.

(62) Enzensberger, en su “Loa al analfabeto” [art. en PAPELES DE CAMPANAR, nº 3, Valencia, Octubre 1987], ha venido a sostener que “el medio ideal para el analfabeto funcional es la televisión, [que] debe su encanto, su éxito e irresistibilidad al hecho de ser demencial”. Especificando: “Sé de qué hablo, pues no hace ni veinte años que yo mismo atribuía maravillosas posibilidades emancipadoras a los actuales medios electrónicos. Al menos, esa esperanza, aunque fuese infundada, tenía la ventaja del descaro”...

(63) Como contrapeso del tecnologismo “mcluhiano” entonces imperante y al hilo del desarrollo de las fuerzas productivas como primer motor (sin escapar así de un paralelo determinismo), Vázquez Montalbán resumía: ... “Entre la prehistoria de la manipulación de comunicados que comprende por un igual la etapa ‘concesionista’ de los siglos XVI, XVII y XVIII y el napoleonismo burgués y el esplendor alcanzado por la manipulación en la actualidad, media el desarrollo tecnológico, la complicación del mercado de los ‘hechos’ y la formación de una ciencia de la recepción al servicio de todo medio de comunicación. La tecnología ha complicado la estructura de la empresa informativa, ha favorecido la concentración y la intervención estatal paralela al desarrollo del capitalismo monopolista de Estado. La tecnología ha propiciado la aparición de medios audiovisuales, ha creado una red de comunicaciones casi instantáneas y ha provocado que ‘el poder de la comunicación’ se convierta realmente en ‘el poder de controlar la comunicación’” (...) Y con vistas al futuro -concepto entonces no cuestionado-, proponía: “(Un programa de acción crítica pasaría por) ante todo captar la dimensión política de los hechos que guardan referencia con la comunicación (...) Una segunda tarea sería no conformarse con un esquema crítico derivado de otras disciplinas más y mejor investigadas, sino fomentar una auténtica investigación sobre la comunicación (...) Una tercera propuesta sería la captación de la tecnología comunicativa mediante la investigación de todos los códigos de que se vale la comunicación (...) Una vez cumplida esta síntesis que daría lugar a una posición crítica previa por parte del investigador, el paso siguiente consistiría en una larga y ancha tarea de denuncia destinada a concienciar inicialmente al profesional de los medios de comunicación y a fuerzas culturales sensibilizadas”.

M. Vázquez Montalbán: “La palabra libre en la ciudad libre (Comunicación Social y cambio histórico)”, art. en COMUNICACION XXI, Nº7, Madrid, 1973, pp. 22 y ss.

(64) Moragas Spà ya avisaba, a un mes justo de aquellas elecciones (“El socialismo y la comunicación de masas”, art. en EL PAIS, 30-11-82), que “política de comunicación para el socialismo democrático debería significar, desde luego, respeto a la libertad de expresión y garantía plena del pluralismo, pero también planificación, promoción de los sistemas comunicativos entendidos como bienes públicos, el acceso a los cuales no llega a todos ni se desarrolla equilibradamente cuando la iniciativa dominante es la del interés privado”. Participación y difusión cultural deberían ser las pautas del “cambio” en esta materia, según este autor, quien concretaba su particular propuesta de política (“amiga” del cambio) como sigue:

- la televisión se presentaría como “el principal problema de política comunicativa” (no a la privatización sin antes apuntalar TVE como auténtico servicio público). Es decir: dejar de concebirla como portavoz del Gobierno y aun de la clase política; ampliar la libertad de decisión de los profesionales; aumentar debates y producción propia, así como acciones de desarrollo cultural y social en sanidad, educación, tercera edad, mundo rural, etc. (en programación). Y, ante todo, cambiar el flujo centralista heredado, como “tarea decisiva para el futuro ... en el terreno de la organización”.

- Otros problemas:

- \* Nueva política de ayuda a la prensa (para garantizar el pluralismo); \* revisión de la política

de la Agencia EFE (sobre todo en su influencia latinoamericana); \* política de reconversión tecnológica en el sector de las telecomunicaciones; \* revisión de la estrategia ante la implantación de la televisión directa vía satélite (buscando aunar pluralismo y descentralización).

- Y junto a ello:

\* una nueva política de investigación de la comunicación y la cultura (ejemplificando con el informe Mattelart para el Gobierno Mitterrand en Francia).

\* y reconsideración de la importancia de los ámbitos de comunicación ("deberá demostrarse ahora que la atención de la izquierda por los medios pequeños no respondía a un interés derivado de su limitación de poder al ámbito local"). En suma, el entendimiento según Moragas de la información como servicio público (de instrumento de control a instrumento de participación) pasaría necesariamente por la promoción de los niveles intermedios de comunicación.

(65) Vidal Beneyto, en efecto, intentó hacer balance (teórico e ideológico cuanto menos) sobre congresos a los que había asistido a lo largo de aquel año políticamente tan significado para España: Conferencia Internacional de Políticas Culturales (UNESCO) y Congreso Mundial de la Comunicación, en París; de Ciencia Política, en Río de Janeiro, y de Sociología, en México. Todos ellos, en su diversidad de materias y lugares de convocatoria, igualmente significativos de por sí. Su conclusión, en el sentido que ahora nos ocupa, no ha perdido vigencia, premonitoria como era, al fin y al cabo, de lo que en parte aquí se ha pretendido aludir en nuestra defensa por una aproximación heurística pero, también, de esa otra -bien diferente- que los italianos terminarían llamando "pensamiento débil":

"La ausencia -constataba él- de una doctrina, escuela o paradigma teórico dominante; la pluralidad de técnicas y métodos utilizados, a veces en una misma investigación; la insistencia en el control crítico, o más precisamente, la autocrítica, de la práctica analítica; la evidencia de la atingencia temporal y de la contingencia social de todo análisis sobre el hombre y la sociedad, son datos que, más allá del supuesto subjetivismo que diseñan, intentan romper la ingenua circularidad del positivismo científico-social (sea de corte empirista o marxista) mediante la acumulación crítica del saber social, contextualmente -y en el contexto está, obvio es precisarlo, el investigador con sus teorías, métodos y técnicas- acumulable".

José Vidal-Beneyto: "Dos congresos y un erizo", art. en EL PAIS, 13-diciembre-1982.

(66) J. Vidal Beneyto: "Comunicación y sociedad: un amor imposible", ob. cit., pp. 223 a 228.

(67) José V. Idoyaga: "Entre el control centralista i les pressions privatitzadores". Ponencia en las Jornadas sobre la Reestructuración Televisiva, Barcelona, febrero 1988. Editada en "Model de TV i Model d'Estat", ACTA-Fundació per a les idees i les arts, Quadern nº 1. Barcelona, julio 1988, p. 23.

(68) Oriol i Costa, Pérez Tornero y Vilches: "Un modelo de TV para Aragón". Diputación General de Aragón. Zaragoza, 1987.

(69) Fernando Monar: "Una propuesta de TV para Castilla-La Mancha". Tesis doctoral, inédita. Universidad Complutense de Madrid, 1989.

(70) No en vano, de acuerdo con Elías Díaz ("Sociología y Filosofía del Derecho", Taurus, Madrid, 1977), el Derecho como la Información admite -como objeto de estudio- las tres perspectivas clásicas: la de la norma establecida o el problema de la práctica profesional (Ciencia), la del hecho social o el problema de la eficacia social del Derecho/de la Información (Sociología) y la perspectiva de que hablamos, la valorativa, o el Derecho/la Información como problemas de legitimación-en-sociedad (Filosofía).

(71) Reflexiones de Habermas que ya se consolidarían en 1973, fecha en que publica "Problemas de legitimación en el capitalismo tardío", de inmediato traducido al castellano por Amorrotu Editores, Buenos Aires.

(72) X. Rubert de Ventós: "De la modernidad", ob. cit, 1980.

(73) R. Sánchez Ferlosio: "Rayado como una cebra" (art. en El País, 18-02-1990). O con anterioridad, Aurelio Arteta: "Idiotizar lo público" (idem, 23-09-1989). Y aun antes, de igual modo J. M<sup>a</sup>. Guelbenzu: "Noticias del cuarto poder" (idem, 8-04-1989), etc...

(74) J. Gifreu: "Un model al servei de la 'unitat de destí'". En 'Model de TV i Model d'Estat', ACTA, Quaderns nº 1, ob. cit., Barcelona, 1988, pp. 39-40.

(75) Theodor W. Adorno: "La Televisión como ideología". Revista NUEVA POLITICA, "El Estado y la televisión". Vol. 1, núm. 3. México D.F, Julio-Septiembre 1976.

(76) Algo ya destacado por Enrique Bustamante en "Los amos de la información en España". Akal/ Universidad, Madrid 1982.

(77) E. Lloyd Sommerlad: "Los sistemas nacionales de comunicación. Cuestiones de política y opciones". UNESCO, 1975 (nº 7504). Recogido en "Políticas y sistemas nacionales de comunicación social", Coordinación Gral de Comunicación Social.- Presidencia de la República México, 1981).

(78) Ramón Zallo: "Fundamentos para una economía crítica de las industrias culturales". Tesis doctoral, Univ. del País Vasco, Bilbao, 1987.

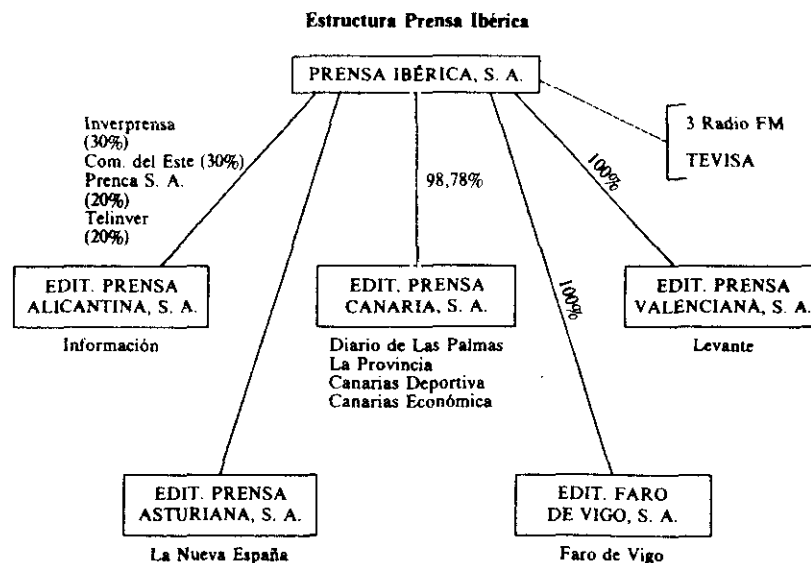
(79) Vid., por ejemplo, "La información a la Comunitat Valenciana". Presidencia de la Generalitat Valenciana, D. G. de Medios de Comunicación Social, 1987.

(80) "La comunicación y sus medios en la Comunidad Valenciana". Ponencia de M<sup>a</sup> García-Lliberós al programa de la Generalitat Valenciana sobre "Modernización y futuro" (leída el 13-12-86).

(81) Vid., por ejemplo, diversos artículos de interés al respecto en "Turia 1964-1989. Balance", nº publicado por Cartelera Turia con motivo de su 25 aniversario. Valencia, abril, 1989.

(82) E. Bustamante realizaba una primera aproximación al grupo Prensa Ibérica en "Las industrias culturales en España" (ob. cit. p. 68), donde se evidenciaba la estrategia de diseminación territorial afrontada por el mismo:

#### GRUPO PRENSA IBÉRICA





## **CAPÍTULO II**

### **CANAL 9-TVV: UN MODELO INDEFINIDO MAS.**

En el contexto europeo más cercano, y con preeminencia sobre los sucesivos proyectos de TV europea, el “modelo coexistencial” entre los sectores público y privado en TV convencional o por éter (que es el uso todavía *dominante* del medio TV) remite, en última instancia, a tres sistemas “básicos”: inglés, italiano y francés (reseñados en el Cuadro anexo). Sus filosofías televisivas son diversas *en su origen*, no menos diverso -por demás- en el tiempo: fines comunes de *servicio público* en el caso inglés, desde 1954, excluyendo la competencia TV pública vs. privada; *libertad de antena* tras el ‘affaire’ Televiela, en el caso italiano, traducida finalmente en competencia limitada -concentrada- por la escasez de recursos (publicitarios); y autorización de *emisoras nacionales privadas* en el caso francés, incluso privatización del canal público de mayor audiencia (TF1), a la espera de contar con la infraestructura de cable deseada. Los tres sistemas, no obstante, comparten finalmente la presión de las nuevas tecnologías en sus usos televisivos según la filosofía no de los Estados y sí del mercado (en los tres la publicidad se ha convertido en el núcleo de la financiación global, en los tres ha primado la implantación del satélite sobre la del cable). De manera que “las orientaciones impuestas por las reglas del mercado, salvo excepciones, están llevando hacia soluciones bien diferentes de las deseadas” (Richeri) por tales Estados europeos.

Sin duda por ello, si entre los objetivos públicamente deseados se contaba con ensanchar la oferta televisiva y diversificar la programación para aumentar la libertad de elección del telespectador, o el de favorecer la descentralización del medio (tanto regional como local), o incluso el de estimular la creación y desarrollo de industrias nacionales del audiovisual más fuertes, los hechos sin embargo apuntan una creciente homogeneización de la programación (de contenidos y para similares franjas horarias) frente a la fragmentación constatada de los públicos, la parálisis de la TV local para competir con los canales nacionales y, ante todo, un crecimiento exponencial de las importaciones de programas ajenos a la producción europea (de EEUU, pero también de Japón o Brasil). En el fondo, lógicamente, estaría la presión de la financiación de unos sistemas que, en su progresiva desregulación con los primeros años 80, han pasado a revalidar la lógica dominante de “audiencias masivas *igual a* mayor publicidad” (un sector, el publicitario, al alza durante una crisis no en vano calificada de sobreproducción). Esto es, la vieja lógica mercantilista de que la TV sea un medio que “vende públicos a la publicidad”.

**En la actualidad**, además de los sistemas británico, italiano y francés, el modelo coexistencial de TV (pública y privada) en Europa se extiende a Bélgica, cuyo parlamento aprobó en noviembre del 86 dos cadenas privadas financiadas por publicidad; Portugal, que en febrero del 87 veía el visto bueno legislativo a tres proyectos de ley de la oposición sobre la concesión de canales de TV a la iniciativa privada; y, finalmente, se extiende también a la República Federal de Alemania y a España: los germanos aprobaban la ley de TV privadas (2 canales, junto a los 2 públicos) el mismo día, 3 de abril de 1987, en que el gabinete González presentaba su proyecto para la coexistencia de los 2 canales de RTVE y los canales autonómicos con 3 canales privados como tope y de ámbito nacional.

Luxemburgo, entre los países restantes del “club de los 12”, es la antípoda, en cierto modo, de tal modelo televisivo: tiene TV privada exclusivamente (RTL). A diferencia del caso británico, con horizontes menos cerrados precisamente por razones políticas -la Commonwealth- y cultural/lingüísticas, el caso luxemburgués es paradigmático -en TV ahora como antes en radio- a la hora de “extender” por los grandes países vecinos la mancha de aceite de la desregulación, concitándose en

# MODELO COEXISTENCIAL (TV PUBLICA/PRIVADA) EN EUROPA OCCIDENTAL

Principales países	Canales	Titularidad jurídica	Control	Regulación de la TV privada
REINO UNIDO	BBC-1 BBC-2	Pública Pública	Parlamento+ BCC (organismo estatal independiente)	Televisión Act (1954)
	ITV Channel Four	Privada Privada	IBA (Independent Broadcasting Authority, Organismo estatal - indepen. 12 miembros).	
(1954)				
ITALIA	RAI-1 RAI-2 RAI-3	Pública Pública Pública		
	Canale 5 Italia 1 Rete 4	(redes nacionales) Privada Privada Privada	(Berlusconi) obligado a desprenderse de uno.	Sentencia del Tribunal Constitucional consagrando en 1977 la libertad de antena (Ley en 1985)
(Años 70)	Otros canales independientes			
FRANCIA	Antenne 2 (nacional) France 3 (regional)	Pública Pública		Ley de reforma de los medios audiovisuales
	La Cinq M-6 TF-1	Privada (Berlusconi-Hersant) Privada (Cía. Luxemb de TV CLT) Privada (50% acciones Grupo Bouyques-Maxwell (40% acciones público) (10% acciones empleados)	Comisión Nacional para la Comunicación y las Liber-	
(Años 80)				

su pequeño territorio los intereses privados que marcan las pautas de futuro desde tal laboratorio: no sólo en TV convencional sino también en teledifusión por satélite y/o cable. Así, la Compañía Luxemburguesa de Televisión (CLT) controla la “M-6” francesa y asimismo, asociada con el grupo Bertelsmann, la cadena que emite en alemán RTL-Plus, cadena a su vez que, ante los proyectos de cable tanto franceses como alemanes, proyecta uno “alternativo” (TV de peaje) cuyo coste se cifraba en 1988 sobre los 800 millones de marcos; a lo que sumar su papel en el satélite privado “Astra”, de igual modo frente al convenio franco-alemán en tal terreno...

De otra parte, igualmente en las antípodas del sistema coexistencial que domina en el contexto europeo más cercano, se encontrarían aquellos países que, luego de los sucesos del Este en 1989, podrían incorporarse al audiovisual europeo (en su sentido más amplio y renovado) y en los que persisten modelos de TV pública exclusivamente -si bien en pleno reajuste, hoy por hoy, a fin de abandonar la matriz propagandística de que se dotaron en la posguerra. El caso de Polonia, en tal sentido, es especialmente significativo, al ser el primer país en que -de la mano de Solidaridad- se produce el deshielo, también en materia de TV: así, la RAI está presente desde 1988 en la programación de la diócesis de Cracovia (la que fuera del Papa Wojtyla), junto con las dos cadenas públicas nacionales y la presencia adicional de la TV soviética. Pero la exclusiva de la publicidad de empresas soviéticas actualmente en poder de Berlusconi es no menos significativa del ‘desembarco anunciado’ de los magnates del negocio audiovisual en los países del Este.

No cabe olvidar, en todo caso, que “aunque desde 1955 han coexistido en Inglaterra la televisión pública y la privada, el gran debate político acerca de esta dicotomía -por decirlo con Román Gubern- no se produjo en Europa hasta los años setenta, irradiado sobre todo desde Italia”<sup>(1)</sup>. Y ello no por casualidad, sino coincidiendo con las primeras y más globales tentaciones de *desregulación*. Como el propio Gubern subraya, “acaso el mayor consenso en este debate se ha producido al sentenciar que la TV monopolizada por el Estado es un sistema imperfecto, del mismo modo que la TV entregada al poder de los intereses comerciales es asimismo un sistema imperfecto”. Así, si a la estatal se la suele acusar de favorecer la corrupción e instauración de clanes de poder en su seno, de despilfarro e ineficiencia administrativa, de ofrecer puntos de vista oficialistas y acríticos para el poder, etc, a la TV privada se le reprocha por su parte de estar dominada por el comercialismo, el sensacionalismo y el consumismo, por su subordinación a los intereses publicitarios, su programación escapista y su manipulación por los centros de poder económico. Dicho debate en España, larvado a su vez en los años 70, se dirimirá definitivamente una vez entrado en vigor el Estatuto de RTVE (1980) y ello en términos más y más explícitos, al contribuir a él los propios medios de comunicación privados.

Desde dentro del propio sistema comunicativo -y del contexto global en que éste se inserta, por tanto- los límites de la polémica (no agotada con la ingenua creencia de que la mera concurrencia en un sistema mixto de dichos modelos sería capaz de neutralizar o amortiguar sus respectivos defectos) se corresponderían con los límites que el autor catalán precisa como propios de *la utopía de la expansión televisiva ilimitada*. Señalando al respecto cuatro límites, derivados de:

- las frecuencias disponibles para TV del espectro electromagnético, según asignación internacional a cada territorio estatal (que afectaría más a la TV convencional, por ondas, y no tanto a los nuevos desarrollos tecnológicos ligados al satélite y/o cable, cabe matizar);
- volumen de las audiencias potenciales (factor demográfico- cultural);

- inversiones (publicitarias ante todo) en el sector (según amplitud de las audiencias); y,
- programación disponible (crisis de la misma en Europa, con un dominio aplastante de las producciones norteamericanas y una reducción apreciable de los niveles de exigencia y calidad).

Lo incuestionable, en todo caso, por lo que hace a la consolidación en Europa (occidental) del modelo coexistencial o mixto de *TV convencional*, es la progresiva presión durante los 80 del “empuje tecnológico”, auténtico talón de Aquiles de unos sistemas televisivos configurados tras la II guerra mundial con matices ciertamente diferenciales y hasta cierto punto equidistantes tanto respecto de EE.UU. (la TV como negocio) cuanto de la URSS (la TV como caja de resonancia de la política oficial). Ese empuje tecnológico tuvo y tiene que ver con el cable y, ante todo, con la TV directa (TDS) o ‘semidirecta’ por satélite. La opción londinense de “Canal-10”, en tal sentido, no fue en modo alguno casual, como no lo es que haya sido Gran Bretaña -el primer sistema en admitir históricamente la coexistencia de canales públicos y privados- el país trampolín, junto con Luxemburgo, para la implantación en el continente de la TV por satélite: británicos son, de forma significativa, tanto el “Super Channel” (controlado por la ITV) como el “Sky Channel” (en manos del grupo multimedia de Rupert Murdoch), los dos primeros del ranking del subsector en la CE.

Las nuevas realidades del audiovisual europeo obedecen sin embargo a intereses económico-políticos, y no exclusivamente a los tecnológicos, que se subordinan a aquellos. En el informe “El nuevo espacio audiovisual europeo” del llamado Club de Bruselas, se mencionaban los grupos empresariales transnacionales que ya en 1987 estaban dispuestos a ejercer en Europa el negocio televisivo transfronterizo:

1.- Berlusconi, de Italia, con posibilidad de transmisión en cadena o de emisión directa para sus canales en aquel país, inversiones en prensa escrita y semanal, con la exclusiva en la URSS de la publicidad de empresas europeas, además de negocios inmobiliarios.

2.- El grupo Bertelsmann, de la RFA, y la Compañía Luxemburguesa de Televisión (CLT), de Luxemburgo, que al asociarse en 1985 serían hoy el primer grupo multimedia del continente: con un canal de TV asociado con Springer, dos cadenas de radio, la empresa discográfica RCA-Ariola y la Radiotelevisión de Luxemburgo (con una audiencia de 40 millones en radio y más de 10 millones en TV, alcanzando Bélgica, Francia, Italia y RFA).

3.- El grupo Havas, en Francia: también con acciones en CLT y negocios editoriales, cinematográficos y de radio, es la primera empresa multimedia en Francia y productora del 50% de Teleimagen y del 25% de Canal-Plus, privado y por satélite.

4.- El grupo Thorn-Emi, que domina el mercado británico de equipos electrónicos y la cada vez más importante industria de vídeos musicales (básicos para los canales ingleses, que dominan hoy por hoy la TDS en el viejo continente).

5.- Finalmente, el magnate Rupert Murdoch que, además de 30 periódicos y 2 estaciones de TV en Australia y 6 estaciones de TV en EE.UU, 20 diarios y los estudios de cine Twentieth Century Fox, en Hollywood, ha desembarcado en el Reino Unido, donde posee o controla dos diarios (The Times) y la principal cadena de distribución por satélite, el “Sky Channel”.

Entre los grupos españoles, es sabido que CITSA (Sogetel más SER, ambas participadas por Prisa, editora de El País) intentó en la primavera de 1987, con el grupo Hachette, Pluricomunica-

tion (“Le Monde”) y otros, hacerse con el control del principal canal de TV francés, TF-1, pujando por la titularidad del 50% de sus acciones al reprivatizarse por Chirac. Sin embargo, quien se hizo con dicho control fue el grupo liderado por el primer empresario francés de la construcción, Francis Bouygues, que contaba como segundo socio principal con el británico Robert Maxwell (Daily Mirror y una productora de TV). Posteriormente, asociada con André Rousselet (Canal Plus), CITSA ha entrado de lleno en las alianzas “dominantes” en el mercado europeo del audiovisual (conectando a través de Canal Plus con Bertelsmann, Havas y CLT).

No es de extrañar, en tal contexto, que muchos piensen como Giuseppe Richeri, quien en su ponencia *“TV pública, TV privada: experiencias internacionales”* reflexionaba ya en 1984 sobre el hecho de que las televisiones públicas europeas se encontrasen “en situación de inestabilidad, de debilidad y, en algunos casos, de verdadera crisis” <sup>(2)</sup>. Frente a la supuesta prioridad de las causas tecnológicas, el asesor de la RAI anteponía al respecto una complejidad causal en la que predominarían factores de programación, de financiación y de control sociopolítico, sin dejar de lado (entre estos) los intereses de los públicos: su conocida tesis -que viene repitiendo junto con Doglio- de la creciente incapacidad del sistema audiovisual imperante en Europa para atender “las expectativas de audiencias cada vez más fragmentadas”.

Así, según Richeri, las TV públicas europeas estarían asumiendo cada vez más características propias de los organismos comerciales, diluyéndose en la práctica la antagonía TV pública vs privada. Influyendo en ello factores:

- de programación: “la concentración en algunos países de la mayoría de telefilms y seriales (EEUU con producciones tipo “Dallas”; Japón en el sector de dibujos animados, y Brasil en telenovelas) y el aumento de las horas de programación y canales”.

- de financiación: “la espiral inflacionista y las restricciones en los gastos públicos erosionan la base financiera de las TV’s públicas, ya que no pueden fijar libremente aumentos del canon y de los ingresos por publicidad para adecuar sus presupuestos a los crecientes costes de producción y al incremento de horas de emisión”.

- sociopolíticos: “la pérdida de identidad del servicio público, debido a las dificultades que tiene para satisfacer las exigencias de los usuarios, fragmentadas en mosaicos de intereses, grupos y categorías con diferentes gustos y actividades políticas y culturales”. Y Richeri añadía: “En este ámbito se inscriben los movimientos de lucha y contestación, en algunos casos muy intensos, contra el servicio público radiotelevisivo, acusado de ser un instrumento centralista y controlado por el poder público dominante. Las relaciones con este poder son, por lo demás, cada vez más difíciles, ya que cuando no puede controlar el monopolio de la información radiotelevisiva tiende a favorecer las iniciativas privadas con la esperanza de restituir sus propios márgenes de control”.

Semejante proceso de “crisis”, no obstante, más bien lo sería de “transformación”, siendo las tendencias comunes en Europa -aparentemente contradictorias según el investigador italiano- “la internacionalización de los sistemas, sobre todo de la programación”, y de otra parte la “descentralización que conlleva la creación de nuevas emisoras y la multiplicación de canales de difusión”. Siendo en este segundo aspecto que interesa en Europa la experiencia española de descentralización audiovisual, y dentro de la cual se inscribe una Radiotelevisión Valenciana cuyo “modelo”, pese a la demora de cinco años que va de su creación en 1984 a su bautismo de ondas en 1989, sigue sin superar la indefinición a que parece abocada en su inicial etapa de despegue como tal proyecto público.

## 1. POLITICA AUDIOVISUAL Y TV PUBLICA EN ESPAÑA.

*“Toda noticia es incompleta, y más aún  
la que procede de un pasado que se  
conoce por unos pocos autores”*

JUAN BENET.

Es preciso recordar, con Román Gubern, que la televisión “se desarrolló, desde vísperas de la II Guerra Mundial, en una sociedad capitalista, la de Estados Unidos de América, en forma de actividad privada y comercial financiada por la publicidad, y como intersección audiovisual del negocio cinematográfico y del radiofónico, dos negocios ya consolidados en el país, basados ampliamente, y por razones de lucro, en el entretenimiento y la diversión, más que en la voluntad cultural o de utilidad pública [...] A diferencia de EE.UU, en Europa occidental, después de la II Guerra Mundial, la televisión se configuró como servicio público por una suma de razones heterogéneas: 1) Por la tradición de empresa pública radiofónica dominante en Europa, 2) por la convergencia didactista producida entre la derecha (partidos democristianos y conservadores) y la izquierda (partidos socialistas y comunistas) en la tesis de que la televisión era un medio demasiado influyente en la sociedad para abandonarlo a manos de empresas privadas, 3) por la escasez de capitales privados en una época de crisis y de reconstrucción para poner en pie la nueva industria, y 4) por la debilidad del sector publicitario en estos años difíciles, al que además le desanimaba la intervención en este sector la muy incompleta cobertura territorial de las redes europeas en sus primeros años”<sup>(3)</sup>. ¿Y en España?

La TV en España, desde su inauguración en octubre de 1956, se configura en cuanto a la propiedad se refiere como TV estatal. El primer condicionante histórico será ese: será estatal desde su nacimiento, pero -lo que marcará para siempre su posible legitimación como “pública”- ese Estado en que surge es muy particular, es el Estado franquista (entonces entre la autarquía y las primeras intentonas liberalizadoras).

Distinguiremos *tres* etapas iniciales, las tres desarrolladas durante la dictadura y que son determinantes para un entendimiento cabal de las etapas más recientes: una *cuarta*, en plena transición (de 1976 a 1984), en que se resuelve la polémica TV pública vs. privada en favor del “modelo coexistencial” y se sientan las primeras piedras (ETB y TV-3) de la actual descentralización televisiva; y una *quinta* etapa, la que vivimos en la actualidad, de desarrollo efectivo de dicho modelo -generalizándose entonces, tras la aprobación de la Ley de TV Privada, el proceso descentralizador- en concurrencia adicional con las nuevas realidades del audiovisual ligadas a las “nuevas tecnologías”, etapa llamada a acelerarse en el horizonte del Mercado Unico de 1993 y en la cual se aprecia el vigor del satélite de teledifusión en detrimento de las opciones del cable.

Las *etapas iniciales* en cuestión, con Vázquez Montalbán, serían:

1953-58: Tras una serie de experiencias de particulares en los años 30 y 40, TVE arranca en 1953 con tecnología experimental, planteándose una difusión piloto sobre un circuito corto

cuyo radio parte de Madrid. El número de receptores en 1956, año en que se inaugura oficialmente, es de 3.000. La autarquía que se vive social y económicamente tiene su fiel reflejo en la instauración centralista del modelo televisivo español en sus albores.

1958-63: TVE despegue. En coincidencia con el Plan de Estabilización y con la gran oleada de expansión exterior de la publicidad-USA, el periodo de desarrollo técnico lógico y de expansión "espontánea" de la audiencia coincide con una elección capital (no sólo en cuanto a su financiación, sino también política) para TVE: su carácter comercial, incorporándose la publicidad como soporte económico. De las 200.000 ptas. de facturación del ejercicio 1956-57 se pasará a los 1.563 millones de ptas del ejercicio 1964-65.

Paralelamente, es patente la "liberalización" tanto informativa (agencias UP, CBS EN 1957; British CS, en 1958; ETES y German TV News en 1962 y 63) como de entretenimiento o argumental (también coincidiendo con la expansión exportadora de films y programas, especialmente norteamericanos).

1963-74: Con el Plan Nacional de TV (1964-67), dentro del I Plan de Desarrollo, se observa una política gubernamental dirigida al incremento de la demanda: TVE se configura como instrumento añadido de influencia y control político.

Del millón de receptores de TV que hay en 1964 en España se pasa, en esta última etapa, a los 5.700.000 en 1974 (multiplicado casi por 3 en la actualidad). A resaltar que coincidiendo con la "etapa Fraga" en el Ministerio de Información y Turismo (MIT), y siendo Adolfo Suárez director general de RTVE (1969-73) y Barrera de Irimo presidente de Telefónica, se constituye en 1972 la empresa COSESA (CTNE más cuatro importantes bancos: Hispano, Banesto, Urquijo y Bilbao), para la comercialización del hilo musical: también, en un principio, limitándose a Madrid y Barcelona. Algo que se ha calificado por muchos como el primer asalto por la privatización, pues al hilo musical sucedería la comercialización de la TV-cable <sup>(4)</sup>.

Mientras tanto, la regulación jurídica del medio con el franquismo se ligará totalmente a su concepción como mera prolongación del poder gubernamental. En TVE, su regulación de hecho - como monopolio absoluto- y gubernamentalización (nada de régimen mixto, como en radio) serán una misma cosa. Ateniéndose a leyes como las de 1907 o 1934, muy anteriores a su existencia, la TV en España nació bajo la última dictadura sin normativa jurídica propia: fue simplemente asimilada en ese sentido -como subraya Bustamante- a la radio, si bien bajo un control político más directo y férreo. Ya en 1966, con la oportunidad que pudo ser la reforma de la Ley Fraga de Prensa, se perpetúa dicho vacío jurídico, sin duda por ser políticamente fructífero para el régimen. De paso, que la gubernamentalización del medio se ampare en la interesada identificación política entre monopolio y servicio público, va con los años desprestigiando el segundo concepto y legitimando históricamente a quienes, interesadamente a su vez, pretenden acabar con el primero y privatizar el medio. Así por ejemplo el decreto de 11-10-73 conforma RTVE como "servicio público centralizado" -en contradicción más que notoria- y sin personalidad jurídica propia, al tiempo que readapta los mecanismos de poder sobre el medio televisivo.



En cuanto a su ubicación administrativa, simplemente se asimila de modo totalmente “anormativo” a la radio. TVE pasa a depender de la dirección general de Radiodifusión (y de Televisión, se añade ahora), a la sombra del ministerio de Información y Turismo. Y de la censura de Carrero, y de la Pla y Deniel, se pasará entonces a la más blanda de los directores generales, todos ellos por cierto políticos y ninguno periodista. La cuidadosa designación de los sucesivos directores generales desde el periodo de Arias Salgado (Jesús Suevos, Jesús Aparicio, Rafael Orbe Cano, Adolfo Suárez, Juan José Rosón, Sancho Rof, Gabriel Peña Aranda, Rafael Ansón), en su totalidad como puestos clave de confianza de los gobiernos del tardo-franquismo, hace que el cargo se convierta en plataforma privilegiada en el escalafón político de la Administración. Y ello a la par que se da un enorme crecimiento del medio en presupuestos, plantillas, etc.

Ese enorme aparato político-informativo que era TVE no logrará, con la transición, recuperar la credibilidad perdida desde sus orígenes y -lo que es más conflictivo- el paraguas ideológico que arropara en las etapas iniciales su posición privilegiada (no otro que la noción de “servicio público”) quebrará su legitimidad en apenas 10 años y dará cabida a un modelo *coexistencial* con la TV privada, algo con “luz verde” virtual desde fines del 83 y legalmente posible tras el visto bueno del Congreso al proyecto de abril del 87 (formalmente ley un año justo después)... Retomar aquí con el debido detalle esos dos momentos claves (1983-84, 1987-88), no es sólo exigencia ‘formal’ que obedezca a nuestro criterio de que la actual política audiovisual cabe rastrearla -en efecto- en aquella política diseñada durante la transición; sino, ante todo, interés ‘sustantivo’ y concreto ***para poder llegar a entender cuánto adeuda RTVV en sus despegues sucesivos: el jurídico-político inicial (1984) y el técnico-periodístico después (1988), al desarrollo efectivo y previo de la polémica (el modo y fechas en que de hecho se resuelve) sobre la TV privada en España.***

Si descentralización ‘pública’ por la vía inicial de los hechos consumados (caso de ETB y TV-3) y presiones pro-desregulación de la TV ‘nacional’ en España vienen a coincidir en el tiempo, no es menos cierto que a ambas *rupturas* del monopolio público heredado se suman, también en los 80, las más “indirectas” o socialmente “limitadas” del video y de la TV por satélite. De modo que ***en parecidos términos cabe plantear cuantos interrogantes en relación con el futuro previsible de Canal 9-TVV ya se derivan de la indefinición que el actual modelo coexistencial entre TV pública y privada (TV convencional al cabo) deja entrever respecto de las nuevas realidades audiovisuales.*** Nuevas realidades que, de la mano de las nuevas tecnologías, delimitan un horizonte tan cargado de condicionantes como de posibilidades.

### 1.1. TV PÚBLICA VS. PRIVADA: HACIA UN MODELO COEXISTENCIAL.

Se ha dicho recientemente, y parece sostenible no sólo a efectos de periodización más o menos heurística, que “el proceso hasta la regulación de la televisión privada en España ha conocido dos etapas claramente diferenciadas: la del Gobierno de UCD, que preparó su regulación, pero no pudo aplicarla, y la del Gobierno socialista, que acaba de aprobarla”<sup>(5)</sup>. Entremos, con tal criterio diferenciador, en las matizaciones que más nos importan al respecto.

### 1.1.1. La etapa de UCD.

Con la transición, Rafael Ansón (experto en relaciones públicas y publicitario, colaborador administrativo de Adolfo Suárez en los planes de desarrollo de López Rodó) prepara como nuevo director de RTVE desde julio del 76 el desembarco de Suárez en el 15-J de 1977, las primeras elecciones democráticas. Ansón dirá aquello de “quien no esté de acuerdo con el Gobierno, no puede estarlo con RTVE”. Y crea -reparemos en ello- las primeras expectativas serias en grandes cadenas de prensa y radio acerca de la posible privatización del medio TV: un artículo de Gregorio Morán en El País Semanal sacó a la luz, por entonces, sus proyectos de privatización. Es de sobras conocido al respecto que Prensa Española, empresa editora de ABC, fue la primera interesada en solicitar permiso de emisión televisiva, primero vía “Informaciones” (cuando estaba entre su accionariado) y ya más adelante en 1976 a título individual; como luego, en diciembre de 1978, sería Antena-3 (en la que estaba ABC) la primera sociedad privada de radio en solicitarlo y la primera a renglón seguido en iniciar un largo camino de recursos contra su denegación (un contencioso administrativo, desestimado en abril de 1981, otro posterior ante el Supremo y uno subsiguiente ante el Constitucional, origen de las sentencias que este último emite en marzo y diciembre de 1982). Luis M<sup>a</sup> Ansón, hermano de Rafael, pasó por entonces de ser nombrado director de la agencia EFE, en septiembre del 76, a director del diario ABC en 1982...

En agosto del mismo año 76, un diario como El País, entonces en sus albores, pide un estatuto de ente autónomo para TVE (al modo de la BBC inglesa): el curso posterior de los hechos (incluido su propio y particular asentamiento como medio de referencia dominante) le hará cambiar de opinión <sup>(6)</sup>. En octubre, también del 76, se crea un Consejo General de Televisión con funciones asesoras del director general: tal reestructuración, por vía de Real Decreto, no cambia en absoluto el control gubernamental.

Justo un año después, en octubre de 1977 (tras las elecciones), se configura legalmente TVE como “Organismo autónomo de carácter comercial” (carácter así fortalecido) con el añadido de mantener “su actual estructura interna y las funciones que hasta hoy tenía encomendadas” (centralismo pro-gubernamental heredado). Los firmantes de los Pactos de la Moncloa se emplazarán, de inmediato, a elaborar un proyecto de Estatuto para RTVE. Estatuto luego transformado, una vez superado el “impase” de los trabajos parlamentarios inherentes a la puesta en pie de la nueva Constitución, en Estatuto “de la radiodifusión y televisión”, más genéricamente por tanto: manteniendo por su Disposición Adicional 1<sup>a</sup> el statu quo del régimen privado en Radio, y añadiendo más dudas que quitándolas respecto del carácter definitivo que del “servicio público esencial de titularidad estatal”, como se definía a la TV, cupiese dilucidar a posteriori. A tal fin se atenderá un proyecto de Estatuto elaborado durante el mandato de Fernando Arias-Salgado (marginación del Comité Anticorrupción; desfavorable auditoría de Hacienda hasta el año 79, publicada precisamente por El País, etc, primera huelga de TVE incluida), proyecto encargado por el citado director general al ex-ministro Villar Palasí, cuñado de Luis Ezcurra (subdirector general entonces de RTVE).

Para entonces, eran ya muchas las voces que aludían a una posible y fundamental intención de fondo: al tiempo que retrasar la puesta en marcha del Estatuto favorecería al partido en el

gobierno, UCD, la extraordinaria prolongación del “desajuste” televisivo en relación con la democracia recién asentada por la Constitución del 78 podría ser el prólogo de su privatización parcial, una vez “arruinada” como TV pública. Bastaría acudir a las hemerotecas para analizar aquel período y corroborarlo: el descrédito de la TV pública iba, imparablemente, a más.

No siendo nuestro interés directo, en esta Tesis, retomar en detalle la polémica de fondo sí parece conveniente señalar, en todo caso, los grupos empresariales inicialmente más interesados en obtener licencia de emisión privada, a fin de que el propio discurso tenga para el lector, desde un principio, “interlocutores” reconocidos. Baste con resaltar, para ello, que al poco de celebrarse el primer cumpleaños del Estatuto de RTVE, en mayo del 81, la Sociedad Española de Radiodifusión (SER) y TELE-80 presentan ante el ministerio de la Presidencia del Gobierno (al que se ha adscrito el Ente según R.D. de 31 de julio 1980, en cumplimiento de la cláusula adicional 7ª del Estatuto) sendas solicitudes formales de cadena y emisoras, respectivamente, de TV privada. La SER, principal cadena de radio de gestión privada de España -y de Europa-, obedecía entonces al inestable tándem personalizado en la fórmula “Fontán más Garrigues” (Opus Dei más capital transnacional, que dirá Bustamante). TELE-80, por su parte, sería subsidiaria de la Cadena Radio-80, creada al amparo del R.D. de 8 de junio de 1979 (que establecía el Plan Técnico “Transitorio” de Ondas Métricas con FM), para apoyar a la cadena católica COPE e impedir el despegue de la SER; una “Cadena-80”, cabe recordar, que arrancaba con 8 sociedades fundadoras, entre ellas EDICA (Diarios Ya, La Verdad, etc), y con la participación en todas de “Promotora de TV y Radio”, figurando Luis Angel de la Viuda como director general. Las dos solicitudes en cuestión se unían a la previamente planteada por Antena-3, una cadena en principio de radio (acogiéndose también al mismo R.D. de junio del 79) que arrancaba de las “sugerencias privatizadoras” que Ansón formuló en su día: los grupos editores de ABC y la Vanguardia, la Agencia Europa Press y el Grupo Z estaban por entonces detrás del asunto.

- Radio 80 y Antena 3 -ésta con sucesivas desafecciones posteriores, aglutinada hoy en torno a “La Vanguardia”-, llegarían incluso a asociarse temporalmente, en TEVISA, separándose de nuevo con el tiempo y manteniendo tan sólo Antena-3 su opción “final” por una licencia de emisión tras la aprobación de la Ley de TV Privada (LTVP).

- El Grupo Z, por su parte, no tardó en independizarse conforme fue consolidando su poderío de la mano de M. Asensio como cabeza gestora visible (“Interviú” “Tiempo” “El Periódico” de Cataluña, “Panorama”, la agencia OTR y varias revistas más en 1987), y terminaría por solidificar sus intereses en torno a “UNIVISION-CANAL 1”.

- Integrada también al principio en Antena-3, la editora del diario ABC (Prensa Española) formaría en los primeros años 80 el consorcio “CANAL-7” junto a las productoras de cine “Izaro Films” y “José Frade”, además de un grupo de empresarios políticamente significados.

De otra parte, en agosto del 81 (apenas tres meses después de la primera tanda de peticiones), se uniría a las tres iniciales la solicitud de RADIOTV-16 (de Impulsa, empresa editora de las revistas Cambio 16, Motor 16 e Historia 16, así como del “Diario 16” y cuyas primeras emisoras de radio llegaron a asociarse con el tiempo, a su vez en el vaivén estratégico de arreglos/ desarreglos a la

SER). Así como también la solicitada por TELEUNION, aspiración inicial de un grupo de profesionales de la propia TVE: unos, como Miguel A. Toledano, ficharían por Univisión; mientras otros como, Valerio Lazarov, tratarían de hacer de puente (y en el caso de Lazarov se conseguiría) para el posible desembarco de Berlusconi.

Más adelante vendrían más peticiones, entre ellas la de PRISA, sociedad editora de “El País”, que definitivamente entra en liza y a través de su filial PRESA ponía en marcha la emisora de radio del mismo nombre del diario (“rebautizada en agosto del 87” Radio Minuto Madrid”) y que en junio de 1983 (año clave, se insiste) realizaba su bautismo de ondas. PRISA “absorbería” el control de la SER dos años después, en una operación de las más trascendentales de la década para el sistema de comunicación español. Y serán la SER y SOGETEL (50% de Prisa y el resto de empresarios) las empresas que funden a partes iguales la Compañía Independiente de Televisión S.A. (CITSA), cuyo solo nombre recordaba a la ITV del modelo británico por el que se apostaba el grupo desde un principio. Citsa, sin duda la candidata número 1 por entonces para competir con TVE merced a la solvencia económica y el paraguas ideológico (“independencia informativa”) que con la transición han consolidado el diario y la cadena de radio del grupo, no decidiría sin embargo su entrada en el circo televisivo sino una vez consolidada su “apuesta europea” de la mano de Canal Plus, obteniendo una de las tres licencias junto con la *histórica* Antena-3 y la gran “novedad” posterior que supuso la alianza de la ONCE con Berlusconi en TELE 5...

La redacción consensuada del *Estatuto de RTVE* no terminó, en ningún caso, de arreglar las cosas. La ambigua -cuando no equivoca- redacción de su parte dogmática (arts. 1 a 4) cuadraba con la ambigüedad calculada propia del sistema político español en los albores de la pasada década, de modo que no aportó tanto seguridades cuanto sólo -probablemente- meras expectativas que ligar (hablamos de los años 79-80) a la correlación de fuerzas parlamentarias en el tiempo. La visión apreciablemente política de su redacción se plasma, por demás, en el contenido desarrollado por el resto del Estatuto, y casi todo él hace posible interpretarlo como un intento por definir las “reglas del juego (político) en TVE”: no sólo porque la disposición adicional 1ª marque claramente la diferente visión del medio Radio, sino por lo dispuesto en su cap. II (“Organización”) y, particularmente, el nombramiento del director de RTVE (hurtado al Parlamento), así como la más que previsible “redundancia” entre un Consejo de Administración diseñado siguiendo la regla de proporcionalidad (política) de las Cortes y la Comisión Parlamentaria de control que adicionalmente se establece. La redacción del Estatuto no escapó, así, junto a las funciones fantasmales atribuidas a los Consejos Asesores, a la vieja tentación por “gubernamentalizar” RTVE. Todo ello, además, sin contar con la participación de trabajadores y audiencias, que hubieran debido tener atribuciones efectivas a priori.

Ni que decir tiene que en tal contexto, y con el Estado de las Autonomías pendiente de desarrollo, el viejo centralismo de RTVE tan sólo se maquilla, reforzándose de hecho una estructura organizativa en relación con los Centros Territoriales, de entrada, en progresiva discordancia con el Título VIII de la Constitución y con los sucesivos Estatutos de Autonomía (el catalán, inclusive, anterior en su aprobación al propio Estatuto de RTVE). Desde la perspectiva que aquí más nos importa, Gómez-Reino <sup>(7)</sup> ha señalado las principales referencias de esa mayor sensibilización -en la letra del Estatuto al menos- que parece demandarse de la maquinaria de RTVE para con el Estado de las Autonomías:

- En los párrafos 1º y 4º de la exposición de motivos:

Donde, entre otros objetivos, se alude a la difusión de la cultura de las nacionalidades y regiones españolas; se menciona la creación de un canal de TV de titularidad estatal para el ámbito territorial de cada CCAA y la participación en los órganos territoriales de RTVE.

- En el art. 2º, apartados 2 y 3:

Donde se avanza en el tema del canal territorial y su organización y control.

- En el art. 9º, apartado 1.d:

Se instituye la representación de 5 miembros por las CCAA en los Consejos Asesores de las tres sociedades (TVE, RNE y RCE).

- En la sección VII, relativa a la organización territorial de RTVE, arts. 13º, 14º y 15º:

Se alude a la programación de radio y TV específica para cada ámbito territorial, a la figura del Delegado Territorial y sus funciones, así como al Consejo Asesor que en dicha CCAA le asistirá.

- En el art. 36º, apartado 2:

A iniciativa o propuesta de las CCAA, se podrá crear una filial o delegación del Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV).

- Y, especialmente, en la Disposición Adicional 4ª:

Donde, entre otras cosas, se alude a la creación de un Tercer Canal regional para el ámbito territorial de cada CCAA. (A la misma se ligaría la posterior Ley 46/1983, reguladora de dicho Tercer Canal).

Ni los hitos más significativos desarrollados por el Consejo de Administración -un Consejo, por cierto, que tardó 10 meses en constituirse por primera vez tras la aprobación del Estatuto-, ni siquiera la redacción en julio de 1981 de los '*Principios Básicos y Líneas Generales de Programación*', en buena medida -incluso ahora- auténtica letra muerta; ni los acontecimientos políticos más inmediatos: desde el primer síntoma que supuso la adscripción del Ente RTVE, administrativamente, a Presidencia del Gobierno, hasta el polémico (y nuevo) retraso en constituirse el Consejo bajo la dirección de José Mª Calviño, con un PSOE abrumadoramente mayoritario tras 1982 en las Cortes, ni unas cosas ni otras -y no era poco lo socialmente avanzado por entonces en otros terrenos- podía hacer pensar ni al más optimista que tal visión del medio TVE pudiese llegar a cuajar en lo fundamental. "La" televisión, imprescindible para la legitimación social de la transición, habría de esperar a que ésta se consolidase (desde el centro) para afrontar su particular transición...

Con el Estatuto de 1980 se afirmaban jurídicamente, eso sí, ya dentro del nuevo marco democrático y de forma explícita, las líneas generales de política comunicacional *consensuadas* en su origen (por UCD y PSOE). Dichas líneas generales, según síntesis de alguien tan significado como Antonio López -director en su día de TVE- serían:

“ a) Declaración de la radio y la televisión como servicios públicos esenciales, con expresa asignación al Ente RTVE de las funciones que corresponden al Estado como titular de los servicios públicos, y la excepción de una disposición adicional permitiendo a sociedades privadas la gestión del servicio público de radiodifusión.

b) Exigencia para los medios de comunicación social del Estado de objetividad, veracidad, imparcialidad, respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico.

c) Derecho de acceso a todos los grupos sociales representativos en los medios de radio y televisión estatales.

d) Independencia de radiotelevisión respecto al gobierno y rendimiento de gestión ante el Parlamento''<sup>(8)</sup>.

Según el mismo autor, faltaba en todo caso "para completar el modelo que ajuste la organización del servicio a la del Estado", la atención "desde este medio a la Autonomía Municipal"... Si a la cuestión autonómica se intentaría atender con la Ley de Terceros Canales de 1983, luego de la "primera ruptura" del monopolio (vía descentralización pública mediante el recurso de vascos y catalanes a una política de hechos consumados que encuentra en el propio Estatuto ocasión para justificarse), en relación con lo segundo apenas se ha bosquejado sino la intención de legislar las TV locales en la presente legislatura (89-93), ignorándose si con ello se buscará quizá un cierto contrapeso tanto de la primera como de la "segunda ruptura" del monopolio (la inherente a la presión privatizadora que propicia la LTVP de 1987). Pero retomemos el hilo de los acontecimientos históricos y dejemos para más adelante cuanto concierne a la crítica del Estatuto desde una óptica más actual. Porque no cabe duda, en cualquier caso, de que la aprobación del Estatuto "marcó" una clara línea divisoria en la gestión de UCD respecto de TVE.

Importa recordar así que en enero de 1981, casi un año después de la entrada en vigor del Estatuto, un hombre de Pío Cabanillas desde 1977 en la subsecretaría del ministerio de Cultura, Fernando Castedo, era elegido primer director general del Ente a la sombra de la nueva norma. Pero en primavera de ese mismo año la propia UCD pone cerco al primer director general democrático de RTVE. Es cuando Castedo comete el error de intentar parar la ofensiva contra él cesando a Iñaki Gabilondo: un hombre (pasaría a Radio-16, y de ahí a la SER, ¿y de ahí a Canal Plus?) que llegó a declarar, precisamente en El País, aquello de "quieren edificar la TV privada sobre la ruina de la pública"... En mayo del 81, en efecto, se suceden las peticiones más sonoras pro-TV privada a que más tarde aludiremos. Y a finales de ese mismo mes diputados ucedistas, al compás de la campaña contra Castedo, presentan en el Congreso una proposición de ley para regular las TV privadas. Ya entonces se vislumbraba, entre otras cosas y una vez pasado el trago del 23-F, que el PSOE podría hacerse tarde o temprano con las riendas del gobierno. Es ahí donde podemos situar el "punto 0" a partir del cual la polémica TV pública vs. TV privada se hace explícita y comienza a llegar a la gente de a pie más avisada.

Especialmente alarmantes son los síntomas, que ya son claros durante el verano, por instrumentalizar electoralmente TVE. En septiembre se constata una nueva ofensiva de UCD, con Calvo Sotelo al frente, contra Castedo. Por entonces, el enfrentamiento entre Pío Cabanillas (en Presidencia) y Francisco Fernández Ordóñez (Justicia), debido al intento del primero por regular la TV privada mediante decreto-ley (Gobierno) que no mediante ley (Parlamento), propiciará la sonora salida del segundo de UCD y será -casi- la espoleta de la ruptura interna de dicho partido. Tras sustituir Rafael Calvo Ortega (suarista) a Pío Cabanillas en Presidencia, el tema se "para" momentáneamente. Pero el acuerdo Calvo Sotelo-Suárez para forzar la dimisión de Castedo, rompiendo con el espíritu (parlamentario) de una ley como es de hecho el Estatuto, dejaba ver a las claras las consecuencias de dejar al margen del Parlamento el nombramiento del director general de RTVE. En cualquier caso, el desembarco de Robles Piquer en TVE -sin entrar ahora en su parentesco, familiar primero y político después, con Fraga- es inmediato en cuanto a sus intenciones: amparado en la nueva mayoría "natural" (de 7 a 5) en el Consejo, Robles reclamará rápidamente sus competencias en materia de programación. Se intuía, cada vez más aceleradamente, que el 28-

de octubre de 1982 estaba a la vuelta de la esquina.

Pero el mes de septiembre de 1981 merece mayores atenciones. Porque es cuando se produce en el PSOE, guardando las formas, un debate interno sobre la TV privada: la posición es ya entonces de “no, pero...”. Y es en ese mismo mes, con Pío Cabanillas todavía al frente de Presidencia -del que depende administrativamente RTVE, recordémoslo-, cuando el Consejo de Estado (¿a la “sombra” de la Disposición Final del Estatuto?) emite dictamen favorable a las televisiones privadas. El gobierno acelera, pero el 23 de septiembre el proyecto de Decreto-Ley se filtra a El País: Joaquín Tena, responsable en la materia, dirá con el tiempo que el proyecto filtrado era obra “del anterior ministro de Cultura (Pío) y del subsecretario general técnico, Jesús Santaella”. Así mismo, entre los redactores del “Plan Técnico” previsto como previo a la convocatoria pública de adjudicación de emisoras se encontraban José de la Rosa y el valenciano Luis Ezcurra (el ex-subdirector general de TVE).

En el Consejo de Administración, mientras tanto, las posturas también parecían claras. UCD y AP dirán que sí, de una parte, a esa intentona por regular la TV privada desde el Gobierno, reclamando la defensa del artículo 20 de la Constitución, en concreto el apartado d) del número 1: “derecho a recibir o comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión”; PSOE y PCE de otra parte argumentarán, en su intento por frenarlo, su oposición a regular el tema mediante decreto-ley y, en cuanto al fondo, la defensa del artículo 128.2: “Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales (...)”. La apoyatura constitucional de ambas posturas, en principio tan contrapuesta, se aproximará después (sin resolver la antagonía interpretativa) a la doctrina, básica hasta hace no tanto, que el Tribunal Constitucional dictaminará en 1982.

Pero sigamos. En octubre del 81, poco antes de su cese-dimisión, Castedo se declara públicamente defensor de la TV pública. Y poco más tarde dirá: “Mi meta fue una televisión independiente del Gobierno y responsable ante el Parlamento”. Todo un proyecto, en suma, de reforma (o, si se quiere, de respeto escrupuloso a la legalidad)... Tras su dimisión, el contencioso Congreso-Robles Piquer (moción de censura, reportaje “Golpe a la turca”) se cierra con la ayuda abstencionista del PSOE en la votación de censura, sin duda ante el temor de que se produjera de rebote la dimisión del propio Presidente del Gobierno o elecciones en pleno verano del 82.

Para entonces, en su sentencia de 31/marzo/82 el Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo presentado por Antena-3: la TV privada, según el alto Tribunal, “no es una exigencia jurídico-constitucional, pero tampoco está constitucionalmente impedida”. Queda claro con ello, primero, que su regulación es posible y, segundo, que la implantación o no de la TV privada corresponderá finalmente al poder político. De hecho, el gobierno en descomposición de la todavía Unión de Centro Democrático interpreta rápidamente la decisión del legislador y se apresta al consecuente desarrollo legislativo. Un liberal de UCD, Rodríguez Inciarte, entonces en Presidencia, intenta desdoblar la regulación de la TV privada mediante Ley Orgánica (que exige mayoría absoluta) y Ley Ordinaria (que, conteniendo “lo fundamental”, permitiría a Calvo Sotelo sacar el tema adelante al no exigir tal mayoría). El intento es parado por el PSOE, merced a la propia descomposición de UCD y al contencioso que desde el Congreso se ventilaba frente a Robles Piquer...

Ese verano del 82 finalmente, en concreto a finales de julio y con UCD ya rota, ve cómo Landelino Lavilla “dimite-destituye” a Robles y lo sustituye por Eugenio Nasarre (una biografía a la sombra de Ruiz Giménez, como se le definirá). Su mandato, y pese a ser el primer periodista en el cargo, será un mero paréntesis pre-electoral ante al 28-O, que ya estaba encima. Con todo, le da tiempo a Nasarre, ante la pérdida para RTVE de 700 millones por suspensión de pagos de la agencia publicitaria Victor Sagi, de trasladar el aval en el pago de la publicidad de las agencias a los anunciantes (medida que tiene su importancia). Y, aun con problemas para su composición, crea una “Comisión Técnica de Valoración Publicitaria”, adscrita a la Dirección General de RTVE. Como también le da tiempo a que su equipo presente un Estudio sobre los “Nuevos horizontes de la TV”, así como a impulsar un seminario sobre “TV Directa por Satélite: TDS”, que se celebraría ya en noviembre/diciembre de 1982.

El Tribunal Constitucional reiteraba por entonces (ya con el “cambio” en sus primeros 100 días) su argumentación de marzo, contraria a las pretensiones privatizadoras a ultranza.

Resumimos, por su trascendencia (al suponer de hecho el cierre de la “vía italiana” en España), la *doctrina constitucional* del alto tribunal al respecto, desde 1982 “palanca legal” insalvable en la resolución posible (explícita) de la polémica. Una interpretación centrada ya (o casi) en torno a la interpretación del art. 20 de la Constitución (aun cuando el Gobierno, en su proyecto definitivo de abril del 87, retomará de nuevo la apoyatura del 128.2 por entender que así lo sugiere la propia doctrina del TC):

“... la Constitución reconoce y protege los derechos de <expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción>. Implica un derecho de libertad que incluye la ausencia de interferencias de las autoridades estatales en el proceso de comunicación, además de significar en otro plano la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre”.

Y esa libertad, como libertad frente al poder, se especificaba:

“Esta libertad de expresión es ante todo un derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que les protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos, si éstos intentaran fijar límites distintos de los que la Constitución admite”.

Y por lo que aquí importa particularmente:

“... nuestro ordenamiento ha constitucionalizado el control parlamentario de la televisión pública es total y que la llamada “televisión privada” no está necesariamente impuesta por el artículo 20 de la Constitución, aunque, como es obvio, no está tampoco constitucionalmente impedida. Como allí dice, su implantación no es una exigencia jurídico-constitucional, sino una decisión política que puede adoptarse, dentro del marco de la Constitución, por la vía de una Ley orgánica en la medida en que afecte al desarrollo de algunos de los derechos constitucionales del artículo 20 (artículo 81 Constitución); es decir, que, en todo caso, deben ser respetados los principios de libertad, igualdad y pluralismo político,



como valores fundamentales del Estado [...], pues tanto se viola la comunicación libre si se ponen obstáculos desde el poder, como si estos obstáculos surgen desde los propios medios de difusión''. (SENTENCIA 74/1982, de 7 de diciembre)

Matizándose, apenas dos semanas más tarde:

“Si partimos de la consideración de que la radiodifusión es un servicio público esencial cuya titularidad corresponde al Estado -como se cuida de proclamar el artículo 1.2 de la Ley 4/1980, de 10 de enero [Estatuto de RTVE]-, y esto no es cuestionable, y se admiten las modalidades indirectas de gestión mediante la técnica concesional, no podrá sostenerse, sin hacer quebrar todos los principios sobre los que se asienta esta modalidad de gestión, una pretensión dirigida a obtener la concesión sin sujeción al procedimiento concesional, que es en realidad lo que demanda el actor en este proceso. Cuando se trata de un servicio público y éste se funda en la idea, entre otras, de la limitación del medio por razones tecnológicas y la utilización de bienes de posibilidades reducidas de utilización, no puede invocarse una actuación inicialmente libre; por el contrario, será la Administración la que podrá distribuir entre un número limitado de aspirantes la gestión indirecta''. (SENTENCIA 80/1982, de 20 de diciembre).

Se ha respetado hasta aquí la máxima literalidad de la doctrina. No hace falta añadir que, sin embargo, las interpretaciones de las distintas partes interesadas no cejarán en su empeño por redefinir las “posibilidades legales” al hilo de los nuevos acontecimientos.

El “salto cualitativo”, tras las primeras encuestas aireadas a favor de la TV privada, no se deja esperar: se pondrá en duda al propio Tribunal Constitucional porque el Estatuto de RTVE, que la doctrina de aquel sostiene, pasa a ser el nuevo escollo central. El catedrático Jiménez de Parga (ligado a Antena 3, principal adalid todavía de la privatización) trata de fijar el “mínimo” de los grupos empresariales periodísticos, en conferencia pronunciada en un Ateneo de Madrid todavía con Chueca Goitia (AP) como presidente: “El Estatuto de RTVE no garantiza la libertad de información”, titulará Diario-16 al recoger su intervención en su edición del 2 de diciembre. “El Estatuto -sostuvo sin tapujos Jiménez de Parga- es inconstitucional, pues una ley ordinaria no puede regular el ejercicio de los derechos básicos” (como el de libertad de información). Como tal derecho, según el citado jurista, “en TV se encuentra reconocido a todos los españoles por el artículo 20.1.d) de la Constitución (...) No es un derecho que dependa de las Cortes Generales, como erróneamente se afirmó en una sentencia del Tribunal Constitucional”. Su conclusión era obvia: “la fórmula adecuada para España en el presente momento histórico es el pluralismo externo, o sea, la libre concurrencia de varias televisiones”... La sentencia del Tribunal Constitucional a que se refería sin duda el catedrático catalán era muy cercana en el tiempo y había introducido una ambigua distinción entre libertad de expresión y libertad de información. Transcribimos lo sustancial:

“El apartado d) del número 1 del artículo 20 de la Constitución consagra el derecho <a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión> estableciendo un tipo de derecho fundamental diverso [tesis del alto Tribunal] del que consiste en expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones en aras del interés colectivo [...]. Se trata, como el artículo 20 dice, de un derecho doble que se concreta en comunicar la

información y recibirla de manera libre en la medida en que la información sea veraz. El objeto de este derecho es por consiguiente el conjunto de hechos que puedan considerarse como noticiales o noticiosos en los términos puntualizados anteriormente y de él es sujeto primero la colectividad y cada uno de sus miembros, cuyo interés es el soporte final de este derecho, del que es asimismo sujeto, órgano o instrumento el profesional del periodismo, puesto que a él concierne la búsqueda de la información y su posterior transmisión''. (SENTENCIA 105/1983, de 23 de noviembre).

Importa retener, dentro del galimatías legal que hace al caso, que será ese "por cualquier medio de difusión" del 20.1.d) de la CE, el principal argumento de choque (jurídico) de los "privatizadores" con el alto Tribunal.

Así, en abril del 87, de inmediato al anuncio por Solana del contenido básico del proyecto definitivo del PSOE al respecto, el editorial de "El País" (ya el más poderoso adalid y principal portavoz de la corriente, tras la operación SER/PRISA de 1985), lo retomaba como última ratio legitimadora para sentenciar que "la contemplación de la televisión como un servicio público y no como un derecho de los ciudadanos sitúa el pensamiento político de nuestros gobernantes en sus debidos términos [estatalista, se viene a decir. Y se añade:] en particular en relación a la participación (máximo del 15%) de empresas de comunicación ya constituidas"[...] Es el poder de las empresas periodísticas y de los periodistas que trabajan en ellas, y de la opinión que representan, el que es preciso frenar, según el Gobierno [...] El PSOE ha perdido una magnífica oportunidad. La experiencia demuestra que podía haber dado la credibilidad que nunca tuvo a la televisión pública a base de hacerla competir con la privada" (7-abril-87). Y Federico Jiménez Losantos, desde su columna espetaría: "El proyecto de ley sobre TV privada supone la negación de la libertad de televisión, que, diga lo que diga el Tribunal constitucional en su acatable pero lamentable dictamen anterior, respalda nuestra Constitución [...] El asunto está viciado de raíz, porque la televisión, como la Prensa o la radio, no son un servicio público, sino un derecho de los ciudadanos, un campo para la iniciativa privada que el Estado debe respetar, no controlar. El Tribunal Constitucional dio, insisto, la pauta de interpretación estatalista que ahora conecta el felipismo de forma arbitraria, strafalaria y totalitaria" (Diario 16, 6-abril-1987)... Ni una ni otra posición se hacían eco sin embargo, por ejemplo, del prejuicio unitarista sobre cuanto opinan -diversamente- los públicos, pues tanto los medios en cuestión como el propio TC siguen hablando de "la" opinión pública. Y en ese sentido también cabría matizar -pues de eso se trata al cabo-, algo que ya apuntase en Carta al Director un anónimo lector leonés de uno de tales diarios, Alfredo Gómez firmaba, cuando sostenía (abril del 86): "Por cierto, ¿no se han dado cuenta de que la opinión pública son ustedes y que los ciudadanos somos, en realidad, *opinión privada*?"'. En conclusión: caben casi todos los gustos (asunto político es a la postre). Pero sigamos.

### 1.1.2. La etapa socialista.

Tras la campaña de octubre del 82, en que Felipe González se compromete como candidato a presidente del Gobierno a establecer la TV privada (aunque en el programa no figuraría tal asunto) y con José M<sup>a</sup> Calviño como cuarto Director del Ente al amparo del Estatuto y primero del "cambio", PSOE y AP-PDP tardarán más de 7 meses en ponerse de acuerdo para formar el nuevo

Consejo. Y en este contexto, de relativa indefinición, el cerco de algunos de los grandes grupos empresariales de prensa contra TVE se agudiza: si con el “caso Coria” se pretende, de entrada, limar los argumentos sostenidos por la izquierda contra la privatización de la TV (“que por su alto coste, quedaría finalmente en manos de los peces grandes del negocio comunicacional”), con la primera emisión pirata de TV privada (“Antena Libertad”, de Garrigues Walker, elecciones Madrid en verano del 83) queda claro que, ante la postura oficial de oídos sordos, se entra en una nueva estrategia por parte de los defensores de la privatización: la presión parecía pasar ahora por el terreno de los “hechos consumados”, vía inaugurada por el PNV y rápidamente retomada por Convergencia y Unió (ETB Y TV-3 nacen en 1983 antes de la propia Ley del Tercer Canal). Claro que, como primer botón de muestra, la nueva actitud resultaba tan tosca como acelerada de más: no en vano, ese primer “pirateo” coincidió con un uso electoralista de la nueva emisora...

En previsión quizá de verse envueltos ante la opinión pública, presos de su propia trampa, los medios interesados retornaron a la estrategia de acoso que hacía de Calviño su primer objetivo: sin duda pensando que su desgaste de credibilidad terminaría por “tocar” al propio Gobierno, quien tarde o temprano tendría que tomar cartas en el asunto para no verse inmerso en un desgaste de credibilidad paralelo. Calviño, en efecto, había topado muy tempranamente con el “problema Balbín” (caso Alonso Puerta), con el II Convenio Laboral y la retirada de la subvención estatal (7.000 millones), entre otros, si bien pondrá en marcha durante su mandato las incompatibilidades -aun con notables lagunas- y un nuevo organigrama: menos cargos y pretensiones de austeridad económica serían sus argumentos, sus bazas centrales... Pero el propio González, y Alfonso Guerra, son los primeros interesados en sostenerle durante toda la legislatura: está en juego la mítica recién inaugurada de la “estabilidad democrática” (máxime después del asunto Rumasa y con la reconversión industrial en marcha) y Calviño será, a la postre, el primer director general de RTVE que concluya su mandato al ritmo del propio Parlamento.

La campaña a favor de la TV privada no remite, en todo caso. Tras el paréntesis estival -que ha visto en sus albores la remisión a las Cortes del proyecto de ley del Tercer Canal- y con el nuevo curso político en danza, se entra en plena *batalla de invierno*, la primera gran andanada ‘global’ en contra de la “TVE socialista”. En octubre del 83, desde un seminario en Baleares, se recuerdan sonoras declaraciones de Martín Ferrand (Antena-3) y De la Viuda (Radio-80) pidiendo la “definitiva autorización de TV privadas”. No se queda atrás Garrigues Walker (SER, etc), que anuncia una campaña para recoger 500.000 firmas al mismo fin...

Dos hechos, de variado signo, se suman en noviembre. De una parte, ve la luz una primera “Asociación de Usuarios de la Comunicación”, con Pepín Vidal Beneyto como presidente: la asociación se declara pluriideológica, reivindica la participación y el protagonismo del espectador -“especialmente en TVE”- pero trata de desmarcarse rápidamente de la polémica TV pública vs. TV privada, por entender que su objetivo es lograr “una mayor participación en el medio, al margen de quien posea su titularidad”. De otra parte, un sondeo de Sofemasa para EL PAÍS sobre el primer año de gobierno socialista, recoge los primeros triunfos en la opinión pública de quienes avalan la política de desregulación de la TV pública en España. Según dicho sondeo (27-XI-83):

“cabe destacar la gran mayoría favorable a la autorización de emisoras privadas de TV, ya que un 62% del total de los encuestados es partidario, y sólo un 18% es contrario.

Agrupando a los encuestados de acuerdo con su voto, en todos los grupos son mayoría los partidarios, aunque éstos decrecen cuando se va de los partidos de derecha a los de izquierda. Destacan como más partidarios los votantes de CiU [TV-3 había realizado su bautismo de ondas experimental el 11 de septiembre anterior], y menos los del PCE. Entre los votantes del PSOE sólo el 22% son contrarios a la TV privada”.

A partir de ahí, el desconcierto en el PSOE sobre la cuestión es ya un hecho, cuyo conocimiento comienza a no ser patrimonio de los entendidos, y el “salto cualitativo” no se deja esperar: se pondrá en duda al propio Tribunal Constitucional porque el Estatuto de RTVE, que la doctrina de aquel sostiene, pasa a ser el nuevo escollo central.

El detonante de peso no llegaría, con todo, sino con las palabras del propio Felipe González en el último “Españoles”, programa de TVE conducido por la periodista Victoria Prego, unas palabras a las que se agarraron con vehemencia nada extraña los partidarios (que iban a más en prensa y radio) de la TV privada. El colectivo periodístico “Equipo LUX” sintetizaba por entonces en “El Nuevo Lunes” (19 a 25 de diciembre) lo que, de hecho, suponía el principio del fin de una polémica hoy trasnochada (pero ciertamente significativa para nuestros intereses):

“Felipe habló con conocimiento de causa desde TVE y sin que la problemática hubiera planteado discusiones en reunión alguna al Gobierno. Sencillamente: ni se habló del tema en Consejo de Ministros. Lo que sí ha existido es un debate restringido en el partido en torno a la cuestión. Y el propio Alfonso Guerra, que ha estudiado con sus asesores la necesidad de abordar el problema con sosiego, pero con decisión, para salir de la actual ambigüedad. Se confirma, después de lo dicho por el presidente, que se va a abordar la cuestión en profundidad, buscando *una salida tipo Reino Unido* que acalle voces y evite una falsa solución al tema, como ha ocurrido en Italia (...) La perplejidad la han suscitado, sin embargo, las ambiguas y enrevesadas frases de Calviño sobre la regulación de la TV privada, asociándola a una futura ley antimonopolios y situando como ejemplo el modelo de Francia. Calviño se apunta a una opinión que empieza a crecer en las alturas del PSOE y del propio Gobierno: hay que salir al paso del tema, evitando que se deteriore y nos encontremos con una política de hechos consumados”.

Por más que a mediados de enero de 1984 el asunto de las gafas en tres dimensiones, el cambio horario en los programas religiosos y la entonces famosa entrevista con Fidel Castro de “En portada” servían para arreciar en la crítica contra RTVE, por aquellas fechas las estrategias respectivas debían estar maduras: para unos, preparar la interpelación contra Calviño en el Congreso a fin de obligar a éste a “dimitir” y romper con la estabilidad del Estatuto, o en caso contrario, recrudecer el objetivo último de meses atrás: que su defensa tuviese que asumirla el Gobierno, con el lógico desgaste a la vista del estado de la opinión pública; para otros, sacudirse tal acoso (político). Y así, el propio Gobierno -ignoro si pensando ya en el referéndum OTAN y en las generales del 86- empezó por entonces a “vender” soterradamente entre ciertos medios una “clara” salida (respuesta política, por tanto). No otra que el fin del monopolio de las señales de TV por parte del Estado, dentro del marco técnico y jurídico en que debería insertarse toda opción a zanjar la polémica: y ese marco era entonces el proyecto de Ley de Ordenación de las Comunicaciones (LOC), con Enrique Barón como ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Ministro y proyecto de ley objeto, luego,

de recambio.

Y ello, sin duda, porque lo fundamental ya en 1984, a tan sólo tres años vista de sostenerse en pie el Estatuto, era compartido por una amplia mayoría como tal dato fundamental. Eugenio Nasarre, no en vano único periodista en el máximo cargo del Ente hasta la llegada de García Candau, acertaba con ello al afirmar, en el Club Liberal de Madrid sin ir más lejos, que 1983 había supuesto “la quiebra de la aceptación social del carácter monopolístico de la Televisión”. Lo cual, en aquellos momentos, y tanto por el argumento esgrimido en sí (su apelación a la “aceptación social” como última ratio) cuanto por el respaldo institucional entonces de Nasarre (jefe de gabinete del Defensor del Pueblo), no dejaba de tener poca miga. Como no menos dejaba de tenerla su particular conclusión: “hay que superar ya la fase de polémica entre TV pública y TV privada, para comenzar a proyectar el escenario de su compatibilidad” (Diario-16, 31-1-84). Todo un síntoma de que Nasarre conocía el terreno que se pisaba.

Porque, ¿significaba eso que ya era demasiado tarde para reformar el Estatuto en el sentido que públicos y no pocos profesionales de TVE parecían exigir?. Castedo así parecía preguntárselo cuando en el mismo debate decía no poder pensar “que lo que entonces fue tan aplaudido (el Estatuto) hoy sea tan nefasto como para merecer la reprobación general”. Con él, en efecto, muchos pensaron que todavía era posible dicha reforma (y desde luego, su aplicación en todo caso). Y se hablaba de reforma, en concreto, sobre todo en lo referente a que el director general dejase de ser nombrado por el Gobierno; y de aplicación, sobre todo, en cuanto al consejo de administración, que corría el riesgo de trasladar a RTVE “un modelo a la italiana” (haciendo dejación del “espíritu de la letra”) y de entrar en inoperante duplicidad con lo previsto para la comisión de control parlamentaria.

Particularmente, siempre he defendido que son los ciudadanos de a pie los últimos valedores de cualquier criterio que quiera de veras superar el estrictamente “empresarista” o “profesionalista” de la información: ¿era/es el “sondeo” -de Sofemasa u otros- el único modo de acercarse a los públicos?. Juzgo más plausible una acertada y efectiva política de descentralización/participación a tales efectos. Y en todo caso tengo para mí, a título *profesional*, que en comunicación “mediata” la distancia que separa toda forma de control de la libertad cuenta muy mucho con la forma en que los profesionales definimos (y bregamos) por dicha libertad. Y recuerdo con relación a nuestra historia, por trabajar en Torrespaña justo por aquella época, que en TVE subyacía desde la dirección (¿subyace todavía?) una teoría “empresarista” del Estatuto: el consejo de administración del momento habría aprobado el Estatuto del Directivo (finales del 83) antes que el “Proyecto de Estatuto de los Informativos” preparado por los propios trabajadores: probablemente porque la misma concepción empresarista (reforzada como tal ante las acometidas pro-privatización del medio) antes lo veía como posible arma arrojadiza frente a los convenios por negociar que no como un sólido intento de participación constructiva (profesionalista)... ¿Acaso sigue siendo cierto que “la” izquierda, como sostenía Paul Valéry, es “incapaz de construir”? O bien, ¿hasta qué punto “las ruinas de la TV pública” eran/son una partida más de “lo heredado” (ruinas tan sólo, pero no de una TV pública, que en realidad no habría existido nunca como tal en este país), o tal vez un tic sólo reflejo de los esfuerzos, cada vez más numerosos, por privatizar el medio entre políticos, empresarios y profesionales?.

Fuese como fuese, por aquellos días de enero de 1984 el citado “Equipo LUX” sostenía la tesis de los “síntomas coincidentes”, convergentes a su vez con lo mantenido por Nasarre:

“Aunque destacados líderes de Alianza Popular y del PDP se presentan como máximos interesados en la TV privada, de puertas adentro no todo el mundo tiene la misma opinión y, a lo sumo, estarían dispuestos a aceptar un proyecto del PSOE tendente a constituir una cadena Independiente “alquilada” a sociedades privadas, pero no el bosque de televisiones como setas a la italiana. (Y, no menos importante) El problema está relacionado no sólo con lo económico (el mercado publicitario) y lo político, sino con la técnica. Y más cuando los avances tecnológicos van a obligar a TVE a que reorganice su estrategia en el capítulo tecnológico”. (El Nuevo Lunes, 30 enero-5 febrero, 1984).

Entre el modelo británico al que apuntaba el “Equipo Lux” (modelo del 76 por así decir: recuérdese que el modelo BCC era ya el propugnado para TVE por El País a comienzos de la transición) y el modelo italiano, al que nadie quería llegar (por ser indefendible ya desde el plano ideológico o ya según criterios estrictamente comerciales), el modelo coexistencial que se adivina desde 1984 buscará una cierta equiparación cuantitativa y cualitativa: 3 canales públicos (2 centralizados: VHF/UHF, y un tercero adicional, descentralizado o autonómico) y 3 canales privados.

Gobierno y medios privatizadores coincidían por primera vez en algo, a su vez, sintomático: una cuestión de política comunicacional se convertía por mor del argumento tecnológico en mera cuestión técnica. A partir de ahí, el nuevo modelo “coexistencial” de TV será un consenso que sólo quedará a la espera de la oportunidad política para decidir el momento preciso de arranque: unos, con la llave del proceso, retardarán el fin del monopolio, otros persistirán en su acoso al Gobierno a fin de acelerarlo. La polémica ya no será ideológica, sino pragmática: y la TV privada pasará de ser posible (como tal) a cifrar su factibilidad en la concurrencia (comercializante) con la(s) pública(s).

Recordarlo es absolutamente básico para nuestro análisis, porque no cabe olvidar que todo ello coincide con la entrada en vigor de la Ley del Tercer Canal. Y que es en febrero del 84, a su vez, cuando el grupo Popular presenta en las Cortes Valencianas la inicial propuesta de Ley sobre “Radiodifusión y Televisión de la Comunidad Valenciana”. ¿Casualidad tan sólo o más bien “oportunidad” (política)? ¿No sorprendía semejante celeridad, proviniendo como venía de dicho grupo tal iniciativa, en materia “tan autonómica”, y que para ello prácticamente se plagiasen el modelo TV3 (curioso en un partido en nada pro-catalán)? ¿Por qué, de otra parte, la tardanza del PSPV-PSOE en ser quien asumiese la iniciativa, si al cabo tuvo que reaccionar *de inmediato* ante la propuesta del grupo Popular? ¿Cabe pensar en falta de reflejos, tan sólo, o quizá por el contrario en cautelas excesivas de partido?

Es aquí -debe decirse con claridad- adonde queríamos llegar después de tanto “detenimiento” en esta parte de nuestro recorrido: porque *éste será el punto de arranque (jurídico pero ante todo político, históricamente ligado al consenso implícito sobre la definitiva implantación de un modelo coexistencial de TV) del debate en las Cortes Valencianas, en la primavera del 84, sobre la necesidad de una Televisión Valenciana*. Ese debate, a detallar con posterioridad, se circunscribe

a los órganos ciertamente legitimados para ello (Cortes Valencianas, Consell) pero adolece desde *tal* principio sin embargo, y sin duda por ese y no otro comienzo (así “políticamente” condicionado), del calado “social” que todavía hoy sigue echándose en falta en el debate que parece pertinente a un proyecto históricamente tan significado para la Comunidad Autónoma (si de efectiva descentralización hablamos, al ser ésta consustancial con los procesos participativos que propicia)... De igual modo que la *luz verde definitiva* para dicha Televisión Valenciana (aprobación por el Gobierno central de la oportuna concesión, optimización de la red de RTVE, etc) no será tal hasta llegar a ser un hecho, en 1987-88, la ley de TV privada (LTVP) que, al mismo nivel “jurídico-político”, se presenta como “cierre” de la polémica previa.

### *Al hilo de la ley de TV privada (LTVP).*

Nada de auténtico peso, en efecto, sucede (que sea de interés para el recorrido que venimos desarrollando) hasta abril del 86. Entre medias si acaso, y de modo telegráfico, apenas “anécdotas” no del todo irrelevantes, algunas de signo contrapuesto: notoria incorporación a Informativos de TVE de periodistas procedentes de TV3 y de otros medios (El País incluido), puesta en marcha de la TVE matinal, polémica desaparición del programa “La clave”... Así, tras realizar Presidencia del Gobierno un primer borrador de Proyecto regulador en septiembre de 1985 (TVG aparece en julio del mismo año y el PDP reaccionará con una proposición alternativa en noviembre), el 4 de abril de 1986, por primera vez, el Consejo de Ministros socialista llega a aprobar un Proyecto de Ley que confirma la intención de autorizar 3 canales de televisión privada (número de canales cuya “escasez” propicia las principales acusaciones de las empresas interesadas y también de la oposición conservadora, consultada a través de Alfonso Guerra). Antes, en marzo del 86, se había pasado el amargo trago para el PSOE -con la inevitable polémica de su cobertura televisiva- del referéndum OTAN. Y poco después, la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones anticipadas dieron al traste con la posibilidad de que el Proyecto se debatiera en el Congreso de Diputados. El Gobierno parecía querer acabar, en efecto, con el juego del ratón y el gato -incómodo ante la presión de los medios privados, que esgrimían a su vez ahora la baza adicional del “anacronismo europeo” de TVE. Pero de nuevo parecía *no poder*, sabedor al tiempo de su desventaja paraelectoral sobre todo en prensa escrita (predominante en la canalización de opinión).

Cada nuevo retraso (González o Solana anunciaron siete veces la inminente autorización de la TV privada, hasta el definitivo proyecto de abril del 87) mermaba la poca credibilidad que TVE pudiese, en informativos sobre todo y en según qué periodos, retener o remontar; al tiempo que apuntalaba las razones de los privatizadores ante quienes más importaba: “la” propia audiencia. Por ambas vías parecía llegarse sin remisión al mismo punto de encuentro: TVE, nunca pública sino para y desde el poder, jamás llegaría por éstas vías -aun democráticas- a legitimarse como genuina TV pública, para y desde las audiencias. Ni siquiera -paradójica y contradictoria “salida” planteada por algunos- en el caso de verse presionada por la competencia de otras TV (públicas y privadas). Como editorializaba El País en la sucesión de Calviño por Pilar Miró: “Es (ella) una profesional con gran experiencia del medio. De sus cualidades puede y debe esperarse una gestión eficaz, aunque difícilmente la solución a los males de RTVE. Y decimos esto porque no creemos que dichos males se deban a la actividad de los diversos directores generales, sino a defectos estructurales que apenas estaría en su mano corregir”. Pero, ¿y en quién, si no en tales directores(as) y su equipo, confiar tal

corrección? ¿Por qué, si no fuese la cosa con ellos(as), la nueva campaña contra Calviño tras el 22-J del 86? ¿Mera persecución o acaso molestaba su hipotética con tinuidad (improbable dado que González ya no contaba con él)? ¿O era Guerra el auténtico objetivo (político)? ¿No sería que políticamente, a su vez, importaba destruir un último argumento (el “saneamiento” económico de TVE, hipotético pero posible, y su real posicionamiento como TV pública) y su rodaje subsiguiente, durante los años de espera a que obligase (por cuestión económica y técnica a su vez) la puesta en marcha efectiva de las TV privadas, con Miró precisamente? <sup>(9)</sup>. ¿O, sin ir tan lejos -dado el relativo despiste de no pocos ante el “ decreto de las parabólicas” que el Gobierno saca precisamente en junio del 86-, tan sólo se trataba con ello de abrir una cuña más para recordar al nuevo Gobierno que la TV privada seguía siendo una ley pendiente?

En esas, el proyecto de Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) es presentado por el ministro Abel Caballero -sustituto de Barón- y aprobado por el consejo de ministros el 6 de marzo de 1987. Dicho marco jurídico-técnico posibilitará la televisión privada como ley aparte (LTVP), cuyo proyecto recibe el visto bueno del consejo de ministros un mes después, el 4 de abril, para de ahí pasar a Cortes -esta vez sin negociar con la oposición.

La aceleración era la prometida por González poco antes del debate parlamentario sobre el “estado de la nación” (en el contexto de la peculiar conflictividad social de los primeros meses del año) aunque no se le daba al proyecto como urgente, y a partir de entonces sólo resta como incógnita si serán tres años, o quizá algo menos (o más), el tiempo de espera a que se verán sometidos los interesados en comenzar las emisiones privadas una vez aprobada la LTVP por el Congreso el 14 de abril de 1988. La necesaria elaboración como condición previa del Plan Técnico Nacional, que definiría los soportes de transmisión y el territorio mínimo a cubrir por las emisoras privadas (combinando zonas urbanas y rurales favorables/desfavorables en publicidad), y el propio calendario de las fuertes inversiones precisas (vid. Cuadro anexo) para acondicionar y ampliar la red terrestre de TVE como apoyo ineludible del mencionado Plan, serán bazas en poder del ejecutivo. Que habrán de correr en paralelo al proceso de concentración de las opciones de partida a que obligaba el mismo proyecto, al propugnarse la autorización de 3 canales tan sólo, de alcance nacional y concedidos por 10 años (30 en radio), a la par que limitando al 25% (50% en radio) la participación en el capital de un canal a las empresas periodísticas de prensa o radio.



## Cuadro anexo

Las *inversiones mínimas* anticipadas por entonces por el equipo económico (Fernández-Turió) que apoyó a Pilar Miró al frente de TVE se cifraban, al cabo de los “100 días” de su desembarco y para ese periodo clave en que las privadas habían de “esperar”, en:

**INVERSIONES MINIMAS RTVE : 1987-1989 (millones de ptas)**

	1987	1988	1989	total
RTVE: red de difusión	3.754	3.045	3.499	10.298
RTVE: infraestructura de producción y emisiones	997	2.066	2.149	5.212
RTVE: servicios generales	814	876	513	2.203
<b>Total Ente RTVE</b>	<b>5.565</b>	<b>5.987</b>	<b>6.161</b>	<b>17.713</b>
Radio Nacional de España	799	956	1.115	2.870
Radio Cadena Española S.A.	301	361	422	1.084
Televisión Española S.A.	1.270	1.626	1.638	4.534
<b>Total Sociedades</b>	<b>2.370</b>	<b>2.943</b>	<b>3.175</b>	<b>8.488</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.935</b>	<b>8.935</b>	<b>9.336</b>	<b>26.201</b>

(Fuente: revista MERCADO, 13-2-1987).

Estas inversiones pronto contaron con la “tijera” de Hacienda, pero en septiembre del 87, a su vez, el Consejo de Administración de RTVE (con los votos a favor del PSOE/CDS y la abstención de AP) aprobaba un “suplemento de crédito”-o subvención indirecta, por lo que necesitaba la aprobación del Gobierno, que la dió- superior a los 13.000 millones. Ello a cargo de la liquidez generada por los nuevos bloques publicitarios, como la programación matinal, y por los incrementos de ingresos en las programaciones regionales. Y con el objeto explícito de aumentar en más de 5.000 millones la inversión de TVE en producción propia de programas -para mantener la audiencia y facilitar su comercialización a otras cadenas televisivas- y otros 2.000 millones adicionales en la compra de producciones externas, largometrajes ante todo -con la estrategia evidente de comprar derechos de difusión con anterioridad a que las futuras TV, privadas o no, puedan entrar en competencia... [Las acusaciones sobre competencia desleal y tráfico de influencias, por ejemplo en la publicidad encubierta, no se harían esperar desde medios “privatistas”: así en “El Globo”, nº 12].

En abril de 1987, en efecto, cuando el proyecto de ley del PSOE confirma esa limitación a 3 de las cadenas privadas posibles (junto a la limitación adicional en el porcentaje de capital con que participar finalmente con el tope del 25% tras enmienda introducida en el Senado) las iniciativas aspirantes a una concesión de TV privada superaban las ya enumeradas (Antena 3, Univisión, Canal 7, RTV-16 y CITSA). Y ello sin contar con las incorporaciones de capital extranjero (el grupo Fininvest de Berlusconi, pero no sólo él) en alguna que otra opción de las nacionales contempladas. El cupo lo completaban los “rezagados”:

- TEVISA (Televisión Independiente S.A.), que de manera muy significativa, tras intentar por momentos aunar las pretensiones de Antena-3 y Tele-80, con el tiempo aglutinaría a esta última junto a la revista “Actualidad Económica” y a un grupo de diarios regionales:

- “El Correo Español - El Pueblo Vasco”, de Bilbao (“**La Verdad**”)
- “Diario Vasco”, de San Sebastián,
- “La Voz de Galicia”,
- “Diario Montañés, de Santander,
- “El Heraldo de Aragón”,
- “Diario de Navarra”,
- “El Norte de Castilla”, de Valladolid,
- “El Diario de Burgos”,
- “Última hora”, de Palma de Mallorca,
- “Diario de Cádiz”,
- “Diario de Jerez”,
- ... y “**Las Provincias**” de Valencia (como segunda pretensión valenciana, ya colocada, en pro de la TV privada).

- Y “TELE 4”, grupo que respaldarían las editoras de las revistas del corazón (de alta tirada) como son las punteras del sector en manos de capital español: “Hola”, “Semana”, “Lecturas” y “Diez Minutos”.

El 14 de abril de 1988, al aprobarse por el Congreso la LTVP, “tan sólo tres mostraron interés” en el debate celebrado al efecto en el Congreso de los Diputados, según informaba El País (15-4-88):

- ANTENA 3 Televisión SA, participada por el editor de “La Vanguardia” Javier Godó (con el control mayoritario), la editorial Anaya, un grupo de industriales catalanes y las sociedades Granada TV (británica), O Globo (Brasil) y la NBC (norteamericana, “con una pequeña parte”).

- UNIVISION, del Grupo Z.

- y la SOCIEDAD DE ESTUDIOS DE TELEVISION INDEPENDIENTE, constituida apenas un día antes (13-4-88) de la aprobación de la LTVP, entre Tevisa (con La Verdad y Las Provincias de la mano, por lo que nos interesa), la editorial Espasa-Calpe y la potente RadioTelevisión de Luxemburgo (RTL).

No parece momento ni es mi deseo aquí profundizar ahora en los *temas suscitados en los medios* por la LTVP: si el modelo televisivo obligará más o menos al sometimiento administrativo/político a las empresas concesionarias; si las medidas de control técnico de inspección auditora más están por controlar que no por liberalizar el modelo; si el proyecto es más o menos restrictivo en el sentido que el Gobierno pueda o no confundir servicio público con nacionalización y a la sociedad con el Estado; si el “interés público” como algo innegociable para el ejecutivo constituye la “esencia” del concepto -según algunos más teológico que político- de servicio público o bien la base para un “servicio menos público” tal y como propugnó AP en su proyecto alternativo de mayo del 87; si la guinda del modelo como intervencionista se encuentra en el sometimiento de las TV privadas -no de las de radios- a las mismas normas que la ley electoral fija para los medios de titularidad pública, condicionando así la publicidad electoral en tales emisoras; si las limitaciones económicas y de participación (empresarial) son innecesarias y fundamentan la inconstitucionalidad de la ley -presentándose recurso en tal sentido, cuando menos por Alianza Popular, Izquierda Unida y Minoría Catalana- o por el contrario son necesarias para garantizar el pluralismo -según Javier Solana, destacado autor del proyecto de Ley-; que si el 40% de la programación de producción sea “nacional” y al menos un 10% propia no es sólo una utopía sino una aberración fruto de la ignorancia, o que la mitad de las películas sean europeas es una arbitrariedad por más que haya deseos compartidos de buscar alternativas a los monopolios de producción que hoy imperan; si en los “años de espera” hasta 1990 la industria de telecomunicaciones española no tendría tiempo apenas para poder afrontar la demanda prevista de bienes de equipo; si los límites a la emisión de contenidos publicitarios -en fin...

Por contra, me parece fundamental aquí que los árboles no nos tapen el bosque. Y tengo para mí, digámoslo ya a modo de conclusión por lo que a este bosque se refiere, que TVE perdió la batalla de su monopolio en 1983 (con Euskal Telebista y TV-3). Y que en diciembre de ese mismo año -ya entonces- quienes ganaron contra ella otra batalla, aún más importante, fueron las privadas. Era una manera, en suma, de perder la batalla (política) de determinado modelo de TV *pública*, pues la presión comercial se agudizará de rebote en ella, quíerose o no se quiera, a partir de los años 90<sup>(10)</sup>. Ese modelo era el centralizado y, en tal sentido, que TVE haya perdido el monopolio de emisión puede entenderse como deseable por todos. A la postre, “servicio público centralizado” era y es un contrasentido mayúsculo.

Por eso creo que a la batalla legal, cerrada en principio en diciembre del 83 y “definitivamente” en abril del 88, sucederá ahora, más abiertamente, la batalla “económica”; y no sólo al nivel “centralizado” en que persiste la pugna básica. Lo que G. Richeri ha denominado el tránsito, la sustitución progresiva y generalizada en Europa durante los 80, de la *televisión de la ideología* por la *televisión de la economía*, cambio que habría afectado -entre otras- a la relación entre el poder público y el sistema televisivo. De ahí la (renovada) responsabilidad de quienes decidan el “modelo de TV valenciano”. Por eso hablamos desde la introducción de un modelo “posible”, en nuestro caso, que habrá de inscribirse -sin duda, pues arranca de una instancia de legitimación política como son las Cortes Valencianas- en la construcción, ya en la órbita práctica de una visión “descentralizada”, de una (nueva) TV pública.

Cabe recordar, por demás, que la respuesta cualitativa del Gobierno, ya en 1987, no se ha hizo esperar: la **Ley General de Publicidad**. Una Ley, la primera de tal rango en España, que sustituye

al Estatuto de la Publicidad de 1964 y se ha planteado para armonizar el sector con la directriz del Consejo de la CE sobre publicidad engañosa y desleal del 10-9-84, siendo gestada en los años 1984-87 (precisamente) con la participación de la Asociación Española de Agencias de Publicidad -que la aceptan de antemano como “mal menor”- y entusiásticamente recibida por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) -por avanzar no poco en materia de control social, que ya era hora:

“Cualquier persona, organización o asociación podrá denunciar los anuncios y campañas publicitarias que entienda que son ilícitos, engañosos o desleales, y los jueces podrán dictar la suspensión de los mismos si encuentran motivos suficientes para ello, de acuerdo con el texto del anteproyecto de Ley general de Publicidad, que podría ser aprobado por el primer Consejo de Ministros del próximo mes de septiembre, según fuentes de la Administración” (El País, 9-agosto-87).

Dicha aprobación se retrasaría hasta mediados de noviembre del 87 y además de las disposiciones generales y la definición y especificación de las características de la publicidad ilícita (títulos I y II), la nueva normativa contemplará la contratación publicitaria (título III) y, finalmente, las condiciones concretas en las que pueden ejercerse las denuncias y la “acción de cesación” y rectificación, así como los procedimientos (título IV).

Cuestión, pues, nada baladí. Y que tiene además un aspecto que en particular creemos resaltable. En palabras -recogidas por el mismo diario- de Antonio Jordán, presidente de la citada asociación de Agencias de Publicidad, “... somos conscientes de que la distribución autonómica de competencias hace prácticamente necesario un marco global sobre el que se manifiesten las demás legislaciones que se preparan o que ya han salido a la luz”.

Adicionalmente, por lo que hace a TVE como “televisión pública dominante” (y como tal pesa de inmediato, más incluso que TV3, para el proyecto de TVV), la cuestión de fondo sigue siendo su papel y dimensión dentro del “modelo coexistencial” ya efectivo de hecho con la nueva década. Pero no es tampoco cuestión menor recordar que el modelo de TV que parece corresponderle, ya estaba prefigurado al hilo de la definitiva aprobación de la LTVP, siendo adelantado por el Equipo Lux desde “El Nuevo Lunes”, al borde del primer aniversario de Pilar Miró como directora de RTVE:

“Parece que en el Congreso socialista se defenderá un modelo de televisión estatal de gran implantación, complementado por las emisoras públicas en ciertas Comunidades Autónomas, y con una presencia relativa para la televisión privada. Por otra parte, (...) el objetivo inmediato podría establecerse en dos direcciones. a) Por una parte con una revisión del Estatuto, que dé mayor agilidad en algunos aspectos a RTVE, y recorte las funciones del Consejo de Administración, b) Con un retorno a la subvención, que compense los ingresos que puedan dejar de obtenerse por la nueva competencia.

A Pilar Miró el actual Estatuto no le gusta, (...) podría ser el propio PSOE, quien, en el futuro, emprendería la iniciativa legislativa que condujera a una reforma del texto. Se contentaría a AP con una mayor presencia parlamentaria en la elección de Director General y se reduciría el papel del Consejo de Administración.

El Estatuto necesita de esos retoques para armonizar en las futuras leyes sobre la Televisión privada y de Ordenación de las Comunicaciones.

(...) Pero una nueva definición de las dimensiones de RTVE y de las otras dos sociedades del Ente tendrá que obligar a un replanteamiento tanto de la estructura económica como de la política laboral. Y aquí aparece el famoso borrador de plan de reestructuración dentro de RTVE.

(...) Ahora está por ver si en el futuro, con el replanteamiento en el área de las comunicaciones, sectores como la red seguirán perteneciendo a RTVE o serán adscritos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.”

En definitiva, las contradicciones del modelo audiovisual español como un todo arrancan no sólo de su dependencia *en el origen* de un modelo de propaganda (en lo político) que se supone implícito a toda dictadura; como implícito a la misma fue su centralismo primigenio en relación con la edulcorada mitificación “nacionalista” -por entonces y después- del españolismo (“España es diferente”). Sino también, y ante todo, de que al anteponer como finalidad básica el control político del medio, se hiciese dejación en manos ajenas -norteamericanas ante todo- de otras decisiones no menos básicas para su estrategia a largo plazo como eran y son la orientación nuclear de su programación o el carácter comercial (ajeno entonces al contexto europeo) de su financiación.

Dichas contradicciones se agudizaron, en todos los sentidos, una vez que la dictadura agotó sus veleidades autárquicas. Y será a raíz del abandono de semejantes veleidades y en paralelo a la apertura exterior de la economía, al poco de nacer la TV en España, que se apreciarán las pautas básicas del caso español: con una TVE más “atípica” en el contexto europeo, paradójicamente, que en el internacional global. Atipicidad de la que sólo restará, con el tiempo, la tentación de su control político extremo, toda vez que serán las restantes televisiones públicas europeas las que terminen por asumir la lógica comercial en ascenso.

Con los primeros 70 se acrecienta la pugna por su privatización. Una pugna que, en plena transición a la democracia, la derecha (política) intentará resolver -en similar dirección favorable a sus intereses económicos- desde el propio gobierno: algo a su vez “atípico”, pero sólo desde una perspectiva europea... Las dos primeras legislaturas socialistas, finalmente, que confluyen en la luz verde final para 3 canales privados de TV, no sólo dejan ver la ambigüedad del PSOE sobre el modo como dar entrada a la iniciativa privada en TV: como posibilidad mediante TV por cable, primero, y más adelante (con Calviño de por medio) mediante una hipotética asociación de productoras que alquilaran un canal de la actual Retevisión y su paulatina introducción en el mercado; y aun el ensayo efectivo, hasta cierto modo al margen pero en paralelo a la aprobación por el Parlamento en 1988 de la LTVP, que supuso el “affaire” CANAL-10 (por satélite)... Dejan ver también, en el hecho de que tal privatización se “legalice” a la postre por un gobierno socialista, que la desregulación de la TV en España no obedece tanto a las presiones políticas que, persistentes, se agudizan en 1983, cuanto, antes al contrario, a una lógica económica que tiene que ver en gran medida con la “normalización” del sistema audiovisual en términos del sistema económico “más allá del Estado español”.

Esa lógica, por demás, es históricamente la misma que -sea bajo un modelo u otro, comercial o de monopolio público, en estado puro o mixto- está excluyendo hoy al ámbito “nacional” de los sistemas televisivos europeos como *único* marco posible para una actividad televisiva que necesita trascenderlo por exigencias de un mercado que, con la desregulación por bandera y con el neoliberalismo economicista como excusa de legitimación, pretende autojustificarse como único rasero para “lo social posible”, para “lo audiovisual posible” por tanto (y no sólo desde razones económico-políticas sino también socio-culturales).

La cuestión estriba en contra-lógica (por la hipótesis ideológica que hemos asumido) en si dicha presunta exclusividad es realmente tal, tanto en dirección como en sentido. También en sus implicaciones territoriales: pues también desde la descentralización es posible trascender los ámbitos “nacionales”, por ejemplo (sin olvidar que los procesos de internacionalización/descentralización no son categorías huecas de intereses sociales, nunca “únicos”). Pero, más allá a su vez del condicionamiento jurídico-político que el proceso de desregulación implica sobre ellas, ¿qué está pasando realmente con las TV Autonómicas en España? ¿Cómo están asumiendo esa progresiva superación del ámbito “nacional”, como exclusiva de mercado y de poder en decadencia? ¿Cuál es la distancia o diferencia, si existen, de la “lógica” inherente a su descentralización respecto del proceso desregulador como tal?

## 1.2. DESREGULACION Y DESCENTRALIZACION TELEVISIVA EN ESPAÑA: ¿QUE DIFERENCIA?

Viene siendo ya casi un tópico entre los expertos el señalar que la “regionalización”, extendida por Europa en los 70, se ha frenado al mismo tiempo que la “desregulación”, generalizada en los 80, se habría acelerado: resaltando, de paso, el carácter atípico que en tal sentido supone el caso español. Moragas lo hacía ver, en 1989 sin ir más lejos, al subrayar que “aunque los procesos de descentralización (regionalización) hayan sido anteriores en el tiempo a los procesos de privatización, son estos últimos los que -con la excepción de España- han evolucionado de forma más acelerada. El proceso de descentralización es substancialmente más lento y restrictivo que el que experimenta la privatización” <sup>(11)</sup>. Lo que está por ver respecto de tal excepción española más bien sería hasta qué punto la descentralización de la TV *pública* en España no viene sino favoreciendo la lógica privatista inherente a los intereses desreguladores que campean por Europa.

### 1.2.1. Descentralización y diversidad en la Europa audiovisual.

El caso francés y el italiano, los más cercanos al español por la familiaridad institucional de un Estado Autonómico que comparte con el primero similares raíces centralistas y con el segundo la peculiar transición de un proceso descentralizador a medio camino entre el primero y una solución federal a la alemana, son quizá los referentes más inmediatos en materia de descentralización televisiva.

En ambos casos no obstante, y a diferencia de lo sucedido en España, el proceso ha ido de “más a menos”: de un número considerable de “centros territoriales” (27 en Francia, 21 en Italia) hasta llegar, en apenas una década, a las actuales FR-3 francesa y RAI TRE. Si la cobertura inicial de las estaciones francesas, correspondientes a los distritos de la V República, era igual para todas ellas, el caso italiano dejaba entrever desde un principio cierta diversidad en el tiempo de emisión de cada centro, origen de una situación actual en que retienen una mayor importancia los centros de Roma, Milán, Torino y Nápoles -por motivos tanto políticos cuanto económicos-, así como otros en los que cuentan las tradiciones históricas -caso de regiones autónomas como Aosta, Alto Adige o Trieste- e inclusive el estatus especial ligado a las provincias isleñas -Sicilia y Cerdeña. La diversidad cultural y lingüística, no menor en el caso francés (con la dedicación por FR3 al euskera en Aquitania, al bretón en Bretaña-Loira, al alemán en Alsacia y al occitano-catalán en Languedoc-Rosellón), se atiende desde mucho antes en el italiano, donde la RAI propicia cierta programación en francés (Valle de Aosta) o en alemán (en el sur del Tirol), e incluso se atiende desde un principio a la vecindad yugoslava (en Trieste).

En ambos casos, no obstante, la organización de la descentralización televisa no es consustancial a sus propios orígenes, cosa que sí sucede en la República Federal de Alemania, cuyo modelo viene impuesto por la propia estructura político-administrativa. Así, la ZDF de carácter federal compartirá su exclusiva de las ondas como organismo público de radiodifusión, hasta la presencia del cable a partir de 1982 y de la primera TV privada que en 1985 ve la luz en Renania-Palatinado, con los 9 organismos regionales de los 11 Landers constituyentes (al cubrir la NDR los

de Hamburgo, Holstein y Baja Sajonia). Organismos regionales aglutinados en la ARD (Comunidad de Trabajo de las Entidades Radiotelevisivas Públicas): ya ARD I o ARD II, o tercer canal. Posteriores en el tiempo, el caso francés y el italiano arrancarían -antes bien- de las demandas de descentralización sociopolítica que entroncan con la reelaboración de la “nueva izquierda” a finales de los años 60.

Así, la ley de agosto de 1974 que en Francia pone fin a la ORTF y crea, entre otras, la Société Nationale France Régions (SNFR), sigue en el tiempo a la ley gaullista que en julio de 1972 prevé la reorganización regional del Estado francés como forma de compensar su defensa del independentismo en el exterior (caso Quebec); pero habrá que esperar al informe que la Comisión Moinot elabora en 1982, en coincidencia temporal con el reconocimiento legal a los municipios, departamentos y regiones de determinados derechos y libertades, para que con Mitterrand se apruebe la Ley del Audiovisual que da pie a los posteriores procesos de implantación de la TV regional y aun local -donde, por la labor de la Mission Cable, se apuesta en favor de la fibra óptica, si bien con tropiezos económicos tan inmediatos y significados como el de Biarritz<sup>(12)</sup>. La derogación de la mencionada Ley del Audiovisual en 1986, junto con la privatización por el gobierno Chirac de TF1 en 1987 y la sustitución de la Alta Autoridad creada por los socialistas por la “Comisión Nacional para la Comunicación y las Libertades”, conllevó de inmediato la congelación del diseño inicial de FR3, que perseguía integrar a doce sociedades regionales llamadas a tener mayor autonomía presupuestaria y de programación, pasando a funcionar por contra en forma más parecida a los centros territoriales de TVE... La apuesta francesa permitía entrever, en todo caso, cierta aproximación (si bien desde el sector público), al modelo británico de la Independent Television (ITV), integrada por 15 TV privadas de ámbito regional -correspondientes a las 14 regiones más una adicional para Londres- que, en una sola frecuencia (de la red de que es propietaria la Broadcasting Authority o IBA), funcionan mediante desconexión y emisión conjunta de los informativos (producidos por una sociedad común)<sup>(13)</sup>, conjugando por tanto el criterio privatizador y el de descentralización parcial.

La descentralización en Italia sucedió según una lógica “politicista” similar a la del caso francés. Pues la RAI 3 será la cadena pública destinada a la cobertura regional a partir de una reforma del monopolio público, la de 1975, que es posterior en tres años a las primeras transferencias del Estado, en 1972, a unas Regiones que habían elegido sus Consejos respectivos -a su vez- dos años antes, en 1970. La presión de unas demandas crecientemente canalizadas desde instancias locales y regionales, ante un sistema político tan “cerrado” como el italiano de posguerra, favorecería sin embargo los intereses privatizadores (pronto usufructuados por Berlusconi) que rápidamente se acogen al modelo de desregulación que propicia la famosa sentencia del Tribunal Supremo, tras el *affaire Televiela*, en 1976. La respuesta de la RAI, finalmente, se traduce en la existencia actual de tantas estaciones regionales como regiones administrativas existen, superponiéndose de hecho a dicha lógica administrativista la ya aludida diversidad, obediente a motivos tan dispares como los propiamente político-económicos, históricos o de estructura lingüística. A diferencia, a su vez, de la mayoría de TV regionales europeas, su producción no se orienta tanto hacia los informativos (primando en ellos, por demás, el carácter más estrictamente local) cuanto hacia contenidos más filopedagógicos, tendencias a las que no es ajeno un ¿PCI? a quien, por el “sistema de cuota” interpartidos que domina en la TV pública italiana, ha correspondido el control mayoritario de RAI 3.



Desde un criterio más apegado a la diferencia lingüístico-cultural que subyace a la diversidad regional o nacional europea (sin restringir tal diversidad a la CE, como ejemplifica el caso de Laponia en Escandinavia), no es menos interesante constatar las cuatro categorías en que comúnmente se subdivide el paisaje audiovisual europeo. De una parte, aquellos países en los que su estructura plurinacional (Bélgica, Suiza) ha dado pie a un reparto del servicio público en función de organismos de RTV diferenciados por razones básicamente lingüísticas: caso de la manifiesta autonomía de la flamenca BRT respecto de la valona RTBF, en Bélgica, o de las RTV's alemana, francesa e italiana que integran la Sociedad Suiza de Radiotelevisión. De otra parte, está el caso de lenguas minoritarias en unos Estados pero que son oficiales en otros o en la propia CE, singularmente ejemplificado por el valle de Aosta en Italia o Alsacia en Francia. No menos diferencial -inclusive entre ellas mismas- resulta la casuística, en tercer término, de las regiones o naciones sin Estado pero con órganos administrativos propios, que ilustrarían las comunidades 'históricas' españolas o las regiones 'naturales' de Gran Bretaña (Escocia, Gales e Irlanda). Pudiéndose aludir, en cuarto lugar, a las regiones o colectividades europeas (como la Bretaña francesa) cuya autonomía administrativa -y de política de comunicación subsiguiente- dista algo más de acomodarse a las 'señas de identidad' que diferencialmente cabe apreciar como propias.

Bien se puede decir por ello, desde una óptica no desatenta a las políticas de comunicación que favorecen y ya se hable de tales cadenas "regionales" con mayor o menor propiedad, que lo cierto es que "sus diferencias son importantes, tanto en el grado de autonomía, coordinación o dependencia respecto de las televisiones nacionales, su sistema de financiación, presupuestos, dotaciones humanas y de equipamiento, volumen de programación, etc" <sup>(14)</sup>. En no menor medida, cabe añadir, que "la descentralización de la televisión queda al margen de que ésta sea pública o privada -como resalta Inma Tubella, de TV-3. De la misma forma -según ella- que en América predomina la TV comercial con una base absolutamente local (las grandes networks ABC, CBS, NBC funcionan gracias a los containers de estaciones locales que coordinan) y que la TV pública con la misma estructura no llega al 3% de la audiencia, Europa optó por un sistema donde predomina la TV pública centralizada. Y, de la misma manera que en Europa existen TV privadas centralizadas y descentralizadas, también existen TV públicas centralizadas y TV públicas descentralizadas" <sup>(15)</sup>. De todos modos, y pese a las prevenciones conceptuales que hacen al caso, parece oportuno retener la consideración de la TV autonómica "como una variable de la TV Pública Regional" -avanzada ya en 1984 por Richeri-, al menos en el sentido sugerido por el investigador italiano de que dicha opción metadiscursiva sea, hoy por hoy, "la más idónea para poder contrarrestar los efectos negativos provocados por la privatización y los derivados de la internacionalización de los sistemas televisivos nacionales" <sup>(16)</sup>.

Robert Stephane, actual responsable de la valona RTBF e impulsor desde Lieja en su día de CIRCOM (asociación de TV "regionales" que cuenta con el apoyo de la CE), proponía en Zaragoza el mismo año 1984, preocupado por la desigual adscripción de sus miembros, una **tipología** de la descentralización televisiva en Europa -según las relaciones entre TV central y regional, entre ésta y su región, la procedencia de sus ingresos y la naturaleza de su producción propia, enriqueciendo así una propuesta similar avanzada en Madrid por Richeri- que se resumía en cinco 'modelos' prototípicos. Cinco modelos cuya diferenciación puede rastrearse atendiendo a la síntesis formulada al respecto por Inma Tubella y Peter Zimmermann, actual secretario general de CIRCOM <sup>(17)</sup>, y que retiene al menos la virtualidad heurística de ser la de mayor aceptación en la actualidad entre los

distintos organismos públicos afectados en Europa:

1. *TV desconcentrada*. Cuando es el centro quien atribuye los recursos, quien escoge los directivos y quien determina la naturaleza de las producciones desconcentradas, sin apenas relación 'orgánica' con la región. Son centros territoriales que trabajan para la TV nacional a modo de 'corresponsalías' de estrecho alcance, dominando en su producción la de informativos minutados según órdenes de la central.

2. *TV "descentralizada"*. Modelo que, a diferencia del anterior, sustenta el derecho de emitir y aun producir (sobre todo en informativos) programas bajo su responsabilidad y en exclusiva para su región, con la que se hayan más conectadas. De ahí que suela existir un organismo representativo de la región con capacidad para opinar sobre la producción regional y, en ocasiones, incluso sobre la estatal. Los recursos son suministrados por el gobierno central, quien sule escoger a su vez los directivos atendiendo a la propia región.

3. *TV regionalizada*. La producción central es el resultado de una asociación de producciones regionales. El ente central distribuye los fondos a las regiones, permitiendo con ello una organización y una programación relativamente autónomas. Si la periferia es capaz de ampliar su producción propia a temas culturales, de entretenimiento y aun de acoger la publicidad regional, llegando en tiempo de emisión autónomo a superar la barrera de 1 hora al día, sigue siendo el centro sin embargo quien escoge los directivos.

4. *TV federativa*, o el modelo alemán, donde cada Lander (con la excepción ya señalada de la NDR) dispone de su propia TV, pero estando asociado al mismo tiempo, por voluntad propia, en una organización común que federa y reúne la producción conjunta de las estaciones federadas. En este caso, los directivos de cada TV son elegidos por el Consejo de Administración regional, y los recursos proceden de la misma región, sea en forma de subvenciones (de origen impositivo) o en forma de ingresos publicitarios, o de ambas formas.

5. *TV autonómica*. Cada emisora regional cubre independiente y regularmente una programación propia para su zona de emisión, elige a sus directivos y decide la naturaleza de su programación. Puede mantener relaciones estatales, e incluso internacionales, con otras televisiones (públicas o privadas).

Junto a Irlanda, el único Estado de la CE sin TV regional de ningún tipo, a la 1ª categoría cabría incorporar tanto a FR-3 y RAI-3 como a la mayor parte de los centros territoriales de TVE, el valenciano incluido (con la excepción manifiesta, hoy por hoy, de San Cugat, más cercano a la 2ª categoría). Primer nivel de "regionalización televisiva" al que podríamos sumar los casos de Grecia (hasta hace poco con centros regionales de producción, pero no de programación) y de Portugal (a excepción de los centros isleños del Atlántico, RTP Azores y RTP Madeira, orgánicamente dependientes de Lisboa pero con programación propia bajo vigilancia del Parlamento regional si bien con contactos con Brasil y EE.UU., por lo que se aproximan a la 4ª categoría).

Los centros territoriales de la BBC, con sus centros de emisión y de producción regionalizados (de ahí que Zimmermann los señale como prototipo de la 3ª categoría, sin duda mejor ilustrada

por la RTBF belga), se integrarían según otro punto de vista (junto con centros de TVE como el de Cataluña y Canarias o los más ‘avanzados’ en tal sentido de FR-3 y RAI-3) en la 2ª categoría. También Dinamarca entraría a formar parte de similar casuística, al menos tras la resolución gubernativa de 1987 que estableció la TV2, un modelo integrado por 8 estaciones regionales (sobre un total de apenas 5 millones de habitantes) que producen tanto una programación nacional conjunta como noticias locales en su zona respectiva.

Como un salto cualitativo adicional respecto del modelo alemán (4ª categoría) y, pese a sus diferentes contextos demoeconómicos, junto a la BRT flamenca -ésta por motivos lingüísticos- y junto a las distintas emisoras públicas de unos Países Bajos que por su “estrecho espacio” casi cabe considerar como TV regionales -allí donde las diferencias ideológicas y sectoriales (existen canales católicos, progresistas, uno juvenil y uno sindical) han terminado por traducirse en diversidad de abastecimiento regional e incluso local-, la 5ª categoría o de máxima descentralización televisiva viene equiparándose en Europa, hoy por hoy, con las TV autonómicas españolas. Como organismos públicos de RTV que a escala europea -al igual que Radio Quebec respecto de Radio Canadá a nivel internacional- ejemplificarían la convivencia de un modelo de “TV pública pesada” regional junto a una TV de ámbito estatal no menos fuerte, al igual que la organización *posible* de la TV pública “de abajo hacia arriba” (Zimmermann)...

La diversa ‘socialización’ del *control* en las distintas organizaciones públicas de RTV europeas, sin embargo, permite advertir sobre una lectura de la anterior tipología-CIRCOM quizá proclive a identificar -al viejo modo mecanicista- categoría “más alta” con mejor adecuación democrática al entorno por parte de cada emisora en concreto, lo que no suele ajustarse a la plural realidad de las distintas TV regionales europeas (comenzando por las autonómicas españolas). De hecho, el criterio *territorial* por sí mismo, que es el subyacente en la tradicional división de emisoras: estatales, regionales y locales, se revela tan ‘reduccionista’ en la práctica como el criterio *sectorial* (en este caso, el de raíz jurídico-política) que suele contentarse con remitir lo-real-complejo implicado al dilema TV pública vs. TV privada. Probablemente de la conjugación de ambos criterios, al unísono, cabría esperar una mejor aproximación a la complejidad que habita en la trastienda de cada caso contingente: también en el caso español.

La supuesta excepcionalidad “española”, en ese sentido, no afectaría por lo pronto a la matriz originaria del proceso de descentralización en cuestión, sino a su ritmo más acelerado -quizá por posterior en el tiempo en el contexto europeo: pues dicha matriz no es otra, como sucede por demás con tantas otras cuestiones “sectoriales”, de que a la previa y contingente descentralización de cada Estado  *siga* -máxime en Europa- la propiamente audiovisual. Como tampoco habría mayor excepción, en el caso español, que el de columbrar una *aceleración en paralelo* de los procesos de desregulación y descentralización, con resultados que parecen decantar la prevalencia de la lógica desreguladora sobre la que inicialmente cabía presumir como propia a toda descentralización formalmente ‘pública’. La excepcionalidad del caso español, por tanto, habría que buscarla si acaso en la pervivencia del modelo originario (progubernamentalista en lo político / comercializante en lo económico), pese a la ruptura de su centralismo primigenio, sin importar la diversidad del color político que haya abanderado en cada caso su superación, mantenedor a la postre del mismo esquema de financiación -obediente en tales canales, y en mayor medida si cabe, a la “acelerada” desregulación del sector público, sin haber en ese sentido excepcionalidad de ningún tipo.

No por mayor celeridad, no en vano, tienen por qué tenerse más claros los objetivos finalmente perseguidos con dicha descentralización televisiva. Y el caso español, donde el proceso se ha acometido desde el sector “público” -en paralelo a la progresiva configuración del Estado Autonómico recogido en la Constitución del 78-, ejemplificaría quizá lo atípico que supone la persecución desde el mismo, hasta la fecha con carácter de “modelo autonómico dominante” -frente a otros modelos quizá alternativos: como el de un hipotético canal federado, de servicio público y ligero-, de una “TV pesada” y abiertamente competitiva. Un modelo de TV edificado *a la contra* de TVE pero, quizá por lo mismo, en relación desigual no sólo frente a ella sino también frente al resto del modelo coexistencial en su conjunto (tanto TV públicas como privadas). Y que, pese a ello, parece imponerse en aquellas TV autonómicas -entre ellas la valenciana- que hacen suyo el cuasi-axioma que viene a cuento (“potencial económico y voluntad política van por delante”) pero que, más allá de argumentar la estricta asunción de competencias diversas en defensa de lo anterior, parecen desconocer por contra el cuasi-corolario que en estricta lógica se deriva con carácter no menos inmediato (no por “mayor familiaridad con la audiencia” se garantiza, desde dicho modelo competitivo, la “cobertura de financiación y de participación social” a que dicha audiencia tiene derecho respecto de toda TV pública que se precie de serlo).

Si algo está claro a estas alturas, en definitiva, es que **tampoco hay “modelo europeo de TV regional”** (como no lo hay de TV Pública). Máxime cuando una prospectiva como la esbozada por el propio Zimmermann, sin ir más lejos, y tanto apoyándose en motivaciones predominantemente lingüísticas o culturales -y ello más allá de una Europa “a doce”: pues en Suiza se dan 4 regiones de habla distinta, 4 también en Hungría, 5 en Rumanía, 2 en Checoslovaquia, 8 en Yugoslavia y hasta 10 en la parte europea de la URSS-, como en las más estrictamente políticas proclives a la descentralización -patente en la programación televisiva de Polonia, Bulgaria o Austria-, permite sostener, en todo caso, que si en Europa puede hablarse de unas 75 emisoras nacionales de TV (de ellas, unas 20 de gestión privada) junto a unas 25 regionales, las presiones tanto desreguladoras como descentralizadoras se habrán de incrementar en el inmediato futuro. Y si todo apunta a que las nacionales terminarán por atender el reto “transnacional” que plantea la emisión por satélite, ello agrandaría de paso el campo de actuación posible de la TV regional como televisión convencional y aun por cable. Por lo que parece urgente reconsiderar, en el caso español cuanto menos (por la condición *pública* de los canales autonómicos), los condicionamientos de viabilidad (demografía, turismo y ocio, medios financieros, lenguas autóctonas, etc) que delimitan la intersección “lógica” de ambos procesos (desregulación/descentralización) a fin de sopesar, caso por caso, cuándo y cómo sea previsible la primacía del uno sobre el otro y en qué medida el resultado sea congruente con las “necesidades comunicacionales” que atender públicamente.

Más allá, por tanto, de remitir la problemática que aquí nos importa -no otra que la realidad europea inmediata en materia de TV ‘regional’- a cuestión de mera conceptualización, conviene, por contra, reconducir ‘lo real’ a esa **conclusión** más general de que “seguramente son más comparables cuestiones como: presupuesto, capacidad de gestión, demografía y audiencia, lengua y cultura, capacidad de producción, calidad de las emisiones, relación con los poderes públicos o con los grupos de presión económica” <sup>(18)</sup>.

En no menor medida que sin duda resultan asumibles, desde una perspectiva práctica ante todo, las **Propuestas** lanzadas en Valencia (mayo, 1990) por el consejero de RTV Madrid, Jesús

Arilla, a la hora de sumar esfuerzos para reforzar la Europa de las Regiones que hoy aboga por constituirse en 2ª Cámara de la CE. Y que también cabe exigirse en el terreno audiovisual: pues no por no haber “modelo” de TV regional parece permisible, por más tiempo, que ello se traduzca en la más absoluta descoordinación (desde esa perspectiva europeísta que aquí se asume con todas las consecuencias) en cuanto a las diversas políticas de comunicación ‘regionales’. Las propuestas de Arilla comparten, por demás, la perspectiva aplicada que así mismo hemos asumido:

- “ 1. Creación, en el seno de la Federación de Organismos de RTV Autonómicas (FORTA), de una unidad de trabajo específica para asuntos regionales europeos.
2. Elaboración del Libro Blanco del regionalismo audiovisual europeo.
3. Promoción de intercambios de tecnología, de profesionales y de programas con otras entidades regionales de Radio y TV europeas.
4. Estudio de viabilidad de una Agencia Regional Europea de noticias audiovisuales.
5. Análisis de posibles co-producciones regionales europeas, su explotación, comercialización interna y extra-europea.
6. Prospección para configurar una central de compras de los medios regionales europeos respecto de terceros países.
7. Proponer, a través de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) la celebración de la I conferencia de Radio y TV regional europea.
8. Recabar la colaboración de los eurodiputados y Comisarios Europeos españoles en apoyo de una Asociación Europea de Radio y TV Regionales” <sup>(19)</sup>.

### 1.2.2. TV pública y Autonomía en España.

La descentralización televisiva en España se remonta, en un primer momento histórico, a la creación por TVE de los “Centros Regionales”, política comenzada en 1971 por similares criterios de legitimación “interna” de un régimen ya en decadencia pero -a diferencia de la reforma gaullista- “motivada más por razones de producción televisiva que por un deseo de acercarse al mundo regional y local” <sup>(20)</sup>. Cabe matizar: la red de RTVE empieza a ser efectiva para el segundo canal (UHF) a partir de 1964, lo que más allá de retrotraer a aquel entonces las intenciones de “descentralización” finalmente plasmadas con la puesta en marcha de los Centros Territoriales antes dice, por el contrario, del interés por alcanzar desde el centro del modelo televisivo el máximo de territorio nacional a fin de asegurar el ‘mercado único’ publicitario (objetivo económico) al tiempo que se intentaba garantizar un *plus* de control informativo con la implantación de unos Centros que ni con la transición democrática llegarían a superar (salvo en Cataluña y Canarias) su condición de meras “corresponsalías” de Prado del Rey (objetivo político). Dicha política no pasó, de hecho, de una simple desconcentración de la TV estatal: en algunos casos los Centros territoriales abarcarían a varias regiones, como sucedió por ejemplo con el “Centro de TVE en el Norte”, al intentar aglutinar al País Vasco, norte de Navarra y Burgos, Logroño y Santander. Pero sólo una vez en vigor la Constitución de 1978 dichos Centros tratarían de ajustarse, en cuanto a radio de cobertura, a la nueva geografía autonómica que aquella diseña, y en cuanto a programación a los intereses de cada Comunidad Autónoma. No siendo necesario señalar, en tal sentido, el papel catalizador

efectivamente jugado -aun con notables lagunas- por el proceso abierto merced al Estatuto de RTVE de 1980, al dar pie a la figura del Delegado Territorial y propiciar una reorganización territorial de la TV estatal, plasmada en gran medida en la constitución de Consejos Asesores de las CC.AA.

La auténtica descentralización llegaría, en un segundo momento histórico, con la asunción competencial por las Comunidades ‘históricas’ (País Vasco, Cataluña y Galicia) y por la vía del artículo 151 de la Constitución, de las competencias en materia de radiotelevisión, competencias que les permitía “regular, crear y mantener su propia televisión”. Similar techo competencial alcanzarían, posteriormente, las Comunidades Andaluza, Canaria y Valenciana; limitándose el resto a la vía del artículo 143, a través del cual las competencias asumibles en materia de radio y televisión se remiten genéricamente a los casos y en los términos establecidos en el Estatuto de 1980 (el gobierno, previa autorización de una ley de Cortes, podrá autorizar la creación de un canal regional y cederlo para su gestión a las mismas). Será por entonces cuando el PNV y CiU, en el País Vasco y Cataluña respectivamente, fueren la legalidad por la vía de los “hechos consumados” y creen ETB y TV-3: el ejemplo estaba servido. Y ante la inminencia de elecciones autonómicas en otras Comunidades, el PSOE impulsará la Ley reguladora de los Terceros Canales aprobada finalmente el 26 de diciembre del mismo año 1983 en que aquellas primeras emisoras autonómicas salen al aire. Que ello coincidiese en el tiempo con la primera gran derrota pro-mantenimiento del monopolio de TVE, ganada por los intereses privatizadores, no es cuestión menor: y ya se ha aludido a su influencia en la “aceleración fundacional” del canal valenciano; pero, por lo que aquí interesa, no menos importante viene a ser el guadiana peculiar que sigue la polémica TV pública vs. privada a la hora de entender la demora (claramente política) que retrasa la puesta en marcha definitiva de Canal-9 (como también del Canal Sur andaluz y de TeleMadrid) hasta no bien clausurada dicha polémica en 1987-88, en que se aprueba tanto la Ley de TV Privada cuanto el no menos importante Plan Técnico que la desarrolla... Será en ése y no otro sentido, una vez acometida la reflexión pertinente al contexto inicial de los años 1983-84, que en este subapartado nos interese con mayor detenimiento recalcar en los hitos fundamentales que terminarán afectando -por vía indirecta- a la definitiva “luz verde” para el proyecto TVV. Si bien sin descartar, en ese periodo que va de 1984 a 1988, cuanto empieza a germinar en materia de descentralización y que culmina, ese mismo año, con la constitución de la FORTA y, ya en 1990, con la anunciada reforma del propio Estatuto de 1980.

Es un dato histórico, como resaltaban Justo Villafañe y Federico García Serrano en diciembre de 1984, que “la mayor parte de los textos, artículos, comunicaciones a congresos, etc, que (habían) aparecido hasta (entonces) referidos a las TV autónomas (habían tenido por objeto) el análisis jurídico de la nueva situación creada por éstas”<sup>(21)</sup>. Políticamente, cabe añadir, subyacía por entonces el problema de las ideologías respectivas en tanto que problema de “rearme ideológico”, por demás consustancial a los planes económicos regionales *primerizos* en aquel contexto (el proyecto RTVV, no se olvide, encontrará su marco efectivo de programación en el PEV que empieza a pergeñarse en 1985-86). Algo que llevó al gestor más inmediato del PEV 1988-91, Juan A. Gisbert, a sostener que “se necesita el plan como elemento de reflexión político-cultural antes de que, o precisamente para que la sociedad regional asuma su propia realidad diferenciada y genere, por tanto, la necesidad, al entender su utilidad, de los elementos formales. No es por ello casualidad que la presencia de elementos formales pueda constatare en mayor medida en Cataluña y el País Vasco y de forma más incipiente pero decidida en nuestra propia Comunidad, a diferencia del resto de regiones, y ello no obedece al mayor desarrollo económico como muestra el contrajemplo de

Madrid'' (22).

Ambos aspectos, el jurídico y el político, se encontrarían en el primer quinquenio de los años 80 (y todavía colea, lógicamente) dando pie a las inevitables referencias al texto constitucional (arts. 20 y 149.1.21-27), a la Ley 4/1980 del Estatuto de RTVE (art. 2.2), a la Ley 46/1983 del Tercer Canal y, desde cada una de las Comunidades Autónomas (CC.AA.), al respectivo Estatuto de Autonomía. Desde la Administración central se primaría desde un principio una visión en que apoyar la preponderancia de TVE, remitiéndose a las tres primeras normas de las citadas (visión reforzada con el tiempo, en su "centralismo" de base, a través de las leyes 31/1987 de Ordenación de las Telecomunicaciones, 10/1988 de la TV Privada y orgánica 2/1988 reguladora de la publicidad electoral en emisoras privadas de TV). Desde las Comunidades Autónomas, en especial por parte de aquellas "históricas", se antepondría sin embargo desde un principio, junto a la Constitución, el respectivo Estatuto de Autonomía, y ello al atender a éste por cuestión de "coherencia en el bloque de constitucionalidad" implicado (lo que ha ido ganando adeptos con el tiempo), como de rango superior por su condición de ley orgánica respecto de leyes ordinarias (de rango menor) como serían las del Estatuto de RTVE (Ley 4/1980) y del Tercer Canal (Ley 10/1983). Las posiciones, pese a que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha tendido a avalar hasta la fecha la interpretación "oficial" de los primeros, persisten "encontradas" con vistas -en especial- a la anunciada reforma del Estatuto de 1980 y cabrían resumirse en los siguientes términos:

- Para los primeros, **centralistas** de uno u otro signo político, el bloque de legalidad todavía aplicable (a la espera de la reforma del Estatuto de 1980) se centraría en las siguientes normas -técnicamente- *básicas*:

"a) La radio y la TV son servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado.

b) La atribución de las frecuencias de emisión corresponde al Gobierno central, en aplicación de los acuerdos internacionales.

c) La gestión directa de los servicios públicos de radiodifusión y Tv del Estado se reserva al ente público RTVE.

d) La gestión indirecta del régimen de TV no estatal se realizará mediante concesión administrativa; la gestión pública a través de la Ley del Tercer Canal y la gestión privada a través de la Ley de la TV Privada (añadida con el tiempo, al igual que la LOT, al "bloque" inicial), en cuyas leyes se encuentran los criterios básicos de su organización.

e) La legislación y la planificación del aspecto radioeléctrico corresponde al Estado'' (23).

- Para los segundos, **descentralizadores** de uno u otro signo, los argumentos anteriores se matizarían ante todo en función del respectivo Estatuto de Autonomía, en tanto que antepuesto a todo lo que no señala expresamente la Constitución. Pero las defensas, en este terreno, no son ni con mucho comunes, reflejando la propia *diversidad* competencial de partida:

1) Parece clara la atipicidad, de una parte, del Estatuto del País Vasco, que diferencia claramente el tercer canal a que se refiere la Ley 4/1980, de titularidad estatal y gestión autonómica, y lo que bien puede llamarse "cuarto canal" vasco (que podrá regularse, según el art. 19 del referido Estatuto de Autonomía, por las normas propias de Euskadi, correspondiendo la infraestructura a la

misma Comunidad Autónoma y pudiéndose poner en marcha -como así se hizo con ETB2- sin necesidad de concesión, en virtud de competencia propia) <sup>(24)</sup>.

2) Dentro de un segundo gran grupo, formado por aquellos Estatutos de Autonomía que darían pie -previa modificación del Estatuto de RTVE- a poder hablar de “TV propia”: caso de Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra, Andalucía, Canarias y Baleares, podría distinguirse sin embargo -por ahora- a las cinco primeras (en que se habla, siguiendo el ejemplo del art. 16 del Estatuto catalán, del tercer canal de titularidad estatal “en el marco de las normas básicas del Estado” -que se otorgará por éste según disposición transitoria- pero también, en epígrafe diferenciado, de poder “regular, crear y mantener su propia televisión”) como caso aparte del Estatuto balear (sin la referida disposición transitoria por lo que hace al tercer canal estatal) y a su vez del caso de Canarias (mezcla de ambos extremos) <sup>(25)</sup>.

3) En un tercer gran bloque, cabría distinguir a su vez entre los Estatutos de Asturias, Cantabria, Murcia y Castilla-La Mancha (que se refieren solo a los medios del comunicación social del Estado y al techo competencial del Estatuto de RTVE), con el híbrido de Madrid (que habla de un tercer canal en disposición transitoria), respecto del caso de Aragón (que remite sus competencias a Ley Orgánica posterior y alude en una transitoria a transferencia -que no concesión- del tercer canal de TV). Entre los prototipos asturiano y aragonés, los Estatutos de Rioja y Extremadura aluden en transitoria al otorgamiento del tercer canal, pero no hablando de “canal” sino de “instalaciones de televisión”.

4) Finalmente, el Estatuto de Castilla-León sería el menos proclive a los planteamientos descentralizadores en radio y TV, expresando que ejercerá las competencias en dicha materia “en los términos que dispongan las leyes del Estado”, remitiendo en una adicional a RTVE la posibilidad de proponer medidas para la concesión de un tercer canal de TV.

De manera que desde su “acta fundacional” -y no sin cierto afán, por esta vez, categorizador-, cabría distinguir, a partir de la mayor o menor convergencia de los diversos procesos de comercialización/descentralización, *dos grandes modelos tendenciales* de TV autonómica en España:

a) De una parte, un primer modelo al que tenderían (en términos de mayor descentralización) las televisiones de las CC.AA. de los grupos estatutarios 1 y 2, y cuyo ejemplo ‘extremo’ en términos de legitimación de una “TV propia”, a priori, sería EuskalTelebista.

Pese a incluir a aquellas Comunidades de mayor “potencial de legitimación inicial” (no otro que el de la cooficialidad de dos lenguas en contacto, una de ellas tradicionalmente subordinada al castellano), el empuje adicional -decisivo, en términos de factibilidad- que cabe apreciar en cada caso al sumarse al diverso “potencial de voluntad política” inherente a dicha legitimación inicial el no menos diverso “potencial económico endógeno” (normalmente traducido por la vía del apoyo presupuestario autonómico) ha terminado por diferenciar la *desigual* interiorización de la lógica comercializante (afín a los intereses desreguladores) finalmente introducida en las más poderosas (a partir del ejemplo TV3). Observándose, por ello, la desigual consolidación de un **modelo de TV pesada** similar (si bien ‘a la contra’) al de TVE.



Si dicho modelo sólo parece sostenible en algunas de tales CC.AA., caso del País Vasco y Galicia, por la vía del refuerzo político (esto es, apuntalando su condición de TV *públicas* y apelando a sus tareas de normalización lingüística), en otras CC.AA., de las que Andalucía sería el mejor ejemplo, tan sólo parece posible por la vía del refuerzo presupuestario: necesitado por tanto, para su defensa “política” frente a otras necesidades sociales no menos prioritarias, de la equívoca muleta de la autofinanciación (puerta abierta, en consecuencia, a la lógica comercializante y a una competencia no importa “frente a quién” que más asimila finalmente su oferta a la de una TV *privada* que no a su condición fundacional como TV pública). De otra parte, la diversa ralentización que por uno u otro motivo, ya político o económico, cabe apreciar en los casos intermedios (Navarra, Baleares), dejan entrever finalmente la “mejor posición de partida” de aquellas Comunidades (Cataluña, Valenciana) más cercanas al eje actual -el Mediterráneo- del crecimiento económico en España: razón por la que pronto se sumaría a dicho modelo la anunciada TeleTres de Murcia y a su vez, en función de las sinergias político-económicas que conlleva la capitalidad del Estado, también TeleMadrid (al igual que la murciana en principio ajena a los grupos estatutarios 1 y 2).

El modelo catalán de TV3 sería en todo caso, en el momento más álgido de la pugna (1986-87) con el eventualmente alternativo, el que mostrase más a las claras las características definitorias (y las servidumbres de su evolución) de la apuesta por esta vía:

EVOLUCION TV3	1984	1985	1986
Horas de programación/año	1.700	2.400	3.120
Presupuesto funcionamiento (*)	5.280	6.333	8.389
Coste/hora emisión (*)	3,1	2,64	2,39
Subvención recibida (*)	3.664	2.841	2.224
Ingresos propios (*)	1.615	3.492	4.803
Plantilla:			
- técnica	249	271	348
- programación	246	304	358
- general	43	64	81
- dirección	10	11	11

(\*) En millones de ptas.

Fuente: Mercedes Giménez de Cisneros: “Televisió de Catalunya”. Ed. Montero, Barcelona, 1987.

b) De otra parte, un segundo modelo al que tenderían (en términos de menor descentralización efectiva) las Comunidades restantes de los grupos estatutarios 3 y 4, y cuyo ‘ejemplo extremo’ sería, por contraposición al vasco, el caso de Castilla-León (ajeno, a priori, tanto a toda problemática sociolingüística cuanto -incluso- a la pretensión por asumir un tercer canal de TVE).

Pese al “puente” que Murcia y Madrid supondrían (entre las CC.AA. de tales grupos estatutarios) con respecto al modelo anterior de TV autonómica “pesada”, parecidas -pero asimétricas- razones de factibilidad (pero asimétricas tan sólo desde la lógica comercializante de dicho modelo, que no tan claramente en lo relativo a exigencias “políticas” de descentralización) darían pie a un **modelo de TV ligera** tanto más cercano (por motivos de menor “potencial económico endógeno”) a planteamientos de federación entre ellas y de servicio público, si en términos de descentralización no impulsada desde RTVE, cuanto a su dependencia efectiva de semejante impulso descentralizador “desde el centro” (por motivos “políticos”). Se entendería así el modelo de “Tercer Canal federado” propuesto inicialmente a partir del caso andaluz, cuanto su confluencia posterior vía Aragón (hasta que las elecciones de 1987 contemplan el acceso al gobierno regional del PAR en detrimento del PSOE) y, a la postre, con el proyecto “non nato” en similar sentido que intentase aglutinar a CC.AA. en apariencia tan disímiles como Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia (esta última, al igual que Andalucía, finalmente descolgada del proyecto: una por su cercanía al Mediterráneo, la segunda por motivaciones políticas de un calado que aquí no parece necesario retomar).

El proyecto sin duda más significativo, en relación con tal modelo de TV pública, ligera y federada, sería el realizado por la consultora CORATEL <sup>(26)</sup> bajo el impulso formal -ya se ha dicho- de Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, estudio que se entrega en junio de 1988 (una vez descolgadas del mismo, por motivos diversos, tanto Andalucía como Madrid, Aragón y la propia Comunidad Valenciana, y en tanto que *plataforma de convergencia* con la FORTA recién constituida y en la que predominan los canales del modelo “pesado”). Los objetivos explícitos de dicha federación serían “la mejora de la representación y de la negociación tanto a nivel nacional como internacional, ventajas en cuanto a compra y comercialización de programas, más completas dotaciones y asistencia técnicas, aumento de la audiencia y disminución de las estructuras organizativas individuales, e incremento de las posibilidades de producción, mediante fórmulas de coproducción, de productos de calidad, etc” <sup>(27)</sup>. La participación en su financiación de las CC.AA. interesadas se fija, con arreglo a diversos ítems socioeconómicos, de modo que Asturias contribuiría en un 23,7%, Castilla-La Mancha en un 34,1%, Extremadura en un 22,1% y Murcia en el restante 20,1%. Distinguiendo 3 hipótesis o “fases” (correspondientes a un esquema previo de 22, 34 y 54 horas semanales de emisión, si bien en la última incluyendo 416 horas de reposiciones) en dicho estudio se detallan datos que conviene retener a efectos comparativos (respecto de TV3):

PROYECTO 3er CANAL FEDERADO	Fase 0	Fase 1	Fase 2
Horas emisión año:	1.144	1.768	2.808
- Producción ajena	416	1.040	1.248
" regional	371	371	600
" federada	346	346	544
Coste Inversión (*)	252	262	262
Coste explotación (*)	935,2	1.732	2.045,6
<i>Coste producción ajena (**)</i>	<i>499,2</i>	<i>1.248</i>	<i>1.497</i>
" " <i>propia federada</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>252</i>
Locales: - producción ..... 170 m2 (plató de 80 m2)			
- informativos ..... 100 m2			
- técnica ..... 80 m2			
- oficinas ..... 550 m2 ..... <i>Total = 900 m2</i>			
Plantilla:			
- dirección ..... 2			
- gabinete ..... 4			
- administración ... 4			
- ventas ..... 4			
- producción ..... 21 (8 periodistas)			
- operación ..... 11 (4 cámaras, 2 realizadores)			
- técnica ..... 3 ..... <i>Total = 49</i>			

(\*) En millones de ptas.

(\*\*) Sobre un coste medio anual por hora de emisión  
de producción ajena estimado en 1,2 millones.

La realidad, sin embargo, no suele plegarse -en su dinámica complejidad- a las pretensiones analíticas que, aun a posteriori, pretenden dar cuenta de ella. Lo que se constata en el caso que nos ocupa, máxime dado lo abierto de los procesos (económicos, políticos y sociales) que cohabitan en la trastienda problemática del proceso descentralizador del audiovisual español. Los pasos **efectivos** de la descentralización televisiva en España, en definitiva, han sido tan equívocos como conflictiva la interpretación jurídica de arranque y ambigua la política de comunicación aplicada. Una política que, en su dependencia *paranacional* del debate TV pública vs. TV privada, apenas pudo "contener" con el tiempo ni la ruptura descentralizadora por la vía del primer modelo tendencial (el de una TV autonómica pesada) ni la ruptura privatizadora (tanto en TV convencional como por satélite o videocomunitaria) del modelo televisivo 'global' hasta entonces consolidado.

El posicionamiento del PSOE, clave en cualquier caso en lo relativo a la política de comunicación que más importa en el caso valenciano y, en general, por detentar el control de una hipotética convergencia entre los dos modelos “tendenciales” ya señalados, habría pasado -según parece- de intentar frenar inicialmente el “irresistible ascenso” del primer modelo entre aquellas CC.AA. con mayores competencias en radiotelevisión, a una segunda etapa en que promovió el desarrollo del segundo modelo como “alternativo”, hasta llegar, en la actualidad, a sopesar la eventual confluencia entre ambos en un entorno federativo en que uno y otro modelo de TV autonómica convivirían, si bien en detrimento de la posición previa detentada por el PSOE al respecto -algo por demás en consonancia con la recomposición del mapa político español tras las sucesivas convocatorias de elecciones generales: y de ahí, quizá, el visto bueno inmediato de García Candau al ingreso de FORTA en la UER, nada más tomar el relevo de Solana al frente de RTVE.

Así, tras naufragar en la ambigüedad con la que “enfrió” las primeras iniciativas de TV autonómica pesada más próximas a su cuerda política, como TeleMadrid o la propia TVV (ambas de 1984), la postura socialista se habría clarificado en la dirección apuntada, quizá a la vista de los resultados de las autonómicas del 87. Pero antes, frente a los tres canales autonómicos (ETB, TV3 y TVG) que abrieron brecha inicialmente en la concepción centralista del monopolio público, se habría tanteado por el PSOE esa especie de ‘tercer canal federado’ que más tarde se evaluase por parte de Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Asturias (tras el escarceo previo por sumarse al mismo de Aragón, de Baleares y aun de las propias Navarra, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana).

Unos cuantos datos, de por sí significativos, marcaban la distancia entre un modelo y otro de “descentralización posible” al hilo de las generales del 86 y a un año vista del grueso de elecciones autonómicas del 87, momento caliente por tantos motivos en la polémica previa entre TV pública vs. privada. De una parte, los índices relativos de audiencia “territorializada” del medio TV en España confirmaban, según datos del *Estudio General de Medios* referidos a octubre de ese año, la progresiva incidencia del modelo de TV autonómica pesada (desde un principio “respecto de TVE”) en aquellas CC.AA. que habían apostado por el mismo (en no menor medida, a tal respecto, que la desigual incidencia de TV3 respecto de ETB y TVG):

## AUDIENCIA DE TELEVISION (cantidades en porcentaje)

	VHF	UHF	TV-3	ETB	TVG	TOTAL
Andalucía	88,4	27,3				89,6
Aragón	87,2	24,3				89,5
Asturias	84,9	21,6				87,8
Baleares	78,0	19,0				80,0
Cantabria	81,4	25,3				84,0
Castilla y León	83,7	21,3				84,9
Castilla La Mancha	84,8	20,8				86,4
<i>Cataluña</i>	<i>81,1</i>	<i>26,7</i>	<i>44,0</i>			<i>92,0</i>
Extremadura	86,1	20,7				88,0
<i>Galicia</i>	<i>77,6</i>	<i>14,5</i>			<i>18,8</i>	<i>81,4</i>
Madrid	87,4	25,0				89,1
Murcia	87,0	24,4				88,1
Navarra	76,6	14,8				79,4
<b>Comunidad Valenciana</b>	<b>85,8</b>	<b>26,5</b>				<b>88,0</b>
<i>País Vasco</i>	<i>80,0</i>	<i>19,8</i>		<i>16,9</i>		<i>85,0</i>
La Rioja	81,9	18,3				83,8
<b>TOTAL</b>	<b>87,8</b>					

De otra parte, respecto de la “virtualidad alternativa” del hipotético Tercer Canal federado, la propia diversidad en infraestructura y producción de los centros territoriales de TVE en 1986 era un síntoma nada halagüeño sobre las dificultades entrevistas de antemano para su concreción (aparte de colisionar, por demás, con la nueva política de Calviño tendente a incrementar la captación de publicidad por TVE a través de dichos centros con el fin de compensar la pérdida de la subvención estatal, colisión que era mayor en aquellas CC.AA, como Andalucía o la propia Comunidad Valenciana, capaces de servir de “banderín de enganche” a dicho proyecto). Los siguientes datos, con exclusión de los centros atípicos de TVE en Cataluña y Canarias (el primero de ellos se llevaba ya 61,3 millones de los 210 destinados a inversiones en centros regionales por TVE en 1985, inaugurando la tendencia de potenciar, frente a las TV autonómicas “de peso”, aquellos centros más competitivos), son ilustrativos de la desigualdad de partida entre las Comunidades que alguna vez sopesaron la idea de dicho Tercer Canal “a partir de TVE”, en no menor medida que evidencian el déficit infraestructural y de producción propia en tales centros territoriales de la TV estatal (con una media tan escasa que apenas si sobrepasaba las 340 horas/año de producción por centro, menos de 1 hora/día, y ello aun tratándose en su mayor parte de “Informativos”, llamado a ser el plato fuerte de toda programación autonómica en su despegue):

CC.AA.	Espacio (m2) del Centro	Espacio (m2) de plató	Personal TVE	Horas/año producidas
Andalucía	Chalet 2 pltas	28 y 120	73	998
Aragón	4.478	200	48	453
Asturias	960	42	42	387
Baleares	1.000	76	46	372
Cantabria	250	18	40	317
Castilla-La Mancha	... No tenían:		-	61
Madrid	compartido por las 3		-	204
Extremadura	CC.AA. ...		-	25
Murcia	800	42	36	356
Navarra	540	18	40	315
La Rioja	425	42	-	64
Comunidad Valenciana	1.030	74 y 30	63	380
Castilla y León	2.378	120	44	349
<i>Galicia</i>	<i>1.000</i>	<i>98 y 6</i>	<i>49</i>	<i>482</i>
<i>País Vasco</i>	<i>3.261</i>	<i>240</i>	<i>65</i>	<i>246</i>

Fuente: Fernando Monar, Tesis doctoral (ya. cit.)  
Universidad Complutense. Madrid, 1989.

A los datos cuantitativos se unían por las mismas fechas otros más cualitativos. No el menos significativo, de entre ellos, el que los Consejos Asesores previstos por el Estatuto de RTVE (en su conocido art. 9º.1.d) no se hubieran constituido sino en la mitad de las 17 CC.AA., casos de Cataluña y Andalucía (1982), Galicia y Asturias (1983) y, al quinto año de entrar aquél en vigor, en otras cinco adicionales: entre ellas la Comunidad Valenciana. Como a su vez contaba la propia reserva, entre las contempladas por la Ley del Tercer Canal en favor de RTVE, de no permitirse la federación entre canales... Pero las reservas no eran sólo del cariz jurídico-político que tales cuestiones dejaban entrever, sino también estrictamente “periodísticas” (y más próximas, en alguna medida, a los públicos de las distintas CC.AA., y por tanto a su fuente última de *deslegitimación*). Alfons Llorens aventuraba, desde una óptica valenciana -pero una óptica, en cualquier caso, con la ventaja de serlo “desde dentro” de las cosas y no acogida tan sólo al diferencial lingüístico-, unas cuantas constataciones “a partir de un simple estudio de los telediarios de Televisión Española”:

“ 1) La aportación global por parte de los centros es del 16% del total. En casos como el del País Valenciano, que más o menos representa el 10% del Estado en muchas cosas (en habitantes, en producciones, en cosas de éstas) ocupa el 0,13% del tiempo informativo. Y el 0,8% del total elaborado por el conjunto de centros regionales.

2) Hay una preponderancia de acontecimientos en toda la aportación de los centros regionales de TVE. No sólo en el de la Comunidad Valenciana, evidentemente, o en el de Cataluña. Hay una preponderancia de acontecimientos: de festivales, de congresos, exposiciones. Hay pocas noticias políticas y autonómicas. Se da más importancia a la anécdota que no a la categoría configuradora del ámbito de la Comunidad en cuestión. Al final resulta un espectáculo folclórico, invertebrado, catastrofista y negativo de la periferia en su conjunto...

(Y en cuanto a recursos/programación-producción añadía que) mientras un telediario de media hora (en Torrespaña) tiene 4 cabinas de montaje, un estudio con 4 cámaras, 900 metros y 80 redactores, 16 centros regionales que elaboran completamente las informaciones, Eurovisión, las corresponsalías para el extranjero, 2 unidades móviles, señal y enlaces permanentes en sitios como La Moncloa o las Cortes, un Centro (periférico) para una hora y media de información tiene 3 cabinas de montaje, un estudio de 150 metros, 25 redactores y 2 corresponsales que no pueden elaborar las noticias; no tiene acceso a Eurovisión y, mientras que el presupuesto de producción puede ser de 32 millones de pesetas al año, el mismo centro puede dar 2.000 millones de publicidad a TVE al año''

(28).

Se sabía, por entonces, de la reunión en Bilbao (octubre de 1986) de los directores generales de CCRTV, EITB y RTVG, quienes, además de los problemas de acceso a la red de enlaces de RTVE, se plantearían la necesidad de incrementar su colaboración con la intención de tener representación en la Unión Europea de Radiodifusión (UER) <sup>(29)</sup>. Al mes siguiente, en noviembre, se conoce ya la intención -patrocinada por la Junta de Andalucía- de contactar entre diversas CC.AA. en pro de una federación de terceros canales <sup>(30)</sup>. Pero conforme a lo más arriba expuesto, y pese a la presentación en mayo de 1987 del citado estudio de Oriol, Pérez Tornero y Vilches que en buena parte se hacía eco de tal "alternativa" -si bien desde Aragón-, se intuía por más que sobrados motivos, en definitiva, que ese tercer canal federado -también por lo que afectaba a la presumible posición valenciana- podría no llegar a cuajar. Máxime poco después, en que la ley de creación del ente RTV Aragón era recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional tras las elecciones autonómicas del 87 (que deparan la llegada del PAR a la Diputación General de Aragón), al tiempo que en Cantabria (con el popular Hormaechea en presidencia) se había dado carpetazo a la intentona inicial en favor de un canal autonómico y que Aznar, todavía en Castilla-León, aseguraba pretender la baza -a contracorriente pero significativa- de otorgar concesión regional de TV si acaso a la iniciativa privada (ABC, 3-9-87). Baleares y Rioja eran, en fin, los únicos casos en que sus gobiernos autónomos no habían manifestado el deseo de contar con canal propio de TV... Por si fuera poco, se daban a conocer los iniciales deseos del PNV por echar mano de su Estatuto y compensar con un segundo canal (en castellano) el creciente déficit que ETB -a diferencia del caso catalán, y aun del gallego- ya mostraba; segundo canal al que podría sumarse más tarde (como se concretaría en 1989, luego de aprobada la LTVP) uno similar en Cataluña (Canal 33), de nuevo a iniciativa de CiU y tras la estela de una política de "hechos consumados" al modo de los nacionalistas vascos.

La directora general de TVE a la sazón, aun con un Consejo reticente <sup>(31)</sup>, había aprobado el mismo 4 de abril de 1987 -fecha en que el Gobierno da luz verde a la LTVP- la desconexión del UHF de su circuito catalán, desconexión a la que se sumaría en julio (tras el 10J) la del circuito balear (de la misma área idiomática y al que llega a su vez una TV-3, que juega las bazas -económicas también- de la lengua catalana). Para entonces, en Euskadi, la puesta en marcha de ETB-2 prácticamente

agotaba las frecuencias internacionalmente acordadas como para que allí pudiesen emitir 3 emisoras privadas... Y más allá del caso valenciano, en todo caso, el Gobierno parecía optar por su parte “por la legislación sectorial, de riesgo calculado, en materia de política de comunicación”, tal y como destacase Moragas: cierta y definitivamente, las grandes decisiones (proyectos de LOT y LTVP) se desgajaban legislativamente. El gran interrogante sobre el debate social (y aun parlamentario), persistía: “¿deberán hacerse ahora -insistía Moragas- con los ojos vendados respecto de otros importantes aspectos del sistema comunicativo aún pendientes de legislación o planificación: la recepción de la TV vía satélite, los servicios de cable distribución (videotexto, TV-cable, servicios documentales), la política de desconexión o ampliación de los canales de las televisiones públicas, estatales y autonómicas, el futuro de otras formas de TV vía éter (regionales, comarcales, municipales)?”<sup>(32)</sup>. Pero la guinda que conlleva la gestación de la LTVP, para los intereses descentralizadores, no se dará a conocer *públicamente* sino hasta la impresión en el BOE del Plan Técnico de la TV Privada (que habrá de esperar a noviembre de 1988, aunque las grandes líneas ya estaban en cocina y se conocían por los expertos y responsables tanto gubernamentales como autonómicos). Entre esas “grandes líneas”, significativamente, se incluía la delimitación en 10 zonas del territorio nacional que en absoluto coincidían con los de las CC.AA.:

Zona PTTP	Comunidad/es Autónoma/s
=====	
1ª	Aragón, La Rioja, Navarra
2ª	Asturias, Cantabria
3ª	Galicia
4ª	Castilla y León
5ª	País Vasco
6ª	Cataluña, Baleares
7ª	Valencia
8ª	Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Extremadura
9ª	Andalucía, Ceuta y Melilla
10ª	Canarias
-----	

Pese a que la Comunidad Valenciana se encuentra entre las 6 CC.AA. cuyo territorio corresponde con la Zona asignada a las TV privadas por el PTTP, el potencial de conflicto (tanto económico como lingüístico) se evidencia al separarse de la Zona común delimitada para Cataluña y Baleares: lo que tendría su traducción, casi inmediata, en la polémica que al filo de la inauguración oficial de Canal 9 se vivirá en colisión con TV3. Pero en todo caso, y para todas las CC.AA. con aspiración a levantar canal “propio” de TV, pesado o ligero, semejante sometimiento a criterios de “racionalidad publicitaria” en detrimento de cualquier otra consideración, prefigura el problema potencial de las *fronteras territoriales* (al amparo o no de una supuesta *competencia desleal*) que antes que entre las TV públicas entre sí, a priori, podría darse entre las autonómicas y las privadas (las llamadas, por demás, a una más enconada competencia por coincidir con las segundas en muchas



de las primeras -así la valenciana- su etapa respectiva de “despegue” empresarial).

Con tan evidentes pero contradictorios signos de “viraje” en la materia, el proyecto valenciano de TVV (aún sin denominar como Canal 9) es presentado *en sociedad*, definitivamente, durante los movidos y significativos días que van del 6 al 8 de abril de 1987: como si el visto gubernamental a la LTVP fuera el punto de partida, implícitamente pactado “puertas adentro” del PSOE, para el arranque de los proyectos de TV autonómica hasta entonces refrenados: RTVV, RTVM, RTVA. Para entonces, en el caso al menos de RTVV, se ha perdido la oportunidad de aprovechar el “potencial de concienciación” consustancial a un proyecto durante demasiado tiempo en hibernación administrativa; pero se parece contar, por fin, con no tantos recelos en la traducción (central/autonómica) dentro del propio partido socialista promotor. Ninguna pega para emitir a finales del 88, se asegura desde entonces, a la espera de la concesión gubernamental que llegaría, a la postre, por Real Decreto de 8 de abril de 1988. El valenciano no en vano era el único caso, con Baleares y sin contar con las autonómicas ya implantadas: ETB, TV3 y TVG, en que el “problema” lingüístico diferencial seguía sin apenas atenderse desde la TV.

Otro tanto, en lo relativo a “cambio de escena”, sucedería con TeleMadrid. Aun cuando aquí las disputas PSOE/CDS (o por personalizar, el enfrentamiento Antonio López/Castedo) parecían llevar a un aplazamiento de las querencias personales de Leguina en lo relativo a realizar el bautismo de ondas de TeleMadrid en similares fechas a los canales valenciano y andaluz: las críticas de los medios de prensa escrita, en plena liza privatizadora, no dejaban de arreciar sin embargo -y en especial- a costa del caso madrileño <sup>(33)</sup>. En Andalucía por su parte, y luego de unos primeros contactos de Pilar Miró con Rodríguez de la Borbolla en todo momento camuflados ante “la” opinión pública, el gobierno autónomo aprobaba finalmente (a primeros de marzo del 88) la creación de un canal autonómico *separado* de RTVE: lo que no pudo Escuredo lo hacía ahora quien habría propiciado el proyecto (y jugado la baza) de la federación de terceros canales a partir de TVE.

La situación en política autonómica de TV desemboca finalmente, en noviembre de 1988 (mes en que se publica por fin el PTP), en la **reunión de Sevilla** -que allí fuese retiene su importancia. Es entonces cuando se impulsa por los máximos responsables de los canales autonómicos, ya constituidos (ETB, TV3, TVG) o por constituir de inmediato (Canal Sur, TeleMadrid, Canal 9) y cada quien obedeciendo a sus particulares motivaciones, la *Federación de Organismos Públicos de RTV Autonómicos (FORTA)*. Los canales “pesados” retomaban así, “para un mejor logro de sus objetivos”, una idea federativa -aun cuando la rehuyesen, al preferir hablar del interés común por “agruparse”- que inicialmente cabía atribuir, sin embargo, al modelo de TV autonómica hipotéticamente “alternativo” al por tales organismos representado <sup>(34)</sup>. La cuestión es de las que importan para detenerse en ella, en todo caso, con carácter previo al tratamiento en profundidad del caso valenciano. No siendo matización menor, a mi juicio, recordar cómo si Richeri entendía la *TV federativa* como “un posible desarrollo de la TV autónoma (en el sentido) de una red televisiva nacional que surge en base a la coordinación y la cooperación de ideas y producciones, organizativa y financiera, de las distintas TV autónomas regionales” (al estilo ITV 1, pero desde el sector público: más cercano, así, al modelo alemán) <sup>(35)</sup>, según la propuesta de Stephane sería la *TV autonómica* (pesada) la que identificase “un paso más” respecto de la federativa. Con la puesta en pie de FORTA, sin embargo, tal distinción se posponía a un entendimiento más pragmático de las relaciones entre uno y otro “modelo de referencia”, configurando en España un modelo coexisten-

cial entre ambos -de TV autonómica- en paralelo a la institucionalización de similar coexistencia entre TV pública (como un todo) y TV privada.

Los firmantes del acuerdo de Sevilla (Salvador Domínguez, por RTVA; Joan Granados, por CCRTV; Josu Ortuondo, por EITB; Abilio Bernaldo de Quirós, por RTVG; Javier García, por RTVM, y Amadeu Fabregat, por RTVV), no entran, de hecho, en aquellos puntos “que puedan provocar discrepancias: la forma jurídica, las obligaciones económicas, la estructura del órgano que se crea y la representación en él de cada parte. El espíritu del documento -por contra y como señala Fernando Monar- es de total apertura, buscando avanzar (...) y también su letra, ya que el último párrafo se dedica al acceso de nuevos componentes”<sup>(36)</sup>. Por eso mismo queda claro, desde entonces, que se abre una nueva época en la historia de las TV autonómicas: no tanto -o no exclusivamente- por la trascendencia económica indudable que subyace a los acuerdos puntuales que de él puedan derivarse (sin ir más lejos la incorporación a la UER, a efectos de abaratar la compra de imágenes internacionales, así como la eventual alternativa a la dependencia de Berlusconi que la propia FORTA podría representar como “pull” de compras), sino por su propia filosofía. Una filosofía que, de entrada, daría pie al referido estudio de Coratel, sin duda con la pretensión de converger hacia el esquema de colaboración (entre los dos grandes “modelos tendenciales” de TV autonómica en España) propiciado por los “grandes” en Sevilla, y por tantos motivos llamado a ser de gran trascendencia para el futuro de un hipotético *modelo global* de los canales autonómicos (entre los que ciertamente predomina el color político socialista, pero en convivencia con los nacionalistas ‘históricos’ del PNV y de CiU).

En cuanto al contenido operativo de la FORTA (combinación de siglas con sabor a catalán y sintomática de sus intenciones cara al futuro), la propia constitución de los 6 grupos iniciales de trabajo y su coordinación recayente en un organismo distinto dejaba entrever el amplio abanico al que se aspira, cuando menos, atender. Tales grupos evaluarían: el desarrollo legal de la “agrupación”, por la comisión estatutaria y jurídica (RTVA); la compra de derechos: producción ajena, etc (EITB); comercialización de programas y servicios (RTVG); la comisión técnica, de los problemas de red, satélite, etc (CCRTV); de las corresponsalías comunes, programas en cadena y similares de programación conjunta (RTVM), y, por lo que a RTVV tocaba, de los “asuntos varios”: audiencias, formación profesional, etc.

La Federación se establecería formalmente en la reunión celebrada en Bilbao el 5 de abril de 1989, fijando sede provisional en Madrid, turno rotatorio para su presidencia y pactando para su financiación “la existencia de tres presupuestos diferentes: el ordinario, que será sufragado en un 30% a partes iguales y un 70% de acuerdo a la población de cada una de las autonomías. Al mismo tiempo existirá un presupuesto extraordinario, que será cubierto por los criterios de población, y un presupuesto especial para aquellos casos en los que alguna de las autonomías no se muestre interesada” (Levante, 6-4-89).

En el capítulo de logros, y más allá del “pulso” ganado en su día a la propia TVE en materia de retransmisión de partidos de fútbol (liga 89/90), la concordia parecía ser por fin, en mayo de 1990, la clave relacional entre RTVE y las 6 emisoras públicas integradas en la FORTA. Joan Granados sin ir más lejos, director general de CCRTV (y como tal, quizá el máximo exponente del anterior clima enrarecido), declaraba en vísperas de la asamblea general de Eurovisión, tras las palabras

conciliadoras de García Candau y Diego Carcedo (representante de TVE ante la UER), que la exigencia estatutaria de la organización europea de que las cadenas autonómicas “deben tener carácter e importancia nacional” estaría conseguida <sup>(37)</sup>. De otra parte, González Sinde -nuevo director general de TeleMadrid y presidente por turno rotativo de FORTA en el momento en que se escribe- confirmaba la estrategia de esta última al señalar que “nuestra idea es que, juntos, podemos ser una TV muy importante y que de uno en uno sólo haríamos TV regional (...) A partir de ahora vamos a pasarnos programas de unos a otros (...) Esta interrelación nos ha llevado también, por ejemplo, a buscar nuestros propios estudios de audiencia, a pensar en un programa de música y entrevistas producido entre todos, y ahora ha surgido la idea de hacer, con el resto de las autonómicas, un informativo común para emitir a última hora de la noche” <sup>(38)</sup>.

Pero todo ello sucede, es preciso insistir, en coincidencia con el paulatino despegue de los 3 nuevos canales privados de TV (y de ámbito estatal, cabe añadir), que vienen a sumarse a aquellas otras opciones (no por ‘menores’ inexistentes) previamente disponibles para los fanáticos del ‘mando a distancia’, en su desigual acceso a otras emisiones bien distintas: ya aquellas ‘transnacionales’ captadas -por quien puede y quiere- mediante antenas parabólicas de diámetro y coste cada vez menor, ya esas otras ‘dependientes’ de una industria videográfica inusualmente potente como la establecida hasta la llegada de las privadas en España y distribuidas mediante un cableado -en no escasa medida obsoleto y tecnológica y ecológicamente deficiente- en el que se apoyan algunas TV locales y desde luego la mayoría de los vídeos comunitarios que tan desigualmente se reparten en el territorio, no menos obedientes a intereses comerciales y/o políticos casi siempre inconfesados y desde luego alegales.

Sea como sea, ya no cabe ignorar que toda salida para la TV pública en España pasa por una clarificación (en la práctica política) del modelo de Estado -autonómico- y de la política de comunicación posible desde aquél, sobre todo en el sentido de posibilitar realmente la consecución de un fin compartido por todos (publicistas y privatistas): la democratización del sistema comunicativo *global*. De ahí la reivindicación por muchos, entre ellos también los representantes de las TV autonómicas ya en marcha, de que el debate (actualmente en Cortes) sobre la reforma del Estatuto de RTVE sirva, con similar perspectiva de “globalidad”, a las necesidades manifiestas en tal sentido. Necesidades que, con las nuevas tecnologías de la información, afectan a su vez por igual a cuantos parecen seguir apegados al medio TV en su modo (convencional o por ondas) de transmisión...

### 1.3. TV PUBLICA *CONVENCIONAL* Y NUEVAS REALIDADES AUDIOVISUALES: ENTRE LA INDEFINICION Y LA AMBIGUEDAD CALCULADA.

En octubre de 1981, la recepción doméstica por satélite (la antena parabólica), el “videomovie” (fotografía magnética), el disco compacto (digital, ya en el mercado español desde junio del 83), el videodisco, la primera generación de receptores estereofónicos de televisión y la TV de Alta Definición (la japonesa de 1.125 líneas, tecnológicamente a punto y a falta tan sólo de una normativa mundial, según su presentación en la IV Conferencia Mundial de las Uniones de Radiodifusión,

Argel/marzo-83)), todo ese paquete tecnológico, era presentado en SONIMAG por primera vez en España. La consecuencia comercial y social será inmediata: de la promoción de la TV en Color se pasa desde entonces a la promoción (masiva) del *video*, y a la más selectiva de las *antenas parabólicas*. De otra parte, durante el campeonato mundial de fútbol España-82 entra en servicio, “reducido” eso sí (centros de interés público y periodistas), el *videotex* español: la CTNE-Fundesco y la Universidad Politécnica madrileña están detrás del proyecto. Como es sabido, los soportes de tal *periódico electrónico* son factibles de inmediato desde el momento en que son “tradicionales”: teléfono y receptor de TV. El *teletexto*, sin embargo, se encontraba menos avanzado: sus concesionarios en territorio español, RTVE y CTNE, seguían sin decidirse en la pugna Thomson (sistema Antiope) frente a Philips (sistema Prestel) para el codificador que, como soporte adicional, habrá que aplicar al receptor de televisión.

Tales eran algunos de los hitos destacados al comienzo de la década de la tecnología aplicada al audiovisual informativo en nuestro país. Como colofón simbólico, 1983 era declarado por la ONU “Año de las Comunicaciones”. Coincidiendo con ello, empresas de 72 países mostraron en Ginebra, el mes de octubre y dentro de la cuarta edición de TELECOM (importante exposición auspiciada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones), sus logros en tecnología avanzada y en especial “equipos de conmutación de paquetes, centrales digitales, sistemas de videotex, cables de fibra óptica, antenas y satélites”. Ya entonces, los visitantes recogían que “la tendencia es a procesar digitalmente toda la información de que se nutre la red de comunicaciones de un país, sea voz, texto o datos, y establecer una red unificada de transmisión, la llamada *red digital de servicios integrados*, que se puede considerar el objetivo ideal actual de los sistemas de telecomunicación en todo el mundo” (El País, 31-10-83).

Llegaba con ello el espaldarazo oficialista a lo que de hecho supone una revolución tecnológica que afectará, en el ámbito de la comunicación “mediática” y en un corto plazo, tanto al plano económico como al cultural y de la propia “ecología comunicacional”: aun cuando las nuevas tecnologías aplicadas a la información social, los *nuevos* medios, no suponen (de entrada) sino un incremento de soportes *audiovisuales*. Incremento de soportes (video, antena parabólica, decodificadores) que contribuyen a la ruptura adicional del monopolio de las TV públicas europeas (en soporte tan “convencional” como las ondas hertzianas), y ello en convivencia -incluso connivencia, según los casos- con el empuje desregulador de los privatistas y el descentralizador ya analizado.

Ese incremento de soportes audiovisuales, por demás, terminará por afectar de manera directa a la prensa escrita. De ahí que las primeras reacciones con resonancia pública aparecieran en la propia prensa. Prensa interesada, por ello, en solventar su particular futuro *multimedia*. No es de extrañar, así, que los cuestionamientos iniciales terminaran por revertir (ante la ineluctabilidad del advenimiento de las nuevas tecnologías) sobre la misma polémica, hasta entonces más o menos larvada, de TV pública vs. privada en el contexto español <sup>(39)</sup>.

Tal incremento de soportes, en cualquier caso, no escapa a la racionalización inherente al sistema económico, y a las políticas de comunicación efectivamente establecidas en cada contexto concreto, en el que nacen y tratan de desarrollarse.

Así en cuanto al video, por ejemplo, en marzo del 83 se celebraba -en Tokio, naturalmente- una reunión de fabricantes para unificar los sistemas de video presentes en el mercado mundial: el VHS, de la firma JVC (representada en Europa por Thomson-Brant), el sistema BETAMAX, de Sony, y el V-2000 de Philips (a la que estuvo a punto de unirse, en la pugna europea frente a Thomson, la firma alemana Grundig). Su acuerdo fue entonces, por lo visto, esperar en Europa a vender la segunda generación de vídeos ya fabricados para comercializar, después, lo ‘‘pactado’’ en la capital nipona: cinta de 8mm, en cassette de 1 hora de duración y tamaño de una musicasette... Con el tiempo (justo con la entrada de la primavera del 88), la inventora en 1975 del vídeo, no otra que Sony, rompería con su propio sistema provocando una auténtica revolución dentro del sector -al Betamax se habrían unido firmas también niponas como Toshiba, NEC o Sanyo- y se pasaría con total pragmatismo al VHS, el sistema por demás impuesto en España. En ello habría jugado su papel, según los especialistas, la compra por Sony, por 2.000 millones de dólares, de la CBS Records estadounidense. Y ello por el mismo motivo que estaría llevando a los europeos a centrarse en el mercado del videodisco, al considerar ganado por los japoneses el del videocasette: el neto dominio cinematográfico por EEUU, que le permite contar con las más completas videotecas (la ‘‘euroesclerosis’’ en esto arranca, quizá, de cierta fijación gutenbergiana, a lo que se ve).

En cuanto al cable y el satélite, de otra parte, que han sido durante la década anterior -de acuerdo con José M<sup>a</sup> Villagrasa- dos de los factores de crecimiento más espectaculares del audiovisual estadounidense, cabe constatar ‘‘la diversidad cultural e idiomática, el fracaso de algunos intentos de introducir la tecnología de los DBS (Direct Broadcasting Satellite) y los enormes costos del cable, así como la apertura legislativa de muchos países en relación a las emisiones privadas’’<sup>(40)</sup> en el caso europeo, lo que habría llevado a un más lento escalonamiento en los desarrollos tecnológicos e industriales de los ‘‘nuevos audiovisuales’’. Las consecuencias de tal diferencia -en EEUU ha existido una industria audiovisual prácticamente monolítica en su perfil hasta finales de los 70, en clara correspondencia con la del mercado publicitario a ella ligado y con el de producción apenas acuciado por la cuestión lingüística, de ahí la rápida expansión del satélite, y aun del cable y la TV de pago- no son consecuencias que se limiten al ‘orden teórico’: así el diagnóstico de que en Europa se hayan ‘‘acumulado de golpe, sin una estabilización progresiva’’, tales transformaciones. Tienen, también, su inmediata traducción ‘práctica’: pues la situación, en Europa, habría contribuido sin duda a ‘‘una audiencia -de nuevo con Villagrasa- poco domesticada, expectante ante los cambios y con unos comportamientos poco fieles de consumo (...) Las barreras lingüísticas, culturales y de hábitos cotidianos no facilitan precisamente los proyectos de TV pan-europea (...) La demanda de nuevos espacios coincide con la pérdida de audiencia de las grandes cadenas tradicionales (con la consiguiente caída de los ingresos publicitarios) y el crecimiento, debido a la competencia, de los costos de producción. Una espiral económica que ha generado un amplio mercado de coproducciones, la multiplicación de productoras independientes y la creación de alianzas y consorcios internacionales para amortizar en varios frentes las inversiones’’ (ibídem).

El caso español, en la práctica, y mucho más -en el ritmo de adaptación exigido, cuanto menos- conforme avanza a más vivo ritmo el proceso de apertura al exterior derivado del Tratado de Adhesión y los compromisos complementarios inherentes al Acta Unica europea, tampoco escapa a la presión tecnológica, como ‘‘prima causa’’ para remover el actual modelo audiovisual en España toda. El desarrollo antepuesto al cable de la teledifusión por satélite -no precisamene de espaldas a la lógica del mercado, como se ha señalado- es buena muestra de ello.

Es imprescindible, en ese sentido, retomar el Plan de Actuación que para RTVE se elaborase en el umbral del “cambio” prometido por los socialistas (plan “para TVE” por ser entonces *la* TV única en España, pero que sigue siéndolo todavía en el sentido de TV “de referencia dominante”). Un plan claramente recorrido por el acto tecnológico y que definiese Antonio López como primer director socialista de TVE tras las elecciones de octubre de 1982, en principio con carácter cuatrienal (válido sin embargo todavía hoy, pues el parón en el ecuador de los 80, a la vista de una expectativas de integración pronto aceleradas, obedeció antes que nada al interés por entroncar con los planteamientos de la CE). Plan plurianual, casi para toda una década a la postre, que se concretó desde entonces (con la anunciada “reestructuración funcional y administrativa” de TVE como telón de fondo) sobre los siguientes puntales:

- Desarrollo del teletexto.
- Potenciación de la TV autonómica.
- Automatización progresiva de la Red de TV.
- Desarrollo de la TV por cable.
- Satélite español (TDS más otros servicios).

Los resultados pronto dejaron ver cuanto aquí se viene insistiendo: la presión tecnológica en materia audiovisual no se da en el vacío, no se da con independencia de la voluntad política y de los condicionantes de partida, tanto sociales como económicos (recuérdese que hablamos, ante todo, del papel de la TV pública en un “modelo” sometido a revisión con carácter global). De manera que la mayor lentitud en la respuesta del sector público, frente al privado, ante la “presión tecnológica” sobre dicho modelo retroalimenta el proceso y (ante las nuevas realidades) suele traducirse en la mayor tardanza adicional -en la práctica- por resolver, jurídica y políticamente, dicho reto. Es así, que cabe constatar de entrada:

1. El desarrollo efectivo del *teletexto*, tras al periodo de pruebas del Mundial de fútbol-82, se demoró hasta 1987 (luego de entrar en la CE y acometer desde ahí la necesaria convergencia normativa y tecnológica). Con otros mundiales de fútbol, los de Italia-90, y tras la entrada en vigor de la LOT que liberaliza determinados “servicios finales”, se lanza a su vez la campaña para un acceso masivo al nuevo sistema de *videotex* (Ibertex B).
2. La *descentralización* de TVE se vió pronto sometida a la presión institucional “inesperada” en los casos vasco y catalán, con carácter previo incluso a la aprobación de la ley del Tercer Canal que propiciaba el Estatuto de RTVE. De igual modo que los centros regionales de la propia TVE padecían las iniciales inconsecuencias implícitas al proceso autonómico en sí, con el asalto al Congreso de por medio (febrero 81) y hasta la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA (verano 83). Finalmente, un proceso y otro acabaron dándose la mano -ya se ha visto anteriormente- para dar una vuelta de tuerca más en la complejidad del papel de las TV públicas (central y autonómicas) a la hora de configurar el nuevo sistema televisivo español global.
3. La *automatización progresiva de la Red de TV*, en parte por lo anterior, jugó finalmente la baza de “comodín”, con valor de uso (político) y de cambio (económico), en el desarrollo y posterior resolución tanto de la polémica TV pública vs. privada cuanto de la ‘ruptura’ descentralizadora que protagonizan los canales autonómicos de TV pesada, replanteándose

finalmente a través de la actual Retevisión.

4. Finalmente, y delimitando el nuevo reducto de dicha polémica -todavía, por tanto, irresuelta del todo- los hechos o las “leyes del mercado” (si así se quiere) vienen apuntalando el desarrollo de la *TV por satélite* y el desamparo aparente de los desarrollos audiovisuales ligados al *cable*. Con la importante “nueva realidad” de los videos comunitarios y las TV locales, cuyo papel es más ambiguo que clarificador, al respecto. La nueva legislación sectorial (la LOT) no resuelve, en ningún caso, la perspectiva global que hubiera sido deseable al respecto; el proyecto del satélite español “Hispasat” se ha desatascado, con todo, y la anunciada normativa sobre las TV locales confirma la tendencia a una legislación “caso por caso”...

Conviene, no obstante, reparar más en detalle en las grandes cuestiones que persisten cara al futuro:

Del **teletexto**, por lo pronto, sus expectativas, cada vez más cerca de equipararse a sus realizaciones. Algo ya sabido, pero sabido por los menos: razón por la cual importa retener aquellos datos que, sin duda, también importan para el modelo de TV valenciano por llegar. Sintetizamos:

- TVE ha resuelto ya el dilema y de acuerdo con Telefónica ha optado por el sistema Uk de patente británica (usado tanto por la BBC -Ceefax- como por la ITV -Oracle-), desechando a su gran competidor, el sistema francés Antiope.
- El retraso en su implantación, retraso posible por su privilegiada “posición de partida”, le ha permitido incorporar la tecnología de nivel 1.5, superior a la de nivel 1 que impera en la mayor parte de Europa occidental (España, junto con Portugal y Grecia, era hasta hace bien poco uno de los 12 que no contaba con teletexto).
- La mayor capacidad de transmisión y mejor definición del producto inherentes al nivel 1.5 se traduce, desde el lado de la recepción, en la necesidad de un televisor adaptado -ya comercializándose- para tal nivel de teletexto (los primeros importados estaban preparados tan sólo para el nivel 1) o bien la adquisición de un decodificador que incorporar al televisor normal y cuyo precio rondaría las 15.000 pesetas.
- El servicio de TVE arrancó en 1987 con una oferta de 3 gacetas: de actualidad (información de última hora, general de actualidad, noticias económicas y deportes) con potencial de llegar en el futuro hasta las 40.000 páginas simultáneas (frente a las 800 iniciales).

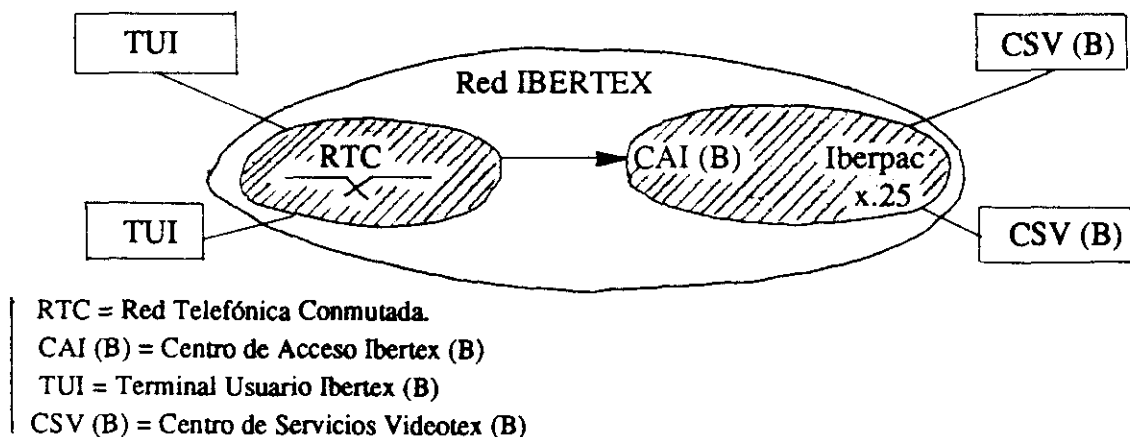
Pero nos importa retener aquí, de entre sus posibilidades, la prevista introducción de una 4ª gaceta, que será de ámbito territorial y destinada a cubrir la información local. Ese dato, junto a la capacidad del sistema Uk para escribir en todas las lenguas del Estado e incluso de reproducir -previa digitalización- dibujos y fotografías, es elocuente de la capacidad de maniobra en manos de TVE a la hora de definir el papel a jugar por el teletexto en el modelo de TV públicas por acoplar en el tiempo (TVV incluida, por tanto). No por casualidad, el servicio es de momento gratuito..., si bien no se ha descartado la inclusión de publicidad.

Recordemos que el teletexto tiene sin embargo, desde enero del 88, configuración jurídica de "servicio de valor añadido" y queda abierto -con arreglo a la LOT- al régimen de libre concurrencia. De ahí que no fuese casual el uso del teletexto para apoyar las emisiones convencionales de Televisión (TVE ya estudiaba la posibilidad de subtítular para los sordos la por entonces película de los viernes). Y, de igual modo, si es posible establecer convenios con la UNED para sus aplicaciones en educación (como así lo preveía TVE) pronto se empazaría a definir sus aplicaciones a la economía (información continuada sobre bolsa, por ejemplo) y al denominado "tele-software" (recepción de programas diversos en conexión con el ordenador personal). Algo, esto último, muy extendido ya en nuestro entorno europeo: y que nos lleva al interrogante clave de su financiación, ya vía publicidad ya como "televisión a la carta" (y por tanto de pago).

Son campos de actuación en todo caso, que afectarán -por vía complementaria o sustitutoria- a las relaciones futuras de TVV con TVE, de entrada, y a las TV públicas en su conjunto con el "multiuso audiovisual" que sin duda perseguirán ofertar las TV privadas.

En cuanto al servicio **videotex** (VTX), implantado con carácter de servicio público en España a iniciativa de la Administración central e impulsado por Telefónica desde 1978, es un servicio interactivo de mensajería telefónica que permite el acceso a bancos de datos especiales (cuentas financieras, reservas de viaje, tele-información, etc). Desarrollado a partir de dos tecnologías 'clásicas', como son el teléfono y la TV, se retomará en 1986 con el nombre de Ibertex (por frenazo similar al sufrido por el teletexto con motivo de las expectativas de ingreso en la CE).

El VTX actual, denominado **IBERTERX-B**, intenta interiorizar el ejemplo del "Teletel" francés <sup>(41)</sup> si bien, a diferencia de aquél (4 millones de abonados en 1989), basa su promoción desde Telefónica no en función de terminales gratuitos y de bancos de datos "sin discriminar" sino en función de captar inicialmente a grandes clientes (tipo banca privada, El Corte Inglés, empresas públicas como Tabacalera, Renfe, Cetesa, etc) y de "discriminar" de hecho los posibles centros de servicio que deseen enganchar sus bancos de datos. Los componentes básicos del servicio y la topología de acceso quedarían quintaesenciados en el siguiente gráfico:



Fuente: José M<sup>a</sup> Busquets. Rev. "Datamation", 1987.



La liberalización, sin embargo, de los terminales VTX (no sólo no es necesario un modem especial de la CTNE, sino que, a ejemplo del Teletel francés, ya es posible vía PC's mediante tarjeta y no necesariamente vía TV), a lo que cabe sumar la independencia de contrato o cuota de ningún tipo y una facturación realizada por Telefónica según los diversos niveles de acceso, ha contribuido, quizá, a mermar la posición inicial de fuerza que implicaba para RTVE (y para otras TV's) el uso del televisor. Y tras la reciente implantación piloto en Barcelona y Madrid, el intento de captación masiva a que obedece la campaña iniciada coincidiendo con los mundiales de fútbol de Italia-90 hace presumir la intención, por parte de Telefónica, de no hacer depender el uso más generalizado del Ibertex B de la actual indefinición del sistema audiovisual español. De hecho, en nuestro ámbito cercano, se sabe de la intención de la Cámara de Comercio valenciana y del IMPIVA por poner en marcha este mismo año (1990) un servicio de videotex destinado en principio a las Pymes, como usuarios potencialmente más interesados en acceder -dado el contexto valenciano- a la información de ambas instituciones <sup>(42)</sup>, a las que podría sumarse en un inmediato futuro el Instituto Valenciano de Estadística.

De otra parte, **la automatización progresiva de la Red** ha sufrido el retraso -económico y político, o viceversa- que ha conllevado la resolución final de la polémica TV pública vs. privadas (convencionales). Con el proyecto de Ley de TV Privada todavía en Cortes, se resaltaban ya por la dirección de la red de difusión (todavía adscrita por entonces a RTVE) algunos datos básicos:

- Para que las tres emisoras privadas previstas pudiesen emitir en un primer momento, era preciso instalar una veintena de transmisores y sistemas radiantes, con una inversión superior a los 6.500 millones de ptas. Dicha instalación, que en todo caso habría de ser simultánea para las 3 cadenas, no quedaría ultimada antes de 1989. E incluso podría dilatarse en el tiempo, de cumplirse el compromiso del Gobierno de solicitar a la industria nacional la provisión de la tecnología de difusión pertinente, a fin de estimular el desarrollo de un sector considerado estratégico.

- La segunda fase propuesta de adaptación de la red de RTVE, para incrementar el acceso a las TV privadas de una audiencia del 50% al 60% aproximado, supondría otros 6.000 millones de pesetas. Y para alcanzar el 70% de la población española, en una tercera fase de transformación de la red que supondría la instalación de 200 centros (emisores y reemisores), el desembolso adicional superaría los 8.000 millones de pesetas.

Dado el alto coste de las 3 fases previstas desde un principio (unos 20.000 millones, a financiar por los Presupuestos Generales del Estado y los de RTVE, tal y como preveía el estudio ya referido del equipo económico de Pilar Miró) y junto a los problemas derivados de las incompatibilidades radioeléctricas (con la casuística ya planteada por ETB-2 en el País Vasco), aumentar ese 70% de la audiencia obligaría a una costosísima redistribución de los centros emisores de la propia TV pública -según diversos expertos en telecomunicación- con lo que entre el 30% de los españoles que durante años no podrían acceder a la programación privada (convencional) se encontraría a buen seguro el 11% que ya hoy no puede acceder al segundo canal UHF. El dato no era baladí, máxime cuando era precisamente el canal en cuya banda de frecuencias pensaba darse paso a las TV autonómicas por llegar (TVA, TVM y TVV), afectando por demás a las zonas de

sombra ya tradicionales en el País Valenciano.

El Plan Técnico de TV Privada (PTTP), que según el ministerio de Transportes y Comunicaciones sería simultáneo a la aprobación definitiva del proyecto de Ley de TV privadas, se demoraría hasta la publicación del Real Decreto de 11 de noviembre de 1988. Y por el mismo procedimiento legislativo (R.D. de 19 de mayo de 1989) se constituía, medio año más tarde, el “Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión” (RETEVISION), integrando la red terrena de RTVE: 60 centros emisores con capacidad para dar cobertura al 70% de la población, con 850 reemisores que pueden llegar a cubrir el 96% de la población española.

Si el primero confirmaba la demarcación de las 10 zonas territoriales ya referidas, lo que habrá de suscitar sin duda -por razones obvias- más de una discusión política en el futuro, el segundo despejaba la controversia suscitada entre Transportes y Telefónica por el control de la renovación tecnológica prevista en el propio PTTP (que optaba por el uso como soporte de la red hasta entonces de RTVE, señalando que la tecnología a emplear sería la digital -en la perspectiva de las futuras RDSI- y apuntaba la necesidad del recurso transitorio al alquiler de los servicios de un satélite para facilitar el comienzo de las emisiones privadas). De otra parte, en el PTTP parecía imponerse el criterio de que la primera fase de acondicionamiento de la red (de las 3 fases previstas, según el Cuadro anexo) abarque a la totalidad del 50% de la audiencia prevista, sin aceptarse sin embargo la alternativa (obediente a criterios de financiación publicitaria) de escalonar el inicio de las emisiones privadas empezando por Madrid, Barcelona... y la Comunidad Valenciana. No obstante, ello se zanjaba, con la creación de una Retevisión adscrita al ministerio de Transportes (desarbolando las pretensiones de RTVE por continuar con su control), colocando al frente de su consejo de administración al propio director general de Telecomunicaciones (Javier Nadal) y apostando finalmente por el uso prioritario de la comunicación por satélite, razón esgrimida por el ministerio en apoyo al proyecto Hispasat (frente a las pretensiones de Telefónica por la introducción de la fibra óptica en la red de Retevisión, en paralelo al mantenimiento de su posición como concesionario español en los satélites Eutelsat e Intelsat). En esa disputa “a tres patas”, por parte del sector público o semipúblico (Transportes-RTVE-Telefónica), no resultarían ajenos intereses privados tan significados como los de la industria aeroespacial nacional e internacional así como los (por entonces) aspirantes a la TV privada <sup>(43)</sup>.

(Cuadro anexo):

PTTP	Territorio cubierto	
<i>1ª Fase:</i>	<i>Subfase 1ª</i>	<i>Subfase 2ª</i>
	Madrid	Alicante
	Barcelona	Cádiz
	Bilbao	Córdoba
	Zaragoza	Granada
	<b>Valencia</b>	Las Palmas
	Sevilla	Murcia
	Málaga	Tenerife
	Mallorca	Valladolid
	Vigo	
	La Coruña	
	Oviedo	
	Badajoz	
Población cubierta:	(hasta 35%)	(hasta 50%)

*2ª Fase:* Todas las ciudades de más de 100.000 habitantes y todas las capitales de provincia restantes.  
Población cubierta: (hasta 60%)

*3ª Fase:* Abarcará 200 puntos de los cuales 80 serán reemisores (alcanzándose el 70% de la población), y a los 120 restantes (hasta cubrir el 80% de la población) se les suministrará señal primaria vía satélite.

Fuente: R.D. 11-11-88.

Tras la cobertura de Madrid y Barcelona en 1989, informaciones diversas señalan que el resto de la 1ª subfase se hará en 1990 (así ya Valencia), durante 3 años se harán la 2ª subfase y la 2ª fase, iniciándose la 3ª fase en 1994. De ser un éxito el proyecto Hispasat, no obstante, todos los plazos podrían acortarse a finales de 1992.

El acuerdo firmado por Joan Lerma y Pilar Miró con anterioridad a ambos Reales Decretos, en febrero de 1988, para la reforma y ampliación de la red básica de RTVE supuso, en ese contexto, un notable ahorro, de entrada, para el sistema audiovisual como un todo (no sólo para el público). La red sería a compartir por RTVV en su ámbito de difusión previo pago de un canon anual (de hecho no se pagará durante al menos tres años, sino que por tal concepto se vienen adelantando por la Generalitat las inversiones precisas para tal reforma y ampliación). Pero la cooperación suponía y supone algo más: no sólo permitirá "cubrir al 100% los principales núcleos urbanos de la Comunidad a finales del 88" -Mª García Lliberós así lo aseguró- sino que, ante todo, suponía y supone un respiro de *tiempo* adicional -y no es poco- en un proyecto (RTVV) que nacería a notable destiempo respecto de las privadas inmediatamente inauguradas.

De todos modos, la filosofía del “retraso como ventaja” (caso del teletexto para TVE o del uso compartido de la red pública por RTVV) no es filosofía que quepa aplaudir pues que el “modelo coexistencial” por venir conlleva en sus entrañas sus propias reglas: y bueno será no descuidarlas procurando, antes bien, interiorizarlas, cada uno a su manera -todos y en todo caso- con la intención de ganar tiempo al tiempo. La pugna que se intuía aun antes de 1990 iba a provocar reacciones, no en vano, tanto por TVE como por parte de TV-3, que habrían de traducirse en territorio valenciano en términos menos amistosos, sin duda, a los hasta entonces conocidos (de ahí la polémica TVV-TV3, como traducción inmediata que fue del trecho que separa las meras declaraciones de apoyo, mejor o peor intencionadas, al encontronazo darwiniano entre proyectos no precisamente “proteccionistas” ya en materia de programación ya, ante todo, en asunto de financiación).

Pero el reto de mayor calado para la RTV pública (como por otra parte para la TV privada) y al menos por lo que hace a las “posibilidades de generar usos alternativos desde el presente condicionante”, se centra desde la década anterior en el posicionamiento -a no demorar por la vía de los hechos- en relación con los **“nuevos desarrollos” ligados al satélite y al cable** (entre otros). La irregular y “callada” implantación de TV locales y videos comunitarios, en los años 80, viene evidenciando lo soterrado e interesado de dicha pugna en unos momentos en que la ventaja adquirida de la televisión -directa o semidirecta- por satélite (Canal 10 fue sólo un ejemplo) era y sigue siendo más que notoria.

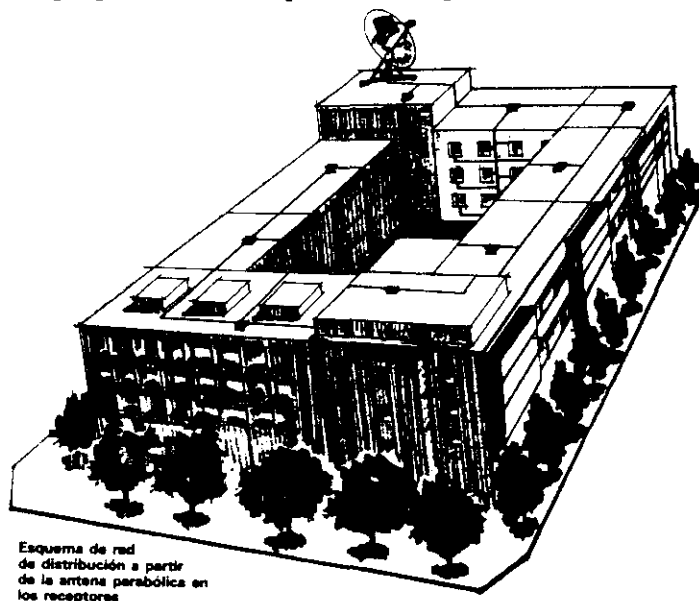
Es llegados aquí que cabe interrogarse sobre el sentido último -y sus limitaciones inmediatas- de la relativamente reciente Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. Cuando cabe preguntarse, así, sobre el sentido último de la autocritica formulada por la diputada socialista Ana Balletbó, quien ya en 1988 afirmaba, en unas jornadas sobre la Reestructuración del Modelo Televisivo en España celebradas en Barcelona, que la Ley de TV Privada nacía de hecho con dos lagunas importantes: la regulación del cable y de las TV locales; a lo que añadir su “premonición” particular: “La ley permitirá la incautación de los equipos que emiten sin legalidad y, en este sentido, las que peligrarán más serán las emisoras locales privadas” <sup>(44)</sup>. La reciente filtración, a través del diario “El Sol” (7-6-90), de que las TV’s locales se circunscribirán a ciudades de más de 100.000 habitantes y de que no podrán emitir en cadena (el fantasma de la ‘estrategia Berlusconi’), no hace sino confirmar las intenciones socialistas de apostar antes por la prohibición de hecho que no por otras vías alternativas en los ámbitos más proclives a un hipotético “plus” efectivo en la comunicación institucionalizada...

Las presentes realidades, no obstante, remiten de modo más acuciante a la “batalla del satélite”, cuyo papel preponderante alcanza incluso a ejercer hasta de árbitro en otras batallas no menos cercanas (como la del video). Porque, a efectos de implantación cotidiana, se sabe ya que el video -desde el lado de la producción- se perfila como “la futura tecnología del cine”, cine que depende cada vez más para su difusión masiva de su hermanamiento con la TV (tanto convencional como ahora, por satélite): así se reconocía explícitamente, en julio del 87, en el Festival de Cine de Barcelona. Y lo que aún es más importante, pues condiciona el uso social de la nueva tecnología: desde el lado de la recepción se sabe a su vez de la creciente implantación de los videos comunitarios, pero se ignora todavía la resolución final de la batalla del sector por los importantes condicionantes de tipo legal y económico que subsisten, pese a la LOT:

- jurídicamente el Tribunal Supremo avaló en enero del 87 el fallo previo de la Audiencia de Sevilla, considerando su legalidad al amparo del art. 20 de la Constitución (al no dirigirse su programación al público en general). No obstante los agrupados en la Asociación de Empresarios de Videos Comunitarios (Avideco), con centro en Sevilla, así como los de la Asociación Española de Videos Comunitarios (Avocp) de la zona centro, cuyo foco sería Fuenlabrada, se autodefinieron como "TV privada" en su primera emisión en cadena, en diciembre del mismo año: pero tanto la LTVP como la LOT (que constriñe el ámbito de tales videos al estricto de una manzana de viviendas) ponen en cuestión, sin embargo, la claridad necesaria al respecto.

- desde un punto de vista económico, por otra parte, la Federación Antipiratería (FAP) que aglutina a productores y distribuidores cinematográficos y videográficos, ya estimaba ese mismo año un perjuicio mensual derivado de la implantación de aquéllos que rondaría los 400 millones de pesetas: con la LOT ya en la mano y sobre todo, con la Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor en noviembre del 87 (y el decreto del ministerio de Cultura, que obligará al control de la exhibición legal de las cintas), la batalla económica se recrudeció aun antes de la llegada definitiva de las TV privadas (claras apostantes, de entrada, por el 'hermano' cine).

La emisión en cadena de los comunitarios fue debida a la "reestructuración obligada de la programación" por tales motivos (más del 90% del tiempo de emisión eran cintas de cine)... Siendo la penúltima gran "pelota en el tejado" la oferta en su día de Canal-10 para que dicho canal por satélite pusiese éste y los programas (la emisión televisiva legalizada por tanto) y los videos comunitarios el cable, convirtiéndose en meros operadores comerciales. A cambio, evidentemente, de una cantidad económica" (45). La peculiar consideración de Tele-Elx como paradigma del "video comunitario de éxito" -comercial no en última instancia: 25.000 abonados, que pagan cuota mensual de 1.000 ptas, cuota que se habría triplicado en la operación finalmente fallida de "blanqueado legal" propuesta por Canal-10-, auguraba en todo caso -y para un ámbito bien próximo a nosotros- eventuales coberturas en similar sentido a partir de quienes comparten su existencia desde similares posiconamientos jurídicos (TV privada, especialmente aquella más cercana a fórmulas de "peaje" o apostante en un futuro por el satélite *privado*). El "esquema de distribución", cuyo gráfico se adjunta y que el propio Canal-10 publicitaba por entonces, resulta elocuente de semejantes posibilidades:



Fuente:  
"Canal 10", nº 4,  
abril 1988.

No en vano, si los videos comunitarios han de afrontar la compra de derechos de emisión, su programación tendría que dar entrada masiva a la publicidad para mantener tal cuota -incluso sin pensar en los problemas planteados- y es aquí donde recobra un sentido específico las “previsiones” de la socialista Balletbó, con el riesgo en todo caso de ver limitada su lista de abonados, ya por aquéllos que prefieran directamente el satélite ya por aquellos otros que juzguen menos atractiva la programación más comercializada... Con todo, es conocido que Canal-10, pese al esfuerzo inversor en publicidad e imagen, apenas pudo disimular su escasa penetración en nuestra Comunidad (unos 3.000 abonados en febrero de 1987 en el área metropolitana de Valencia), contando además con la exigencia negativa de tener que dirigirse a grandes edificios para rentabilizar el desembolso exigido a los usuarios para la instalación de la parabólica precisa -y de los oportunos decodificadores. Poder contar con el cableado tendido de hecho -aun a la sombra de la ilegalidad y de su obsolescencia tecnológica y aun ecológica- por empresas como Tele-Elx o Mundi Cable, por ejemplificar, aliviaba así costes de penetración para dicho Canal, como lo aliviaría para otro(s) en el futuro -quizá- de contar con un cableado más “homologable”... Se trataría, por tanto, de una cooperación para la “mútua ganancia” (tanto jurídica cuanto económica), pero sin despejar las dudas, no obstante, en cuanto al control futuro de una programación que -entre otras cosas- puede entrar en el posicionamiento político -y tal vez de ahí ciertas reticencias hacia una *fórmula de distribución*: satélite + cable, llamada a tener éxito en un futuro.

Pero retomemos la “batalla del satélite” en aquellos aspectos más tangibles. De entrada, aquellos que tienen que ver con el uso (económico y social) efectivo. Porque pese a -o además de- constatarse que el incremento de la oferta tampoco en este caso se corresponde con una variedad de la programación en consonancia, y sí con la tendencia creciente hacia la “TV de peaje”, el mercado de las parabólicas (como oferta inducida) pronto iría a más al amparo del R.D. 1201 de 6 de junio de 1986 y sumaría a la presencia de distribuidores extranjeros en España algunas empresas nacionales fabricantes: Tagra, Miert Allende, Televis, Sintel y la pública Pesa (inicialmente ligada a Cosesa-CTNE y finalmente absorbida por Amper). Las dos primeras por cierto, con sede en Barcelona y Badalona, así como la tercera, con sede en Santiago de Compostela (Pesa tiene domicilio social en Madrid, así como el resto de comercializadoras no fabricantes), ejemplifican bien el “tirón” de oferta inducida en parte atribuible a la aparición por esas fechas de TV-3 y TVG, rápidamente aprovechado por las “leyes del mercado”...

Se sabe de otra parte, por el lado de la demanda, que el factor “idioma” resulta determinante en el uso: las preferencias de los españoles parecen decantarse en la actualidad hacia la mexicana Televisa, como antes de su llegada hacia los canales de la RAI (la afinidad idiomática es clara) y hacia los canales en inglés y francés (para iniciarse o perfeccionarse en tales idiomas o para ver películas en versión original); los abonados a canales alemanes son los menos. Y un dato, particularmente relevante para el modelo de TV valenciano que quepa pensarse: los satélites Intelsat y Eutelsat “sirven también de vehículos para otros programas en sueco, danés y holandés que son sintonizados en algunas urbanizaciones y zonas de vacaciones que frecuentan ciudadanos de estos países” (El País, 21-2-88).

La “insensibilidad notable frente a la posible puesta en marcha de las nuevas tecnologías” que ya en 1984 remarcase Antonio López, ex director de TVE y actual director de Amper, parece seguir presente, en todo caso, por lo que al cable se refiere -incluso si tal insensibilidad la referimos en exclusiva a los expertos y/a la clase dirigente más implicada. Pero no así en lo referente a la

teledifusión -directa o semidirecta- por satélite. A este respecto, no sólo hay menos sombras técnicas -ya en 1984 empezaban a ser menos a nivel europeo-, sino que se han disipado no poco otras sombras político-administrativas y jurídicas -aunque no totalmente, como vengo sosteniendo.

Así, con el horizonte 92 a la vista, han quedado definitivamente atrás las dudas que arrancasen del estudio que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) realizó para RTVE, sobre la posibilidad de un satélite español, el Hispasat ya en desarrollo, y despejadas a su vez las pretensiones de la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas (Aniel) para que el Gobierno evitase que el asunto fuese “de exclusivo interés de RTVE” e implicase a ésta en un consorcio con varios ministerios (Transportes, Industria, Defensa), la CTNE y lógicamente Aniel. Por contra, están presentes las opciones gubernamentales en la materia y no sólo las jurídicas (el R.D. sobre antenas parabólicas del 86, la LOT de finales del 87, el R.D. de mayo de 1989 sobre Retevisión en relación con el PTP) y aquellas otras opciones más directamente ligadas al sector privado (la polémica y por fin frustrada intentona de Canal-10, la apuesta del grupo empresarial español que encabeza Massó confinanciando el proyecto más importante de satélite europeo, etc).

Desde el sector *público*, en efecto, se sabe de la decisión del ministro Abel Caballero proclive al reestudio del proyecto planteado por el INTA tendente a desarrollar un satélite TDS español (estudio centrado en cómo afrontar su costosa amortización, pensándose inicialmente en la cooperación con Irlanda y Portugal, cuyos intereses entroncarían con las condiciones territoriales de la órbita geoestacionaria de dicho satélite). En febrero de 1985, una Comisión especial para las Comunicaciones Espaciales (Administración central, RTVE, CTNE y Aniel) desaconseja la puesta en marcha del “Rodrigo de Triana”, por demanda y retorno tecnológico insuficientes, y “que se regule la recepción, emisión y comercialización de las señales por satélite” <sup>(46)</sup>: es la antesala del *decreto de las parabólicas* de 1986, ya mencionado, que se circunscribe finalmente a la recepción y comercialización en territorio español de tales señales (y al que se acogerá Canal-10 con posterioridad).

Con el ingreso en la CE las cosas cambian, a la vista de los programas en I+D que en dicho contexto sobresalen por entonces y, de modo significativo, luego de que en 1987 se presente la opción europea en TV de Alta Definición: Abel Caballero, sustituto de Barón al frente del ministerio de Transportes, anuncia por fin en julio de 1988 la intención de afrontar la puesta en órbita del primer satélite español de telecomunicaciones, con “la TV del futuro” y los servicios avanzados de empresa como objetivos manifiestos del proyecto. En marzo de 1989, y pese a las presiones irresueltas de la industria nacional al respecto <sup>(47)</sup>, se anuncia la creación de la Sociedad Explotadora del Sistema Nacional de Satélites <sup>(48)</sup> y la posterior adjudicación como empresa constructora del mismo entre los dos consorcios aspirantes: Satcom (integrado por la empresa francesa Matra, la británica British Aerospace y la holandesa Fokker) y Eurosatellite (consorcio integrado por los germanos de MBB junto a los franceses de Alcatel y Aerospatiale)...

El 30 de junio de 1989, finalmente, se crea para la explotación del satélite la empresa mercantil *HISPASAT S.A.*, con un capital social de 20.000 millones de pesetas suscrito por Telefónica (25%), la recién constituida Retevisión (25%), Caja Postal (22,5%), INTA (15%), INI (10%) y CDTI (2,5%), si bien sin descartar la participación de capital privado. La adjudicación del lanzamiento se decanta claramente por la opción europea que representa Arianspace (el lanzador

será el Ariane 4) y la contrucción se resuelve en favor de los franceses de Matra, con quienes por parte de la industria nacional (CASA, Inisel, INTA, Ceselsa, Sener, Crisa, Tecnológica, etc) se firman retornos del 100%, representando los directos una cantidad de 6.145 millones. El coste global del proyecto (satélites, estaciones terrenas, lanzamientos) se evalúa en torno a los 50.000 millones de pesetas, y los beneficios económicos esperados (por el alquiler de los canales previstos) se estiman superiores a los 13.000 millones a lo largo de los 10 años de vida previstos para el sistema.

Lo que importa subrayar del proyecto Hispasat, en todo caso, es que ampliará la oferta televisiva española en 5 nuevos canales, todos ellos DBS (Difusión Directa); en 2 adicionales que aportará la "Misión América" (cuya señal abarcará desde Canadá hasta Tierra de Fuego, posibilitando el desarrollo de una política transfronteriza en relación con América Latina y el castellano), y entre 6 y 8 más, de los 16 canales previstos por la "Misión de Servicios Fijos", para apoyar la red terrena actual de Retevisión (de ellos, la previsión es destinar 3 a las TV privadas, acortando en tres años el ritmo de cobertura previsto por el PTPP). Una visión más cualitativa, no obstante, subrayaría que si bien los canales DBS parecen ser "el vehículo más idóneo para la difusión de la TV de Alta Definición (TVHD) a partir de 1995" <sup>(49)</sup>, objetivo que indudablemente subyace a la apuesta europeísta finalmente adoptada con el Hispasat, ni dicha tecnología es la única en tal sentido ni, desde nuestra óptica, parece contarse tampoco con las CCAA en decisiones que "tecnológicamente" prefiguran un retorno a la visión centralista de los objetivos del sistema como un todo: así en lo relativo, sin ir más lejos, a la implantación de la TVHD; pero también en los servicios de correo electrónico, telefax, télex, videoconferencias o nuevas redes de volcado masivo de datos a bajo coste, o redes VSAT (Very Small Aperture Terminal), de gran utilidad para las comunicaciones "transfronterizas" empresariales y cuya cobertura se incluye en Hispasat dentro de la "Misión de Servicios Fijos"... Lo que confirma nuestra idea de la urgencia por replantearse, a todos los niveles y a partir de una mayor y mejor coordinación de las competencias y responsabilidades de cada quién (máxime si desde el sector público, como un todo), las diversas implicaciones -sociales y no sólo económicas- que ya se dejan entrever entre el audiovisual, de una parte, y las telecomunicaciones, de otra.

Desde el mismo sector público de lo audiovisual, en cualquier caso, en octubre de 1987 se da a conocer la intención de TVE de usar dos transpondedores alquilados por Telefónica a Eutelsat (F4), lanzado un mes antes por el Ariane 3: los contenidos del primer canal de TVE se distribuyen ya para Europa en castellano (el especial de aquel fin de año, dirigido por Pilar Miró, se encargó de inaugurar, el 1 de enero de 1988, "TVE Internacional"). Esa dimensión internacional de TVE se reforzará a finales del mismo año 88, al comenzar a emitir 4 horas diarias de programación, mediante el denominado "Canal América" y a través de Intelsat, hacia la comunidad hispanohablante: coincidiendo en el tiempo, por demás, con la llegada de Televisa a Europa a través de Eutelsat ("Galavisión").

Cabe resaltar a su vez, no siendo menos importante, la inauguración a finales de 1987 del complejo de comunicaciones por satélite de Armunia de Tajuña (Guadalajara), desde donde enganchará "TVE Internacional" con Eutelsat, y que se une a los otros dos existentes en Buitrago (Madrid) y Angüimes (Las Palmas), enlaces todos ellos con la red europea de comunicaciones por satélite. El complejo de Armunia de Tajuña sería el último hito importante de la infraestructura terrena con que España espera contar para 1992 (están previstos al efecto otros nuevos complejos



en Buitrago-2, Barcelona y Sevilla)... De modo que el “Valencia Telecom”, proyecto al que más tarde aludiremos, bien podría imbricarse con tales expectativas de futuro y siquiera sea para no dejar descolgado al País Valenciano en cuanto con todo ello se está aprobando: piénsese, en tal sentido, que el complejo de Armunia de Tajuña, construido y gestionado por *Telefónica*, dispone de una estación terrestre de concepción íntegramente digital (para trabajar con el Eutelsat-1 por el que se pretan servicios de telefonía digital con los 26 países miembros del satélite; transmisión de datos internacionales de alta velocidad; circuitos portadores de otros servicios: télex, circuitos alquilados, etc, y TV nacional e internacional tanto punto a punto como ocasional), así como con torre de comunicaciones terrestres y subsistema de gran antena paraboloide cuyo coste, pese a todo, apenas sobrepasa los 3.000 millones de pesetas. Lo de “Valencia Telecom” por tanto, no es en absoluto baladí y habrá que retomarlo con la profundidad (posible) que según este planteamiento parece requerir.

Desde el sector *privado*, de otro lado, la concreción más inmediata fue sin duda el renombrado *Canal-10*. Su “ruptura” del monopolio televisivo fue tan equívoca como breve (tan sólo 7 meses) y, a la postre, inoperante. Desde el 25 de enero de 1988, en que arrancase el proyecto con 4 horas de programación (de las 20,00 a las 24,00 h.), pasando por la renovación en agosto de la estructura accionarial (con la compra por Hachuel de las acciones mayoritarias de Talarewitz) y de la directiva (Henry Lamarlere será el nuevo presidente y Pere Félix llega a director general, desde Tesauro), hasta la casi inmediata suspensión de emisiones y la solicitud el 10 de octubre del mismo año 1988 de suspensión de pagos, la trayectoria de Canal 10 (apoyada en el alquiler a la British Telecom de un circuito del Intelsat y en la empresa Film Success International, con oficina en Londres y afincada en Andorra) ejemplificará las dificultades por captar en España una suscripción masiva a su fórmula de “TV de peaje”, máxime en un contexto audiovisual en plena transformación y con una polémica permanentemente alimentada (por esta vez) desde los diversos grupos empresariales de prensa aspirantes a concesionarios de TV privada y por fuerzas políticas de diverso signo que acusaron al Gobierno de arropar la operación.

Legalmente posible en cualquier caso -así lo reiteró Calviño en Valencia<sup>(50)</sup>, invitado como conferenciante por la Económica de Amigos del País- no con arreglo a la LOT sino, antes al contrario, acorde con el Reglamento del satélite Intelsat, que tan sólo exige “autorización administrativa previa del país receptor”, en tanto que canal de ámbito europeo en castellano e inglés (emitiendo desde Londres), Canal-10 aprovechó la cobertura legal propiciada por el R.D. de las Parabólicas, respondiendo a “intereses liderados por españoles” asociados para la ocasión -con el tiempo- con grupos económicos tan significados como el británico aglutinado por Maxwell o aquellos otros de proyección más centroeuropea convergentes de momento en “Canal-Plus” (con la luxemburguesa CLT y el grupo germano Bertelsman detrás). Otros datos que luego fueron saliendo a flote, como el fichaje por Film Success de Ramón Colom -ex director de los Servicios No Informativos de TVE y nuevamente director de TVE con García Candau-, junto a la presencia en Canal-10 de Enrique Vázquez, -ex director de Informativos tras el 82-, apenas si resaltan lo fundamental dejado entrever por la “asociación de intereses” de partida... En simpatía sintomática, desde la otra banda del modelo coexistencial que en la actualidad se está prefigurando en la trastienda del modelo español, con el dato de que sea la cadena SER (donde hay presencia estatal pero domina el grupo PRISA: el contrato se ha firmado con Telefónica) el primer usuario español de la estación de Armunia de Tajuña para conectar al Eutelsat y distribuir así a nivel europeo un servicio

radiofónico de canales estereofónicos de alta calidad. Proyección europea, por demás, que comparte el grupo privado español liderado por Massó con inversiones ligadas al satélite "Astra" -revalorizado tras el fracaso del Cohete Ariane, como es sabido.

Una conclusión de interés según creo, derivada de cuanto antecede, resalta como obvia y cualitativamente fundamental en la prefiguración del audiovisual público con futuroque, desde el País Valenciano, también y tanto interesa: los desarrollos previsibles de la teledifusión directa por satélite con repercusión inmediata en nuestro territorio obligan al replanteamiento infraestructural inmediato de las "actuales" redes de televisión (y aún más, si cabe, de las aún-no-actuales-pero-con-vocación-de-futuro, como todavía podría ser el caso del cable en relación con TVV). Si, como parece hartó probable, los responsables de la Generalitat (y de RTVV) no lo desconocen, ello no exime de la perentoriedad por compartir cuanto antes el debate implicado: ello siempre de acuerdo -para evitar ser techado de iluso sin más- con la hipótesis, que aquí se defiende, de que en efecto es posible afrontar el reto de las nuevas tecnologías *sin descuido de las consecuencias sociales* que cabe rastrear desde una perspectiva progresista. Pues si la descentralización no prefigura la participación, ésta es condición *sine qua non* de aquélla. O en otras palabras: si la pujanza de la teledifusión directa por satélite es incuestionable y responde, en no poca medida, al "trend" sociológico de la época, inaugurando la realidad de una TV sin fronteras (en correspondencia con la creciente transnacionalización de la economía y la política), no parece desmedido pugnar por la posibilidad de una descentralización audiovisual (en correspondencia con la crisis palpable del Estado central como "única palanca" en manos de una izquierda mínimamente pragmática), descentralización capaz de apuntalar de un modo efectivo y no meramente autolegitimatorio o voluntarista aquel otro polo del mismo "trend" sociológico ligado precisamente a su mayor potencial de participación (la Europa capaz de interiorizar su particular Norte-Sur o es de los pueblos en su diversidad regional o no será, por resumirlo de alguna manera). O por traducirlo en términos del audiovisual implicado, con Richeri: "la tendencia hacia la fragmentación del público y la consiguiente especialización y diferenciación de soportes y canales es otro elemento que justifica la existencia de industrias televisivas desarrolladas a nivel regional. Así -dice él-, la televisión por cable, uno de los grandes desafíos tecnológicos del futuro, con una naturaleza típicamente local, es otro elemento que refuerza la necesidad de TV regionales e incluso locales fuertes" <sup>(51)</sup>.

Pero, cabe subrayar, la descentralización puede obedecer a una estrategia tanto de derechas como a otra diferente más propiamente de izquierdas, y las contradicciones patentizadas por los escarceos del cable (una tecnología más proclive al polo que nos interesa) parecen ratificarlo en el sentido menos deseado por quien esto escribe. Conjúguese al respecto, sin ir más lejos, la decisión del Tribunal Constitucional contra el término "cable" recogido por la ley de creación de RTVV y compárese con el desarrollo del sistema Optican-1 entre Gran Canaria y Tenerife (islas que son, es cierto, el talón de Aquiles del proyectado satélite español) como primera experiencia de gran alcance en cable por parte de Telefónica, en convenio con ATT avanzado en fecha tan "temprana" como 1983 y ultimado cuatro años más tarde; o compárese igualmente con el convenio suscrito por Telefónica con "Iniciatives SA" -reconvertida como sociedad mixta, tras el fallo del Tribunal Supremo que obliga a las empresas municipales a demostrar su finalidad como de interés público y su sometimiento a las reglas de la libre competencia- para la puesta en marcha cara al 92 de "Barcelona Cable", así como de otras -más que contadas- en el mismo horizonte (así Promadrid, que ha creado "Madrid Cable" en la misma dirección de sondear una red de TV por cable en la

capital del Estado). Por no hablar del tendido de cable por fibra óptica que ya conecta Madrid con Barcelona, capaz para 128 programas de TV o 61.500 circuitos telefónicos simultáneos <sup>(52)</sup>...

Merece la pena no ignorar, mientras tanto, que la teledifusión directa por satélite (y los desarrollos finalmente viables ligados al cable), ambos *sistemas de integración* en palabras de Calviño, no sólo no están cerrados técnicamente (los TDS actualmente operativos están condicionados por las 625 líneas de definición en la recepción y el "Eureka HDTV" tendrá que demostrar su capacidad de alternativa frente a las 1.125 líneas del modelo japonés) sino que, en tanto, que potenciadores de un "modelo europeo" desde el punto de vista político-administrativo, cuestionan globalmente la reglamentación para-proteccionista dominante en el Club de los 12 y, en el caso específico español, cuestionan así mismo la actual dispersión de los departamentos administrativos con principal capacidad de maniobra al respecto. Así, frente a la creciente unidad de criterios de las distintas PTT's (de Post, Telephon, Telegraph) europeas, se agudiza la disfunción operativa de quienes asumen competencias en la materia: el ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la secretaría que fue de Carmen Mestre y la dirección general de Telecomunicaciones de Javier Nadal de una parte; la Dirección General de Medios de Comunicación Social desde Presidencia del Gobierno, de otra; a las que se suman las instancias administrativas finalmente "paralelas" propias de cada Comunidad Autónoma (DGMCS y DG de Organización y Sistemas de Información, en el caso valenciano), por lo que al Tercer Canal respectivo se refiere.

Siendo así que se entiende la advertencia de Calviño en Valencia. Vale traducir, según entiendo: o se acierta con el *modelo de referencia*, más europeo que nacional en el inmediato futuro, o el yerro será mayúsculo caso de limitarse a un desarrollo del mismo como si de una TV convencional "protegida" se tratase... Ya que tampoco el proceso de innovación tecnológica está cerrado, y es de esperar que la fibra óptica y la transmisión por láser afecten -más temprano que tarde- al mundo del audiovisual en ebullición que se nos echa encima.

En tal sentido, cuando ni siquiera la propia TVE tiene definido (o tal parece) su propio modelo para "ganar el futuro", la TVV se apresta a la obligación de compaginar su propia definición al respecto con la desventaja añadida de no contar con la posición de partida de aquélla. Y si bien el problema no es menor para las cadenas privadas recién inauguradas, las TV públicas (TVV incluida) habrán de pagar sus errores vía presupuestos emanados de nuestros bolsillos, siendo mucho mayor el condicionante territorial de partida en ellas que en las TV privadas, más rápidas en poder asumir aquellas "lógicas de mercado" inherentes por ahora a la construcción del Mercado Unico europeo: impropias como "referencia al 100%", en principio y por tanto, para quienes pretendan generar modelos alternativos desde el sistema capitalista dado. Por ello mismo, el dato que importa -si de TV con futuro se trata- es el *nuevo salto cualitativo del "modelo coexistencial"*: ya no sólo por las nuevas fórmulas de distribución, entre TV públicas y privadas, según la tecnología convencional (transmisión hertziana), sino además entre tales TV-éter y la teledifusión por satélite o por cable, así como también por los nuevos condicionantes (ante todo de mercados y de capacidad productiva) inherentes a la extensión añadida de la pugna al ámbito geográfico una Europa geopolíticamente, a su vez, ampliada. A ello responde, en definitiva, la relevancia que venimos otorgando a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, en el caso español y valenciano, desde una perspectiva no estrictamente sectorial. Y con ello tiene que ver, en suma, la "batalla mundial de las telecomunicaciones" (con su peculiar traducción en el escenario europeo) que ha de contemplarse como inevitable telón de fondo de aquélla.

Es desde la perspectiva ganada al llegar a este extremo que intentaremos abordar los grandes interrogantes ligados específicamente a la Televisión Valenciana (Canal 9) que ya conocemos. Y ello con arreglo al hilo conductor de la democratización efectiva del modelo de TV pública en España, el apartado hasta aquí obviado con arreglo al “plan” de Antonio López que ha vertebrado nuestro recorrido televisivo.

## 2. CANAL 9-TVV: UN MODELO NO TAN DIFERENTE.

El debate sobre la descentralización audiovisual en Europa ha primado históricamente los objetivos de contenido cultural y/o político. Sólo últimamente, de la mano de sus implicaciones tecnológico-industriales, ha retomado el carácter *estructural* de “lo económico” en juego, una vez desbrozado cuanto de determinismo tecnológico o de utopía democratizadora subyacía tiempo atrás en las diversas prospectivas sobre la telemática que se nos venía encima. A tal evolución no es ajeno el proyecto valenciano de RTVV.

Desde las expectativas levantadas en los primeros 80 sobre su creación, al amparo legitimante de la normalización lingüística; pasando por el primer esbozo formulado por el tándem M<sup>a</sup> García Lliberós-A.J. Sarriá, en conexión con la consultora TELLING S.A., que arropase en 1984 el proyecto desde su trascendencia económica -sentando a la par las bases de la iniciativa del PSPV-PSOE ante las Cortes Valencianas-; hasta su relanzamiento en tanto que “infraestructura motriz” del potencial endógeno con que lo recoge finalmente el segundo Programa Económico Valenciano (PEV-2) en 1987, hay toda una trayectoria que por el momento culmina, al hilo de su inauguración efectiva dos años más tarde, en el “suspense” presupuestario con que se encuentran los primeros gestores y en la “sorprendente” programación a que pueden realmente optar los valencianos caso de pulsar dicho canal -que evidencia a ojos vista la indefinición sobre el modelo a seguir. Un modelo que, hoy por hoy en plena *etapa de despegue*, arranca con la década de los 90 sin parecer perseguir otro objetivo que el de la estricta supervivencia empresarial (ante un entorno crecientemente competitivo).

### 2.1. RTVV, UN PROYECTO CON HISTORIA.

Si las respuestas al *para qué* de una TV valenciana, al menos las básicas, parecían claras desde el propio debate parlamentario sobre su creación (y más aún con el contenido atribuido posteriormente al proyecto por el PEV-2), ni ha ocurrido ni ocurre lo mismo con el *cómo*, cuestión que remite al cabo a la previa y prioritaria del modelo de TV pública a adoptar. Gran incógnita, en definitiva, cuya resolución incumbe hoy por hoy, en primera instancia, al Consejo de Administración y al Director General. Pero no únicamente a ellos, pues que la participación todavía es posible (y aún necesaria para su futuro), más allá del estilo tecnocrático quizá ineludible y consustancial a su objetivo de supervivencia empresarial.

**"FUTUROS DESEABLES" (DOS EJEMPLOS)**

Los "7 mandamientos" de R. Blasco/DGMCS  
(Presentación del Proyecto de Ley de creación de RTVV, ante las Cortes Valencianas, 27-6-84).

El "decálogo" de José M. Gironés.  
(Hoja del Lunes de Valencia 6-4-87, coincidiendo con la "presentación en sociedad" del proyecto).

- Modelo autofinanciable a plazo medio
- Cooperación con el sector privado en producción de programas.
- Diversificación de la orientación publicitaria.
- Por un proyecto tecnológicamente avanzado y polivalente en sus estructuras de producción.
- Sin olvidar la audiencia turística.
- Creación de empleo
- Aprovechamiento de la plusvalía social del proyecto en consonancia con la integración en la CEE.

1. Asumir la tarea del equipo G<sup>a</sup> Lliberós.
2. Rápida tramitación de sociedades gestoras y creación del director general, tras elecciones autonómicas.
3. Fin de la ambigüedad en las propias filas socialistas (Madrid).
4. Multiplicar los apoyos financieros, públicos y privados, a las empresas autóctonas de producción y servicios de las que ha de nutrirse la TVV.
5. Pacto de respeto hacia la TVV por los otros medios de comunicación (similar a TV3 en Cataluña).
6. Respaldo a las recientes iniciativas de formación de profesionales al máximo nivel.
7. Creación de un marco comunicacional para toda la Comunidad Autónoma (federación y unificación de agrupaciones profesionales, edición de un diario con difusión comunitaria).
8. Creación de coordinadora de TV locales.
9. Creación de asociaciones de amigos y usuarios de TV.
10. Fomento de la investigación tecnológica y social desde la mega-TV (satélites) a la micro-TV (comcoders)

Fuente: Elaboración propia

Sin descuidar, al respecto, los "futuros deseables" enunciados tanto por políticos como por periodistas (y los ejemplos de R. Blasco y J.M. Gironés que se adjuntan son eso y así deben entenderse), tampoco debieran lógicamente echarse en saco roto -no está el horno para dilapidar las sugerencias acumuladas por más teóricas o parciales que sean- las distintas aproximaciones de expertos u observadores que han venido colaborando con -y cobrando de- la DGMCS de la Generalitat.

No es mi pretensión detallar tales aportaciones, pero sin duda resultará oportuno enumerar las más llamativas, por demás dadas a conocer a través de la prensa valenciana (unas veces, las menos, por mera transparencia, otras como excusa para filtraciones política o económicamente interesadas) por la propia M<sup>a</sup>. García Lliberós. Cuando su cese estaba cantado, en concreto, facilitó un listado de los distintos estudios, diseños, proyectos y demás servicios relativos a RTVV, contratados por la citada DGMCS, que habría invertido en ello 176,2 millones de pesetas hasta el 30 de octubre de 1987:

De modo que, si nos ceñimos a la TVV, del cuadro anterior de "colaboradores expertos" cabe resaltar como consultoras coautoras del proyecto, en la etapa previa a su despegue efectivo y adicionalmente a las "seis u ocho (personas) incluyendo auxiliares y administrativos" que del equipo G. Lliberós se dedicaron específicamente al tema, en particular a las empresas:

<u>ESTUDIOS. PROYECTOS. DISEÑOS. ETC</u>	<u>EMPRESA O PROFESIONAL</u>	<u>COSTE PARA DGMCS</u>
Estudio planificación TVV	Telling	8.550.000
Estudio mercado publicitario en la C.Valenciana	Instituto EMER,S.L.	7.500.000
Catálogo-inventario sobre material audiovisual en C.V.	Julio Pérez Perucha	3.000.000
Proyecto Unidad móvil de TV	Telling, S.A.	5.568.000
Anteproyecto Red de Enlaces RAV	Telling, S.A.	1.720.000
Proyecto sede RTVV en Avda Blasco Ibáñez, 134, de Valencia. (Sede actual de RAV)	Coratel, S.A.	2.969.000
Diseño anagramas RTVV-TVV-RAV	Voramar, S.A.	3.950.000
Redacción Proyectos Centro Producción de Programas en Burjassot.	Vte Cast, S.A. Telling, S.A.	52.326.000
Dirección facultativa del CPP-TVV (Burjassot)	Vte Cast, S.A. Telling, S.A.	52.326.000
Catálogo-inventario sobre material audiovisual Comunidad Valenciana (II)	Juan Pérez Perucha	4.403.000
Estudio modelos informativos en TV	Joan Alvarez.	1.900.000
Estudio geotécnico parcela CPP-TVV Burjassot	Geocsa	1.737.000
Estudios modelos de programación de TV y audiencia.	J.V. Marqués.	2.210.000
Dirección facultativa sede RTVV en Blasco Ibáñez	Coratel, S.A.	3.108.000
Dirección facultativa CPP-RAV en Blasco Ibáñez	Coratel, S.A.	4.442.000
Registro marcas RTVV-TVV-RAV	Carlos Modet	4.400.000
Proyecto transformador eléctrico RTVV	Coratel,S.A.	957.000
Edición manuales identidad corporativa RTVV-TVV-RAV	Roig Impresores, S.A.	2.357.000
Propuesta ordenación urbanística parcela CPP-TVV (Burjassot)	Alfredo Fooz	863.000
Estudio higiene y seguridad en trabajo zonas CPP-TVV	Vte. Cast. S.A./Telling, S.A.	1.075.000
Proyecto dirección facultativa en aire acondicionado locales	Coratel, S.A.	640.000
Modificación proyecto CPP-RAV	Coratel, S.A.	990.000

- *CAST S.A.*: Arquitectura, obra civil, urbanización, instalaciones y equipamientos generales (con la colaboración en la arquitectura del Centro de Producción de Programas (CPP) de Burjassot del equipo valenciano VETGES-TU).

- y *TELLING, S.A.*: Instalaciones técnicas y equipamientos electrónicos de TV.

Que Telling SA (Televisión e Ingeniería) fuese acusada en su día de ser una empresa “paralela” del PSOE <sup>(53)</sup> importa menos, en lo que nos interesa, que el planteamiento inicial de la RTVV posible por tal empresa formulado y luego retomado por el equipo de García Lliberós desde la DGMCS de la Generalitat. Pues de Telling, en concreto, es el estudio de planificación o viabilidad que ya en diciembre de 1984 resumiesen Antonio José Sarriá y la propia María García-Lliberós en su ponencia al “I Congrès d’Economia Valenciana”, y auténtico *punto cero* del proyecto desde una perspectiva más técnica que política. Un estudio centrado precisamente en el “diseño de planteamiento económico” de la TVV, una vez entendida como dada la justificación política y cultural del proyecto. Es decir, un estudio germen tanto del trabajo desarrollado por el equipo García Lliberós desde entonces hasta la primavera de 1988, cuanto condicionante luego de las tareas de despegue (ante todo como problema “gerencial- empresarial”) a concretar por el Consejo de Administración y el director general del Ente Público RTVV tras tomar el relevo de aquel equipo.

Un equipo, el de la DGMCS, cuya preocupación se centró desde un principio -al hilo de la citada ponencia <sup>(54)</sup>- en la “búsqueda de un planteamiento coherente con la política económica del Sector Público estatal y autonómico”. En palabras de los autores de la ponencia, se habría tratado “de encontrar” un modelo de empresa pública de televisión que, en la esfera microeconómica, asumiera el criterio de moderación en el crecimiento del gasto público, que tendiera a medio plazo a la autofinanciación y que, en la esfera socioeconómica, llegara a consolidarse como un cauce de circulación que diera salida a la producción videocinematográfica y publicitaria del sector privado valenciano. Esto es, un proyecto de inversión pública que perseguiría “convertirse en la base económica capaz de permitir en el País Valenciano la consolidación del embrión del sector empresarial de la comunicación” (audiovisual, se entiende).

En tanto que proyecto de inversión pública, no obstante, Canal 9-TVV supone -bajo determinados supuestos de carácter político y cultural, y por tanto jurídicos, que se han de retomar- una actuación de la Generalitat modificando la oferta televisiva posible en territorio valenciano (en principio). Desde esa perspectiva básicamente económica, por tanto, los condicionantes básicos a la viabilidad del proyecto TVV vendrían *a priori* de las perspectivas de la oferta televisiva a corto y medio plazo, en un marco de creciente competencia (en lo que se suman los efectos de la desregulación propia de los 80 en TV convencional y los más novedosos inherentes a la ampliación de la oferta vía teledifusión directa por satélite y TV cable). Canal 9-TVV dependerá, a su vez, de las características presentes y futuras de la demanda de TV en el País Valenciano: algo que tiene ver con la audiencia actual, y potencial, de dicho medio (que ha de observar las “utopías ilimitativas” señaladas por Gubern); y que por ello se religa, dadas las tendencias dominantes en el capitalismo internacional que apuntan a su creciente comercialización, con la demanda de publicidad en TV en territorio valenciano (una vez diseñada la financiación mixta del proyecto, ante todo por el contexto de crisis económica y la subsiguiente relativización de su prioridad

presupuestaria, es decir, por la austeridad inherente al uso de los fondos públicos en tal contexto).

Por ello, incluso desde tal perspectiva estricta de lo económico, es inevitable el reconocimiento de las nuevas situaciones. Nuevas situaciones que con el tiempo han evidenciado los “errores de prospectiva” inherentes al estudio inicial de Telling, S.A. y que plantean como indubitable que deben subvertirse cuanto antes, con la urgencia precisa para realizar el proyecto en coherencia con los contextos pertinentes y poder así preservar el mismo del riesgo creciente de obsolescencia económica y tecnológica. Un riesgo que conlleva con frecuencia el paralelo, si no inmediato, de la obsolescencia política. Riesgo no tan intangible como a primera vista pudiera parecer, y del que anduvo bien cerca el proyecto RTVV por su excesivo periodo de “hibernación administrativista”. Periodo identificable con la etapa 1984-87, en que a duras penas logró sobrevivir frente a otras prioridades (económico-políticas) de la Generalitat, bajo el caparazón defensivo que por entonces le suministró un enfoque legitimante más cercano al “policy analysis” que no a una perspectiva de gestión pública estratégica como la que aquí defenderemos.

En 1984, en efecto, se sostenía con Telling que “no sólo es que en el desarrollo de la red de transmisión por cable-satélite el Estado Español todavía no ha entrado, sino que, además, este sistema de momento se encuentra vetado a cualquier iniciativa privada”<sup>(55)</sup>, especificándose de modo ciertamente llamativo, por lo erróneo:

- que “al País Valenciano le llegarán a lo largo de los próximos quince años -como mínimo-, la señal procedente de dos (a lo sumo tres) satélites de radiodifusión directa (...);
- que “precipitar el desarrollo de la TV privada sólo puede ser a costa de tres opciones: liberalizar la TV por cable, reducir la TV privada al carácter local en principio, o impedir -¿de qué forma?- el desarrollo de nuevos Terceros Canales Autonómicos”;
- y concluyendo que “cuando la una o dos posibles TV privadas se implantaran con una mínima fuerza, la TVV llevaría ya al menos dos años de rodaje, dispondría de un personal experimentado y cualificado y habría establecido fuertes lazos comerciales con las otras Sociedades de Televisión existentes en el Estado Español, particularmente con las que no se compite: las autonómicas”.

La propia María G<sup>a</sup>. Lliberós reconocería cuatro años más tarde, en una entrevista con Jesús Sanz a todas luces singular (diario “Mediterráneo”,....), que los estudios de Telling y los propios de la DGMCS por aquel entonces “eran todavía muy abstractos”, afirmando a renglón seguido -en lo que cabe ver tras el tiempo transcurrido como autocrítica implícita- que “además de competir con TVE y TV3 habrá que hacerlo con los canales privados y públicos que se recibirán en la Comunidad Valenciana por el sistema parabólico y de satélites”... Los hechos han venido a demostrar en efecto, desde finales de 1983 (año clave por tantos motivos y en el cual comienza a redactarse el estudio de Telling), que ni la TV directa por satélite o la TV cable han tardado tanto como se preveía en llegar a ser -por vía ante todo de la iniciativa privada- una realidad; ni las limitaciones jurídicas e institucionales, en general, han podido frenar las tendencias dominantes en el plano internacional (máxime tras la integración en la CE), así como tampoco el monopolio de RTVE es ya hoy sino una realidad quebrada a pesar del Estatuto de 1980 y de la Ley de Concesión de los Terceros Canales. Y por lo que importa: que el despegue de TVV tampoco se ha planteado en un marco tan idílico como el inicialmente previsto.



Antes al contrario, todo apunta a que el equipo Fabregat se ha encontrado -desde la perspectiva gerencial-empresarial ineludible a la ejecución de despegue del proyecto TVV- con un contexto competitivo mucho más apremiante, en cuanto a “costes de tiempo” implicados, y no menos *confuso* en cuanto a falta de fiabilidad de la información que hacía y hace al caso. El ‘modelo’ de TV con que parece despegar Canal-9 no es sólo *tendencialmente* implícito -pues no se ha explicitado hasta la fecha, en parte por las mayores exigencias de “secretismo” inherentes al nuevo contexto competitivo- sino que, además, parece conllevar el riesgo, poco menos que imperdonable desde tal perspectiva gerencial-empresarial, de tener que levantar la estrategia y la estructura organizativas (internas) sin haber resuelto “adecuadamente” -al menos desde el punto de vista de la “calidad democrática” deseable- el problema (siempre previo) de la Planificación Estratégica de Dirección pertinente. Cuestiones, ambas, que a estas alturas rebasan la mera presunción.

### 2.1.1. El referente jurídico-político concreto.

A la *fundación* jurídico-política del proyecto RadioTelevisión Valenciana (RTVV), que encuentra en las Cortes Valencianas su lugar pero cuya incierta resolución se prolonga en el tiempo durante 1984 y buena parte del 85, sucederá de inmediato, en especial a partir del verano de 1986, el ensanchamiento de la polémica por vía periodística conforme se estanca o parece avanzar el proyecto. Habrá que esperar a la primavera de 1988, en que claramente se pasa a la etapa gerencial-empresarial que conlleva su despegue efectivo, para dar por concluida definitivamente una polémica en gran medida desconocida -pese a girar sobre dos medios públicos de información- para el gran público valenciano.

En cuanto a la inicial contienda jurídico-política, de que nos ocuparemos en el presente subapartado, y por más que la institucional no quepa reducirla en este caso al ámbito estricto de lo autonómico, es de todo punto preciso retomar en detalle el debate que sobre la Ley para su creación se da en el marco de las Cortes Valencianas, por arrojar más de una clave significativa -con vistas al presente y aun al futuro inmediato- sobre el carácter conflictivo que tan a menudo se esconde tras el resultado formalmente “unánime” de la votación en Pleno favorable a su creación como organismo público de RTV.

El 14 de febrero de 1984, en uno de los primeros actos relevantes de la oposición surgida el verano anterior de las primeras elecciones autonómicas, la Mesa de las Cortes Valencianas admitía a trámite la Proposición de Ley sobre Radiodifusión y Televisión de la Comunidad Valenciana presentada un día antes por J.R. García Fuster en nombre del grupo parlamentario Popular <sup>(56)</sup>:

. En la Exposición de Motivos, dicha proposición de ley defendía que “formalizada ya por el Consell la solicitud para la concesión por el Gobierno de la Nación de la utilización de un tercer canal de TV en la Comunidad Valenciana, es llegado el momento de regular mediante Ley la organización y control parlamentario del mismo (...) porque tal ordenamiento jurídico debe ser previo a la concesión (y) porque es conveniente que queden establecidos cuanto

antes (...) los criterios y los principios ordenadores de la actividad de la Generalidad Valenciana en cuanto a la gestión en el ámbito territorial de nuestra Comunidad”.

. En cuanto a los criterios pro-autonomistas de los Populares, aparte la clara analogía con el Estatuto de RTVE de 1980 (junto a matices provenientes de la Ley que creaba la Corporación Catalana de Radio y TV) cabe resaltar el contenido de la Disposición Adicional 1ª que proponía: “En cumplimiento de la disposición transitoria de la Ley Reguladora del Tercer Canal de Televisión (...) se constituirá una Comisión Mixta compuesta por cuatro miembros del Ente Público RTVCV y otros cuatro del Ente Público RTVE. Dicha Comisión tendrá como funciones las de fijar los ritmos de establecimiento de la red del Tercer Canal Autonómico, así como resolver cuantos problemas técnicos relacionados con la gestión directa, pública o mercantil del Tercer Canal de Televisión se susciten en los términos de la Ley 46/1983”... Hablar de ritmos (ganar tiempo mientras crecía en aquel entonces la presión pro-TV privada) y prever gestión mercantil (adelantando que la privatización podría llegar hasta el Canal Autonómico) eran aspectos al cabo congruentes con que ello se hiciese desde una comisión no parlamentaria y ligada tanto a la Ley 46/1983 cuanto al Ente RTVE: era una proposición, en suma, para una RTVCV mermada de antemano, de paso que se intentaba en paralelo aprovechar el “momento caliente” de la polémica TV pública vs. privada para poner al Consell entre las cuerdas del PSOE en Madrid y frente a su propio programa autonómico.

No es de extrañar por ello que la reacción del Consell socialista, dos meses más tarde, fuese el Proyecto de Ley origen de la Ley 7/1984, de 4 de julio, de creación del Ente Público RTVV. La tramitación del citado proyecto de ley fue acordada por la Mesa de las Cortes Valencianas el 11 de abril del mismo año 1984, tras aprobarse el 2 de abril anterior por el Consell a propuesta de Rafael Blasco, por entonces conseller de Presidencia. Como tampoco es de extrañar que dicho proyecto -según su Exposición de Motivos- remarcase su oportunidad en “el ejercicio de la potestad atribuida a la Generalidad Valenciana en el art. 37 del Estatuto”, marco de atribución competencial, junto a la Constitución y el Estatuto de RTVE (norma básica en los criterios orgánicos y funcionales), que “obligan a la Generalidad” como poder público, ante todo, a “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, fomentar el desarrollo de las peculiaridades del pueblo Valenciano y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”<sup>(57)</sup>.

La proposición de ley del grupo Popular no sería tomada en consideración por las Cortes, en su sesión del 10 de mayo, con polémica incluida sobre la interpretación de los arts. 87.1 y 89 de la CE a la hora de avalar la prevalencia del proyecto de ley presentado por el Consell sobre aquélla:

. García Fuster (AP) hizo, por lo anterior, crítica del “rodillo” socialista en la Cámara (42 votos en esta ocasión frente a 32 de CP y PCPV-PCE), sugiriendo “que ese Proyecto de ley que en su día se apruebe no se convierta, a través de esa federación con otras entidades que recoge (...), en un nuevo vehículo de expresión del idioma (...) Es decir, en un nuevo ataque a la inveterada cultura de nuestro pueblo”<sup>(58)</sup>.

. El Consell, que el 2 de abril había manifestado su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley, argumentaba entre otras razones, en su escrito a las Cortes, que “a l'únic punt en el qual la Proposició de Llei es desvia d'allò regulat per la Llei estatal és el relatiu al nomenament i cessament del Director General de l'Ens Públic Ràdio i Televisió Valenciana”, acusando en efecto al Grupo Popular de “còpia pràcticament total i absoluta” de las leyes del Estatuto de RTVE y de la Corporación Catalana de RTV.

El diputado autonómico socialista Ernest Fenollosa, en el debate, recordaría en defensa del Consell las exigencias de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano recién aprobada por entonces, y algo más: “En la sessió plenària de Castelló, a propòsit de la presentació i després retirada de la Proposició no de Llei del Grupo Popular sobre creació d'una Comissió de Control Parlamentari de l'Ens Public Radiotelevisió Espanyola, ja anunciàvem que es faria la petició del Tercer Canal, que es presentaria el Projecte de Llei de Consell Assessor i, després, el Projecte de Llei de creació de l'Ens Públic RAdiotelevisió Valenciana portant un calendari lògic per raons d'oportunitat política i econòmica que ho permeta”.

El dictamen de la comisión de Coordinación, Organización y Régimen Institucional que trató del proyecto de ley del Consell, junto con las enmiendas presentadas, era remitido a las Cortes el 18 de junio de 1984. Previamente se había promulgado la Ley 3/1984, de 6 de junio, que creaba y regulaba el “Consell Assessor de RTVE a la Comunitat Valenciana”, con marcada “atonía funcional” durante una buena temporada (el Consell nombró a los 13 miembros el 7 de octubre de 1987, con el socialista Luis Torregrosa como nuevo presidente). Como puede constatarse en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas (BOCV) nº 59, que recoge el dictamen aludido:

. La Exposición de Motivos era idéntica al proyecto del Consell, sin haberse presentado enmiendas.

. Los principios generales de programación, directrices del poder ejecutivo y periodos de campañas electorales (arts. 17 a 20), sin enmiendas presentadas, denotaba una “coincidencia institucional” que se quebró -en especial- por lo que hace al nombramiento del Director General: por el Consejo a propuesta del Consell para CP vs. por el Consell a propuesta del Consejo.

. El grupo Popular, en sus enmiendas nº 2 y ss., insistió en una mayor proximidad al Estatuto de RTVE, siendo de destacar su enmienda nº 70 con hincapié en mantener la Disposición Adicional 1ª de su proposición de ley (aquella que de hecho abría las puertas a la privatización del canal autonómico).

El proyecto pasará a ser Ley tras el pleno que las Cortes Valencianas celebran el 27 de junio de 1984. Pero en dicho pleno, una vez debatidas las enmiendas presentadas, se emitía un veredicto engañoso: 75 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Unanimidad *formal* cuestionada, sin embargo, incluso por el propio Pérez Ferré en la explicación final del voto del grupo socialista. Dicho debate, cuyo peso recayó en los socialistas Asensi Sabater -presidente entonces del consejo Asesor de RTVE- y Ernest Fenollosa, el comunista Palomares Vinuesa y los populares Rita Barberá y, en menor medida, Martínez Campillos, quedó recogido en el “Diario de Sesiones” de las Corts

Valencianas (DSCV), nº 36. Destacaria del mismo, por mi parte, dos intervenciones fundamentales:

De una parte, la presentación del proyecto por el propio Rafael Blasco como Conseller promotor -presentación quizá preparada por el equipo que daría cuerpo con posterioridad a la DGMCS-; y en concreto su reflexió sobre “la visió estratègica i la imatge clara del que volem”;

En el marco de la “expansió incontenible de les noves tecnologies” y en esa otra dinàmica de las sociedades avanzadas que es “la descentralització”; y una vez claro que “només a partir de 1983, amb la Llei de Tercers Canals, i l’anunci recent el President González de regular la Televisión privada i l’aparició de les televisions basca i catalana, s’ha posat fi al monopoli de l’anomenada “Televisió única” (...) la polèmica entre televisió pública o televisió estatal/televisió privada ha quedat superada”. Rafael Blasco recordaba que los medios de comunicación “són una forma de poder” y, en tal sentido -conforme a las leyes pertinentes-, el proyecto de RTVV obedecía a “la voluntad del Govern Valencià” por constituir una radio y una TV valencianas como factor de modernización y vehículos de integración social.

Al respecto, subrayaba en su intervención, “El Consell no ha oblidat (que el proyecto) exigeix una profunda reflexió sobre el model de televisió que volem per a la Comunitat Valenciana”. De modo que “considerant als altres arguments en favor d’una televisió valenciana fora de discussió, el Consell preten d’assegurar la viabilitat del Projecte des de l’òptica estricta de la rendibilitat”, siendo “els criteris inicials” al respecto los siguientes:

“ - Elegirem una alternativa o model de televisió regional autofinançable a terme mitjà.

- Buscarem la cooperació amb el sector privat ubicat a la nostra Comunitat, per a les activitats de producció de programes i potenciarem el seu desenvolupament.

- Diversificarem l’orientació publicitària, incloent aquells sectors valencians que no han tingut accés a l’oferta dels seus productes a través del mitjà televisiu.

- En el camp de la productivitat, ens decidirem per un projecte tecnològicament avançat i per la polivalència de les estructures de producció, per a prestar serveis informatius a les empreses valencianes, serveis educatius als centres d’ensenyament i a la integració de serveis informàtics i els bancs de dades.

Tot amb absoluta coherència en els objectius traçats pel Govern de la Nació, a través del Pla Electrònic i Informàtic Nacional, i amb el màxim aprofitament de l’espai radio-elèctric que tenim reservat al Tercer Canal.

- Des del punt de vista de la demanda necessària per a autofinançar la TVV, no podem oblidar l’audiència de més de 3.700.000 persones que viuen a la Comunitat, incre-

mentats per un considerable volum turístic que arriba als 10 milions de pernoctacions anuals.

- El Projecte de la RTVV s'orienta cap a la creació d'ocupació, tant pels llocs de treball directe, com pels induïts en el sector privat.

- Remarquen també la inestimable plus-vàlua social d'un Projecte de creació de servicis de caràcter cultural, educatiu i comercial-publicitari, introductor de noves tecnologies, entreniment i lleure (...) i en resprés de la integració espanyola en la CEE''.

. De otra parte, y frente a la conclusión del conseller Blasco de que "l'aspecte més decisiu d'aquesta Llei és que enceta el procés de la seua constitució", es de resaltar la intervenció -més allà incluso de la polèmica lingüística o del nombramiento y cese del director general, con las inevitables referencias al "modelo RTVE" y a su entonces director J.M. Calviño- del diputado Marco Molines, en la explicación final de voto del grupo parlamentario Popular. Una intervenció que cuestionaba la *realidad* del voto afirmativo de la Cámara "por unanimidad", y que, por realizada precisamente una vez concluido el recuento, llevó al socialista Pérez Ferré (acto seguido) a afirmar que "si todos hubiéramos estado dedicados todo nuestro tiempo -en lo que parecieron alusiones a Marco Molines- a analizarla (la Ley de RTVV), posiblemente o la explicación de voto no hubiera sido la misma o el Diputado no hubiera sido el mismo"... Ironía que antes era perplejidad en el caso de Rafael Blasco, quien cerró la sesión precisamente diciendo: "Señor Marco Molines, con la misma convicción que le digo que usted ha estado aquí hoy, en este debate porque yo lo he visto, le tengo que decir que usted no nos ha escuchado ni ha querido entender las argumentaciones de todos los Grupos Parlamentarios, incluido el suyo." La gran duda introducida por Marco Molines (ex-delegado del Ministerio de Cultura en Valencia con Pío Cabanillas -recuérdese el papel de éste en la polémica de TV pública, vs. privada como ministro de UCD-, procedente del PDP pasaría con el tiempo al grupo Mixto y finalmente a UV, grupo que le propondría "simbólicamente" como candidato a director de RTVV frente a Amadeu Fabregat), es todavía si sus opiniones entonces eran sólo suyas o si, por el contrario, era en realidad "la" explicación del voto real de su grupo (¿pudo CP votar afirmativamente la creación de RTVV pero tan sólo para evitar un más que seguro "desgaste electoral", a nivel autonómico, al respecto?). Pero, ¿qué sostuvo el diputado Marco Molines? Cuestiones como éstas:

- que "el voto afirmativo" de CP a la ley "no supone el que aprobemos la creación del Tercer Canal de la TV autonómica, de la misma manera que, aunque hubiéramos votado en contra, tampoco hubiera supuesto que nos oponíamos (...) La creación de ese Tercer Canal... no corresponde a estas Cortes (...) Porque, en definitiva, esta ley lo único que determina es la regulación de su organización y el control parlamentario de la misma. Por tanto, la oportunidad o inoportunidad de creación de ese Tercer Canal (...) únicamente compete y únicamente debe asumir el Consell''.

- que “hay otra cosa que nos preocupa todavía mucho más que lo anterior (y que) personas más autorizadas que yo han puesto de manifiesto en muchas ocasiones, la grave inconsecuencia de que un servicio público, como aquí en España es la TV, se financie (...) con cargo a la publicidad; hay que considerar lo que para otros medios de información, fundamentalmente para la prensa escrita, puede suponer la creación de este Tercer Canal Autonómico y el sustraendo que para el mercado de publicidad, que para la oferta de publicidad puede tener...

- que “no estamos de acuerdo en cómo se manejan los términos jurídicos (...) Porque aquí hay fallos, por no citar todos, verdaderamente importantes, (como) después de decir que el objeto de la ley es la creación del Ente Público para la gestión del Tercer Canal, no hay ningún artículo donde se diga que se crea... (Más algo que personalmente considero clave:) Y si se ha creado, porque debieran ustedes haber establecido una Disposición Final como la que establecía la proposición de Ley de nuestro grupo y que fue rechazada aquí, que decía que esta Ley entraría en vigor el día siguiente de la publicación oficial de la concesión de ese Tercer Canal autonómico (...) porque el Gobierno a lo mejor no nos lo concede, a lo mejor o a lo peor (...Concluyendo) Señores socialistas: Por supuesto, su ley no nos gusta. Decía nuestro Portavoz en la sesión del 10 de mayo que ustedes habían tardado dos meses en copiar nuestra Ley. Nosotros les decimos aquí que nosotros hubiéramos preferido que hubieran tardado más de dos meses, pero que la hubieran copiado bien. *Consecuentemente* (sic), hemos votado sí...”

Que la postura de Marco Molines, miembro del Consejo Asesor de RTVE hasta su retirada de la política autonómica en la presente legislatura, no era fruto de un día a las puertas del verano (ni probablemente tampoco exclusiva a título personal) se ratificaría con posterioridad en varias ocasiones, especialmente buscando el eco de sus planteamientos en la prensa y, de manera significativa, coincidiendo con el parón político planteado desde Madrid en 1985. Parón del que sería ilustrativo el recurso de inconstitucionalidad planteado inmediatamente ante el Constitucional por el Gobierno en lo relativo al término “cable”, en un contexto, por demás, de austeridad económica frente al déficit pero, no menos cierto, ante los importantes eventos políticos que se avecinaban por entonces (ingreso en la CE, entre ellos).

En el caso valenciano se padecía en carne propia, en efecto, la mentalidad centralista con que se redactase la Ley de Terceros Canales, en especial por su disposición adicional primera que reservaba “en exclusiva a RTVE para todo el territorio español los sistemas de emisión y transmisión mediante *cable*, satélite o cualquier otro procedimiento de difusión destinado mediata o inmediatamente al público”. La posibilidad del cable, recogida por un inciso del artículo 15.5 de la Ley 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública de RTVV, se había suspendido inmediatamente (el 17 de octubre del mismo año) mediante providencia del Tribunal Constitucional y ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central. El alto Tribunal mantendría la suspensión, pese a las alegaciones presentadas por la Generalitat Valenciana, por Auto dictado el 7 de marzo de 1985... Criterio que se mantendría por el Constitucional, de hecho, en su fallo de febrero de 1988 <sup>(59)</sup>, pese a que la disposición adicional quinta de la LOT ya implicase para entonces (por exigirlo así la previsión de aparición de la TV privada) la derogación de la adicional primera ya

referida de la Ley 46/1983 (ley que, por demás, continúa señalando que los terceros canales transmitirán la señal a través de ondas).

No es de extrañar, por ello, que Marco Molines apenas tardase en reincidir, como haría en la Sesión de Cortes Valencianas de 7 de noviembre de 1984, en la estrategia de desgaste que para el Consell representaba dicho parón “desde Madrid”:

. Pregunta número 497/84 dirigida al Conseller Blasco, sobre declaraciones de éste a “Las Provincias” en el sentido de que el proyecto de la TVV ya no era su proyecto, insistiendo que en la creación del Tercera Canal “únicamente decidió el Consell (...). Esto puede haber trascendido de una forma ambigua o equívoca a la opinión pública”. El Conseller, por su parte, contestó que RTVV era desde el mes de julio anterior un compromiso institucional, del Consell y de las Cortes Valencianas, añadiendo que podía afirmarse “que la TVV va a tener una vinculación orgánica y funcional de las Cortes Valencianas. Mucho más nítida de la que pueda establecerse con el Consell en general y con la Consellería de Presidencia en particular, que se limita a una mera adscripción administrativa”. Marco Molines, en fin, ratificaba por su parte que “yo creo y nuestro Grupo Parlamentario cree, que, efectivamente, ese apoyo sin fisuras que debían haber dado las instituciones de la Generalitat a la TV Autonómica valenciana no se ha producido”<sup>(60)</sup>.

En la misma sesión anterior de Corts de 7 de noviembre de 1984, el diputado del Grupo Popular (por entonces) formuló la pregunta 498/84 sobre si era intención del Consell “informar a estas Cortes sobre el contenido y conclusiones del estudio de viabilidad realizado sobre la Televisión Autonómica Valenciana”, aludiendo a lo publicado por “Hoja del Lunes” (23-7-84) sobre un estudio en tal sentido “de cinco tomos, con mil folios, por la empresa de Consulting Electronic TELLING”. Rafael Blasco matizaría, en su contestación, que no era un estudio de viabilidad “sino que son unos estudios de planificación” y que, “efectivamente, es intención del Consell informar a estas Cortes”. (La tardanza en hacerlo -por más que se sintetizase por M<sup>a</sup> García Lliberós y A. J. Sarrià en su ponencia al I Congrés d'Economia celebrado en diciembre del 84 y de que hablaremos más adelante- provocó sin embargo la interpelación, el 3 de abril de 1985, de Palomares Vinuesa en representación del Grupo Comunista... así como la petición del propio Blasco de comparecer en Comisión por entonces por tal motivo).

. Con la pregunta 499/84, el diputado popular cuestionaba “por qué razón el Consell solicitó el Tercer Canal de TV Autonómica antes de tener a su disposición el estudio de viabilidad o de planificación (...) para ver si es conveniente o no es conveniente la creación de este Tercer Canal”, contestando el conseller en términos no menos sugerentes: “Creo que es un proceso largo (...) y que esto, indudablemente, va a redundar en que no demos ningún paso en falso”. Por demás, según Blasco, la solicitud de concesión con anterioridad a los estudios de planificación se efectuó “con el fin de que la Comunidad Valenciana entrara en las previsiones del Plan Nacional de Cobertura que el Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley (de Terceros Canales), debía redactar”.

. La pregunta 500/84 formulada por Marco Molines en la misma sesión, sobre “Concessió pel Govern Central de la petició formulada pel Govern Valencià”, al objeto de saber “si éste,

que como se ha dicho aquí ha solicitado en dos ocasiones al Gobierno Central la concesión el Tercer Canal Autonómico de TV para la Comunidad Valenciana, ha tenido alguna noticia oficial u oficiosa de la actitud del Gobierno”; y una vez claro que es el Gobierno de la Nación quien debía otorgarla en forma de Real Decreto, conllevó la polémica jurídico-política sobre las condiciones de la concesión: mientras Blasco se interrogaba “hasta qué punto alcanza la discrecionalidad para regular” tales condiciones por parte de la Administración Central, Marco Molines puntualizaba que la Disposición Adicional 6ª de la Ley 46/1983 del Tercer Canal “dice ‘concederá’, no ‘otorgará’. La Disposición Adicional 6ª que dice ‘otorgará’ es la del Estatuto de Autonomía”. A lo que Blasco repuso “es cierto y tengo que reconocerlo”.

Marco Molines instituiría, y defendería en el pleno autonómico de 27-12-84 por razones similares a las apuntadas, la enmienda nº 25 del grupo Popular, de supresión en la Ley Presupuestaria para 1985 de la totalidad de los créditos afectos inicialmente al capítulo VI, de inversiones reales, en el programa 363 de “Radio y Televisión” (que más adelante se retomará en detalle). Y denotativo de su interés por frenar el proyecto RTVV, sumando la postura de su Grupo desde Valencia -que no restando- a la presumida, por mera ambigüedad calculada, del Gobierno central. El socialista Fenollosa, en su turno en contra, le achacaba no en vano que “en el PEV vostés també tenien l’oportunitat d’haver esmenat aqueixos vuit-cents trenta-tres milions de pessetes i vostés no ho han fet, incomprendiblement (...) Possiblement siga que la qüestió seua estiga en que el que no volen és que hi haja una RTV pública dels valencians i per a tots els valencians. El que passa és que s’han equivocat, se’ls ha passat el temps de fer-ho en el PEV i ara ho fan en els Pressupostos del vuitanta-cinc” <sup>(61)</sup>.

El diputado Marco Molines, de nuevo, defendería el 7 de febrero de 1985 una Moción del Grupo Popular cuyo objetivo era “que las Cortes Valencianas soliciten del Consell el que éste exponga ante el Pleno de las Cortes, para que éstas las debatan y se pronuncien sobre ellas, las medidas que piensa adoptar en cuanto a la Televisión Valenciana”, entendiendo por tal “tanto en lo que respecta al Canal Autonómico como a la posible programación a través del Canal de UHF de RTVE”. Y entre sus dudas particulares estaba ésta: “¿Va a insitir (el Consell) en el Tercer Canal autonómico de TV o va a renunciar a él, siguiendo las apreciaciones del Sr. Presidente del Gobierno de que las TV Autonómicas no son prioritarias y se va a dar vía libre a la TV Privada?”. La moción sería rechazada por la mayoría socialista, frente a los votos de populares y comunistas <sup>(62)</sup>.

Marco Molines presentaría todavía, el 15 de mayo del mismo año 1985 (DSCV, nº 66), una interpelación al Consell sobre el “nombramiento de Delegado Territorial de RTVE en la Comunidad Valenciana” y por tanto sobre “descentralización territorial de RTVE”, luego de haberse aprobado por Ley 5/1985, de 23 de marzo, la “concesión de un crédito extraordinario para financiar los gastos del Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad Valenciana”...

La moción subsiguiente a la interpelación, el 29 de mayo (DSCV nº 69), sería defendida ya, no obstante, por Rita Barberá, que asumía las riendas también en lo relativo al “asunto TVV”. Pero a tan significativo relevo en el grupo Popular de las Cortes Valencianas, acompañaría la remodelación general de denominación y estructura de las Consellerías efectuada por Joan Lerma en julio de ese mismo año 85. Remodelación explicada por el presidente ante las Cortes Valencianas por la aceleración del proceso de transferencias y, en consecuencia, por una mayor apertura al



ciudadano: “Abans teníem tres Conselleries que es dedicaven al Treball intern i cinc que prestaven serveis al ciutadà, i ara tenim dues Conselleries que es dediquen al treball intern i sis que presten serveis al ciutadà”<sup>(63)</sup>. En definitiva, se creaba Administración Pública, se desgajaba en dos Sanidad y Trabajo y desaparecían como Consellerías Gobernación y Presidencia (donde se incluía una Dirección General de Medios de Comunicación Social que había dado cobertura técnica al proyecto RTVV y que pasaba, a partir de entonces, a depender del Gabinete del Presidente): la estructura que aun persiste, por tanto, si bien RTVV deja de ser competencia directa de la DGMCS desde abril del 88, tras la constitución del Consejo de Administración del ente público. Para entonces, junto a una estructura de Consellerías más gestoras que no negociadoras de competencias, Joan Lerna dejaba claro que una línea maestra de la remodelación la constituía “una participació més directa del President de la Generalitat en la gestió dels assumptes públics”.

Entre tales asuntos, cabe suponer, el propio proyecto de RTVV. Un proyecto que el mismo verano del 85 veía surgir en Valencia la experiencia privada de “VALVIPRI” (pese a las dudas iniciales, pronto clausurada por Eugenio Burriel desde la Delegación del Gobierno) y que, una vez superada -a nivel autonómico cuando menos- la batalla jurídica, seguiría con todo siendo objeto de polémica política: *cada vez más* claramente “en y desde” la propia prensa valenciana -pero sin limitarse a ella, claro es- arrancando, de manera significativa, con la “polémica Castejón” en el verano de 1986; pero también *cada vez menos*, en intensidad, conforme se alargaba el periodo de “hibernación administrativa”, defendido a la postre como “mal menor” -aun no sin fisuras internas- desde/por la DGMCS, a la sombra del vaivén de una polémica (TV pública vs. privada) que en su guadiana particular terminaría afectando al no menor vaivén de la intentona por levantar un Tercer Canal federado como alternativa al modelo de TV autonómica pesada que representaban EUT, TV3 y TVG. Vendrían después, una vez ya con luz verde los proyectos de LTVP y PTTP, los primeros síntomas de un viraje en el proceso de descentralización de la televisión pública en España que preanunciaban la práctica imposibilidad para RTVV de una nueva marcha atrás: las nuevas pugnas tendrían a su vez un carácter más “doméstico” y de nuevo circunscrito al ámbito estrictamente autonómico que evidenciaban la exclusiva abierta para aquellos intereses, políticos o económicos, que de inmediato tomaban posiciones ante las decisiones venideras (concursos de equipamiento, nombramientos varios, etc).

Un dossier de prensa mínimo, desde entonces hasta la constitución de los órganos de gobierno de RTVV, deja ver la vertebración temática (básica) que nutriría el debate periodístico en paralelo, dejando al margen las noticias relativas a TV locales valencianas y asuntos conexos:

- *Polémica Castejón*, sobre el supuesto bajo nivel de los profesionales del audiovisual valencianos (Verano 86).
- Canal confederado vs. TVV original (otoño 86)
- III Trobades d'Informació a la Comunitat Valenciana: “presentación en sociedad” del proyecto TVV (abril 87).
- Intelectuales a favor de TVV escriben al ministro Maravall (mayo 87).
- TVV, tras las segundas elecciones autonómicas (15-J-87): de eje central en la contienda electoral al relevo en la dirección del proyecto.
- Expectativas laborales y empresariales: reacción al hilo de Mercafilm (octubre 87).
- “Movida” política: primeros pasos para el Consejo RTVV y nuevos miembros en el

Consejo Asesor RTVE (octubre 87).

- Equipamiento TVV: *polémica Lliberós-Rivas* (no explícita), 1ª parte (octubre 87).
- Inundaciones 87: TVV como prioridad discutible, o *polémica Ciscar* (noviembre 87).
- *Polémica Rivas*, 2ª parte (diciembre 87).
- Primeros síntomas de la aceleración de un proyecto con competencia pública: TVV y TV3-TVE (febrero 88).
- Amadeu Fabregat, director “in pectore” para el PSPV-PSOE (febrero 88).
- Constitución del Consejo de Administración de RTVV, ¿primeros despropósitos? (marzo 88).
- Dos directores en primavera: Fabregat a RTVV y María García-Lliberós a RTVE en la Comunidad Valenciana (abril 88).

Sería en el contexto preciso que todo lo anterior dejaba presuponer (un contexto de poder, político pero también económico) que comience la cuenta atrás efectiva para TVV. Cuenta atrás efectiva, entre otros, en el sentido de que es entonces cuando el proyecto abandona la tutela administrativa de la DGMCS y comienza a dotarse de la autonomía organizativa mínima consustancial a su “etapa de despegue”, ya desde una perspectiva básicamente empresarial. De los cuatro *pasos definitivos* que a efectos de dicha “transición” señalase María Gª-Liberós, a comienzos de 1988, tres se darían de inmediato en primavera:

- Acuerdo Consell-RTVE, suscrito en febrero del 88 por Lerma y Miró, para la *reforma y ampliación de la red básica*: RTVV financiará la instalación de transmisores propios en la red de TVE a cambio de liberarse por unos años del canon a pagar por su utilización, además de usar conjuntamente los “contenedores” o casetas;

- Constitución del *Consejo de Administración de RTVV* al mes siguiente, en marzo. No puede obviarse al respecto lo polémico de la constitución -sin duda el primer error serio desde una perspectiva progresista- de dicho Consejo: los grupos IU y UPV quedaron marginados finalmente, tras el veto del resto de las fuerzas políticas valencianas a su candidato inicial, Miguel Angel Villena, con la incalificable excusa de ser periodista; al tiempo que la recomposición de los sectores dominantes en el PSPV-PSOE arrojaba una solución marcada por el oficialismo y la acusada vinculación de casi todos sus miembros a la ciudad de Valencia. Finalmente, los socialistas cuentan con mayoría en el Consejo (5 miembros), frente a 2 de AP y 1 cada uno de UV y CDS. Véase al respecto el Cuadro anexo, reelaborado a partir de lo publicado por la revista “El Temps” coincidiendo con la fecha de su constitución: 16 de marzo de 1988.

- Y, en tercer lugar, se cuenta ya con *licencia para emitir*, por fin concedida por el Consejo de Ministros del 8 de abril, en la misma semana que socialistas y populares apoyaban desde el Consejo el nombramiento de Amadeu Fabregat como Director General de RTVV.

En cuanto a la inauguración y puesta en funcionamiento del *Centro de Producción de Programas* -cuarto punto de los señalados por Gª Lliberós- se pondría en marcha con un mes escaso de retraso sobre el calendario previsto por la ya ex-directora de la DGMCS: 15 de septiembre de 1988 para terminación de la obra civil de Burjassot (con presupuesto por encima de los 1.000 millones de pesetas, si bien con sobrecostes según la prensa), y 1 de octubre del mismo año para la entrega

## CONSEJO DE ADMINISTRACION DE RTVV (Constituido 16-Marzo-88)

Fuente: "El Temps", 14-3-88.  
(Reelaboración propia).

	PROFESION	OBSERVACIONES
LEONARDO RAMON SALES (UV)	Exportador de cítricos (Camp de Morverdre)	Candidato en junio del 87 a las elecciones europeas por UV Conseller de Comercio por UCD con Albiñana, ex-presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)
EMILIO FERNANDEZ SIERRA (AP)	Empresario constructor (Benidorm)	Presidente de AP en Benidorm. Responsable técnico de la última campaña electoral de su partido
MANUEL TARANCON FANDOS (AP) - Vicepresidente -	Funcionario en excedencia del Mº de Trabajo, trabaja para el grupo parlamenta- rio de AP (Valencia)	Licenciado en Filosofía y Letras por el Colegio Universitario de Castellón. Conseller de Agricultura por UCD con Monsonís Sobrino de Monseñor Tarancón.
ARNALDO MARTINEZ CALVO (CDS)	Profesor de Historia del Instituto de Bachillerato (Alicante)	Ex-delegado de Información y Turismo en Alicante en la última etapa de UCD. Milita en el CDS procedente del PRD (en el que ingresó procedente del PDP).
MANUEL PRIETO BARRERO (PSPV-PSOE)	Inspector de Trabajo y directivo de empresa. (Valencia) Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales	Ex-subsecretario de la Presidencia de la Generalitat Valen- ciana. Próximo al PSOE y políticamente cercano a García Miralles. Hijo del general Prieto de la guardia civil.
MARIAN GILABERT AGUILAR (PSPV-PSOE)	Profesora de EGB (Valencia)	Militante de FETE-UGT. Asesora personal de Cipriano Ciscar en temas educativos. Secretaria de la Asociación de Mujeres Progresistas y del Consell Escolar Valencià.
ENRIQUE LINDE PANIAGUA (PSPV-PSOE) - Presidente -	Catedrático de Derecho en la Universidad de Valencia (Valencia)	Militante del PSOE, desde las filas del PSP, y trabajó en la Secretaría General Técnica del Mº de Justicia y en el Banco Exterior de España. Amigo del Ministro Fernández Ordoñez. Ha sido asesor de Juan Lerma.
JOSE Mª GIL SUAY (PSPV-PSOE)	Director Técnico de la Cámara de Comercio de Valencia, como Decano del Colegio de Economis- tas. (Valencia)	Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Políticamente próximo a Lerma, aunque no militante del del PSPV-PSOE, cuenta con el visto bueno de todos los - partidos de centro-derecha y de la CEV.
CARMEN B. GOMEZ-MARCO PEREZ - Secretaria -	Licenciado en Derecho. Auxiliar Administrativa en la Consellería de Agricultura y Pesca.	Afiliada al PSPV-PSOE, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Progresistas. Considerada del sector lermista.

definitiva del equipamiento técnico sacado a concurso en su día por valor de unos 2.300 millones (clave por cierto de la polémica Manuel Rivas/Telling-Lliberós).

Una vez completada la infraestructura anterior, el calendario contemplaba el inicio de las actividades productivas -los programas “números 0”- para el 1 de noviembre de 1988, fecha que inicialmente se retrasaría del 9 de octubre del 88 a febrero del 89, y finalmente al verano del mismo año, una vez resueltas las primeras contrataciones de personal y avanzado en parte el programa de formación subsiguiente, siendo el 9 de octubre de 1989 el definitivo “punto cero real” de sus emisiones regulares. Tal sería el calendario de “lanzamiento”... Las sucesivas demoras afectarían a alicantinos y castellonenses, en mayor medida, por cuanto los transmisores del monte Aitana y del Bartolo (para cubrir las áreas metropolitanas de tales capitales) se instalarían más tarde del mes de abril del 89, que era la previsión inicial: mientras que el transmisor de Torrent, para el área de l’Horta valenciana, tampoco se instalaría a finales del 88 (fecha prevista) pero sí desde luego meses antes del comienzo efectivo de las emisiones regulares... Producción, emisión y transmisión por ondas desde el CPP de Burjassot (hasta el 80% de la población) serían posibles, en todo caso, en ese corto plazo relativo.

### 2.1.2. Un proyecto empresarial: cuestión de “modelos”.

La gestión (empresarial) del proyecto seguiría en todo caso, en la primavera de 1988 y una vez constituidos los órganos de gobierno de RTVV, a la batalla jurídico-política inicial. Pero tampoco partirá de cero: también tiene su historia. Los antecedentes en tal sentido específico, ligados a la *historia presupuestaria* del proyecto, cuentan de hecho hasta el punto de haber condicionado una eventual marcha atrás del mismo. Al tiempo que son la fuente documental más elocuente para rastrear los sucesivos tira y afloja presumidos “desde fuera” en su evolución, precisamente en relación con el periodo inicial de *parón exógeno* (1985-87) y posterior *tirón inversor* ya de la mano del PEV-2 (1988), así como en general de su desarrollo discontinuo, sostenido -a la postre- por “los hombres del Presidente” y más en concreto por el equipo aglutinado en torno de María García Lliberós desde la DGMCS de la Generalitat.

Bastará, para el análisis pertinente, con un simple repaso de los Presupuestos autonómicos ligados al programa “Radio y Televisión” (centrado desde un primer momento en el objetivo TVV), desde 1984 a 1988 inclusive; repaso que cabe contrastar mínimamente -en lo relativo a modificaciones presupuestarias sobre todo- con las Liquidaciones relevantes a tal fin igualmente disponibles (1985 a 1988). Repaso y contraste que, en cierto detalle, se refieren a continuación, siempre a partir de la fuente documental que representan los distintos documentos presupuestarios editados por la conselleria de Economía y Hacienda <sup>(64)</sup>.

En el ejercicio **1984**, en que se alumbrará el proyecto RTVV, la dirección general de Medios de Comunicación Social (DGMCS), ya con María García-Lliberós al frente, figuraba adscrita a la conselleria de Presidencia (Rafael Blasco), gestionando entre otros Programas presupuestarios el 035, de “Cobertura de comunicaciones tele y radioeléctricas”, así como el 200, de “Desarrollo de la comunicación social”:

\* Entre los Objetivos del 035, el documento presupuestario recogía el relativo a “iniciar la instalación de la red de emisores y radioenlaces para la cobertura del tercer canal en el ámbito de la Comunidad Valenciana”. Y entre sus Actividades:

- El estudio técnico de necesidades en la red de transmisiones (del 2º y 3º canal), y
- Preparación del convenio entre RTVE, Consell, Diputaciones y Ayuntamientos para culminar y financiar la cobertura completa de la *red de RTVE* en la Comunidad Valenciana.

\* El Objetivo declarado del Programa 200, por su parte, era “impulsar la elaboración de las bases legislativas, técnicas, financieras y de formación profesional para la *creación de RTVV* y de los servicios de radiodifusión y TV dependientes del Ente Público”. Encontramos por tanto, en los Presupuestos para 1984, la primera constatación de que las intenciones del Consell efectivamente aspiran a un canal autonómico de TVV. Las Actividades previstas en el mismo programa 200 avalan y clarifican, tras las primeras elecciones autonómicas del 83 y aun antes del debate en Cortes Valencianas sobre la acometida jurídica pertinente al proyecto, dichas intenciones:

- Preparar los anteproyectos de: Ley de Creación del Ente RTVV, Estatutos de TVV SA. y RAV SA. y Ley estatal de concesión del Tercer Canal para la Comunidad Valenciana.
- Preparativos de los convenios: con el IORTV (formación profesional) y con RTVE (para prestación de servicios y archivos).
- Impulsar, financiar y gestionar diversos estudios (cooperativa de doblaje, cooperación técnica con otras CCAA, etc) y concursos públicos (redacción de anteproyecto técnico, plan de creación de un centro de producción de programas, etc).
- Documentación compartida con otras CCAA sobre medios de comunicación social.
- Organizar Jornadas sobre Medios de Comunicación Social.
- Primeros premios de Periodismo de la Comunidad Valenciana.
- Ayudas a Asociaciones profesionales de periodistas.
- Gestionar la localización del suelo público idóneo para la ubicación de RTVV.

Pese a que los programas 035 y 200 compartirán recursos de Personal, ascendiendo el coste conjunto previsto de ambos programas a 52,7 millones de pesetas, la intención inicial preanunciaba el interés por no improvisar: sino todo lo contrario...

Durante el ejercicio presupuestario 1985, tras el decreto 114/85 de 25 de julio, la DGMCS pasa a depender -ya se ha dicho- del Gabinete del Presidente (con Mariano Castejón) al desaparecer la consellería de Presidencia en el “primer reajuste” realizado por Joan Lerma. Aparece por vez primera, en todo caso y con la Ley 7/1984 ya en vigor, un programa específico de “Radio y Televisión”, el 363, con los siguientes Objetivos:

01. Gestión de las competencias de la G.V. en materia de radiodifusión y TV -transferidas o propias en virtud del desarrollo legislativo del Estatuto de Autonomía.
02. *Impulsar la creación y puesta en marcha de los servicios públicos de radiodifusión y televisión de la G.V.*
03. Fomentar el desarrollo de la radiodifusión local de carácter comarcal o supramunicipal.
04. Desarrollar las formas de cooperación establecidas con los servicios públicos del Estado -RTVE- para la ampliación de la programación regional de los mismos (Aitana), etc.

Según los mismos *Pressupostos 1985*, los “Ajustes de las operaciones de capital del periodo 84/85 del PER” (es decir, del Programa Económico Regional, del PEV-1) se reflejaban como sigue:

Area	Op. Cap. PER 1984/85	Adelanto 1984	Otros ajustes	Dotaciones PER al Pto. Op. Cap. 85
Radio y TV	833,3	-	-	833,3

(millones ptas)

Si presupuestación equivale a “previsión inicial”, debiendo en este caso coincidir en el tiempo -por el calendario habitual de elaboración procedimental de los presupuestos- con la aprobación en Corts de la Ley de Creación de RTVV, la “ejecución” efectiva de la misma toparía a lo largo del año, sin embargo, con el parón exógeno ya referido. Pero de lo que no cabe duda, no obstante, es del carácter *exógeno* del mismo, a la vista de la relación de créditos afectos al capítulo VI, o de Inversiones reales previstas, sintomática de las prioridades por que se apostaba en la presupuestación del Programa 363:

Crédito	Denominación	Importe	Detalle
621	Cons. Ed. Ins.	500.000	Montaje de Centros Emisores,
645	Otro Equipo	200.000	Estudios y de informativos
647	Mqu. Vehíc.	32.300	de Valencia y Alicante.
653	Mob. equ. ofi.	5.000	Estudios de Castellón,
655	Otro Equip.	5.000	corresponsalías y Equipam.
671	Est. Plan. Norm.	90.000	Básico RTVV (1ª fase)

(miles ptas)

A partir del ejercicio presupuestario de 1986, del Programa matriz 363 el Objetivo 03 se incluirá dentro del programa 361, constituyendo el Objetivo 04 un programa aparte (el 364, “Consejo Asesor RTVE”, tras establecerse éste por las Cortes Valencianas). Los *Objetivos 01 y 02* (gestión de las competencias de la Generalitat en materia de radio y TV con arreglo al Estatuto, y creación y puesta en marcha de TVV y RAV) serán, desde entonces, los únicos del Programa “RADIO Y TELEVISION”: *Programa 363* durante los ejercicios 1986/87, que más adelante, con el PEV-2 recién aprobado, se reconvierte en el 462.20 con los Presupuestos para 1988, tras la segunda remodelación de Presidencia subsiguiente a las segundas elecciones valencianas y con el viraje “anunciado” por el PSOE en materia de TV autonómicas luego de cerrarse definitivamente el proyecto de LTVP:

## COSTE DEL PROGRAMA 363 / Ejercicios 1986 y 87.

Capítulos	Valor 85	86/85	PRESUP-86	87/86	PRESUP-87
I. Personal	23.895	11.810	35.705	-5	35.700
II. Funcionam.	28.690	8.655	20.035	38.492	58.527
IV. Tran. corr.	-	50.000	50.000	-34.000	16.000
VI. Inversion	832.300	-732.300	100.000	1.466.660	1.566.660
<b>TOTALES</b>	<b>884.885</b>	<b>-661.835</b>	<b>205.740</b>	<b>1.471.147</b>	<b>1.676.887</b>

(miles ptas)

## COSTE DEL PROGRAMA 462.20 /Ejercicio 1988.

Capítulos	PRESUP-87	88/87	PRESUP-88
I. Personal	35.700	13.950	49.650
II. Funcionamiento	58.527	5.333	63.860
IV. Transf. corrient.	16.000	359.000	375.000
VI. Inversiones real.	1.566.660	2.286.340	3.853.000
VII. Transf. capital	-	1.726.000	1.726.000
VIII. Activos financ.	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>1.676.887</b>	<b>4.390.623</b>	<b>6.067.510 (*)</b>

(miles ptas)

(\*) Siendo Mantenimiento 88 = 113,5 millones.  
+ Asignación PEV/88 = 5.954 millones.

Es preciso recordar que si los presupuestos de 1986 son los que mejor evidencian el “parón” inducido de que ya se ha hablado, no es menos cierto, a su vez, que el total desembolsado hasta 1987 inclusive (fecha clave por tantos motivos) vía Presupuestos de la Generalitat y a través de la DGMCS, no es un total que derive de la simple suma de los diversos totales *iniciales* por ejercicio: 52,7 millones en 1984, 884,8 en 1985, 205,7 en el 86 y 1.676,8 en el 87 (lo que arrojaría hasta entonces un total hipotético de 2.740 millones de pesetas). La cantidad hasta esa fecha, ciertamente, es menor. Pues los 832,3 millones presupuestados en Inversiones al comienzo de 1985, que ascenderían a 969,2 tras las modificaciones presupuestarias según la *Liquidación* correspondiente (vid. Cuadro anexo A, según reelaboración propia), y tras el bajón inversor apreciable de nuevo en 1986, volverían a contabilizarse (como dejan presumir las Liquidaciones 86/87, de centrarnos en el capítulo VI) en el presupuesto inicial para el *ejercicio 1987*, tal y como el propio documento presupuestario para dicho ejercicio reflejaba en su detalle por créditos (y más en concreto el crédito 623 relativo a Construcciones, que recoge el Cuadro anexo B):

## A) LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 1985-87:

Programa 363: "Radio y Televisión" / INVERSIONES (Cap. VI)  
(Ejercicio corriente)

	Presup. inicial (1)	Modificac.	Presup. definitivo (2)	Cdtos. dispuesto (3)	Pagos ordenados (4)	% Ejecución ----- 3/2 4/2	
85	832,3	136,9	969,2	969,1	156,1	100	16
86	100,0	813,0	913,1	863,9	151,1	94	16
87	1.566,6	664,0	2.230,6	1.993,5	702,0	89	31

(millones ptas)

## B) PRESUPUESTOS 1987 / Programa 363 ("Radio y TV", DGMCS)

Crédito	Importe (miles ptas)	Detalle
471	16.000	Transf. ctes. a familias
623	180.300	Construcciones
623	833.300	Construcciones
631	453.000	Adquisición maquinaria
673	100.060	Adqu. inmovilizado inmaterial

TOTAL Cap IV-VI = 1.582.660

No menos clarificador del "salto" cualitativo que los Presupuestos para 1988 representan en el mismo capítulo VI de Inversiones reales previstas, resulta el detalle por créditos, en referencia ahora al Programa 462.20, ya a cargo del Gabinete del Presidente (con Ximo Puig al frente) si bien a la espera de lo que en marzo de ese mismo año -y de ahí la complejidad interpretativa que se deriva de la Liquidación correspondiente al ejercicio, que se recoge más adelante por el Cuadro global de Liquidaciones para el periodo 1985/88- pasaría a ejecutarse como propio de RTVV (tras la constitución de su Consejo de Administración):

## PRESUPUESTOS 1988 / Programa 462.20 ("Radio y TV", Gabinete Pdte)

Crédito	Importe (miles ptas)	Detalle
623	956.626	Obra civil
631	2.004.875	Equipam. E.T. CPP-TVV
641	71.004	Infraestructura Red básica TVV



A los 3.032 millones de pesetas que suman los tres créditos anteriores habría que sumar los 70 destinados a Equipamientos de Locales del CPP-TVV de Burjassot, así como los más de 750 millones con que se financiaría en el 88 el Equipo Técnico de la Red básica de TVV (evidenciando, por cierto, el acuerdo alcanzado en febrero como “pactado” de antemano). El nuevo Total del capítulo VI (3.853 millones) coincide no sólo con lo presupuestado según Cuadro previo sino, a su vez, con *la totalidad de la estimación del PEV-2 para inversión* en el proyecto RTVV, síntoma de una aceleración sobrada a estas alturas de mayores comentarios.

Paralelamente, sin contar las ayudas -becas- para formación profesional (14 millones) o a empresas para producción audiovisual (30 millones escasos), que se convocarían en febrero de 1988, destacan en Transferencias Corrientes los 330 millones presupuestados para “gastos corrientes de la Entidad Pública RTVV” (para cobertura del proceso de selección de personal, ante todo, que se avecinaba); así como, en Transferencias de Capital, los 1.480 y 231 millones adicionales para constituir -así se indica expresamente- el capital social de las empresas Televisión Valenciana (TVV SA) y Radio Autonomía Valenciana (RAV SA), junto a los 15 previstos para inversiones y equipos de oficina de RTVV en informática.

De tal información, a modo de conclusión general, cabe presumir que hasta la elaboración por RTVV de sus primeros presupuestos (1989 y 1990, todavía con una clara subvención de capital por parte de la Generalitat), el proyecto habrá supuesto -a finales del 88- una financiación pública que roza los 270 millones en gastos de personal y de funcionamiento: desde el soporte técnico y administrativo que en tal sentido supondrá la DGMCS (si bien tan sólo de sumar como íntegramente dedicados al proyecto los Pagos Ordenados que refieren las liquidaciones 85/87 y los gastos conjuntos de los programas 035 y 200 presupuestados en 1984); con una inversión real superior a 3.850 millones adicionales (de contabilizar los pagos ordenados en capítulo VI para igual periodo más los remanentes que refiere la Liquidación 88); a los que sumar los 1.711 millones presupuestados como transferencias para la constitución del capital social de las sociedades gestoras TVV y RAV (aun cuando el cap. VII, en su totalidad desembolsado en 1988, asciende según la liquidación a 1.949 millones) y a su vez las transferencias corrientes hasta entonces acometidas (unos escasos 100 millones, entre Presidencia y Cultura) para el fomento de la producción audiovisual autóctona, así como los 330 que se preveían en 1988 para gastos corrientes del Ente Público RTVV, entre otros... *En total, unos 6.550 millones en 5 años, entre la indecisión condicionada y la apuesta sin retorno. Esto es, unas 1.800 pesetas ‘per valencià’ (menos de 7.200 ptas para una familia media integrada por una pareja y dos hijos) en el periodo 1984-88*: lo que tampoco es tanto, de compararse -por ejemplo- con las 3.000 pesetas/mes que costaba apuntarse a Canal-10, cantidad similar a la más tarde anunciada por Canal-Plus para el tramo de su emisión codificada, y a la que no pocas familias se gastan, a su vez *al mes*, en visionar cintas de video...

La tarea inmediata para el consejo de administración, y para el director general de RTVV, era ya por entonces (en la primavera de 1988), actuar *con rapidez* en los diversos frentes abiertos por la gestión empresarial pertinente a su *etapa de despegue*: máxime ante la inminente llegada de las televisiones privadas. Pero para ello era preciso resolver la gran cuestión previa: y todo ello ¿con arreglo a qué modelo de TV?

LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS/GENERALITAT VALENCIANA

EJERCICIO (CORRIENTE)	PROGRAMA	CAP.	PRESUPUESTO INICIAL (1)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO (2)	EJECUCION			
						Créditos retenidos (3)	Pagos ordenados (4)	%	
								3/2	4/2
1985 (Acuerdo Conseil 21-3-86)	363	I	21.602	2.292	23.894	13.599	13.599	57	57
		II	28.690	-	28.690	23.896	22.542	83	78
		VI	832.300	136.917	969.217	969.083	156.106	99	16
		TOTAL	882.592	139.210	1.021.802	1.006.579	192.248	98	19
1986 (Acuerdo Conseil 25-5-87)	363	I	35.705	-	35.705	24.784	22.904	69	64
		II	20.035	1.036	21.071	14.525	10.510	69	50
		IV	50.000	-	50.000	29.666	9.768	59	19
		VI	100.000	813.054	913.054	863.891	151.134	94	16
	TOTAL		205.740	814.090	1.019.830	932.868	194.317	91	19
1987	(363) 462.20	I	35.700	2.769	38.469	38.469	38.469	100	100
		II	58.527	5.217	63.744	63.744	49.429	100	78
		IV	16.000	17.879	33.879	33.879	26.470	100	78
		VI	1.566.660	663.982	2.230.642	1.993.479	701.979	89	31
	TOTAL		1.676.887	689.847	2.366.734	2.129.571	816.347	90	34
1988	462.20	I	49.650	-	49.650	38.153	37.545	77	76
		II	63.860	-3.368	60.492	40.081	23.303	66	39
		IV	-	475.000	475.000	473.965	447.849	100	94
		VI	-	3.530.522	3.530.522	2.911.412	1.510.241	82	43
		VII	-	1.948.846	1.948.846	1.948.846	1.948.846	100	100
	TOTAL		113.510	5.951.000	6.064.510	5.412.457	3.967.785	89	65
REMANENTES 88	TOTAL		-	1.505.072	1.505.072	1.497.848	1.322.808	100	88

La propia ex-directora general de Medios de Comunicación de la Generalitat, al aludir a los estudios de planificación redactados por Telling en 1984, había declarado tras la presentación en sociedad del proyecto TVV (en abril del 87) que se habían estudiado para entonces “diversos modelos de empresas públicas”, en los que “la variable que más jugó fue la participación del sector privado valenciano de la producción audiovisual como contribuidor neto a la programación de TVV” (en la ponencia del I Congrès d’Economia, sin embargo, se añadía como factor clave adicional “la mayor o menor descentralización de los servicios”). Parecía saberse, como casi siempre, cuál era el modelo que *no* se quería, pero apenas nadie avanzó por aquella época los rasgos definitorios del modelo por el que apostar. La ambigüedad era -públicamente al menos- la salida más habitual:

“Hemos estudiado TVE, y los canales autonómicos catalán (TV3) vasco (Euskal Telebista) y gallego (TVG). Pero TVV no se corresponde con ninguno de ellos. Es un modelo propio, pues no se identifica con el resto, por concepción, magnitud ni modelo de empresa. Hemos tomado las ventajas de cada uno de los otros modelos (...) El nuestro será el quinto modelo televisivo de España” (MEDITERRANEO, 19-4-87).

Amadeu Fabregat, por su parte, quien en septiembre del 87 aún mostraba su escepticismo (“en TVV hay mucho voluntarismo y mucho optimismo pero carecen de un proyecto serio, no saben cómo es la televisión que quieren hacer y eso es muy grave”: LAS PROVINCIAS, 11-9-87), sostenía medio año más tarde sus primeras apreciaciones sobre *el modelo* a desarrollar en declaraciones (significativamente) a los periódicos de mayor difusión en Valencia y Alicante, coincidiendo con la propuesta de la ejecutiva del PSPV-PSOE en su favor como director de RTVV. Así, tras apuntar que del proyecto “lo que más valoraría es que me lo pudiera creer”, afirmaba con rotundidad que “la diferencia está en el territorio” y la necesidad de “un modelo original para una Comunidad que lo es. Pocas comunidades cuentan con una capital como Alicante” (INFORMACION, 25-2-88). Apreciaciones, sobre un “*modelo plural territorialmente, idiomáticamente y orográficamente*”, que matizaría algo más al día siguiente, pero “despejando” finalmente la cuestión como si de un asunto exclusivo de “los responsables de las instituciones valencianas” (¿no lo era ya RTVV y el propio Fabregat su director general “in pectore”?) se tratase:

“El modelo de televisión que están haciendo en Cataluña es uno de los que se puede tomar. Ellos por ejemplo, pasan de las comarcas catalanas y hacen una programación puramente genérica. Cuando uno está viendo TV3 se da cuenta de lo diferentes que son los catalanes de los valencianos (...).

Modelos de televisión hay muchos. Uno es éste que acabamos de señalar del caso catalán. Otro modelo diferente sería por ejemplo compartimentar un poco los programas por zonas ya sean comarcas o provincias, haciendo una desconexión a cierta hora del día para dar información de cada una de las zonas en cuestión (...) En el caso de Televisión Valenciana hay que buscar la fórmula para meter la complejidad de nuestra Comunidad por el embudo del tubo catódico. Piense que la Comunidad Valenciana tiene una peculiaridad que difícilmente se repite en otras autonomías. Es el caso de Alicante, que poseyendo una ciudad y un potencial económico y social muy grande, no es capital de la Comunidad. y por ello no se va a olvidar su importancia.

Por otra parte, hay que pensar que los responsables de las instituciones valencianas tienen que tomar la decisión política de señalar qué modelo de televisión quieran en cuanto a su aproximación a la realidad. Porque se puede hacer una programación y un estilo que se encuentre totalmente pegado a la realidad activa, o se puede funcionar a un metro o a un kilómetro de esta realidad” (LAS PROVINCIAS. 26-2-88).

Fabregat, por demás, dirá desde un primer momento que “la televisión no tiene por qué ir cinco kilómetros por delante de la realidad. A lo sumo puede adelantarse un metro” (pero sin aludir a cuánto de financiación publicitaria, por ejemplo, cabe considerar por una TV que se pretenda pública sin dejar de ser “realista”, o viceversa). Y en lo relativo a la incidencia futura de las TV privadas, en su opinión “cuantos más canales standar haya para cubrir la oferta general y nacional, tomará mayor importancia el canal de cada comunidad autónoma, porque servirá de contrapeso ante la saturación de la oferta nacional”... En cualquier caso, queda claro que Fabregat hace mayor hincapié en *lo territorial* como carácter diferencial que sumar, en el desarrollo práctico del modelo, al efecto buscado (inicialmente al menos) de servir de “locomotora” al sector audiovisual de la Comunidad.

No es tan paradójico que los modelos inicialmente estudiados por Telling contemplasen tanto una (la de servir de locomotora de un sector autóctono) como otra posibilidad (la de coadyuvar, atendiendo a lo territorial, en favor de una mayor descentralización): bastaría pensar, por demás, en los contenidos descentralizadores que anidaban en el PSOE allá por 1982 (y que en el XXX Congreso de dicho partido reiterase en materia televisiva Antonio López, pero ya con menor fortuna) como para no tener motivos para mostrar extrañeza de ningún tipo. Las dudas son, ciertamente, *antiguas* -y se recrudecen, no con menor certeza, una vez integrados en una CE que camina hacia el Mercado Único: el dilema estaría en si con ello se pretende avalar un neoproteccionismo de todo punto llamado a resultar inoperante en no menor medida que costoso, o si, por el contrario, en ello se busca una fórmula “diferencial” para edificar un sector de futuro (como lo es el audiovisual) pero sin menoscabo -al revés más bien- de la competitividad, nacional e internacional, a que está llamado por meras exigencias de la lógica dominante de las cosas. Lo *novedoso* en la actualidad sería, al respecto, la oportunidad de retomar la descentralización televisiva, que aquí se propone, como baza principal frente a la obsolescencia económica del proyecto y, ante todo, en favor de una competitividad tecnológica que tendría que pasar por no descuidar los ámbitos mesocomunicativos ligados al cable por fibra óptica, opción de futuro que -de no ser así- quedará en manos privadas por más que la CTNE se resista (al igual que en TV convencional le ha sucedido a RTVE). Una baza a no descuidar pensando así en el carácter cualitativo de la inversión: pues tiene que ver, ante todo, con el medio TV como tal.

Retomemos, si no, esa otra historia del proyecto RTVV que cabe rastrear en los planteamientos iniciales de Telling. Pues ya en su estudio de planificación se distinguen los aspectos y criterios “comunes” de los aspectos y criterios “peculiares”, conformadores estos últimos de las “cuatro formas diferentes de plantear el proyecto de la TVV” <sup>(65)</sup>:

a) *Criterios comunes*: sintéticamente,

- El marco jurídico dentro del cual desarrollar el proyecto: Ley de Terceros Canales (hoy sujeto a revisión, al estarlo el Estatuto de 1980 en que se enmarca) y Estatuto de Autonomía (para crear, organizar y estructurar las empresas públicas de radio y TV en el ámbito territorial valenciano), más la Ley de la Generalitat de creación y regulación de RTVV (definiendo la estructura de producción y prestación de servicios a través de las empresas públicas TVV SA. y RAV SA).
- La red de transmisión: competencia de la Administración central, ante la demora del Gobierno por aprobar el previsto Plan Nacional de Cobertura de los terceros canales, lo racional (económica y administrativamente) era el aprovechamiento de la infraestructura - accesos, casetas, torres, etc- de la red de RTVE por parte de RTVV: algo conseguido (a diferencia de otros canales autonómicos como TV3) tras el acuerdo RTVE-Consell en febrero de 1988. No en vano, al tener que emitir forzosamente en las bandas de UHF, “los elementos y diseño de la red óptima (de TVV) coincide en su práctica totalidad con la del 2º programa UHF de TVE”.

La estructura básica mínima de TVV S.A., sea cual sea el tamaño de planta de los centros de producción. En tal sentido, Telling destacaba en su estudio originario de planificación los siguientes elementos de inmovilizado:

- . Centro principal de emisión e informativos (y en su caso Centro de Producción de Programas o CPP), en Valencia o proximidades, con conexión directa con el centro emisor de Torrente para la distribución primaria de la señal de TV.
- . Centros de emisión e informativos en Alicante y Castellón.
- . Corresponsalías en número variable de carácter comarcal, conexas a los centros anteriores (se apuntaban como “áreas de mayores necesidades “las de Alcoy, Elche, Játiva, Gandía y Utiel-Requena).
- . Red de enlaces intercentros y con capacidad de conexión con otras redes (autonómicas, estatales e internacionales).

Tales criterios comunes, en opinión de Telling, “no prejuzgan el tamaño y dimensión de planta de los servicios” y constituyen “el esquema inicial de un proyecto de TV pública valenciana con los objetivos de conseguir una cobertura y atención exhaustiva a toda la población valenciana y bajo unos criterios mínimos de competitividad aplicados en la definición del capital fijo de la TVV” (ibídem).

b) *Criterios peculiares*:

A partir del “esquema inicial” apoyado en los anteriores criterios comunes, el desarrollo de las cuatro alternativas inicialmente previstas por Telling conjugan en diverso grado (no son por tanto

autoexcluyentes) distintos elementos -oásicamente de producción y emisión- que definen exactamente la naturaleza del “producto” surgido de la explotación del haz de ondas hertzianas que constituyen en definitiva el tercer canal. La principal limitación a mi juicio de tales desarrollos sería, por ello, no contemplar en grado bastante la descentralización televisiva en relación con el nuevo modelo (TV convencional vs. nuevas tecnologías aplicadas a la TV) que sobrepasará en un futuro no tan lejano la actual definición del problema.

En cualquier caso, las *cuatro alternativas* de Telling (denominadas A,B,C y D) cabe sintetizarlas, a efectos comparativos, con arreglo al primer cuadro inmediatamente anexo. En términos más cualitativos, dicha comparación cabe resumirla a su vez con arreglo al segundo cuadro, limitándonos por ahora al resumen redactado por Sarrià-Lliberós en la misma ponencia al I Congrés d’Economía (mediante reelaboración parcial propia).

Pese a que la propia María García-Lliberós (en contraste a lo luego mantenido por Fabregat) admitía explícitamente, en la ponencia de referencia, que deberían ser los órganos de gobierno de RTVV quienes decidiesen los criterios de explotación -y por tanto, la programación a emitir- así como “asumir y proponer las decisiones sobre el modelo a adoptar”, es un dato patentizado durante la presentación en sociedad del proyecto (durante las “III trobades d’información a la Comunitat Valenciana”, los días 6 a 8 de abril de 1987) que la aceleración del propio proyecto, a la espera entonces de la concesión por el Gobierno de la licencia para emitir, aceleración que se imprime desde la citada DGMCS -con el respaldo explícito del propio presidente Joan Lerma, como es notorio- conllevaba de hecho la apuesta, por la vía de los hechos consumados, en favor de un modelo de TV que abandonaba toda pretensión descentralizadora -por las dificultades encontradas en materia de infraestructura técnica de apoyo al mismo- y en gran medida (que no total) similar a la *alternativa B* por lo que al modelo empresarial concernía. Una alternativa (de modelo empresarial, se insiste, que no de modelo de TV) que pronto se recondujo por el equipo Fabregat -igualmente, por la vía de los hechos consumados- hacia la *alternativa A*, es decir, hacia el más estricto de “supervivencia empresarial” (sin descartar quizá, dentro del mismo modelo de TV que suponen, sucesivos avances posteriores y efectivos hacia las alternativas B e incluso C). Así se deriva, en concreto, de la puesta en pie del *Centro de Producción de Programas* en Burjassot. Y sin duda de ahí vendría su actual sobredimensionamiento.

El proyecto de dicho CPPTVV, encargado a su vez a Telling SA, no deja lugar a dudas al respecto: basta para ello con echar un vistazo a la redacción que en tal proyecto se hace, por ejemplo, de las líneas de la TVV (en sintonía con la alternativa B que parece la “inicialmente deseada”) y del dimensionamiento final (realizando de una lo previsto en 1984 como a realizar en 2 fases para la misma alternativa) de tal centro en Valencia:

“ *Las líneas de la Televisión Valenciana:*

(...) El horario se establece con un techo de 70 horas semanales y se estructuran dos grandes grupos de programación. El primero constituye la parte fundamental de la emisión y ocupa las horas de audiencia más amplia y por tanto *está diseñado con el objetivo de la máxima captación publicitaria*. Es la programación “regular” (más 50 horas/semana) constituida por productos/programas nacidos con vocación fundamental de entretener e informar de

Fuente: "Ponències", ob. cit. p. 222

ALTERNATIVA	PRODUCCION				EMISION (*)								
	Carácter producción propia	Carácter Informativos	Carácter producción ajena	Sonido dual (dos lenguas)	Estructura emisión	Fases consider.	Horario semanal "objetivo"						
							PROGRAMAC. H./semana		Horas sem. pr. propia (%)	PRODUCCION			
							Reglar	Espec.		Valen.	SVP	Nac.	Extr.
A	-Informativos, retransmisiones, debates, magazines y similares  -Sin soporte técnico para la producción documental y musicales complejos	-Informativos plenos (noticias, reportajes, entrevistas) de ámbito local regional, nacional e internacional.	-Sin discriminación (ficción, dramáticos, documentales, musicales, dibujos) -Equilibrio entre criterios de protección a la industria nacional y de rentabilidad. -Sin fomentar con medios e inversiones a la prod. autóctona.	-Considerado como opción de inversión.  -Doblajes realizados con medios técnicos de TV.	-Emisión única desde Valencia  -Centros de producción en Valencia, Alicante y Castellón	Fase A1	25	-	13	2	-	2	8
						Fase A2	50	-	25	2	-	6	17
							Total: 50 horas/sem. (50%)						
B	-Idem A. -Con recursos suficientes para realizar una programación específica.	Idem A.	-Fomento de la producción autóctona, mediante colaboración con el sector privado. -Posibilidad de creación de empresas mixtas (SVP).	-Idem A.	-Idem A.	Fase B1	30	10	2-	2	4	5	9
						Fase B2	50	20	42	2	9	5	12
							Total: 70 horas/sem. (60%)						
C	-Muy elevada -Todo tipo de programas	Idem A.	-Sin discriminación. -Criterios comerciales -Coproducciones con otras so-	-Fuerte presencia del valenciano.	-Idem A.	Fase C1	30	5	17,5	1	-	5	11,5
						Fase C2	40	10	30	1	-	4	15
						Fase C3	50	20	62,5	1	-	3	13,5
							Total: 70 horas/sem. (55%)						
D	-Idem B.	Idem A.	-Idem B.	-Idem A.	-Emisión fraccionada en parte del horario, con centros de producción y emisión en Valencia, Alicante, Castellón y Gandía.	D1	30	10	2-	2	4	5	9
						D2	50	20	42	2	9	5	12
							Total: 70 horas/sem. (60%)						

(\*) Se somborean los efectos diferenciales de las distintas alternativas en el horario semanal "objetivo"

	PLANTEAMIENTO CENTRAL	PRINCIPAL MODELO DE REFERENCIA	VENTAJAS	INCONVENIENTES
A	- La rentabilidad a corto plazo, objetivo empresarial (Introducción pasiva en el mercado).	TV privadas italianas (Uso de la red durante bloques hor. de mayor audiencia)	-Sencillez y rapidez con que puede implantarse. -La publicidad financiera el coste de los servicios en cuanto la audiencia se consolida mínimamente).	- Dificultad y lentitud con que se incorpora la producción autóctona. - Fuertes costes que puede llegar a suponer el doblaje al valenciano de la producción ajena.
B	- Maximización de la plusvalía social del proyecto  (dimensión y estructura empresarial, con ampliaciones sucesivas, difieren de A por la naturaleza del producto a ofertar).	---- (mejor aprovechamiento de la capac. del canal 3 en horas no de mayor audiencia).	-dimensión del CPP y dotación de medios fijos para cubrir sólo la programación regular de prod. propia (basa para la búsqueda "autofinanciación"). -Ventajas sobre todo por procedencia de producción ajena (política de compras discriminada y dirigida a interiorizar los "efectos de arrastre").	- La infraestructura empresarial ajena a TVV, por la atomización actual del sector valenc. del audiovisual, necesitaría de una mixta Soc. Valenc. de Producción (SVP), o bien la concertación de demanda futura y/o la intermediación financiera para que tal inversión pueda ser exclusivamente privada. - A medio/largo plazo, resultaría preferible deslindar la explotación del canal (distribuidor y exhibidor) de la prod. de programas de entretenimiento (con mayores expectativas de expansión en el sector privado y un mercado potencial más amplio que el área valenciana)
C		TVE (a escala reducida y sin organización regional), o TV3. ... (Idem a B)	A igualdad de volumen de emisión, implica menor dependencia del mercado de prod. ajena, y una autonomía casi absoluta respecto al sector privado. (Favoreciendo una organización vertical del proceso de prod.-emisión-distrib.)	- Menor estímulo a la reorganización del sector audiovisual autóctono. - Y, sobre todo, una mayor inversión pública inicial: *vía alternativa A (expansión lenta) *vía endeudamiento o acumulación de déficits (expansión rápida).
D	- No es una alternativa de modelo empresarial sino de modelo de TV (Aplicable tanto a A, B o C).	Como una "cadena regional" de TV locales, con programación en parte fragmentada	- permite mayor descentralización del medio - facilita acceso y atención informativa independiente de áreas social y económica diferenciadas - posibilita la cooperación económica de las Corporaciones Locales en extensión de red y servicios - y, en suma, un mejor aprovechamiento del canal 3 y mayor pluralidad en TVV.	- Al afectar en lo esencial a la red de emisores y reemisores, exige compatibilizar competencias de Admón. central en materia de red con la potestad del Consell para contribuir a su desarrollo (reabrirla la "batalla jurídica") - Incremento en la inversión en red (inferior por demás al 10% para 4 zonas autónomas de emisión), condicionando la organización interna de los servicios e incrementando ligeramente a su vez los costes de explotación.



forma indiscriminada, para obtener mayor aceptación y audiencia de manera que merced a la publicidad captada ofrezca unos rendimientos suficientes para cubrir tanto los costes variables de su producción como los costes fijos que originan las amortizaciones de capital y el mantenimiento de las instalaciones. Por ello, y dado que uno de los objetivos empresariales internos del proyecto global de TVV es el de la autofinanciación, el dimensionamiento de la infraestructura y medios fijos de producción en el diseño técnico que se realiza en el proyecto, se optimiza en función de la parte de programación “regular” que se ha establecido como de *producción propia*, es decir, la realizada por los propios servicios de TVV.

El segundo grupo se ha definido como programación “específica” y está formado por programas que se dirigen a sectores y colectivos muy concretos, respondiendo a la segmentación de la audiencia. Serán programas informativos matinales, servicios informativos especializados dirigidos al público internacional, programas dirigidos a la agricultura, TV en/y para los centros de enseñanza, retransmisión de actos y fiestas, difusión de actividades teatrales, etc. Esta programación específica, estimada en unas 20 horas semanales, también podrá ser marco experimental de ideas e iniciativas que den lugar a programas futuros de programación “regular”, si su aceptación lo avalara. Finalmente, los recursos necesarios para producir esta programación “específica” serán variables y siempre dependiendo de la cobertura de los programas “regulares” cuya producción sea prioritaria.

#### *Dimensionamiento:*

(...) los criterios anteriores han conducido a planificar el Centro con el siguiente dimensionamiento de Estudios:

- “- 1 Estudio de 800 m<sup>2</sup> con 5/6 cámaras, una de ellas portátil, para la producción de:
  - . Musicales (grabado)
  - . Concurso (directo/grabado)
  - . Programas infantiles (grabados)
- 1 Estudio de 400 m<sup>2</sup> dotado de 4/5 cámaras, una de ellas en EFP para:
  - . Musical (directo)
  - . Debates y magazines (directo/grabado)
  - . Concurso (directo/grabado)
- 1 Estudio de 200 m<sup>2</sup> dotado de 3/4 cámaras para la producción de:
  - . Informativos
  - . Presentaciones
  - . Promociones de emisión
  - . Debates y magazines
- 1 Estudio-Locutorio de 50 m<sup>2</sup> dotado de 1/2 cámaras EFP para la producción de presentaciones y promociones, además de cubrir la función de locutorio de continuidad”<sup>(66)</sup>.

En cuanto a los criterios técnicos, por demás, se alude a la “búsqueda de mayor calidad” que se plasmaría tanto en el desarrollo de la teledifusión directa por satélite cuanto en la sustitución de los sistemas analógicos de producción por sistemas digitales, adoptándose respecto del segundo aspecto criterios de consonancia con el “*período de transición*” que se atraviesa (por razones prácticas y económicas, al entender que la “digitalización” aún tardará en madurar) y considerando el primer aspecto “marginal” en relación con TVV. La ingeniería electrónica planteada por Telling, en fin, está en consonancia con su propuesta de “dualidad funcional” para el CPP-TVV en Burjassot (interrelación técnica entre áreas -técnicas y de oficinas- e independencia funcional), planteando un “germen de organigrama” en torno a las funciones/áreas nucleares del centro: **Producción y Emisión**. Áreas nucleares que, junto al dimensionamiento neocentralista en que se apoya, conviene retener muy especialmente, porque serán condicionantes del diseño organizativo que del “modelo TVV” nos llega hasta hoy.

En consonancia con ello, la *infraestructura central* de Canal 9 se dotará con el tiempo de “cuatro unidades móviles, las dos mayores instaladas en camiones Pegaso Troner <sup>(67)</sup>. Una de ellas con posibilidades de 7 a 8 cámaras, con dotación de audio y vídeo, un equipo electrónico de alta tecnología y preparada para cualquier captación deportiva o de grandes eventos. La segunda está provista -según las mismas fuentes internas- de 5 cámaras. Las otras dos unidades móviles ligeras EFP son para reportajes rápidos y llevan 3 cámaras. Todas estas unidades se completan con una dotación de enlaces móviles para llevar la señal al Centro de Producción para retransmisión de acontecimientos en directo (...) Aparte de las 16 cámaras ubicadas en los estudios, se cuenta con otros 18 equipos de ENG”...

A todo ello había que sumar en todo caso -como algo “dado” a los órganos de gobierno y dirección constituidos en marzo/abril de 1988- el planteamiento implícito relativo a su financiación mixta: “la aportación controlada de fondos públicos con la captación de ingresos publicitarios parece posicionarse como la más sensata”, según manifestó la ex-directora de la DGMCS, aludiendo al “interesante anuncio del debate que en su momento deberá producirse en las Cortes Valencianas cuando se apruebe el presupuesto de explotación para la entidad RTVV” <sup>(68)</sup>. Lo primero se daría por hecho, lo segundo no tanto.

En todo caso, el itinerario que comenzase en julio de 1984 con la aprobación por las Cortes Valencianas de la ley de creación de RTVV, empezaba a concretarse en marzo de 1987 (fecha significativa por tantos motivos) con el inicio de las obras del CPP de Canal 9-TVV sobre una parcela de 15.000 m<sup>2</sup> situada en Burjassot, en las inmediaciones de Valencia, y en la primavera de 1988 se dotaba de la estructura organizativa prevista en aquella ley (consejo de administración, director general del ente público y empresas públicas de radio y TV en forma de sociedades anónimas) para la gestión del “fin de la cuenta atrás” de un proyecto tan esperado socialmente como políticamente deseado. A partir de entonces, el final de la cuenta atrás apenas se distinguiría -desde una perspectiva de gestión empresarial- del “inicio de la etapa de despegue”: cuestión que, más allá de un aparente juego de palabras, conllevaría nuevos conflictos sintomáticos de un camino por recorrer que nos aboca a la más reciente actualidad.

## 2.2. CANAL 9: UN PROYECTO VACILANTE.

El proyecto RTVV es, desde su inicio y ante todo, una inversión pública impulsada y desarrollada por la Generalitat Valenciana con arreglo a su programación económica, programación para la que es competente con arreglo a la Constitución (arts. 38, 131, 148 y 149.13) y el Estatuto de Autonomía (art. 34). La programación indicada, en primer lugar, arranca de unos objetivos sometidos a discusión parlamentaria y a ciertos grados de concertación social. Tales objetivos, previo diagnóstico técnico, condicionan la selección de proyectos que poder concretar en términos de inversión anual, con arreglo a su vez a la distribución competencial y al escenario de recursos de partida. Tal es el caso del proyecto RTVV, pronto traducido en términos presupuestarios como “programa” de inversión cuantificada. Pero, ¿cuál es la justificación -antes política que “objetiva”- de su necesidad? ¿Basta acaso con decir que “la información y el valenciano son las razones que han justificado el nacimiento de RTVV”, como ya se “limitaba” a constatar, coincidiendo con la inauguración de Canal 9 en octubre de 1989, algún que otro órgano oficial de la Generalitat? <sup>(69)</sup>. ¿O será que todavía no se han enterado muchos, incluso “desde dentro” de la Generalitat, de cuanto se perseguía con el proyecto?.

En tal sentido, el segundo Programa Económico Valenciano (PEV-2) es explícito en cuanto a la “necesidad” de RTVV como programa estratégico de infraestructuras básicas (junto a los programas de carreteras y recursos hídricos). Literalmente, como programa núm. 24 para el periodo 88-91, la programación de la Generalitat sostiene al respecto que:

“Este programa persigue dos objetivos de primera magnitud. Por un lado contribuir a reforzar los lazos de comunicación entre todas las zonas de la Comunidad y jugar, en este sentido, un papel complementario al de las infraestructuras terrestres.

No cabe duda que la integración de un territorio pasa hoy en día por la existencia de infraestructuras de medios audiovisuales susceptibles de usos diversos (formativo, educativo, cultural y recreativo) pero todos ellos contribuyentes en gran medida a la consecución de una economía más competitiva y de una verdadera sociedad de bienestar.

Pero quizás la conexión más directa con el sector productivo viene dada por un doble frente, en primer lugar por necesitar las tecnologías de futuro con lo que ello significa de capacitación profesional y de mantenerse continuamente al día, en segundo lugar por su efecto de arrastre a empresas de producción cultural, educativa y recreativa con la vista puesta en bienes y servicios que precedidos de una importante demanda interna tengan impacto en el extenso entorno en que nos movemos. Un enfoque localista en este particular daría al traste con la apertura cultural que se persigue y que nuestro aparato productivo necesita.

Las actividades a desarrollar en este programa serían:

a) Desarrollo de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y creación de las empresas públicas prestatarias de los servicios de radio y televisión previstas en la Ley de la

Generalitat 7/1984.

- b) Extensión de la prestación de los servicios públicos de radio y televisión de RTVV garantizando al menos la cobertura de los núcleos de más de 1000 habitantes.
- c) Interiorizar al máximo el afecto de arrastre de TVV en la economía valenciana en concertación con la iniciativa privada.
- d) Contribuir al crecimiento de las actividades de producción audiovisual de la Comunidad Valenciana a través de la potenciación de la demanda interna de productos exportables y, en su caso, de la coproducción y de la distribución a través de TVV.
- e) Mantener el nivel técnico de RTVV impidiendo su obsolescencia técnica o económica'' <sup>(70)</sup>.

Pues bien, de ese “mandato socialmente concertado” (pues tal fue dicho PEV-2, en relación cuanto menos con los empresarios de Cierval y el sindicato UGT), mandato que en el tiempo concreta el estrictamente “jurídico-político” de su momento fundacional por las Cortes Valencianas (y en el que sobresale la normalización sociolingüística como instancia primaria de legitimación), se han cumplido sin duda -tras finalizar el periodo de “cuenta atrás” que se abriese en la primavera de 1988 y culminase dos años más tarde, tras los primeros 200 días de emisión- los dos primeros apartados (a y b), pero se vienen incumpliendo los dos siguientes, c) y d) -como las más notables deficiencias de su “despegue” empresarial-; y el último (e), si se considera desde una óptica global y no sólo sectorial, amenaza también con incumplirse, yugulando quizá las opciones de futuro del proyecto como tal, al tiempo que en materia de normalización sociolingüística parece haberse apostado por una salida “pragmática” que adolece -como mínimo- de la ineludible justificación “pública” que hace al caso, si no se quiere correr el riesgo, cuando menos, de agrandar -de entrada por ahí- el déficit de legitimación en que socialmente puede incurrirse .

Ello, por demás, en ningún caso se desconoce por el Consejo de Administración de RTVV ni por su director general, pues como *Objetivos estratégicos* figuran desde los primeros presupuestos del Ente. En la ficha EPO7 de los “Pressupuestos de la Generalitat Valenciana”, en efecto, y tanto para 1989 como para 1990, se señalan explícitamente como tales objetivos estratégicos del Ente Radio-Televisión Valenciana, además del control y asesoramiento a TVV SA. y RAV SA., “Los recogidos en el programa del PEV-2 y en la Ley 7/1984” <sup>(71)</sup>. Se pretende a continuación, en tal sentido y aun con las limitaciones inherentes a toda problemática “de presente”, aproximar desde qué una cierta interpretación del por qué de los incumplimientos ya señalados.

### **2.2.1. El fin de la cuenta atrás vs. los fines de la etapa de despegue.**

La intensa actividad a desarrollar por el Consejo de Administración, comienzo del *fin de la cuentas atrás*, era en sus primeros meses de rodaje (primavera del 88) conocida de antemano:

- Propuesta al Consell del Director General de RTVV. Socialistas y Populares asegurarían la mayoría cualificada que, dentro de un Consejo ya mermado por la exclusión de IU y UPV, legalmente cabía exigir, y a principios de abril de 1988 se proponía por ambas partes a Amadeu Fabregat (director hasta entonces del Centro Regional de TVE en la Comunidad Valenciana) como primer Director General de RTVV. Un director consensuado pero no unánimemente aceptado: UV propuso a Marco Molines y CDS se abstuvo.

- Publicación de su nombramiento en el “Diari Oficial de la Generalitat” (DOGV), materializado el 12 de abril. Con el tiempo, el propio Miguel Angel Villena -vetado como representante en el Consejo de IU/UPV-, esbozaría una semblanza del primer director de RTVV:

“Confiesa Amadeu Fabregat que no tiene el carné del PSPV-PSOE, pero su carrera parece trazada a la medida por el presidente de la Generalitat y secretario de los socialistas valencianos, Joan Lerma, desde los lejanos tiempos de ‘Valencia Semanal’. A partir de 1980, Fabregat ha estado siempre al frente de medios de comunicación de titularidad pública, salvo breves temporadas en las que ha trabajado para instituciones.

Director regional de Radiocadena Española, responsable más tarde del centro territorial de TVE, la trayectoria de este periodista, nacido en Torreblanca (Castellón) hace 40 años, ha estado predestinada para ocupar el sillón de director general de RTVV...” (El País-Comunidad Valenciana, 30-4-89).

- Aprobación, a propuesta del director general, de:

1. Plan de Actuación y programación (lo que en la práctica debería haber supuesto la definición del modelo concreto de TVV a desarrollar en el corto-medio plazo).
2. Organigrama básico (el 11 de marzo ya se citaban por “Levante” los nombres de Tomás Alvarez y Carmen Raneda como candidatos a directores de TVV y RAV, nombramientos que final y respectivamente recaerían en Rafael Cano y Rosa Solbes).
3. Presupuesto de explotación (con exigencias más formales de calendario, al ser obligada su entrada en Economía y Hacienda en junio lo más tardar, exigencias que aceleraban las del proyecto como un todo).
4. Comienzo de contrataciones adicionales (personal, programas, etc) para vertebrar el organigrama básico y la programación subsiguiente, conforme al presupuesto.

Para entonces, el nuevo “retraso inducido” por la tardanza del Plan Técnico de la TV Privada (PTTP) en ver la luz verde gubernamental -lo que no acontecerá, recuérdese, hasta noviembre de 1988-, conlleva de hecho un segundo *parón exógeno* que, quizá por la cercanía de las expectativas laborales abiertas entre determinados profesionales valencianos de la información y ante la “oferta de realidad contraria” que empieza a suponer lo avanzado de la construcción del CPP de Burjassot, pasa más desapercibido -si cabe- para el grueso de los valencianos.

Dicho parón se patentiza en el adelanto relativo, respecto del plan de trabajo más arriba adelantado y como tal prioridad en el tiempo -inherente a su necesaria elaboración para antes de julio de 1988-, del *Presupuesto de Explotación* de los presupuestos de RTVV (y de TVV SA. por tanto)

para 1989. Primeros presupuestos “autónomos” que se verán marcados, en consecuencia, por unos criterios presupuestarios de estricta continuidad y dependencia de los hasta entonces elaborados desde el Gabinete del Presidente, al demorarse el Plan de Actuación (hasta cierto punto, pues es claro que se avanza en la construcción del CPP de Burjassot y en la adquisición de programas) así como el comienzo del primer gran bloque de contrataciones de personal (en todo caso) del ejercicio corriente 88 al siguiente del 89. El fin de la cuenta atrás, en suma, habría de esperar en buena parte a la aprobación por las Cortes Valencianas de los Presupuestos de la Generalitat para 1989, lo que sucede en diciembre de ese nuevo “año casi perdido” 88.

De hecho, entre los *Objetivos y Acciones a desarrollar durante 1989* por el Ente RTVV figurarán los de “Puesta en marcha de la sociedad gestora del Servicio de Televisión de la Generalitat Valenciana (TVV SA)... y de la sociedad gestora de Radiodifusión de la Generalitat Valenciana (RAV SA)”, junto al no menos llamativo del “Inicio de la selección y formación del personal”, actividades todas ellas que pensaban realizarse desde los Presupuestos 1988 (como vimos) <sup>(72)</sup>...

No es extraño por ello que no sea sino hasta después del verano del 88 cuando el proyecto destape nuevas esencias de interés periodístico: así la polémica *Linde-Fabregat* (presidente del Consejo-director general), de entrada. Una polémica que evidencia, ya sí, el definitivo fin de la cuenta atrás: preludiando el “encuentro” de poder (político y económico) subyacente a su puesta en marcha efectiva. E interés periodístico que, desde entonces, concretará el cruce de intereses económicos entre los diversos medios de comunicación establecidos en la Comunidad Valenciana y un proyecto, el de RTVV, llamado a desempeñar un papel decisivo en la nueva escalada competitiva del sistema comunicacional como un todo en ese ámbito territorial. Las vicisitudes del proyecto serán, en todo caso, más públicas (por publicadas) y llegarán a los “desinformados a priori” más puntualmente que nunca, desde entonces.

El propio Enrique Linde, en las Jornadas celebradas en mayo del 90 en Valencia a que se ha venido aludiendo, mostraba su parecer crítico respecto de la génesis del “problema competencial” que, en su enfrentamiento con Fabregat desde noviembre del 88, haría decir a este último que se hallaba en “libertad vigilada” al frente de RTVV y que respecto del presidente del Consejo sus enfrentamientos con Linde eran “como la gripe, a temporadas” <sup>(73)</sup>, haciéndole expresar a él mismo que “Fabregat no serà mai Pilar Miró” <sup>(74)</sup> pese a las declaraciones previas de Jaume Sendra -por entonces al frente de la DGMCS- en el claro sentido recriminatorio de que “la descoordinación de Linde y Fabregat puede perjudicar a la RTVV” <sup>(75)</sup>. De hecho, por entonces con la aprobación de las plantillas y del Plan de Actuación todavía pendientes, Linde llegaría a plantear -al parecer- la destitución de Fabregat y éste, por su parte, llegaría a sugerir -al parecer- la eventualidad de dejar RTVV por TVE (coincidiendo con los primeros rumores, en enero del 89, sobre el ascenso de Jordi García Candau en Madrid).

La clarificación a posteriori de E. Linde, en todo caso, merece la pena recogerse “in extenso”, pues su planteamiento pretende ir más allá del caso valenciano y remite -en plena etapa de la reforma anunciada del Estatuto de RTVE de 1980- a cuestiones que sobrepasan el ámbito estricto de aquél:

“El sistema competencial -decía el presidente del Consejo de RTVV en mayo del 90-, en el conjunto de las leyes autonómicas de la radio y la televisión, presenta una dificultad principal: Entes y empresas públicas tienen dos cabezas. En efecto, Consejos de Administración y Directores Generales no son órganos que se relacionen a través de la técnica de la jerarquía.

El Consejo de Administración es el órgano supremo de Entes y empresas públicas, pero a la supremacía del Consejo no se corresponde una posición jerárquica que permita dictar órdenes al Director General o a los demás órganos de los Entes o empresas públicas.

El esquema que se refleja es, ni más ni menos, que el esquema de lo ingobernable. Si lo que la Ley 4/1980 intentó fue innovar, marginando las experimentadas técnicas jurídicas de organización de los Entes públicos, la conclusión sería bien sencilla: el modelo instaurado ha sido un fracaso desde varias perspectivas.

Por una parte -según Linde-, tiende a provocar tensiones internas en los Consejos de Administración y de éstos con el Director General. Y esto, de una parte, por la politización de los consejeros y, de otra, porque dentro de una misma organización, cuando los órganos no están jerárquicamente ordenados, la tendencia es la tensión, que produce más o menos conflictos en función de una multitud de factores. Si, por el contrario, no se aprecian conflictos entre dichos órganos, lo más probable es que se haya producido la subordinación, de hecho, de uno a otro órgano, desnaturalizando la Ley.

Por otra parte, el modelo que conocemos tiende a provocar tensiones porque la instrumentación jurídica del conjunto de competencias presenta problemas, en ocasiones irresolubles.

La radiotelevisión valenciana no ha sido ajena a esta situación. Desde un principio advertimos las dificultades para ejercer Consejo y Director General las correspondientes competencias, sin menoscabo de las mismas. *A tal efecto, se acometió la elaboración de un Plan de Actuación*, documento capital, finalmente acordado por unanimidad entre los consejeros y el Director General. Dicho documento trata de resolver los más graves problemas de coordinación entre Consejo y Director General. No obstante, este documento no resuelve todas las cuestiones que suscita la interpretación de la Ley valenciana” (el subrayado es nuestro)<sup>(76)</sup>.

Pese a acogerse a un planteamiento juricista del problema, Enrique Linde y el Consejo en general no desconoce el “detallado informe elaborado por el Gabinete Jurídico de la Presidencia de la Generalitat” que 15 meses atrás, a comienzos de febrero de 1989, ya señalaba que “varias competencias que el presidente del Consejo, Enrique Linde, pretende ejercer no corresponden a este órgano directivo”. Manuel S. Jardí, desde “El País”, adelantaba parte de la historia “desconocida” relativa al *Plan de Actuación* y señalaba al respecto:

“El informe, al que ha tenido acceso este periódico en fuentes cercanas a la Presidencia de la Generalitat que, sin embargo, no quisieron revelar quién encargó el dictamen, analiza el plan de actuación. Tras informar desfavorablemente algunas de las pretensiones incorporadas como enmiendas por el Consejo, concluye en que dicho plan ‘no debe contener (...) ninguna regulación sobre atribuciones o competencias de los órganos del Ente, ni aquellas que se refieran a relaciones entre los mismos’.

El plan de actuación de RTVV para 1989 ha sido *un informe de ida y vuelta* entre la Dirección General y el Consejo de Administración. Fabregat envió el primer plan de actividades para su aprobación el 23 de septiembre y el 10 de octubre de 1988. *El plan tiene que definir actividades, principios básicos y líneas generales de programación de RTVV.*

Tras las primeras modificaciones, el 15 de noviembre de 1988 se remitió nuevamente al Consejo, que no volvió a considerar el plan hasta el 18 de enero pasado en que, con ausencia de Fabregat, se introdujeron una serie de modificaciones sustanciales, ahora desautorizadas por los juristas del Gobierno autónomo (...).

El informe deja bien claro cuál es el papel del Consejo de Administración de RTVV y sus competencias: 'Es el órgano en el que se ven representadas las Cortes Valencianas, correspondiéndole una serie de atribuciones que se caracterizan todas ellas por ser de alta dirección, si bien, *al contrario de lo que indica su denominación, no tiene las mismas atribuciones que las propias de los administradores de cualquier ente público o privado, sino únicamente las que aparecen relacionadas en el artículo 7 de la ley de RTVV*' (los subrayados son igualmente nuestros) <sup>(77)</sup>.

El Plan de Actuación, en cualquier caso y luego de una reunión mantenida por el propio Lerma con los consejeros socialistas, recibe el visto bueno definitivo el 2 de febrero de 1989: la prioridad volvía a ser el proceso de contratación de personal, siendo el objetivo cumplir con el de "Puestos de trabajo a crear" que ya cuantificase el propio documento presupuestario para 1989. En los Presupuestos para 1989, en efecto, quedaban claros de antemano (quizá de la mano del borrador de Plan presentado por Fabregat al Consejo el 23 de septiembre anterior) los "Objetivos y Acciones a desarrollar durante 1989", y a ellos se volvía:

“- Iniciar las emisiones regulares del Tercer Canal de Televisión Valenciana en una fecha situada alrededor del 9 de octubre de 1989, no descartándose la posibilidad de realizar alguna emisión de carácter experimental y testimonial en el inicio del próximo verano.

- Realizar la plena ocupación del Centro de Producción de Programas de Burjassot, comenzando las actividades del CPP.

- Terminar el establecimiento, dotación y ocupación del organigrama directivo de la sociedad.

- Seleccionar, contratar y formar al personal de la plantilla necesaria para iniciar las emisiones regulares en octubre de 1989.

- Establecer una infraestructura fija en las ciudades de Alicante y Castellón, dotándolas de medios técnicos y humanos, para que puedan incorporarse a las tareas productivas de TVV en el inicio de 1990.

- Complementar la dotación de medios técnicos fijos y móviles de TVV para satisfacer la capacidad productiva prevista en función de las necesidades de programación establecida.

- Adquirir derechos de emisión sobre producciones audiovisuales, tanto en los mercados nacionales e internacionales, como contratando producciones a realizar por empresas del sector, sin obviar las coproducciones con otros canales de TV y la compra conjunta de programas. Se pretende adquirir derechos que satisfagan la necesidad de un semestre de emisión.



- Establecer las condiciones para organizar sólidamente en la Comunidad, la estructura de doblaje al Valenciano de los programas que se determinen, tanto en los aspectos lingüísticos, como técnicos y de capacidad productiva''<sup>(78)</sup>.

El Consejo de Administración aprobará el 22 de febrero, de otra parte, el organigrama y las plantillas (en total, 432 trabajadores: 31 de ellos directivos) y se anuncian las primeras convocatorias para principios de abril (adelantándose a mediados de marzo, finalmente). El 9 de octubre de 1989, en todo caso, el personal dedicado a RTVV y sus sociedades sería:

RTVV .....	112
RAV .....	41
TVV .....	264
-----	
Total	<b>417</b>

Un mes después de desatascarse el Plan de Actuación y nada más aprobarse el organigrama (ya con Rafael Cano y Rosa Solbes como primeros directores de TVV SA y RAV SA, respectivamente), el 1 de marzo del mismo año 1989, un jurado elige entre más de 4.500 propuestas para identificar la radio autonómica el nombre de *Canal Nou*: de "nuevo" y de nueve, 9 de octubre, fecha con claras resonancias históricas para el País Valenciano y coincidente con la por entonces prevista fecha de inauguración de las emisiones regulares. La propuesta, presentada por J.J. Tormo y un profesor anónimo, terminará por identificar a su vez al nuevo canal de televisión, desde entonces CANAL 9.

Un mes más tarde, de otra parte, se ratifica por Amadeu Fabregat en la reunión de Bilbao (5 de abril 89) la federación de Canal 9-TVV con el resto de canales autonómicos que ya emitían o lo harían en breve (ETB, TV3, TVG, Canal Sur y TeleMadrid) en la FORTA preludiada por el acuerdo alcanzado en Sevilla en diciembre del año anterior. Fabregat manifestaba, por entonces, su optimismo por un acuerdo al que se llegaba "con una facilidad que, francamente, no esperaba", augurando que si ello permitiría "acceder a las grandes coproducciones, adquirir equipamientos y servicios comunes, corresponsalías conjuntas en el extranjero, grandes retransmisiones y comercialización conjunta de productos" (es decir, competir con las privadas por llegar e incluso con TVE a partir del "enorme potencial que nos da una audiencia de 28 millones de españoles", argumento barajado por FORTA para su ingreso en la UER), en no menor medida la propia importancia del acuerdo podría dar pie "para que dentro de unos días salgan las televisiones privadas acusándonos de competencia desleal" (un argumento más adelante callado, pero sin duda ya operativo, cuando estalle la polémica TVV-TV3 coincidiendo con la inauguración de la primera)<sup>(79)</sup>...

Por entonces, y como antesala de su "despegue definitivo" -si por tal entendemos, al modo didáctico, el comienzo de sus emisiones regulares en octubre de ese año-, la primavera/verano del 89 depara dos grandes cuestiones desde el punto de vista interno y otras dos adicionales desde una perspectiva más externa a los órganos de dirección del proyecto pero no a éste como tal. Grandes cuestiones que remiten, todas ellas, a la *clarificación desigual de fines y medios* en relación con el proyecto: pues si los medios, tanto técnicos (CPP Burjassot) como humanos (plantillas), estarán dispuestos internamente para la inauguración de octubre, la cuestión de los fines seguirá irresuelta

y dará pie a “nuevas propuestas” divergentes: de la proposición de una ley básica de la Comunicación social Valenciana por Esquerra Unida, en abril, a la propuesta para privatizar Canal 9 y TVE-2 que formulará en octubre, coincidiendo con las elecciones generales y ya con el nuevo canal en marcha, el ya diputado popular Pedro Agramunt.

En el orden interno se constata, en efecto, que Fabregat ha tomado por fin las riendas efectivas del proyecto, especialmente en lo que toca a la cobertura directiva del *Organigrama* previsto por el Plan de Actuación. El director general ha dejado entrever que su apuesta es por “el territorio y el idioma como modelo”, al tiempo que dejado caer tanto su criterio de “que nadie se escandalice cuando la televisión necesite mucho dinero” (convencido de arrancar el 9 de octubre con 6 horas de programación, el 40% de producción propia, a base de deportes, películas, informativos y concursos) <sup>(80)</sup>, cuanto su presunción, más que razonable ante la inminente llegada a las ondas de las primeras TV's privadas, de que “el tiempo es oro para RTVV” <sup>(81)</sup>.

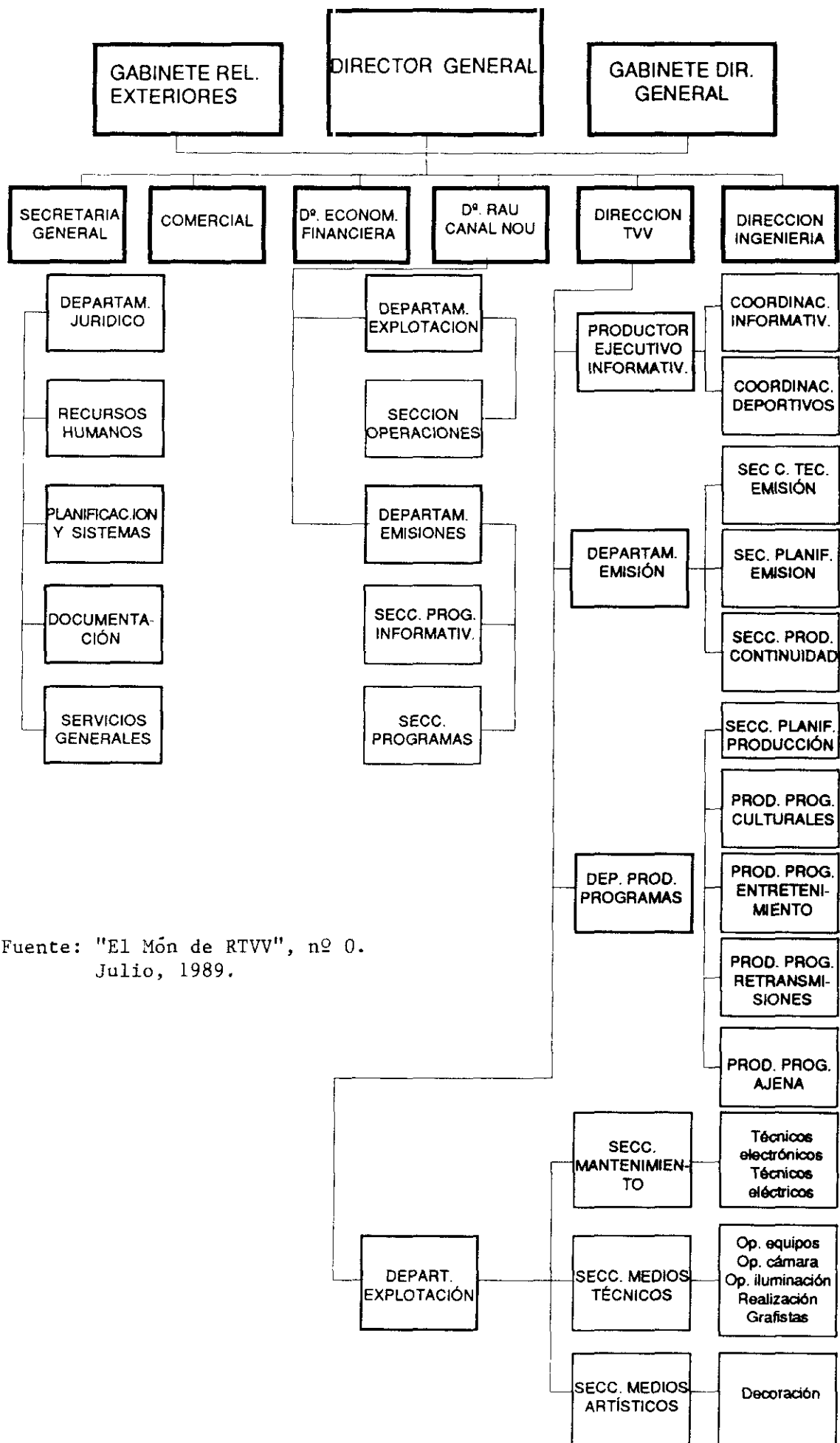
El organigrama aprobado en febrero (reflejado en el Gráfico adjunto), ha comenzado para esas fechas a llenarse -por arriba- de “fieles” al director: entre ellos Casimiro Gandía y José Luis Forteza, que a finales del 88 habían abandonado ya, respectivamente, su responsabilidad al frente del Teatro Principal y la dirección de la Mostra del Mediterráneo. Pero el organigrama se completaría a su vez -por abajo- al irse cubriendo, paulatinamente, la rejilla de contratación de personal, no sin destaparse el malestar de los no aprobados en las convocatorias que se vienen desarrollando desde mediados de marzo, especialmente entre los periodistas <sup>(82)</sup>. Las previsiones de formación profesional, en todo caso, comienzan a cumplirse para los trabajadores recién contratados con arreglo al plan establecido (Cuadro anexo), a partir de finales de junio y ya con el CPP de Burjassot en marcha.

FECHAS	Nº PERS.	PUESTO
26-6/30-6 .....	20 ..	AMPEX .....
01-7/02-7 .....	30 ..	DIRECTIVOS .....
03-7/07-7 .....	20 ..	AMPEX .....
.....	20 ..	CAMARAS .....
.....	19 ..	CAMARAS .....
.....	1 ..	GRUA .....
.....	32 ..	PERIODISTAS .....
.....	11 ..	REALIZADORES .....
.....	5 ..	AUX.REALIZA. ....
10-7/14-7 .....	20 ..	AMPEX .....
.....	20 ..	CAMARAS .....
.....	19 ..	CAMARAS .....
.....	1 ..	GRUA .....
.....	32 ..	PERIODISTAS .....
.....	11 ..	REALIZADORES .....
.....	9 ..	PRODUCTORES .....
17-7/21-7 .....	20 ..	AMPEX .....
.....	4 ..	ILUMINADORES .....
.....	1 ..	DECORADOR .....
.....	1 ..	AMBIENTADOR .....
.....	1 ..	AUX.EXPLOT. ....
24-7/28-7 .....	4 ..	ILUMINADORES .....
.....	1 ..	DECORADOR .....
.....	1 ..	AMBIENTADOR .....
.....	21 ..	ELECTRONICOS .....
.....	2 ..	ELECTRICOS .....
.....	15 ..	OP.EQUIPOS .....
.....	16 ..	OP.EQUIPOS .....
.....	39 ..	OP.EQUIPOS .....
31-7/04-8 .....	21 ..	ELECTRONICOS .....
.....	2 ..	ELECTRICOS .....
.....	15 ..	OP.EQUIPOS .....
.....	16 ..	OP.SONIDO .....
.....	39 ..	OP.EQUIPOS .....
07-8/11-8 .....	21 ..	ELECTRONICOS .....
.....	2 ..	ELECTRICOS .....
.....	15 ..	OP.EQUIPOS .....
.....	16 ..	OP.SONIDO .....
.....	39 ..	OP.EQUIPOS .....

#### PLAN INICIAL DE FORMACION PROFESIONAL.

Fuente:

"El Món de RTVV", nº 0.  
Julio, 1989.



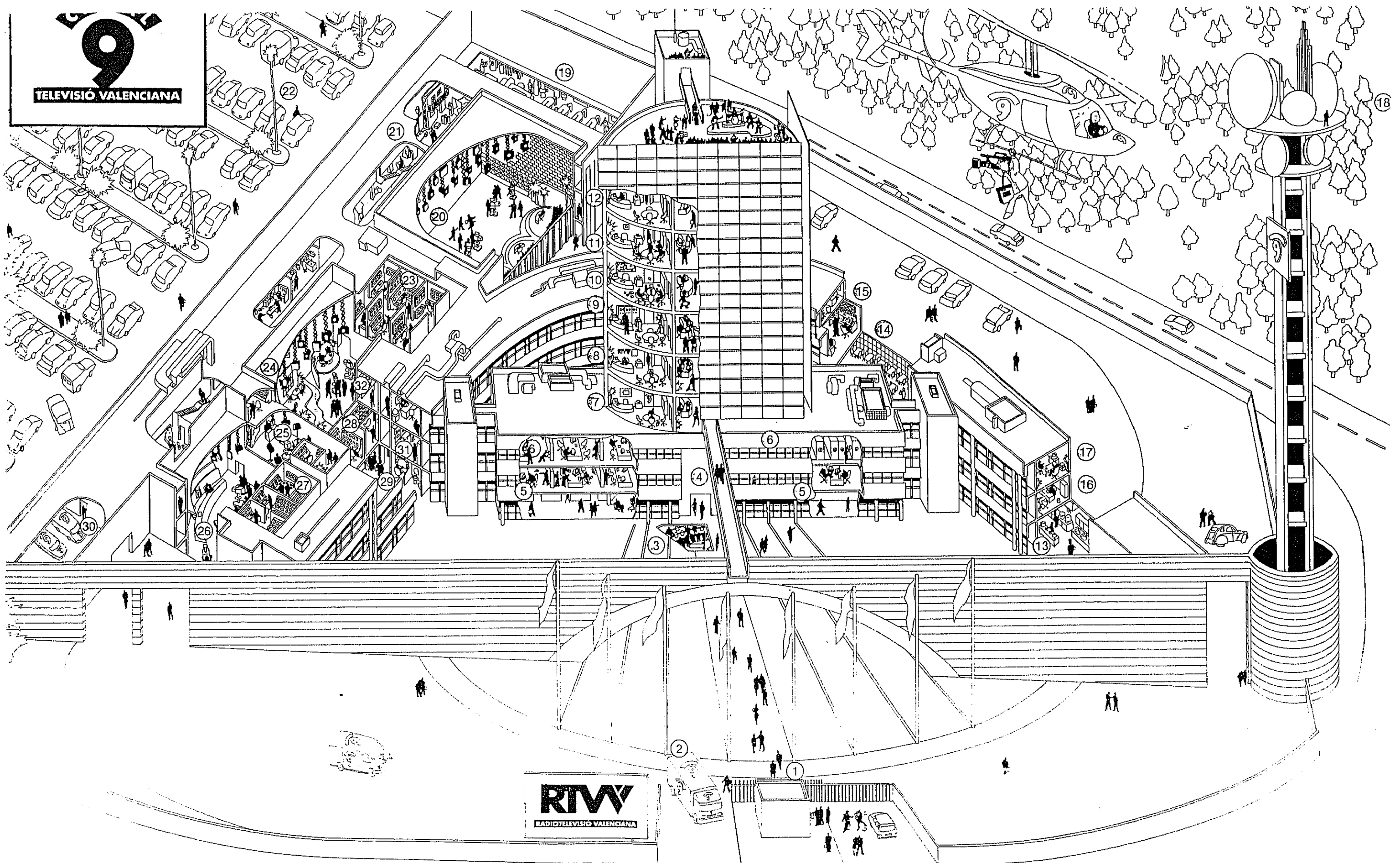
Fuente: "El Món de RTVV", nº 0.  
Julio, 1989.

De otra parte, a la progresiva puesta a punto de los medios humanos se unirá, en junio del 89, la entrega oficial del *CPP de Burjassot*, tras demorarse en 2 meses la fecha inicialmente prevista (abril). La principal infraestructura técnica de TVV SA se dota, en un entorno despersonalizado, de un edificio con personalidad propia que, junto con el Palau de la Música y el IVAM, representan la tríada arquitectónicamente más emblemática -y no menos controvertida- de la ciudad de Valencia en los años 80. La obra, concebida y coordinada conjuntamente -al igual que la obra de TV3, lo que es todo un dato- por las empresas Cast (en lo relativo a instalaciones generales, con Eduardo Franco como director) y Telling (en las instalaciones de TV propiamente dichas), contó con la colaboración del equipo Vetges-Tu i Mediterrània, así como con el arquitecto Héctor Fernández y la dedicación del aparejador Salvador Ros. La unión temporal entre Dragados y Construcciones y Cubiertas y MZOV permitió el acabado, a falta del helipuerto, a mediados de mayo, pero la DGMCS decidiría inspeccionar a fondo el edificio antes de su aceptación formal (y ganar tiempo, a su vez, mientras las convocatorias de plantilla terminaban de resolverse) <sup>(83)</sup>. Fuentes de Presidencia de la Generalitat cifrarán en torno a los 4.500 millones el coste final del conjunto, de los que casi 2.000 corresponderían a las obras y otros tantos al complejo equipamiento técnico coordinado por Telling.

Para entonces, el grupo parlamentario de *Esquerra Unida* había presentado en el Parlamento autónomo -a mediados de marzo- una proposición de “ley básica” de la Comunicación Social Valenciana. La iniciativa, que plantea la creación de un Consejo Valenciano de la Comunicación Social, pretendía -según el diputado Pascual Mollá- “regular de manera global todos los aspectos que afectan a los medios de comunicación sobre los que tiene algún tipo de competencia la Generalitat”. O en otras palabras: “establecer mecanismos de control en el ejercicio de las competencias autonómicas sobre los medios de titularidad estatal, como RNE y RTVE, los medios propios, como RTVV, las concesiones de emisoras de radio en el País Valenciano y la distribución de ayudas a la prensa en valenciano” <sup>(84)</sup>. Tanto por motivos económicos cuanto jurídicos, la proposición sería rechazada en abril...

Con el tiempo, conocidos de antemano los problemas de cobertura de la red a utilizar por Canal 9-TVV (desde mayo), dado a conocer el alquiler de locales por RTVV en Alicante y Castellón (principios de agosto), con la emisora de radio “Canal Nou” ya en el aire (finales de agosto) y las primeras emisiones experimentales de su “hermana mayor” desde el 5 de septiembre (y los inmediatos problemas con TV3 que se tratarán más en detalle en el Capítulo III), con la imagen de marca -la “mosca”- diseñada por Beto Compagnucci adelantada por la propia prensa (finales de septiembre), y tras las palabras de Joan Lerma en el debate del “estado de la autonomía” (21 de septiembre) en que aludiese a los servicios públicos que los valencianos desean como “más diversificados y de mayor calidad, que es necesario homogeneizarse con Europa, y que la participación de esos ciudadanos debe aumentar en la gestión de unos servicios más descentralizados y gestionados a nivel local” <sup>(85)</sup>, la inauguración oficial de Canal 9-TVV coincidirá con la campaña electoral de las generales del 89, lo que dará a conocer las discrepancias subyacentes sobre el modelo televisivo valenciano a izquierda y derecha del PSPV-PSOE.

De una parte, IU adelantará su intención por “trasladar el pacto de la oposición a los Informativos de TVE-Valencia y la TVV” <sup>(86)</sup>, presentando ante la prensa el vídeo que demostraba -en su opinión y en plena vorágine electoral- “la manipulación socialista” de los medios públicos de TV. De otra parte, y más importante sin duda, coincidiendo con la publicación por la prensa de



- |                              |  |                                     |  |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1 Entrada. Control d'accesos | 10 Planificació de sistemes                          | 19 Planif. d'emissions i Explotació | 28 Plató de continuïtat                  |
| 2 Unitat mòbil               | 11 Administració i Comercial                         | 20 Producció                        | 29 Plató n.º 3 (informatius)             |
| 3 Saló d'actes               | 12 Relacions Exteriors. Direcció econòmico-financera | 21 Torre d'emissions                | 30 Control de realització de informatius |
| 4 Recepció                   | 13 Secretaria General i Recursos humans              | 22 Sala de bombes                   | 31 Control central                       |
| 5 Redacció                   | 14 Cuina   | 23 Magatzem de decorats             | 32 Salas peluqueria i maquillaje         |
| 6 Documentació               | 15 Cafeteria-Restaurant                              | 24 Aparcament                       | 33 Controls de realització               |
| 7 Direcció Canal 9-TVV       | 16 Direcció General de RTVV i Gabinet tècnic         | 25 Controls de realització          | 34 Sala de grafisme                      |
| 8 Direcció General de RTVV   |  | 26 Plató n.º 2                      | 35 Sala de magnetoscòpis                 |
| 9 Gabinet tècnic             |  |                                     |  |

las estrategias de financiación de los nuevos canales privados de TV, el ahora candidato por el **Partido Popular** por la provincia de Valencia, Pedro Agramunt, soltaba la propuesta de “privatizar TVV (...) para evitar una dependencia del Gobierno Autonómico y asegurar una pluralidad en su titularidad”<sup>(87)</sup>. Con el mismo vídeo que el presentado 24 horas antes por IU y cuando se sabía de la comparecencia conjunta de Linde y Fabregat para explicar ante una comisión de las Cortes Valencianas el comienzo de Canal 9, la plana mayor provincial del PP en Valencia no tuvo empacho -por más que Gil Lázaro, al frente de la ejecutiva, se viese obligado a desautorizar inmediatamente a Agramunt- en explicar las querencias de sus planteamientos “a lo Chirac” para con los medios públicos de comunicación:

“El programa del PP tiende no sólo a privatizar lo privatizable -parece que expresó literalmente Agramunt-, sino a detener la tendencia de los socialistas de ir convirtiendo en públicas muchas empresas privadas (en lo que el candidato observaba) una tendencia a retroceder y volver al pasado en los socialistas: Primero se privatizó la cadena de los medios de comunicación social del Estado y ahora se está creando una cadena de emisoras de FM.

(La privatización anunciada incluía la privatización de la segunda cadena de TVE y el mantenimiento como pública de la primera) aunque no con el modelo que tiene ahora mismo”<sup>(88)</sup>.

Si algo quedaba claro por entonces, en definitiva, era que el **despegue** de Canal 9 quedaba lastrado desde sus comienzos no sólo por las colisiones esperadas de antemano vía competencia -ante todo, pero no únicamente- con las TV privadas por llegar, sino también por la colisión subyacente a la diversa definición *política* entre los principales partidos con representación parlamentaria en las Cortes Valencianas sobre el modelo de TV a desarrollar. Pero, en todo caso, los problemas de indefinición no obedecían tan sólo a semejantes “vías de agua” que desde el exterior ya cabía observar: se suman, si acaso, a otras vías más “interiores” que los gestores no han sabido -o no han querido- achicar hasta esa fecha. Vías internas que provienen, en gran medida, de la indefinición de los propios gestores sobre los *fines* a acometer, una vez que cuentan con el grueso de los *medios* (tanto humanos como técnicos) para el bautismo de ondas que llega por fin, cumpliendo esta vez con lo previsto, el 9 de octubre de 1989.

Dichos fines, en efecto, si es pertinente atender -como parece- a lo recogido por los Presupuestos para 1990 que por entonces se han debido elaborar para su consolidación posterior con los de la Generalitat Valenciana<sup>(89)</sup>, se limitan por parte de TVV SA. a los Objetivos Estratégicos de “ampliación de las horas de programación y consolidación de audiencia y consolidarse en el mercado publicitario de la Comunidad”; señalándose entre sus Objetivos y Acciones los de “continuar con el proceso de selección y formación del personal / completar la dotación de medios técnicos fijos y móviles/adquirir derechos de emisión sobre producciones audiovisuales / incrementar la producción propia y la ocupación del CPP de Burjassot/ y consolidar y aumentar la estructura de doblaje al valenciano” (salvo los dos últimos -en parte-, antes atendientes a los medios que no a los fines).

Parece que persisten, en consecuencia, esas *vías internas* achacables a la propia gestión del proyecto. Y entre las cuales -dejando para más adelante el asunto “financiación”- destacan dos,

en mi opinión, de especial trascendencia: ambas por delante, inclusive, de la “polémica Guardiola” (cuando el presidente del grupo socialista en las Cortes y artífice de la composición del primer Consejo de RTVV llegó a manifestar, en diciembre, que TVV era “una mierda, una gran mierda”<sup>(90)</sup>) o de la creciente desafección del director general entre los medios de prensa escrita en principio más proclives a mantener un “pacto de respeto” hacia el proyecto, cuando menos en sus primeros 100 días (así Levante y El País-CV, en la ciudad de Valencia). No en vano, si lo primero podría no ser sino un capítulo más de la disputa de fondo mantenida entre Linde (cuñado de Guardiola) y Fabregat, lo segundo -por lo que toca al diario “Levante” especialmente- pudiera obedecer a su vez a cuestiones más pragmáticas y menos aireadas en público: como, por ejemplo, no tanto a que la dirección de RTVV deje entrar, o no, a una u otro periodista en el CPP de Burjassot<sup>(91)</sup> sino, antes bien, al agujero provocado en plantilla por el trasvase de no pocos periodistas del mencionado diario al canal autonómico y -no menos importante- a la tendencia incrementalista soportada por “la competencia” en las negociaciones laborales subsiguientes a conocerse las retribuciones establecidas en Canal 9, no sólo en el caso de los periodistas (tendencia inducida, por demás, que alcanza a otros medios de comunicación en la Comunidad Valenciana)...

De hecho, tales asuntos hasta podrían considerarse como un mero subproducto de las otras *dos cuestiones básicas* que ahora importa adelantar: de una parte, la relativa “incontención salarial” que desemboca en el I Convenio Colectivo firmado recientemente (junio 1990), que preanuncia contradicciones fundamentales en la política de personal (y presupuestaria derivada, en un capítulo tan importante con vistas a la autofinanciación que se dice perseguir); y de otra parte, y más importante si cabe de cara al futuro, el esquema de producción/programación subyacente a la andadura inicial de la TV Valenciana, en no poca medida ligado al planteamiento de Telling en lo relativo al CPP de Burjassot y al modelo “B” por el que pareció apostarse desde la DGMCS, con la contradicción final de levantar unas expectativas -en todo caso defraudadas- sobre la producción propia a asumir por TVV SA y, en consonancia con ello, sobre la capacidad del proyecto a la hora de servir de “locomotora” para un sector privado valenciano del audiovisual cada vez más encrespado por su no cumplimiento y con menores posibilidades de iniciar en paralelo su particular despegue. Si lo primero suena a cheque casi en blanco para que el despegue no toque tierra antes de tiempo, lo segundo remitiría al problema de fondo que sigue planteando la excesiva distancia entre las políticas cultural y de comunicación diseñadas desde la Generalitat (que no dejaría de tener su parte en el desaguado).

En relación con la *política de personal* que deja entrever lo hasta la fecha publicado, es preciso recordar que la contratación de personal se encuentra desde un principio entre las causas del conflicto patente entre Consejo y Director General. Con carácter previo a su pacificación formal -después, cuando llega a pactarse entre ambos órganos el Plan de Actuación-, el *modelo centralizado* al que responde el organigrama inicial presentado por Fabregat a la comisión de personal del Consejo que preside Manuel Prieto (modelo de organigrama ya desde ese momento obediente no sólo a la etapa de despegue que se estaba preparando sino también al modelo de TV que presupone un CPP como el de Burjassot) da pie, a mediados de enero del 89, para que el director general -sobre un total de 572 puestos de trabajo estimados por entonces- presente una modificación según la cual aspira a nombrar, según fuentes del consejo, hasta un total de 77 personas, “con lo cual se produciría un auténtico cataclismo cada vez que se realice un relevo en la dirección general o se celebren elecciones”<sup>(92)</sup>; de otra parte, sin embargo, se avanza desde las mismas fuentes que las retribuciones

se aprobarán “sin la propuesta del Director General”... Parte de las cuestiones vienen de ahí, pese al Plan de Actuación, porque si bien una semana más tarde se podrá leer en la prensa valenciana (Levante, 21-1-89) que el total de personas a contratar por RTVV sería de 420, accediendo 393 mediante concurso-oposición de libre acceso público (109 en el Ente RTVV, 247 en TVV SA y 37 en RAV SA), pudiendo nombrarse directamente por Fabregat “las 27 personas restantes” (los cargos directivos), no es menos cierto que al año justo podrá leerse a su vez que “en la actualidad RTVV cuenta con 551 trabajadores, de los cuales 401 son funcionarios y 150 *trabajadores eventuales*, cuyos contratos han sido hechos hace escasamente unos meses. De ellos, 57 personas han sido contratadas para el ente, 73 para TVV y 20 para Canal 9 Ràdio” (Levante, 16-1-90).

Pero si evidente resulta, a estas alturas, la indefinición sobre las vías de acceso -y por tanto, la imposibilidad de cuantificar, y por ello de planificar, el eventual dilema que supondría tener que decidir en términos más objetivos entre laboralización temporal vs contratación cuasi-administrativa, al (mal)ejemplo de RTVE-, no menos inquietante, sino todo lo contrario, resultan dos aspectos.

De una parte, en la “banda alta” del organigrama, las razones profundas que pueden provocar *crisis de dirección* como la evidenciada a comienzos de enero de 1990, sin apenas cumplirse los primeros 100 días desde el bautismo de ondas. Porque difícilmente se pueden conjugar en términos de estricta sensatez, los sueldos elevados de los cargos directivos -Fabregat ingresaría más que el propio Lerma y los directores de las empresas TVV y RAV cobrarían como un conseller- ventilados en la prensa por entonces (origen, sobreañadido sin duda, del posterior enfrentamiento Fabregat-Belda, por parte del primero en esta ocasión) con la “disparidad de criterios” que, según reconoció el propio Fabregat, se escondería como razón última tras la destitución de Rosa Solbes al frente de la radio autonómica -sería sustituida por Salvador Soria, como ella procedente de RCE- y de tres altos cargos de Canal 9 (Francisco Montes, como director económico y financiero, y los directivos del área de producción Casimiro Gandía y Vicent Tamarit). Como difícil de conjugar resultaba, al hilo de esa crisis dejada como regalo (amargo, pero no para todos) por los Reyes Magos, que Fabregat justificase la medida en “una simplificación del organigrama”<sup>(93)</sup>, cuando en realidad se creaban “una veintena de nuevas jefaturas”<sup>(94)</sup>, con el consiguiente incremento del coste en personal que ello implica. Dudas, todas ellas, que ejemplifican la importancia de objetivar el modelo de TV por el que quepa apostarse, pues no hay organigrama posible sin modelo previo (salvo que obedezca a criterios estrictamente personalistas)... Como ejemplifican, por lo mismo y sopena de ahondar las lagunas de concienciación que sobre el proyecto provienen de su propia historia, la conveniencia de clarificar públicamente las razones últimas de cualquier “reestructuración interna” tan amplia como la de enero, clarificación que no sólo competiría al director general sino también a todo Consejo de un Ente realmente *Público* (por afectar a una “remodelación”, de hecho, del propio Organigrama).

De otra parte, en la “banda baja” del organigrama, el efecto inducido (¿acaso puede ser otro que el desconcierto?) por los anteriores planteamientos -prefigurados, se insiste, desde el arranque efectivo de la cuenta atrás definitiva, si no antes- vendría a sumarse, con vistas a la negociación del *primer Convenio Colectivo* de RTVV, con la pretensión sindical (CCOO+UGT) de romper “la estructura retributiva de la Generalitat” (administrativista). El dilema iba más allá del incremento del 8% para 1991 (por encima del 6% de los Presupuestos autonómicos para 1990 y presumiblemente por encima del incremento que se acuerde para el año siguiente) que inicialmente se pactó en la



noche del 1 de junio, y de que eso supusiera de hecho “trencar la relació amb la Generalitat quant a la revisió salarial, objectiu que ens haviem plantejat com a prioritari” <sup>(95)</sup>; cuestión por demás ratificada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano apenas días más tarde, al fallar que la relación laboral en RTVV se rige por el derecho laboral y no por las normas administrativas a la vista del recurso planteado por el abogado Joaquín Colome <sup>(96)</sup>.

Lo llamativo no es sólo que, de nuevo al centrarse la negociación en la problemática salarial (vid. Cuadro anexo de retribuciones para las 13 categorías contempladas por el Convenio de RTVV), dicha “desvinculación -defendida por los sindicatos- de la negociación colectiva en RTVV respecto a la de la Generalitat Valenciana” case mal, por ejemplo, con la ampliación “de los permisos en relación con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores” (incluidos los “4 días anuales” para asuntos propios, al cabo equiparables con los “moscosos” de los funcionarios). Antes al contrario, desde la perspectiva que aquí nos ocupa, lo verdaderamente preocupante (por sentarse como precedente) es que el cierre de la tabla retributiva se pacte “des del criteri d’equiparació a les mitjanes dels salaris de les altres televisions autonòmiques” y de que el resto de las grandes cuestiones de todo Convenio (organización y dirección del trabajo, formación profesional, participación de los trabajadores, etc) se cierre, a su vez, según el “viejo modelo” de RTVE (repleto de privilegios neocorporativistas) y desde la triste perspectiva de anteponer todo lo relativo a los diversos “Complements i jornada”... No en vano, las propias fuentes sindicales (así “Redacción Abierta” de CEOV-UGT, en su nº 8 de junio de 1990), constataban que “no hubo posibilidad de regular en convenio los procedimientos de acceso a puestos de trabajo (ingreso y promoción interna)”, pese a lo cual dieron su consentimiento a cuanto ello presupone; de igual modo que “la empresa se negó rotundamente” a la aprobación de un Estatuto de Redacción, con lo que se impide -¡y si desde un medio *público* ya puede pedirse que lo hagan suyo los privados!- lo que las propias fuentes sindicales reconocen, sin menoscabo de las mayores responsabilidades al respecto de los representantes *empresariales*: como la creación, por ejemplo, “de un Consejo de Redacción, así como la regulación de la cláusula de conciencia y del secreto profesional”...

La cuestión, con todo, que mueve a mayor preocupación no sería tanto la mencionada desvinculación salarial “en sí” sino que ello (*todo* ello) se pacte, desde la dirección, con arreglo a “modelos ajenos” (salvo que no lo sean) de la TV que realmente se persigue. Máxime cuando desde la Dirección, antes que de otra parte, es que cabe presumir cierta evaluación de los “efectos inducidos” en el resto de medios de comunicación del sistema de comunicación “cercano”. Y por tanto de las consecuencias previsibles que dichos efectos inducidos en las tablas retributivas *ajenas* pueden acarrear en términos de enemistad hacia el propio proyecto: pues a la indefinición interna del mismo se sumaría, en vez de restarse, la animadversión externa. La duda más que razonable, sin embargo, es si acaso era ello negociable -de antemano- por una “banda alta” del organigrama no caracterizada precisamente por mostrarse coherente en sus retribuciones personales: la autofinanciación como meta tiene también su traducción a tal nivel (so pena de ahogar toda pretensión posterior de acudir a las arcas públicas para remediar su no consecución)... De que no sea un asunto menor en tal sentido, en todo caso, hablaría la siguiente comparación (limitándola adrede a la categoría de Redactor y a las interrelaciones empresariales que mayor polvareda han levantado por dicho motivo) <sup>(97)</sup>:

GRUPO	SUELDO BRUTO 1989	SUELDO BRUTO 1990	SUELDO BRUTO 1991
Grupo 1	4.006.976	4.299.174	4.643.108
Grupo 2	3.519.128	3.773.145	4.074.996
Grupo 3	3.359.696	3.631.430	3.921.944
Grupo 4	3.039.128	3.420.508	3.694.148
Grupo 5	2.663.174	3.082.854	3.329.482
Grupo 6	2.578.210	2.953.388	3.189.659
Grupo 7	2.466.044	2.781.076	3.003.562
Grupo 8	2.278.424	2.632.080	2.842.646
Grupo 9	2.058.339	2.328.500	2.514.780
Grupo 10	1.844.656	2.150.897	2.322.969
Grupo 11	1.662.673	1.920.678	2.074.332
Grupo 12	1.345.402	1.733.794	1.872.497
Grupo 13	1.176.884	1.537.046	1.660.009

### *Complementos y jornada*

En cuanto a los complementos pactados en el convenio colectivo, cabe destacar que el plus de dedicación se retribuirá al 25% del sueldo bruto; el de flexibilidad, al 15% del sueldo bruto, y la nocturnidad, al 25% del salario de la hora ordinaria.

Sábados, domingos y festivos se compensarán con el correspondiente día libre y con 4.000 pesetas en 1990 y 5.000 pesetas en 1991, o con un día libre adicional.

En cuanto a los trabajadores que viajen por cuenta de la empresa, cuando se dé absoluta indefinición de horarios o una dedicación mayor de 9 horas, cobrarán un plus de 5.000 si concurre una sola circunstancia, o de 10.000 pesetas diarias si concurren las dos circunstancias.

[Grupo 1: Expertos en Electrónica, Investigación de Mercados, Producción, Sistemas y Análisis, y Jefe de Gabinete]

[Grupo 2: Titulado Superior de Personal, Técnico Superior de Cultura y Técnico de Control de Gestión]

[Grupo 3: Abogado, Técnico Auditor, Experto Análisis Documentación, Técnico de Recursos Humanos y Jefe Asesoría Lingüística]

[Grupo 4: Titulados Superiores (Documentalistas, Relaciones Públicas, etc.)]

[Grupo 5: Periodistas, realizadores y lingüistas]

[Grupo 6: Productores]

[Grupo 7: Analista]

[Grupo 8: Técnicos medios]

[Grupo 9: Técnicos (operadores de cámara, operadores de equipos, grafistas, operadores de iluminación, técnicos electrónicos, auxiliares de realización, etc.)]

[Grupo 10: Administrativos, azafatas y operadores de grúa]

[Grupo 11: Auxiliares administrativos, pintores, modeladores, montadores y ambientadores de decorados, operadores de sistemas, y oficiales de camerinos]

[Grupo 12: Auxiliares de explotación, operarios de mantenimiento, conductores y telefonistas]

[Grupo 13: Operarios auxiliares de servicios]

Fuente: "Redacción Abierta", CEOV-UGT de Valencia, nº 8, junio 1990.

TABLAS SALARIALES / Categoría "Redactor":  
Totales brutos anuales, *salvo* incentivos y pluses  
(en ptas).

	1988	1989	1990	1991
Levante	1.633.305			
La Opinión (*)	...1.712.000/2.247.000			
RTVV		2.663.174	3.082.854	3.329.482

(\*) Pese a editarse en Murcia, ejemplifica mejor, si cabe los efectos inducidos en el grupo Prensa Ibérica (al que pertenece, junto con Levante) al aparecer RTVV.

De otra parte, tampoco mueve a tranquilidad -sino a todo lo contrario- una valoración sindical del Convenio que, "en termes de globalitat", se juzga positiva "perquè modifica substancialment la situació laboral derivada del contracte individual signat durant el 1989", limitándose a ejemplificarlo por la vía demostrativa de las mejoras retributivas y "la reducció de la jornada de treball acordada per a l'any 1991". Y ello porque adentra a los mismos sindicatos (a los mayoritarios, CCOO y UGT, cuando menos), desde el primer convenio que se pacta, por la senda de componendas y ventajas 'al margen de las reglas previas': sea el voluntarismo aceptado (al parecer y hasta entonces, sin más) como consustancial a toda fase de despegue, sea la conducta (similar por reflejo) que parecen aprobar al compartir el juego escasamente austero de la "banda alta" del organigrama, sin sopesar su incidencia "global" sobre la factibilidad del proyecto como tal... No en vano, por ejemplificar, la huelga de los actores de doblaje anunciada desde un principio <sup>(98)</sup>, es difícilmente compatible -al no sopesarse el factor de "formación profesional indirecta" que conlleva trabajar para RTVV en esta primera etapa- con la credibilidad del propio proyecto caso de no acercarse al umbral mínimo de aceptabilidad en el uso y extensión del valenciano en su programación: y los sindicatos también, no sólo los órganos de dirección, tienen su responsabilidad al respecto (en esa como en otras áreas necesitadas de unos profesionales más y mejor cualificados: pues ésa y no otra es la garantía de la estabilidad, por arriba, de unas tablas retributivas "comparativamente" beneficiosas dentro del sector).

La reestructuración interna efectuada por Fabregat -con el visto bueno del Consejo- en enero del 90, y que en gran medida se centrase en el área de producción, tampoco parece sin embargo haber contribuido al **relanzamiento del sector audiovisual autóctono**, de tan largas raíces como endeble en la actualidad, y que sigue siendo (en coherencia con lo planteado por el PEV-2 y la Ley 7/1984) uno de los grandes Objetivos Estratégicos del Ente RTVV y uno de los más notorios incumplimientos de la gestión realizada hasta la fecha. De hecho, la Asociación Valenciana de Productores de Cine y Televisión presentaba a la prensa, responsables de la DGMCS y de RTVV -en fecha tan cercana como el lunes 18 de junio del 90-, un estudio encargado por las casi 40 empresas ya (de entre las más de 1.500 existentes en España) que integran dicha asociación, pequeñas y de escasa capacidad en su mayor parte, advirtiendo del peligro de su desaparición en el País Valenciano "debido a la dispersa política de la Generalitat en este terreno y a la ausencia de un departamento de producciones externas y de una planificación de la colaboración con el sector por parte de TVV" (98). Las recomendaciones del citado estudio, que chocan con la negativa de la dirección de RTVV para llegar a acuerdos

globales y cerrados, contemplan la necesidad de “dotar presupuestariamente a TVV para la producción externa y estructurar su estrategia en este terreno; establecer (el referido) convenio marco entre la industria y la TV autonómica como los existentes en Cataluña, el País Vasco y con la propia TVE; coordinar la política audiovisual de los diferentes departamentos de la Generalitat y crear un instituto del cine y el audiovisual”.

(82) Destaca por entonces la acusación, firmada por Mario Beltrán y otros periodistas, que bajo el título de “Las oposiciones a la TVV no nos convencen” aparece publicada en la Hoja del Lunes de Valencia el 15-5-89. Fabregat, por su parte, habría resaltado con anterioridad -en la entrevista con Víctor Sánchez ya citada, en “Redacción Abierta”- que “se parla molt de periodistes i massa poc d’altres àrees que ocuparan a moltes més persones, no periodistes. El poscentatge de periodistes sobre el total de la plantilla -més o menys un 10%- és molt modest” (rev. cit., nº 6, p. 26).

Dichas recomendaciones, preanunciadas por el presidente de la Asociación de Productores José Ferrándiz al reclamar en diciembre del 89 un convenio con RTVV y que entroncarían con la preocupación de los profesionales del cine valenciano en pro de una ley autonómica para el mismo <sup>(100)</sup>, no son nuevas en ningún caso y se vienen repitiendo desde mucho antes.

El sector audiovisual valenciano, en efecto, había recommenzado a moverse al hilo de las expectativas generadas por el proyecto RTVV. Sin necesidad de remitirse y compararse con el pasado cinematográfico valenciano (representado por Cifesa), el presente del sector, sin embargo, distaba recientemente y dista bastante de equilibrar expectativas y realidades. Las expectativas vienen de 1984 (con la ley de creación del canal autonómico) y en gran medida siguen siendo eso, expectativas, tras la constitución del Consejo de Administración; pero no son pocas: hubo quien las cifró, con motivo de la 8ª edición de la Mostra del Mediterráneo, en 26 empresas: hoy serían cerca de 40. Pero son más las realidades que atender presupuestariamente, por contra, y hablan un lenguaje menos propenso al triunfalismo, remitiendo a las iniciales experiencias catalana y gallega como auténtica “espada de Damocles” cuya vecindad asusta.

Así, de una parte, la concentración en la ciudad de Valencia y un dimensionamiento a todas luces insuficiente en la práctica totalidad del sector -de los 64 programas adquiridos en octubre del 87 por la DGMCS 28 eran documentales, sin duda por su bajo coste de producción-, vertebran, como características esenciales, un sector con tan notable movilidad que incluso impide ser catalogado. En “La informació a la Comunitat Valenciana”, primer balance oficial (DGMCS, 1986) del estado de situación global del sistema comunicacional valenciano, se incluían los listados hasta entonces más significativos, distinguiendo en cine y vídeo los productores con equipos técnicos (con capacidad parcial o total para producciones ajenas) de aquellos otros que para las mismas fechas alquilaban a otras empresas de servicios el material para la realización de proyectos concretos:

- en el primer grupo (con equipos propios) se catalogaban 13 productoras: 8 en Valencia, 3 en Castellón y otras 2 en Elche y Benidorm, de las que 6 eran empresas de tipo personal y no S.A. o S.L. y sólo 5 contaban con equipo propio de vídeo (en equipos predominaba el cine, ya de 35 mm. ya de 16 mm). Entre ellas: Video Uno SA, Salem S.L., Nova Films, S.A.

Estudios Andro, Drop Out, S.A. o Antonio Aguilar PC.

- en el segundo grupo (sin equipo propio) se añadían otras 11 productoras: 8 en Valencia, 1 en Alboraya, 1 en Alicante y 1 más en Elche (sin duda por el arrastre de Tele-Elx). Entre ellos: Ascle Films (Carlos Mira), Clap SA (Vicente Tamarit, que pasaría a RTVV), Tabarca Films (Adolfo Celdrán) o Puente Romano SA (A. Llorens y M. Ramires).

A las anteriores cabía sumar 13 empresas productoras de vídeo, todas ellas constituidas a partir de 1984 (al igual que 6 de las del primer grupo señalado): 8 en Valencia, 1 en Paterna, 1 en Cullera, 1 en Ontinyent, 1 en Alicante y 1 más en Elche, en su mayoría con equipo propio y predominio de U. Matic.

No obstante entre aquellas en fase de equipamiento figuraban productoras del “segundo grupo” anterior: casos de Galaxia TV, SA (en vez de Azahara S.L. de Manuela Gutiérrez) o Videoquip SA (del propio Pedro Rosado).

De otra parte, la movilidad intrasectorial se patentizaba desde un principio, de cruzarse la catalogación anterior con la efectuada -en lo relativo a empresas valencianas productoras de video- por la “Guía del Espectáculo” editada al año siguiente (1987) por la consellería de Cultura: a las aproximadamente 35 productoras ya enumeradas, habría que sumar al menos otras 10 (4 en Alicante, entre ellas el CMA de la Diputación, y 6 en Valencia: Videoreport, Tora Video Films. y Bayarri Comunicación entre ellas). Lo que arrojaría una cifra total cercana a las 50, a poco que uno se sienta tentado de realizar una máxima extrapolación de iniciativas no catalogadas y conocidas personalmente (caso de “Banco de Imagen”, en Valencia).

Ello naturalmente sin contar, que no despreciar, los distintos cursos teóricos y experiencias prácticas que sobre el mundo de la imagen y el lenguaje audiovisual pronto echaron a rodar en la Comunidad Valenciana -algunas de ellas con un bagaje de años- en el ámbito de la enseñanza media <sup>(101)</sup>, así como tampoco producciones -incluso subvencionadas por la DGMCS- del Instituto de Cine y Radiotelevisión Universitaria, el Instituto de FP “La Marxadella”, la Escuela Universitaria de EGB o la Universidad de Alicante. Como tampoco cabe olvidar -todo lo contrario- las empresas pronto constituidas, a su vez, con vista a las necesidades de doblaje en TVV, entre las que destacaría desde un principio Tabalet Estudis (con Lluís Miquel Campos detrás), a la que con el tiempo se sumaría Sontagía Doblatge.

La existencia de dicho caldo de cultivo, como decíamos, no avalaba ni avala, sin embargo, que más de una productora se atragante si limita su campo de acción a la TVV. La propia prensa valenciana cifró con motivo del Mercafilm de 1987, que sólo 25 empresas valencianas habían realizado algún programa para la DGMCS con el logotipo de la TVV, sumando apenas 27 de horas de duración la totalidad de los 64 programas comprados hasta dicha fecha para su emisión por el futuro Canal 9, “de los cuales la inmensa mayoría son cortos de 15 a 30 minutos de duración y pertenecientes al género de documentales” <sup>(102)</sup>. Junto a los 28 documentales, 3 dramáticos, 1 comedia, 2 musicales y 3 de video-arte de entonces, los restantes 26 programas eran la serie de entrevistas que se realizaron (media hora por personaje) con motivo del Congreso de Intelectuales celebrado en 1987 en Valencia. En su mayoría eran espacios realizados durante 1986 y 1987, si bien

había uno de 1981, seis de 1984, y tres de 1985. Y tan sólo unas pocas producciones estaban realizadas en 1 pulgada, dominando por contra las realizaciones con técnicas semiprofesionales (U-Matic HB, U-Matic, 16 y 35 mm).

Para entonces, pesaban como una losa las declaraciones del productor Lorenzo Soler en la mesa redonda que sobre “El futuro de la industria audiovisual en la Comunidad Valenciana” coincidió precisamente con la clausura del Mercafilm del 87. Soler explicó entonces que en Cataluña y Galicia “antes de la puesta en marcha de las correspondientes televisiones autonómicas, se instaló un gran sector de productores de video y TV con las mismas esperanzas, que los que se están montando en Valencia”, pero que “en la actualidad hay una fuerte depresión en este sector porque ninguna de las dos televisiones autonómicas en cuestión recurre a las productoras locales para comprar sus programas, sino que acuden a productoras extranjeras” <sup>(103)</sup>. La cuestión se sumaba a la preocupación existente en el seno del propio sector valenciano, muestra de la cual sería la polémica, previa en el tiempo, entre Manuela Gutiérrez (Galaxia TV) y Santi Bayarri (entonces director de Vídeo-Uno): frente a la primera, convencida de la necesidad de cooperar con empresas no valencianas para contar con la infraestructura necesaria, Bayarri puntualizaba que “el peligro para la TVV son este tipo de *empresas fantasmas*, empresas de Madrid o Barcelona, que se asocian con las de aquí. Las primeras ponen el capital, las valencianas los medios y locales, de esta manera da la impresión de que la empresa es valenciana”. Para Bayarri, en definitiva, “estos jóvenes (en alusión a los del Instituto de FP “La Marxadella”), junto a los muchos colaboradores con que cuenta Video-Uno y las demás productoras valencianas, constituirán los profesionales de la futura TVV y esto es lo que se debe potenciar” <sup>(104)</sup>.

Una vez desatascado el proyecto de LTVP, y con la directiva europea sobre “TV sin fronteras” en puertas, el año 1988 coincidirá con los primeros enfrentamientos entre el Consejo y la Dirección General de RTVV así como con el segundo parón “inversor” ya aludido. Pero no será tal, al menos, en lo que a compra de producción audiovisual concierne: y así, tras la visita previa de Lazarov a Valencia (por ser “una zona comercialmente muy potente”) <sup>(105)</sup>, Fabregat contactará en diciembre y en Milán con “*su emitencia*”... De otra parte, por lo que aquí importa, si en marzo del 89 Luis Solana anuncia que RTVE creará una productora de cine, la Generalitat de Cataluña reacciona de inmediato solicitando del ministerio de Cultura el traspaso de las subvenciones al cine: industria del cine y Cultura, en todo caso, negociarán -tras conocerse el contenido de la directiva europea- el ya famoso “plan nacional de promoción y desarrollo de la industria audiovisual” que ve la luz gubernamental en enero de 1990 <sup>(106)</sup>. Es precisamente entonces cuando, en el seno a su vez de la Confederación Valenciana de la Pequeña y Mediana Empresa (PYMEV) y junto a la Asociación de Productores, se constituye la Asociación de Empresas de Servicios de Vídeo, Cine y TV de la Comunidad Valenciana <sup>(107)</sup>. José M<sup>a</sup> Torres (Video Report & BSV SA) figura como presidente de una junta directiva, en la que se integran a su vez Sacramento Alvear (Dragón Producciones Audiovisuales SL), F. Pérez Aparicio (Galaxia Televisión SA), M. Cano Freixas (Nisa SL), R.J. Emo Valls (Videoproducciones Lledo CB) y Pedro Pérez Rosado (de Videquip SA)...

La toma de posiciones, en efecto, se ha agudizado para entonces en el seno del propio sector audiovisual y, por lo que respecta a los grupos difusores, particularmente entre las TV autonómicas y las privadas por llegar. Los intereses de los magnates del audiovisual europeo, como Berlusconi con diversas TV autonómicas, vienen moviendo también sus hilos. Es la antesala de una batalla, la

de la producción, en que los pequeños -una vez más- no parecen llevar, pese a todo, las de ganar. Si el problema se puede resumir al modo de Juan Cueto (“en dos palabras: ojo a un país en el que el consumo audiovisual no mantiene tratos con su propia producción audiovisual”), la traducción inmediata -en un contexto europeo y no sólo valenciano- permite sostener que la verdadera batalla audiovisual se libraría no tanto en la multiplicación de los grupos difusores (así en España, los nuevos canales autonómicos y privados) sino, ante todo, en el sector de la producción: ¿quiénes serán los creadores de los contenidos a emitir?

En el verano del 89 se conocía ya la intención -luego de las críticas hacia TVE y TV3 de la propia Oficina Catalana del Cine, por su desinterés en promoverlo- de la Generalitat catalana en el sentido de gastar ese año 900 millones para impulsar la producción de cine para TV, y a finales de julio Luis Solana anunciaba junto al ministro Semprún que TVE destinaría 1.200 millones a la producción de audiovisuales en 1990. Los grupos aspirantes (todavía) a un canal privado contaban ya por su parte, con propia productora o con productora asociada: Videotime (TeleCinco), Sogetel del grupo Prisa (Canal Plus), Prozesa (Univisión) y la previsión, por parte de Antena 3, de producir el 50% de la programación a emitir <sup>(108)</sup>... Para entonces, respecto de los contactos con Berlusconi, Amadeu Fabregat ya ha declarado que “és molt difícil deixar d’acudir al grans *pools* de compra, perquè si no, no tens accés als productes que més venen en la televisió. L’acord amb Berlusconi - acord que no existeix, perquè l’únic que ha hagut són unes converses en València i Milan-, té dues parts. Un vessant comercial i un vessant d’oferta de programes. Jo crec que ahí s’han de conjugar les dues variables i realment nosaltres necessitem algun tipus d’agència comercial que seria com exclusivista, que garantira un nivell alt d’ingrés comercial i després els programes poden ser eixos (programas USA antes que europeos) o poden ser uns altres” <sup>(109)</sup>. La firma posterior en Bilbao de la FORTA permitirá a TV autonómicas como Canal 9 cierto respiro, cuanto menos, en lo relativo a la “vertiente comercial”: pero persistirá la “vertiente de oferta de programas.

Si en Cataluña en tal sentido, y luego de cerrarse por TV3 -tras una demora de dos años- un acuerdo similar al ahora planteado a TVV por la Asociación de Productores, se produjeron en 1989 una quincena de largometrajes, los producidos en el País Vasco fueron seis y tres los producidos en Galicia. En Cataluña, por demás, de las 45 series contratadas, 38 correspondieron a empresas catalanas o radicadas en Cataluña... El panorama valenciano no sólo era ya entonces desolador (no se produjo ni tan siquiera un largometraje), sino que las contradicciones se acumulan. A la demora de la política a desarrollar por el Consejo y el equipo de Amadeu Fabregat, el sector debate su futuro incierto al hilo del debate paralelo que sobre política de subvenciones se dirime en el PSPV-PSOE y, por tanto, en el seno de la mayor parte de las instituciones valencianas, Generalitat incluida. En un clima, por demás, a cuya resolución no permanecen ajenos algunos medios de comunicación: así, el decreto 5/89, de 28 de julio del 89, que destinaba 80 millones escasos para subvencionar producciones televisivas, se criticaría de inmediato desde “Las Provincias”, con intereses en Antena 3 TV: “La Generalitat se pasa al mecenazgo audiovisual (...) ¿Va a pagar el contribuyente los delirios audiovisuales que vienen?” (18-8-89).

De modo que con independencia -siempre relativa- de la apuesta final de la Generalitat ante un sector privado autóctono no exento precisamente de contradicciones “estructurales” (la cifra de subvenciones para 1990 apenas sube sino hasta los 100 millones previstos entre DGMCS y Patrimonio Cultural), lo preocupante no es sólo desaprovechar un tiempo estratégicamente clave

para afrontar los retos audiovisuales de la Europa del 93 sino que, ante todo, lo preocupante es la dejación por parte de RTVV de una iniciativa que con arreglo al PEV-2 debiera haber asumido desde un principio.

Con todo, si inquietante resulta la postura de RTVV ante la *producción ajena* con “denominación valenciana de origen”, más si cabe lo es la aparente complicidad, por parte de los diversos órganos de dirección, en el error que evidencia el Organigrama en relación con la *producción propia* -en todo caso- y aun de la Producción como un todo, respecto de la Programación. Dicho error fundacional, que la reestructuración de enero del 90 dejará sin resolver, consiste en la integración de hecho de un hipotético y deseable departamento de *programación*, inexistente como tal, en el de *producción*. Lo que nos retrotrae, como quien dice, a la época de Ansón en TVE -espejo todavía dominante, por lo visto-, cuando la recta ordenación de la relación entre ambos departamentos -clave de la eficacia, según muchos, del organigrama como tal en toda televisión- se ventilaba por la vía más expeditiva, la de suprimir el departamento de programación: “el director general -aseguraba de TVE por entonces J.R. Pérez Ornia- afirmó que los programadores eran él mismo, sus subdirectores y algún que otro invitado en calidad de asesor (...) La consecuencia de tan torpe e incompetente medida (...) permiten calificar la gestión de Ansón, igual que la de sus predecesores, como absolutista y autocrática, ingenua y lejana de la realidad social y necesidades del país, además de, administrativamente, desastrosa” <sup>(110)</sup>.

Salvando los paralelismos mecanicistas, que tampoco en nuestro caso resultan válidos ciento por ciento, lo indudable sin embargo es que sigue sin atenderse en TVV SA. a una “estructura clásica”, al estilo de la BBC, que ha desglosado de siempre sus servicios básicos en tres fundamentales: de programación, técnicos y de producción. Más aún: por la influencia en parte -quizá- del esquema inicial del CPP de Burjassot, resuelto por Telling en términos que potencian las áreas de Producción y Emisión, lo constatable en el Organigrama que sigue siendo operativo en la fecha que se escribe, de una parte, es la subdivisión de los *servicios técnicos* en dos departamentos: el de Emisión, con Francisco Gómez al frente, y el de Explotación (sin duda el “hermano menor”, ya que no en personal sí en sueldos -como síntoma- de los cargos directivos adscritos al mismo). Al igual que, de otra parte, se desgajan -a imitación de TVE- los *Programas Informativos* (con Eliseo Lizarán al frente, y una subdivisión a su vez deudora del modelo TVE entre Información General, con Juli Esteve como coordinador, y Deportes, con J.V. Aleixandre como coordinador) del resto de Programación... Y el gran problema: pues esa Programación Restante definida por negación (lo “no-informativo”), no sólo es sintomática (al primarse “lo informativo”) de la vieja propensión por parapolitizar -en el peor de los sentidos- el modelo de TV resultante sino, ante todo, de la preocupante aceptación -al no distinguirse de la Producción en sí- del personalismo como método habitual para resolver los dilemas de Programación en relación con la *Producción* (propia o ajena) como tal área departamental. El resultado inmediato, no sólo en RTVV, es la no diferenciación entre Programación (de no-informativos) y el bloque de la Producción como tal. Siendo el riesgo adicional y no menor, como la cara oculta de método tan “particular”, la frecuente ausencia de programación (en su sentido de planificación) de que se contagia dicho bloque de Producción.

Tan indistinta relación entre programar y producir suele repercutir, finalmente, sobre ciertos problemas ya entrevistados: de racionalidad en el uso de los recursos y de atención al sector privado autóctono, por ejemplo; así como, a su vez, sobre otros no tan evidentes y no menos globales: el de



eficiencia, sin ir más lejos. Los objetivos (fines, una vez más) de programar y producir son, no en vano, diferentes. Si “*programar* -de nuevo con Pérez Ornia- significa, ante todo, planificar y articular las distintas unidades o espacios dentro del esquema horario de las emisiones”, entre sus funciones está la nada fácil de “determinar los contenidos y formatos de los programas de acuerdo con una heterogénea serie de objetivos y criterios que van desde las necesidades y gustos de la audiencia, la oferta de ideas o programas tanto ajenos como por iniciativa de los departamentos ‘creativos’ de la casa, hasta las imposiciones que dicta la política del gobierno, en el caso de las TV estatales, o la publicidad en el caso de las TV comerciales, cuyo extremo sería el de los ‘programas patrocinados’” (Ibídem). Mientras que “la *producción* tiene por objeto y fin coordinar las múltiples actividades de los equipos que se encargan de realizar cada programa y de acuerdo con la planificación prevista en el departamento de programación”...

No es extraño por todo ello que las primeras críticas a RTVV, que por demás no respetaron el pacto habitual de los “100” primeros días <sup>(111)</sup>, terminasen por apuntar a las deficiencias tendenciales ya por entonces evidentes y que aquí se señalan como consustanciales a la estructura organizativa de partida. Si el personalismo en Programación se aleja de la democratización de las estructuras organizativas deseables en toda TV pública, la ausencia de planificación (o su deficiente interiorización, especialmente en Programas No-Informativos) suele traducirse en ausencia del necesario control del gasto (o deficiente seguimiento del mismo): pero “control” no sólo financiero, sino también de calidad, contenidos y objetivos de cada programa.

De ahí que pese a anunciarse desde un principio (vid. Cuadro anexo) una oferta de programación basada en información, deportes y entretenimiento (series y concursos), la versión dominante entre los avisados sobre sus resultados fuese tempranamente, poco más o menos, como aquella quintaesenciada por J.J. Pérez Benlloch: “Menos los informativos, todo es una caca” <sup>(112)</sup>. José Ginés, desde El País, recordaría no mucho más tarde que “en este nuevo panorama competitivo (...) la *rejilla* representa el auténtico motor del canal y la estabilidad de otros tiempos deja paso a la creatividad (...) Es en la producción propia donde un canal arriesga el tipo. Y no es casual que la mayoría de las televisiones autonómicas hayan apostado en sus primeras producciones, al margen de los informativos y sus derivados -monográficos o entrevistas-, por los programa-concurso. Permiten ganar audiencia con relativa facilidad y su realización, una vez encontrada (o comprada) la idea, no representa grandes complicaciones”; concluyendo, en tono de aviso; “Son perfectos para esa etapa en la que se carece de escuelas o cuyos modelos (...) están todavía muy lejos” <sup>(113)</sup>... Ciertamente, el trasvase de *know how* del Centro Regional de TVE a Canal 9 se patentizaba de inmediato en un mayor acierto en los informativos, si bien dejando ver la escasa propensión a los debates o cualquier otra fórmula de introducción de “opinión política” en la rejilla (algo evidenciado por el tratamiento informativo del “caso Blasco” en febrero); por otra parte, de las “cinc mil pessetetes” que popularizaron el concurso de Joan Monleón y que pronto concitó el grueso de la crítica sobre la programación de no-informativos, con diversidad de opiniones, hasta la controversia más reciente sobre las intenciones de la dirección de RTVV de saciar “el hambre de morbo y sexo” en la programación nocturna del primer verano con Canal 9 como compañía ya posible, pronto matizadas por un Consejo temeroso ante el comunicado en su contra lanzado por los obispos valencianos <sup>(114)</sup>, las dudas sobre quién programa y quién produce -según los viejos interrogantes de Raymond Williams- son más que evidentes en el canal valenciano.

TELEVISION VALENCIANA				PERIODO:OCTUBRE/DICIEMBRE 89			
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
14							
14,30							
15							
15,30							
16							
16,30							
17							
17,30							
18						Av.int/av.prog.	Av.int./Av.prog.
18,30						DIBUJOS	DIBUJOS
19							Av. deportivo.
19,30						T.V. MOVE	MUSICAL
20	C. AJUSTE	C.AJUSTE	C.AJUSTE	C.AJUSTE	C.AJUSTE		TELESERIE
20,30	Av.int/avprog	Avint/av.prog	Av.int/av prog	Av.int/av prog	Av. int/av prog		
21	TELESERIE	TELESERIE	TELESERIE	TELESERIE	TELESERIE	DOCUMENTAL	Av.deportivo
21,30	CONCURSO	CONCURSO	CONCURSO	CONCURSO	CONCURSO	Prod. propia	Prod.propia
22							
22,30	INFORMATIVO	INFORMATIVO	INFORMATIVO	INFORMATIVO	INFORMATIVO	INFORMATIVO	INFORMATIVO
23							
23,30	PELICULA	GRAN CONCURSO	TELEFILM		TAL k.SHOW		DOCUMENTO DE ACTUALID.
24				PELICULA		PELICULA	DEPORTIVO
24,30		Prod.propia	DEPORTIVO		Prod.propia		Entrevis. fondo
25		TELESERIE HUMOR					
25,30	INFORMATIVO	INFORMATIVO	INFORMATIVO	INFORMATIVO	INFORMATIVO	INFORMATIVO	INFORMATIVO
26	DESPEDIDA	DESPEDIDA	DESPEDIDA	DESPEDIDA	DESPEDIDA	DESPEDIDA	DESPEDIDA

Parrilla inicial de programación establecida por la TVV.  
Fuente: LEVANTE, 27-8-89.

Tales críticas no caerían totalmente en saco roto. Porque, sin respetarse tan siquiera el pacto de cortesía de los 100 primeros días ni por la propia dirección de RTVV, se acomete la primera reestructuración seria (tanto en radio como en TV) en enero del 90. Pero la misma, no obstante, apenas afrontó el problema de fondo aunque llegase a parecerlo (al centrarse en buena parte en el área de Producción, ya se ha dicho). Basta un simple repaso al organigrama resultante de aquella *primera crisis* <sup>(115)</sup>, por demás, para constatar ciertas “tendencias persistentes” en el sentido que señalamos (y por tanto, de que el entendimiento de la dirección no fue de tal crisis). Así:

1. El personalismo de la Dirección General y su contenido fuertemente centralista, en todo caso “potencial y consustancial” al organigrama, se acrecienta de una parte al desaparecer la figura del Secretario General, lo que si a priori permitía una mayor atención al problema de personal (Vicent Todolí deja la Secretaría y se incorpora al departamento de Recursos Humanos, inicialmente dependiente de él mismo) no por ello manifestará mejoras con el tiempo (a la vista del I Convenio colectivo).

De otra parte, el contrapeso (político) que parece presuponer la presencia de Tomás Álvarez al frente del Gabinete de Relaciones Exteriores, se compensa por parte de Fabregat al incorporar a su Gabinete particular a Miguel Tejedor, proveniente a su vez del Centro Regional de TVE y hasta entonces responsable de un departamento de TVV tan significado -desde el organigrama inicial- como es el de Producción de Programas: Hortensia Moriones, fiel entre las fieles al director general, se limita a ceder su puesto en dicho gabinete, dedicándose a las tareas de secretaria del director.

En el mismo sentido, desaparece la Dirección Económico-Financiera, siendo cesado su responsable hasta enero del 90 (Francisco Montes) y reconvirtiéndose en Departamento Económico, que se integra en la línea hasta entonces dependiente de la Secretaría General.

2. Por lo que respecta al esqueleto concreto de TVV SA (seguimos sin adentrarnos en la Radio autonómica, donde se produce el relevo de Rosa Solbes), de entrada se mantienen intactos los Departamentos de Informativos y Explotación... Salvo los “ascensos” de rango intermedio acometidos en ambos Departamentos, quizá ligados a la superación -vía costes adicionales- de la etapa “voluntarista” de los esfuerzos del despegue inicial, pero ignorándose si es tal superación lo que se persigue o si por contra lo que se pretende es un apaciguamiento por la vía de disminuir las diferencias entre las diversas escalas de jerarquía (tratándose de áreas que “ruedan” bien y en las que, sin duda, se antepone la persecución de garantizar su continuidad).

3. En Emisión el retoque es en apariencia más ostensible, pero en absoluto resulta la clave de la crisis. Antes al contrario, es parte de su solución, al incorporar a Francisco Cabello a Producción (Planificación), siendo cubierta su plaza en emisión con la incorporación de Adela Pont. Adicionalmente, Francisco Gómez seguirá al frente del departamento, al igual que J.L. Forteza en la sección de Planificación de Emisión. Pero la sección de Continuidad, que sigue dependiendo del departamento (en otros canales es ya de Programación) se refuerza, con la nueva Unidad de Promoción de la emisión: la razón no es otra que reforzar la captación del telespectador, ante la competencia adicional de las privadas (que nacen por entonces).

4. La primera crisis de TVV parece evidenciar, finalmente, cuanto llevamos sosteniendo, Y tiene su epicentro en la remodelación del Departamento de “Producción de Programas” (ya el

**Fuente:**

Elaboración propia, a partir de:  
"Levante" (6 y 7 - enero - 1990)  
y "El País/Comunidad Valenciana  
(6 - enero - 90).

propio nombre indica la absorción de funciones aludida). Aquí, M<sup>a</sup> Luisa del Romero será la “fiel”, capaz de sustituir a Tejedor al frente del departamento y abandonando una sección de producción de programas Culturales que desaparece, al igual que sucede con las secciones de producción de programas de Entretenimiento (donde se cesa a Casimiro Gandía) y de Retransmisiones (donde se cesa a Vicente Tamarit). Rafael Méndez, hasta entonces en Planificación de Producción, pasa a ocuparse de la nueva sección de Producción Propia, mientras que J. Doménech sigue en la producción de programación Ajena.

De todo ello se deduce una “contracción por arriba” que acrecienta los poderes de la Dirección General, al parecer dispuesta a suplir (desde su Gabinete de Dirección, tras la incorporación de Tejedor) la ausencia del hipotético Departamento de Programación. El síntoma no es halagüeño, no tanto en demérito del papel efectivo que Rafael Cano pueda desempeñar de hecho al frente de TVV SA. cuanto de la funcionalidad hipotética de tal rediseño, pues (en cuanto a la relación programación-producción al menos) dependerá de la incorporación a dicho Gabinete-y eso en el mejor de los casos- de asesores expertos, incorporación siempre cara y nunca proclive al deseable continuismo en tales cuestiones ante cualquier remodelación posterior de la Dirección.

Más aún: si con la incorporación de Tejedor al Gabinete de la Dirección General parece querer resolverse la deficiente relación entre programación/producción, pero por la vía más cómoda y tecnocrática (más dependiente ahora de la Dirección General ¿para los programas culturales y de entretenimiento tan sólo?), no es menos cierto a la par, por más que en “Producción de Programas” se reducen a 3 lo que antes eran 5 secciones, que ni la prioridad otorgada a la Producción como tal desaparece, ni la continuidad en Producción Ajena parece augurar mejores expectativas para el “efecto arrastre” que espera de RTVV el sector valenciano del audiovisual, ni parece tampoco -a la vista de la “solución” hallada para la Gestión Económica- que ello pueda conllevar, tan siquiera, ahorro en costes o mayor autocontrol financiero... Todo lo cual, ante la creciente presión de las encuestas y sondeos de audiencia, ante la competencia de las televisiones privadas (que arrancan al unísono y pueden permitirse mayor agresividad “de partida”) y, en definitiva, ante la indefinición de fondo relativa al asunto financiación, replantea la urgencia de volver a reivindicar (por aquello de “la casa nunca se empieza por el tejado”) la clarificación del modelo de TV por el que se apueste.

### 2.2.2. Colisiones de arranque y competencia entre televisiones públicas en el espacio valenciano.

Si en vez de primar una perspectiva “interna” reconducimos nuestro enfoque analítico hacia una perspectiva que considere la complejidad de Canal 9-TVV antes “desde fuera”, lo más inmediato resulta, sin duda, constatar que con su puesta en pie se inauguraba el *problema fronterizo* entre Televisiones Autonómicas colindantes, pues hasta entonces ninguna de las existentes (ETB, TV3, TVG, Canal Sur, TM3) lo eran entre sí. Problema que, de entrada, abunda en la oportunidad (teórica) de considerar el caso RTVV desde una óptica también territorial y no ya exclusivamente sectorial. Pero que además, al hilo de la polémica colisión entre TV3 y una TVV recién inaugurada, tiene la virtud de ahondar en el hecho de que la cuestión (práctica) de fondo, también por lo que hace a los modelos de TV Autonómica “pesada” asentados en España, *no sólo remite a una competencia (difícil de entender) entre ellas, sino a las contradicciones sobrevenidas por su asunción de unos modelos ideológicos y financieros (que arrastran otros de producción y programación) importados en gran medida, y pese a ser todas ellas de titularidad pública, del modelo de “TV como negocio”* (en su extremo, el modelo privatista USA).

Contradicciones que en lo económico actúan, *incluso*, en ausencia de competencia (como demostraría su edificación a partir de unas relaciones especulares con/contra una TVE hasta hace poco monopolística), aun cuando tales contradicciones se agudicen con dicha competencia. Y que remiten, en lo político, al modelo de TV en España *como un todo*, tal y como se evidenciaría en este caso concreto al viejo modo centralista, tras “zanjarse” de hecho, en los términos actuales (septiembre 1990), por el propio ministerio de Transportes y Comunicaciones. Conviene, en consecuencia, que resaltemos algunas de las contradicciones más llamativas, acumuladas en el pasado reciente por las distintas televisiones públicas con presencia en el espacio valenciano. En relación, por lo que nos importa, con RTVV.

De una parte, Amadeu Fabregat afirmaba tajante, el mismo día de su nombramiento al frente del ente autonómico, que “TVE en la Comunidad Valenciana no será competencia para RTVV”. Era el tributo mínimo, sin duda, al optimismo debido a dicho nombramiento: pues el propio Fabregat, por entonces como delegado territorial de RTVE, no era menos tajante a la hora de no callar ciertas interioridades del centro regional que a nadie avezado en estas materias se le pasarían por alto: “Yo lo que puedo decirle es que entré aquí en diciembre de 1984, hasta hoy, he multiplicado por diez los ingresos por publicidad. Hace dos años estaba en 150 millones de facturación y en 1986 fueron 1.500 millones. En este año pasaremos los 2.000 millones” (Las Provincias, 11-9-87). Ni que decir tiene que ello fue posible de la mano del “descubrimiento de ingresos” propio de la etapa Calviño en relación con los centros regionales (coincidente por demás, como decimos, con el tirón de “demanda” publicitaria que todavía conlleva la integración en la CE). La amistad entre ambos “ex” de TVE, através precisamente del actual director de RTVE Jordi García Candau, es de sobras conocida y fue motivo probable de más de un revolcón de los inicialmente padecidos por Fabregat en su línea directa con Torrespaña, en la etapa Miró.

María García-Lliverós declararía poco más tarde, nada más desembarcar en el centro regional de TVE (desembarco tan llamativo entonces como efímero después), que “la mejora de la

infraestructura de TVE en la Comunidad Valenciana es necesaria desde hace tiempo y ahora la construcción de un centro regional va en serio (...) Siempre he dicho que un efecto multiplicador de las televisiones autonómicas es que TVE invierte enseguida en aquellas comunidades que tienen televisión propia” (Las Provincias, 6-4-88). El caso TV3 y la resolución inmediata de Miró relanzando el centro de San Cugat, en efecto, estaba en la mente de los enterados. Pero el caso valenciano dista de enfocarse desde Madrid con óptica (ante todo política) similar a como se contempla el caso catalán... El replanteamiento de las cosas, en todo caso, quedaba bosquejado al filo de los respectivos nombramientos. Pero poco más.

Lo difícil, por ejemplo, sigue siendo prever *cuándo serán efectivas* las obras de construcción del nuevo centro territorial de RTVE en Valencia, por más que ya exista acuerdo de colaboración en tal sentido tras la firma de Joan Lerma y Jordi G<sup>a</sup> Candau el 19 de junio de 1990, y según el cual la Generalitat cederá unos terrenos cercanos a Paterna (y a RTVV por tanto) y que la propia RTVE afirmase una inversión de 2.000 millones a los mismos efectos (de los que deducir los 500 previstos para el nuevo centro de RNE en la calle Colón) (116). Pues no en vano, la inadecuación de los actuales locales de la calle Lebón en Valencia (inaugurados en 1980 siendo Arias Salgado director de RTVE y cedidos en alquiler por la Caja de Ahorros Provincial tras destruir un incendio los antiguos estudios) era y es, en efecto, algo más que evidente. Pero no así cuanto suceda en materia de equipos y personal, el problema más serio del centro regional desde la época de Eduardo Sancho. Y ya que no tanto en equipamiento técnico, lo cierto es que la política de personal a partir de Canal 9 (en no menor medida que después el cambio de cadena de los informativos regionales, de la 2<sup>a</sup> a la 1<sup>a</sup>, por parte de TVE) pronto hizo subir la temperatura al hilo del repunte competitivo que se vislumbra entre ambas televisiones... De no mediar, si no el abandono, cuanto menos la “relativización” de los esquemas de financiación según criterios exclusivamente publicitarios dentro de un mercado tan peculiar como el valenciano. Pues no otras, sino las ideológicas y financieras, son las razones básicas que justificarían un distanciamiento “relativo”, necesario y en absoluto indeseable, entre RTVV y RTVE. Al obedecer una vez más, según entiendo, al diferente “modelo de TV” que legitima finalmente a las mismas. Razones, por tanto, inherentes al diverso carácter gerencial de las empresas públicas de TV respectivas y a la “diversa TV Pública” que persiguen ofertar.

Por motivos tanto de gestión como de “modelo televisivo” en sí, de otra parte, tampoco parece aconsejable una TVV al estilo TV3, la otra TV pública con presencia hasta el momento en el espacio valenciano. La corporación catalana ha levantado, insistimos, un modelo televisivo “a la contra” (pero similar por lo mismo en su lógica económico-política) de TVE: por cuestión lingüística en principio (normalización del catalán), pero también por cuestión política en su sentido más estricto (el victimismo pujolista, de paso que gana más votos que pierde con tal normalización, no es irreconciliable sino todo lo contrario con el endeudamiento/déficits que en ésta como en otras materias puedan sucederse).

El principal defecto por ello de TV3 ha sido incorporar los defectos neocentralistas y paragubernamentales del modelo a rehuir en teoría: algo sólo posible, retomando interesadamente aquí lo sugerido en su día por Fabregat, dada la inexistencia en Cataluña de una realidad como en nuestro ámbito lo es -señaladamente- Alicante. La identificación de capitalidad autonómica que se da en Cataluña en relación con Barcelona no se da, parece obvio, en la Comunidad Valenciana respecto de Valencia... Hasta el punto, según pienso, de que el Canal 33 o segundo canal catalán

puede obedecer -en su legitimación de fondo- al intento de Convergencia i Unió por apoyar, desde una televisión autonómica “neocentralista”, el mapa comarcal catalán sacado adelante por el gobierno Pujol en fecha reciente, y no sólo porque el predominio del “ámbito nacional” que prescribe la LTVP ya en vigor estimule -más que previsiblemente- el reforzamiento del castellano, más allá de la anunciada “cuota” de su programación territorializada.

A nadie escapará, en tal sentido, que ni siquiera el recurso adicional a un mayor endeudamiento/déficit podrá salvar a Canal 33 de trasladar a su propio terreno un incremento de la lógica comercializante que, con menos prevenciones que cualquier TV pública que se precie de tal, conllevarán sin duda a medio plazo tales TV privadas. Lógica comercializante, por demás, que no ha de resultar irrespirable para la burguesía catalana, sin duda con la anuencia de unas agencias de publicidad para las cuales “invertir en catalán” es tan rentable como hacerlo en castellano: el dinero habla su propio idioma, ya se sabe... Como a nadie escapará, en el mismo sentido, que el modelo de “TVV ampliado” (vía conexión con TV locales valencianas) que aquí se defenderá, nada tiene que ver en principio con ello: no sólo por implicar un “modelo territorial” distinto en el caso valenciano, de entrada, sino ante todo por querer implicar un “modelo de TV” (no sólo gerencial) diferente.

La Comunidad Valenciana, con todo, no debiera desaprovechar la ventaja -si a normalización lingüística apuntamos como principio fundacional de RTVV y si reconocemos el sustrato lingüístico cercano a catalanes, valencianos y mallorquines- inherente a la liberalización posible, si defendible desde otros intereses no menos desde una perspectiva “progresista”, de las ondas. De manera que al igual que los límites de competencia con TVE resultarían claros (como plataforma adicional, por ejemplo, para la comercialización de programas propios en el exterior), no menos claros resultarían en relación con TV3 (convenios de coproducción y, en el terreno de la normalización lingüística, libre recepción de las respectivas emisiones en los territorios correspondientes y en Baleares).

Lo más inmediato, sin embargo, es la constatación de que la delimitación de esa eventual “reciprocidad en la recepción” entre TVV y TV3 se haya prefijado, en no poca medida, *desde fuera*. Sin resolverse por ello -quizá todo lo contrario-, las contradicciones ideológicas y financieras de fondo. De ahí el interés para el modelo televisivo *global*, no sólo para valencianos y/o catalanes, de retomar con mayor detalle el conflicto suscitado entre ambas TV autonómicas al hilo de su definición como “problema fronterizo”. Es decir, al volver a primar, en su resolución momentánea, un entendimiento jurista/politológico sin duda proclive a su identificación como si de un problema de “soberanía” se tratase (lo que resulta, aun desde tales perspectivas, a todas luces discutible).

A este último respecto se sabe, sin embargo, cómo tras la denuncia efectuada por el delegado del Gobierno contra el repetidor de TV3 en Castellón, y la correspondiente demanda de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ante la Audiencia Territorial frente a la orden de cierre subsiguiente del ministerio de Transportes, el Supremo admitía en abril del 87 el recurso contra dicho cierre. La señal de TV3 llegaba ya entonces al 70% del territorio valenciano, luego de los cerca de 100 millones invertidos por ACPV en la instalación de los reemisores del Monte Bartolo, junto a Benicassim (en marzo del 86), el de Xixona (enero del 87) y el situado próximo a Chiva (abril del mismo año 87). Con anterioridad por tanto al bautismo de ondas de Canal 9-TVV, y junto a las dos cadenas de TVE, las áreas urbanas de Valencia, Alicante, Elche, Orihuela, Castellón, Burriana y



otras, disfrutaban para entonces -merced a tal iniciativa- de una oferta televisiva no en castellano. Ya se sabía por entonces, en no menor medida, que TV3 emitía en la misma frecuencia que utilizaría en su día la TV Valenciana -a través del canal 28 del UHF en Valencia, del 38 en Alicante y del 63 en Castellón.

Con toda probabilidad, la pugna por limitar la competencia en captación de ingresos publicitarios a los respectivos territorios más que el presunto interés autárquico de Lerma o Pujol por asegurarse una audiencia definida a sus respectivos mensajes políticos, ya provocó entre cierta prensa valenciana titulares de “guerra” anticipada entre ambos canales autonómicos. Sobre todo pensando en la posible ampliación de la señal de TVV para las Baleares (autonomía que hasta 1985 no había solicitado concesión alguna de Tercer canal), en respuesta a la petición formulada por la asociación Obra Cultural Balear.

El cruce de intereses, por ello, es diverso y no difícil de entender, toda vez que una extensión de la audiencia potencial (para cualquiera de los dos canales) supondría un mayor atractivo para no pocos anunciantes -con la consiguiente preocupación en otros medios, prensa incluida, ante la posible merma de su cartera publicitaria. De ahí que la pugna se ciñese desde un principio a posturas bien definidas, al menos por lo que hace a las mantenidas desde la Comunidad Valenciana. Y si Ximo Puig, jefe del gabinete de Lerma, sostenía en febrero de 1988 que la intención de la Generalitat era ya entonces de “agotar la vía del diálogo y la legalidad” a fin de favorecer la mayor compatibilidad recíproca en la recepción de TVV y TV3 en ambas CC.AA., Iñaki Zaragüeta (como presidente a la sazón de la Asociación de la Prensa de Valencia) ejemplificaba por las mismas fechas posturas más impacientes: “No cabe duda que a nuestro presidente tiene que disgustar que Pujol y Cataluña estén en la sopa de los valencianos. Pero todavía es peor que la publicidad de las empresas de nuestra Comunidad repartan sus campañas entre TV3 y TVV, porque la primera goce de una hospitalidad altruista. La inversión de la Generalitat es tan grande (en TVV) que no puede permitirse esos lujos” (Hoja del Lunes de Valencia, 8-2-88)... Al tiempo que Fabregat por su parte, señalaba, poco más tarde, que no podía impedir que lleguen a nuestro territorio “las emisiones de otras televisiones, entre otras cosas porque no me han nombrado director general de las ondas hertzianas” (Levante, 13-4-88).

Las raíces del conflicto, así, estaban servidas *al menos* un año antes de que Canal 9, en su salida al aire, lo hiciese utilizando el canal hertziano hasta entonces utilizado por los reemisores promovidos por Acció Cultural del País Valencià para el visionado de TV3 en territorio valenciano. Una situación heredada por demás -de ahí que quepa decir “al menos”- desde el acuerdo Gobierno-ACPV (González/Virseda-Climent) alcanzado en septiembre de 1985 a fin de favorecer los objetivos de recuperación y normalización lingüística en la Comunidad Valenciana.

En octubre de 1988, más en concreto, y una vez clarificado por tanto el calendario de la LTVP y las actuaciones previsibles -subsiguientes- en cuanto al audiovisual autonómico (el valenciano entre ellos) que por entonces hacía cola ante la Administración central, los Amics de TV3 de ACPV volvían a conseguir un amplio apoyo entre alcaldes, concejales y entidades valencianas diversas, a los que sumar unos 50 diputados del Parlamento catalán y más de 200 entidades de Cataluña y las Islas Baleares, en apoyo de la “alegalidad razonable” que implica(ba) la convivencia en la Comunidad Valenciana de Canal 9 y TV3 al unísono. Al tiempo que, ya en diciembre de 1988,

la comisión de política cultural del Parlamento catalán subrayaba que “las emisiones de TV3 hasta Valencia no podrán ser moneda de cambio en la negociación del Canal 33”, cuya puesta en marcha se negociaba entonces con el equipo Barrionuevo; y ello en práctica coincidencia con la afirmación de Fabregat, en una de sus primeras comparecencias ante una comisión de las Cortes Valencianas, de su postura contraria “a que las televisiones autonómicas se interfieran” y que “TV3 puede crear gravísimos problemas en el mercado televisivo” a una RTVV, para cuyo inicio de emisiones confirmaba la fecha de octubre de 1989.

No es mi intención detallar aquí la cronología del conflicto a partir de entonces. Pero importa retener, como principales hitos del mismo, las declaraciones cruzadas en la primavera de 1989 entre Lerma y Pujol (incluso su contacto a mediados de mayo) en los que el primero se declaró partidario de la reciprocidad, avalando incluso ante el alcalde Maragall que los catalanes sufragasen repetidores para la recepción de TVV en Cataluña, mientras que Pujol dejaba entrever su deseo de que así fuese pero siempre y cuando la programación de Canal 9 no fuese en castellano. Intelectuales y profesores universitarios creaban de hecho Amics de TVV en Barcelona, en julio, contando con el respaldo (diverso) de los grupos parlamentarios en Cataluña: fue el síntoma inequívoco de que pudo alcanzarse un acuerdo en torno a la reciprocidad en la recepción de ambas emisoras... En agosto sin embargo las cosas cambian, coincidiendo con las negociaciones Roca-Barrionuevo en torno al Canal 33.

Es en agosto cuando se produce la concesión a TVV de la frecuencia hasta entonces utilizada por los reemisores de TV3, impidiendo de hecho su visión en la Comunidad Valenciana, por parte del ministerio de Transportes y Comunicaciones. El motivo alegado será la imposibilidad técnica de obtener para la catalana alguna otra frecuencia “libre”, una imposibilidad que más tarde se cuestionará y relativizará desde los mismos planteamientos técnicos... Fabregat declara por entonces que “con TV3 no hay problemas”, que la decisión es gubernamental y no suya. De ahí a la reacción de ACPV, a los diversos apoyos que recibe y las distintas manifestaciones y escritos públicamente aireados que por lo mismo se suceden, a la encrucijada del PSPV-PSOE y del propio Consell al respecto, junto al escapismo itinerante de Fabregat, hasta la definitiva entrada en juego del ministro Barrionuevo y el precinto “en guadiana” de los repetidores de TV3, etc, no hay sino una larga e intensa disputa marcadamente acusada en el mes de septiembre de 1989 -a disposición de todo interesado en las hemerotecas- que marca la propia inauguración de Canal 9-TVV como una novedad más allá de sí misma en relación con el audiovisual español como un todo. Y que culmina, luego de evidenciar las contradicciones ideológicas y financieras (junto a las estrictamente técnicas alegadas desde un principio para su resolución) ya aludidas. Con el posicionamiento finalmente asumido por las partes en pugna:

- de una parte, al pedirse al ministerio de Transportes por el Consejo de Administración un segundo canal para RTVV, el Consell valenciano se posicionaba a mitad de camino del acatamiento sumiso, en ese momento, a Barrionuevo (aceptando una concesión políticamente tan sólo beneficiosa para él y las privadas); al tiempo que frente a Pujol, en el futuro, se dejaba entrever una postura favorable a la compatibilidad entre TVV y TV3 siempre que se respetase una total reciprocidad (es decir, las mismas horas y condiciones de recepción de cada una en el territorio de la otra, y no sólo un reducido horario “inflando” la programación de Canal 33 como llegó a proponer la dirección de TV3-Pujol).

- A las porturas anteriores cabe añadir la reacción, de otra parte, de ACPV, al reanudar las reemisiones de TV3 en la Comunidad Valenciana haciendo valer el amplio apoyo recibido tanto de Ayuntamientos como de particulares y, por tanto, haciendo caso omiso de los precintos dictados por el ministerio de Transportes; así como la subsiguiente postura de fuerza del ministerio, ya con apoyo de RTVV, tornando primero a la reafirmación de su ilegalidad (volviendo a precintar los repetidores e instando al Gobierno para multar con 8 millones a ACPV), y posteriormente, tras el debate de abril de 1990 en el Congreso, a la “alegalidad consentida” que ya se arrastraba al respecto desde 1985. Así, hasta hoy.

El mencionado debate, sin embargo, puede retomarse como la expresión más cercana -que no más cabal ni explícita- de los intereses (ideológicos y financieros) realmente en pugna, así como el síntoma más evidente de cuanto sigue pendiente de cerrarse: no sólo respecto de la eventual compatibilidad en la recepción de las emisiones de TVV-TV3 en las Comunidades respectivas (y aun más allá de ellas mismas) sino, antes que nada, respecto de la necesaria clarificación del audiovisual español como un todo... Por más que, como tal “solución política”, parece haber favorecido de hecho -antes que nada- la *tregua de alegalidad* con que provisionalmente viene cicatrizando la situación en el caso que nos ocupa.

El debate en cuestión fue propiciado por la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, presentada en el Congreso y dirimida el 4 de abril de 1990 en el seno de la comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios. Aun no aprobada, por la posición mayoritaria en contra del PSOE, su propio resultado evidenció el alto consenso implícito favorable a la remoción, en desarrollo del artículo 20 de la Constitución y del propio Estado autonómico, de “cualquier tipo de obstáculo para impedir la reciprocidad en la difusión de TV3 y TVV” tanto en la Comunidad Valenciana y Cataluña como en las Islas Baleares (dada la iniciativa en tal sentido de Obra Balear, federada en la actualidad con Omnium y Acció Cultural).

- En lo básico, y desde la óptica jurídico-política que suele dominar el discurso en semejantes foros, el CDS (a través de Martínez-Campillo, diputado por Alicante) recordaba cómo el conflicto pone de manifiesto algunas “deficiencias de la LOT” y cómo “si el mismo sentido estricto de vigilancia y de policía se hubiera ejercido sobre otras actividades que la LOT considera irregulares probablemente hoy la mitad del país estaría sujeta a un expediente de infracción” (en clara alusión a las ilegales televisiones locales y por cable), adelantando que, por un principio de igualdad en el trato, la anunciada puesta en marcha de TeleMurcia recrudecería el “problema de fronteras audiovisuales” en el sur de la Comunidad Valenciana.

- Pero, junto a las incoherentes posiciones de los representantes de CiU y PNV al pretender pisar el fuego sin quemarse (por exclusivas estrategias de partido que demuestran la subordinación extrema que el audiovisual conocido padece en España respecto de los intereses progubernamentalistas de turno y en cada ámbito territorial), lo más destacable fue la intervención de Milian Mestre (PP). La derecha política más genuina, según su planteamiento, no entendería la “naturaleza del problema” como consustancial a estrictos planteamientos culturales, sino que según ella los mismos “desenfocarían” dicha naturaleza. Así, junto a la crítica de la situación creada -por ilegal-, diría “comprenderla” por su cuestionamiento al tiempo de la actual legalidad: dado -y esto es lo importante no siempre explicitado- que dicha situación, en opinión de los populares, “probablemen-

te también” sería ilegal *respecto de “la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley General de Publicidad y la Ley de Propiedad Intelectual”*... Cuya traducción, más allá de lo juricista del planteamiento, el propio Milian Mestre se encargó de explicitar: pues al reclamar la aplicación irrestricta de la libertad de expresión terminaba por pronunciarse *“abiertamente a favor de la libertad plena de creación de canales de televisión privada en nuestro país”* (117).

- Morlán García, socialista, era explícito por otra parte sobre *la necesidad de “defender, debatir y articular un debate en torno a la libre circulación de la información y a la intercomunicación entre las Comunidades Autónomas”*. Debate, sin embargo, que aplazaba de facto en razón de que *“estas libertades han de tener un camino marcado por unas normas de rango suficiente”*. Remitiendo a su vez el asunto, en tal momento, a los *“problemas técnicos en estudio”* por parte de Transportes *“para solucionar el problema de la reciprocidad”* y, en todo caso, a *“las nuevas regulaciones que se van a producir en un futuro (ya anunciadas por el ministerio en cuestión), respecto a la regulación de la televisión local, de la televisión por cable y de la televisión por satélite”*.

La cuestión, en todo caso, es ciertamente relevante para la propia defensa de esta Tesis, por cuanto la frecuencia utilizada por TV3 para sus (re)emisiones en territorio valenciano, y ahora por Canal 9-TVV, era, y en algunos casos sigue siendo, la ocupada desde un principio por varias televisiones locales valencianas (municipales o no). Se comprenderá de ahí, por la defensa que intentaremos a favor de un *“modelo de TVV ampliado”*, que se juzgue básica la resolución *política* del asunto; y nuestro criterio, en consecuencia, de que la anunciada normativa sobre TV local y por cable debiera pronunciarse -finalmente- sobre los límites (no sólo técnicos) de una concurrencia que va más allá, en el espacio valenciano al menos, de la potencial entre ambos canales autonómicos. En el sentido, aun desde lo jurídico como *“prima ratio”*, de acotar jurídicamente tanto límites efectivos (ligados sin duda a los acuerdos internacionales sobre reparto de radiofrecuencias y a la endeble defensa de los intereses españoles en la Conferencia de Ginebra del 77), pero no menos que posibilidades (al amparo, cabe suponer, tanto del art. 20 de la CE, cuanto de alguno más de la LOT y de la LTVP).

No cabe ignorar, por tanto, la fragilidad -jurídica en todo caso- de cuanto pudiera opinarse por ahora al respecto. Pero sí debiera quedar claro, desde la Comunidad Valenciana, que si la defensa del libre flujo de las ondas entre las TV Autonómicas no debiera limitarse a una sola dirección -como apuntase Aureli Ferrando, en relación con el alcance territorial de TVV (118)-, no menos claro debiera resultar que ello no tiene que ver tan sólo con *“l’abast territorial de la llengua”*. Pues también condiciona, de hecho, la defensa de eventuales modelos de TV Autonómica potencialmente diferentes.

A tal respecto, los límites técnicos del *“modelo TVV ampliado”* (a partir por ejemplo de la alternativa D de Telling) no sólo pasan por la escasez en el uso de las ondas hertzianas, sino también por las políticas *posibles* a desarrollar por Telefónica (¿y de su competencia con Retevisión?) en relación con el cable en España. De ahí la oportunidad de recordar la urgente conveniencia, como *“punto de partida”* (que no tanto de llegada) en los momentos actuales, de “agotar la legalidad”. Y en consecuencia, no por la vía de la confrontación sino por la del convenio, abriendo posibilidades a compartir en lugar de señalando barreras, no ya superadas por determinadas realidades sino incluso

ajenas a otras claves para el futuro. Para lo que bastaría con sopesar si acaso los “límites” tecnológicos serían los mismos “si sólo desarrolla Telefónica” o, por el contrario, si “lo hace con la Generalitat” (y viceversa); razonamiento que sirve, en paralelo, para los acuerdos hipotéticos entre ambas y los ayuntamientos valencianos... De igual modo que quizá bastase, en el caso valenciano y en cuanto a los “límites” de competencia entre televisiones públicas, con sopesar las sinergias positivas derivadas previsiblemente de un mayor uso del valenciano en sus espacios por parte del centro regional de RTVE (según estipula reciente acuerdo de colaboración), al menos para desatender toda pretensión autárquica (como subyacería a toda pretensión de un segundo Canal para TVV, más allá de resultar “salida provisional” ante el atolladero jurídico-político planteado, de plantearse al estilo de Canal 33, en poco obediente -por más que también pegado a lo territorial- a un *modelo de TV Autonómica* realmente “diferente”).

### 2.2.3. Horizonte '93 y coexistencia desigual en el audiovisual inmediato.

Si con la década de los 80 *finalizaba* algo, en gran medida, ese algo era el dilatado periodo de pugna ideológica -aun “por arriba”, pues en absoluto cabe hablar de debate “social” al respecto- sobre el carácter: público, privado o mixto, de la TV convencional en España. Si los años 90 *arrancaban* con algo, ese algo -si bien según los viejos modos tecnocráticos- no sólo sería la verbena inaugural oficiada por quienes desde el sector privado por fin participan del maná televisivo; también, y sin duda más relevante de cara al futuro (de todos), la coexistencia en sus albores de la incierta pugna empresarial respecto de esa TV convencional junto con el anuncio -más que significativo, pues junto al ministro del sector aparecía el responsable de los informes que sirvieron en su día para la concesión de los tres canales privados- de dos elementos más -y muy diferentes- de transformación inmediata del sistema audiovisual español, y del medio TV más en concreto: vía satélite y cable (adelantando los problemas de convergencia o divergencia entre los sectores del audiovisual y de telecomunicaciones como una de las claves del debate de la década recién inaugurada).

El nuevo panorama, es obvio, tendrá notables repercusiones culturales, sociales y políticas -las elecciones autonómicas y locales de 1991 serán la primera muestra. Pero es no menos indudable que el interrogante más inmediato remite a la capacidad del mercado de las industrias culturales -inversión en publicidad incluida, en primer lugar- para sostener tal avalancha de ofertas audiovisuales. Máxime cuando la pendiente hacia la fragmentación de las audiencias de televisión es cada vez más inclinada y cuando se asiste al declive de las grandes cadenas: pues si es previsible que en 1990 y 1991 se registren en España (en su caminar hacia la plena integración en la CE) los más altos incrementos relativos de inversión publicitaria de toda Europa, los gestores de las nuevas emisoras (no es sólo TVE quien se verá obligada a ser una “auténtica empresa” de cara al 93) bien harán en no descuidar las previsiones de los expertos, cuando cifran el posible “límite de audiencia”, para entonces y para un programa “prime time”, de cinco a diez millones de telespectadores: no más.

Una audiencia, por cierto, cercana al potencial conjunto de una eventual reciprocidad panmediterránea de emisoras como las autonómicas TVV+TV3. De ahí quizá el temor de

Barrionuevo a tal reciprocidad. Un temor en principio económico (ser acusado por las TV privadas, quizá en Estrasburgo, de favorecer “la competencia desleal” en favor de tales autonómicas o emisoras públicas), pero temor que lo es al tiempo político (no sólo por los intereses que hay en la trastienda de unos y otros medios de comunicación, sino también por el desigual reparto territorial del acceso al sistema audiovisual como tal). Las contradicciones ideológicas y financieras a que venimos aludiendo, en definitiva, no sólo persistirían con el oligopolio como nueva referencia, sino que se agudizarían con el incremento de competencia (al que vienen contribuyendo las propias televisiones autonómicas) y que en principio aquél supone.

### 2.2.3.1. De un modelo de TV Pública en plena reconversión.

De entrada, al hilo de la concesión por el gobierno de las TV privadas, a finales de agosto de 1989, diarios tan paradigmáticos como “El País” o “La Vanguardia” editorializaban sobre “El fin del monopolio” (el primero, ligado a Canal Plus) u opinaban acerca de “El fin de una cierta transición” (así José Caverio en el segundo, ligado a Antena 3). Apenas 100 días más tarde, el viernes 15 de diciembre, Barcelona y Madrid, por este orden y con tan sólo hora y media de diferencia, comenzaban a captar las primeras *cartas de ajuste* de los tres canales privados: Antena 3, Tele 5 y Canal Plus.

Esa misma señal aún tardaría en llegar desde el emisor de Retevisión en Torrent a la ciudad de Valencia y áreas colindantes (desde Sagunto a Cullera) otros tres meses, hasta el 3 de marzo de 1990, estando previsto para antes de octubre del mismo año la llegada de las mismas señales a la ciudad de Alicante y alrededores. Se cumplían con ello las previsiones del Plan Técnico derivado de la LTVP en su primera fase, y se ponía la primera piedra efectiva del modelo coexistencial de TV también en la Comunidad Valenciana. Canal9-TVV apenas había sobrepasado, para entonces, sus primeros 150 días de emisión regular, recién acometido su “primer salto” en la ampliación horaria de su programación (en febrero de 1990, pasando de las iniciales 45 horas semanales a casi doblarlas, lo que se alcanzaría en verano) y en plena aceleración por ahondar su inicial ventaja competitiva - en el tiempo- al respecto.

Pero el ministro responsable del audiovisual, José Barrionuevo, ya había declarado a Radio 1 de RNE -el mismo 15 de diciembre de 1989, significativamente- no sólo que “técnicamente no es posible implantar más estaciones televisivas de cobertura nacional” (preludiando el final previsible de la agria disputa suscitada en el País Valenciano sobre la eventual reciprocidad en la captación de TVV y de la catalana TV3 en ambos territorios) sino también, y no menos importante, que “las televisiones locales deben ser reguladas por ley orgánica en la presente legislatura (por lo mismo) siendo necesario también la regulación de la televisión por cable”<sup>(119)</sup>. Tales declaraciones venían a sumarse, por demás, a las efectuadas meses atrás (el 20 de octubre) por José Luis Martín Palacín, secretario general del mismo ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, quien con motivo del Salón Internacional de la Innovación y Tecnología (Tecnova) precisó que el primero de los dos satélites previstos del sistema Hispasat se lanzará en junio o julio de 1992, entrando en pleno rendimiento en octubre: “(lo que quiere decir) que antes de 1992 deberá establecerse una legislación sobre la difusión directa vía satélite de las señales de televisión”<sup>(120)</sup>. Legislación que “podrá dar paso a cinco nuevos canales de televisión -privados casi con toda seguridad, según se

estima en estos momentos en sectores de la Administración”.

De ahí que parezca imponerse en la actualidad, por tantos motivos, el “espectro de la radio” como horizonte previsible y especular para la propia TV en un futuro quizá no tan lejano: como ejemplificarían tanto la reciente apuesta socialista por el reparto efectivo de las nuevas emisoras de FM que permitía el desarrollo de la LOT, no menos que las propias declaraciones de Barrionuevo sobre la TV local, ante el criterio de que será el interés privado quien domine en Hispasat.

De hecho, tras las recientes medidas sobre el cableado aéreo y las crecientes dificultades por adquirir derechos de emisión de largometrajes y series (la nueva Ley de Propiedad intelectual se aprueba con Semprún al frente de Cultura en 1988), la reconversión en TV locales parece una salida más que probable para muchos vídeos comunitarios, algunos de tan alta audiencia que se han convertido en embriones de TV locales, como es el caso paradigmático de Tele-Elx. Al tiempo que el sector del vídeo (cuyo mercado ha llegado a ser en España el cuarto del mundo, por detrás de EE.UU, Japón y Gran Bretaña, pero por delante de RFA, Francia o Italia, precisamente por la mayor tardanza de la TV privada en romper el monopolio de la pública) ha sido el primero en notar <sup>(121)</sup> que los problemas del audiovisual español, en los 90, más llegarán por la vía de la competencia que no por la vía de la prohibición.

*La pugna, en resumen, se traslada definitivamente del campo jurídico-político al económico-político.* El desplazamiento de la pugna *afecta ya a TVE*, que ve tambalearse (en lo político, de entrada) el modelo de TV pública (el “dominante”, no se olvide) usufructuado por unos y por otros hasta la fecha. Pero donde mayor virulencia puede alcanzar, a corto plazo y por la coincidencia temporal de sus planes de arranque y consolidación, es en las relaciones de las *privadas* con algunas *autonómicas* (la valenciana entre ellas: de ahí nuestra opinión sobre el caso “TVV/TV3”).

El llamado caso “Juan Guerra” evidenció como ningún otro anterior, en efecto, la crisis del modelo heredado de TV pública en TVE, tan acriticamente importado por otras TV públicas como las autonómicas. Crisis indudable del modelo heredado, cuanto menos, en la vertiente política (su sempiterna tentación progubernamentalista) de dicho modelo. Los informativos diarios, una vez más por omisión, eran el iceberg inequívoco de la evidencia. Como también los informativos -lo mejor de las autonómicas, no en vano y por múltiples motivos- demostraban similares “carencias” de Canal 9-TVV por las mismas fechas y ante el “caso Blasco”, como vimos.

TVE, en concreto, cometió el error de no ofrecer en directo el debate del caso Juan Guerra por el Pleno del Congreso, de indudable interés político a juzgar por los datos de audiencia registrados en las TV autonómicas y en Antena-3, que sí lo retransmitieron... Sin dejar de ser cierta la paradójica ausencia, o casi, de diarios y semanarios (claves para la “creación de la opinión”) que favorezcan las tesis de una fuerza política con más del 40% de la representación del electorado; ni siendo menos cierto, por lo mismo, que una tan holgada mayoría socialista ha propiciado el desplazamiento de la crítica al ejecutivo por la oposición desde los partidos hacia los medios de comunicación, la tensión -en todo caso- alcanzada en febrero de 1990 en las relaciones entre el gobierno socialista y una buena parte de tales medios no eximía de sus responsabilidades a la propia TVE. Pues en parte por evidentes razones políticas (la política de concesiones de TV y radio privadas, por ejemplo, y las diversas heridas abiertas), pero -puede que más importantes- en parte

también por las razones económicas que vienen imponiéndose en el sistema de comunicación global (la al parecer “irresistible ascensión” del amarillismo que denunciase Sánchez Ferlosio) debido a la creciente competencia por captar lectores y audiencias, competencia sobreañadida en el horizonte 93 a la ya de por sí situación expansiva del sector de las industrias culturales en España, lo cierto es que con tal situación se alcanzó en TVE -no hay mal que por bien no venga- un cierto punto de “no retorno”.

Diversas opiniones, todas ellas significativas para nosotros si bien por distintas razones, dejaron traslucirlo por entonces en los papeles. Así, mientras CC.OO sentenciaba en un comunicado hecho público a nivel interno que “dar información veraz no es sólo una obligación estatutaria y constitucional, es en estos momentos de competitividad una necesidad para que TVE pierda menos audiencia, menos publicidad y menos de todo”, el Equipo Lux recordaba desde “El Nuevo Lunes” (12 al 18 de febrero de 1990) que “cualquier tentación de utilización de los medios públicos sólo redundaría en desprestigio para los mismos [...] Y a los medios públicos, fundamentalmente TVE, el de mayor difusión del país, déjesele cumplir su propio papel, que no es otro que el marcado por el artículo 4 de su Estatuto (objetividad, veracidad e imparcialidad en las informaciones), todavía en vigor, y que presumiblemente no va a sufrir muchos cambios en su redacción con el nuevo texto legal que será aprobado a finales de este año por las Cortes”.

Entre unas razones y otras, la atípica estabilidad política en España (incluso en relación con el contexto europeo) en torno a un PSOE mayoritario, junto con la paulatina degradación de su política comunicacional respecto del sistema de comunicación establecido (y por establecerse), ha conllevado con harta frecuencia, desde un lado y otro del espectro parlamentario, a confundir a los medios de titularidad pública, “utilizándolos -por decirlo con el mismo Equipo Lux- en un sentido o el otro como <altavoces gubernamentales>, o como <muñecos del pim-pam-pum>, para dar argumentos para atacar al Gobierno” (ibidem) <sup>(122)</sup>.

El relevo apenas un mes más tarde de Luis Solana por Jordi García Candau al frente de RTVE admite por ello, pese a la relativa sorpresa que supuso entonces (el primero era candidato a la reelección muy pocas horas antes de darse a conocer por el Gobierno), diversas y variopintas interpretaciones. Desde las más *coyunturales*, cual sería la “cabeza política” de Solana como el precio a pagar a partidos obsesionados en pedirla a cambio de su apoyo (CDS) o como la prueba del “fiel martirizado” para lograr la pacificación con que frenar un desprestigio del medio no tan molesto para otros (PP), hasta las de un cariz más *estructural*: ya la búsqueda de una mayor armonía entre la dirección y la representación socialista en el Consejo (que lo será “a la medida” del cuarto director general con los socialistas, regresando al idilio de la etapa Calviño), ya incluso -en línea con lo aquí argumentado- la apuesta por un reconocido profesional de la información como mejor antídoto en épocas de crisis (el caso Nasarre, último director con la UCD, es de sobras reconocido en tal sentido) y no peor garantía ante los retos inmediatos (García Candau es un profesional hecho en la radio pública, y ya se ha comentado el “regreso al paradigma radio” que podría deparar el futuro audiovisual público en España). Que a ello se añada, sean cuales sean las razones efectivas, su condición (exigible a todo candidato y que hasta la fecha era casi la única) de ser persona “de total confianza para la Moncloa”, ayuda a esperar del castellanense los mejores logros en la progresiva erradicación -cuanto más acelerada mejor será- de las servidumbres “progubernamentalistas” en RTVE. Lo que, más que probablemente, fomentaría a buen seguro una tendencia similar en RTVV



y otras autonómicas.

A la evidente cojera del *modelo TVE*, de su pata política al menos (so pena de un no descartable regreso al progubernamentalismo hipotéticamente inducido por un eventual reflejo “pendular” en las emisoras privadas, caso de apostar éstas por un antigubernamentalismo no menos pernicioso para el sistema global), se puede sumar, en un plazo no muy lejano, la eventual cojera de su pata económica. Cojera identificable no sólo por la pugna previsible en torno a un pastel publicitario que cada vez será menos fácil de consolidar -y aun de prever- dada la apuesta “comercializante” que domina, en cuanto a ingresos, en todas las emisoras (no importa si públicas o privadas), sino también en relación con el “modelo de gestión y organización” (como tal, empresarial) que en paralelo se impone.

El mayor riesgo, de entrada, se liga a que las “salidas” eficaces son tarea de equipo y no de una sola persona. Y ya se ha avisado, por no pocos, del riesgo en RTVE no ya de “quemar” a García Candau como director con altas dosis de provisionalidad (si el nuevo Estatuto reformado implicase un nuevo sistema para elegir al director general, ajeno a la decisión directa del Gobierno, y no se le ratificase por la oposición), sino del “riesgo mayor”, inherente a todo cambio en la dirección de cualquier ente público de RTV, de no permitir el mínimo de continuidad, necesario para consolidar su equipo y empezar así a solventar los déficits de gestión/organización de la radio y la televisión públicas. El citado Equipo Lux, por ejemplo, constataba al respecto que “RTVE sigue careciendo de un sistema de gestión con una perspectiva en el tiempo, unos programas a desarrollar y una oportunidad para que puedan ser ejecutados. La falta de perspectivas a medio y largo plazo por la inestabilidad de los equipos dirigentes es un freno para la consolidación empresarial de estos medios, en una fase de dura competencia con otros sistemas privados en franca eclosión” [“El Nuevo Lunes, 5 al 11 de marzo de 1990].

Una eclosión difícil de subestimar, según se desprende de los balances y proyecciones de resultados presentados al Gobierno para la adjudicación por los tres **canales privados**. Basta con el dato -resaltado por el diario “Expansión”- de su disposición a perder hasta 25.000 millones en los dos primeros años (1990-91). Las cifras y los planes económicos previstos para el periodo 1990-98 (año, este último, en que expira la concesión) son harto elocuentes, sin embargo, de su apuesta (a medio/largo plazo precisamente) y de la competencia por llegar para las TV públicas, Canal9-TVV entre ellas.

Frente a los anteriores planteamientos, que prevén resultados favorables a partir del tercer ejercicio -1992- en su mayor (Telecinco) o menor (Canal Plus) ambición, con ingresos que varían de una a otra cadena procedentes de publicidad, patrocinadores y/o cuotas de abonados, y a diferencia de TVE, Canal 9-TVV contemplaba ya el ejercicio 1990 con más que palpable intranquilidad (y no sólo por los recortes presupuestarios de última hora):

EL ARRANQUE									
	Antena3	1990 Canal Plus	Gestevisión	Antena3	1991 Canal Plus	Gestevisión	Antena3	1992 Canal Plus	Gestevisión
Ingresos public.	6.605	1.643	8.000	15.437	2.135	15.996	24.375	2.562	29.936
Total Ingresos	7.266	15.091	16.341	17.753	22.614	31.013	28.519	30.290	49.473
Gastos personal	(1.325)	(1.648)	(2.041)	(1.484)	(1.697)	(2.242)	(1.662)	(1.748)	(2.702)
Canon Red	(728)	(2.170)	(465)	(1.866)	(3.206)	(1.661)	(1.978)	(3.920)	(3.087)
Amortizaciones	(1.249)	(525)	(269)	(1.859)	(610)	(333)	(2.373)	(666)	(514)
Gastos generales	(1.500)	(1.352)	(1.076)	(1.680)	(1.393)	(1.407)	(1.882)	(1.435)	(1.923)
Gastos financ.	(425)	(556)	23	(763)	(879)	128	(924)	(838)	418
Total gastos	(11.324)	(13.049)	(14.260)	(15.342)	(16.915)	(20.737)	(18.488)	(20.695)	(27.896)
Benef. antes imp.	(5.590)	(1.671)	(6.259)	(210)	142	(4.396)	7.010	2.390	3.117
Impuestos	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Beneficio neto	(5.590)	(1.671)	(6.259)	(210)	142	(4.396)	7.010	2.390	3.117

LA CONSOLIDACION									
	1993			1994			1995		
	Anten3	Canal Plus	Gestevisión	Antena3	Canal Plus	Gestevisión	Antena3	Canal Plus	Gestevisión
Ingresos public	32.659	2.857	47.918	39.223	3.480	59.627	46.717	4.023	67.642
Total ingresos	38.211	38.423	49.473	45.891	46.308	81.584	54.659	52.906	69.915
Gastos personal	(1.945)	(1.801)	(3.098)	(2.775)	(1.855)	(3.496)	(2.662)	(1.910)	(3.794)
Canon Red	(4.014)	(1.120)	(3.887)	(4.255)	(1.764)	(4.081)	(5.658)	(1.734)	(5.380)
Amortizaciones	(3.007)	(690)	(617)	(3.747)	(690)	(580)	(4.026)	(693)	(456)
Gastos generales	(2.220)	(1.478)	(2.555)	(2.620)	(1.522)	(2.996)	(3.092)	(1.568)	(3.339)
Gastos financ.	(237)	(443)	(2)	--	71	(1.462)	--	--	(3.439)
Total gastos	(24.225)	(24.232)	(32.068)	(28.183)	(27.522)	(34.562)	(33.911)	(30.439)	(38.254)
Benef. antes imp.	11.144	5.646	17.405	14.990	8.922	27.023	18.625	12.238	31.661
Impuestos	(3.502)	623	(3.452)	(5.247)	3.123	(9.752)	(6.519)	4.283	(11.398)
Beneficio neto	7.642	5.023	13.953	9.744	5.799	17.295	12.106	7.955	20.263

EL DESPEQUE									
	1996			1997			1998		
	Antena3	Canal Plus	Gestevisión	Antena3	Canal Plus	Gestevisión	Antena3	Canal Plus	Gestevisión
Ingresos public.	55.254	4.454	74.890	64.969	4.838	78.636	70.933	5.141	82.566
Total Ingresos	65.645	58.002	77.648	76.014	62.661	81.797	82.992	66.206	88.204
Gastos personal	(3.115)	(1.968)	(4.060)	(3.644)	(2.027)	(4.344)	(4.264)	(2.088)	(4.647)
Canon Red	(5.999)	(1.679)	(5.628)	(6.357)	(1.941)	(5.909)	(6.738)	(1.906)	(6.205)
Amortizaciones	(4.507)	(699)	(392)	(5.116)	(705)	(211)	(5.990)	(712)	(108)
Gastos gener.	(3.648)	(1.615)	(3.634)	(4.305)	(1.663)	(3.824)	(5.079)	(1.713)	(4.023)
Gastos financ.	--	--	(5.905)	--	--	(8737)	--	--	(11.860)
Total gastos	(39.282)	(33.115)	39.216	(45.493)	(35.754)	39.672	(51.663)	(38.235)	40.249
Benef. antes imp.	23.825	14.718	38.434	29.710	16.713	42.125	31.084	18.368	45.955
Impuestos	(8.339)	(5.151)	(13.836)	(10.399)	(5.850)	(15.165)	(10.880)	(6.429)	(16.544)
Beneficio neto	15.486	9.567	24.598	19.312	10.863	26.960	20.205	11.939	29.411

Fuente: Diario "Expansión", 6-9-1989.

Fuente: "Presupuestos 1990" (Tomo resumen), pp. 963 y ss.

---

PRESUPUESTOS RTVV - 1990

---

1. ENTIDAD PUBLICA RADIOTELEVISION VALENCIANA:

Presupuesto explotación .....	902.500	miles	pta.
" capital .....	90.000	"	"
Total:	992.500	"	"
Subvención explotación .....	892.500	"	"
" capital .....	70.000	"	"
Total:	962.500	"	"

2. TELEVISION VALENCIANA, S.A.

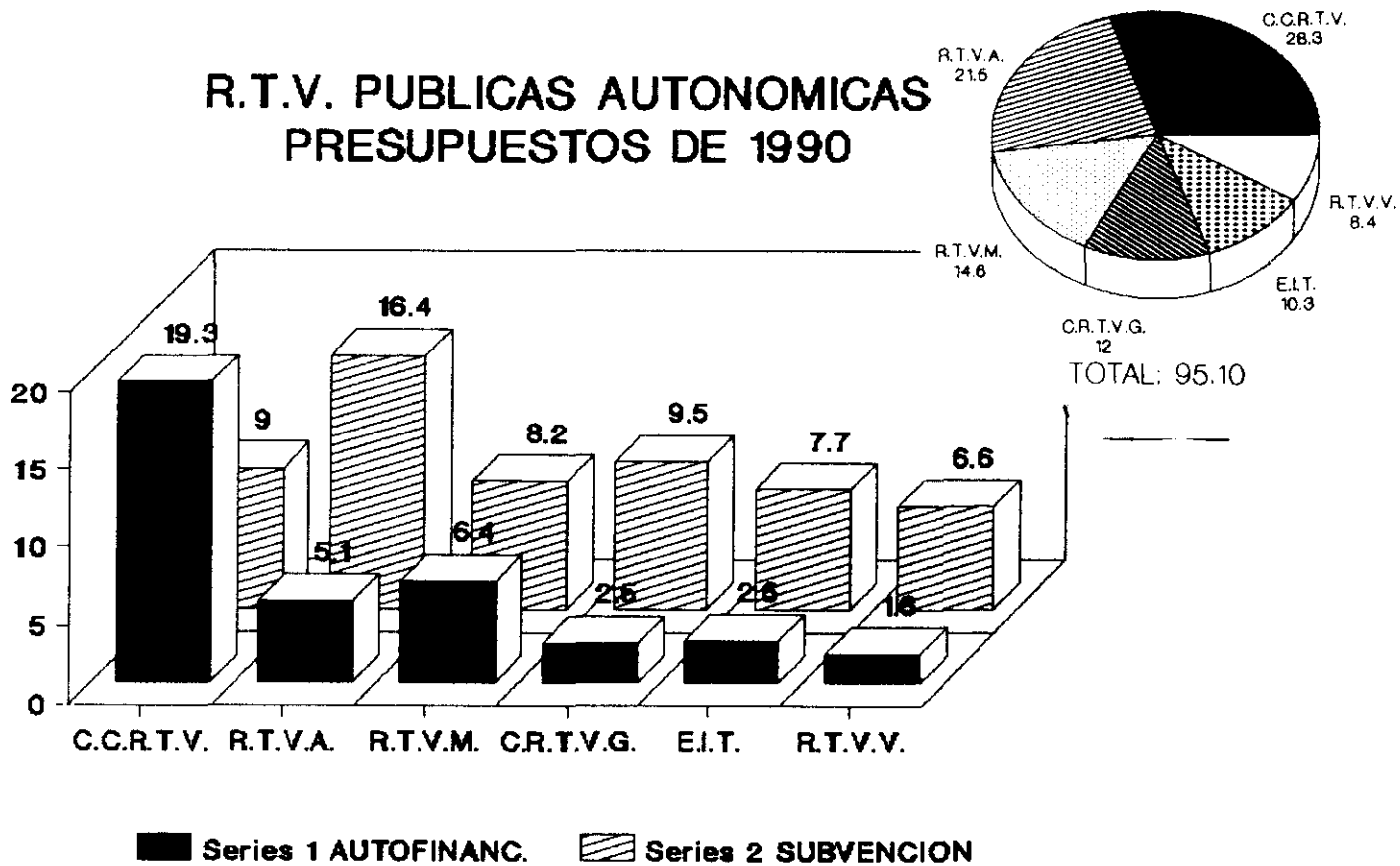
Presupuesto explotación .....	6.706.000	miles	pta.
" capital .....	286.000	"	"
Total:	6.992.000	"	"
Subvención explotación .....	5.206.000	"	"
" capital .....	86.000	"	"
Total:	5.292.000	"	"

Si conocidos son los defectos estructurales de RTVE en cuanto a su defectuoso sistema contable, necesitado de apoyo externo, y la tradicional ausencia de una política de personal fiable a medio plazo (recordando que sus gastos en personal están calculados en 62.181 millones de pesetas, de entre los 193.197 millones del presupuesto total para 1990), no son menos llamativos -y quizá más graves por estar en pleno arranque, en paralelo al de las TV privadas- algunos problemas ya evidenciados, al mismo respecto, en el canal autonómico valenciano. Como que RTVV continuase sin gerente meses después de creada la plaza, según el organigrama remodelado por los órganos de dirección en enero del 90, o que la incorporación de casi 150 trabajadores "interinos" (de ellos 103 en TVV) se entienda por Fabregat como "consolidación y no nuevas contrataciones" de una estructura que, pese a dar el salto en horas de programación, cada vez menos puede disimular las sucesivas oleadas estocásticas de audiencia y sus reiterados "avisos" en favor de un *cambio de rumbo*. No ya en los criterios de programación, pese a un espejismo estival tan proclive al "morbo barato" como criticable, sino ante todo en la gestión y en la pretensión de una mayor captación de publicidad (¿autonómica?) requerida -incluso- desde la Generalitat.

Un simple repaso comparativo, para el ejercicio de 1990 (clave ante el arranque simultáneo de las TV privadas), del diverso apoyo presupuestario prestado a los distintos organismos públicos de RTV autonómicos ya en pie -y no en vano, sintomáticamente elaborado desde el propio Ente Público valenciano-, es de por sí ilustrativo como para no precisar comentarios adicionales a los adelantados hasta ahora en esta Tesis (vid. gráficos anexos).

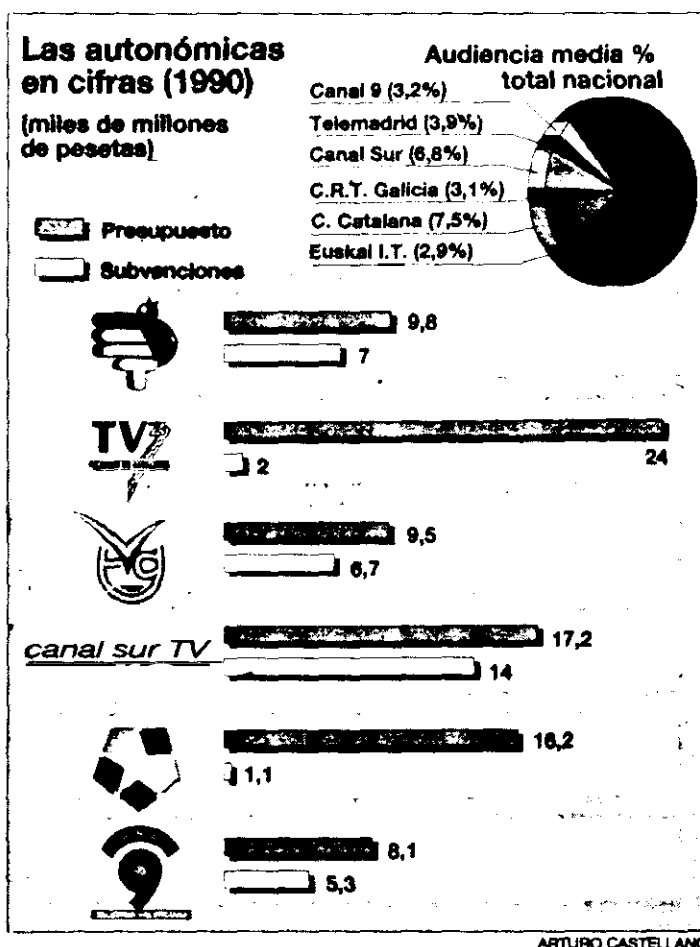
Las diferencias se ahondan todavía más, a la vista del diverso ritmo de arranque y consolidación entre las Televisiones autonómicas en sí, como ponía de manifiesto el estudio sobre "Financiación, gestión y control de la televisión pública autonómica" elaborado por Rafael López Lita y presentado en los cursos de verano de El Escorial en 1990 <sup>(123)</sup>:

## R.T.V. PUBLICAS AUTONOMICAS PRESUPUESTOS DE 1990



EN MILES DE MILLONES DE PESETAS

Fuente: Gaspar Martínez y Marisa Manglano: "Modelo presupuestario de las TV Autonómicas en España. Un estudio comparado". (Inédito, según los anteproyectos presupuestarios respectivos). Valencia, mayo, 1990.



Fuente:

Rafael López Lita, "Financiación, gestión y control de la televisión pública autonómica". El Escorial, agosto, 1990. (Recogido por "El País", 1-9-90).

No es extraño que los actuales responsables de Canal 9, por mero instinto de supervivencia empresarial que no de coherencia con los objetivos estratégicos que se le suponen a un canal "público", se vuelquen -a la vista de unos y otros presupuestos- en la máxima captación posible de publicidad... Pero, ya de entrada, ni aun de mantenerse la proyección de crecimiento de la inversión publicitaria en TV y para el mercado valenciano que en su día realizase la DGMCS, a partir de datos de 1982/83, se cubriría ni de lejos el objetivo de autofinanciación planteado desde el inicio:

Inversión publicitaria inicialmente prevista (\*)  
(millones de pesetas)

Años	TV	Total
1982	4.277	17.820
1983	5.108	21.285
1984	5.977	24.903
1985	6.993	29.136
1986	8.182	34.090

(\*) Fuente: Ponencia cit. M<sup>a</sup>. García-Lliverós y A.J. Sarrià (1984).

Sin necesidad de considerar la mayor competitividad efectiva que se prefigura en la actualidad (Canal 9 no iba a ser “la única”, pero con el tiempo no ha contado en su despegue con tanta ventaja como podía preverse entonces respecto de las TV privadas); y sin considerar tan siquiera que en pesetas constantes el crecimiento no haya sido en absoluto tan “triplicable” como se aseguraba por aquellas fechas (de hecho, el estudio realizado en 1985 por el Instituto Emer ya recogía la cifra efectiva relativa a 1984, que representaba una inversión regional en TV de 4.395 millones: muy por debajo de los 5.977 proyectados un par de años antes, pese a lo cual se insistía en que “el mercado publicitario haría rentable la TVV en tres años” <sup>(124)</sup>)... Más aún: ni aun de considerar, en sentido opuesto, el “tirón” inversor subsiguiente a la entrada en el Mercado Común (que apenas puede disimular ese escaso 20% realmente cubierto por publicidad respecto del total de gastos de explotación que prevén los Presupuestos de RTVV ¡ya para 1990!); ni tampoco de contar con los 1.000 millones de publicidad que el acuerdo con Berlusconi garantizaría <sup>(125)</sup>... En definitiva, ni antes ni ahora, ni con las mejores condiciones a favor y sin las peores en contra -desde esa perspectiva de perseguir la financiación publicitaria a toda costa-, puede sostenerse con seriedad, hoy por hoy, que tal financiación (la publicitaria) sea ni bastante de por sí en cantidad (1.700 millones de ingresos previstos en 1990 por publicidad, frente a los 6.992 millones de gastos de explotación recogidos a su vez por los presupuestos de RTVV), ni tan neutra en los efectos cualitativamente inducidos a su través (de los que las fórmulas de “bartering”, o creciente sponsorización de la programación, son el ejemplo más llamativo).

La nueva competencia a que conduce el modelo empresarial de TV convencional en España, en definitiva, dada la práctica coincidencia en fines (la autofinanciación cuanto antes) y medios (el papel decisivo atribuido a la publicidad en ingresos presupuestados, máxime tras la “reconsideración” que al respecto parece cocinarse en Canal-Plus, y la creciente homogeneización de los contenidos a programar que deviene de enfoques similares para ganar la “batalla de la audiencia”, lo que no deja de ser sino la otra cara de la misma moneda), lleva a preguntarse -en definitiva- sobre *la viabilidad última de dicho modelo de TV en su conjunto*. Pero ante todo, por las contradicciones *desiguales* (ideológicas de entrada) que dicho modelo empresarial a priori supone para las distintas televisiones en presencia, y por tanto para la dilucidación de eventuales modelos de TV Autonómica que no limiten su aspiración a la del mero calco de lo dado... Máxime cuando una respuesta mínimamente solvente al respecto no tendría por qué limitarse a las previsiones de la inversión publicitaria (en un mercado español que dejaría de estar “protegido” a partir de 1993) y ante la observada tendencia al declive de las grandes cadenas nacionales (el reto europeo también lo es y será para el audiovisual, y así lo han entendido los “grandes” del sector -públicos o privados- al retomar la “batalla del satélite”).

#### 2.2.3.2. De la publicidad como “barrera de entrada”, de sus efectos y límites.

La centralidad de la financiación como dimensión estratégica fundamental en TV, no en vano, tiene que ver con el cuestionamiento “posible” de la autofinanciación por vía publicitaria como práctica económica y social, y no sólo ideológica, si de modelos de TV Pública hablamos.

Es posible en tal sentido, como opinaban los expertos que elaboraron en 1988 el informe de la agencia J. Walter Thompson sobre "Televisión privadas, proyección de la evolución de inversiones publicitarias en televisión", que la aparición de las privadas haga aumentar la inversión publicitaria en el medio TV así como el número de nuevas marcas y anunciantes. La aparición en 1989 de tres nuevas autonómicas (Canal 9-TVV entre ellas) y, a final de año, de la primera privada (Antena 3) en Madrid y Barcelona, ya evidenció ciertamente que más que de "reparto" del pastel publicitario bien podría tratarse -por ahora cuando menos- de un mayor pastel invertido en el medio y por tanto de "más a repartir" en televisión. Pero la tendencia era, ya entonces, contradictoria.

De hecho, la inversión en publicidad colocada en el soporte audiovisual por excelencia mantenía la tendencia ligeramente ascendente de los primeros años 80 aumentando en 1988 un 24,1% respecto del ejercicio anterior (con la creciente pujanza de los canales autonómicos acompañando a TVE en la oferta pública). Pero dicho incremento relativo -aun manteniéndose por encima de la barrera del 20%- dejaba ver una nueva inflexión a la baja con la incorporación de los 3 nuevos canales autonómicos y de la primera TV privada (Antena 3):

Inversión publicitaria total en %

	<sup>(*)</sup> 1977	1980	1984	1986 <sup>(**)</sup>	1988	1989
Diarios	24,8	24	25,5	25,3	19,1	19,1
Revistas	13,2	13,4	12,7	12,6	10,0	10,9
TV	21,1	26,2	24,7	24,1	21,8	21,3
Radio	7,1	9,7	9,6	9,8	5,5	5,3
Cine	1,7	1,3	0,8	0,5	0,2	0,2
Exterior	5,8	5,0	3,1	3,4	3,7	3,2
Total medios	74,2	79,8	76,6	75,9	60,3	60,0
Otros	25,8	20,1	23,3	24,0	39,7	40,0
Total inversión	100	100	100	100	100	100

CRISIS Y AJUSTE  
ECONÓMICORECUPERACIÓN  
Y "ENFRÍAMIENTO"(\*) Informes JWT, en R. Zallo, *ob.cit.*, p. 298.

(\*\*) Memorias 1988 y 1989, Federación Nacional de Empresas de Publicidad (FNEP).

PUBLICIDAD en TV, 1988 <sup>(\*)</sup>

Emisora	Sobre Total de 163.000 millones %
TVE 1	69,0
TVE 2	7,7
TVE/Centros Regionales	10,5
TV 3	9,3
TVG	0,6
ETB	0,4

(\*) Informe J.W.T.

Puede ser factible, en consecuencia, que los 50.000 millones globalmente proyectados por los tres canales privados en ingresos publicitarios, para los ejercicios 1990/91, sean tales y ayuden al "arranque" que ellos mismos calculan con pérdidas en torno a la mitad de tal cantidad. Pero los cerca de 55.000 millones previstos por tales canales en captación de recursos publicitarios para 1992 y los más de 83.500 millones que cifran para el temido ejercicio 1993 (en que pese a todo estiman un beneficio conjunto, ya "libre" de impuestos, que sobrepasaría los 26.000 millones: superiores por tanto a las pérdidas acumuladas en los dos primeros ejercicios, de ahí que consideren al de 1993 como el primero de "consolidación") parecen más cuestionables, siquiera sea por el mayor riesgo de prever su factibilidad para entonces. ¿Por qué?

1. De entrada, porque si la publicidad evidenció ser una excelente “vacuna contra la crisis” (vid. Gráfico anexo para el período 1973-81), crisis que ante todo lo fue de oferta y que propició la puesta en marcha de su más *clásica* función, es decir, la de “ajustar las necesidades sociales y la demanda a las capacidades de producción” <sup>(126)</sup>, no queda claro sin embargo que evidencie un *crecimiento* sin límites: tan sólo puede afirmarse que, desde 1973, la publicidad es de los pocos sectores que se han mantenido o incrementado ligeramente -si atendemos a su evolución en pesetas constantes- desde entonces.

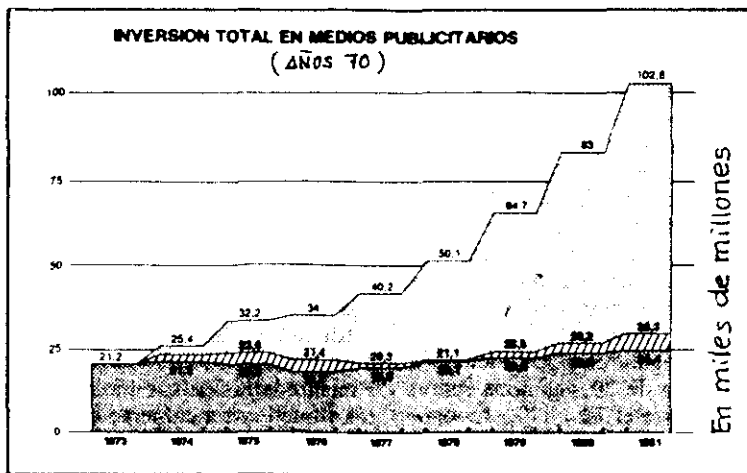
2. En términos más cualitativos, sin embargo, sí resulta cada vez más ostensible su *creciente* influencia “social e ideológica”, así como “en la organización económica de la producción cultural” (R. Zallo, 1988). Destacando, por demás, que dicho sector en absoluto permanece ajeno a los procesos de progresiva concentración y transnacionalización de las industrias culturales españolas. Algo que cabe ejemplificar con tan sólo acudir al ranking -y a su evolución- de las “primeras marcas” anunciantes (por inversión publicitaria en España). O derivar de una simple comparación de las relaciones interindustriales observables por vía comparativa entre los 10 mayores grupos o agencias mundiales y aquellas que han mantenido o acrecentado su presencia en España, donde es patente la hegemonía transnacional y la permanencia de Cid/PRISA como la única empresa española entre las grandes luego de los recientes naufragios (que añadir a otros previos tan sonoros como el de Movierécord) de Víctor Sagi y Publidis.

3. Pero si un aspecto destaca sobre el resto, en los actuales momentos históricos (integración progresiva de España en la CE), es la función económica que la publicidad parece ejercer como “*barrera de entrada*” en las *relaciones interindustriales* de los países “avanzados”. Dicha función, relativamente descuidada entre los investigadores en comunicación hasta la fecha, no es sin embargo desconocida para el propio sector de la publicidad ni, menos aún, para los economistas interesados que han investigado desde la Fundación Empresa Pública (antes del INI) las claves que rodean el sector exterior como “estrangulamiento básico” de la economía española desde mucho antes del Plan de Estabilización de 1959.

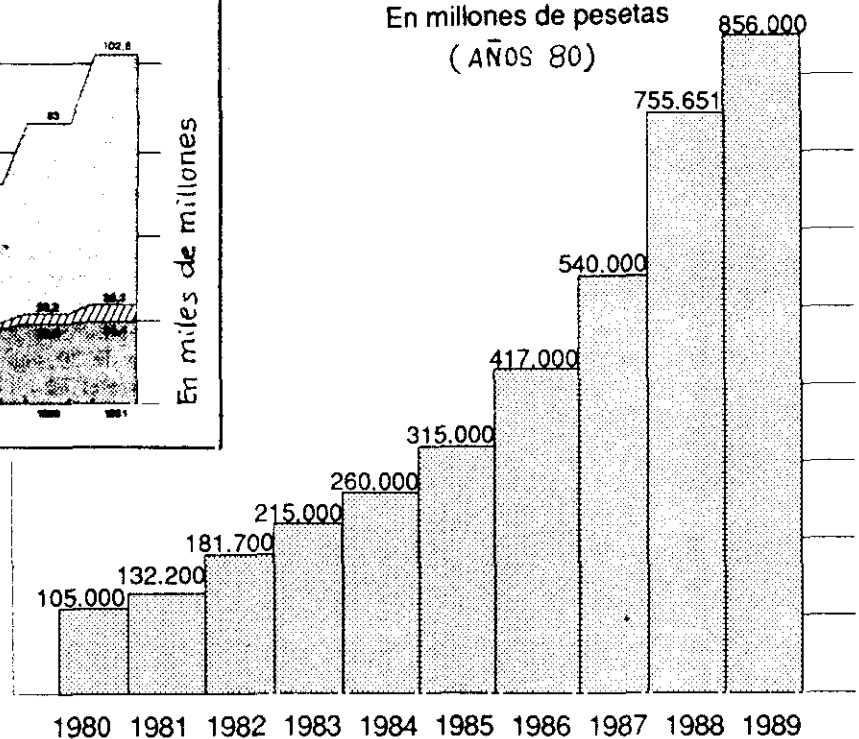
Investigadores de reconocido prestigio ligados al Programa de Investigaciones Económicas (PIE) de dicha Fundación, actualmente dirigida por Julio Segura, aventuran de hecho desde mediados los 80 que, si bien con un efecto cuantitativamente menor al de las economías de escala, “tanto el tamaño del mercado como los *gastos de publicidad* resultan también ser variables significativas para la explicación de la concentración industrial” (Gonzalo Mato, 1986), aventurándose en un análisis que J. Jaumandreu y G. Mato presentan en 1987 sobre la relación márgenes-concentración para la industria española y con datos del 78 al 82, que:

“... aparece un *doble efecto* de la variable gastos de publicidad sobre ventas habitualmente utilizada en este tipo de regresiones. La medida de estos gastos aparece con un fuerte efecto positivo sobre los márgenes, interpretable como el efecto de la existencia de barreras por diferenciación de producto, presumiblemente correlacionada con el stock publicitario acumulado en el sector, del que estos gastos medios pueden considerarse un indicador (...) Por el contrario, los cambios contemporáneos de los gastos publicitarios aparecen como un efecto negativo y significativo sobre los márgenes. La presencia de simultaneidad en la determinación de los márgenes y estos cambios indica que la interpretación adecuada de este





- Ptas. corrientes.
- ▨ Ptas. 1973 (Precios de consumo).
- Ptas. 1973 (Tarifas).



**INVERSION TOTAL 1988 (Controlada por DUPLO + estimada por I.A.M.)**  
Distribución de la inversión por Medios

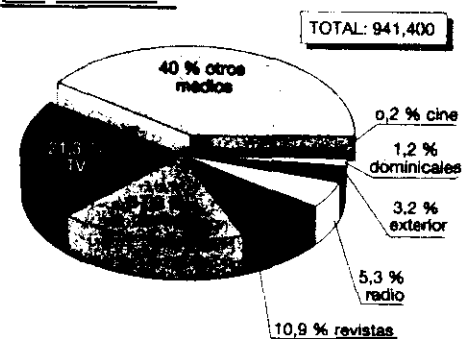
Medios	Medios y soportes publicitarios	Millones	% s. Total	% s. Medios
Diarios	Diarios	135.762	18,0	18,0
S. Domin.	Suplementos Dominicales	8.386	1,1	1,1
Revistas	Información general y temáticas	32.327	4,3	10,0
	Técnicas	42.664	5,6	
	Sector publicitario	400	0,1	
Radio	Radio	41.269	5,5	5,5
Cine	Cine	1.801	0,2	0,2
Televisión	TVE Península	126.409	16,7	21,8
	TVE Canarias	3.879	0,5	
	TVE Regionales	16.472	2,2	
	TV3	15.772	2,1	
	ETB	1.257	0,2	
	TVG	1.253	0,2	
Exterior	Vallas ciudad y carretera	18.872	2,5	3,7
	Vallas Metro, Rente, etc.	1.250	0,2	
	Cabinas telefónicas	1.278	0,2	
	Autobuses, interior trenes	1.300	0,2	
	Marquesinas	1.800	0,2	
	Moviles, luminosos, relojes	1.000	0,1	
	Carteles en estadios y otros	2.000	0,3	
	Aerea	500	0,1	
Otros medios	Publicidad directa	95.000	12,6	39,7
	Realizaciones artes graficas	43.000	5,7	
	Publicidad médico-farmacéutica	26.000	3,4	
	Anuarios y guías	3.000	0,4	
	Publicidad punto de venta	40.000	5,3	
	Señalización (indicadores, etc.)	8.000	1,1	
	Ferias y exposiciones	10.000	1,3	
	Regalos publicitarios	30.000	4,0	
	Patrocinios, colaboraciones	20.000	2,6	
	Sponsoring deportes	25.000	3,3	
<b>INVERSION TOTAL 1988</b>		<b>755.651</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

### Inversión total en publicidad 1989

	Millones de Ptas.	% inc. año anterior
<b>Prensa diaria</b> .....	<b>242.500</b>	<b>29,0</b>
— Diarios.....	230.250	29,8
— Suplementos.....	12.250	15,3
<b>Revistas</b> .....	<b>107.000</b>	<b>24,2</b>
<b>Televisión</b> .....	<b>194.000</b>	<b>20,3</b>
<b>Radio</b> .....	<b>72.200</b>	<b>18,0</b>
<b>Cine</b> .....	<b>5.500</b>	<b>50,7</b>
<b>Exterior</b> .....	<b>23.800</b>	<b>14,7</b>
<b>TOTAL MEDIOS</b> .....	<b>645.000</b>	<b>23,8</b>
<b>Otros</b> .....	<b>211.000</b>	<b>28,7</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>856.000</b>	<b>25,0</b>

Fuente: JWT

### Distribución de la inversión 1989 por medios:



Fuente: Federación Nacional de empresas de Publicidad. 1990.

### LOS 20 PRIMEROS ANUNCIANTES

Inversión en millones de pesetas

1980		1986		num. de orden 1980	num. de orden 1986	Empresas/Grupos	Total Grupo (millones de Ptas)
Nestlé	1.106	El Corte Inglés	3.567	1	1	Citroen-Peugeot-Talbot	12.279
El Corte Inglés	1.095	Renault	3.504	2	2	Fasa-Renault	10.076
Seat	840	Ford	2.369	3	4	Grupo Volkswagen	10.078
Philips	770	Seat	2.269	4	3	El Corte Inglés	9.091
Gillete	279	Galerías	1.916	5	6	Ministerio Economía y Hacienda	3.997
Johnson's Wax	965	Peugeot	1.840	6	5	Unilever	8.230
Ministerio de Hac	800	Opel	1.833	7	9	Grupo Fiat	6.158
Nutrexpa	799	Citroën	1.526	8	7	Nestlé	5.129
Danone	405	Renfe	1.483	9	13	Repsol S. A.	5.073
Fasa Renault	372	Danone (postres)	1.399	10	14	Opel-General Motors	4.764
Ford	259	Coca-Cola	1.295	11	11	Ford España	4.716
Lever ibérica	452	Volkswagen	1.150	12	13	O.N.C.E.	4.299
Coca-Cola	633	Shweppes	1.109	13	87	Ministerio Interior	4.055
Codorniu	467	Generalitat de Catalunya	912	14	10	Henkel	3.830
Talbot	410	PSOE	875	15	12	Coca-Cola de España	3.539
Galerías Preciadc	411	Pascual (leche)	869	16	15	Agrolimen	3.350
Starlux	328	ONCE	858	17	31/47	Philip Morris *	2.872
Camp	263	Lotería Nacional	844	18	22	Pascual	2.731
Renfe	331	Ministerio de Economía	844	19	18	Grupo L'Oreal	2.624
Magfesa	377	Planeta-Agostini	833	20	43	Grupo Santander	2.609

Fuente:  
J. Walter Thompson

\* El grupo Philip Morris aparece en 1990 con  
cifras consolidadas con Kraft General Foods  
(en 1988 figuraban por separado)

#### Los 10 mayores GRUPOS o AGENCIAS mundiales

Ingresos  
(mill. \$)

1. Saatchi & Saatchi Plc.....	1.210
- S & S Compton	
- Ted Bates	
- DFS Dorlad	
- Backer & Sp.	
- KHBB	
- W. Esty	
2. Interpublic.....	822
- Mc Cann	
- SSC & B Lintas	
- Campwell-Ewald	
- Lowe-Marchalk	
- Dayley Ass.	
3. Omnicom.....	820
- DDB Needham	
- BBDO	
4. Dentsu.....	681
5. JW Thompson Group.....	644,8
- JWT Co	
- JWT USA	
- Brouillard Com.	
- Thompson Recr	
- Lord. Geller	
- Hill & Knowlton	
- MRB Group	
6. Young & Rubicam.....	628,4
7. Ogilvy & M Group.....	548
8. D'Arcy M. B & Bowles.....	336,3
9. Foote, C & B.....	323
10. Eurocom (Univas-Havas).....	216,4

Fuente: Ramón Zallo, 1988-Anuncios, 1-7 junio 87.

#### ESPAÑA. Grupos de Agencias

(excluyendo centrales de compras y otras)

	Ingresos	Facturación
1. Bates.....	2.081	13.897
- Ted Bates	390	2.600
- Delvico	713	4.777
- Alas	570	3.802
- Interlas	408	2.718
2. Mc Cann.....	1.868	12.551
- Mc Cann	1.070	7.229
- Clarin	798	5.322
3. JWT.....	1.707	11.389
4. Cid.....	866	5.773
5. Tapsa.....	1.453	10.603
- T NW Ayer	1.303	9.503
- Equipo 3	150	1.100
6. BBDO.....	1.025	8.769
7. Saatchi.....	963	6.650
- S & S Comp.	543	3.850
- RCP	420	2.800
8. Ogilvy.....	781	5.209
9. Grey.....	460	3.068
<b>TOTALES</b>	<b>11.024</b>	<b>77.909</b>

Fuente: R. Zallo, ob. cit., sobre datos en Anuncios  
e IP Mark de 2a. quincena febrero 1987.

efecto debe hacerse en un marco simultáneo. Pero como hipótesis parece plausible - concluyen Jaumandreu y Mato- que el periodo se haya caracterizado por un incremento de la competencia vía incremento de los gastos en publicidad. Ante el deterioro de los márgenes (por ejemplo, por efecto del estancamiento o retroceso de la demanda), las empresas habrían respondido con un incremento de su esfuerzo publicitario'' (127).

No es tan extraño, por ello, que Julián Bravo -presidente de J.W. Thompson para España-, interpretase los datos de la inversión publicitaria en 1987 (tras el ingreso efectivo en la CE en enero de 1986) apuntando "otras causas" que las habituales hasta entonces (situación económica satisfactoria, por ejemplo) que habrían contribuido a "la fuerte expansión de este mercado". Así: "Por un lado, el histórico bajo nivel de partida de los gastos publicitarios en España (en relación con el contexto europeo, que por entonces ya empezaba a inundar con más productos el mercado español), y por otro, y más importante, el convencimiento de las empresas españolas de que una de las formas de competir en un mercado invadido de productos comunitarios es la publicidad'' (128).

Es decir: sin necesidad de temer en exceso la entrada en vigor de la directiva sobre TV sin fronteras, que se prevé efectiva en otoño del 91 (es decir, sin considerar tan siquiera que a la multiplicación actual en España de canales convencionales se sumará, a buen seguro, la de otras televisiones no tan convencionales y dispuestas a su parte en el maná televisivo), y aun de mantenerse en 1992 -lo que empieza a no ser tan previsible- el tono expansivo apreciable desde 1986 en "nuestras" industrias culturales, no cabe olvidar la función de "*barrera de entrada*" al mercado interno que subyace a buena parte de cada peseta adicional invertida hoy por hoy en publicidad.

Como tampoco que el "contrataque de empresas todavía no implantadas" en España, cuyo "boom" puede venir en el 92/93, frente al posicionamiento alcanzado por las ya establecidas a través de la publicidad que viene invirtiéndose en defensa del mercado interno, podría ser tanto mayor en dicho periodo respecto de los siguientes años (a diferencia de lo proyectado por las TV privadas) cuanto menor en España, incluso, por eventuales mayores facilidades -en términos de apertura de nuevos mercados para el capital transnacional y/o mayores márgenes para su concentración interindustrial- en países centroeuropeos y del Este (luego de los últimos acontecimientos): lo que complica, en todo caso, cualquier prospectiva en tal sentido y cuestiona de hecho la hipótesis de "crecimiento ilimitado" de los gastos de publicidad en nuestro país durante los 90 (los años de consolidación, no se olvide, tanto para las privadas cuanto para las autonómicas).

Siendo un dato no menor, por demás, que mientras el informe ya referido de J. W. Thompson preveía para 1989 -a partir de los 129.000 millones de pesetas de 1987 y de los 163.000 de 1988- un crecimiento de la inversión publicitaria en España y para el medio TV en torno al 40 ó 45%, cifrándose dicho crecimiento por el mismo informe en 232.232 millones para dicho año 89, la desviación a la baja ha sido finalmente apreciable no superando el listón -según la misma agencia- de los 194.000 millones (esto es, el crecimiento ha sido justo la mitad del inicialmente esperado) (129).

Cierto que se podrá argumentar que Tele 5 y Canal Plus aún no estaban en el aire, pero no es menos cierto que Antena 3 ya había comenzado su andadura en los mercados locales más potentes. ¿Se alcanzarán en 1990, en definitiva, los 336.736 millones previstos por J.W. Thompson un par de años antes? ¿Qué pensar de toda prospectiva, al efecto, cuando ni tan siquiera dicha agencia

acierta de un año a otro? Las dudas van a más... No contribuyendo menos al escepticismo el dato, fundamental desde una perspectiva más global, de que la inversión total (en todos los medios) ascendía en 1988 a 685.000 millones de pesetas, un 26,9% más que en 1987 pero menor en "crecimiento relativo" interanual que en ejercicios anteriores (29,5% en 1987 y 32,4% en 1986, según datos del mismo informe, en clara correlación "a la baja", año tras año, conforme avanza la integración efectiva en la CE)... No cabe desestimar, por ello, la opinión expresada en su día por los propios empresarios interesados en la TV privada, relativamente reacia al optimismo de los expertos de J. W. Thompson, en su creencia de que "un canal subsistirá y ganará mucho dinero, otro segundo podrá mantenerse y un tercero arrastrará pérdidas" <sup>(130)</sup>.

El propio estudio sobre la viabilidad del canal autonómico valenciano a partir de su hipotética autofinanciación publicitaria que realizase en 1985 el Instituto Emer, por lo que nos interesa, se centraba en las expectativas declaradas "de las 68 empresas publicitarias valencianas, cuya facturación supera los 8.000 millones", desconociendo -por lo visto- sus propios intereses en la materia. No en vano, el propio desconocimiento sobre el sector Servicios -no sólo en la Comunidad Valenciana- resulta en ocasiones el primer escollo para revalidar la fiabilidad de cuantas conclusiones puedan derivarse sobre el mismo. No siendo extraño que hubiese que esperar a 1986, y aun así en base a datos del "Censo de locales de España" (INE) de 1980, para que el director técnico de PREVASA (entidad de estudios por entonces ligada a la Caja de Ahorros de Valencia) pudiese aportar los primeros datos fiables sobre el sector publicitario en la Comunidad Valenciana <sup>(131)</sup>, y ello en términos claramente chocantes con una realidad más concentrada y transnacionalizada de que ya nos ha avisado -entre otros- Ramón Zallo.

No en vano, la dispersión e infradimensionamiento del sector entre nosotros (pese a la relativa concentración de sus efectivos en la ciudad de Valencia), resaltaban -y siguen resaltando, como evidencian los propios datos del Anuario Estadístico valenciano de 1989- como "nota estructural" que sumar al escaso recurso que de los servicios publicitarios se evidenciaba entre subsectores productivos tan tradicionales en la economía valenciana como ilustrativos de su particular -y más conocida- falta de concentración industrial:

(844) Publicidad

LOCALES Y PERSONAS OCUPADAS EN LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS. 1980

Comunidad Valenciana (C.V.)		Castelló		Valencia		Alcoy		Elda, Elche, Alicante	
Locales (A)	Personas Ocupadas (B)	% A sobre C.V.	% B sobre C.V.	% A sobre C.V.	% B sobre C.V.	% A sobre C.V.	% B sobre C.V.	% A sobre C.V.	% B sobre C.V.
118	503	7,6	-5,2	52,5	59,4	4,2	4,6	21,2	20,7

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística:  
Censo de Locales de España 1980. Madrid 1982. [J. HONRUBIA, *art. cit.*, 1986].

Any 1984	Empreses publicitàries radicades a la Comunitat Valenciana			
	Alicant	Castelló	València	C. Valenciana
Total	19	10	62	91
Empreses de gestió i/o creació	15	8	43	66
Empreses de mitjans de Com.	4	2	19	25

UTILIZACION POR LAS EMPRESAS DE LOS DISTINTOS SERVICIOS Y  
NIVEL QUE ALCANZA LA PRESTACION EXTERNA  
ANALISIS POR SECTORES  
 (En porcentajes)

PUBLICIDAD

Alquiler		Mueble		Metal		Textil		Calzado	
%		%		%		%		%	
Presta- ción -		Presta- ción -		Presta- ción -		Presta- ción -		Presta- ción -	
Utili-exter- nación na		Utili-exter- nación na		Utili-exter- nación na		Utili-exter- nación na		Utili-exter- nación na	
85	70	92	82	100	16	75	55	70	33

Fuente: J. Honrubia, *ibidem*.

Los datos de Honrubia, a partir del "Censo de Locales de 1980", apenas mostraban, no obstante, el importante peso relativo que dentro de la Comunidad Valenciana desempeñaban ya en 1984 -como así se recoge por el Anuari Estadístic- sectores (y/o empresas) tan significativos como el Comercio, Alimentación y Juguetes, e incluso la propia Administración autonómica -cuya inversión en publicidad, despues de alcanzada su consolidación institucional, - estaría actualmente en retroceso:

**Inversió publicitària generada a la Comunitat Valenciana i  
distribució per sectors**

Any 1984

	milions de pessetes	
	Valor	%
<b>Total</b>	8.070	100,0
<b>Sectors</b>		
Comerc	1.356	16,8
Alimentació i begudes	1.146	14,2
Indústria de la joguina	1.130	14,0
Construcció	581	7,2
Fusta	420	5,2
Indúst. Minerals	282	3,5
Adm. Autonòmica	242	2,0
Hostaleria	234	2,9
Serveis	226	2,8
Indústria tèxtil	212	2,7
Transports	194	1,9
Administració Local	153	1,8
Llar	145	1,6
Electrodomèstics	129	1,6
Art i Cultura	125	1,6
Viatges i Turisme	121	1,5
Altres indústries	500	6,2
Varis	864	10,7

Font: Generalitat Valenciana, Presidència.

Any 1984 <span style="float: right;">Inversió publicitària generada a la Comunitat Valenciana i distribució per mitjans</span>		
Total	8.070	100,0 %
Mitjans		
T.V.E.	2.193	35,1
Premsa	1.533	19,0
Ràdio	954	11,8
Marges	720	8,9
Revistes	614	7,6
P.L.V. <sup>1</sup>	280	3,5
Promoció	204	2,5
Aitana	128	1,6
Altres	724	9,0

<sup>1</sup> "Publicidad Lugar de Venta".

ANUARI ESTADÍSTIC 1989

Se sabe por demás, como el mismo Honrubia destacaba, que la reducida oferta de servicios existente en las áreas periféricas (como los publicitarios en el caso valenciano), es resultado de una serie de factores, entre los que suelen señalarse:

- el reducido tamaño de los mercados local y zonal.
- la notable dispersión de las necesidades de las empresas.
- el relativo alejamiento de los centros administrativos, de decisión económica y de concentración de la información,
- la frecuente ausencia de centros de investigación aplicada y de formación,
- y la no menos frecuente escasez de personal altamente cualificado, por la mayor atracción que sobre el mismo venían ejerciendo las grandes ciudades.

Que las cosas están cambiando, por lo que hace especialmente a Valencia y Alicante, es algo fácilmente presumible: pero también lo es que las cosas no cambiarán tan rápidamente como algunos parecen desear (y de nuevo los datos del Anuario 89 lo ratificaría). Por más que entre quienes no lo desconocen, sin duda, están los intereses que evalúan la oportunidad de posicionarse en un mercado de los más expansivos (si bien por ahora en términos *potenciales*) en el contexto español y aun europeo.

En definitiva, y tras el cúmulo de novedades aportado por la década pasada en materia de financiación publicitaria en TV (reducción paulatina de tarifas por la ampliación del número de cadenas, diversificación y regionalización de audiencias e inversión publicitaria, saturación de bloques "prime time" provocado por el tope del 10% a su vez impuesto por la Ley General de Publicidad, con la pérdida inducida de la notoriedad publicitaria en tales bloques, etc) lo que ante todo se evidencia, como "auténtico cambio" en el sector -y desde luego en Canal 9-, es la consolidación de "las nuevas fórmulas, cada vez más flexibles y generosas ofrecidas a los anunciantes" (E. Bustamante). Nuevas fórmulas que acrecientan las contradicciones, ideológicas y financieras, de fondo.

La filosofía de las nuevas fórmulas, al respecto, no es desconocida: si antes la presión comercial movía a "vender públicos a los anunciantes" (de lo que la TV Privada *pura* sería el

modelo), con el tiempo, y ante los cambios ya enumerados, el poder de las grandes marcas llega a subir un escalón más en su control del sistema comunicacional como un todo y oferta el trueque de producción televisiva a cambio de su explotación publicitaria. En definitiva: la “competencia” para quien no pueda costearse (por vía publicitaria) el no tenerla: la firma comercial (el patrocinador) paga la retransmisión o la serie o musical de turno, y a cambio se reserva todo el espacio publicitario durante el mismo. En otras palabras: la publicidad como “barrera de entrada” llevada a sus últimas consecuencias. Sin tapujos: antes al contrario, “haciéndolo ver” en pantalla... Y no parece que sea una moda más o menos pasajera. Antes al contrario, la agencia N.W. Ayer predecía, según información aparecida en el “International Herald Tribune” (junio 1990), que “la proliferación en Europa de emisiones de televisión por satélite, por cable y directas hará inevitable la aparición de este sistema en una red de televisión paneuropea”. El anglicismo “bartering”, de hecho, alude casi literalmente a dicho “trueque”, por demás tan normal en EEUU desde hace años.

Lo sorprendente, a la par que “sintomático” de su no alternativa real respecto al modelo heredado de TV en España, es que fuesen precisamente las TV autonómicas “pesadas” -sin importar al respecto el diferencial de autofinanciación inicial que sigue separando a TV3 de ETB-, las que primero diesen entrada, desde el sector “público” de la comunicación, a fórmulas tan generosas para con las grandes marcas. Es preciso recordar, con Bustamante/Guiu, que ya la normativa en vigor en TV3, desde julio de 1987, delimitaba cuatro modalidades de patrocinio: *simple* (sin intervención del patrocinador en el contenido del programa: así los “flash” que TV3 ha llegado a introducir incluso en los informativos); *participado* (con presencia del patrocinador en la elaboración del programa); entrega de *premios* (en programas tipo “El precio justo”) y *coproducción de programas* (financiación de todo o parte del presupuesto) <sup>(132)</sup>. Y que “Las Nuevas Normas sobre Publicidad” de ETB, también de 1987 -año de tantas expectativas en relación con la LTVP, no se olvide-, fueron pioneras a su vez del actual desplazamiento del *spot* como protagonista que va para clásico dentro del mundo publicitario en TV: dichas normas contemplan “dos posibilidades de prima o regalo de tiempos publicitarios”: contratando un spot diario cinco días seguidos de lunes a viernes en los bloques de ‘mediodía’, ‘infantil’ y ‘juvenil’, “se repetirá -como recogen Bustamante y Guiu- sin cargo alguno otros cinco días en el mismo bloque y dentro de las tres semanas siguientes a elección del anunciante”; obteniendo “igual premio si se contratara para siete días en el bloque de noche”.

No es extraño así, bajo la onda expansiva de una competencia interiorizada a partir de un modelo de TV (y de gestión) no tan distante de los anteriores, que Canal 9 haya asumido “sin más” fórmulas tan “normales” en el sector. Máxime ante la continua rebaja de las tarifas mínimas -50.000 pesetas en TV3 y Canal Sur para un spot de 20 segundos-, y su lejanía de poder conseguir, por obvios motivos, las máximas -en torno a los 8 millones- de TVE <sup>(133)</sup>. Por demás, si el precio del mismo spot de 20 segundos se calculaba, por las agencias que consultase el Instituto Emer ¡en 1985!, sobre unas 175.000 pesetas <sup>(134)</sup>, ese precio no sólo no se ha incrementado años más tarde sino que, según las tarifas establecidas por RTVV en agosto del 89, las 200.000 pesetas en que se cifraba una aparición de tal duración en las horas por entonces previstas de máxima audiencia (entre las 22,15 y las 23,45 del domingo y entre las 21,30 y las 23,15 de los lunes y jueves, coincidiendo con las películas) contrastaban ya claramente, antes de empezar a emitir, con las apenas 100.000 pesetas que costarían las mismas inserciones en la programación de tarde de lunes a viernes... Pero todavía más significativo era lo que ya por entonces se hacía público:

- “Cuando los anunciantes prefieran -recogía el diario Levante- insertar en la programación publirreportajes con una duración de 120 segundos, los precios se incrementarán hasta 900.000 pesetas, si es que lo hacen los domingos en la programación de noche (...), y serán de 450.000 si aparecen entre las 19,45 y las 20,15 horas un día entre semana”;

- “Si la publicidad va inserta dentro de un programa, los 3 minutos de publicidad costarán once mil pesetas y los 6 minutos un total de catorce mil” <sup>(135)</sup>.

Cifras y tiempos que hablan por sí solos, en su intercomparación. No sólo se deja entrever así, en Canal 9, la eventual generalización de las nuevas fórmulas de financiación publicitaria ya ensayadas por TV3 y ETB, con la diferencia si acaso de primar en costes y no tanto en tiempo, sino que se atribuye a la dirección económico-financiera de RTVV (sic), y no al propio Consejo o al director general, la fijación de las condiciones de comercialización de la -así denominada- “publicidad especial” (a la que se *distingue* oficialmente, de entrada, de la ordinaria y de la extraordinaria).

#### 2.2.3.3. Televisiones Privadas vs. Autonómicas: audiencias, programación..., y tiempo.

Dado que *la audiencia global tampoco es ilimitada en su crecimiento* (no por muchos más canales habrá ni mucha más gente, ni ésta dispondrá de más tiempo para ver TV), lo previsible a su vez, de otra parte, es el desplazamiento de la “pugna por la audiencia” en términos de captar la máxima por programas y no tanto por cadenas. De ahí la previsión de que a la fragmentación de las audiencias terminará por corresponder no tanto la actual homogeneización de contenidos, sino -y la oferta por cable ya juega en ello- su paralela diferenciación, salvo para aquellos programas punta o “prime time”.

El contexto internacional ilustra, sin duda, las líneas del futuro previsible tal y como van las cosas. Como técnico en la materia, y desde RTVV, J.M<sup>a</sup> Villagrasa lo destacaba recientemente:

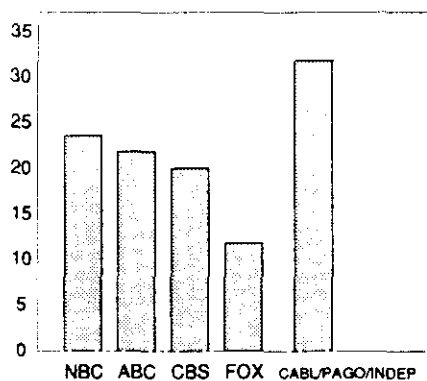
“la tendencia general de los países europeos con una televisión privada consolidada (Reino Unido e Italia) marca la existencia de dos cadenas de gran audiencia y las restantes, con índices de audiencia inferiores, de temática especializada, o de público objetivo selecto (por motivos geográficos o de status social), algo similar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde el monopolio ejercido por las cadenas se está deteriorando cada año más con la presencia de una cuarta cadena (Fox), y el auge de la *sindicación* (estaciones independientes) y de las ofertas especializadas de cable y pago.

En Alemania, Francia y España, con experiencias menos dilatadas en la ruptura de monopolios, la tendencia general es la del reparto y dispersión de la audiencia. Quedan unos años por delante para marcar las tendencias manifestadas en Italia y el Reino Unido” (vid. Gráficos anexos) <sup>(136)</sup>.



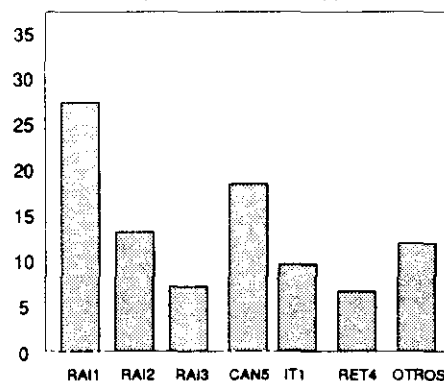
La *dispersión de audiencia* que subraya Villagrasa, en efecto, sin duda ha afectado a TVE (especialmente en las grandes ciudades donde ya se ven las televisiones privadas), pero previamente comenzó con la implantación de las primeras TV autonómicas. En ese sentido, Canal 9 es más que probable que no haya alcanzado el techo de audiencia del resto de canales autonómicos, pero también es cierto que -por su tardía incorporación- ha sido la última en padecer “la desestabilización de los bloques horarios simples (...), los cambios continuos de parrillas (de programación), y la mezcla de ofertas de programación generalista y estable con tendencias innovadoras y de sorpresas en la emisión” (Villagrasa, 1990). Factores todos ellos, en definitiva, que “no favorecen la estabilización de los hábitos de consumo televisivo de la audiencia. El telespectador (entonces), responde con el cambio de canal, la infidelidad a la cadena y la búsqueda del programa estrella (películas, retransmisiones deportivas, concursos)”...

**ESTADOS UNIDOS**  
Reparto de audiencia



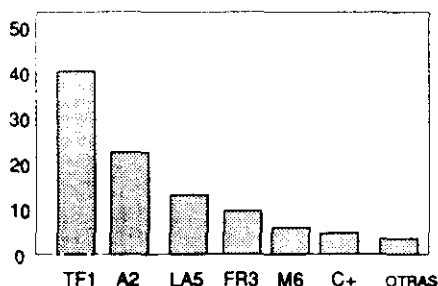
Fuente: NIELSEN (Temporada 1989-90)

**ITALIA**  
Reparto de audiencia (\*)



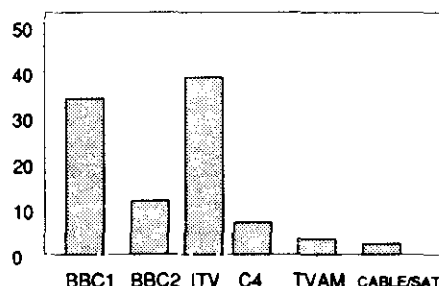
(\*) 8:30-11:00 noche  
Fuente: AUDITEL (Enero-mayo 1989)

**FRANCIA**  
Reparto audiencia



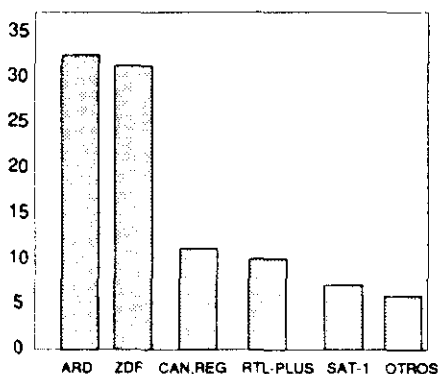
Fuente: MEDIAMETRIE (1989)

**REINO UNIDO**  
Reparto de audiencia



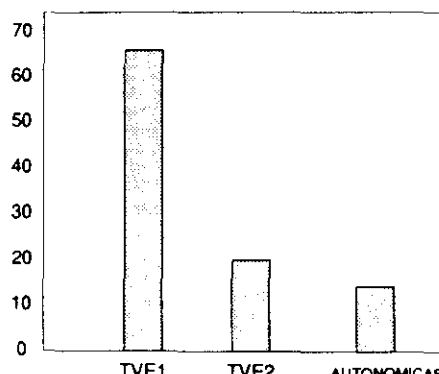
Fuente: SAATCHI&SAATCHI (1989)

**REPUBLICA FEDERAL ALEMANA**  
Reparto de audiencia



Fuente: GFK (1989)

**ESPAÑA**  
Reparto de audiencia



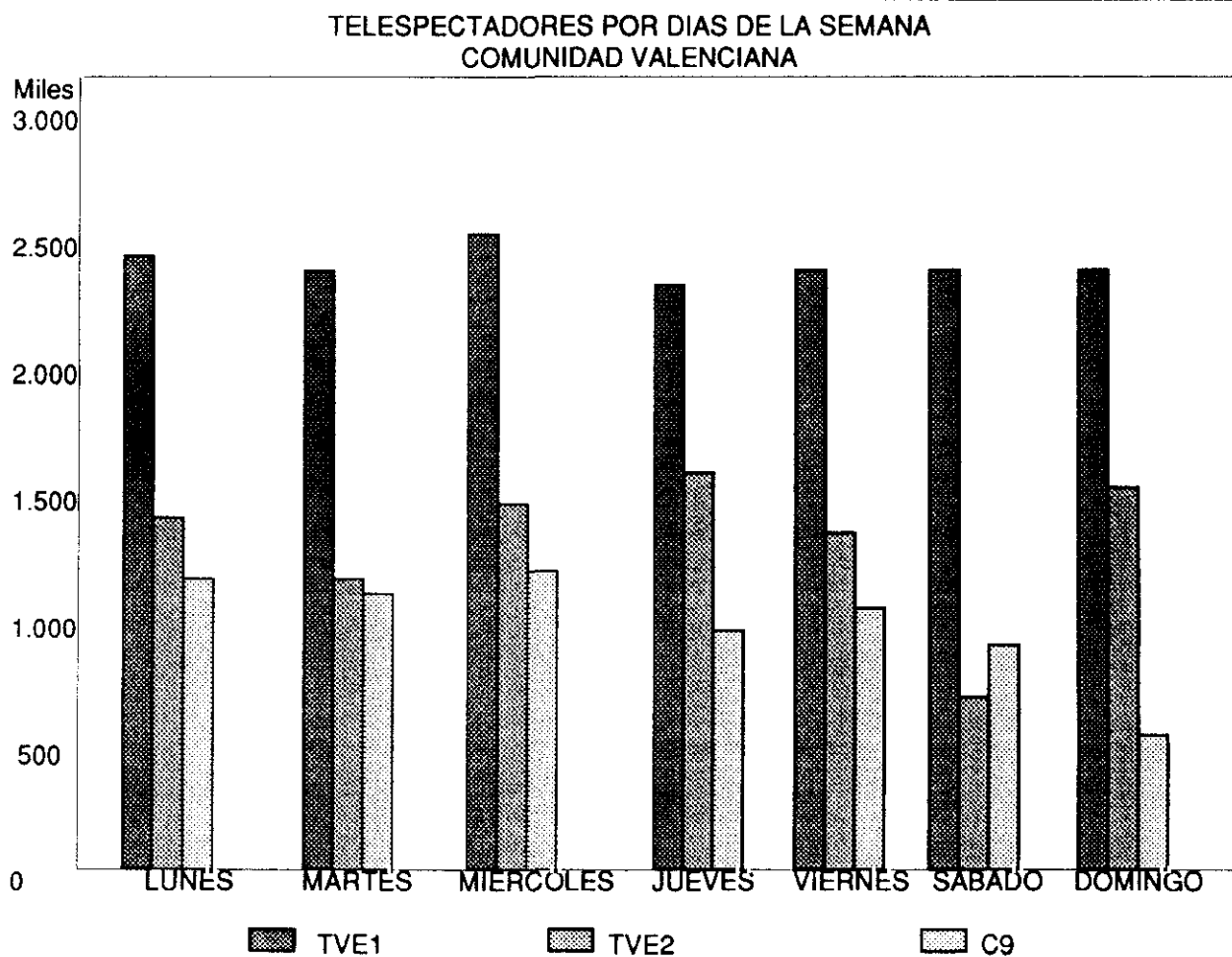
Fuente: ECOTEL (1989)

	<u>TVE1</u>	<u>TVE2</u>	<u>CANAL AUTONOMICO</u>	<u>OTROS</u>
ANDALUCIA	55,1%	24,4%	19,7% (CANAL SUR)	0,8%
MADRID	64,5%	23,3%	12,1% (TM3)	0,1%
CATALUÑA	51,5%	21,2%	27,2% (TV3/C33)	0,1%
COM. VAL.	59,3%	22,9%	14,4% (CANAL 9)	3,4%
GALICIA	53,9%	18,2%	27,8% (TVG)	0,1%
P. VASCO	59,1%	23,2%	17,5% (ETB1/ETB2)	0,2%

	<u>TVE1</u>	<u>TVE2</u>	<u>CANAL AUTONOMICO</u>	<u>OTROS</u>
ANDALUCIA	49,1%	23,2%	26,8% (CANAL SUR)	0,9%
MADRID	58,3%	22,3%	18,3% (TM3)	1,1%
CATALUÑA	47,9%	18,3%	33,6% (TV3/C33)	0,2%
COM. VAL.	52,1%	20,0%	23,9% (CANAL 9)	4,0%
GALICIA	54,7%	19,1%	26,1% (TVG)	0,1%
P. VASCO	54,7%	23,8%	21,4% (ETB1/ETB2)	0,1%

Fuente: ECOTEL



Conseguir una audiencia fiel empieza a ser más importante que lograr el máximo de telespectadores: la pugna por la audiencia se reconduce, cualitativamente, al empeño por consolidar (cuanto antes) la “habitualidad” o fidelidad de la gente hacia sus programas. Pero la práctica homogeneización de los contenidos es ya la primera trampa: en nada ayuda a solidificar los “hábitos”. Y sin telespectadores <cautivos> no hay audiencias suficientemente estables que permitan negociar con los anunciantes previsiones de financiación igualmente fiables. En consecuencia, los planes económicos se resienten: los enfrentamientos entre los socios son públicos (salida de Anaya de Tele 5 / disputa Linde-Fabregat-D.G.Presupuestos en TVV) o bien, lo más frecuente, más soterrados (Canal Plus, TV3).

No es de extrañar, por esa progresiva fragmentación de *la* audiencia (¿alguna vez fue única?), que al mismo tiempo que se disputa tenazmente por los contenidos masivos -con que intentar financiar, vía publicidad, una programación más elitista o cultural en el caso de las televisiones públicas- se aprecie, cada vez más, la apertura de espacios para contenidos más familiares -los programas con vídeos de aficionados, por ejemplo-, que parecen romper con “lo que hasta ahora se había considerado casi una regla general del medio: su carácter masivo y contrario a cualquier clase de especialización” (como subrayase recientemente el Equipo Lux: “El Nuevo Lunes”, 9-9-90).

En ese contexto, las incertidumbres de todo tipo se suman. No sólo se temen unos a otros: TVE a las autonómicas, TVV a TV3, las privadas a TVE pero también a las autonómicas (y suma y sigue). Todos a su vez empiezan a temer, ante todo, al factor tiempo. Por eso todos tienen prisa.

La confrontación de las privadas con las autonómicas, y no sólo con TVE, se presume por tanto nada fácil para ninguna de ellas. Si las privadas “desearían unas autonómicas más ancladas en lo cultural, y por consiguiente con una audiencia selectiva, en lugar de ser foco de atracción para los ingresos publicitarios”, tal y como presumía el Equipo Lux, los responsables de las TV autonómicas no esconden su intención de “competir en contenidos con el resto de las ofertas televisivas [rompiendo con la presunción] minoritaria y selectiva de estos canales”... No en vano, el ejemplo de cuanto viene aconteciendo con el ~~sector~~ del vídeo -auténtica avanzadilla del sector privado en lo audiovisual y, por lo dicho, paradójico verdugo en parte de los tres nuevos canales aun antes de estar éstos en el aire- han apuntalado el nuevo dogma del “poder ilimitado” del mando a distancia entre tales responsables autonómicos, por el temor de no poder elegir tan siquiera entre el más absoluto vacío hertziano y el consuelo hipotético que la etiqueta cultural y minoritaria presupone -en lo que algunas autonómicas pioneras, como TV3 lo ha sido para TVV, han servido de espejo.

Un dato clave, fundamental, se presume -se insiste- según el actual estado de cosas. Y más para el periodo que va de aquí hasta abril de 1992, cuanto menos: la *falta de tiempo*, el sometimiento al condicionamiento temporal, juega en principio a favor de las autonómicas y en contra de las privadas. Un dato deducible del calendario técnico que, a la hora de afrontar la actual falta de cobertura para todo el territorio nacional a que aspiran las emisiones privadas, se contempla desde el Gobierno.

- Porque si el Plan Técnico de la TV Privada (PTTP) se viene cumpliendo hasta ahora con creces, y 20 serán o ya son las ciudades (entre ellas Valencia y Alicante) que reciban las señales privadas antes del 1 de octubre de 1990, fecha en que finaliza la “primera fase” del mencionado

Plan, está por ver si la complejidad de las obras civiles y de la infraestructura técnica permite un cumplimiento similar a partir de entonces: para llegar antes de abril de 1992, en la “segunda fase”, al resto de ciudades de más de 100.000 habitantes así como a la totalidad de las capitales de provincia (Elche, Alcoy y Castellón entre ellas). Máxime cuando tal calendario se entrecruza con el resto de *prioridades* previstas -caso de los compromisos asumidos en infraestructuras tras la reforma de los fondos CE- con vistas al tan traído y llevado 92.

- Adicionalmente, es preciso recordar el condicionamiento expreso, recogido por el reglamento del propio PTTP, de que el uso “provisional” de un satélite (el Hispasat) para acortar tales plazos de cobertura de la TV privada y mientras “no exista una red terrestre de comunicación suficiente” (a fin de no demorar todavía más la instalación por Retevisión de emisores y reemisores allí donde siguen siendo necesarios, lo que resulta de especial “interés público” para los canales autonómicos exceptuando al catalán), “no será posible -según tal Reglamento- la emisión de programas regionalizados”. Es decir, el PTTP prevé para cada uno de los tres canales privados la puesta en pie de dos centros principales de producción: uno en Madrid y otro en Barcelona; y, junto a ellos, podrán contar con hasta diez “centros zonales de producción”, según el esquema territorial sui géneris aprobado (que incluye la separación de Cataluña + Baleares, por un lado, y de Valencia por otro, cabe recordar). En ese sentido, si las negociaciones sobre precio y cobertura del territorio están tan avanzadas que quizá ya estén ultimadas -cuando estas palabras se redactan- por parte de Retevisión con Eutelsat e Intelsat (por la orientación de sus satélites, dado que Canarias también cuenta), las “zonas” coincidentes con los centros zonales privados podrán recibir su programación vía satélite -y todo hace pensar que bastante antes de cuando se preveía-, pero sólo para la emisión de carácter nacional. De modo que las televisiones privadas podrán emitir programas por circuito regional, pero tal posibilidad se remite al cumplimiento por Retevisión de la mejora de su red (pública al cabo) hasta alcanzar una cobertura definitiva -cobertura que, aun para llegar al 80% de la población española, no se prevé sino para finales de 1994, si bien la Generalitat ha apostado por “contribuir” a fin de adelantar el objetivo en lo relativo a la Comunidad Valenciana.

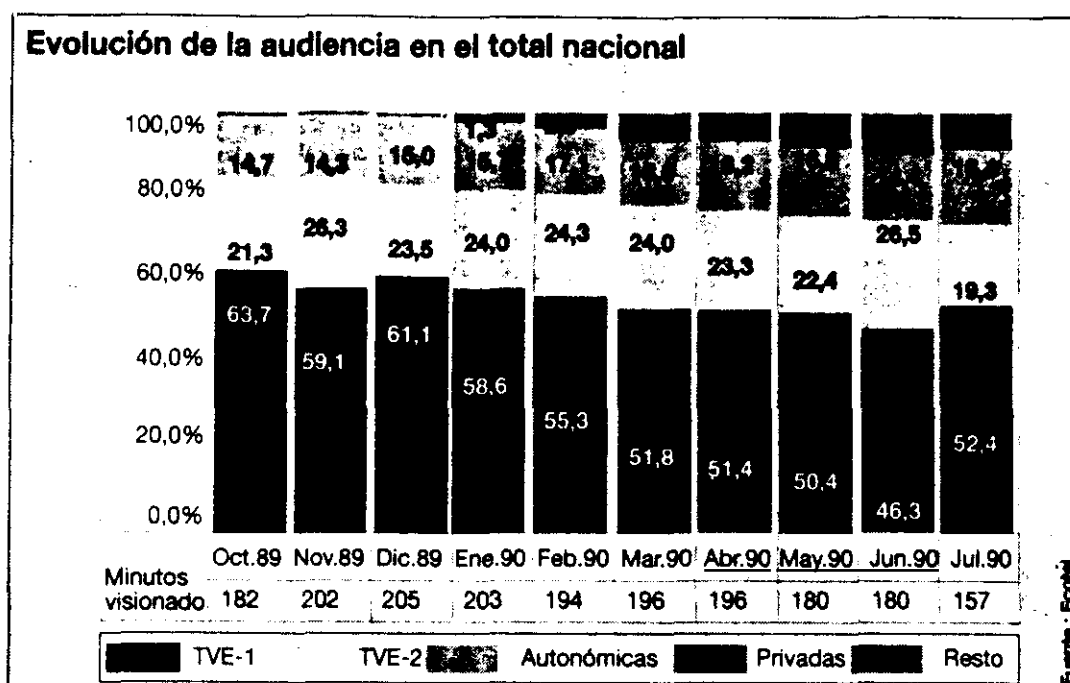
Planteamiento no sólo jurídico-técnico, por tanto, que añade “oxígeno” al calendario de arranque y consolidación de Canal 9-TVV (si bien recorta, de otra parte, eventuales estrategias de entendimiento con TV3, en especial por cuanto hace a llegar a Baleares). Todo ello, al menos, mientras la inmediata realidad (política, económica, tecnológica, etc) no diga lo contrario...

Algo que ayudaría a entender, a su vez, el cada vez menos inconfesado temor de los canales privados hacia esa especie de “tercer canal confederado” de las TV autonómicas que, por el ingreso previsible en la UER y la constitución no menos previsible de la FORTA como “pool” comercial (de compras ante todo), podría suponer una seria competencia respecto de aquéllas. Máxime cuando, con la de Murcia, la totalidad de las CCAA del Mediterráneo (hacia donde se desplaza, recuérdese, el eje del crecimiento español) tendrían ya su propio canal público: y ello aun cuando sean, en definitiva, territorios de habla castellana. Añádase a ello la progresiva pérdida por tales canales autonómicos de la etiqueta “cultural” (al entrar en la “batalla por la audiencia” con criterios menos selectivos, respecto de los inicialmente previstos, en cuanto a los objetivos comerciales de su programación) y su carácter diferencial, en relación con TVE, en cuanto a su mayor respaldo -por ahora- en los presupuestos públicos y no sólo en los ingresos por publicidad (ingresos que han crecido por demás en TVE-2, con la programación competitiva y alternativa -no complementaria

respecto del primer canal público- que ya se preconizase por el equipo Miró), y quizá se entienda, por ejemplo, el por qué del pacto de Canal Plus con la FORTA en cuanto a retransmisión de partidos de fútbol: acuerdo firmado -no se olvide- para un periodo de 8 años.

La presión del audiovisual privado, sin embargo, no por ello parece que vaya a disminuir sino todo lo contrario, optando si acaso por vías más sutiles que hasta la fecha. La jugada inicial del mismo Canal Plus, por ejemplo, ofertando desde su buque insignia (el diario "El País") un juego millonario con que empezar a ganar la misma fidelidad de sus lectores habituales a un canal que se dice apostará por el cine, en su tramo codificado (y de pago) de emisión, es sintomática en tanto que "de referencia dominante". Pero dicha estrategia no resultó en su momento y "en sí" tan llamativa cuanto significativa por lo que escondía. Así, el apoyo documental de dicho juego -unos fascículos coleccionables sobre Historia del Cine incluidos en su edición dominical- venía a sustituir a otro coleccionable previo cuya andadura hubo de acelerarse (comprimiendo dos entregas en una por semana) a la vista del recorte por el Gobierno -recorte de antemano previsible y finalmente confirmado-, de la prórroga para emitir solicitada en su día. Pero también -y no menos significativo- por el giro descarnado, desde ese mismo día 22 de abril, de las páginas dedicadas a la programación televisiva en esa misma edición de los domingos (en que el diario alcanza la mayor tirada, no en vano): páginas que "minimizaron" de raíz toda alusión a lo que no fuera programación de "cine en TV" (eso sí, ampliando los comentarios sobre la misma a cuantas cadenas puedan llegar a compararse, en su día, con la que Canal Plus tenía previsto programar) <sup>(137)</sup>.

La ensalada más que previsible de encuestas y sondeos que se nos echará encima desde la prensa escrita, sin ir más lejos, a buen seguro no despejará las dudas que con el tiempo se plantearán sobre el "mapa efectivo de audiencias", sino que es probable que las aumenten. Ya de entrada, el mismo diario "El País" publicaba, primero, un "*estudio coincidental realizado por el Instituto Demoscopia para la empresa Publintegral*" entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 1990, es decir, tras cinco meses escasos de rodaje por parte de las privadas Antena 3 y Tele 5, estudio que señalaba entre sus conclusiones que "Televisión Española no es ya la cadena preferida de los telespectadores. Tele 5 se ha convertido en líder en la banda horaria de máxima audiencia". En agosto daba a conocer, sin embargo, un estudio de Eco-Consulting (realizado entre los días 9 a 15 de julio) según el cual "el 55% de los telespectadores considera que TVE es la mejor de todas", para posteriormente, con arreglo al informe mensual de Ecotel elaborado a partir de los datos facilitados por las propias emisoras de TV, subrayarse que TVE-1 habría "aumentado su participación en la audiencia por primera vez desde el mes de enero", resaltándose de paso el salto dado, entre las autonómicas, por Canal 9-TVV (138). Que el Mundial de fútbol o el culebrón "Cristal" estuviesen detrás de lo primero, como el "morbo barato" en el segundo, apenas confirmaría la retracción de "lo cualitativo" cuando de competencia se trata... La audiencia media por canales, por demás, presentaría según tales estudios el siguiente perfil evolutivo para los meses de octubre del 89 a julio del 90:



Fuente: "El País", 2-9-90.

Por cercanas fechas (mayo 1990) se presentaba, de otra parte, el primer avance del estudio que, dirigido por José L. Ibáñez desde la Universidad del País Vasco, daba cuenta del *"Estado actual de la programación en las televisiones públicas y privadas españolas"* <sup>(139)</sup>. Estudio que, para el periodo 26/marzo al 1/abril del 90, perseguía cuantificar "qué tipos de programas y sus porcentajes, a qué horas y en qué días se emiten". De las 8 categorías que una comisión de la UNESCO propusiera como "Una metodología para el estudio de la circulación internacional de los programas y de las noticias por televisión", y que en efecto se amolda -como sistema sencillo y eficaz- para el análisis de televisiones con contenidos y horarios de emisión diferentes entre sí, resalta la preeminencia del entretenimiento como categoría que se impone en todos los casos sobre el resto. Se vuelve a confirmar por tanto, cuatro años más tarde, lo adelantado en su día por José V. Idoyaga <sup>(140)</sup>. Y se destaca ahora, como conclusión general, la planteada por Ibáñez: "Si una TV se define por su programación, *no existe un modelo autonómico de TV* (pese a una evidente tendencia hacia la famosa "homogeneización")".

## (ANEXO)

### Categorías de programas.

**Informativos (I).** Espacios cuyo objeto principal es "la información de hechos, noticias y comentarios". Comprende 3 subcategorías:

- (In) Informativos diarios de noticias.
- (Io) Informativos otros: dedicados a política, economía, etc...
- (Id) Documentales: si relacionados con la actualidad informativa

*Educativos (ED).* El factor pedagógico es lo prioritario.

(EDc) Programas educativos orientados a la enseñanza escolar, universitaria o similar.

(EDr) Programas educativos para el desarrollo rural.

(EDo) Otros.

*Culturales (C).* Su objeto es estimular la curiosidad artística o intelectual, actividades o representaciones culturales, y en general, programas que pretendan enriquecer los conocimientos de la audiencia en cualquier esfera cultural, sin un sentido didáctico.

*Religiosos (R).*

*Infantiles (IF).* A diferencia del resto de categorías, que atienden al contenido, ésta atiende al tipo de público. Incluye también los programas dirigidos al público juvenil.

*De Entretenimiento (E).* Comprende 6 subcategorías:

(Ef) Films o películas.

(Es) Series.

(Ec) Concursos y juegos.

(Em) Musicales.

(Ep) Deportivos.

(Ev) Variedades (magazines con entrevistas y actuaciones musicales) y otros programas de entretenimiento.

*Publicidad (P).*

A partir del Cuadro anexo, relativo al porcentaje global *semanal* por categorías y subcategorías de programas, el equipo de J.L. Ibáñez (que no pudo analizar Canal Plus y dejó al margen la 8ª categoría: Publicidad), especificaba las siguientes conclusiones generales, parcialmente reconducidas por nosotros por lo que hace al caso valenciano:

1. En todas las televisiones españolas -se insiste- los programas de *entretenimiento* oscilan entre el 55% de TVE-1, el más bajo, y el 78% del canal privado Tele 5.

Considerando únicamente las TV Públicas, los porcentajes de entretenimiento en las autonómicas oscilan entre el 54% de TV3 y el casi 69% de TM3, márgenes en los que se incluyen tanto TVE-1 y 2 como Canal 9 (la tercera en dar al entretenimiento la máxima importancia, con un 67,30% de su programación).

Una de las TV Privadas, Tele 5, salta esos porcentajes y la otra, Antena 3, se aproxima a Telemadrid, que es de las públicas la que más tiempo dedica a entretenimiento (rozando el 69%).

2. Los *informativos* mantienen una línea porcentual entre el 27% de TVE-1 y el 15% de TVG, que se ve superada en unas décimas por una TV privada como Antena 3 (mientras que Tele 5 apenas alcanza el 3%, lo que da idea de la diversidad estratégica entre ambas privadas).

## PORCENTAJE GLOBAL SEMANAL POR CATEGORIAS DE PROGRAMAS

	TVE-1	TVE-2	CSUR	TV-3	C.33	ETB-1	ETB-2	TVG	TM-3	C 9	T 5	A 3
INFORMATIVO	27.62	20.18	16.59	16.17	19.44	14.26	26.62	15.10	10.30	18.30	2.44	15.21
In	20.49	8.80	10.53	11.61	16.91	8.60	14.04	11.99	6.41	11.90		7.14
Io	4.19	8.15	2.69	4.56	2.53	5.66	7.64	3.11	1.37	1.80	2.44	7.45
Id	2.94	3.22	3.37				5.00		2.17	4.60		0.62
EDUCATIVOS	0.33	5.32						0.52	1.03			
EDc	0.33	5.32										
EDr								0.52				
EDo												
CULTURALES	3.90	7.49	12.05	10.94	13.95	4.12	4.31	6.40	5.72	5.90	0.35	4.55
RELIGIOSOS	1.07	0.52	0.67	0.75		0.23		0.76				
INFANTILES	8.38	3.74	7.41	16.42		17.09	1.52	5.28	6.75	7.70	16.24	7.59
ENTRETENIM.	55.09	61.38	60.80	53.98	62.18	62.94	64.78	68.31	68.95	67.30	77.89	67.37
Ef	14.60	7.82	16.61	11.28	9.51	7.66	8.20	14.01	23.13	12.10	21.44	12.88
Es	12.40	11.83	15.49	15.17	7.39	24.17	30.87	21.26	21.64	33.50	22.18	28.05
Ec	3.39	7.75	2.56	3.23	6.34	4.24	6.53	1.30	0.68	1.70	14.64	5.16
Em	5.15	7.16	10.21	2.90	11.67	5.66	0.55	3.37	6.87	1.10	0.63	12.40
Ep	0.67	23.93	13.24	9.87	18.18	16.62	6.81	17.73	13.74	8.20	8.49	3.72
Ev	18.79	2.89	2.69	11.53	9.09	4.59	11.82	10.64	2.06	10.70	6.68	4.24
SIN CLASIFIC.	0.28	0.59	2.47	1.74	4.43	1.29	0.97	3.63	6.18	0.80	3.82	5.39

Fuente: J.L. Ibáñez et al: "Estado actual de la programación en las Televisiones Públicas y Privadas españolas". Valencia, mayo, 1990.



Entre las autonómicas, TV3 y Canal 9 mantienen un porcentaje similar en Informativos diarios (más de un 11,50%), pero la diferencia del porcentaje global (18,30% en el canal valenciano) evidencia la diversa estrategia seguida en programas con mayor contenido de opinión (mayor en TV3) respecto de los documentales (mayor en Canal 9).

Telemadrid, por su parte, pese a no superar apenas el 10% en Informativos, cuanta con el diario “Telenoticias” que tan buena impresión ha causado entre los profesionales del periodismo televisivo y con gran éxito de audiencia en la comunidad madrileña.

3. La *programación cultural* en las TV Públicas bascula entre el 4% de TVE-1 y el 14% del segundo canal autonómico catalán, Canal 33. A excepción de ETB, las demás cadenas públicas superan holgadamente el 5% (5,90% en Canal 9) y televisiones como TV3 y Canal Sur, además del ya citado Canal 33, se constituyen según Ibáñez en “ejemplos a imitar por el resto de las cadenas públicas”.

Entre las privadas, Tele 5 apenas supera el 0,5%, mientras que Antena 3 se sitúa a la altura de ETB (4,5%) e incluso supera a TVE-1 (3,9%).

4. Con la *programación infantil y juvenil*, sin embargo, no sucede lo mismo. Tele 5 se sitúa aquí a la par con cadenas públicas como TV3 y ETB-1 (más de un 16%), aun cuando la cuantificación esconde la diversidad de objetivos entre una y otras.

ETB, que es el canal que más importancia cuantitativa da a la programación infantil y juvenil, la emite íntegramente en euskera. Y otro tanto sucede en Canal 9 respecto de la lengua utilizada, aun cuando el porcentaje relativo (7,7%) es inferior a la mitad respecto de los canales vasco y catalán, si bien algo superior al porcentaje de TVG y bastante similar al de TVE-1 (con la que parece centrar su competencia).

5. En programa *educativos*, tan sólo TVE-2 deja entrever cierto interés al respecto (ni TV3 ni Canal 9 los contemplan), siendo la programación *religiosa*, a su vez, cuasi-simbólica.

De otra parte, durante el mismo periodo (última semana de marzo) y para un “*prime time*” que los mismos investigadores han considerado en la banda horaria que cubre de las 21’00 a las 23,30 horas, sus conclusiones no representan un desvío significativo, en el caso concreto de Canal 9, respecto de las anteriores apreciaciones. A saber:

“La categoría de entretenimiento -vuelve a subrayar Ibáñez-, se lleva la mayor parte de este periodo. De lunes a viernes, son las series y las películas los espacios que más destacan en toda la banda horaria (como se puede apreciar en el Cuadro adicional, reconducido por nosotros mismos). El fin de semana, en cambio, está dedicado a la emisión de magazines y de deportes.

Los informativos experimentan un aumento en el periodo Prime Time, en clara competencia con los dos canales de TVE. La programación cultural, que ya de por sí es reducida, no aparece en el periodo de máxima audiencia.

En resumen, informativos y entretenimiento se llevan el total de la programación en el horario Prime Time” (141).

No será preciso subrayar, por nuestra parte, que si la estrategia competitiva de Canal 9 parece centrarse más respecto de TVE-1 y de TV3, en Informativos, y de TVE-2, en Deportivos, no menos elocuente ni contradictoria -ante todo, cara al futuro- es la ambigua relación de “complementariedad” aparentemente mantenida respecto de TV3 en lo relativo a Entretenimiento. Pues si tal complementariedad se haría palpable en el “respeto mutuo” a la hora de intercalar (de lunes a viernes, no tanto los fines de semana) las distintas subcategorías dominantes en entretenimiento y para esa banda *prime time*, no menos significativo es el distinto “nivel de partida” (por no hablar de calidad comparativa) de la *producción propia* programada en dicha banda horaria que al respecto se evidencia (ante todo en variedades, ya que no en series o films donde sigue primando -en ambas cadenas- la producción ajena, en su mayor parte importada). Diferencia que se hace más ostensible, si cabe, en la programación no de Prime Time: así por ejemplo en programas infantiles, pues si Canal 9 se arriesga por ahora a un menor porcentaje de programación a tal respecto -en parte para ahorrarse costes de doblaje, que encuentra resueltos de un modo oportunista por vía de “complementariedad” inducida gracias a la oferta de TV3-, queda la duda de qué pueda hacerse -más que pensarse- con vistas al Plan de Actuación adelantado por Marina Gilabert en mayo de 1990. Pues si el enganche con la audiencia parece más o menos conseguido, dando pie a planteamientos como el formulado por la representante socialista en el Consejo de RTVV:

...” Canal 9-TVV, desde el inicio de su andadura, ha buscado la rápida expansión de horarios de emisión (...) En la actualidad emite ya un centenar de horas semanales, con un porcentaje de producción propia del 40% y una presencia mayoritaria, superior al 60%, del valenciano en sus emisiones (...) La lengua y la cultura diferenciadas no bastan, hay que ofrecer una programación sugerente en el marco de las competencias para que interese al receptor. ‘*Nuestra obligación es ser vistos*’, ha dicho repetidamente el Director General de RTVV (...)

Los planteamientos con vistas al futuro inmediato, sin embargo, no están tan claros, sobre todo de apostarse realmente por superar las deficiencias o contradicciones (también en programación) que ya se han acumulado. Y que la propia Marina Gilabert atajase por la vía no infrecuente de la generación de expectativas:

...” Nuevas etapas tendrán que incidir en una mayor diversificación de los programas de producción propia y en una ampliación del servicio que atienda más y mejor las demandas de programas originales de sectores minoritarios, al objeto de lograr una política de comunicación equilibrada que contemple la estrecha relación existente entre el producto televisivo y el cinematográfico; un escenario comunicativo de futuro en la Comunidad Valenciana con una industria más desarrollada, un mercado más dinámico y abierto a la innovación y, por último, perseguir una fluida relación con el entramado social”<sup>(142)</sup>.

Las reticencias razonables sobre la efectiva concreción de tales expectativas no sólo arrancan de cuanto ya se ha apuntado, en relación ante todo con la indefinición institucional a la hora de concretar el apoyo estratégico al sector audiovisual (el cinematográfico incluido) autóctono, así como la diversa interiorización por Canal 9 de los contenidos educativos, culturales e infantil-juveniles... Tienen que ver, antes que nada, con la diversa apoyatura que por vía presupuestaria -y respecto del resto de Comunidades Autónomas- se prevé en relación con el dicho canal televisivo.

Y, en todo caso, con la incapacidad de asegurar cualquier objetivo que no suponga dejación, de hecho, de los “objetivos fundacionales”, a partir de una hipotética cobertura por la vía comercializante de unos mayores y más rápidos ingresos en publicidad.

Unas cosas y otras, en suma, confirman la “convergencia de estrategias” de programación (crecimiento del volumen de emisión, el entretenimiento como valor en alza y dentro de ellos el espectacular ascenso de los contenidos “cinematográficos”, la paulatina expulsión de los programas divulgativos, etc), con su inevitable traducción en términos de producción (el auge de la ajena y por tanto de las importaciones, sobre todo en la banda “prime time”) que, habiéndose observado respecto de las TV “estatales” por Enrique Bustamante entre otros, confirma la trayectoria de las TV autonómicas como “calcos a escala” <sup>(143)</sup> del modelo comercial dominante representado por TVE. Modelo comercializante que, ante la presión de las privadas en su arranque simultáneo y por pretender como ellas una autofinanciación tan difícil de alcanzar cuanto contradictorio con su condición legitimante, contribuyen por demás a reforzar, mediante la extensión de nuevas fórmulas publicitarias, la paulatina y preocupante “dejación del espacio público” que legitimase en su día su puesta en pie: como sus objetivos en materia cultural, si bien no exclusivamente. Y que urge, por lo mismo, la pronta formulación de eventuales “salidas”: no sólo frente al punto muerto en que se encuentran, sino frente a la marcha atrás que -con vistas al futuro- pueden llegar incluso a representar.

### 2.3. VERTEBRACION SOCIOCULTURAL Y PRIMERAS DUDAS. ¿UN PROYECTO PARA LA NORMALIZACION LINGUISTICA?.

Las dudas sobre la gestión actual en RTVV se acrecientan, como sumando adicional a lo ya expuesto, a la vista de la deficiente interiorización de su papel presunto en materia de normalización lingüística. Cuestión que no sólo da cuenta de la responsabilidad, en última instancia, que para la Generalitat como tal conlleva el divorcio palpable entre las políticas cultural y de comunicación, sino que al tiempo evidencia el creciente “déficit de legitimación social” en que el proyecto RTVV puede incurrir, pues no otra sino la normalización lingüística era la razón de fondo que animó desde un principio la puesta en marcha de una Televisión Valenciana: por matizable que sea, de hecho, con el tiempo.

La “última” inconsecuencia, en tal sentido, ha sido el listado de 543 palabras prohibidas o censuradas por el propio Amadeu Fabregat, alegando su presunta condición de “excesivamente catalanistas” y propugnando su no aplicación en Canal 9-TVV tanto por los periodistas como por las empresas de doblaje. Dicho glosario, ni aprobado ni desaprobado por el Consell en su primera reunión tras el verano de 1990 (aun con la postura claramente crítica al respecto del conseller de Cultura) y señalado como efectiva competencia del director general de RTVV según el Consejo de Administración del organismo público, evidenció en todo caso las filias y fobias que todavía suscita -cuando parecía definitivamente enterrada la batalla de la denominación- el asunto de “la llengua” en la sociedad valenciana. Así como el carácter político, y no estrictamente lingüístico, de toda pretensión favorable a su resolución consecuente, y el papel central hoy por hoy -como era de suponer- que desempeña RTVV en materia de normalización.

Entre los argumentos de legitimación de la estrategia inicial destacaba y destaca, en efecto, el carácter de Canal 9 (TVV y RAV) como soporte indispensable para la normalización lingüística. Hoy por hoy, no en vano, la Comunidad Valenciana es, de las CCAA bilingües con TV pública autonómica (ya en marcha), la que sigue teniendo tal normalización como asignatura más claramente pendiente: así lo resaltaban ya en 1984 G<sup>a</sup>. Lliberós y A. J. Sarrià, como “íntima justificación” cultural del proyecto RTVV, en su ponencia al I Congrés d'Economia, apuntalando la convicción “unánime” surgida del debate de las Cortes Valencianas al aprobar la Ley para su creación.

Cuestión prioritaria, en todo caso, es dar a conocer desde aquí qué puede entenderse por *normalización lingüística*. Pues, si como señala Cobarrubias “la transferencia de poderes en el ámbito lingüístico se articula en las Leyes de Normalización Lingüística”, luego de aprobarse la Constitución del 78 y dentro de ella el nuevo Estado Autonómico español, “la falta de un estudio sistemático sobre el tema quizá se explique por el hecho de que cada Comunidad se encuentra preocupada de su propia versión de la Ley de Normalización y de las urgencias que la tarea de ponerla en práctica implica”; no siendo extraño que entre las tareas a acometer se señale como la primera, por dicho autor, la de “efectuar una elucidación conceptual del término ‘normalización’ mismo”<sup>(144)</sup>.

Naturalmente, dicha elucidación sobrepasa los intereses académicos concitados en esta Tesis. Pero sin duda no estará de más, en tal dirección, señalar de entrada que el caso valenciano

parece tan distante de un entendimiento diglósico (al modo de Ferguson y Fishman) cuanto más próximo, por contra, a un entendimiento del problema como básicamente de dos lenguas en contacto (castellano/valenciano), en una situación caracterizada -de acuerdo con Aracil- por *un proceso (conflictivo) de progresiva sustitución en el uso del segundo por el primero*. En otras palabras, tendería a señalar el caso valenciano como más cercano a una problemática de *desequilibrio funcional*.

La cuestión conceptual (diglosia vs. desequilibrio funcional) no es asunto menor, pues finalmente se traduce en la prioridad -desde la segunda óptica- de acometer un *programa de planificación* como tarea indeclinablemente ligada a las aspiraciones de normalización lingüística (en nuestro caso, obvio es, del valenciano). En ese sentido, y no otro, aquí se asume como punto de partida el conocido *modelo de Haugen* (1966) en tanto que propuesta heurísticamente aceptable para dicha planificación. Dicho modelo, no exento de cierta pluralidad en sus diversas interpretaciones, puede sintetizarse en 4 etapas básicas:

1. Selección de una norma.
2. Codificación de la misma (“normativización”).
3. Elaboración (“estandarización”).
4. Implementación o difusión demográfica y geográfica (“normalización”).

Y con arreglo a dicho modelo se entenderían a su vez -de nuevo con Cobarrubias- las tres características peculiares de la *normalización* (en su sentido más amplio, etapas 3+4), como un proceso que va más allá de la mera “estandarización” y consistente en:

- “- estandarizar en una situación de lenguas en contacto.
- eliminar el desequilibrio funcional entre dos lenguas; es decir, revertir el cambio lingüístico de la lengua cuyas funciones han sido restringidas o minorizadas.
- establecer e implementar la igualdad de derechos lingüísticos a una comunidad de usuarios de lengua minoritaria “<sup>(145)</sup>.

Lo que requeriría, en consecuencia, un programa triple de planificación. Programa triple que trataría de afrontar, en nuestro caso, los tres procesos más significados (Pitarch) de la avanzada sustitución lingüística observable en el País Valenciano: la privación en el uso del valenciano (no sólo en las relaciones interpersonales directas sino también en su uso administrativo, educativo y en los *medios de información*), el progresivo envejecimiento de la población que lo usa y la creciente ruralización en cuanto al ámbito territorial (el conocimiento y el uso del valenciano es inversamente proporcional al número y la concentración de la población). La planificación triple a que aludimos cabe, en consecuencia, conceptualizarla como:

- *funcional*: Potenciar la lengua para que la misma pueda satisfacer las necesidades de comunicación de una sociedad moderna.
- *demográfica*: Incrementar el número de hablantes o usuarios de la misma y aumentar la competencia lingüística y comunicativa de los usuarios actuales.
- y *geográfica*: Expandir el dominio geográfico del uso de la lengua a todas las áreas de la Comunidad autónoma en cuestión.

Sin necesidad de ahondar estas reflexiones en terrenos ciertamente mejor abonados para especialistas, quede constancia no obstante de un dato tampoco menor: Fabra pudo acometer, en el caso del catalán, una cierta normativización que, tras el proceso de codificación iniciado a principios del XX -bajo el impulso “noucentista” y siendo la lengua ‘escrita’ la referencia dominante-, habría llevado a cabo según un modelo monocéntrico (a partir del “barceloní”) pero composicional (incorporando diversos elementos de la pluralidad dialectal a aquél circundante). Proceso de normativización que de algún modo llega hasta nosotros en los años 30 con aquiescencia generalizada sobre las *Normes de Castelló* que, para la casuística valenciana, incorporan desde 1932 lo avanzado por Fabra.

Quiere decirse con ello que, sin necesidad de considerar la dispersión social, cultural y política de territorios lingüísticamente afines (como el catalán, el balear y el valenciano), lo que podríamos llamar incluso su “falta de conciencia” lingüística común, junto a los consabidos prejuicios de todo tipo hacia los “unitaristas” de su normativización lingüística (no exenta de las inevitables concomitancias políticas y nacionalistas que de nuevo con la transición resurgirían entre defensores y detractores de una hipotética confluencia de Països Catalans), lo cierto es que -desde la perspectiva pragmática que aquí se antepone en materia lingüística- *la novedad, precisamente a partir de los años 30, de unos medios de comunicación (la radio, la TV) que serán decisivos para pasar de la etapa 2 a la 3 y la 4 -de normalización, según el modelo de Haugen- se centra en su ruptura con la lengua ‘escrita’ como referencia dominante*, agrandando de entrada las lagunas todavía sin cubrir de la etapa de “codificación” (pues la pluralidad dialectal, tanto en Cataluña como en Baleares y el País Valenciano, evidenciará su fortaleza y reactividad frente a todo intento “unitarista” a partir de la oralidad de la lengua en que se muestra: de ahí, sin ir más lejos, la polémica aún sin cerrar -ni tan siquiera allí- sobre “el català que es parla” en TV3, Sant Cugat y Catalunya Ràdio)<sup>(146)</sup>. No es extraño por ello que autores tan significados como Xavier Lamuela sitúen al catalán, todavía, “entre la codificació i la estandardització”<sup>(147)</sup>.

La apertura del “nuevo espacio” de desequilibrio funcional que a la postre representan los medios radio y TV (en catalán, en valenciano), evidencia por demás, como no podía ser de otro modo (de no abandonarse a la vieja tentación teórica como la única realidad existente, no importa en qué parcela), que el conflicto subyacente a toda situación de “lenguas en contacto” no se reduce a un conflicto estrictamente lingüístico: hay, en todo caso, algo más.

Expertos en sociolingüística como el catalán Francesc Vallverdú o los valencianos Lluís V. Aracil-Rafael LL. Ninyoles<sup>(148)</sup> ya señalaron en los años 60/70 -y es claro que la referencia histórica no es casual-, que el problema central del “cambio de lengua” se produce -casi siempre, pues hay situaciones de multilingüismo que no son conflictivas- obedeciendo a una casuística de conflicto lingüístico. Y cómo, tanto en casos de bilingüismo unilateral o bilateral, dicho conflicto puede convertirse “en símbolo fundamental de oposición política, dado que, “aunque no siempre, el fenómeno suele incidir en diferencias de clase y status”<sup>(149)</sup>. De ahí que, frente a los casos de bilingüismo *libre*, los condicionamientos sociales -por el status de los interlocutores y/o el contacto y/o el contexto (o el contenido del mensaje)- se conceptualizasen por Ninyoles, en los albores de la transición democrática, como bilingüismo diglósico: esto es, en el que entran en conflicto una lengua A (alta o dominante) y una lengua B (baja o dominada), sin reparar en una interpretación más próxima a la actual, de sustitución funcional. Aracil, introductor del concepto de “conflicto

lingüístico”, ya lo hacía ver en “El bilingüisme com a mite” (1966):

“el mite implica amb insistència que el català i el castellà *són* compatibles (d’una banda), mentre que (de l’altra), no ho són i mai no han d’estar al mateix nivell (...) La inferioritat absoluta i suposadament ‘intrínseca’ del català respecte al castellà és donada simplement per descomptat (...) En tot cas, són generalment els parlants nadius de la llengua ‘inferior’ els que són suposats i/o encoratjats a ésser bilingües. *Ningú* no insisteix pas en la reciprocitat” <sup>(150)</sup>.

Si, como señalase Vallverdú en 1973, era evidente entonces que -además de en Cataluña- en el País Valenciano y en las islas Baleares también se daban las presiones socio-culturales y económicas junto a las estrictamente políticas a favor del castellano, todavía hoy -y pese a la ley de Uso y Enseñanza del Valenciano- es claro que existen presiones políticas, económicas y/o socioculturales (es decir, no sólo lingüísticas) que reafirman la no resolución del conflicto lingüístico asentado... Pero la resolución es todavía posible, aun en términos cada vez más claramente de “ahora o nunca”: en gran medida, por lo que se haga o deje de hacer en materia de normalización lingüística desde los medios de comunicación audiovisuales.

La diversidad de *situaciones* sociolingüísticas de partida condicionarán, sin embargo, la eficacia de la política de comunicación que pueda establecerse al efecto. Pues, como subraya Lluís B. Polanco, “a diferència de Catalunya, on el mitjans de comunicació àudio-visuals havien de vetlar sobretot per no defraudar expectatives, al País Valencià han de crear-les” <sup>(151)</sup>, no bastando, por tanto, con aplaudir -al modo mecanicista- cuantas sugerencias arrancan de Gifreu, Parés, Moragas, Canals y tantos otros... para el caso catalán. De ahí la responsabilidad diferencial de RTVV, como proyecto inequívocamente público, en materia de normalización.

*Teóricamente*, y quizá por la progresiva interiorización de ese “ahora o nunca” que sobrevuela la situación valenciana, las diversas posiciones se han ido acercando con el tiempo hacia planteamientos pragmáticos centrados en la reivindicación de la eficacia como objetivo prioritario. En 1987, en las Jornadas sobre “La llengua al mitjans de comunicació” que organizase en Valencia el Instituto de Filología Valenciana, el propio Polanco -más allá de las cuestiones normativas pendientes y de las orientaciones en el uso más conocidas por los especialistas- señalaba “tota una sèrie d’altres qüestions pendents, estrictament lingüístiques i d’infraestructura” a no descuidar entre “el que queda per fer”:

“ a) La formació i la intervenció constant d’equips d’assessors lingüístics compentents, amb especialització i experiència en la comunicació periodística. Alhora, sembla molt convenient el funcionament d’una comissió de seguiment i control lingüístic per al conjunt de mitjans públics de massa...

b) La modelització, i l’especialització en diversos registres, de les possibilitats comunicatives de la llengua per a les variades necessitats dels mass media (manuales d’estil, girs corrents, recursos expressius, etc)... Potser no seria inconvenient un intercanvi d’experiències i l’adopció de criteris coincidents entre els mitjans de massa que actuen sobre el nostre domini lingüístic, cada vegada més de forma superposada (TV3, RTVV, TVE, etc) (Fité 1986; Vallverdú 1986).

c) Finalment (...), convindria considerar prioritària la immediata selecció i formació de professionals -redactors, guionistes, locutors i presentadors, pel que ací ens afecta- del mitjans de massa...'' (152).

Y el también sociolingüista Toni Mollà, auténtico cerebro gris de la tarea emprendida en la materia "desde dentro" de RTVV, era -si cabe- aun más explícito a la hora de fijar los límites teóricos que hacen al caso:

"Al nostre entendre, només una política lingüística basada en els valors instrumentals (en el sentido de Lambert) té alguna possibilitat d'èxit social en les nostres circumstàncies actuals. La descohesió de la comunitat lingüística catalana i la inexistència d'una consciència lingüística unitària són factors que impedeixen que cap varietat lingüística concreta funcione, ara per ara, com a símbol comunitari de caràcter global. D'altra banda, la declaració litúrgica segons la qual cal dominar una varietat lingüística per a esdevenir membre d'un grup social o perquè és l'*ànima* d'aquest grup, no té cap viabilitat fora del cercle dels *iniciats*. Tot plegat constitueix una proclama sentimental i compensatòria, allunyada de la pregonera realitat. Només uns valors practicistes poden crear la necessitat social d'aquella varietat lingüística: la construcció d'un model lingüístic col·lectiu.

Efectivament, només un model lingüístic que serveixa per a satisfer necessitats socials provocarà algun grau d'adhesió i de lleialtat. La pràctica lingüística és, en aquest sentit, el millor antídoto contra els prejudis, contra el rebuig a aquesta varietat'' (153).

Ahora bien, es preciso no olvidar que entre las condiciones necesarias -por más que no suficientes- para hacer efectivo dicho "modelo lingüístico", en términos socialmente satisfactorios, está la de un contexto político democrático y, en cuanto a medios de eficacia decisiva al mismo fin, la de su formalización adecuada (planificada) en los medios de difusión audiovisual hoy dominantes. Sólo a partir de ahí es que podremos hablar de la mayor o menor cercanía a los planteamientos de Polanco de cuanto se recoge por el Plan Trienal acordado en marzo por el Gobierno Valenciano para el periodo 1990-92 en materia de "Promoció de l'ús del valencià als mitjans de comunicació'' (154), y aun de la aceptación del reto de intentarlo desde TVV-Canal 9 por parte de Toni Mollà...

En tal sentido, y por más que sin duda se constata un más amplio uso de la lengua sustituyente (el castellano) en forma escrita frente a una mayor capacidad de recuperación de la lengua sustituida (el valenciano) por vía oral -en los usos sociolingüísticos del periodismo valenciano actual-, lo afirmado por Vallverdú hace quince años sobre el papel decisivo de los medios en el conflicto lingüístico -y la generación de tendencias contradictorias al respecto- sigue siendo de recibo:

"D'una banda, provoca tendències críiques que aguditzen el conflicte lingüístic com mai no s'havia produït en èpoques passades. D'altra banda, genera tendències conformistes que afavoreixen el bilingüisme diglòssic com a primera etapa per a l'assimilisme castellà de les cultures nacionals perifèriques (...).

Sembla evident que si triomfaren les tendències críiques les possibilitats futures d'un bilingüisme lliure resultaran precàries, perquè les tendències conformistes s'haurà perpetrat un lingüicidi (...) Com que si no prenem l'alternativa democrática como a única via possible, l'última eventualitat sembla la més probable'' (155).



La supuesta necesidad de un ‘pacto lingüístico’ como el propuesto en tal sentido por el CDS y/o AP (incluso por el tándem Mira-Mollà en ‘De impurae natione’’) hace unos años, parece reafirmar sin embargo, pese a lo adentrado de la *transición lingüística* por aquellas fechas, que la cuestión no ha de entenderse cerrada ni en la teoría ni en la práctica (y menos por unanimidad), al cuestionarse por vía indirecta la ‘tercera vía’ (frente a nacionalistas de izquierda y regionalistas de derecha, catalanistas vs. blaveros) que, preanunciada en cierto modo por Aracil, ha sido finalmente la de hecho desplegada por el PSPV-PSOE.

Y por más que, teóricamente, pocos cuestionan el carácter ‘sine qua non’ de una política de comunicación ‘coherente al respecto’ para poder hablar en la actualidad de política cultural y, por tanto, de política lingüística, no es menos cierto que su traducción en la práctica difícilmente escapa a los condicionantes (económicos, culturales y sociales en general) que ha de contemplar toda acción política, persiga el objetivo que persiga... Y se insiste en tal perspectiva, debe quedar claro, por aquello de pensar el problema ‘desde RTVV’ (como instancia pública de avance, pero, por pública, por definición potencialmente conflictiva).

Pues bien. Quizá baste, para ejemplificar el problema, con recordar el debate suscitado tras el primer trienio de aplicación de la ‘Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano’. En el periodo 1984-87 la Consellería de Cultura habría invertido recursos públicos -en aplicación de dicha ley- por importe superior a los 7.450 millones de pesetas. La valoración de la derecha *regionalista*, de una parte, es conocida: si María Consuelo Reyna editorializaba en Las Provincias que ‘se trata de una cuestión de prioridades’ y concluía que ‘lo menos que se puede decir de esos siete mil millones es que es un despilfarro’, el periodista Jesús L. Carrascosa opinaba por su parte, desde el mismo diario, que ‘la broma consiste en que una buena parte de los profesores valencianos están utilizando sus clases para hacer proselitismo de ese nacionalismo que nunca pasa de 60.000 votantes en toda la Comunidad Valenciana (...) Algunas escuelas valencianas se están convirtiendo en escuelas de votantes de Unitat del Poble Valencià’<sup>(156)</sup>. Pero de otra parte, y no menos llamativa -con independencia de un contexto político inmediato marcado entonces por el XXXI Congreso del PSOE-, topáramos con la postura de Císcar sobre la inversión pública en RTVV (según él, a reconducir ‘a la baja’) al hilo de las inundaciones del mes de noviembre anterior. El dato más ‘concluyente’ -a mi modo de ver- estaba recogido, finalmente, por la propia prensa. No siendo otro que el del gasto para la normalización lingüística *vía sistema escolar*: ‘entre EGB y Medias la Consellería (de Cultura) gastó más de 6.217 millones de pesetas sólo en profesores’ de valenciano... Ni que decir tiene que en absoluto se está aquí a favor del desempleo entre tal profesorado, pero el dato es revelador del coste-oportunidad, para un mismo objetivo, entre enseñanza y RTVV. (Tampoco estoy diciendo que hayan de ser excluyentes entre sí, por motivos obvios: pero comparto con Toni Mollà su precaución frente a las ‘mistificacions del poder institucional’, en el sentido de que ‘l’existència d’una comunitat lingüística depén més aviat de la voluntat social, que no dels programes benèfic-assistencials dels organismes de caràcter públic’<sup>(157)</sup>).

Ir por partes, en esto como en casi todo, puede no estar de más. Confrontar la visión teórica con la complejidad inherente a la práctica social es un camino adecuado para comprender, en definitiva, que la problemática lingüística ligada a RTVV -parafraseando al propio Mollà- no es como la pescadilla que se muerde la cola sino un problema de prioridades. En definitiva: que remite a una solución necesariamente política (pero también, por lo mismo, económica, social, cultural).

Domènec Font entre otros, por lo que hace a la lengua catalana, ha señalado en varias ocasiones, ya en plena democracia, las contradicciones diversas -del diario “Avui” a TV3, pasando por las experiencias de prensa comarcal e incluso de los centros populares de animación/diversión colectiva en los albores de la transición, tan fundamentales para comprender la diversa “integración” de los inmigrantes en Cataluña respecto del caso valenciano- de la “recuperación lingüística” a través de unos medios ligados, en primer término, “al uso capitalista de la producción cultural y obedientes a la hegemonía burguesa” patente en dicho ámbito. Históricamente no en vano, los medios de comunicación en catalán han pasado -desde 1939 hasta la fecha- por un proceso conocido, sintetizado en su día por Joan-Anton Benach en las siguientes fases:

- “ 1. La prohibición, aplicación inmediata y frontal de la dialéctica del vencedor.
2. Uso controlado y menor en una dirección folklorista, fundamental para fomentar un proceso diglósico.
3. Uso culturalista orientado a la nostalgia o a quitar argumentos a algunas minorías... culturalistas.
4. Tolerancia paternalista del idioma.
5. Uso administrado escrupulosamente para satisfacer el derecho de la “minoría” (sic).
6. Estímulo y promoción de unos medios autóctonos.
7. Normalización “ (158).

El proyecto de RTVV en nuestro caso, debiera suponer el salto cualitativo necesario para pasar -claramente- de la fase 6 a la 7 (o de “normalización”, si bien no en el sentido hasta ahora utilizado sino en el de “uso generalizado” entre los emisores, profesionales o no, desde dichos medios). No obstante, queda claro desde un principio -de acuerdo con Domènec Font, y con la mente puesta en el caso concreto de TV3-, que “los fenómenos culturales no pueden considerarse como dominios aislados y etéreos, no pueden ser separados del funcionamiento social y político y de su inscripción ideológica”.

Por ello, y una vez consensuada la estrategia para dar por cerrada en el caso valenciano la batalla por la *denominación*, la oportunidad -democrática- de situarnos en la fase 7, la oportunidad de afrontar el reto, como antesala de la normalización lingüística como tal, es indudable y real desde el momento -a su vez preciso, éste y no otro- que la existencia de TVV y RAV es ya un hecho desde octubre de 1989. Pues no en vano dichos medios de comunicación valencianos están llamados a ocupar un papel de liderazgo (entre otras razones por las lingüísticas) en el ámbito territorial más inmediato.

El problema, se insiste, sigue y seguirá siendo de estrategia (política y no sólo cultural). Pues de igual manera que el equipo Lapiedra en la Universidad de Valencia -pero no sólo él- ha topado con las “presiones políticas y/o socioculturales” de que hablaban los sociolingüistas (recuérdese al respecto la polémica de opinión sostenida en “El País” en pleno verano del 87 por siete rectores de Universidad de CCAA bilingües, defendiendo la “cooficialidad sin restricciones” frente a representantes de varias casas regionales de Barcelona que postulaban la existencia de “aulas paralelas” a fin de mantener “nuestra realidad histórica y constitucional”, ante el fallo del Tribunal Supremo que confirmó la sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia sobre el uso del valenciano en la enseñanza universitaria), tampoco el secretismo -obligado en tanto que “estrategia” democrática-

de la presencia valenciana en el Congreso Internacional de la Llengua Catalana, o similares, parecen avalar la resistencia activa en tanto que única salida (minoritaria). E importa resaltarlo, porque -de ahí el salto cualitativo y diferencial de la iniciativa de ACPV pro-repetidores de TV3 en territorio valenciano- el uso de la lengua es asunto social antes que objeto de discusión (y reclamar la tribuna científica como apta en exclusiva para juzgar del tema es tanto como obviar la lógica no-neutralidad ideológica, inevitable, al respecto).

La cuestión, por tanto, sería cómo dejar de apuntalar la autocomplacencia inherente al testimonio “minorista”, y dar el giro preciso para adoptar acciones con calado mayoritario (política y socialmente hablando) en el uso efectivo de la lengua. Sería un problema, así, de “eficacia sociolingüística”: y en consecuencia de eficacia política, pero -y esto se olvida con preocupante frecuencia, salvo que los “condicionamientos” de fondo los sigamos limitando de modo reduccionista a mera problemática de “identidad cultural”- también de eficacia económica: el caso del segundo canal de EukalTelebista (en castellano), sin ir más lejos, lo atestigua.

El alicantino Vidal-Beneyto, en ese sentido, recordaba no hace tanto que el proceso de industrialización de las lenguas está ya en marcha y parece irreversible, pese a los límites claros de la informatización lingüística. Así, por ejemplo, “el mercado mundial de la traducción se acerca a los 200 millones de páginas anuales, (lo que) equivale a un volumen de negocios superior a los 150.000 millones de ptas/año y produce más de 180.000 puestos de trabajo” (sólo la Comisión de la CEE cuenta con 1.200 traductores permanentes). El problema, ligado a la “inevitable interacción entre lenguas naturales, por un lado, y electrónica y teletransmisión, por otro”, deja ver la creciente presencia de las multinacionales telemáticas -comercializando diversos sistemas de traducción asistida por ordenador- junto a la atonía generalizada de la voluntad política en materia lingüística: atonía apenas compensada, últimamente, vía programas eurocomunitarios como el BABEL.

Que las lenguas puedan devenir “materia prima de capital importancia” no sólo cuestiona la *identidad cultural* como algo que pertenezca al “terreno sagrado o celestial” al que nos suelen remitir las reivindicaciones simbólicas de catalanistas o blaveros, sino que complica la respuesta al interrogante básico de *para qué* queremos nuestra lengua. Vidal-Beneyto afirmaba, el respecto, que la defensa del patrimonio lingüístico “es también un imperativo metaeconómico. O, si se prefiere, un lujo cultural necesario” <sup>(159)</sup>. O por decirlo al modo coloquial de Toni Mollà: “tot comerciant intel·ligent parla la llengua del seu client” (incluso más solemne: “Cal demostrar que el valencià serveix per a alguna cosa més que per a parlar del valencià”) <sup>(160)</sup>. El problema de la normalización, de la extensión (demográfica, geográfica, funcional) de la lengua -una vez atrás la batalla por su denominación-, no debiera en consecuencia limitarse a un renovado antagonismo sobre el papel central que las “normas” habrán de desempeñar: creo que no cabe apoyar -no hay más tiempo que perder- la polarización hipotética de una izquierda valenciana, incluso con el apoyo del CDS, a favor de las normas del 32, frente a las normas de la Academia de Cultura Valenciana con el respaldo de AP y UV... Como señalara Ferrán Belda, en esto sí que parece lo razonable un “pacto”, pero no por la normalización lingüística *en sí* sino “por la paz lingüística”: un pacto en torno a la lengua que simplemente exigiría “que no haya un solo grupo político dispuesto a servirse de ella con fines partidistas” <sup>(161)</sup>.

La propia política de comunicación (clave hoy de la cultural, vale insistir) conlleva sus propias servidumbres -lógica de comercialización, por ejemplo, desde el momento que se opta por abrir el proyecto TVV a la producción privada-, que han de contemplarse adicionalmente con carácter específico si es que se pretende no descuidar el añejo axioma -tan marxiano como de mero sentido común, aun para los amantes del “jacobinismo ilustrado”- de que importa conocer la realidad antes de intentar transformarla (y de eso se trata en este terreno, o eso creo).

Lluís Polanco (ob. cit.), a la hora de aproximarse a dicha “realidad” con similar criterio de perseguir ante todo la “eficacia” (sociolingüística), recordaba que los principales datos del contexto (sociolingüístico) valenciano que habrían de tenerse en cuenta en la definición de propuestas viables serían:

- a) el conocimiento y *el uso* actuales de la lengua.
- b) las actitudes sociales hacia la lengua y sus variantes.
- c) la dinámica actual y futura de ambos factores.

La extensión actual y el conocimiento cualitativo de la lengua por los habitantes del País Valenciano, si bien no tanto su uso efectivo, está “definida” de entrada merced a la auto-clasificación formulada por los propios valencianos en el “*Padró d’habitants 1986*”. Según la explotación estadística de sus datos realizada por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE) y aun -en base a los mismos datos y para lo que aquí interesa- por el instituto EMER para el Gabinet d’Us del Valencià de la conselleria de Cultura <sup>(162)</sup>, puede afirmarse (con las precauciones típicas que entraña toda auto-clasificación) que el 77,1% de los residentes de 3 y más años entienden el valenciano, y que el 49,5% lo habla. Es decir, de cada cuatro residentes uno ni lo habla ni lo entiende, pero de los otros tres dos lo entienden hasta el punto de hablarlo y el tercero lo entiende aun cuando no lo hable. O en otras palabras, casi ocho de cada diez residentes en territorio valenciano lo entienden en todo caso. Datos muy significativos a la hora de apostar por un medio audiovisual en valenciano (repárese en que la recuperación posible es mayor en todo caso por vía oral y que el medio TV más tiene que ver con el oído que no con la verbalidad estricta o escrita).

Con arreglo a esos datos del “Padró 86”, que se recogen aquí en Cuadros anexos, el análisis multivariable o cruce combinado de las variables básicas en demografía con las variables que dan cuenta de las diferencias sobre conocimiento de la lengua (entender/leer/hablar/escribir, o no), proporciona un conocimiento de la complejidad implicada superior a anteriores acercamientos al problema, incluido el sondeo dirigido en 1980-81 por J.F. Mira <sup>(163)</sup>, hasta hace poco la principal referencia al respecto incluso para el Consejo Asesor de RTVE en nuestra Comunidad -según se desprende del artículo de Manuel Alcaraz compilado en “La informació a la Comunitat Valenciana”.

Entre las conclusiones de dicho sondeo, se podía deducir que el 60,4% de la población catalanófono -54,8% del País- hablaría o sabría hablar el valenciano, según la siguiente distribución:

- a) Geográficamente:
  - 25-43%: Alicante, Elche, Valencia, por este orden.
  - 68-75%: Alcoy, Castellón y núcleos urbanos y semiurbanos con inmigración.
  - Más del 80%: núcleos urbanos, semiurbanos y rurales sin apenas inmigración.

b) Por grupos socio-profesionales:

- Predominio del valenciano: agricultores y obreros (no inmigrantes)
- Equilibrio castellano/valenciano: industriales y comerciantes.
- Predominio del castellano: empleados y profesionales liberales.

c) Por edades:

De 8 a 15 años: 52,4% de valenciano-hablantes.

De más de 55-60 años: 66,1% de valenciano-hablantes

Precisamente Alcaraz formaliza -en ese artículo- un repaso exhaustivo de la cobertura legal sobre la cooficialidad del castellano y del valenciano que hace al caso: desde los arts. 3 y 148.1.7 de la Constitución, el preámbulo del Estatuto de RTVE o el art. 5 de la Ley de Terceros Canales, hasta el mandato estatutario (arts. 7, 37.1 y Disposición Transitoria 6ª), la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (arts. 25 y 26) y el propio art. 2 de la ley 7/1984 de creación de RTVV. Y aun cuando dicha cobertura legal podría ensancharse hasta la resolución del Parlamento Europeo de octubre-87 en favor de la promoción en la enseñanza y los medios de comunicación de las “lenguas minoritarias” o minorizadas (cerca de un centenar en la CE: siendo reconocido el catalán, por ejemplo, en marzo del 88, y aceptada su oficialidad europea en 1990), lo importante, con la realidad por delante, es el avance progresivo del proceso de sustitución lingüística que -más allá del marco jurídico y político- se sigue constatando entre nosotros. Sobre cuál sea la manera más efectiva de hacer frente a dicho proceso, el mismo Alcaraz sostiene dos conclusiones sobre “hipótesis paralelas”:

- si una possible TVV suposàs un reforçament en temps d'emissions, programació i elecció d'horaris de la TV pública en castellà, es reforçaria, de fet, una homogeneïtzació lingüística i diglòssica;
- i, a l'enrevés, una potenciació en temps d'emissions i elecció de programació i horaris del valencià, comportaria una sèrie de fenòmens en cadena que, somerament, podríem descobrir així: complement eficaçíssim dels programes educatius, homogeneïtzació -tret de les peculiaritats- del conjunt de les comarques del País Valencià, depuració del valencià usat i millora de la qualitat” (164).

Un planteamiento de cara o cruz, por tanto, que sigue apoyándose en una lógica -más allá de su anclaje teórico en lo diglósico- tan aplastante como cuestionable: porque *Canal 9 (en valenciano y/o castellano) no será medio para la normalización lingüística si no es, antes que nada, televisión.*

Con ello no quiere indicarse tan sólo el axioma archisabido inherente a las *rutinas profesionales* de quienes alguna vez han hecho televisión (en TV el texto es el contexto, esto es, la imagen manda sobre la palabra). Como tampoco recordarse, aun por vía indirecta, la complejidad de las plurales *actitudes* respecto del valenciano (la segunda gran variable a considerar según Polanco) de que ya diese cuenta -para un caso como el de Sagunto, tan paradigmático por tantos motivos- la encuesta realizada en 1983 por J.R. Gómez Molina. Encuesta que revelaba, entre otras conclusiones:

- la actitud mayoritariamente favorable a la integración lingüística por parte de los trabajadores inmigrantes.

## COMUNITAT VALENCIANA

## Població de 3 i més anys segons el coneixement del valencià i l'edat

## CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

GRUPS D'EDAT	TOTAL	NO L'EN TÈN	ENTÈN NO PARLA	ENTÈN LLEG. N/PARL	EL SAP PARLAR	SAP PARLAR LLEGIR	PARLAR LLEGIR ESCRIU
<b>TOTAL</b>	<b>3598528</b>	<b>823451</b>	<b>868443</b>	<b>125893</b>	<b>1030009</b>	<b>497785</b>	<b>252947</b>
De 3 a 4 anys	102219	55174	18960	0	28085	0	0
De 5 a 9 anys	310726	113364	74240	8764	72996	19248	22114
De 10 a 14 anys	323047	76283	82223	20879	51285	32202	60175
De 15 a 19 anys	314190	63743	81521	20718	58203	38946	51059
De 20 a 24 anys	303358	60759	83370	15161	68352	49839	25877
De 25 a 29 anys	280233	52689	77983	13212	65520	49952	20877
De 30 a 34 anys	246064	45232	69131	10587	61003	44827	15284
De 35 a 39 anys	237332	43330	65703	8954	64130	42906	12309
De 40 a 44 anys	215091	40061	56372	6490	64289	38490	9389
De 45 a 49 anys	201881	38834	49684	4674	66936	34448	7305
De 50 a 54 anys	215026	42287	49762	4276	76195	35786	8720
De 55 a 59 anys	210505	43764	45608	3619	78290	33073	6153
De 60 a 64 anys	192867	41951	39286	3062	74336	28733	5499
De 65 a 69 anys	145866	33695	28475	2145	58446	19272	3833
De 70 a 74 anys	122298	28870	21308	1612	53328	14241	2939
De 75 a 79 anys	93080	22039	13874	978	45150	9109	1930
De 80 a 84 anys	55089	13430	7321	502	28283	4538	1015
De 85 i més anys	29656	7946	3624	260	15182	2175	469
<b>HOMES</b>	<b>1761415</b>	<b>392741</b>	<b>416505</b>	<b>60879</b>	<b>496869</b>	<b>262502</b>	<b>131919</b>
<b>DONES</b>	<b>1837113</b>	<b>430710</b>	<b>451938</b>	<b>65014</b>	<b>533140</b>	<b>235283</b>	<b>121028</b>

## Població de 10 i més anys segons el coneixement del valencià i títol acadèmic

## CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

ESTUDIS REALITZATS	TOTAL	NO L'EN TÈN	ENTÈN NO PARLA	ENTÈN LLEG. N/PARL	EL SAP PARLAR	SAP PARLAR LLEGIR	PARLAR LLEGIR ESCRIU
<b>TOTAL</b>	<b>3185583</b>	<b>654913</b>	<b>775243</b>	<b>117129</b>	<b>928928</b>	<b>478537</b>	<b>230833</b>
Analfabets	125463	49454	27339	0	48670	0	0
Sense títol	1224376	294614	293083	29892	410367	124727	71693
Ensenyaments bàsics	1393664	242454	346988	47538	412102	257709	86873
Ensenyaments mitjans	300434	48121	78447	26013	42799	64659	40395
Enseny. superior (E. U.)	74318	10332	15089	6497	8079	15694	18627
Enseny. superior (Fac.)	64661	9351	13743	7018	6573	15067	12909
No classificables	2667	587	554	171	338	681	336

## Població de 16 i més anys segons el coneixement del valencià i relació amb l'activitat econòmica

## CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT	TOTAL	NO L'EN TÈN	ENTÈN NO PARLA	ENTÈN LLEG. N/PARL	EL SAP PARLAR	SAP PARLAR LLEGIR	PARLAR LLEGIR ESCRIU
<b>TOTAL</b>	<b>2799794</b>	<b>565925</b>	<b>677377</b>	<b>91549</b>	<b>867599</b>	<b>439714</b>	<b>157630</b>
<b>ECONÒMICAMENT ACTIVA</b>	<b>1348899</b>	<b>242775</b>	<b>342327</b>	<b>51061</b>	<b>379522</b>	<b>246270</b>	<b>86944</b>
Ocupats	1071700	184613	258501	38074	316386	204706	69420
Aturats	277199	58162	83826	12987	63136	41564	17524
Busquen 1a. ocupació	87730	19741	25842	5946	15327	12620	8254
Han treballat abans	189469	38421	57984	7041	47809	28944	9270
<b>ECONÒMICAMENT INACTIVA</b>	<b>1428562</b>	<b>318642</b>	<b>328730</b>	<b>39519</b>	<b>482893</b>	<b>189960</b>	<b>68818</b>
Retirats, jubilats	468565	110819	81929	5767	205746	53391	10913
Rendistes	3412	941	678	121	884	626	162
Escolars, estudiants	173706	27171	42708	16565	23346	24943	38973
Feines de la llar	727309	164752	190322	15212	236469	104033	16521
Incapacitats permanents	27634	8172	5769	402	9507	3154	630
D'altres inactius	27936	6787	7324	1452	6941	3813	1619
<b>COMPTATS A BANDA</b>	<b>22333</b>	<b>4508</b>	<b>6320</b>	<b>969</b>	<b>5184</b>	<b>3484</b>	<b>1868</b>

Fuente: "Padr  Municipal d'Habitants/1986". Tomo XIV, "Coneixement del valenci ". Generalitat Valenciana, Conselleria d'Economia i Hisenda, 1987.

## COMUNITAT VALENCIANA

Població de 3 i més anys segons el coneixement del valencià  
i lloc de naixement per comarques

## CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

LLOC DE NAIXEMENT	TOTAL	NO L'EN TÉN	ENTÉN NO PARLA	ENTÉN LLEG. N/PARL	EL SAP PARLAR	SAP PARLAR LLEGIR	PARLAR LLEGIR ESCRIU
<b>TOTAL</b>	<b>3598528</b>	<b>823451</b>	<b>868443</b>	<b>125893</b>	<b>1030009</b>	<b>497785</b>	<b>252947</b>
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>2674797</b>	<b>492880</b>	<b>479420</b>	<b>89037</b>	<b>928949</b>	<b>453217</b>	<b>231294</b>
ALACANT	841089	286777	152776	12277	262201	80846	46212
El Comtat	25764	355	630	70	14568	6455	3686
L'Alcoia	79596	3010	9429	1101	40446	16905	8705
Alt Vinalopó	36098	20977	6424	467	5267	2078	885
Vinalopó Mitjà	84617	33380	14945	884	25581	7561	2266
La Marina Alta	69277	1177	1883	265	39088	17741	9123
La Marina Baixa	41235	2027	3274	321	23746	6867	5000
L'Alacantí	234400	78395	89037	6854	54103	14980	11031
Baix Vinalopó	108079	16469	25658	1312	52711	7025	4904
Baix Segura	162023	130987	21496	1003	6691	1234	612
CASTELLÓ	332801	23355	47611	7440	154893	66587	32915
Els Ports	8640	204	189	68	5548	1889	742
L'Alt Maestrat	12126	74	229	49	8881	2321	572
El Baix Maestrat	39208	557	1134	481	24058	8398	4580
L'Alcatén	16312	133	555	66	11330	3197	1031
La Plana Alta	130947	9296	20166	4251	53990	27121	16123
La Plana Baixa	85573	1071	6408	1049	46552	21501	8992
Alto Palancia	29390	9627	13564	1233	2683	1548	735
Alto Mijares	10605	2393	5366	243	1851	612	140
VALENCIA	1500907	182748	279033	69320	511855	305784	152167
Rincón de Ademuz	4943	2997	1303	162	289	151	41
Los Serranos	27485	9351	12173	1189	2902	1500	370
El Camp de Túria	48658	1096	2454	392	28548	11938	4230
El Camp de Morvedre	45260	4476	12115	2002	15015	8093	3559
L'Horta Nord	79795	2484	8991	1756	34121	23276	9167
L'Horta Oest	79212	7912	18831	3736	24892	16509	7332
València	595516	97852	163759	52041	109912	118214	53738
L'Horta Sud	59684	1230	4508	670	29283	15358	8635
La Plana Utiel-Requena	46348	28398	11871	1443	2663	1435	538
La Hoya de Buñol	24168	7854	11681	954	2225	1096	358
El Valle de Ayora	15679	8057	4869	524	1363	680	186
La Ribera Alta	160062	3716	6170	1354	83003	41005	24814
La Ribera Baixa	57700	616	1210	229	35697	12948	7000
La Canal de Navarres	18220	3293	9880	1144	2660	951	292
La Costera	58450	1117	2453	702	32484	14615	7079
La Vall d'Albaida	69576	734	1705	301	41403	15888	9545
La Safor	110151	1565	5060	721	65395	22127	15283
DE FORA DE LA C. V.	923731	330571	389023	36856	101060	44568	21653

Població de 3 i més anys segons el coneixement del valencià  
i lloc de naixement per províncies

## CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

LLOC DE NAIXEMENT	TOTAL	NO L'EN TÉN	ENTÉN NO PARLA	ENTÉN LLEG. N/PARL	EL SAP PARLAR	SAP PARLAR LLEGIR	PARLAR LLEGIR ESCRIU
<b>TOTAL</b>	<b>3598528</b>	<b>823451</b>	<b>868443</b>	<b>125893</b>	<b>1030009</b>	<b>497785</b>	<b>252947</b>
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>2674797</b>	<b>492880</b>	<b>479420</b>	<b>89037</b>	<b>928949</b>	<b>453217</b>	<b>231294</b>
ALACANT	841089	286777	152776	12277	262201	80846	46212
CASTELLÓ	332801	23355	47611	7440	154893	66587	32915
VALENCIA	1500907	182748	279033	69320	511855	305784	152167
<b>UNA ALTRA COMUNITAT</b>	<b>836335</b>	<b>289115</b>	<b>389638</b>	<b>33446</b>	<b>88716</b>	<b>38406</b>	<b>17016</b>
ANDALUSIA	221517	79440	105876	6480	20324	7005	2592
ARAGÓ	50369	11901	24049	3033	6862	3326	1198
ASTÚRIES	6772	2947	2521	364	500	296	144
BALEARS	5222	1190	1768	366	890	626	382
CANÀRIES	2956	1133	1046	216	266	173	122
CANTÀBRIA	3214	1267	1305	196	241	134	71
CASTELLA/LA MANXA	281342	97274	134200	10014	27353	9513	2988
CASTELLA/LLEÓ	40013	15867	16192	2474	3005	1600	875
CATALUNYA	41857	5668	9356	2055	11339	8309	5130
EXTREMADURA	33813	13232	15302	1220	2629	1027	403
GALÍCIA	11497	4288	4640	669	1054	567	279
MADRID	40005	14936	14888	2902	3687	2275	1317
MÚRCIA	72642	30024	29015	1816	9569	2370	848
NAVARRA	3487	1247	1377	290	278	188	107
LA RIOJA	2420	962	959	150	189	103	57
PAÍS BASC	10494	4529	3702	714	757	465	327
CEUTA	2514	947	1077	141	189	116	44
MELILLA	4757	1692	2026	293	402	254	90
ALTRES TERRITORIS	1444	571	537	53	182	59	42
<b>ESTRANGER</b>	<b>87396</b>	<b>41456</b>	<b>19387</b>	<b>3410</b>	<b>12344</b>	<b>6162</b>	<b>4637</b>

## COMUNITAT VALENCIANA

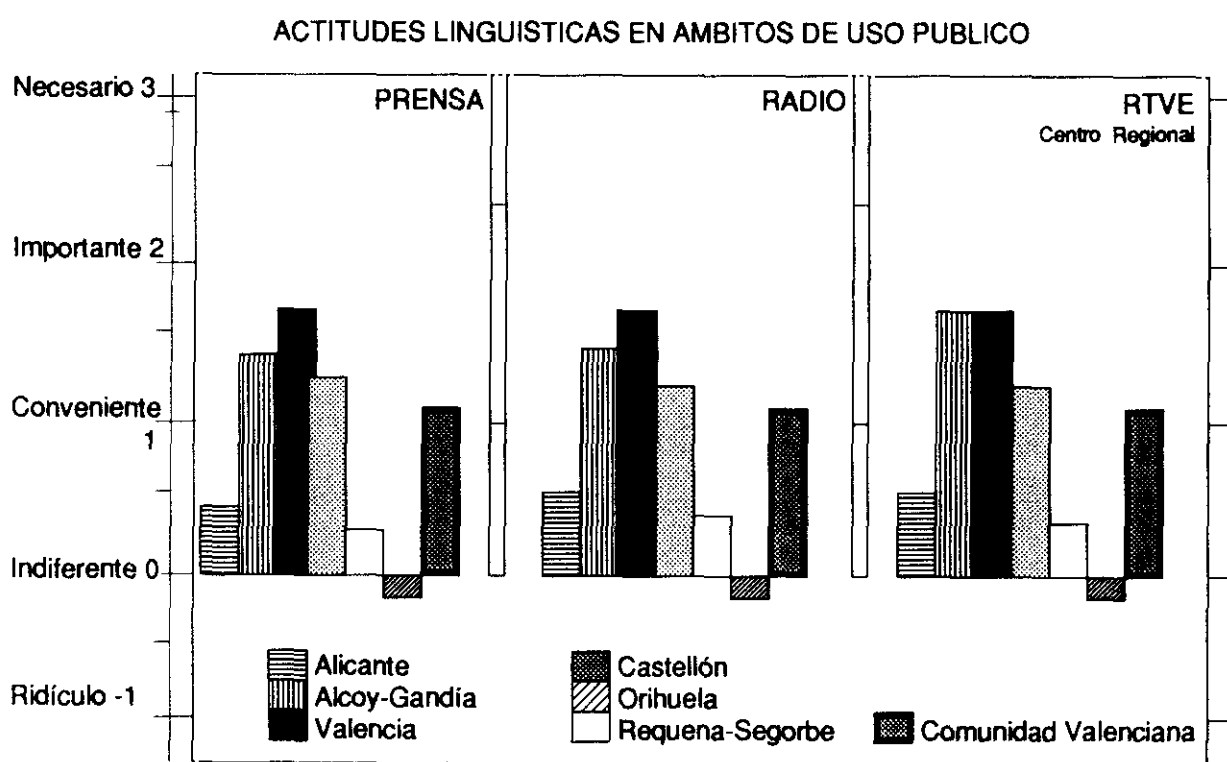
**Població que no ha residit sempre al mateix municipi de 3 i més anys  
segons l'any d'arribada i coneixement del valencià**

## CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

ANY D'ARRIBADA	TOTAL	NO L'EN TÈN	ENTÈN NO PARLA	ENTÈN LLEG. N/PARL	EL SAP PARLAR	SAP PARLAR LLEGIR	PARLAR LLEGIR ESCRIU
<b>TOTAL</b>	<b>1375439</b>	<b>371643</b>	<b>476726</b>	<b>51691</b>	<b>272773</b>	<b>146474</b>	<b>56132</b>
<b>HOMES</b>	<b>647207</b>	<b>164252</b>	<b>222797</b>	<b>25737</b>	<b>128112</b>	<b>76051</b>	<b>30258</b>
Abans de 1951	78220	8672	19061	2314	29866	15083	3424
De 1951 a 1960	80759	13754	30783	2692	20649	10310	2571
De 1961 a 1970	179490	44809	75352	6587	30284	16831	5627
De 1971 a 1980	198558	57121	68748	9363	30728	21245	11353
De 1981 a 1986	110180	39896	28853	4781	16785	12582	7283
<b>DONES</b>	<b>728232</b>	<b>207391</b>	<b>253929</b>	<b>25954</b>	<b>144661</b>	<b>70423</b>	<b>25874</b>
Abans de 1951	111539	15308	33867	2681	43531	13977	2175
De 1951 a 1960	90313	19339	36230	2579	21362	9063	1740
De 1961 a 1970	191942	56736	79639	6257	29595	15079	4636
De 1971 a 1980	214940	69242	72840	9615	32200	20379	10664
De 1981 a 1986	119498	46766	31353	4822	17973	11925	6659
<b>PROCEDENTS C. VALENCIANA</b>	<b>606735</b>	<b>90795</b>	<b>161371</b>	<b>20551</b>	<b>190511</b>	<b>105659</b>	<b>37848</b>
<b>HOMES</b>	<b>282194</b>	<b>39593</b>	<b>72959</b>	<b>9833</b>	<b>85560</b>	<b>53533</b>	<b>20716</b>
Abans de 1951	40980	2965	4989	671	19931	9973	2451
De 1951 a 1960	34403	3237	7740	833	13412	7311	1870
De 1961 a 1970	61670	8469	18530	1956	18009	11009	3697
De 1971 a 1980	85338	13132	25210	3700	20890	15136	7270
De 1981 a 1986	59803	11790	16490	2673	13318	10104	5428
<b>DONES</b>	<b>324541</b>	<b>51202</b>	<b>88412</b>	<b>10718</b>	<b>104951</b>	<b>52126</b>	<b>17132</b>
Abans de 1951	59131	4937	9997	934	31680	10025	1558
De 1951 a 1960	39363	4573	10085	884	15721	6850	1250
De 1961 a 1970	67911	10818	21221	2057	20320	10607	2888
De 1971 a 1980	93504	16545	28553	3981	22892	15016	6517
De 1981 a 1986	64632	14329	18556	2862	14338	9628	4919
<b>PROCED. DE FORA C. V.</b>	<b>768704</b>	<b>280848</b>	<b>315355</b>	<b>31140</b>	<b>82262</b>	<b>40815</b>	<b>18284</b>
<b>HOMES</b>	<b>365013</b>	<b>124659</b>	<b>149838</b>	<b>15904</b>	<b>42552</b>	<b>22518</b>	<b>9542</b>
Abans de 1951	37240	5707	14072	1643	9735	5110	973
De 1951 a 1960	46356	10517	23043	1859	7237	2999	701
De 1961 a 1970	117820	36340	56822	4631	12275	5822	1930
De 1971 a 1980	113220	43989	43538	5663	9838	6109	4083
De 1981 a 1986	50377	28106	12363	2108	3467	2478	1855
<b>DONES</b>	<b>403691</b>	<b>156189</b>	<b>165517</b>	<b>15236</b>	<b>39710</b>	<b>18297</b>	<b>8742</b>
Abans de 1951	52408	10371	23870	1747	11851	3952	617
De 1951 a 1960	50950	14766	26145	1695	5641	2213	490
De 1961 a 1970	124031	45918	58418	4200	9275	4472	1748
De 1971 a 1980	121436	52697	44287	5634	9308	5363	4147
De 1981 a 1986	54866	32437	12797	1960	3635	2297	1740



- el castellano como lengua que habría llegado a ser predominante en las relaciones comerciales.
- la tolerancia lingüística mútua, si bien con una sensibilidad mayor por parte de los valenciano-hablantes que no al revés.
- la aceptación, como conveniente, del uso del valenciano en la administración y los medios de comunicación.
- la convicción mayoritaria de que todo valenciano debería saber hablar valenciano.
- Un mejor conocimiento de la lengua entre los que poseen estudios e ingresos más altos <sup>(165)</sup>.



Antes que de eso, y sin menoscabo en ningún caso de la vocación normalizadora que debe asumir la TV autonómica como algo incuestionable, lo que se pretende subrayar desde aquí es que antes importa -aquí y ahora- garantizar como condición previa la pervivencia de Canal 9 como tal televisión (como tal proyecto empresarial). Pues dado que todavía no está consolidada, la estrategia consustancial a su despegue e implantación como tal medio no cabe darla por hecha, sino afrontarla en su amplitud de condicionantes. Semejante condición *previa* parece insoslayable en buena lógica y lo sorprendente es que se olvide, desde reduccionismos lingüísticos o de cualquier otro signo, tan a menudo. Que en esto, como en otras cosas, la TVV habrá de pagar factura en la práctica por todo aquello que desmiente la teoría del "retraso como ventaja".

Personalmente, por tanto, recordaría las tendencias contradictorias que tanto la postura conformista como la crítica -en terminología de Vallverdú- pueden ocasionar. Si la primera haría dejación de la posibilidad histórica que la RTVV supone para avanzar con tolerancia hacia la normalización efectiva, lo que sería incongruente con el carácter público del proyecto, la segunda postura (en función de los riesgos inherentes a toda “homogeneització” y “depuració” jacobinas, y cualquier TV potencialmente “bilingüe” lo comparte) podría más retrasar que no consolidar la consecución -efectiva, se insiste- de la normalización lingüística que como objetivo se comparte, al situar al proyecto en una peligrosa frontera en tanto que condicionado en su gestión (empresarial) por un contexto de competencia “televisiva” antes que “lingüística”. Es decir, más allá de insistir en términos políticos (a la hora de hacer realidad la cooficialidad que pregonan las leyes), es preciso no olvidar la prioridad estratégica de solventar las contradicciones -propias del mero “hacer TV”- que pudieran hipotecar el proyecto TVV como tal.

Entre tales contradicciones, quede claro, no tanto las derivadas de la financiación mixta (en gran medida publicitaria, por tanto) prevista de antemano: al fin y al cabo los informes de la agencia J.W. Thompson confirman desde la segunda mitad de los 80 el crecimiento del volumen de publicidad vía contratación “regionalizada”. También para el caso de las TV autonómicas no-castellanohablantes, y no sólo para los centros regionales de TVE. De modo que la lengua no es un obstáculo, salvados ciertos mínimos (caso quizá de ETB) cuando, ante la creciente segmentación de mercados y diversificación de productos, la “lógica publicitaria” es capaz de responder y pasar del “broadcasting” (audiencias masivas e indiscriminadas) al “narrowcasting” (audiencias minoritarias y diferenciadas). Que ciertas pequeñas y sobre todo medianas empresas engrosen las carteras de clientes de unas agencias publicitarias no por ello menos grandes (aunque en paralelo admitan la presencia de pequeñas autóctonas) tiene más que ver con eso que no -aunque también- con las políticas tarifarias de los canales autonómicos.

Las contradicciones ligadas al uso del valenciano en RTVV que son más preocupantes, por el contrario, tienen que ver con ciertos estrangulamientos previsibles en el área de la misma producción televisiva. De una parte resulta evidente el riesgo de no minimizar el proceso de sustitución lingüística al optarse por la participación del sector privado -aun valenciano- en la producción ajena, siendo predecible al respecto un “efecto desviación” en materia lingüística por la propia lógica de la comercialización de programas (el castellano oferta más mercado, 300 millones frente a poco más de 3,5 el valenciano estricto o apenas 10 de sumarse al catalán y mallorquín). Y de otra parte, junto al doblaje de aquella producción ajena que así se decida (y en tal decisión está influyendo ya no sólo su coste sino también su calidad), un problema adicional y de no fácil resolución en el corto plazo, a juzgar por el tiempo transcurrido desde que se detectase por igual en TV3, ETB y TVG: no otro que “la falta de guionistas y adaptadores que hagan que el patrimonio cultural que se desea transmitir pueda ser traspasado a televisión” (en palabras del ex-director de TV3, Enric Canals, en los cursos internacionales de Benidorm)<sup>(166)</sup>. Un problema por tanto, ligado a la producción propia, que va más allá del grado de aceptación conseguido en informativos y deportes (claves, como se preveía, en la concurrencia inicial con las privadas), y en los que la necesaria reconversión de profesionales del periodismo escrito al audiovisual admitía un tratamiento de “choque”, a cortísimo plazo, como el acometido con los primeros cursos de formación.

Todo lo anterior no cuestiona, sino todo lo contrario, el reto lingüístico como algo fundamental “desde RTVV”. Y es ahí donde cabe considerar, a mi juicio, el tercer factor señalado por Polanco como requisito para toda propuesta viable en el contexto sociolingüístico valenciano: la dinámica actual y *futura* del conocimiento y actitudes respecto de su uso. Siquiera por la alusión, que admitiría tomarse por pasiva, formulada por Enric Canals: “Los 200 años de dominación del castellano en la escuela no habían hecho tanto daño como los 20 años de presencia de la televisión”... Alusión sin embargo que convendría tomar con cautela: pues no pasa al cabo de ser una mera opinión, ante la escasez de estudios en nuestro país que analicen específicamente el impacto de la TV en términos de sustitución lingüística <sup>(167)</sup>.

De ahí la relevancia de los datos y conclusiones subsiguientes extraíbles del “Padró d’habitants 1986” o de estudios como el de Gómez Molina: entre otras cosas porque dejan entrever que TVV no será, sin duda, como el primer canal de ETB (hoy bajo mínimos de audiencia), pero tampoco -al menos por ahora- similar a TV3... Y repárese, adicionalmente, que otro tanto ratifica el contexto sociopolítico (PSPV-PSOE vs. PNV/CiU) y aun la estricta *ecología informacional*: pues, a diferencia del caso valenciano, defender *una* ETB bilingüe probablemente no equivaldría para muchos, en el País Vasco, a defender “la” TV Pública (es decir, también TVE) como bilingüe; mientras que la propia fortaleza “en catalán” del circuito de TVE-2, de acuerdo con lo sugerido en su día por Solé Tura, obedecería a algo más que a la estricta “competencia entre televisiones públicas” (TVE/TV3) y se acercaría más, de otra parte, a la reivindicación posible desde la Comunidad Valenciana en el sentido de una mayor potenciación del Centro Regional de TVE (al cabo, “pública”, y si para los valencianos, más en valenciano)...

A partir de ahí, de un futuro todavía por resolver (pero factible) y de un presente “comprometido” para Canal 9 (comprometido antes por su consolidación como TV que no por ser desde el inicio “instrumento exclusivo” de normalización lingüística) poco relevante parece discutir si galgos o podencos. La mejor política (explícita) en cuanto a normalización parece, en este caso, “ninguna”. Pero ninguna en el sentido atribuido por Toni Mollà a la sana prevención frente a la mitificación del “poder institucional” al respecto; y ninguna, adicionalmente, en el sentido de “por ahora”. Lo que quiere decir, entre otras cosas, que no debiera traducirse mecánicamente ni por pasividad ni por lentitud: al contrario, una vez más. Si Fabregat pudo decir, a los 100 primeros días de emisión, que Canal 9 era “la primera y única televisión bilingüe de España” <sup>(168)</sup>, yo estaría de acuerdo con él frente a quienes le critican... Pero sólo desde los planteamientos ya aludidos. De igual modo que recordaría, tanto a la dirección general de RTVV como a la Generalitat, algunas consideraciones suficientemente asentadas entre los expertos *cara al futuro* que a este respecto importa:

- la iniciativa institucional, pese a toda sana prevención frente a su frecuente mitificación, resulta fundamental en materia de normalización (lo importante aquí sería desterrar toda tentación “jacobina”), al igual que los medios audiovisuales (y más, si públicos) resultan no menos fundamentales respecto de la capacidad de comprensión oral en el uso de la lengua;

- el futuro de la presencia del valenciano/catalán en TV dependerá de la capacidad de las distintas emisoras del mismo entorno lingüístico “per a realitzar una programació competitiva, i això no sembla possible -de acuerdo con Moragas <sup>(169)</sup>- sense una àmplia política de producció àudio-

visual que coordini les iniciatives de la política cultural pública i privada” de las CCAA afectadas;

- Si es preciso no perder de vista, de nuevo con Moragas, “la importància de les televisions locals, que han de jugar en el futur un important paper de dinamització social i cultural” (ibídem), más aún cabe sostenerlo para el caso valenciano: no sólo, pero también, por razones de normalización lingüística (a fin de contribuir a una extensión no traumática ni “impositiva”).

De modo que, una vez claro e incuestionable (como principio fundacional que es) el objetivo de alcanzar la máxima extensión del valenciano a través de RTVV, sea la pluralidad lo que impere, por ahora (como criterio pragmático), en el uso de la lengua: al objeto, precisamente, de evitar por todos los grupos políticos el hacer bandera de ella (y por extensión de la propia RTVV). Si la normalización es cuestión antes de uso que no de abuso (con apoyatura legal o sin ella), si es cuestión antes social que no legal, antes habla que no lengua, parece lo oportuno (política y económicamente) jugar las bazas con tolerancia por parte de todos para, una vez garantizado el no cuestionamiento de los fines (la progresiva normalización) y los medios (RTVV entre ellos), dar al tiempo lo que es del tiempo... Mas como quiera que la teoría del “retraso como ventaja” no es del tiempo, sino de los hombres, bueno será retener tanto la crítica necesaria a la misma cuanto -por lo aquí pertinente- el “modelo de TVV” que considero más plausible con arreglo a ese “pluralismo relativo” que desde ya defiende en materia lingüística (y que habrá de entroncar con las peculiaridades territoriales al mismo respecto, en particular por lo que hace a la “pluralidad local” observable en el País Valenciano).

#### 2.4. LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: ENTRE EL ACUERDO CORRESPONSABLE Y EL CONDICIONAMIENTO CENTRALISTA.

*“En Economia Política, la projecció futura a mig i llarg termini inclou, junt a l'estudi de les condicions del capital i del treball, la incorporació del progrés tècnic i l'evolució tecnològica com un dels factors clau per al desenvolupament d'un sector o activitat social. En el cas de la televisió, aquest factor és també la clau del futur (...) Generalment s'obliden els requisits tècnics, el caràcter escàs i limitat que tenent determinats factors de producció i el paper que juga la disposició d'infraestructures de telecomunicació en l'organització d'un país i en la formació d'un capital social d'importància vital. O se somnia amb les noves tecnologies com si no hi hagués res a fer, més que veure-les arribar de mans estrangeres”.*

Antoni-Josep Sarrià i Morell.

Si cabe dar por cierto que la discusión sobre los medios era -años atrás- básicamente de orden ideológico, y que con el tiempo habría pasado a centrarse en el orden discursivo dominado por lo tecnológico y lo económico, en tal caso podría suceder que cuanto se avanzó en la etapa de gestación, a nivel teórico, desde la Dirección General de Medios (DGMCS) de la Generalitat -impulsora inicial del proyecto RTVV- se edificase sobre una base híbrida para su época, base de carácter ideológico-economicista que, pese a las buenas voluntades (en este caso indiscutibles), habrían limitado hasta la fecha el alcance del proyecto RTVV sin duda (pero no sólo) por el “olvido” del contexto tecnológico que ya apuntamos como clave indiscutible de su presente y más aún de su futuro posible... Algo, el presunto “olvido tecnológico”, sobre lo que el lector habrá de concederme (de entrada) el beneficio de la duda so pretexto de que puede-que-hubiese-algo-de-cierto-o-no-en-ello. Pues tal “olvido” por parte de la DGMCS habría que religarlo al desarrollo práctico del proyecto hasta la fecha, participando de sus diversos condicionantes de todo tipo (políticos no en último lugar), y personalmente me parece más ficticio que real. Eso sí, los retrocesos no han sido menos elocuentes que los efectos revulsivos inducidos según el peculiar guadiana del principal animador hasta marzo-88 del proyecto: precisamente el equipo aglutinado en la DGMCS en torno a María G<sup>a</sup> Lliberós (A-J. Sarrià, M. Peris, etc).

Lo anecdótico retiene en ocasiones, y no es la primera vez que lo decimos, el valor de síntoma revelador. La anécdota, que no lo es tanto, arranca en nuestro caso de lo dicho por María G<sup>a</sup> Lliberós en el debate organizado por la Unión de Periodistas del País Valenciano, el 18 de febrero de 1988 (cuando se sabía de su interinidad al frente de la DGMCS). En primer lugar, lo que considero toda una perla: “La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones nada tiene que ver con la TV, sino que habla en todo momento de radiodifusión”. Y en segundo lugar, el resumen telegráfico de los estudios que en el tiempo había desarrollado o contratado la mencionada dirección general: el indicador más a mano, a mi juicio, de la base ideológico-economicista que subyacería finalmente en el modelo de TVV por el que (a partir de ella) parece haberse optado. Hasta la fecha cuando menos: pues Amadeu Fabregat no habría puesto en pie sino su mero “reajuste al presente” desde las primeras emisiones regulares de octubre del 89.

Podemos recoger no en vano, fieles a la cronología, los 6 estudios básicos de desarrollo del proyecto dados a conocer por la ex-directora general en el debate de referencia:

- Estudio del mercado publicitario potencial en la Comunidad Valenciana (1984).
- “Anteproyecto de los Servicios Informativos” (organigrama implicado incluido), realizado por el periodista Joan Alvarez, ex director general de Relaciones Informativas de la Generalitat y en la actualidad director de la Filmoteca Valenciana. No se aplicó en la práctica.
- Estudio sociológico de “La programación televisiva en el Estado español” (con especial hincapié en los No Informativos, y centrados más en concreto en la programación de TV3), según encargo efectuado al sociólogo J. Vicent Marqués.
- “Alternativas de política comercial de TVV”, realizado por el gabinete IPE.
- Publicación del volumen “La informació a la Comunitat Valenciana”.
- “Planificación de selección y contratación de personal”, estudio encargado a la consultora Telecasting y con el que Lliberós preveía contar, precisamente en marzo de 1988, para cuando estaba prevista a su vez la elección del Consejo de Administración.

Es decir, estudios todos ellos derivados de la ponencia presentada por la propia G<sup>a</sup>. Lliberós, junto con A-J. Sarrià, al I Congrés d'Economia Valenciana (diciembre 1984), valedora en última instancia del verdadero “estudio inicial” redactado por Telling (de planificación del Tercer Canal de TV Valenciana). Y la fecha, diciembre 84, tiene su importancia: esto es, la media docena de estudios señalados más arriba serían meros estudios complementarios o de simple desarrollo de una idea concreta sobre la “TVV posible” nacida al calor del estado del debate sobre los medios en 1983-1984. Años clave, como vimos, tanto en la implantación de los primeros canales autonómicos por la vía de los hechos consumados (ETB, TV3) y de su inmediata regulación mediante la Ley del Tercer Canal (que propició a su vez la creación de RTVV en julio del 84), cuanto -y es lo que importa subrayar ahora- de los primeros aldabonazos con resonancia social sobre los efectos de las nuevas tecnologías y en relación con el medio televisivo -al hilo de la polémica TV pública vs. privada, resuelta “finalmente” por el propio Felipe González a comienzos del mismo año 84.

Es cierto, con todo, que el estudio de planificación de Telling distinguía ya entonces (1984) tres tipos diferentes de satélite (punto a punto, para distribución y de radiodifusión directa o SRD), afirmándose de los últimos que serían utilizados “en un corto plazo para la retransmisión de señales directamente al público”. Pero el hecho de que la consultora de ingeniería hablase en puridad “de radiodifusión” (y no de teledifusión) a la par que contemplando como realidades estancas y no “conexionables” -para el servicio televisivo- las tecnologías del satélite y del cable (frente a lo que con el tiempo desmentirían ciertos videos comunitarios y la experiencia frustrada de Canal 10), propiciaba un entendimiento economicista del asunto -“los enormes costes de fabricación de los equipos orbitales de los lanzadores han determinado el carácter estatal o interestatal de su puesta

en órbita'', se ejemplificaba- y abonaba la idea finalmente subrayada (en su ponencia) por el tándem Lliberós-Sarrià: ''Al País Valenciano le llegarán, *a lo largo de los próximos quince años -como mínimo-* la señal de TV procedente de *dos (a lo sumo tres, si Luxemburgo cediera sus derechos a alguna compañía multinacional)* satélites de radiodifusión directa. Estas serían *las únicas emisiones de esa procedencia* que podrían ser recibidas *directamente* por el público''... (los subrayados son míos). La pujanza del sector privado, desde entonces, con un referente contextual más europeo que para-estatal (Canal 10 fue tan sólo el primer aldabonazo en España), junto al replanteamiento del asunto tras el ingreso en la CE por el ministerio de Transportes y Comunicaciones (en especial del proyecto de satélite español inicialmente desechado, no en vano en relación con las deficiencias de infraestructura convencional a la hora de afrontar el calendario de la ley de TV Privada), entre otros aspectos sopesados más atrás, refuerzan lo hoy que parece sin duda un notable ''error de prospectiva inicial'', así como el carácter fundamental de la incidencia de la tecnología implicada en un plazo -al parecer- mucho más apremiante que el largo plazo -''compás de espera'' más deseado que bien estudiado por Telling y aceptado a pies juntillas, en un principio al menos, por la ya entonces directora general de Medios de la Generalitat <sup>(170)</sup>.

No es extraño, en tal sentido, que A-J. Sarrià remarcase la fecha de su aportación a ''La informació a la Comunitat Valenciana'' -libro editado en 1987- como posicionamiento personal remitido a enero de 1986. E importa resaltarlo porque parece aludir con ello a la postura realmente mantenida (como oficiosamente ''ajustada'' frente a la oficialmente ''conveniente'') por el equipo de la DGMCS. Allí, entre otras cosas, se afirma por Sarrià que ''una combinació de l'aplicació de les tecnologies del satèl.lit i del cable'' cabía entenderla, ya antes del decreto de las parabólicas, como ''essencial'' y que ''es dóna perquè una xarxa local per cable pot distribuir per aquest mitjà la totalitat de programes que arriben via satèl.lit...'' Al cabo, y en tanto que RTVV es proyecto empresarial de la Generalitat (proyecto de iniciativa pública, política) Sarrià venía a reconocer de modo explícito que ''si és cert que la situació actual del nostre país és, en tota la magnitud, heretada, també ho és que les forces polítiques hegemòniques al País Valencià i al conjunt de l'Estat Espanyol no han definit un projecte suficientment descentralitzador... en el sector de la telecomunicació'', de manera que ''pot ser que la perspectiva estatal il.lumine molt, però des del País Valencià només es pot sentir inquietud davant el fet de veure conjugades la inexistent autonomia i llibertat de comunicacions internes, l'infradesenvolupament de la telecomunicació a la Comunitat Autònoma i les expectatives oscures i escasses que encara s'entreveuen per a la projecció, aportació i presència espanyoles en el context internacional de la comunicació àudio-visual''. Entre líneas, pero las cosas (en particular las diferentes versiones oficiales y oficiosas de la propia DGMCS de la Generalitat) quedaban claras.

La gran cuestión (sustantiva, que no formal) que el proyecto de RTVV sigue teniendo pendiente, en consecuencia, sería retomar de cerca y cuanto antes el debate tecnológico. Si es que se trata de verdad (política, ante todo) de no dilapidar otros ''futuros'' ligados al proyecto y todavía ''posibles'' (pues que su ''presente'' inmediato no parece llegar en el momento más halagüeño). Si RTVV con la LOT ''nada tiene que ver... salvo por la asignación técnica de frecuencias'', lo que no es cierto, eso querría decir que estaríamos ante una idea de TVV como TV-éter, como TV ''clásica'' en términos tecnológicos (rozando por tanto la simple obsolescencia, a poco que se entienda la tecnología como ''arma de competencia'' en su gestión). Pues una TVV que no sepa ''ganar el futuro'' y entroncar con las previsibles Redes de Servicios Integrados que se ven venir

(pese a su retraso con arreglo a lo previsto), una TVV incapaz de prever y programar por adelantado el uso multimedia de su infraestructura, está, más que probablemente, condenada al fracaso incluso como proyecto empresarial sin más (y a compartir la crisis que, por motivos tecnológicos entre otros, atraviesa la prensa escrita). Un riesgo en no poca medida ligado a la propia indefinición socialista al respecto, que el trabajo del equipo Lliberós no habría explicitado con suficiencia, pudiendo ser la incómoda factura que pasase ahora la ausencia de un debate social y político a fondo en relación con RTVV. Pues a tal limitación, teórica y presunta, se sumaba, desde un principio, alguna que otra más objetiva (o práctica): entre ellas la negativa manifestada por el Tribunal Constitucional a reconocer la TV-cable como competencia de la Generalitat Valenciana. Y en esto, si es que tal contingencia estaba prevista (como sin duda lo estaba), en el mejor de los casos indica el hurto tecnocrático del debate sobre las posibilidades del cable en relación con la TVV... Porque tal indefinición habrá conllevado un "coste social" ya irreversible: la pérdida de tiempo (preciso y precioso) para haber favorecido, a partir de tal debate, iniciativas municipales más rápidas y acordes con la TV local no entendida sólo como negocio (que es como, alegal y finalmente, ha cuajado, en ocasiones tan paradigmáticamente como en Tele-Elx). Y ni el previsible desgaste en el gobierno ni la evidente escalada competitiva que conlleva el calendario de integración europea, ni el refuerzo en el control (centralista) del desarrollo de RDSI que supone la LOT, ayudan a entender semejante "parón"...

Las declaraciones al respecto de Javier Nadal, director general de Telecomunicaciones, ya fueron por entonces y no en vano más que contundentes -frente a las efectuadas en su día por María G<sup>a</sup>-Lliberós. De una parte, quedaba claro desde 1987 que:

... "Ya hay una legislación específica que se refiere a la televisión, en este momento está el Estatuto de Radiotelevisión, la ley de terceros canales y anunciada una de la televisión privada. Pero, aunque son reglamentaciones independientes, lo que es cierto es que cada una de ellas tendrá que leerse conjuntamente con la LOT en todo lo referente a telecomunicaciones. Por lo tanto, evidentemente no se puede decir que esta ley no tiene nada que ver con la televisión" <sup>(171)</sup>.

Interesa retener de la LOT, con arreglo a ello, el convencimiento de la CTNE -que también se da en la Europa de los doce- de que las redes de banda estrecha evolucionan hacia la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Así lo recogía ya el equipo redactor del borrador de la Ley de Ordenación de las Comunicaciones (LOC): se pretendía "la creación del Servicio de la Red Nacional de Telecomunicaciones (RNT) propuesto como un proceso de coordinación, planificación conjunta y progresiva integración de las redes existentes (CTNE, la entonces de RTVE y actual Retevisión y DG. de Correos y Telecomunicación) que sirva de soporte a los servicios públicos de telecomunicaciones y nos sirve en la perspectiva de la Red Digital de Servicios Integrados (...) que viene condicionada por la aplicación paulatina de las fibras ópticas en el desarrollo y construcción de las redes de banda ancha" (Borrador de 15-febrero-85). Y si bien se cuestiona ahora su realidad en la década recién comenzada, económica y técnicamente, dicho camino parece factible recorrerlo a partir de la red telefónica (de banda estrecha) y no de otras redes <sup>(172)</sup>.

Ya para entonces quedaba claro lo que con relación a ese reto cabe retener y que subraya de hecho el propio preámbulo de la LOT (ley 31/87 de 18 de diciembre):



“La Ley, a la vez que trata de atender los problemas del presente, tiende a sentar las bases para el futuro (:::) Para ello se configura la prestación de “Servicios de telecomunicación” en un marco abierto a la libre concurrencia y a la incorporación de nuevos servicios”.

La LOT, así, al tiempo que regula explícitamente la gestión y explotación de las ondas en materia de radiodifusión, tomando el Estado (central y autonómico, según reparto competencial en cada caso) la iniciativa de controlar técnicamente el espacio radioeléctrico, señala la prestación (directa o indirecta) de los *servicios finales* en régimen de monopolio (afectando a telefonía urbana, interurbana e internacional; telegrama; télex, telefax; video-tex y videoteléfono), al tiempo que los *servicios de valor añadido* (teletex incluido, telecompra, reservas de billetes u operaciones bancarias, acceso a informaciones almacenadas o bancos de datos, sean bursátiles, meteorológicos, etc) podrán realizarse bajo “régimen de libre concurrencia”.

En *servicios de difusión*, sin embargo, dicha liberalización parece clara en relación con los satélites de comunicaciones -de la recepción privada de sus señales, cuando menos- en virtud del Derecho Internacional (conforme al artículo 8 de la ley en cuestión, manteniendo lo regulado en materia de antenas y disposición adicional 8ª y R.D. 1201/86). Si bien no así, en consecuencia y por ahora, en relación con la emisión por satélite desde territorio español -lo que habrá de modificarse de inmediato, ante las previsiones del proyecto Hispasat-, ni tampoco en relación con los vídeos comunitarios (artículos 9.2 y 25.3), pues queda clara -también “por ahora”- la “competencia exclusiva (...) de acuerdo con el artículo 149.1.21 de la Constitución” que corresponde al Estado (central) en lo relativo a “cualquier comunicación mediante cables y radiocomunicación” (artículo 1 de la LOT).

De manera que si “la televisión tendrá siempre la consideración de servicio de difusión y en ningún caso podrá prestarse como servicio final o de valor añadido” (sea por cable, satélite o por éter), la misma LOT deja claro en todo caso -aun por pasiva- que “*Sin perjuicio de lo previsto en la presente Ley*, el régimen jurídico de la Televisión se regulará por su legislación específica” (artículo 25.2, el subrayado es mío). Es decir, la liberalización vale para la TV convencional (con la “gestión indirecta” ya admitida por la LTVP); vale para la recepción por satélite, pero no para su emisión desde territorio español, y parece valer para ciertos vídeos comunitarios (con arreglo, respectivamente, al R.D. de antenas parabólicas o la propia LOT); pero no vale para la TV-cable o simplemente para las TV Locales hipotéticas, algo que se atribuye la Administración central en base al artículo 1 de la LOT y a RTVE por la Ley del Tercer Canal, ni tampoco para la emisión de TV por satélite desde territorio español, según la propia LOT. De donde resaltan las opiniones ya recogidas -posteriores en el tiempo- de Nadal y Barrionuevo: en tanto que adelanto de las intenciones de quien se ha reservado (Estado central) las competencias para ello en el futuro. Un futuro que habrá de resolverse de inmediato, no sólo en relación a lo audiovisual sino aun del Estado como tal, como venimos sosteniendo.

El borrador de la LOC (antecedente de la LOT), que literalmente recogía ya dicha atribución, manifestaba ¿no en vano? -en su Exposición de Motivos- que el camino hacia las RDSI pasaría por las fases previas de coordinación, planificación conjunta e integración parcial, y en cuanto a la radiodifusión sonora y la TV “como servicios de telecomunicación” explicitaba -por lo que nos

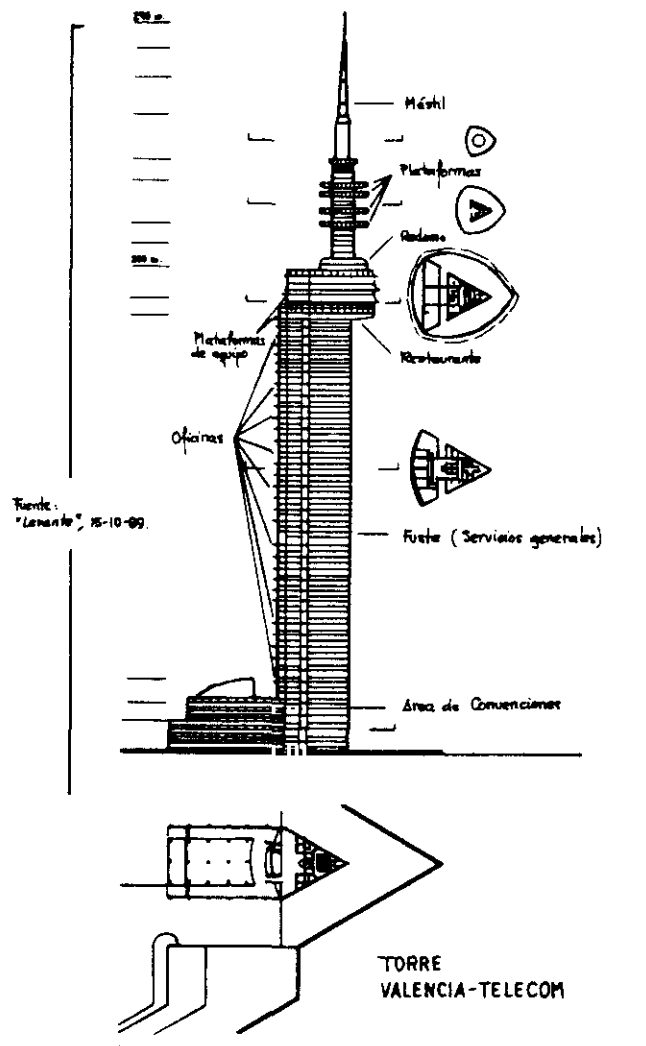
interesa- que el proyecto Barón no entraba a regular ni las normas básicas del régimen de Radio y TV referentes a producción, contenido o control, programación o información en sí, ni -de subrayar para el caso valenciano- “las facultades en el desarrollo y ejecución de estas normas básicas por parte de las Comunidades Autónomas, recogidas en el art. 149.1.27 de la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía, en el contexto señalado en el punto anterior” (borrador LOC, 15-2-85).

Si poco podía sorprender la retirada, por entonces, de dicho borrador, ante el inminente ingreso en la CE (con la directiva sobre la “TV sin fronteras” en la cocina); y si tampoco podía causar excesiva sorpresa, después -tras el refuerzo competencial desde una perspectiva centralista que en paralelo supondrá la LOT para el control (centralista) que se desea establecer sobre los desarrollos de redes de banda ancha (por fibra óptica ante todo) con vistas al año 2000-, la inmediata anulación por el Tribunal Constitucional del término “cable” incluido en el articulado de la ley de creación de RTVV; nada sorprendente sería, ahora, tras el “adelanto en el tiempo” que cabe esperar del tirón inversor en infraestructuras de telecomunicación que se aprecia de la mano de la CE, que las cosas cambiaran más a corto plazo (también en TV) de lo que hace tan sólo dos años se presumía. Por más que ni Amadeu Fabregat, actual director general de RTVV, ni los medios de comunicación valencianos parezcan reparar -explícitamente al menos- en ello.

Con todo, es de reseñar que G<sup>3</sup>Lliberós “rectificó” a tiempo, o mejor cabría decir: finalmente jugó la baza “a la madrileña”, y en parte suya parece ser la propulsión del **proyecto VALENCIA TELECOM**, cuyo estudio de viabilidad se acometería tras el acuerdo al efecto alcanzado en abril de 1988 entre Consell de la Generalitat y Consell Metropolità de l’Horta, con la presencia por tanto del Ayuntamiento de Valencia. El reparto de responsabilidades quedaba, desde entonces, prefijado: la Generalitat se encargaría de facilitar la inversión en infraestructura así como de coordinar lo relativo a las telecomunicaciones, y el Consell Metropolità de l’Horta de optimizar el aprovechamiento recreativo, turístico y comercial de la torre y su entorno<sup>(173)</sup>. Pensada en principio, ya a finales del mismo año 1988, como símbolo emblemático de la “ciudad de las ciencias” que el Consell prevé levantar en Valencia o alrededores y como uno de los hitos urbanos de la Comunidad Autónoma como tal, el mencionado estudio de viabilidad del “pirulí” valenciano -como pronto lo calificó la prensa- corrió a cargo, también, de la consultora Telling. Ratificando su viabilidad económica, dicho estudio incluyó una extensa encuesta entre los potenciales usuarios y clientes de la torre: Telefónica, HidroEléctrica, IBM, fuerzas de seguridad del Estado, la propia RTVV, etc; y junto a la excelente acogida entre dichos usuarios (pese a que el precio de repercusión se fijaba para ellos entre las 20.000 y las 105.000 pesetas el metro cuadrado) cabe contar, especialmente tras aprobarse la reforma de los fondos estructurales europeos, la del propio ministro del ramo, José Barrionuevo.

En cuanto a la obra pública, el estudio de Telling habría barajado tres opciones básicas, dos de ellas ligadas a una “solución torre” tipo pirulí de Torrespaña (con o sin instalaciones tecnológicas en su base); frente a una tercera de “torre-edificio” tipo Empire State Building, la más costosa en obra civil pero la más rentable a largo plazo (se contempla desde un horizonte a 25 años) en función de la previsión de necesidades de sus potenciales usuarios (y co-amortizadores), que a priori sería la que cuenta con mayores opciones, si bien rebajándose la altura inicial prevista a una altura aproximada pero superior a los 200 metros. La prensa valenciana publicaba, precisamente en fecha tan significada como octubre del 89 (en que nace RTVV), el gráfico que se adjunta, ilustrativo en cierta medida de las recomendaciones de Telling sobre la solución considerada más idónea, que con

un presupuesto orientativo “entre 4.000 y 4.500 millones” (incluyendo costes de adquisición y urbanización de los terrenos, edificación de la torre, aparcamientos subterráneos y trabajos de estudio, proyección y dirección), implicaría “una torre constituida por un fuste de sección triangular y un elemento edificio paralelo, en la que se encuentran las zonas técnicas y de servicio, y sobre las que se apoyan cuatro plataformas y el mástil soporte de sistemas radiantes”. Dispondría, igualmente, de una sala de convenciones en su edificio base, con un gran aparcamiento subterráneo y restaurante panorámico elevado entre las oficinas y las plataformas técnicas del fuste:



Concebida como un proyecto clave “dentro del ámbito de la política de difusión tecnológica de la Generalitat”, así como conectada al resto de infraestructura afín (como el parque tecnológico, la ciudad de las ciencias y la propia RTVV) en una ciudad que con ella vería reforzada su condición como tal capital realmente autonómica, la torre del Valencia-Telecom se empezaría a construir en 1991 y se acabaría en 1993, en que comenzaría a albergar tanto servicios de radioenlace fijos y para unidades móviles -de radio y TV- así como de antenas para difundir la señal de dichos medios, cuanto en relación con servicios móviles terrestres, los futuros servicios de telemedida y telemando a impulsar a través del programa IRTA, etc.

No es indicio menor en todo caso, en cuanto a eventuales sinergias entre la torre de telecomunicaciones y la propia RTVV, que tal proyecto viese la luz de la mano de Jaume Sendra - relevo de M<sup>a</sup> G<sup>a</sup> Lliberós al frente de la DGMCS- pero con A-J. Sarrià como el Jefe de servicio clave que otorga continuidad, y perspectiva de “globalidad”, al impulso inicial de ambas iniciativas públicas. Como suya, de María G<sup>a</sup>-Lliberós, fue la propuesta para que Radio Autonomía Valenciana (RAV) utilizase “como corresponsalías las emisoras municipales sin licencia” por entonces <sup>(174)</sup>, hasta la reciente remodelación de las ondas locales en la primavera/verano de 1990... Reacción a tiempo ciertamente elogiabile, tras el revés personal sufrido por G<sup>a</sup>-Lliberós al no contarse con ella para proseguir con el proyecto RTVV que apadrinó desde un principio contra viento y marea. Y que, aparte de ratificar el “olvido tecnológico” como más ficticio (jacobino) que real, tuvo en todo caso la virtud (social) de obligar -ante la urgencia del Estado por atar de inmediato el tema “redes”- a una actuación de urgencia por parte de la Generalitat que pronto jugó sus bazas al respecto. De ahí su respaldo al Valencia Telecom en lo relación con los Servicios “finales” liberalizados por la LOT. Servicios a los que se liga, a su vez el programa IRTA (desde Administración Pública)..., y la constitución posterior a iniciativa también de la Generalitat de la sociedad mixta de Gestión de Sistemas Avanzados TISSAT (con Telefónica y el grupo privado Drac).

Todo lo anterior, traducido al campo concreto de lo audiovisual en que habría de operar el proyecto de RTVV, podría avalar una “evaluación integral”. Y ésta, si de modo más participativo, quizá la impresión personal de que importa más ganar la “batalla del tiempo” no tanto pensando tal proyecto como constreñido a la polémica -ya cerrada, de hecho- entre TV pública vs. privada (TV convencionales) cuanto como proyecto abierto, para su supervivencia, a la redefinición de tal modelo coexistencial de TV en el marco más dinámico y no menos liberalizado de las tecnologías del audiovisual (convencionales vs. nuevas). *La referencia dominante, en tanto que TV pública, ya no sería sólo Retevisión o RTVE -ni tan siquiera TV3 (esto es TV convencional), sino también la CTNE y la política global de telecomunicaciones.* El reto no sería sólo encontrar acomodo y posicionamiento urgente en el modelo coexistencial de TV convencional (prestando atención adicional a las TV's privadas), sino también y cuanto antes a los desarrollos ya presentes o previsibles de la teledifusión directa por satélite y el cable. Y ello, desde un punto de vista institucional, religa las decisiones pertinentes no sólo al marco del Estado Autonómico y su hipotética evolución sino también a las posibilidades que abre la integración en la CE (en especial tras la reforma de los fondos estructurales, y vía FEDER, en función de programas concretos como el Star). Ello en tanto que proyecto con un presente comprometido y un futuro aún por definir. Un futuro que no por casualidad remite en términos de factibilidad inmediata, al renovado marco de competitividad -europeo y no sólo español- con que se enfrenta el audiovisual valenciano tras cruzar la frontera de 1990, y competitividad sobre cuya dimensión tecnológica no cabe escamotear las debilidades de partida.

TVV no en vano, en tanto que infraestructura tecnológica, arranca de un acuerdo explícito alcanzado tardíamente, bajo el impulso final que hace coincidir la “luz verde” general para ciertas televisiones autonómicas como Canal 9 (tras la previa de la LTVP) y la gestión postrera de María G<sup>a</sup>-Lliberós al frente de la DGMCS. Dicho acuerdo, el ya referido del 88 entre RTVE y la Generalitat, permitirá a partir de entonces el uso conjunto de la red (entonces de RTVE y ahora de Retevisión). Y será ciertamente un acuerdo en que primará la racionalidad económica (a medio

plazo) sobre las apreciaciones de índole política (del corto plazo); en el que primará a su vez el punto de vista social y aun medioambiental, por el hecho de no verse obligados a duplicar -a diferencia del caso catalán, sin ir más lejos- una red básica que ahora tan sólo se trata de mejorar, para maximizar la extensión territorial de la señal; pero en el que “lo tecnológico” se heredaba -y compartía- sin grandes ventajas de cara al futuro... demostrando, de paso, que la postura del “retraso como ventaja” siempre es discutible: porque tiene sus costes, y no cabe obviarlos.

El mismo A.J. Sarrià, en su contribución personal a “La informació a la Comunitat Valenciana”, describía un panorama significativo a este respecto que resumía en una constatación básica: “En el cas del País Valencià la dotació en infraestructures de telecomunicació és insuficient en l’actualitat. Especialment en el mitjà televisió”. El mismo autor señalaba las redes básicas que, sin mayores demoras en el tiempo, serían consecuentes para la superación de tal insuficiencia y ello de acuerdo con una estrategia política y económica < suficientemente descentralizadora > tendente a configurar “televisions locals per cable, televisions regionals i estatals per ones i televisió per satèl·lit (...) com un sistema de comunicació complex, plural i basat en l’intercanvi”. Las redes básicas para Sarrià serían:

“ a) Xarxes que abasten *tot el territori* de la Comunitat Autònoma: *una* amb capacitat per transmetre diversos programes.

*El mitjà de transmissió: les ones*; i les infraestructures: les d’una xarxa d’emissors i reemissors *terrestres*, dotats de tota la capacitat de canals d’emissió de programes diferents admissibles per l’espectre de freqüències que, proporcionalment, segons la població, correspon a la Comunitat Autònoma entre l’atribuït a l’Estat Espanyol internacionalment per a aquest ús, tant en VHF como en UHF.

b) Xarxes de cobertura comarcal o local: les que puguen sorgir sense provocar distorsions greus en els sectors vinculats. El segon camp d’aplicació de la telecomunicació, en el nostre cas dels sistemes de televisió el constitueixen les TV locals o comarcals i insisteix: públiques o privades, comercials, de serveis o mixtes; aquesta no és la qüestió ara. En aquest cas els mitjans adients que permeten una viabilitat tècnica són ambdós: les ones i el cable” (175).

La red estatal, utilizada por RTVE en exclusiva hasta la reciente constitución de RETEVISION (dando pie a un uso compartido tanto por televisiones públicas como privadas), sería la base en territorio valenciano de esa primera red planteada por Sarrià, tras el mencionado acuerdo de febrero del 88. Pero no sólo se trata de una red “terrena” (con cuantas limitaciones ello implica cara al futuro), sino que, ante todo, se soporta en un espacio radioeléctrico (las ondas) cuya saturación progresiva para usos convencionales de TV le hacen todavía más lejano para la “bondad infraestructural” que exigirán los nuevos servicios que dejan entreverse. Más aún: ya antes de concedida a RTVV la licencia de emisión preceptiva por el Gobierno, dicha red era una infraestructura a “optimizar” para la transmisión por ondas...

No adaptada desde un principio a la configuración autonómica del Estado, ya que la zona VII de la red (al modo del repartimiento militar previo) cubre también Murcia -algo que entraría en vías de solución tras el acuerdo Generalitat/Diputaciones para coordinación de las infraestructuras

civiles-, la existencia de “zonas de sombra” (ante todo en el canal UHF, por el que emite Canal 9) y la cobertura deficiente de otras, obligaba y obliga todavía a “inversiones de mejora” que hubiese sido deseable acometer bastante antes de la firma del acuerdo que, por fin, dió luz verde a la dotación presupuestaria subsiguiente... Los acuerdos del 86 entre Generalitat y RTVE (para erradicar las sombras del UHF en las comarcas del norte de Castellón) y con las Diputaciones (ampliar el número de reemisores), eran pasos necesarios pero insuficientes.

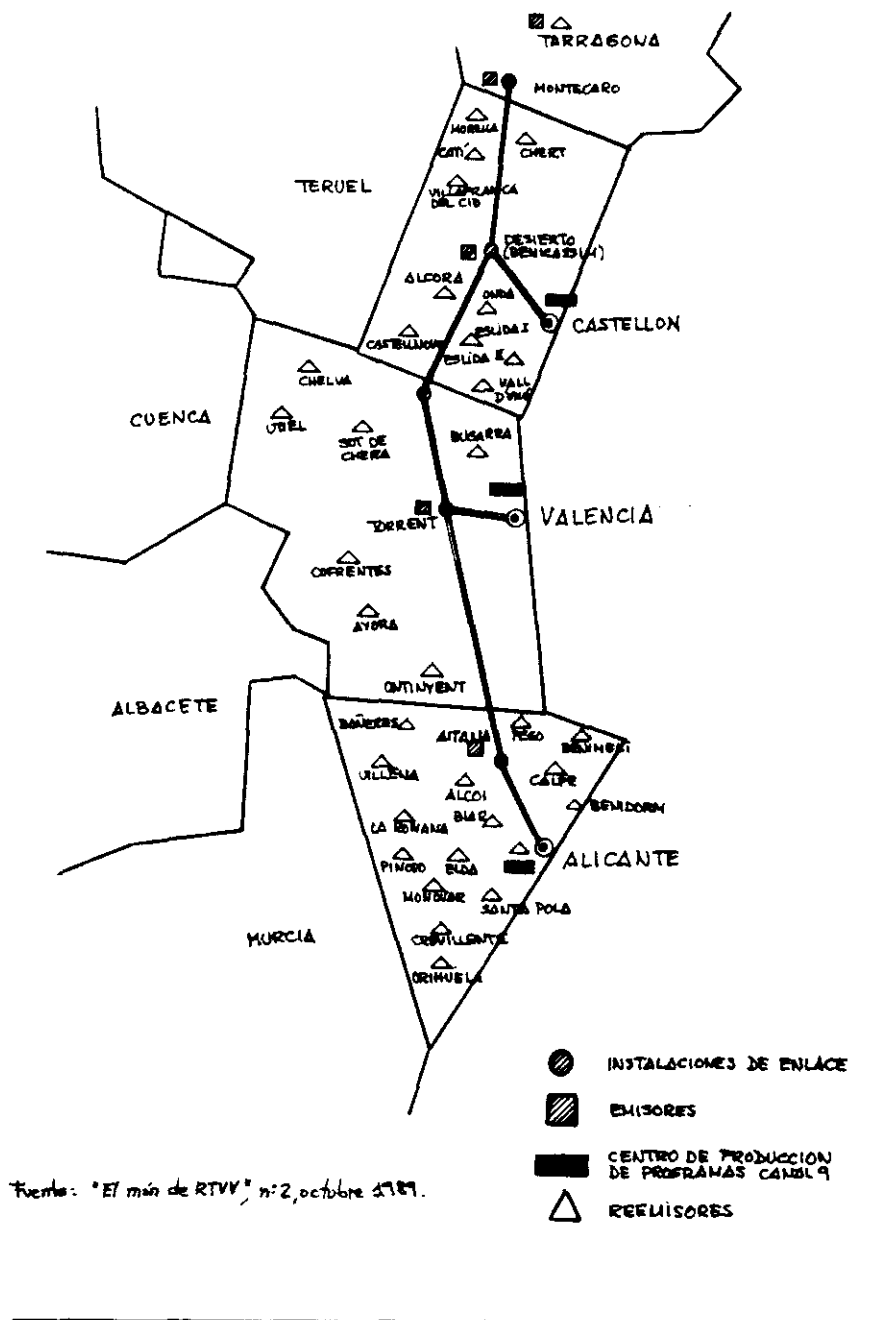
En relación con la misma red, la estructura “heredada” era a la vez escasamente homogénea entre los centros emisores existentes en Torrent, Aitana y Benicàssim y los reemisores (y enlaces) de ellos dependientes. El estudio de planificación original de Telling ya lo constataba:

CENTRO EMISOR	Canal d'emissió		Nº reemisores dependientes	
	VHF	UHF		
-Torrent	5	22	1	2
-Aitana	3	32	35(40)	16
-Benicàssim	7	59	6	6

El carácter neurálgico del Centro Emisor ubicado en la Sierra alicantina de Aitana, que era al tiempo el que conecta con Murcia (dentro de la Zona VII) y con Madrid, quedaba patente: es todavía en efecto, el núcleo que “alimenta de señal primaria la mayoría de los reemisores que difunden la programación televisiva en la Comunidad Valenciana, incluso a las comarcas comprendidas en la provincia de Valencia (el emisor de Torrente da servicio tan sólo al área metropolitana de Valencia capital y sirve de enlace entre los otros dos) y a algunas de Castellón”...

Se comprenden, por tanto, en cuanto a regionalización efectiva de la red -con vistas al reequilibrio/extensión de la misma, incluso pensando hasta en su conexión específica con el Parque Tecnológico que pretende impulsar la Generalidad- las virtualidades implícitas al “pirulí” del CPP de Burjassot, auténtico corazón emisor de las señales de Canal 9 y que entrase en funcionamiento en verano de 1989 (Vid. gráfico anexo). Así como no son menores las virtualidades, si bien desde una perspectiva más amplia y sin limitarse a los usos televisivos de aquél, ligadas al proyecto VALENCIA TELECOM. Baste pensar que entre los potenciales usuarios de esta última “torre multiuso”, en efecto, figuran TVV y TVE, Telefónica, Protección Civil, emisoras de radio, radiotaxis, ambulancias “y cualquier otra empresa o servicio que precise interconexiones por ondas de radio” (176).

## RED DE RETEVISION - RTVV



No cabe olvidar, de otra parte, que ACPV promovió una infraestructura de reemisores (mínima pero eficaz) para la recepción en territorio valenciano de la señal de TV3, cuya duplicidad con la previamente existente de Retevisión -por instalada "al margen"- es manifiesta, pero que en todo caso refuerza la establecida en territorio valenciano en comarcas clave.

En lo referente a las **redes comarcales o locales** propuestas por Sarrià era un hecho, ya antes de empezar a emitir Canal 9 y mientras algunos todavía discuten si galgos o podencos, que “està fent-se semiclandestinament” en palabras del mismo autor: “Hom sap que determinada ciutat és mig cablejada; hom diu que s’ha constituït certa societat per a l’exploració, al sud del país, d’una xarxa local per cable per a turistes; hom sospita que la Campanya Telefònica va a tenir la clau de l’exploració d’aqueixos serveis i en fi, s’intueixen moltes coses encara que, de moment, una llei estatal, la dels tercers canals, ha reservat en exclusiva a RTVE l’emissió i retransmissió de senyals a través de cable...” La LOT ha venido con el tiempo a confirmar lo sospechado por Sarrià sobre determinadas exclusivas en favor de Telefónica, de igual modo que el Estatuto de Retevisión ha modificado la titularidad -pero no tanto la infraestructura realmente existente- de la red terrena de TV, pero ni aquella ni éste, ni tampoco la Ley de TV Privada (LTVP), dejan claro qué pasará con las TV locales: tan sólo existe el anuncio de su próxima regulación por el ministerio de Transportes y Comunicaciones, y de su contenido tan sólo se conoce lo filtrado a través del diario “El Sol” en mayo de 1990.

El problema básico, de cara a ese futuro tecnológico previsto en torno de las Redes de Servicios Integrados (RDSI) soportadas tecnológicamente por un cableado de fibra óptica, es por el momento que poco puede hacerse en tal dirección desde la Generalitat y/o desde RTVV (ni siquiera contando con las nuevas posibilidades abiertas tras la reforma de los fondos estructurales europeos para cofinanciar ciertas iniciativas al respecto) mientras no varíe la concepción a todas luces centralista que subyace al control de dicho futuro por parte de la Administración central. Concepción que subyace tanto a la LOT y a la ley de Terceros Canales como, más en concreto, al recurso de inconstitucionalidad planteado frente al término “cable” introducido desde un principio por la ley de creación de RTVV... Y que sin embargo, a la vista de la nueva Europa audiovisual que se adivina, podría variar en un futuro no tan lejano, como deja entrever el propio anuncio para regular la TV local en España. Los crecientes contactos con Telefónica, derivados de la puesta en marcha del programa IRTA, permitirían a priori -por lo que hace al reto de infraestructuras de telecomunicación implicado- una cierta esperanza: pero sólo *a priori*, como se matizará en su momento en el Capítulo III. Será entonces que retomemos el asunto con el detenimiento debido a la complejidad que hace al caso.



## NOTAS. Capítulo II.

(1) Román Gubern: "La querella de la televisión", artículo en El País, 26-abril-1986.

(2) Ponencia presentada en el simposio sobre Políticas Informativas y de Comunicación celebrado en Madrid a instancias de la entonces recién constituida Asociación Cultural para las Investigación Aplicada en Comunicación (AIC): "Las televisiones públicas europeas están en crisis, afirma el investigador italiano Giuseppe Richeri", reseña de J.R. Pérez Ornia en El País, 26-1-84.

Es ya clásica la alusión, para un mayor abundamiento sobre la transformación televisiva en la Europa de los primeros 80, a la obra del mismo G. Richeri: "Televisión: entre servicio público y negocio". Editorial Gustavo Gili/Colecc. "Mass Media". Barcelona, 1983.

(3) Román Gubern, art. cit., El País, 26-4-86.

(4) Vid. Enrique Bustamante: "Los amos de la información en España", ob. cit., pp. 185 y ss. Y así mismo, M. Vázquez Montalbán: "El libro gris de la televisión española", Edic. 99, Madrid, 1973.

(5) El País, 4-abril-1987.

(6) El diario El País surge, por fin en 1976, como adalid manifiesto de la filosofía -consolidada tras el 15J del 77- de la *reconciliación nacional*. Al igual que Le Monde lo supone para los franceses desde la "liberación" -una vez acabada la segunda gran guerra-, el matutino madrileño ha ejemplificado en España, desde su aparición, la encarnación a nivel periodístico del paradigma social dominante tras la muerte del general Franco: no otro, precisamente, que la llamada reconciliación (clave de la transición sin ruptura). Investigaciones inicialmente fomentadas por José Vidal-Beneyto así lo corroboran: vid. a este respecto, por ejemplo, "El País o la referencia dominante", de G. Imbert y J.V. Beneyto (coords.), Mitre, Barcelona, 1986.

(7) Enrique Gómez-Reino: "Legislación básica de Derecho de la Información". Tecnos, Madrid, 1985, pp. 241 y ss.

(8) Antonio López: "Modelo de TV para un nuevo Estado", art. en revista ALFOZ nº 11, monografía sobre "Autonomías y descentralización de RTV". Edit. CIDUR, patrocinio Comunidad Autónoma de Madrid, diciembre 1984, pp. 36-37.

(9) En el mismo editorial de referencia sobre la sucesión Calviño-Miró se pudo leer ya: "Los que apoyan a Calviño, que los ha habido, e incluso los que han deplorado su presencia al frente de RTVE coinciden en que uno de los objetivos de su gestión -el saneamiento económico- al menos se ha cumplido. Hoy RTVE es una empresa que subsiste económicamente, desprovista incluso de la subvención que antes le otorgaba el Estado. Muchos silencian en cambio que eso se ha hecho mediante una gestión unilateral y monopolística del mercado publicitario, sobre el que RTVE ordena y manda en tarifas y tiempos. Y silencian también que el recorte de gastos no se debe a una adecuada política empresarial, sino a una parálisis de la producción propia, a base de comprar programas y películas casi de saldo. Por lo demás, sólo una auditoría externa podría indicarnos cuál es la verdadera situación económica de RTVE, que mantiene intacta una plantilla de cerca de 12.000 trabajadores, y cuáles sus posibilidades de supervivencia si compitiera con otras televisiones" (El País, 18-10-86).

El caso es que al mes, a resultas de la primera comparecencia parlamentaria de Miró, se hablaba de 20.000 millones de deudas en RTVE mientras mantenía 16.000 a plazo fijo en dos bancos y el PDP hacía suya la sugerencia auditora ("durante la etapa Calviño") presentándolo como solicitud urgente al Tribunal de Cuentas. Y en marzo de 1987 (bastante alejado ya el "personaje Calviño")

de la escena pública y cuando el compromiso de González por presentar a Cortes el proyecto de ley de TV Privada era firme), las críticas se recrudecían ante el rechazo de las Cuentas 1985 de RTVE formulado por la Intervención Delegada de Hacienda en el Ente.

(10) José Luis Dader, de la Universidad de Navarra, en su artículo “La nacionalización y otros descuidos”, que El País publicaba coincidiendo con el debate parlamentario sobre la LTVP, llegaba a argumentar que “la descalificación moral del Gobierno para exigir nada a las televisiones privadas alcanza grados de comicidad en el terreno de la publicidad” (diario de referencia, 29-5-87). Sólo que tal comicidad se tornaba amarga, y contra sus propios argumentos, al escoger como ejemplo central de que TVE actúa contra la directriz comunitaria al respecto (artículo 12) y aun contra la resolución de 31 de enero de 1984 de la D.G. de Medios de Comunicación Social sobre normas de publicidad aprobadas por el Consejo de Administración de RTVE, el programa “Un dos, tres” (el de máxima audiencia en TVE, o lo que es lo mismo, el más comercial). Según su ejemplo, dicho programa incumplía “con sus requisitos de comprar determinado bebedizo para poder concursar ¡en un medio público! la norma 38, que dice: <Los medios de RTVE emitirán la publicidad claramente diferenciada de la programación y se identificará mediante señales sonoras en radio y visuales en televisión> [...] El mismo anuncio interno del concurso olvida la norma 10, que señala para casos excepcionales de autorización de publicidad unida a juegos de azar, o concursos, que <en todo caso, el interés primordial deberá recaer sobre el producto al que va asociado la oferta>. No al revés, como sucede en el citado programa” (art. cit., *ibídem*). Una tendencia, como es sabido, agudizada últimamente, en TVE y no sólo en ella, con la “concursitis”, cuya escalada parece imparable desde el programa “El precio justo” (el sustituto de “Un, dos tres”). Lo que es “sintomático” para cuanto aquí venimos sosteniendo.

Dado que las leyes del mercado son en TV (pública o privada), como en otros ámbitos, más “autónomas” de lo que cualquier legislador pueda prever: ¿irán a más tales incumplimientos en los 90, o la sociedad, ante todo ella, sabrá “frenarlos” en base a la Ley de Publicidad ya establecida?.

(11) M. Moragas: “Políticas de comunicación. Televisión y regiones en Europa”. El Nuevo Mapa Informativo Europeo, IV Jornadas Internacionales de CC. de la Información. Pamplona, 1989, p. 6.

(12) Vid. “La comunicación social en el extranjero”, en *Cuadernos para Debate* nº 42. Oficina del Portavoz del Gobierno, Madrid, 1988.

(13) Diario 16, 29-8-1984.

(14) Carmelo Garitaonandía, Susana López, Carmen Peñafiel y Begoña Zalbidea (Departamento de Periodismo, Universidad del País Vasco): “Políticas de comunicación de las Regiones y Nacionalidades Europeas”, ponencia presentada en las Jornadas de Estudio sobre las Radiotelevisiones en el Espacio Europeo. Valencia, mayo 1990, p. 13.

(15) Inma Tubella: “Televisión regional. Confusión de un término”, ponencia ya cit., en las mismas Jornadas de Valencia, mayo 1990, p. 7.

(16) Giuseppe Richeri: “La descentralización de la TV en Europa”. Conferencia en las Jornadas sobre Televisión Autonómica celebradas en junio de 1984 en Madrid, y recogida por el Monográfico sobre ‘Descentralización de RTV’ publicado por la revista *ALFOZ*, nº 11, diciembre 1984, Comunidad Autónoma de Madrid.

(17) Peter Zimmermann: “Las TV regionales en Europa”. Ponencia en las mismas Jornadas de Valencia, mayo 1990. Vid., adicionalmente, cita nº 35, más adelante.

(18) I. Tubella, pon. cit., p. 10.

- (19) Jesús Arilla: “Los retos de las RTV Públicas Regionales en la Europa de las Regiones”. Jornadas de Valencia ya cit., mayo 1990, pp. 14-15.
- (20) Carmelo Garitaonaindía y otros, ponencia ya cit., Valencia, mayo 1990, p. 13.
- (21) J. Villafañe, F. García Serrano: “La Televisión Pública en las Comunidades Autónomas”. Revista *ALFOZ*, nº 11, Madrid, diciembre 1984, pp. 26 y ss.
- (22) Juan Antonio Gisbert: Reflexiones introductorias, en “Programació Econòmica: Teoria i evidència empírica”. Generalitat Valenciana, Conselleria d’Economia i Hisenda, Valencia, 1987.
- (23) Lluís de Carreras: “Fundamentos constitucionales, estatutarios y legales del régimen de TV en el Estado español”. Ponencia en las Jornadas ya cit. de Valencia, mayo 1990. Hay que decir que, más que en la polémica sobre el carácter más o menos básico de tal bloque normativo, de Carreras (consejero de TV3 en la actualidad) cabe atender buena parte de sus sugerencias sobre “la situación comparativa” en los distintos Estatutos de Autonomía.
- (24) Puede consultarse, a este respecto, el interesante artículo de José Gabriel de Mariscal: “La legalidad vigente y el segundo canal vasco de televisión (ETB-2)”. *Revista de Administración Pública*, nº 112. Enero-Abril 1987, pp.337 y ss.
- (25) La matización a que se alude mediante la existencia o no de la mencionada disposición transitoria relativa al tercer canal estatal no sería cuestión menor, según no pocos autonomistas, al permitir diferenciar el carácter obligatorio para el Estado de tal concesión en aquellas CC.AA. en cuyo Estatuto se contiene (Cataluña, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y Extremadura) respecto del carácter discrecional, según la Ley del Tercer Canal, para el resto de CC.AA. No parece por ello totalmente exacta la apreciación del profesor Martínez Sospedra, cercano a nosotros, cuando sostiene que: “Con la sola excepción del Estatuto Vasco, los restantes con ámbito de autonomía plena contienen una regulación (estatutaria en materia de RTV) prácticamente idéntica, tomada del art. 16 del Estatuto Catalán, que en modo alguno agota la competencia posible en términos constitucionales (cf. arts. 34 Estatuto Galicia, 16 Andalucía, 37 Comunidad Valenciana, 31 Canarias)”. Vid: Manuel Martínez Sospedra: “Derecho Autonómico Valenciano”, Generalitat Valenciana, 1984, p. 137.
- (26) CORATEL: “Estudio previo de la Federación de Terceros Canales de Televisión”, junio, 1988. Recogido por F. Monar, ob. cit., a partir del ejemplar facilitado por el Principado de Asturias.
- (27) Fernando Monar, Tesis Doctoral ya cit., pp. 306-307.
- (28) Alfons Llorens: “Un model en contradicció amb la Constitució”. En *Model de TV i Model d’Estat*, ACTA, Quaderns nº 1, ya cit., p. 32.
- (29) Vid. *El País*, 24-10-1986.
- (30) Vid. *El País*, 19-11-1986.
- (31) Jordi Solé Tura criticaba, unos días antes, el argumento del rechazo inicial del Consejo de RTVE (“el aumento de desconexiones regionales en las dos cadenas de TVE, que pudiera constituir la práctica regionalización de las mismas, desvirtuaría el carácter estatal que les otorga el estatuto de RTVE”), recordando que la regionalización no desvirtúa ningún carácter estatal pues ello sería como afirmar que el Estado sólo es el poder central y que las CC.AA. no lo son, y añadía: “Esto deja el terreno libre para que TV-3 aparezca como la única televisión propiamente catalana. Resulta, pues, que este pluralismo institucional -RTVE y TV3- no puede expresar el auténtico pluralismo

social y cultural de Cataluña y esto permite después las consabidas manipulaciones políticas” (¿Qué modelo de televisión?, en *El País*, 28-3-87). Pilar Miró se inclinó de inmediato por la desconexión del UHF en Cataluña, pero la definición de TVE-2 como “cadena deportiva”, en noviembre del mismo año 1987, y el anuncio de que los programas regionales pasarían a esa segunda cadena provocarían la dimisión del nuevo equipo directivo nombrado en San Cugat...

(32) M. de Moragas Spá: “La ley de las zonas territoriales”, *El País*, 22-4-87.

(33) Es casi un lugar común, a estas alturas, referirse al editorial que *El País* dedica por tales fechas (3-10-87) en relación con la por él calificada “Teleguina”. Su argumentación, sin embargo, no carece de puntos flacos. Pues, por limitarnos al caso valenciano y sin tan siquiera entrar en la cuestión lingüística como legitimación adicional, más allá de los límites provinciales o incluso localistas a que se ajustan los “grandes” diarios valencianos, ¿acaso falta mercado para el propio *El País*, en tal sentido, pero no para la SER, controlada por el mismo grupo empresarial? Y caso de no “faltar mercado” para ello, ¿por qué argumentar que “si sólo se ofrece la posibilidad de ampliar la oferta con la TV autonómica se está falseando la cuestión”? ¿No se falsea también cuando determinados grupos no sólo no ven un inconveniente en la exigencia de la Ley de la TV Privada para que éstas sean de cobertura nacional, sino que propugnan otro tanto para el mercado (publicitario, en primer término) que juzgan preferible para su financiación particular? ¿No será eso lo que les lleva a calificar de “TV tautológica” a cuantos terceros canales pretendan contribuir a la “descentralización del audiovisual” español? ¿Y por qué callan -como si ignorasen- que la “matriz competitiva” de la coexistencia televisiva recién estrenada obliga ya, por esas vías, a los canales autonómicos en no menor medida que a las privadas, a la concurrencia “en desventaja” con la propia TVE, por más pública que ésta sea (así como a la presión comercializante que está desarrollando, precisamente en función de las privadas)?...

(34) Vid. *El País*, 25-11-1988.

(35) G. Richeri: “La descentralización de la TV en Europa”. Revista *ALFOZ*, nº 11, ya cit., diciembre 1984. Richeri, con carácter previo a la tipología luego avanzada por R. Stephane, distinguía (según las relaciones establecidas por la TV regional con la nacional y con el territorio) cuatro grandes escalones de descentralización, de menos a más: la TV policéntrica (Francia, Italia o Reino Unido, en un primer momento), las redes regionales (Francia e Italia, después), la TV autónoma (RFA) y, finalmente, la TV federativa (como desarrollo posible de la anterior).

(36) Fernando Monar, Tesis Doctoral ya cit., pp. 303-304.

(37) Vid. *El País*, 25-5-1990.

(38) Vid. *El País*, 17-6-1990.

(39) Baste, como botón de muestra, lo que en un editorial de *El País* podía leerse por las mismas fechas (19-11-83): “Al tiempo que el Gobierno socialista francés abre la iniciativa privada el ámbito de la TV y que se anuncia la próxima puesta en funcionamiento de emisoras que cubrirán -mediante satélites- los territorios de varios países europeos, la videomanía desplaza en España a los programas de las dos cadenas estatales en provecho de las películas grabadas y rompe de esta forma el monopolio televisivo. El crecimiento de las ventas permite calcular que los 300.000 videoscopios domésticos existentes en España en 1982 se triplicarán antes de dos años. Los esfuerzos intervencionistas de la Administración para poner puertas al campo terminan agotados por los cambios sociales, las innovaciones tecnológicas y las iniciativas espontáneas de los ciudadanos. La discusión sobre la conveniencia de autorizar en España emisoras privadas de TV comienza a revestir ya el aire de esas polémicas que alcanzan su punto máximo de acaloramiento justo cuando nuevos hechos o nuevas ideas despojan de sentido su mismo planteamiento...”

Claro que, como muestra quizá de los “cambios sociales” acaecidos o de las “iniciativas espontáneas de los ciudadanos”, el mismo editorial no tenía más remedio que terminar del siguiente modo: “La sociedad (sic) se dispone a organizarse, por libre, su propia TV privada, con la única salvedad de que por el momento sólo familias de rentas elevadas y medias podrán disfrutar de ese privilegio, dados los precios del mercado”.

(40) José M<sup>a</sup> Villagrasa: “Reparto de audiencia y oferta de programación”. Ponencia en Jornadas de Estudio sobre las Radiotelevisiones en el Espacio Europeo. Valencia, mayo 1990, pp.1-2.

(41) Vid. *El País*-Negocios, 22-10-1989. Y, sobre todo, el interesante “Informe sobre Videotex-Ibertex en España”, publicado por José M<sup>a</sup> Busquets en la revista *Datamation*, noviembre 1987, pp. 78 y ss.

(42) Vid. Hoja del Lunes de Valencia, 18-12-89.

(43) Vid., por ejemplo, “El Nuevo Lunes” (14 al 20-11-88), “5 Días” (27-2-89, y 16-3-89) y “El País” (17-3-89).

(44) Vid. *El País*, 21-2-88.

(45) Vid. las declaraciones de Enrique Vázquez, por entonces en Canal-10, en *El País* (5-12-87).

(46) Vid. *El País*, 19-2-85.

(47) Vid. Gonzalo Caro, director general de Aniel: “Un satélite nacional para después de 1992”. Artículo en *El País*, 4-1-89.

(48) Vid. *El País*, 8-3-89.

(49) José Díaz Argüelles: “Hispasat: Un mundo en comunicación”. Reportaje en *Solutions. Revista de UNYSIS para directivos*, nº 6, noviembre 1989, p. 7.

(50) Conferencia de José M<sup>a</sup> Calviño recogida por el diario “*Levante*” (25-2-88).

(51) G. Richeri: “La descentralización de la TV en Europa”. Revista *ALFOZ*, nº 11, ya cit, p. 41.

(52) Pueden consultarse, a tales respectos, las informaciones recogidas por “5 Días” (13-3-89 y 17-8-89) o por “El Nuevo Lunes” (6 al 12-11-89).

(53) De ello se hizo eco el diario “*Levante*”, en su edición del 11-3-87. Telling S.A., en efecto, se constituyó el 15 de noviembre de 1983 -la fecha es significativa-, siendo sus principales impulsoras personas tan ligadas a RTVE, al comienzo de la etapa socialista, como Luis Sanz Rodríguez, Antonio López y Pelayo Sánchez. Los servicios de Telling S.A., por demás, no se limitaron a la Comunidad Valenciana, sino que los contactos se extendieron a Andalucía, Madrid, Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha, e incluso con el tiempo al País Vasco y Cataluña.

(54) M<sup>a</sup> García-Lliberós, A. J. Sarrià: “La TVV, concepción y análisis de un proyecto de inversión pública de la Generalidad Valenciana”. Comunicación presentada en el citado I Congrés d'Economia Valenciana, recogida en “PONENCIES”, Tomo 2. Generalitat Valenciana, Conselleria d'Economia i Hisenda, Valencia 1985, p. 207 a 224.

(55) Vid. en “*Ponències*”, ob. cit. pp. 209, 211 y 213.

- (56) Boletín Oficial de las Cortes Valenciana (*BOCV*), nº 34, de 5 de marzo de 1984.
- (57) *BOCV*, nº 44, 3 de mayo de 1984.
- (58) *Diari de Sessions de Corts (DSCV)*, nº 28, mayo 1984.
- (59) Puede consultarse, para profundizar en tales aspectos, el volumen de “Disposiciones Legales 1978-1990. Televisión Autonómica” que, editado por el Gabinete del Consejo de Administración de RTVV, se presentó en las Jornadas ya referidas celebradas en Valencia, mayo 1990.
- (60) *DSCV*, nº 45, noviembre 1984.
- (61) *DSCV*, nº 52, enero 1985.
- (62) *DSCV*, nº 55, febrero 1985.
- (63) *DSCV*, nº 76, julio 1985.
- (64) Vid. “Pressupostos de la Generalitat Valenciana” y “Liquidació Pressupostos”, ejercicios 1984 a 1988 (ambos inclusive). Generalitat Valenciana, Conselleria d’Economia i Hisenda, Valencia.
- (65) Vid. “Ponències”, ob. cit. pp. 218 y ss.
- (66) “El Centro de Producción de Programas de TVV: Un exponente del estado del arte en la técnica de televisión”. Luis Sanz Rodríguez, director de Ingeniería de Telling, S.A. Folleto “Cap a la televisió autonòmica” (Presentación Proyecto TVV). DGMCS, Presidencia Generalitat Valenciana. Abril 1987.
- (67) Según la publicación interna “El món de RTVV”. Canal 9-Televisión Valenciana, nº 2. Valencia, octubre 1989, p. 5.
- (68) Hoja del Lunes de Valencia, 20-4-87.
- (69) Vid. Dossier de “*Papers de Cultura*” sobre ‘El nou canal’, nº 18, Octubre 1989, elaborado en su esqueleto por Encarna Jiménez, p. 14.
- (70) “Programa Econòmic Valencià 1988-1991. (PEV-2)”. Generalitat Valenciana, Conselleria d’Economia i Hisenda, Valencia, 1988, pp. 86-87.
- (71) “Pressupostos de la Generalitat Valenciana”. Tomos resumen, ejercicios 1989 y 1990. Generalitat Valenciana, Conselleria d’Economia i Hisenda, Valencia.
- (72) “Pressupostos de la Generalitat Valenciana” 1989, Ente RTVV, ficha EPO-7, ibídem.
- (73) Vid. *Levante*, 30-11-88, y 20-12-88.
- (74) Vid. *El Temps*, 2-1-89.
- (75) Vid. *Levante*, 17-12-88.

(76) Enrique Linde: "Las Radiotelevisiónes Públicas en España". Ponencia presentada en el transcurso de las Jornadas de Estudio sobre las Radiotelevisiónes en el Espacio Europeo. Valencia, mayo 1990, pp. 46-47.

(77) Vid. El País-Comunidad Valenciana, 2-2-89.

(78) Vid. "Pressupostos de la Generalitat Valenciana" 1989, ficha EPO-7 de "Televisión Valenciana S.A. Empresa a crear por el Ente Público RTVV". Ibídem.

(79) Vid. Levante, 6-4-89. Por su parte, el diario Las Provincias -con intereses en Antena3 TV- ya había adelantado a mediados de marzo que el gran objetivo declarado de FORTA era su ingreso en la UER: "Actualmente las televisiones autonómicas no están integradas en dicho organismo internacional, al que únicamente pertenece Televisión Española lo que les supone grandes inconvenientes de todo tipo, sobre todo a la hora de comprar imágenes internacionales, lo que se hace a través de la organización internacional, mediante un complejísimo sistema de compensaciones pero que resulta mucho más barato que el mercado libre" (17-3-89, p. 19).

(80) Vid. El País-Comunidad Valenciana, entrevista con M.A. Villena, 30-4-89. Así mismo, vid. "Redacción abierta", órgano de la Agrupación de Periodistas de CEOV-UGT Valencia, entrevista con Víctor Sánchez, nº 6, marzo 1989.

(81) Vid. Mediterráneo, entrevista con A. Panadero, 1-5-89.

(82) Destaca por entonces la acusación, firmada por Mario Beltrán y otros periodistas, que bajo el título de "Las oposiciones a la TVV no nos convencen" aparece publicada en la Hoja del Lunes de Valencia el 15-5-89. Fabregat, por su parte, habría resaltado con anterioridad -en la entrevista con Víctor Sánchez ya citada, en "Redacción Abierta"- que "se parla molt de periodistes i massa poc d'altres àrees que ocuparan a moltes més persones, no periodistes. El percentatge de periodistes sobre el total de la plantilla -més o menys un 10%- és molt modest" (rev. cit., nº 6, p. 26).

(83) De hecho, el monográfico "Diarema" que, coordinado por Ignacio Blanco con el apoyo del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y el IVEI, viene publicando el diario Levante, ya avanzaba en abril un primer análisis técnico del CPP de Burjassot: "Nuestra fábrica de sueños. El edificio de TVV en breve estará completamente acabado" (8-4-89). Pero la cuestión no se retomará -con una entrevista al coordinador de CAST Eduardo Franco- sino hasta finales del mismo mes (ibídem, 29-4-89). El cuaderno semanal "Territorio" que publica el mismo diario valenciano, finalmente, lo dedicaría íntegramente al nuevo edificio -con una portada publicitaria alusiva a la unión temporal de empresas entre Dragados y Cubiertas MZOV-, en fecha tan significativa como el 24 de mayo.

(84) Vid. El País-Comunidad Valenciana, 15-3-89.

(85) Vid. Levante, 21-9-89.

(86) Vid. Levante, 4-10-89.

(87) Vid. Las Provincias, 5-10-89.

(88) Vid. Levante, del mismo 5-10-89.

(89) "Pressupostos de la Generalitat Valenciana" 1990. Conselleria d'Economia i Hisenda, Valencia. Tomo resumen, ficha EPO-7, p. 987.

(90) Las declaraciones de Felipe Guardiola ante las Cortes, que suponían la incorporación de las críticas socialistas hacia los primeros pasos de Canal 9 -críticas sólo exceptuadas por UV y CDS- se recogieron por “Levante” en su edición del 1-12-89, p. 4. Ernest Nabàs, portavoz del PSPV-PSOE, saldría al quite al día siguiente, señalando que “a nadie se le obliga a que le guste la TVV sólo por ser del PSPV” (Levante, 2-12-89, p. 5). Pero resultaba indudable, como señalase la revista “El Temps” -y pese al momento caliente por que atravesaba la polémica TVV-TV3-, que ya era posible hablar de “la intifada de Guardiola com a símptoma” (comentario de Miquel Alberola, 11-12-89).

(91) La polémica prohibición de la dirección de RTVV a una redactora del diario “Levante”, que no sería la última, provocó -como es de suponer- la inmediata reacción en contra tanto de la Asociación de la Prensa de Valencia como de la Unió de Periodistes del País Valencià (Levante y El País-CV, 10-1-90), y a tal momento cabe en todo caso remitir la agria disputa mantenida -y publicada- a partir de entonces entre Amadeu Fabregat y el director de Levante, Ferrán Belda. Dicha polémica alcanzaría su momento más álgido a principios de abril de 1990, con la publicación por Fabregat en Las Provincias (diario de la competencia) del artículo de opinión “La libertad de expresión o Petra, criada para todo” (3-4-89), rápidamente contestado tanto por Ferrán Belda (Levante, 4-4-89) cuanto por la Unió de Periodistes (Las Provincias, 5-4-89), terciando con pretensiones de apaciguamiento neocorporativista el órgano de expresión de la Asociación de la Prensa de Valencia (editorial de Hoja del Lunes, 9-4-89).

(92) Vid. Hoja del Lunes de Valencia, 16-1-89.

(93) Vid. El País-Comunidad Valenciana, 6-1-90.

(94) Vid. Levante, 6-1-90.

(95) Según la documentación presentada a los trabajadores del CPP de Burjassot, el 6 de junio de 1990, por las secciones sindicales de UGT y RTVV. Sobre el desarrollo de las negociaciones puede consultarse Levante: 18, 22 y 29 de 5-90.

(96) Vid. El País-Comunidad Valenciana, 8-6-1990.

(97) Adicionalmente al documento sindical de RTVV, ya cit., se ha acudido a los nº 3 y 4 (1988) y 7 (julio 89) de “*Redacció Abierta*”, en los que se recogen -por cierto- sendos informes de todo punto imprescindibles para entender la situación de la prensa escrita en la ciudad de Valencia.

(98) Vid. Levante, 13-1-90.

(99) Vid. El País-Comunidad Valenciana, 19-6-90.

(100) Vid. Levante, El País-Comunidad Valenciana (3-12-89), y Levante (6-5-89 y 3-6-89).

(101) En el artículo “L’escola que es veu i que s’escolta” (revista *Papers de Cultura*, marzo 1987) se efectuaba una aproximación a dichas experiencias, en particular al cineclub del CEI de Cheste -en pie desde 1971- o al proyecto de TV-5 del Instituto de FP de Vinarós (como TV escolar con emisión local durante la semana cultural del centro), sin olvidar las andaduras televisivas puestas en pie por entonces de proyectos parecidos en el Instituto de BUP Francisco Tárrega de Villarreal o en el colegio Juan Comenius de Valencia, sin olvidar la peculiar iniciativa de la Escuela Municipal de Cine de Puçol, en la que alumnos de 8º de EGB de los 3 centros del pueblo colaboraban con otros del Instituto de Massamagrell y con el equipo de servicios sociales de la Mancomunitat de l’Horta-nord.



(102) El lector interesado puede consultar, al respecto, los artículos “El stock actual de programas de Televisión Valenciana sólo suma 27 horas de duración” (Las Provincias, 4-10-87) y “L’expectativa es diu Televisió Valenciana” (El Temps, 19-10-87).

(103) Vid. Las Provincias, 14-10-87.

(104) Vid. Levante, 24-1-87.

(105) Vid. Levante, 10-12-88.

(106) Vid. El País, 13-1-90.

(107) Vid. Levante, 13-1-90.

(108) Vid. El País: 29-10-88; 28-7-89; y 16-7-89.

(109) Vid. “Redacción Abierta”, nº 6, entrevista ya cit. con Víctor Sánchez, Valencia, marzo 1989, p. 28.

(110) J.R. Pérez Ornia: “Hacia un ordenamiento eficaz de la relación programación-producción”. Revista *Comunicación XXI*, nº 38, Madrid, 1977, pp. 23 y ss.

(111) Sobresalen, entre esas primeras críticas, las del diario “Levante” y de la revista “El Temps”, al mes escaso de emisiones regulares. En su editorial “Brillos y sombras de Canal 9” (11-11-89), el diario recogía entre las sombras su criterio de que “no se ha acertado ni con el modelo global de programación ni con algunos responsables de la misma”. Por su parte, el semanario nacionalista era explícito en su propio titular “Un mes de decepción” (nº 282, 13-19.11.89).

(112) J.J. Pérez Benlloch, en su columna “Bloc de la semana”, publicada por Levante (5-11-89).

(113) Vid. El País-Comunidad Valenciana, 4-1-90.

(114) Pueden contrastarse, en tal sentido, las críticas diversas sobre el show de Monleón firmadas por José Ginés (El País-CV, 14-10-89) y por Antonio Vergara (Levante, 16-12-89). La polémica sobre la programación pseudoporno-verano 90 se cerró, de hecho, tras el comunicado de los obispos (vid. Levante, 26-6-90).

(115) Vid. especialmente Levante, 6 y 7 de enero de 1990.

(116) Vid. Levante, 20-junio-1990.

(117) Según la reproducción íntegra del debate sobre la Proposición no de ley presentada por IU, celebrado el 4 de abril de 1990 en la Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios, que puede consultarse en el “Diario de Sesiones” del Congreso de Diputados.

(118) Aureli Ferrando: “L’abast territorial de la llengua”, en “Castellón Diario”, 16-3-88.

(119) El País, 16-12-1989.

(120) El País, 21-10-89.

(121) De ahí los 260 millones, según la CBS-Fox Vídeo, invertidos en publicidad (“está visto, lo mejor un vídeo”) por las cuatro grandes distribuidoras de vídeo tras el incremento de la oferta

televisiva en España y la diversificación de su negocio hacia la venta de “grandes éxitos” (al languidecer el alquiler, que ya en marzo de 1990 había descendido un 25% con respecto a igual periodo de 1989, afectando el golpe en menor medida a las películas porno e infantiles según datos manejados en la feria Ibervideo 90).

(122) Resulta significativo que El País ejemplificase con el <tema TVE> su denuncia del “irresistible ascenso de un especie de peronismo difuso” en los partidos más representativos, PSOE y PP, con formas de populismo demagógico en ambos casos que “se potencian mutuamente, en perjuicio del sistema democrático”: ... “Da la impresión -editorializaba el matutino madrileño bajo el título “Peronismo en España”- de que, puestos en la tesitura de elegir entre lo que refuerza el sistema y lo que favorece los intereses inmediatos del partido -o es percibido como tal-, unos y otros optan por lo segundo. Así, el Gobierno pone parches y se resiste a acabar de una vez por todas con el escándalo del sectarismo de la televisión pública, que tanto perjudica la credibilidad del sistema. Y la oposición, en lugar de buscar un consenso razonable sobre este asunto, elige el camino del boicoteo a la negociación y ciega las salidas” (25-2-90).

(123) Vid. El País, 1-9-90.

(124) Vid. Hoja del Lunes de Valencia: 2-6-86, y así mismo Las Provincias: 6-8-86.

(125) Vid. Levante, 15-12-88.

(126) Ramón Zallo: “La publicidad: una industria transnacional”. En “Las industrias culturales en España”, VV.AA.. Edit. Akal, Madrid, 1988, p. 273.

(127) J. Jaumandreu, G. Mato: “Margins, Concentration and Advertising: A Panel Data Analysis”. Fundación Empresa Pública, Documento de Trabajo 8706, Madrid, 1987.

(128) Vid. El País-Negocios, 31-1-88.

(129) Vid. El Nuevo Lunes, 12 al 18-2-90.

(130) Vid. El País, 25-10-89.

(131) José Honrubia: “Los servicios valencianos ante el futuro”. Ponencia presentada dentro del Programa Modernización y Futuro auspiciado por la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Valencia, abril, 1986.

(132) E. Bustamante, I. Guiu: “Televisión: desequilibrios en cadena”. En “Las industrias culturales en España”, ob. cit., pp. 149-150.

(133) Vid. El País, 30-6-90.

(134) Vid. Hoja del Lunes de Valencia, 2-6-86.

(135) Vid. Levante, 27-8-89, y Las Provincias, 30-8-89.

(136) José M<sup>a</sup> Villagrasa: “Reparto de audiencia y oferta de programación”. En las Jornadas de Valencia, ya cit., mayo 1990, p. 3.

(137) Semejante “postura estratégica”, por lo demás, no era tanto de la exclusiva del grupo empresarial en cuestión cuanto atentatoria contra la reputación de “seriedad” acumulada por el diario-insignia. Reputación que PRISA tuvo a bien arriesgar (como en su día sucediera con la

inclusión masiva de publicidad a color en su dominical, no menos criticada por algunos de sus lectores; o mediante el recurso indisimulado a las ganancias de la SER, desde que pasó a controlar tal emisora de radio en 1985, a fin de nutrir el “fondo de inversión” ya previsto apostar desde entonces para su desembarco en el medio TV; o el posterior acuerdo con la Liga Profesional y la FORTA para retransmitir en su banda codificada un partido de fútbol los domingos por la tarde, etc), so pena, entre otras cosas, de quedarse atrás en la batalla recién inaugurada entre unas y otras “TV subordinadas” (las autonómicas y las privadas respecto de TVE).

(138) Vid. El País, 20-6-90.

(139) José Luis Ibáñez, y otros (Universidad del País Vasco): “Estado actual de la programación en las televisiones públicas y privadas españolas”. Ponencia presentada en las Jornadas de Estudio de las Radiotelevisiones Públicas en el Espacio Europeo, Valencia, mayo 1990.

(140) José V. Idoyaga: “Descentralización de la Televisión en el Estado español”. Tesis doctoral (Bilbao, julio 1987). Recogido por E. Bustamante e Inmaculada Guiu, en su contribución (“Televisión: desequilibrios en cadena”) a “Las industrias culturales en España”, ob. cit., Akal 1988, p. 148.

(141) J.L. Ibáñez, ibídem, pp. 33 y 34.

(142) Marina Gilabert, José V. Villaescusa: “Programación televisiva. Un paisaje fragmentario en el universo de los media”. En Jornadas de Valencia ya cit., mayo 1990, pp. 11 y 12.

(143) E. Bustamante, I. Guiu: “Televisión: desequilibrios en cadena”. En “Las industrias culturales en España”, ob. cit., pp. 109 y ss.

(144) Juan Cobarrubias: “Normalización y Planificación Lingüística en el País Vasco”. Ponencia presentada al *II Congreso Mundial Vasco. Congreso de la Lengua Vasca*. Tomo II, Area II: Lengua y Sociedad, pp. 147 y ss. Edic. Gobierno Vasco, Vitoria, 1988.

(145) Juan Cobarrubias, pon. cit., pp. 152 y 159.

(146) Ivan Tubau: “El català que ara es parla”. Ed. Empúries, Barcelona, 1989.

(147) Xavier Lamuela: “La llengua catalana entre la codificació i la estandardització”, en *Català, Occità, Friülà: llengües subordinades i planificació lingüística*, Ed. Quaderns Crema, Barcelona, 1987. Citado por Toni Mollà, en “La llengua dels mitjans de comunicació”. Edic. Bromera, Alzira, 1990 (p. 41).

(148) Gimeno y Montoya, en su “Sociolingüística” (Universitat de València, Valencia, 1989, pp. 50 y ss) dan cuenta de la tarea desempeñada por ambos autores valencianos, si bien resaltando que “La tasca de Ninyoles, encara que no ha assolit l’originalitat ni la transcendència de la d’Aracil, és més abundant i diversificada que la del seu paísà valencià. Per això i perquè Ninyoles ha optat per un llenguatge més assequible, el públic ha atribuït a aquest la paternitat o la introducció a casa nostra de molts conceptes sociolingüístics patentats o importats per Aracil”. Es preciso añadir, por cuanto aquí interesa, que Aracil escribe ya en 1966 “El bilingüisme com a mite” (recogido en “Papers de sociolingüística”. La Magrana, Barcelona, 1982).

(149) R.L.L. Ninyoles, “Estructura social y Política Lingüística”, Fernando Torres-Editor, 1975.

(150) Recogido por Gimeno y Montoya, ob. cit, p. 50.

(151) Lluís B. Polanco: "Reflexions sobre el model lingüístic del mitjans de comunicació valencians". En "La llengua als mitjans de comunicació", Actas de las Jornadas sobre la Lengua Oral en los Medios de Comunicación Valencianos organizadas en 1987 por el Instituto de Filología Valenciana. Antoni Ferrando, ed., Universitat de València, 1990, p. 39.

(152) Ll. B. Polanco, ob. cit., pp. 45-46.

(153) Toni Mollà: "La llengua dels mitjans de comunicació". Edic. Bromera, Alzira, abril 1990, p. 29. La posició de Toni Mollà, para mayor abundancia, se explicitaba a su vez en su polémica con Josep Gregori: vid. sus artículos en "Levante" (20 y 21-5-88).

(154) "Pla Triennal per a la promoció de l'ús del valencià a la Comunitat Valenciana" (vid. aptdo II.3, p. 25). Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura. Valencia, 1990.

(155) Francesc Vallverdú: "Alguns problemes sociolingüístics de la comunicació". Revista Comunicació XXI, nº 7, Madrid, 1973.

(156) Vid. Las Provincias, 8-1-88.

(157) Toni Mollà: "Poder polític i acció cívica" (Levante, 20-5-88).

(158) Joan-Anton Benach: "30 años de disglosia y paternalismo". Revista "Comunicación XXI", nº 28, Madrid, 1976.

(159) José Vidal Beneyto: "La industria de las lenguas", artículo en El País, 24-2-87.

(160) Toni Mollà: "Poder polític i acció cívica", art. ya cit.

(161) Ferrán Belda: vid. su columna habitual en Levante, 16-3-88.

(162) "Padró d'habitants 1986": Vol XIV, "Coneixement del Valencià", Conselleria d'Economia i Hisenda, Valencia, 1987. También: "Coneixement del valencià. Anàlisi dels resultats del Padró Municipal d'habitants de 1986", col.lecció Llengua i Societat, nº 1, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Valencia, 1989.

(163) Vid. J. F. Mira: "Població i llengua al País Valencià". IAM, Valencia, 1980.

(164) Manuel Alcaraz: "Llengua i televisió valenciana". En 'La informació a la Comunitat Valenciana'. Presidència de la Generalitat Valenciana, DGMCS, Valencia, 1987, p. 235.

(165) J.R. Gómez Molina: "Estudio sociolingüístico de la comunidad de habla de Sagunto (Valencia)". IAM, Valencia, 1986.

(166) Vid. El País-Comunidad Valenciana: 8-9-86.

(167) Entre las excepciones de rigor, y por más que centrada en un contexto diferente (ciudad de Bruselas), merece señalarse la contribución de Hugo Baetens Beardsmore: "La televisió com a factor de substitució lingüística". En II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, Area "Mitjans de Comunicació". Edicions 62, Barcelona, 1989.

(168) Vid. Entrevista en "Las Provincias" con J.M. García, 16-1-90.

(169) M. Moragas: “El català a la televisió”. Ponencia en II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, ob. cit., p. 166.

(170) Baste al efecto contrastar su perspectiva -en tanto que oficial-, con el preámbulo del RD 1021, de 6 de junio de 1986, el “decreto de las parabólicas” en que Canal-10 se apoyó para solicitar la correspondiente autorización administrativa para la recepción en territorio español de sus emisiones por satélite:

“La rápida expansión de nuevas aplicaciones tecnológicas en el campo de las telecomunicaciones -explicitaba el texto avalado por el ministro Caballero- y la consiguiente aparición de nuevos servicios al público hace indispensable y urgente que se establezcan las necesarias disposiciones reguladoras (...) Especial consideración merece la proliferación de aparatos y dispositivos cuya instalación no resulta excesivamente onerosa, que hacen posible la recepción de señales e informaciones transmitidas por medio de satélites de telecomunicaciones, como es el caso de la televisión vía satélite, tanto para la recepción individual como comunitaria” (BOE, 25-6-86).

Y repárese que tal “actualización normativa” se efectuaba de conformidad con lo establecido por el RD 2704/1982, de 3 de septiembre (la fecha es a su vez de lo más sugerente), “modificado por el RD 780/1986, de 11 de abril” (fecha que más que sugerir suponía, para entonces, toda una constatación de política comunicacional no tan improvisada).

(171) Vid. “5 Días”, 18 marzo 87.

(172) Tal y no otra es la opción que contempla definitivamente la LOT, como explícitamente recoge la Disposición Adicional 1ª.2 de la misma ya en vigor, y tal y como el ministro Caballero anunció para mayor abundamiento en la presentación ante la prensa del entonces proyecto de ley (por ejemplo, El País, 7-3-87).

(173) Vid Hoja del Lunes de Valencia (26-12-88, 6-2-89, 1-5-89, 2-10-89 y 26-2-90), así como Levante (15-10-89 y 20-9-90).

(174) Vid. Levante, 10-3-88.

(175) A.J. Sarrià: “La televisió en la construcció del capital social del País Valencià”. Art. en La informació a la Comunitat Valenciana, ob. cit., pp. 214-5.

(176) Vid. Las Provincias, 13-4-88.

**ABRIR VOLUMEN II**

